

La tela que nos teje

Un estudio comparado de las bases
que sustentan la legitimidad
de las políticas de bienestar

Autora: Inés Calzada Gutiérrez

Director: Dr. Don Mariano Fernández Enguita

Departamento: Sociología y Comunicación,
Universidad de Salamanca

*«La tela de araña teje
con amor y esmero
su araña»*

PROVERBIO AFRICANO

Agradecimientos

Una tesis es un proceso largo, turbio y bastante solitario pero, como tantas otras situaciones, cambia de color con un poco de ayuda y buena compañía. Yo he tenido la suerte de disfrutar de ambas cosas y hay por tanto mucho que agradecer.

En el aspecto académico, mi director de tesis, Mariano Fernández Enguita, ha ejercido una supervisión de tipo socrático que se traducía en no fijarme los temas o enfoques, pero no dejar por ello de hundir con una simple pregunta aquellos derroteros que no me llevaban a ninguna parte. Esta libertad de trabajo, combinada con una crítica no por amigable menos demoledora, es sin ninguna duda la clave de que el presente estudio esté terminado. A nivel financiero, tuve el privilegio de que la Junta de Castilla y León me concediese una beca del Formación de Personal Investigador que, además de darme de comer durante cuatro años, me permitió integrarme en el Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca donde Marta y Sole, becarias veteranas, me orientaron hasta que empecé a encontrarme, casi, casi, en casa.

En cuanto a los amigos y familia, expertos hoy a su pesar en las actitudes de los ciudadanos sobre las políticas sociales, quizás hubiera escrito estas páginas sin ellos, pero no quiero ni imaginarme lo durísimo que habría sido. Miriam, Carmela, Merce y Emma estuvieron cerca, como siempre, compartiendo lo bueno, arrojando el hombro en lo malo, y calificando diplomáticamente mis desastres de «experiencias vitales». He contado además con Luis y su casita siempre abierta de Salamanca, con Javier y Magdalena cuando necesitaba calma, con Ana e Ingrid mandándome ánimos desde la fría y social Suecia, con Anja, Javi y Romina guiándome por Madrid, y con Jaime arrojando mis primeros pasos laborales.

Mi hermano Miguel y Gabriela han tenido mil historias que contar para despejar mi cabeza y mis padres, además de crear refugios para que yo pudiera escribir, mantuvieron la ilusión de que terminara esta tesis tanto tiempo que hasta yo misma acabé pensando que era posible.

Gracias a todos.

Índice

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN | 17 |
| CAPÍTULO 1. LAS ACTITUDES HACIA EL ESTADO DEL BIENESTAR | 23 |
| 1.1. Origen de los estudios | 24 |
| 1.1.1. La crisis del Estado del Bienestar | 24 |
| 1.1.2. Los primeros estudios empíricos | 26 |
| 1.2. Los determinantes individuales de las actitudes hacia el Estado del Bienestar | 32 |
| 1.2.1. La clase social | 32 |
| 1.2.2. Otras variables de posición social: de las clase social al interés | 35 |
| 1.2.3. El efecto de la ideología | 36 |
| 1.2.4. Dos grandes factores: interés e ideología | 38 |
| 1.3. Las actitudes hacia el Estado del Bienestar a lo largo del tiempo | 40 |
| 1.4. Comparaciones internacionales | 45 |
| 1.4.1. Panoramas de opinión | 46 |
| 1.4.2. Borrar falsos caminos | 47 |
| 1.4.3. Variar, varían pero ¿por qué? | 50 |
| CAPÍTULO 2. TIPOLOGÍAS DE ESTADOS DEL BIENESTAR | 55 |
| 2.1. ¿Qué es una tipología de Estados del Bienestar? | 56 |
| 2.2. Un resumen del «negocio de los modelos» | 58 |
| 2.3. Utilidad de las tipologías | 64 |
| CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS | 71 |
| 3.1. Hipótesis teóricas | 72 |
| 3.1.1. Tres conclusiones generales sobre las actitudes hacia las políticas sociales | 72 |
| 3.1.2. El efecto de las instituciones sobre las actitudes | 74 |
| 3.1.3. El efecto de cada tipo de Estado del Bienestar sobre las actitudes | 79 |
| 3.2. Hipótesis operativas | 86 |
| 3.3. Características de los programas y legitimidad | 89 |

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA | 91 |
| 4.1. Causas, efectos, y azar | 92 |
| 4.2. Selección de casos | 95 |
| 4.3. Datos sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar | 98 |
| 4.3.1. ISSP: The Role of Government | 98 |
| 4.3.2. El cuestionario: variables que utilizaremos | 99 |
| 4.4. Datos sobre los programas de bienestar | 106 |
| 4.5. Técnicas de análisis | 106 |
| 4.5.1. La regresión | 106 |
| 4.5.2. La regresión multinivel | 109 |
| CAPÍTULO 5. LA RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE ESTADO DEL BIENESTAR Y LA LEGITIMIDAD | 113 |
| 5.1. Panorama general | 114 |
| 5.2. ¿Son significativas las variaciones entre países? | 127 |
| 5.3. Grupos de países en función de la legitimidad de sus Estados del Bienestar | 132 |
| 5.4. Una explicación alternativa de la relación entre tipo de EB y legitimidad | 133 |
| 5.5. Conclusiones | 137 |
| CAPÍTULO 6. LA COMPOSICIÓN DE LOS CONSENSOS NACIONALES. FRACTURAS ECONÓMICAS Y LEGITIMIDAD | 141 |
| 6.1. Justificación teórica | 142 |
| 6.2. Comprobación de la hipótesis: acuerdo Inter-clases y legitimidad | 145 |
| 6.3. El efecto de los ingresos país a país. | 157 |
| 6.4. Conclusión. Fracturas económicas y tipo de Estado del Bienestar | 166 |
| CAPÍTULO 7. FRACTURAS IDEOLÓGICAS Y LEGITIMIDAD | 171 |
| 7.1. Justificación teórica | 172 |
| 7.2. Comprobación de la hipótesis: «des-ideologizar» el EB | 173 |
| 7.3. El efecto de la ideología país a país | 183 |
| 7.4. Conclusión. Fracturas ideológicas y tipo de Estado del Bienestar | 189 |
| CAPÍTULO 8. FRACTURAS DE GÉNERO. ESTADOS DEL BIENESTAR «WOMAN-FRIENDLY» Y LEGITIMIDAD | 191 |
| 8.1. Justificación teórica | 192 |
| 8.2. Comprobación de la hipótesis: las mujeres como fuente de legitimidad | 197 |
| 8.3. El efecto del género sobre las actitudes país a país | 201 |
| CAPÍTULO 9. RECAPITULACIÓN (Y UN CABO SUELTO) | 209 |
| 9.1. Resumen de resultados | 210 |
| 9.2. ¿Consenso sobre las políticas de bienestar o consenso político general? | 212 |

| | |
|---|-----|
| CAPÍTULO 10. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS Y APOYO POPULAR | 221 |
| 10.1. Objetivo del análisis | 222 |
| 10.2. Aspectos a comparar y fuentes de información | 224 |
| 10.2.1. Aspectos a comparar | 224 |
| 10.2.2. Fuentes de información | 228 |
| 10.3. Comparación de los programas públicos de sanidad | 231 |
| 10.3.1. Indicadores | 231 |
| 10.3.2. Características asociadas a la legitimidad | 235 |
| 10.4. Comparación de los programas públicos de pensiones | 240 |
| 10.4.1. Indicadores | 240 |
| 10.4.2. Características asociadas a la legitimidad | 242 |
| 10.5. Comparación de los programas públicos de desempleo | 249 |
| 10.5.1. Indicadores | 249 |
| 10.5.2. Características asociadas a la legitimidad | 251 |
| 10.6. Conclusiones | 255 |
| CAPÍTULO 11. RESUMEN Y CONCLUSIONES | 259 |
| 11.1. Importancia de las opiniones ciudadanas sobre el Estado del Bienestar | 260 |
| 11.2. Resumen de resultados | 262 |
| 11.2.1. Dos fenómenos: la legitimidad y el Estado del Bienestar | 262 |
| 11.2.2. Marco teórico e hipótesis: integración y legitimidad | 263 |
| 11.2.3. Resultados del análisis de datos | 265 |
| 11.2.4. Uniendo todos los cabos | 272 |
| 11.3. Limitaciones de los resultados | 272 |
| 11.4. Implicaciones académicas y políticas | 274 |
| ANEXOS | 278 |
| BIBLIOGRAFÍA | 329 |

Índice de tablas

| | |
|--|-----|
| Tabla 1.1. La Seguridad social es un gran logro | 29 |
| <i>La Seguridad Social es uno de los mayores logros de la sociedad moderna. El Gobierno debe asegurarse de que nadie quede desamparado al caer en situaciones de desempleo, pobreza, enfermedad, discapacidad...</i> | |
| Tabla 1.2. Aceptación de subidas impositivas para mantener las prestaciones sociales | 30 |
| <i>El Gobierno debe continuar dando a todos un amplio rango de prestaciones sociales, aunque ello implique aumentar los impuestos o las contribuciones</i> | |
| Tabla 1.3. Principios para distribuir la sanidad | 50 |
| <i>¿Es justo o injusto –está bien o está mal– que la gente con ingresos más altos pueda tener mejor asistencia sanitaria que la gente con ingresos más bajos?</i> | |
| Tabla 3.1. Impuestos directos y contribuciones sociales (% del salario bruto) para distintos tipos de familia. Datos para 1998 | 83 |
| Tabla 4.1. | 101 |
| <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (España, 1996)</i> | |
| Tabla 4.2. | 107 |
| <i>Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (Noruega, datos por sexo, 1996)</i> | |
| Tabla 4.3. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad en función de la posición económica, la ideología y el sexo. Noruega. Regresión lineal | 108 |
| Tabla 5.1. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad | 115 |
| <i>¿Debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (11 países)</i> | |
| Tabla 5.2. Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones | 115 |
| <i>¿Debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los ancianos? (11 países)</i> | |
| Tabla 5.3. Actitudes hacia la intervención del Estado en desempleo | 116 |
| <i>¿Debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los desempleados?</i> | |
| Tabla 5.4. | 118 |
| <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (Australia. Con todas las categorías de respuesta)</i> | |

| | |
|---|-----|
| Tabla 5.5. | 118 |
| <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (Australia. Categorías de respuesta reducidas)</i> | |
| Tabla 5.6. | 118 |
| <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (España. Con todas las categorías de respuesta)</i> | |
| Tabla 5.7. <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? (España. Categorías de respuesta reducidas)</i> | 118 |
| Tabla 5.8. Ejemplo de cómo se calcula el índice de apoyo nacional a un programa de bienestar. Australia | 119 |
| <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?</i> | |
| Tabla 5.9. Ejemplo de cómo se calcula el índice de apoyo nacional a un programa de bienestar. España | 119 |
| <i>¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?</i> | |
| Tabla 5.10. Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar (7 países) | 120 |
| Tabla 5.11. Media de apoyo a la existencia de programas públicos de sanidad, pensiones y desempleo (7 países) | 121 |
| Tabla 5.12. Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar (11 países) | 122 |
| Tabla 5.13. Variación entre los individuos dentro de cada país y entre países: Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad. Regresión Multinivel | 128 |
| Tabla. 5.14. Variación entre los individuos dentro de cada país y entre países: Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones. Regresión Multinivel | 128 |
| Tabla 5.15. Variación entre los individuos dentro de cada país y entre países: Actitudes hacia la intervención del Estado en desempleo. Regresión Multinivel | 128 |
| Tabla 5.16. El efecto del país sobre las actitudes hacia la intervención del Estado en bienestar. Regresiones logísticas ordinales | 132 |
| Tabla 5.17. El efecto del país sobre las actitudes hacia la intervención del Estado en Bienestar controlando por características de los individuos. Regresiones logísticas ordinales | 135 |
| Tabla 5.18. Efecto del país en las actitudes hacia los programas de bienestar comparando personas con la misma ideología, posición económica y sexo (t-test). Países ordenados de mayor a menor apoyo a los programas de bienestar | 137 |
| Tabla 6.1. Modelos multinivel sin variación del efecto de los ingresos entre países | 146 |

| | |
|--|-----|
| Tabla 6.2. Modelos multinivel incluyendo variación del efecto de los ingresos entre países | 147 |
| Tabla 6.2.b. Similitud de las opiniones sobre el EB entre los colectivos con mejor y peor posición económica | 151 |
| Tabla 6.3. Variación entre países en el efecto de los ingresos sobre las actitudes | 148 |
| Tabla 6.4. Fracturas económicas y legitimidad del programa público de sanidad | 161 |
| Tabla 6.5. Fracturas económicas y legitimidad de las pensiones públicas | 163 |
| Tabla 6.6. Fracturas económicas y legitimidad de las prestaciones por desempleo | 165 |
| Tabla 6.7. Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de sanidad (7 países) | 168 |
| Tabla 6.7.b Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de sanidad (11 países) | 283 |
| Tabla 6.8. Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de pensiones (7 países) | 169 |
| Tabla 6.8.b. Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de pensiones (11 países) | 284 |
| Tabla 6.9. Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos a las prestaciones por desempleo (7 países) | 170 |
| Tabla 6.9.b. Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos a las prestaciones por desempleo (11 países) | 284 |
| Tabla 7.1. Modelos de regresión lineal multinivel sin efecto variable de la ideología | 174 |
| Tabla 7.2. Modelos de regresión lineal multinivel con efecto variable de la ideología | 175 |
| Tabla 7.3. Homogeneidad internacional de los colectivos muy igualitaristas, ni igualitaristas ni individualistas, y muy individualista, en sus actitudes hacia los programas de bienestar | 176 |
| Tabla 7.4. Relación entre fracturas ideológicas y legitimidad (sanidad) | 184 |
| Tabla 7.5. Relación entre fracturas ideológicas y legitimidad (pensiones) | 186 |
| Tabla 7.6. Fracturas ideológicas y legitimidad (desempleo) | 188 |
| Tabla 7.7. Tipo de Estado del Bienestar, índice de apoyo a los programas de sanidad y pensiones, y efecto de la ideología sobre las actitudes hacia estos programas | 190 |
| Tabla 8.1. Modelos de regresión lineal multinivel con variación entre países para el efecto del género | 198 |
| Tabla 8.2. Actitudes hacia los programas públicos de sanidad en once países, por sexo | 201 |

| | |
|---|-----|
| Tabla 8.3. Diferencia entre hombres y mujeres en el porcentaje que responde | 202 |
| <i>Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos</i> | |
| Tabla 8.4. La brecha de género en las opiniones sobre los programas de bienestar | 203 |
| Tabla 8.5. Las mayores diferencias entre hombres y mujeres al opinar sobre los programas de bienestar | 204 |
| Tabla 8.6. La extensión de valores tradicionales acerca del rol de la mujer (Korpi, 2000) | 205 |
| Tabla 8.7. La brecha de género en las opiniones sobre los programas de bienestar. | |
| Diferencia entre las respuestas de hombres y mujeres a las siguientes preguntas: | 206 |
| <i>En general, cree Ud. Que debería ser responsabilidad del Gobierno:</i> | |
| <i>–proporcionar asistencia sanitaria a los enfermos;</i> | |
| <i>–garantizar un nivel de vida digno a los ancianos;</i> | |
| <i>–garantizar un nivel de vida digno a los desempleados</i> | |
| Tabla 10.1. Algunas características de los sistemas de bienestar | 228 |
| Tabla 10.2. Fuentes de información sobre los programas de bienestar | 230 |
| Tabla 10.3. Características de los programas públicos de salud | 234 |
| Tabla 10.4. Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad y características de los programas públicos de salud | 236 |
| Tabla 10.5. Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad y características del sistema de bienestar | 236 |
| Tabla 10.6. Características de los sistemas de pensiones y atención a la tercera edad | 242 |
| Tabla 10.7. Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones y características de los programas de pensiones | 243 |
| Tabla 10.8. Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones y características del sistema de bienestar | 244 |
| Tabla 10.9. Características de los programas de desempleo | 250 |
| Tabla 10.10. Modelos multinivel. Características de los programas de desempleo | 251 |
| Tabla 10.11. Modelos multinivel. Características de los sistemas de bienestar | 251 |

Índice de gráficos

| | |
|--|-----|
| Gráfico 1.1. La Seguridad social es un gran logro | 30 |
| <i>La Seguridad Social es uno de los mayores logros de la sociedad moderna. El Gobierno debe asegurarse de que nadie quede desamparado al caer en situaciones de desempleo, pobreza, enfermedad, discapacidad...</i> | |
| Gráfico 1.2. Aceptación de subidas impositivas para mantener las prestaciones sociales | 31 |
| <i>El Gobierno debe continuar dando a todos un amplio rango de prestaciones sociales, aunque ello implique aumentar los impuestos o las contribuciones</i> | |
| Gráfico 1.3. La estabilidad de las actitudes hacia la sanidad | 42 |
| <i>¿Cree Usted que debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar asistencia sanitaria a los enfermos? (1985, 1990 y 1996). Datos para cinco países</i> | |
| Gráfico 1.4. La estabilidad de las actitudes hacia las pensiones | 43 |
| <i>¿Cree Usted que debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los ancianos? (1985, 1990 y 1996). Datos para cinco países</i> | |
| Gráfico 1.5. La estabilidad de las actitudes hacia las prestaciones por desempleo | 44 |
| <i>¿Cree Usted que debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida adecuado a los desempleados? (1985, 1990 y 1996). Datos para cinco países</i> | |
| Gráfico 2.1. Nivel de desigualdad después de impuestos y transferencias en países con distintos tipos de Estados del Bienestar. (1990 y 2000) | 66 |
| Gráfico 2.2. Datos sobre niveles de pobreza en países con distintos tipos de Estados del Bienestar (2000) | 67 |
| Gráfico 6.1. Actitudes hacia la sanidad pública y posición económica relativa | 153 |
| Gráfico 6.2. Actitudes hacia el sistema público de pensiones y posición económica relativa | 154 |
| Gráfico 6.3. Actitudes hacia los subsidios de desempleo y posición económica relativa | 154 |
| Gráfico 6.4. Actitudes hacia la sanidad pública en los 11 países y posición económica relativa | 158 |
| Gráfico 6.5. Actitudes hacia el sistema público de pensiones y posición económica relativa | 162 |

| | |
|---|-----|
| Gráfico 6.6. Actitudes hacia el sistema de protección por desempleo y posición económica relativa | 165 |
| Gráfico 7.1. Actitudes hacia la Sanidad pública e ideología (Relación condicionada por sexo y posición económica) | 179 |
| Gráfico 7.2. Actitudes hacia las pensiones públicas e ideología (Relación condicionada por sexo y posición económica) | 180 |
| Gráfico 7.3. Actitudes hacia los subsidios por desempleo e ideología (Relación condicionada por sexo y posición económica) | 181 |
| Gráfico 7.4. Actitudes hacia la sanidad pública e ideología. Relación no condicionada | 183 |
| Gráfico 7.5. Actitudes hacia las pensiones públicas e ideología. Relación no condicionada | 185 |
| Gráfico 7.6. Actitudes hacia los subsidios por desempleo e ideología. Relación no condicionada | 187 |
| Gráfico 8.1. Actitudes hacia la intervención del Estado en apoyo a los desempleados. Hombres y mujeres con la misma ideología y la misma posición económica relativa | 199 |
| Gráfico 8.2. Actitudes hacia la intervención del Estado en la provisión de sanidad. Hombres y mujeres con la misma ideología y la misma posición económica relativa | 200 |
| Gráfico 9.1. Actitudes hacia la intervención del Estado en electricidad por ideología. Relación no condicionada | 214 |
| Gráfico 9.2. Actitudes hacia la intervención del Estado en banca por ideología. Relación no condicionada | 215 |
| Gráfico 9.3. Actitudes hacia la intervención del Estado en electricidad por situación económica relativa. Relación no condicionada | 217 |
| Gráfico 9.4. Actitudes hacia la intervención del Estado en banca por situación económica relativa. Relación no condicionada | 218 |
| Gráfico 10.1. Integración del programa público de sanidad y legitimidad | 238 |
| Gráfico 10.2. Extensión del programa público de sanidad y legitimidad | 239 |
| Gráfico 10.3. Extensión de la intervención en tercera edad y legitimidad | 245 |
| Gráfico 10.4. Tasa de reemplazo de las pensiones públicas y legitimidad. Tasas para rentas de 0.5 la media nacional | 246 |
| Gráfico 10.5 Tasa de reemplazo de las pensiones públicas y legitimidad. Tasas para rentas en la media nacional | 247 |
| Gráfico 10.6. Tasa de reemplazo de las pensiones públicas y legitimidad. Tasas para rentas del doble de la media nacional | 248 |

| | |
|--|-----|
| Gráfico 10.7. Integración de los programas de desempleo y legitimidad | 252 |
| Gráfico 10.8. Extensión de las intervenciones por desempleo y legitimidad | 253 |
| Gráfico 10.9. Extensión de la intervención en desempleo (ponderada por el porcentaje de desempleados) y legitimidad | 254 |

INTRODUCCIÓN

Tema y objetivos generales

Este trabajo de investigación ha estado entre mis manos durante casi seis años y, aunque confieso que le he sido desleal de forma casi permanente embarcándome en viajes, congresos, cursos de diversa índole e incluso trabajos a jornada completa, también lo es que durante todo este tiempo ha sido mi proyecto más querido y aquel cuyo final más veces acaricié.

Seis años pasan rápido pero no completamente en balde, y como era de esperar muchas de mis ideas y enfoques originales se quedaron en el camino a medida que profundizaba en la literatura sobre el Estado del Bienestar y que avanzaba en mis propios análisis. Pese a ello compruebo hoy, no sin cierta sorpresa, que el tiempo no ha modificado lo que fue mi pregunta de partida y es hoy la cuestión central de esta investigación: ¿por qué hay más apoyo a la existencia de programas de bienestar en unos países que en otros? ¿Por qué los suecos, o los propios españoles, muestran un apoyo abrumador a que el Estado intervenga en sanidad, pensiones y desempleo, mientras los australianos o nuestros vecinos franceses son mucho más tibios en sus actitudes hacia estas intervenciones?

El interés que me despierta encontrar respuestas, siquiera aproximadas, a esta cuestión tiene mucho que ver con el momento en que comencé a trabajar sobre el Estado del Bienestar, a finales de los 90. En esta época la idea de que el Estado del Bienestar había entrado en crisis impregnaba tanto los estudios académicos como los debates políticos sobre el tema y, ante el aparente riesgo de desmantelamiento, muchos académicos centraban sus esfuerzos en descubrir qué características debía tener un sistema de bienestar para sobrevivir en el tiempo. Se estudiaba, por ejemplo, cuál es el tamaño más adecuado para lograr cumplir los fines de los programas sin ralentizar con ello el crecimiento económico, qué forma de financiación resulta justa y además aceptable para las clases medias asalariadas (los grandes financiadores del sistema), o cómo asignar la cuantía y el acceso a los derechos y prestaciones para que el edificio de bienestar resultara financiera y socialmente sostenible. (Kangas, 1991; Glennerster, 1998; Boeri, 2002).

En un primer momento me atraía mucho esta línea de investigación que, *grosso modo*, se dirigía a descifrar las razones materiales por las que los Estados del Bienestar occidentales habían entrado en crisis, aportando en algunos casos soluciones de carácter también material a este fenómeno. Pero este objeto de interés se modificó al ver que los Estados del Bienestar iban superando la crisis de las maneras más heterogéneas: unos introdujeron fuertes recortes en las prestaciones, otros se reorganizaron mínimamente, algunos se quedaron igual que estaban, y unos pocos crecieron en tamaño.

Pese a lo que en un primer momento se había supuesto, la supervivencia de los sistemas de bienestar no parecía tener una relación tan evidente con sus características estructurales y hoy, apenas diez años después de tales debates, los sistemas de bienestar han dejado de estar en crisis para pasar a necesitar, más moderadamente, alguna que otra reforma. ¿Por qué han sido tan resistentes nuestros modelos de bienestar? ¿Qué explica el cuasi-abandono (temporal, sin duda) de la teoría de la crisis?

Entre los factores que han jugado un papel primordial se encuentran tanto los estudios que desmentían los efectos perversos de las políticas sociales como el incumplimiento de las catastróficas consecuencias económicas que se auguraban a los países con grandes Estados del Bienestar pero, si algo ha sido crucial en estos años, es que por más que el discurso económico exigía recortar las políticas sociales, muy pocos gobernantes se atrevieron a seguir estas recomendaciones porque todas las encuestas mostraban un generalizado rechazo ciudadano a las mismas.

Equivocadamente o no, la conclusión que yo saqué de la última «crisis del EB» es que cualquier institución es sostenible si así lo quiere una amplia mayoría de la población, y esta idea se tradujo pronto en una gran curiosidad por comprender los mecanismos que mueven los consensos entorno al EB.

Ya embarcada casi sin saberlo en lo que sería mi tema de tesis, lo primero que hice fue comparar las actitudes hacia el Estado del Bienestar en distintos lugares (Calzada, 2001; 2002; 2003), lo que me sirvió para ver que, aunque en casi todos los países una mayoría de los ciudadanos es partidaria de mantener los programas de bienestar, existen grandes diferencias y mientras en unos países la legitimidad del Estado del Bienestar es tan alta o más que la del propio sistema democrático, en otros existen amplios colectivos con serias dudas acerca de las bondades del sistema de bienestar. Ante estos resultados no cabe sino preguntarse: ¿qué han hecho algunos sistemas de bienestar para tener tanto apoyo? ¿Cómo podemos explicar el diferencial de legitimidad entre los EBs occidentales?

Para abordar estas cuestiones nosotros vamos a tomar el enfoque institucionalista (cap. 3), transformando la pregunta anterior en otras dos más concretas: ¿depende la legitimidad de la forma que adoptan los programas de bienestar? Y si es así, ¿cuál es la forma organizativa, el tipo de Estado del Bienestar, que maximiza el apoyo popular?

El objetivo general del presente estudio es dar una respuesta a estas preguntas y, aunque reconozco que a estas alturas del partido quizás ya no soy un juez fiable de la relevancia o banalidad del tema, creo que tiene interés tanto desde un punto de vista académico como político.

En el ámbito académico nuestro trabajo vienen a ofrecer información sobre un aspecto del EB poco estudiado porque, si bien es cierto que contamos con mucha y muy buena literatura sobre el origen, desarrollo y efectos de las políticas de bienestar, existen menos trabajos dirigidos a conocer qué opina la gente de estos temas, y apenas un pocos que se preocupen por la causa de que estas opiniones difieran entre países. Además, aunque también disponemos de bastante información relativa a los distintos resultados materiales (económicos) de las políticas sociales dependiendo de cómo se organicen, prácticamente no existen estudios

en profundidad sobre qué resultados de carácter subjetivo se consiguen con cada tipo de organización.

En cuanto a la esfera política, conocer los efectos no sólo materiales (sobre la pobreza, la desigualdad, la mortalidad) sino también actitudinales de las políticas sociales me parece importante para que nuestros representantes puedan tomar decisiones informadas, y determinar el efecto que tiene la forma de organizar el EB sobre su legitimidad podría ayudar a que las reformas que en el futuro se lleven a cabo no tengan efectos indeseados.

Si, como creo, la legitimidad es el pilar sobre el que se sustenta el Estado del Bienestar, cualquier reforma del mismo debería tener presente que, acompañando a los resultados materiales que se persiguen, pueden venir otros imprevistos sobre las actitudes de la población. Podemos implementar reformas bienintencionadas que acaben convirtiendo el sistema en un edificio con cimientos de cristal, u otras igualmente voluntariosas que contribuyan a impermeabilizar el Estado del Bienestar frente a los malos tiempos mediante la creación de una base de apoyo tan extendida como firme.

Objetivos concretos

Para operacionalizar el objetivo general que nos hemos fijado analizaremos cuidadosamente las opiniones de los ciudadanos de once países sobre tres programas centrales del Estado del Bienestar: la asistencia sanitaria, las pensiones de jubilación, y las prestaciones por desempleo. Comenzaremos comparando los niveles de apoyo que estos programas logran en cada país con la forma en la que están organizados, y aunque con esto las siguientes páginas pierden «efecto sorpresa», adelantaré ya que este primer análisis nos dejará con una relación bastante clara entre el tipo de Estado del Bienestar y su nivel de apoyo agregado.

Hecho esto, veremos de dónde sale el apoyo extra que los programas más legitimados consiguen, es decir, trataremos de determinar quiénes son los colectivos que apoyan la existencia de programas públicos de sanidad, pensiones o desempleo cuando se organizan de una manera, pero se desmarcan de los partidarios si la forma del programa es distinta. Finalmente, en un análisis macro analizaremos qué características concretas de cada programa (nivel de gasto, tasas de reemplazo, etc.) correlacionan con la legitimidad del mismo.

Como indicador de las actitudes hacia los tres programas de bienestar usaremos la encuesta del International Social Survey Programme «The Role of Government» (descripción en el capítulo 4) y como resumen de la forma que tienen los Estados del Bienestar de los once países utilizaremos la clasificación de sistemas de bienestar elaborada en 1990 por Gøsta Esping-Andersen, que distingue entre el tipo de EB Socialdemócrata (ejs. Noruega y Suecia), el Conservador/corporativo (ejs. Francia y Alemania), y el Liberal (ejs. Australia, Canadá, EEUU). Las particularidades de esta tipología, su utilidad y otras clasificaciones alternativas están recogidas en el segundo capítulo.

Las hipótesis que estructuran este análisis (detalladas en el tercer capítulo) son las siguientes:

1. Existe una relación entre la forma del Estado del Bienestar (resumida por la tipología de Esping-Andersen) y su legitimidad (apoyo agregado a la existencia de los programas de bienestar).

2. La característica más importante para explicar la legitimidad de un sistema de bienestar es su grado de integración real, por lo que esperamos que el tipo Socialdemócrata (el más integrador) sea el que más apoyo agregado recibe, seguido por el Corporativo (algo menos integrador) y con el Liberal (el menos integrador) en último lugar.
3. La integración de un programa de bienestar se traslada en apoyo popular por dos vías:
 - 3.a) Al incluir a todos los colectivos de ingresos bajo el mismo paraguas, los programas integradores difuminan las diferencias de opinión entre clases sociales, «aupando» a las clases medias y altas hasta niveles de apoyo propios de las clases bajas o medias-bajas.
 - 3.b) Al ofrecer servicios a toda la población y prestaciones relacionadas con los ingresos previos del individuo, los sistemas más integradores pierden su imagen de instrumento al servicio de la redistribución y son percibidos simplemente como instituciones funcionales, lo que les permite ganar el favor de las personas con valores individualistas.

A lo largo de los capítulos destinados al análisis de datos vamos a ir viendo otras cuestiones al margen de las indicadas y, sobre todo, nos detendremos con frecuencia para tratar hipótesis alternativas a las recién esbozadas, pero las grandes hipótesis del estudio son las tres anteriores.

Estructura

La estructura del trabajo es bastante clásica. En líneas generales, las páginas siguientes se dividen en dos grandes bloques: los capítulos 1 a 4, presentan el marco teórico, hipótesis y metodología, y los capítulos 5 a 10 recogen el análisis de datos escalonado que se requiere para verificar las teorías e hipótesis detalladas en la primera parte.

Comenzando por el bloque teórico, los primeros capítulos están destinados a presentar la literatura previa sobre los dos fenómenos cuya relación nos interesa comprobar: las actitudes hacia el Estado del Bienestar (capítulo 1), y las tipologías de sistemas de bienestar (capítulo 2). La justificación teórica de la relación entre la forma que adquiere un sistema de bienestar y su legitimidad, así como las hipótesis que hemos elaborado para llevar este marco teórico a comprobación empírica se detallan en el capítulo 3, y en el capítulo 4 aparece la descripción y justificación de las fuentes y métodos que utilizaremos para contrastarlas. Sobre esto último, baste decir aquí que para llevar a cabo nuestros análisis utilizaremos fundamentalmente regresiones logísticas ordinales y regresiones lineales multinivel, y que los datos proceden de dos fuentes consideradas, en general, muy fiables: El International Social Survey Programme (ISSP) y la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE).

Respecto a la primera de estas fuentes, usaremos como indicador de las actitudes ciudadanas una de las encuestas transnacionales del ISSP. Esta organización tiene un proceso bastante estricto para la traducción del cuestionario base a los distintos idiomas y como, además, el trabajo de campo lo realizan los centros estadísticos oficiales de cada país participante, la calidad está, sino garantizada, al menos controlada. En cuanto a la organización de los sistemas de bienestar, para clasificar a los once países sobre los que trabajaremos aplicaremos

la tipología de Esping-Andersen pero, complementariamente, utilizaremos datos sobre las características de cada programa provenientes de los distintos Informes y bases de datos de la OCDE.

El bloque empírico comienza en el capítulo quinto con el análisis de la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y el apoyo agregado al mismo, comprobando que la relación es estadísticamente significativa y que se produce de la manera prevista por nuestra segunda hipótesis (el tipo Socialdemócrata es el que más apoyo presenta, seguido por el Corporativo y el Liberal). En este capítulo dedicaremos también unas cuantas páginas a refutar una explicación alternativa de la correlación vista que no tiene que ver con la forma del sistema de bienestar, y a preocuparnos por lo que sucede con las actitudes en los países que no se clasifican con facilidad en uno de los tres tipos de definió Esping-Andersen.

Los capítulos 6, 7 y 8 siguen una lógica común porque en ellos se analiza, desde distintos puntos de vista, la forma de los consensos ciudadanos en torno al Estado del Bienestar en los once países sobre los que trabajamos. En el capítulo 6 estudiaremos de manera comparada las fracturas actitudinales entre grupos económicos, en el capítulo 7 nos centraremos en ver la distancia que separa las actitudes de personas con distinta ideología, y en el capítulo 8 valoraremos hasta qué punto las fracturas de género son similares a lo largo de nuestra muestra, es decir, si la distancia que separa a hombres y mujeres cuando hablan sobre el Estado del Bienestar es la misma en todos los países.

El objetivo conjunto de estos tres capítulos es relacionar la forma del consenso en torno al EB con el tipo de organización de esta institución, lo que nos indicará qué colectivos son favorables al EB si este se organiza de una manera pero dejan de ser partidarios del mismo cuando la organización es otra, y nos permitirá verificar o falsificar nuestra tercera hipótesis sobre las vías mediante las que las características del sistema de bienestar se trasladan en apoyo ciudadano.

Aunque cada uno de estos capítulos finaliza con una breve conclusión y resumen, dada la extensión del conjunto hemos creído conveniente incluir el pequeño capítulo 9 para recapitular todos los resultados vistos, ofrecer un panorama de lo que estos resultados nos están indicando y, como en otras ocasiones, refutar alguna posible explicación alternativa de las pautas que han ido apareciendo.

Hasta el capítulo 9 todos los análisis se realizan a nivel micro, es decir, trabajando con las opiniones sobre el Estado del Bienestar de los casi 17.000 individuos que componen nuestra muestra, pero en el capítulo 10 daremos un giro a esta manera de proceder y pasaremos a un análisis macro donde averiguaremos qué características concretas de cada programa de bienestar (nivel de gasto, tasa de reemplazo de las prestaciones, coste, etc.) tienen relación con el apoyo agregado que consiguen. En este capítulo 10, que cierra el análisis de datos, la unidad de análisis no es el individuo sino el programa de bienestar (tenemos 33 programas distintos, 3 por cada país), y nos permitirá confirmar que, como asumíamos en la segunda de nuestras hipótesis, la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad se explica porque el grado de integración de los programas es distinto en cada uno de los tres tipos con los que trabajamos.

¿Qué aporta?

Ya hemos comentado que apenas existen estudios empíricos que traten de explicar las diferencias internacionales en apoyo al EB, con lo que la principal aportación de esta investigación estriba en su propia temática que, si bien puede considerarse más o menos relevante, resulta aún poco conocida.

Los pocos autores que se han interesado por este campo lo han hecho en forma de artículos o publicaciones breves y, en comparación con ellos, nosotros nos hemos permitido profundizar más tanto en el marco teórico como en los análisis llevados a cabo. Respecto a lo primero, hemos tratado de construir una explicación teórica de porqué deberían darse variaciones internacionales en actitudes hacia el EB, cómo deberían producirse, y mediante qué vías se traslada una macro variable como el tipo del Estado del Bienestar a las actitudes individuales de los ciudadanos. En cuanto al análisis, disponer de más tiempo y más espacio, que la mayoría de los trabajos previos nos ha permitido desglosar nuestras hipótesis generales en muchas hipótesis operativas que se han ido contrastando una por una, e ir más allá del «tipo de Estado del Bienestar» utilizando tanto esta variable resumen, como las características concretas de cada programa de bienestar.

En resumen, creo que esta investigación contribuye a la literatura sobre el Estado del Bienestar porque ofrece información sobre uno de sus aspectos menos trabajados: los mecanismos que mueven su legitimidad y, aunque no pretende ser mejor que los otros estudios sobre el tema, sí trata de ser un análisis más exhaustivo y más pausado.

Capítulo 1. Las actitudes hacia el Estado del Bienestar

1.1. Origen de los estudios.

1.1.1. La crisis del Estado del Bienestar.

1.1.2. Los primeros análisis empíricos.

1.2. Los determinantes individuales de las actitudes hacia el Estado del Bienestar.

1.2.1. La clase social.

1.2.2. Otras variables de posición social: de la clase al interés.

1.2.3. El efecto de la ideología.

1.2.4. Dos grandes factores: interés e ideología.

1.3. Las actitudes hacia el Estado del Bienestar a lo largo del tiempo.

1.4. Comparaciones internacionales.

1.4.1. Panoramas de opinión.

1.4.2. Borrar falsos caminos.

1.4.3. Variar, varían pero ¿por qué?

1.1. Origen de los estudios

1.1.1. La crisis del Estado del Bienestar

Language tells us, that something important has happened. Until the late 1980s and early 1990s 'social reform' meant extensions of entitlements (...). In the 1990s, the same expressions usually denote the opposite (Therborn, 1997, p.1)

En la última década del siglo XX el debate político Europeo tuvo un claro *leit motiv*: el Estado del Bienestar había entrado en crisis. En este periodo empezaron a adquirir resonancia ideas que, aunque desde el siglo XIX formaban parte de la crítica conservadora a las políticas sociales (ver Hirschman, 1991), habían quedado en segundo plano desde el final de la 2ª Guerra Mundial debido al contexto general favorable a la intervención en bienestar.

Al principio, los argumentos sobre los que se sustentó la teoría de la «crisis del Estado del Bienestar» fueron fundamentalmente económicos: se habla de la ineficacia de la provisión pública, se acusa a los programas de bienestar de crear más problemas de los que resuelven y se afirma que la globalización torna inviable el mantenimiento de los principios que sustentan el modelo social (intervención estatal, altos costes laborales). Pero muy pronto reaparece también con enorme fuerza la crítica moral a las políticas sociales¹, a las que se considera un mecanismo de coacción social que atenta contra la libertad (Friedman, 1980) y cuyo efecto es desgastar la fibra moral de las sociedades (Davies, 1987), anular la capacidad de organización de los grupos sociales y convertir a los ciudadanos en seres abúlicos y frustrados (Harris & Seldon, 1987).

The practice of economic intervention and a great deal of social policy have undercut the idea that people as individuals have rights which should be respected since the operative theory has been that the needs of other supersede those rights. (...) Since the early 1920s the effect of public policy has been to undermine any sort of self-determining activity such as mutual aid or collective self-help (Davies, 1987, p. 251)

El hecho es que estos peligros económicos y morales habían sido advertidos tiempo atrás. Por ejemplo, en 1834 la Iglesia Católica de Irlanda bloqueó la creación de un sistema universal de salud para madres con hijos menores por considerarlo una indebida injerencia del Gobierno en los asuntos familiares². En ese mismo año Inglaterra deroga su ley de ayuda a la pobreza sobre la premisa de que, al ser demasiado generosa, desincentiva el espíritu emprendedor, implementando en su lugar la «Poor Law» y el tristemente famoso sistema de «workhouses»³. También en torno a 1950, cuando los sistemas de bienestar se están implantando, reaparecen las mismas acusaciones desde las filas conservadoras (ver Titmuss, 1955) y, para que se vea que el camino del Estado del Bienestar nunca ha sido fácil, en los años 70 una rama de la sociología marxista se une a los críticos aunque, eso sí, con argumentos muy distintos de los utilizados por la economía liberal.

Desde la perspectiva marxista autores como James O'Connor (1981) e Ian Gough (1982) argumentan que el Estado del Bienestar no sólo no se opone a la lógica capitalista sino que es fruto

¹ Offe, 1987.

² En Dukelow, 1996.

³ Burke, 1999.

de ella y, por tanto, está al servicio de la misma. Y aunque en los programas de bienestar puedan coincidir los intereses de los trabajadores y del capital, lo cierto es que su diseño responde fundamentalmente a dos necesidades del sistema capitalista: por un lado reproducir la fuerza de trabajo (educación y sanidad), y por otro sustentar a quienes están fuera de ella para contar con un ejército de reserva (parados, enfermos) y mantener la armonía social que legitima todo el edificio del Estado capitalista (Gough, 1982).

Salvo excepciones (Illich, 1975), la crítica marxista de los años 70 y 80 no incluye como corolario el desmantelamiento de los programas de bienestar pero, combinada con la crítica feminista⁴, provocó un cierto «desgaste» en su legitimidad que ayudaría a explicar la rapidez con la que se extendió la teoría de la «crisis del EB» en los primeros 90. En realidad, los argumentos que se esgrimían en los años 90 eran aquellos que la crítica conservadora llevaba barajando siglo y medio⁵, pero en esta ocasión su resurgimiento coincidió con un momento en el que el EB había sufrido bastante «fuego amigo»⁶. Cuestionado por parte de sus bases tradicionales de apoyo, y en una situación de crisis económica generalizada, la crítica liberal al EB adquiere una relevancia y una extensión mayor de la que nunca había logrado. Durante unos años, la necesidad de desmantelar el modelo de bienestar construido tras la 2ª GM parecía una verdad tan absoluta que las principales diferencias entre partidos de izquierda y derecha radicaban en la forma y alcance que el proceso debía tener: parcial o total, gradual o drástico⁷. En palabras de Ramesh Mishra y Vicenç Navarro:

The idea that a strong system of social welfare is incompatible with the conditions and needs of the global market economy and therefore obsolete is voiced most strongly by business interests and political parties of the right. But it comes increasingly from the left too – specially in some versions of neo-Marxism, feminist, and eco-socialist thought. (Mishra, 1996, p. 317)

Esta postura de que los Estado están perdiendo poder debido al proceso de globalización, forzando a los gobiernos a adoptar políticas de centro como las únicas posibles, casi ha alcanzado la categoría de dogma y, como todo dogma, requiere una gran fe impermeable a la evidencia científica. En realidad, esta evidencia cuestiona cada una de las premisas en las que tal creencia se apoya (Vicenç Navarro, 2002)

Como aspecto positivo, la virulencia de las críticas dará lugar a un intenso debate teórico y abundantes investigaciones aunque, en realidad, durante 20 años la discusión no progresa a ninguna parte porque a cada argumento contrario a las políticas de bienestar se le opondrá otro favorable. Si por un lado se asegura, en la línea de Hayek (1959), que el mercado es más eficaz que el Estado para distribuir bienes, inmediatamente aparecen trabajos afirmando que el mercado sólo es realmente eficaz cuando se encuentra imbricado en sistemas organizados

⁴ Como señala O'Connor (1996), los primeros estudios sobre el Estado del Bienestar desde una perspectiva de género eran muy suspicaces con la red de servicios y prestaciones, a la que se veía más como una institución al servicio del patriarcado que de las mujeres. Orloff señala este mismo espíritu crítico respecto del EB: «*One school of thought emphasizes the ways in which state social policies regulate gender relations and contribute to the social reproduction of gender inequality through a variety of mechanisms. Analysts saw the emergence of modern welfare states as a transition from «private» to «public patriarchy»*» (Orloff, 1996, p. 53).

⁵ Para un estudio exhaustivo de la evolución del discurso sobre las políticas sociales ver Hirschman, 1991.

⁶ Esta crítica de una parte de la sociología marxista al Estado del Bienestar quedó en sordina cuando se empezó a ver que, realmente, el sistema corría riesgo de ser desmantelado. Tanto los recortes, como el incremento de la precarización que han sufrido los mercados de trabajo europeos en los últimos 20 años, han servido para «re-legitimar» el Estado del Bienestar entre gran parte de la izquierda.

por el Estado (North, 1990; Anisi, 1995; Boyer, 1996; Cabrero, 2002). Ante las afirmaciones sobre la dependencia y anomia que generan los sistemas de bienestar (Giddens, 2000), se produce un cruce de resultados que, en general, apunta a que ninguna de las dos cosas es empíricamente demostrable (Taylor-Gooby, 1998; Dean, 2000⁷; Rothstein & Stolle, 2002⁸; Luque, 2003). Pero no son sólo cuestiones económicas y morales las que discuten. La victoria de Margaret Thatcher en las elecciones generales inglesas de 1979 y, sobre todo, el hecho de que el Partido Laborista obtuviera ese año sus peores resultados desde 1901, inspiran un nuevo argumento: el Estado del Bienestar sufre una crisis de legitimidad.

La victoria electoral de Thatcher con un discurso anti-estatalista y la disminución de la base de apoyo al Partido Laborista (propulsor y tradicional defensor de los programas públicos de bienestar) se interpreta como indicativo de que la crisis del EB no tiene que ver sólo con sus efectos económicos o morales sino, fundamentalmente, con la pérdida de apoyo popular (OECD, 1981⁹).

Quizás porque Inglaterra era uno de los núcleos del debate sobre la crisis del Estado del Bienestar, por la rapidez de las reformas privatizadoras emprendidas por el Gobierno Thatcher y por los 18 años que el partido Conservador mantuvo el poder, la teoría de la «crisis de legitimidad» se va a convertir pronto en un argumento verdaderamente sonoro y, con ello, en uno de los principales factores que explican el nacimiento de los estudios empíricos sobre las actitudes de los ciudadanos hacia las políticas sociales.

El que los primeros estudios sobre el tema estuvieran tan vinculados a las discusiones políticas y académicas sobre la viabilidad del EB hizo que, durante un tiempo, su principal utilidad fuese de carácter político porque, como veremos a continuación, estos primeros trabajos eran análisis descriptivos realizados con una metodología sencilla, que profundizaban poco en las dinámicas de estas actitudes pero que, como contrapartida, constituían espléndidas armas arrojadas con las que entrar en el debate acerca del desmantelamiento o la extensión de las políticas sociales.

1.1.2. Los primeros estudios empíricos

Aunque en un principio toda esta idea de la crisis de legitimidad se movía en la mera especulación teórica, pronto surgen algunos estudios con base empírica.

Uno de los primeros fue *Over-ruled on Welfare* (1979), elaborado por Ralph Harris y Arthur Seldon, dos economistas del londinense Institute of Economic Affairs (IEA) que afirmaban haber demostrado la existencia de la crisis de legitimidad con datos de una encuesta llevada a cabo por este organismo en 1978.

⁷ Para una revisión de las críticas que desde la izquierda laborista se hicieron del EB, y las propuestas de reformarlo ver: Taylor-Gooby, 1999.

⁸ En un estudio cualitativo sobre la «cultura de la dependencia», llevado a cabo en Inglaterra con individuos que, por distintas razones (desempleo, madres solteras, etc.), vivían de las prestaciones públicas, no se encontró que existiera ni una «cultura de la dependencia» respecto del Estado, ni una «cultura de la resistencia» frente al sistema económico.

⁹ Rothstein y Stolle analizan datos de encuestas comparadas que incluyen preguntas acerca de la confianza que tienen los individuos en los desconocidos (vecinos, gente que pasa por la calle, etc.), si ayudarían a un desconocido en apuros en determinadas circunstancias, etc, concluyendo que el nivel de *Generalized Trust* (confianza en el prójimo o *confianza interpersonal*) es mayor allí donde el sistema público de bienestar es más amplio. E. Luque confirmará estos resultados utilizando una muestra mayor.

Poco después, en 1983, Taylor-Gooby, Ken Judge y Jillian Smith vuelven a analizar la misma base de datos de Harris y Seldon argumentando que las conclusiones de estos últimos estaban basadas en una mala interpretación de la encuesta y, ese mismo año, Taylor-Gooby¹⁰ utiliza otro sondeo, esta vez sobre las experiencias de los ciudadanos con el Estado, para demostrar que los ingleses no solo no perciben la intervención estatal como «opresiva», sino que consideran los programas de bienestar como un avance en las libertades personales (en lugar del retroceso del que habla con frecuencia el IEA).

En sucesivos estudios Taylor-Gooby (1985 a, 1985 b) seguirá mostrando que, con encuestas de por medio, las actitudes de los ingleses sólo pueden calificarse como mayoritariamente favorables hacia la intervención del Estado en bienestar pero, al mismo tiempo, otros autores explicarán estas actitudes positivas como expresión de la coacción que el sector público impone a sus clientes, la alienación, impotencia y fatalismo que produce en los individuos estar sujetos a la maquinaria estatal (Saunders & Harris, 1987). El apoyo popular al Estado del Bienestar se explicaría entonces porque los ingleses son una «clientela cautiva», lo que les vuelve incapaces de concebir otras alternativas¹¹ y les hace infravalorar el coste real de la provisión pública¹².

Hay que tener presente que, dentro del debate sobre el desmantelamiento de las políticas sociales, la pérdida de legitimidad del EB era, de resultar cierta, un golpe demoledor para las posiciones que desde el laborismo defendían las políticas sociales como conquista y derecho de la clase trabajadora. Y ese potencial demoledor hizo que, aunque ya a mediados de los 80 los datos apuntaban en sentido contrario, los argumentos de quienes defendían la existencia de la crisis de legitimidad se extendieran en los años siguientes por los ámbitos académicos y políticos de toda Europa.

En 1987 Harris y Seldon retoman su teoría de 1979 publicando *Welfare without the State* (*Bienestar sin el Estado*), un estudio de enorme repercusión que se consideró la confirmación «científica» de la crisis de legitimidad, la demostración de que la defensa laborista del EB había dejado de tener respaldo incluso entre las clases trabajadoras y que el modelo social de la post-guerra estaba definitivamente agotado.

La primera parte de *Welfare without the State* sigue la línea de trabajos anteriores dedicando un centenar de páginas a criticar el modelo de bienestar inglés por la mala calidad de sus servicios, por el atentado que supone a la libertad individual (libertad de elección), porque acaba con el hábito de la caridad empobreciendo la fibra moral de la sociedad y porque pervierte la democracia convirtiéndola en el «government of the busy, by the bossy, for the bully»¹³ («el gobierno de los atareados, por los mandones, para los abusones»).

En la segunda parte se presentan los resultados de una nueva encuesta realizada por el IEA que muestra la «enorme insatisfacción de los ingleses con el funcionamiento de los servicios públi-

¹⁰ Citado en Abrahamson, 2000, p. 16.

¹¹ Taylor-Gooby, Peter (1983) «The Welfare State and Individual Freedom. Attitudes to Welfare Spending and to the Power of The State», *Political Studies*, XXXI, pp. 640-649.

¹² En -Saunders, P y Harris, C. (1987) 'Biting the nipple? Consumer preferences and state welfare', paper presented at the VI Urban Change and Conflict Conference, University of Kent, September 20-23 1987, p. 34.

¹³ Kristensen, Ole P (1986) «Tax Structure and Public Spending –Or How the Electorate is Deceived into Paying for Bigger Public Spending than It Really Wants», *Scandinavian Political Studies*, Vol. 9, No. 4, pp. 317-336.

¹⁴ Harris & Seldon, 1987, p. 64.

cos», deduciendo los autores de ello que la mayoría de la población preferiría su privatización y augurando la extensión de una «rebelión de las masas» antiestatista ya en curso.

Both in education and medical care, the last two bastions of government monopoly, trade union hegemony, officious bureaucracy, political paternalism, professional arrogance, middle-class influence, political jobbery and producer dominance, the people are forced to escape to private services despite the loss of taxes for services they reject, and despite the inherent disabilities of relatively low incomes. The revolt of the masses against political conservatism in all parties and schools of thought is even more emphatic and eloquent in the rejection of taxes by resort to the underground economy, which politicians persistently ignore and official statistics persistently understate. The growing underground economy is a direct consequence of the failure of representative government, its inability to keep pace with market forces, its politicisation of economic life and the inherent inequity between people with different political skills. It has forced people whose abilities lie in commercial skills to find their livelihood in the underground» (Harris & Seldon, 1987, p. 68-69)

Aunque en *Welfare without the State* los autores vienen a decir básicamente lo mismo que en su trabajo de 1979, este nuevo libro logra tal repercusión y credibilidad internacional que los siguientes estudios sobre las actitudes ciudadanas hacia el Estado del Bienestar se van a dirigir, simplemente, a medir en cuánto había caído el apoyo al Estado del Bienestar en cada país y analizar hasta qué punto se podían ofrecer respuestas para este fenómeno.

Pero no fueron necesarias soluciones de ingeniería política ni análisis demasiado complejos porque los resultados de todos los trabajos posteriores que se realizaron a lo largo de Europa apuntaron casi unánimemente a que, con los datos existentes, la crisis de legitimidad no se veía por ninguna parte.

En Inglaterra va a ser, como de costumbre, Peter Taylor-Gooby (1989) quien primero desmonte los argumentos de *Welfare without the State* utilizando distintas encuestas mediante las que muestra que el mundo de las actitudes hacia el Estado del Bienestar es bastante más complejo que el que presentan Harris & Seldon. Los ingleses tienen sin duda críticas a la provisión estatal, pero estas no se traducen en un deseo de privatizar los servicios públicos sino, al contrario, en la exigencia de que estos sean más y mejores. Taylor-Gooby demuestra con facilidad que quienes más insatisfechos están con el funcionamiento y calidad de los servicios públicos son también quienes en mayor medida piden aumentos de gasto en ellos (una pauta que se da igualmente en otros países¹⁵), y que la percepción positiva de la provisión privada convive con un abrumador apoyo a la existencia de los grandes programas públicos de bienestar (sanidad, educación, pensiones, desempleo).

¹⁵ Esta relación se da en España de la misma forma. En la encuesta CIS 1999 «Opinión pública y política fiscal» tenemos dos tipos de preguntas: a) *¿El estado dedica demasiados, los justos, o demasiado pocos recursos a...?: Enseñanza, sanidad, protección al desempleo, seguridad social / pensiones. (demasiados, los justos, demasiado pocos).* b) *¿En qué medida funcionan bien los siguientes servicios públicos?: Enseñanza, asistencia sanitaria en hospitales, asistencia sanitaria en ambulatorios, gestión de las pensiones, gestión de los subsidios por desempleo. (mucho, bastante, poco, nada).*

Si cruzamos estas dos preguntas para cada uno de los programas de bienestar vemos que en todos ellos hay una relación muy fuerte entre estar insatisfecho con el funcionamiento de un programa de bienestar y considerar que el Estado está dedicando pocos recursos al mismo. El coeficiente Gamma es: Enseñanza: 0.39; Sanidad: 0.39, pensiones: 0.48, desempleo: 0.47. Este coeficiente tiene un rango de 0: no hay relación, a 1: relación perfecta. A partir de un Gamma de 0.30 se considera que dos variables tienen una relación fuerte. Una análisis más actualizado y depurado (tanto metodológicamente como en cuanto al contenido) de esta cuestión puede encontrarse en Calzada & Del Pino, 2007.

Siguiendo esta línea aparecen, en 1989, los primeros trabajos de Stefan Svallfors¹⁶, que radiografía las actitudes políticas de los suecos para encontrar el consenso en torno a las políticas sociales con buena salud, y cuyos sucesivos artículos sobre el tema obtienen gran repercusión al aparecer justo cuando las críticas internas al modelo escandinavo llegaban a su máxima expresión (Svallfors, 1993; 1995a; 1997).

Y puesto que la crisis de legitimidad se proponía como fenómeno de alcance europeo, en pocos años tenemos encuestas sobre las opiniones hacia el Estado del Bienestar en casi todos los países, con la conclusión general de que no sólo no hay crisis, sino que a lo largo de toda Europa la mayoría de los ciudadanos quiere mantener los servicios de bienestar en manos del Estado y muchos son además partidarios de extender su intensidad y rango de actuación (Abrahamson, 1991; Ervasti & Kangas, 1995; Tang, 1997; Díez, 1998; Andersen et al., 1999; Jaime Castillo, 2000; Pérez-Yruela, 2002).

Dado que resultaría ligeramente difícil mostrar los datos de todas estas encuestas nacionales, hemos elaborado las siguientes tablas y gráficos para ilustrar el panorama de opinión que existía en los primeros años de la década de los 90. Los datos proceden del Eurobarómetro 37.1 (1992), llevado a cabo en 13 países por encargo de la Comisión Europea. Los dos ítems del cuestionario que presentamos forman parte de un bloque de preguntas en las que se pedía a los entrevistados que dijeran su grado de acuerdo o desacuerdo con varias frases sobre el Estado del Bienestar.

Las tablas muestran los porcentajes de acuerdo y desacuerdo tomando a los ciudadanos de todos los países como un solo conjunto y sirven por tanto como reflejo de la «opinión europea». Los gráficos nos permiten detallar los resultados país a país pero, para no hacerlos demasiado complicados de leer, hemos preferido agrupar las respuestas en dos categorías: «De acuerdo» (sumando los porcentajes de quienes respondieron que estaban «muy de acuerdo» con aquellos que dijeron estar «ligeramente de acuerdo»), y «En desacuerdo» (sumando a quienes respondieron «Muy en desacuerdo» con quienes se decantaron por «ligeramente en desacuerdo»).

Tabla 1.1. La Seguridad Social es un gran logro

*La Seguridad Social es uno de los mayores logros de la sociedad moderna.
El Gobierno debe asegurarse de que nadie quede desamparado al caer
en situaciones de desempleo, pobreza, enfermedad, discapacidad...¹⁷*

| Datos agregados para los 13 países (1992) | Porcentaje |
|---|--------------------|
| Muy de acuerdo | 70,6 |
| Ligeramente de acuerdo | 24,5 |
| Ligeramente en desacuerdo | 3,5 |
| Muy en desacuerdo | 1,4 |
| Total | 100 % (n = 12.283) |

Países incluidos: Alemania del Oeste, Alemania del Este, Bélgica, Dinamarca, España, Inglaterra, Irlanda, Italia, Francia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal.

¹⁶ «Who loves the Welfare State? Attitudes, organised interests and Swedish Welfare Policy», Lund, 1989.√

¹⁷ Hemos realizado una traducción directa del cuestionario inglés. La redacción original era: 1. «Social security is a major achievement of modern society. The government should make sure that nobody is left deprived when unemployed, poor, ill, disabled...»; 2. «The government must continue to provide everyone with a broad range of social security benefits even if this means increasing taxes or contributions».

Tabla 1.2. Aceptación de subidas impositivas para mantener las prestaciones

El Gobierno debe continuar dando a todos un amplio rango de prestaciones sociales, aunque ello implique aumentar los impuestos o las contribuciones.

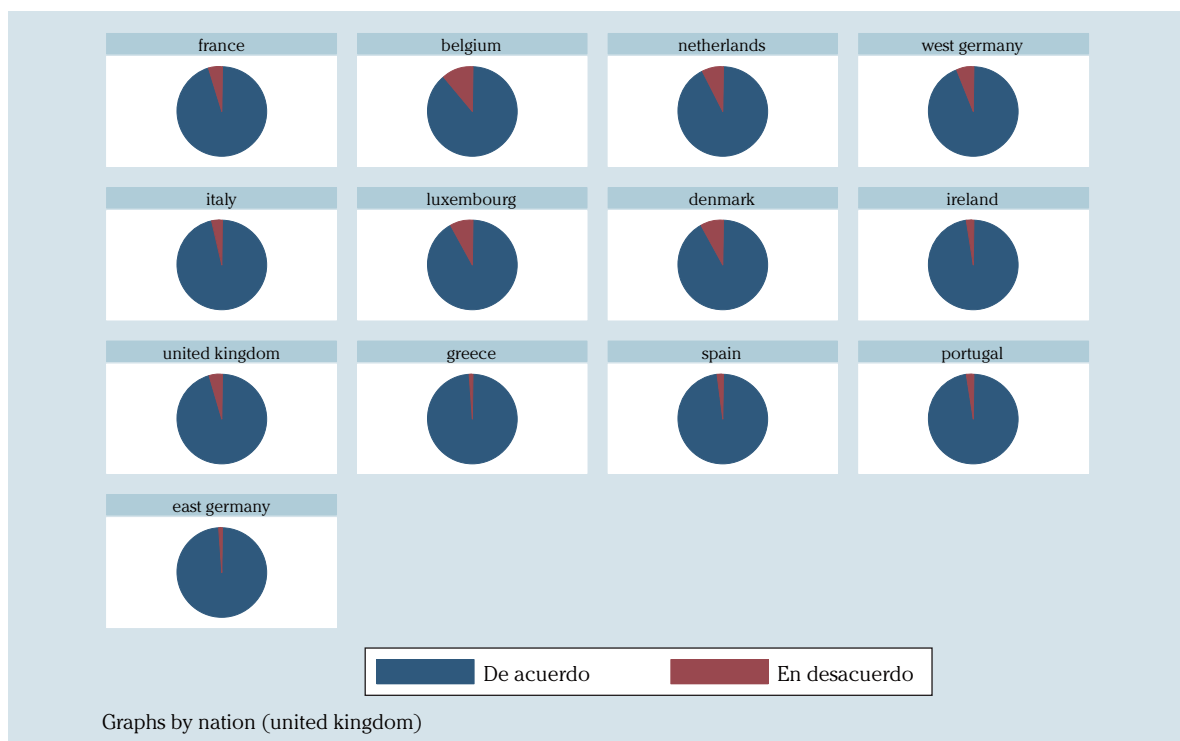
| Datos agregados para los 13 países (1992) | Porcentaje |
|---|--------------------|
| Muy de acuerdo | 34,1 |
| Ligeramente de acuerdo | 37,2 |
| Ligeramente en desacuerdo | 19,8 |
| Muy en desacuerdo | 8,9 |
| Total | 100 % (n = 11,811) |

Países incluidos: Alemania del Oeste, Alemania del Este, Bélgica, Dinamarca, España, Inglaterra, Irlanda, Italia, Francia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal.

Como se aprecia en las tablas superiores, la mayoría de los europeos consideraba la intervención estatal en bienestar como uno de los mayores logros de la sociedad moderna, y también era mayoritario el porcentaje de quienes estarían dispuestos a pagar más impuestos y contribuciones sociales para que las redes de protección social siguieran funcionando. En los gráficos siguientes podemos ver como, aunque con importantes variaciones entre países, en todos los casos estudiados la mayoría de la población considera que el sistema de bienestar debe mantenerse aunque ello suponga un coste adicional.

Gráfico 1.1. La Seguridad Social es un gran logro

*La Seguridad Social es uno de los mayores logros de la sociedad moderna.
El Gobierno debe asegurarse de que nadie quede desamparado al caer en situaciones de desempleo, pobreza, enfermedad, discapacidad...*



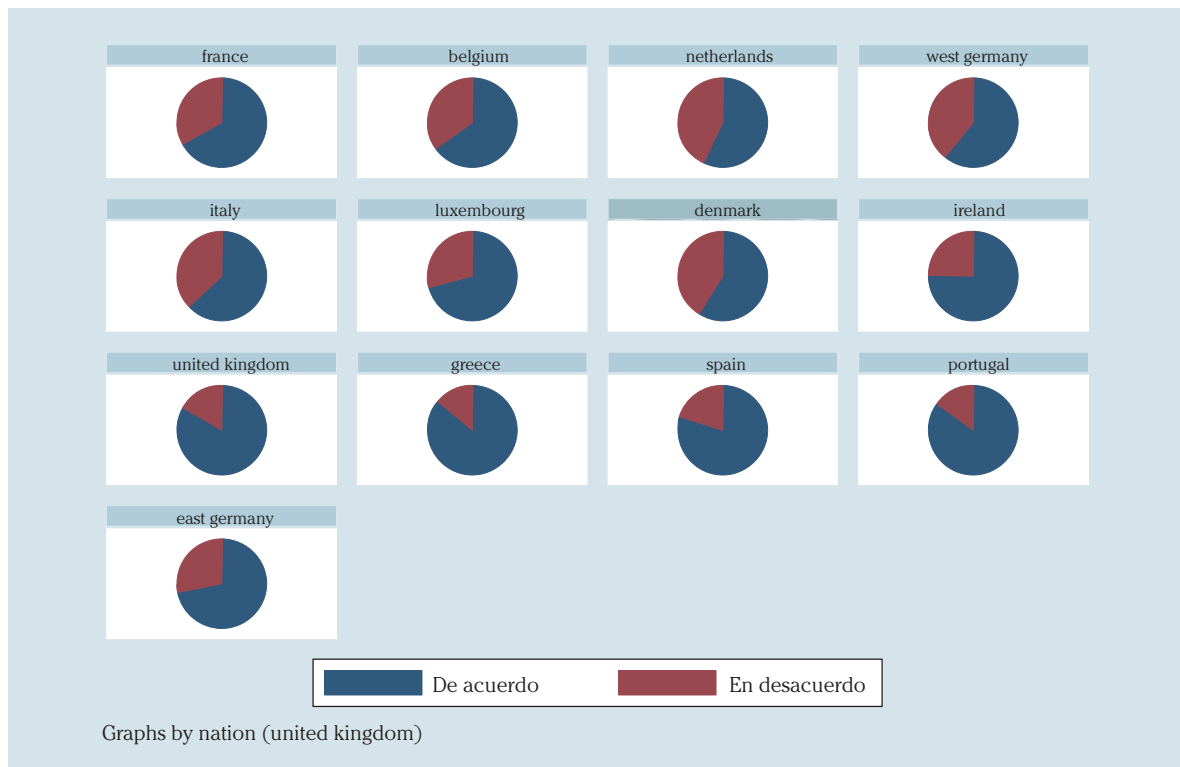
Fuente: Eurobarómetro 37.1 (1992).

Dada la credibilidad que había obtenido el argumento de la crisis de legitimidad, es posible que estos resultados sorprendieran a muchos políticos y académicos en aquellos días, pero hoy el amplio apoyo del que gozan las políticas públicas de bienestar a lo largo y ancho de Europa es bien conocido e incluso algunos autores se refieren al ya viejo concepto de «crisis de legitimidad» como una «pura invención de la OCDE» (Abrahamson, 2000, p. 16).

Así termina la historia de la «crisis de legitimidad de los Estados del Bienestar», un final positivo para el campo de estudio de las actitudes hacia el EB porque la inmensa mayoría de los autores había defendido la inexistencia de la crisis, pero una victoria peligrosa ya que, al haber centrado todos los esfuerzos del área en esta batalla, era necesario reorientar los estudios o morir de éxito.

Gráfico 1.2. Aceptación de subidas impositivas para mantener las prestaciones

El gobierno debe continuar dando a todos un amplio rango de prestaciones sociales, aunque ello implique aumentar los impuestos o las contribuciones



Fuente: Eurobarómetro 37.1 (1992).

Después de la crisis

Como es fácil suponer, constatado el hecho de que 20 años después aún haya gente escribiendo sobre el tema, no hubo extinción sino reorientación. A partir de mediados de los 90 la investigación sobre las actitudes del Estado del Bienestar pierde su papel clave en el debate político y se repliega a los ámbitos de la academia, lo que influye tanto en la metodología de los estudios como en sus objetivos. No se tratará ya tanto de ofrecer argumentos o contra-argumentos a las tesis conservadoras como de analizar en detalle un objeto de estudio al que se empieza a encontrar interés en sí mismo.

Los trabajos dejan de ser meras descripciones más o menos superficiales de lo que se opina en cada país para convertirse en análisis pormenorizados de diversos aspectos de las actitudes hacia el Estado del Bienestar, análisis quizás con menor interés para la política inmediata, pero que sirven para ir construyendo el corpus teórico de la disciplina.

Esta segunda fase es, por bautizarla de alguna manera, «la del detalle»: se van a observar los matices de las opiniones hacia las políticas sociales¹⁸, la diferenciación que los ciudadanos establecen entre unos y otros programas a la hora de emitir juicios de valor¹⁹, y la percepción del complejo intercambio entre impuestos y prestaciones.

Fruto del análisis más detallado aparece también un primer cuestionamiento y posterior perfeccionamiento de los instrumentos de medida, examinando el impacto de la formulación de las preguntas sobre las respuestas de los entrevistados (Smith, 1987; Kùchler, 1990; Rasinsky, 1989; Papadakis, 1992; Bay, 2000) y aplicando técnicas estadísticas cada vez más complejas al análisis de datos.

En resumen, la vuelta a la academia va a suponer un conocimiento más profundo y minucioso de las actitudes hacia el EB, creciente purismo metodológico, gran sofisticación técnica -a veces pertinente, otras no tanto- y la proliferación de resultados.

Una de las primeras cuestiones que salen a la luz con el estudio más detallado de las actitudes hacia el EB es que, sobre la base del extenso consenso conocido, existen variaciones interesantes. No todo el mundo opina lo mismo sobre cómo deberían ser las políticas sociales y, por ello, el primer reto al que se enfrentan los estudiosos será encontrar los «determinantes de las actitudes hacia el EB», es decir, los factores que sirven para explicar por qué algunos individuos son más favorables a las políticas de bienestar que otros. En el siguiente apartado comentaremos brevemente las conclusiones a las que se ha llegado al respecto.

1.2. Los determinantes micro de las actitudes hacia el EB

1.2.1. La clase social

Los primeros intentos de entender por qué unos individuos son más favorables que otros a las políticas sociales se enfrentaron con el problema de la inexistencia de un marco teórico sobre el que fundamentar el análisis de datos, por lo que las primeras hipótesis se tomaron prestadas de los estudios históricos sobre el Estado del Bienestar y, especialmente, de las teorías sobre los actores que fueron clave para su surgimiento y posterior expansión.

¹⁸ Uno de los primeros estudios que analizan con más detalle las actitudes hacia el Estado del Bienestar es el de Cnaan (1989), quien analizando una encuesta realizada en Israel concluye que la opinión hacia el EB no es monolítica sino que se estructura en tres dimensiones: actitudes hacia el nivel de gasto en cada programa de bienestar, actitudes hacia los beneficiarios del programa, actitudes hacia la calidad de los servicios o transferencias. Otros trabajos sobre el tema: Svallfors (1995a), Sihvo & Uusitalo (1995); Nordlund, A. (1997); Tang, K. L. (1997); Noya (2004).

¹⁹ Aunque no comentaremos en detalle todos los resultados, una de las primeras conclusiones es que los programas universales tienen más partidarios que aquellos dirigidos a colectivos específicos. (Forma, 1996(a) y 1996(b); Andersen et al. 1999)

Grosso modo, existen tres teorías sobre la implantación de políticas sociales y su posterior desarrollo hasta constituir sistemas de bienestar complejos:

La primera de las teorías explica el Estado del Bienestar como resultado de la lucha de clases y del poder de detentaban los actores políticos vinculados a la clase trabajadora.

Desde esta perspectiva, las políticas de bienestar interesaban fundamentalmente a la clase obrera y se implantaron porque los actores vinculados a ella (partidos y sindicatos) introdujeron el tema en el debate político y desplegaron todos los recursos de poder con los que contaban para defender sus propuestas²⁰. La distinta extensión e intensidad del Estado del Bienestar entre países reflejaría entonces las diferencias en la fuerza de las organizaciones obreras²¹, tanto en el periodo fundacional como en años posteriores.

Este enfoque «conflictivista» se basa en que la clase trabajadora era la principal interesada en la existencia de los programas de bienestar porque estos les proveerían de bienes y servicios a los que no podían acceder vía mercado. En palabras de Walter Korpi:

A starting point for the Power Resources Approach is the fact that socioeconomic class generated differences in risks to which citizens are exposed during the life course. While some life-course risks are generated by universal processes, most risks such as those associated with aging, illness, work accident, unemployment, poverty, and rearing of children, are instead unequally distributed among individuals occupying different positions in economic structures. Furthermore, class is also related to citizen's resources for coping with these life-course risks, making for the generation of negative correlation between risks and resources. (Korpi, 2006, p. 173)

La segunda gran teoría sobre el Estado del Bienestar argumenta que los sistemas de bienestar de la post-guerra fueron fruto del consenso entre la clase trabajadora y las clases medias agrarias. Autores como Peter Baldwin (1992; 1998) defienden en sus estudios históricos un surgimiento «pactado» de los programas de bienestar, que serían fruto del consenso entre estos dos colectivos debido a que ambos tenían mucho que ganar con la existencia de políticas sociales²². Si seguimos esta teoría, los apoyos del EB deberían depender, como en el caso anterior,

²⁰ La teoría de los «recursos de poder» (Power Resources Theory) ha sido elaborado extensamente por Walter Korpi (1985; 2006) y aplicada posteriormente a otros ámbitos (Wenemmo, 1994; O'Connor & Olsen, 1998).

²¹ Este enfoque «conflictivista» del surgimiento de los EBs es compartido por algunos de los principales teóricos de la política social comparada, como Gøsta Esping-Andersen, Vicenç Navarro, Goran Therborn, Walter Korpi y Olli Kangas (1992), aunque hasta hace unos años era casi imposible aportar datos que confirmasen cualquier de las teorías sobre el surgimiento de los EBs. Para solventar la carencia de datos sobre el EB que fueran al mismo tiempo cualitativos, históricos, y comparados, el Swedish Institute for Social Research (SOFI) dedicó 10 años (y una fuerte financiación del Bank of Sweden Tercentenary Foundation) para construir una base de datos que incluye información cualitativa sobre todos los aspectos de los programas de bienestar (tasa de cobertura, forma de organizar los subsidios, calidad de las prestaciones) y de su contexto (partidos políticos en el poder, tasas de afiliación sindical, orientación política de los sindicatos en cada momento), para 18 países durante 50 años. Por ahora la base no es pública, pero las publicaciones realizadas a partir de ella confirman en gran medida la teoría conflictivista del surgimiento de los EBs. Para más detalles sobre el proyecto ver: Korpi, Walter (2000a).

²² Muchos autores han estudiado la relación de las clases medias con el Estado del Bienestar a lo largo de Europa, encontrando que es más o menos beneficioso para ellas dependiendo del país al que miremos. Algunos autores destacan que las clases medias se benefician más que las clases trabajadoras de muchos de los programas de bienestar en países como Inglaterra (LeGrand, 1987), o España, donde serían beneficiarios netos del sistema de pensiones y educación pública (Gimeno, 2000).

Capítulo 1. Las actitudes hacia el Estado de Bienestar

de la posición económica del individuo, pero la principal fractura en las opiniones se produciría entre la clase media-alta y alta, y el resto de la sociedad.

La mayoría de los teóricos sobre el EB se encuadran en una de las dos perspectivas anteriores, aunque existe también una corriente interesante que explica el surgimiento de los sistemas de bienestar por necesidades funcionales de las economías capitalistas avanzadas²³ e incluso autores que argumentan que los empresarios jugaron un papel clave en apoyo de las primeras políticas de bienestar²⁴

Puesto que las dos grandes teorías sobre el Estado del Bienestar asumen que la clave de su surgimiento fueron los intereses de clase, y que las clases trabajadoras tienen un interés directo en que las políticas de bienestar existan (junto con las clases medias, o no), los primeros estudios explicativos sobre las actitudes hacia el EB parten de la hipótesis de que la clase social del individuo será la variable que en mayor medida determine sus opiniones sobre el tema.

Todos los análisis que se llevan a cabo desde este punto de partida verifican que la clase social del individuo determina lo que la gente opina sobre las políticas de bienestar, y que la clase trabajadora, independientemente de cómo la definamos²⁵, destaca del resto por su positiva valoración de las mismas. La clase media, por su parte, resulta ser menos favorable a la existencia de programas de bienestar que la clase trabajadora pero más que la clase media-alta o alta, con lo que los primeros resultados confirmaron los vaticinios que se hicieron desde la teoría «conflictivista» del surgimiento de los Estados del Bienestar (Svallfors, 1995a; Nordlund, 1997; Forma, 1999; Bean & Papadakis, 1998).

Pero además de verificar que la clase social es importante, en estos primeros estudios se aprecia que hay más variables que tienen efecto en lo que los ciudadanos opinan sobre las políticas sociales. Algunas son variables socio-demográficas, como la edad, el sexo, la raza o la situación en el mercado de trabajo. Otras pertenecen al ámbito de los valores, como el voto, la auto-ubicación ideológica o las opiniones sobre la pobreza y las desigualdades.

²³ La explicación funcionalista del Estado del Bienestar como requisito necesario para la expansión del capitalismo ha sido habitual entre los académicos de perspectiva marxista como Ian Gough (1982) o Claus Offe (1990) pero, salvo excepciones, desde la perspectiva marxista no se niega la importancia que tuvo el movimiento obrero en el surgimiento del Estado del Bienestar ni se elaboran propuestas de desmantelamiento del mismo ya que, como apunta Gough, en él coinciden los intereses de la clase trabajadora y del capital. Para los más optimistas, especialmente gente cercana a la Socialdemocracia sueca, el EB puede ser una vía no violenta hacia el socialismo (Palme, 1977); para los más pesimistas, y aquí sí tenemos las excepciones a las que me refería, políticas estatales de bienestar como pueden ser los programas públicos de salud son sólo una manera de someter a los ciudadanos con consecuencias nefastas para la sociedad y deben ser desmantelados (Illich, 1975). Para ver una buena revisión de todas estas teorías contrapuestas acerca del surgimiento y funcionalidad del Estado del Bienestar: Picó, 1999.

²⁴ Barry (1997) afirma que el partido Conservador inglés nunca estuvo en contra de las políticas de bienestar, y Swenson (citado en Korpi 2006) argumenta que la implantación de programas públicos de bienestar interesaba fundamentalmente a los empresarios porque les dotaba de una mano de obra más cualificada (educación gratuita y subsidios para proseguir estudios superiores), más sana (sanidad pública) y más flexible (porque la existencia de subsidios de desempleo hace que los trabajadores se arriesguen más a cambiar de trabajo o a invertir en cualificaciones muy específicas). Por estas razones se dice que fueron un colectivo especialmente favorable al surgimiento del Estado del Bienestar. Sin embargo, la inmensa mayoría de los estudios históricos sobre el tema apuntan en sentido contrario. Para un resumen de las teorías «employer-centered» sobre el origen del Estado del Bienestar ver: Korpi, 2006.

²⁵ Las dos vías más utilizadas para medir la clase social del individuo parten de la definición de E.O. Wright (1997), inspirada en la tradición marxista, o de la de Erikson & Goldthorpe (1992), según se dice, más «weberiana».

Vamos a comentarlas brevemente comenzando por las que se refieren a la posición socio-demográfica del individuo.

1.2.2. Otras variables de posición social: de la clase al interés

Las variables socio-demográficas que, independientemente de la clase, se han señalado como relevantes para explicar el apoyo o rechazo a los programas de bienestar son la edad, el sexo, la raza y la situación laboral aunque, a diferencia de la clase, que aparece como una variable fundamental en todos los países estudiados, estas otras se comportan de manera más heterogénea.

Los más jóvenes son más favorables a los programas de bienestar en EE.UU. (Hasenfeld & Rafferty, 1989), España (Arriba, Calzada & Del Pino, 2006; Calzada, 2007) y Dinamarca (Mouritzen, 1987) pero, por ejemplo, en Suecia y Noruega el efecto es inverso (Svallfors, 1995 a; 1999).

Respecto al efecto del género, las mujeres suelen ser más favorables que los hombres a la existencia de políticas sociales en todos los países, pero la diferencia entre hombres y mujeres es de apenas unos puntos porcentuales (Svallfors, 1995a) y existen países como EE.UU. o España en los que ni siquiera llega a ser estadísticamente significativa (Hasenfeld & Rafferty, 1989; Calzada, 2003). Pertenecer a un grupo racial determinado sólo tiene efecto en las actitudes hacia el Estado del Bienestar en EE.UU., donde los blancos son, independientemente de sus ingresos, menos propensos a apoyar la intervención estatal en bienestar que los negros o hispanos (Hasenfeld & Rafferty, 1989).

Finalmente, los análisis de la situación laboral de los entrevistados muestran que los desempleados son más favorables a la existencia de prestaciones por desempleo, pero también que sus respuestas a otras preguntas, más generales, sobre el Estado del Bienestar no difieren de las del resto de la población.

Como vemos, los resultados de analizar otras variables socio-demográficas son variados y, si bien no encuentran ninguna cuestión que determine las actitudes tanto como la clase social, van a servir para comprender mejor los mecanismos que determinan las actitudes. Gracias al trabajo con diversas variables socio-demográficas se empieza a ver que lo que subyace al efecto de todas ellas, la clase social incluida, es el interés directo que cada persona tiene en la existencia de los programas de bienestar. La clase social funciona porque es una medida general de este interés, pero si analizamos los programas uno a uno veremos que, además de esta variable, aquellas que definen intereses específicos también funcionan: los desempleados son más favorables a que existan subsidios por desempleo (Cox & Wermuth, 2001; Blekesaune & Quadagno, 2003), las mujeres apoyan más que los hombres las políticas dirigidas a combinar la vida familiar con la vida laboral, quienes están jubilados, o cerca de estarlo son grandes defensores de las pensiones (Rivière, 2001), etc.

Siguiendo esta misma lógica de buscar «intereses específicos», algunos autores conjeturaron que quienes trabajaban en el sector público debían ser especialmente partidarios del Estado del Bienestar porque dependen de él para proveerse de un salario (King, 1987; Therborn, 1991), pero los análisis realizados no arrojan resultados concluyentes: en general, trabajar en el

sector público o en el sector privado marca pocas o ninguna diferencia en las actitudes hacia las políticas sociales (Svallfors, 1995a; Andersen et. al., 1999)²⁶. En cualquier caso, a raíz de estudiar los efectos de todas estas variables socio-demográficas, se va a concluir que uno de los principales factores determinantes de las opiniones sobre los programas de bienestar es el grado de interés que cada quien tiene en su existencia. La clase social es la variable que se usa como medida general del interés y, aunque otras variables socio-demográficas pueden ser de utilidad en casos concretos, su heterogéneo comportamiento hace que no se las considere determinantes fundamentales de estas actitudes y que algunos autores apuesten por analizar el efecto de la clase social en profundidad en lugar de dedicar más esfuerzo a buscar indicadores que sólo explican parcialmente las actitudes de determinados sectores hacia un programa determinado.

In the meantime, social research would perhaps be better served by putting more effort into explaining the remarkable persistence of class-linked inequalities and of class-differentiated patterns of social action (Svallfors, 1995 a, p. 71)

Además, aunque en los últimos años ha surgido un creciente interés por la posible existencia de «nuevos riesgos sociales» y nuevas fracturas actitudinales asociadas a ellos, lo cierto es que los estudios que se han llevado a cabo sobre el tema no encuentran soporte empírico para confirmar la existencia de nuevas fracturas en las actitudes, viniendo a reafirmar la importancia del clásico eje económico (Arriba, Calzada & Del Pino, 2006).

1.2.3. El efecto de la ideología

El interés se ha desvelado en todos los estudios como un factor muy importante para dar sentido al panorama que los datos nos muestran y, sin embargo, no parece que todo se mueva por interés en este mundo de lo opinable al que nos asomamos gracias a las encuestas. La mayoría de los estudios realizados a nivel nacional encuentran que, incluso controlando por la clase social de las personas²⁷, distintas variables ideológicas determinan las opiniones que los ciudadanos mantienen sobre los programas de bienestar.

²⁶ Los estudios han demostrado que no hay diferencias entre trabajadores del sector público y del sector privado en actitudes hacia el Estado del Bienestar, pero por limitaciones de las encuestas no se ha analizado el efecto concreto de trabajar en el sector público de bienestar (Peillon, 1995; Svallfors, 2000).

²⁷ La ideología tiene efecto sobre las actitudes hacia el Estado del Bienestar *independientemente* de la clase social. Dos ejemplos pueden ser útiles para clarificar lo que es una relación independiente: el efecto de la educación, y el efecto de la raza en las actitudes hacia el EB. En el primer caso, se ha argumentado que los más educados serán más favorables al EB porque la amplitud de miras que da el conocimiento favorece la sensibilización con los problemas sociales. Para ver si esto es cierto hemos de comparar las actitudes de individuos con los mismos ingresos y distinto nivel educativo. Si hacemos esto, vemos que en general la hipótesis no se sostiene, puesto que no hay diferencias entre lo que opinan los ricos analfabetos de los ricos con estudios sobre el EB, como no las hay entre los pobres con y sin estudios. La relación entre nivel educativo y apoyo al EB es la que en términos estadísticos se denomina una relación espuria. El ejemplo contrario sería la cuestión racial. El hecho de ser negro o blanco es, en EE.UU., una variable muy importante para predecir las opiniones de un individuo sobre las políticas de bienestar americanas: la gente de raza negra es mucho más favorable a estas políticas que la gente de raza blanca. Esto es en parte debido a que el porcentaje de pobreza es mayor entre los negros que entre los blancos y, por ello, el porcentaje de gente interesada en que existan políticas sociales es superior entre la gente de raza negra. Pero además, si comparamos lo que opinan los blancos pobres con los negros pobres, o los blancos ricos con los negros ricos, vemos que los negros ricos son más estatistas que los blancos ricos, y lo mismo sucede con los pobres. De la misma manera, si comparamos a los negros-republicanos-ricos con los blancos-republicanos-ricos, los primeros vuelven a ser más favorables que los segundos a la existencia de programas de bienestar públicos. Por lo tanto, la raza tiene, en EE.UU., un efecto independiente sobre las actitudes hacia las políticas sociales, sin duda proveniente de los mecanismos de socialización.

A diferencia de lo que ocurría con las variables socio-demográficas alternativas a la clase social, en las cuestiones ideológicas todos los indicadores funcionan en la misma dirección independientemente del país que analicemos: los votantes de partidos de izquierda son más favorables al Estado, del Bienestar que quienes votan a partidos conservadores o liberales y consecuentemente, las personas que se auto-ubican en posiciones de izquierda son más favorables que quienes se posicionan a la derecha. Correlativamente, los ciudadanos que perciben las desigualdades económicas existentes como más injustas, y quienes creen que el Gobierno debería tratar de disminuir las diferencias de ingresos son, en todos los países, más propensos a defender la existencia de programas de bienestar. Todas estas relaciones se producen aun cuando comparamos individuos que tienen la misma posición económica, por lo que el efecto de las variables es adicional al de la clase social.

La conclusión a la que se llega es que todas estas variables tienen un denominador común: todas apuntan a los valores sociales o principios de justicia distributiva de los individuos en un eje que iría desde el igualitarismo económico (socialismo) hasta el individualismo económico (liberalismo). Así, los individuos que mantienen valores más igualitarios en lo económico son más favorables a las políticas sociales que quienes mantienen valores de corte individualista y esta pauta se produce independientemente de la variable concreta que se utilice como «proxy» del igualitarismo (voto, autoubicación ideológica, actitudes ante la pobreza y la desigualdad) e independientemente del país objeto de estudio²⁸.

Tenemos así el segundo determinante general de las actitudes, al que se suele referir como factor «ideológico» pero, además de ser más difícil de operacionalizar que el interés, la existencia de este segundo factor ha dado lugar a mayor reflexión porque, sociológicamente hablando, cualquier tipo de valores o creencias han de ser considerados como variables dependientes. Como señalan Andreß & Heien:

Interpreting attitudes towards the welfare state in terms of values and norms, or more specifically justice beliefs, is nevertheless only a partial explanation, since the question remains: how do justice beliefs arise? On the one hand, they may be affected by the present interest of the individual, so that high income groups will show a preference for anti-egalitarian individualism. On the other hand values and norms are the products of socialization processes, and in this respect, it is helpful to distinguish between socialization processes at the individual level (the social milieu) and the aggregate level (national welfare regime) (Andreß & Heien, 2001, p. 340)

Estos autores han intentado identificar los procesos socializadores que, actuando paralelamente al interés, afectan a los valores igualitarios de los individuos y, a través de ellos, a las actitudes hacia el EB.

Andreß y Heien señalan cuatro variables que están relacionadas con procesos de socialización mediante los que pueden modelarse los valores de justicia social de los individuos y que por eso mismo deberían (al menos en teoría) ser de especial importancia para entender sus actitudes hacia el Estado del Bienestar:

²⁸ Una vez acordado que los valores igualitarios determinan, además de la clase social, las actitudes hacia el Estado del Bienestar, no se llega a un consenso sobre la mejor manera de medir esta variable. Cada autor elegirá un indicador distinto en función de las posibilidades de la encuesta con la que está trabajando, aunque la mayoría se decanta por medir el grado de igualitarismo a través de la auto-ubicación ideológica (en la típica escala de 1 a 10), o por utilizar las respuestas de los individuos a alguna pregunta que tenga que ver con la deseabilidad de que el Estado ponga en marcha medidas para disminuir las desigualdades de ingresos.

La edad: Porque siguiendo las teorías de Inglehart las cohortes más jóvenes están socializadas en valores postmateriales tales como la solidaridad y la preocupación por los asuntos de la comunidad, que pueden hacerles más favorables a las políticas de cohesión social (Inglehart, 1991).

El género: Porque las mujeres están socializadas en valores de cuidado a otros que pueden trasladarse en apoyo al «cuidado institucionalizado» (*institutionalised care*), Svallfors, 1997) que provee el Estado del Bienestar²⁹.

Estar empleado en el sector público de bienestar: Porque la proximidad con quienes dependen del Estado para su provisión de estos servicios puede generar lazos de simpatía y solidaridad con ellos.

El nivel educativo: Aunque esta variable está lógicamente relacionada con la socialización de los individuos, su efecto sobre los valores de justicia social no está del todo claro.

Por un lado es posible que la educación sirva para ilustrar a la gente haciéndola más consciente de los problemas sociales y, por ende, más proclive a apoyar las políticas estatales encaminadas a paliar estos problemas. Por otro lado, «cuanto más tiempo permanezca una persona en el sistema educativo más se convencerá de que el logro individual es gratificante y debe ser recompensado» (Andreß & Heien, 2001, p. 341), adoptando una lógica individualista que podría trasladarse en rechazo a las políticas de solidaridad del Estado del Bienestar.

Los intentos de comprobar todos estos procesos recién mencionados no arrojan resultados convincentes. Una vez que controlamos por los ingresos de los individuos, la edad tiene un efecto distinto en cada país; trabajar en el sector público apenas determina las actitudes (Pierson, 2000) y el efecto de la educación se hace irrelevante una vez que controlamos por variables más directamente relacionadas con la posición social como los ingresos o la ocupación. La única de estas variables que presenta una pauta significativa es el sexo, ya que las mujeres tienden a ser un poco más favorables al Estado del Bienestar que los hombres³⁰ independientemente de su posición económica, pero la diferencia entre hombres y mujeres tanto en igualitarismo como en actitudes hacia el EB es pequeña (Svallfors, 1995 a; Blekesaune & Quadagno, 2003).

Por lo tanto, la conclusión de los análisis es que la gente con valores igualitarios en lo económico es más favorable a las políticas sociales independientemente de sus ingresos, sin llegar a clarificar por qué individuos con bajos ingresos mantienen principios distributivos individualistas, o cómo los individuos con alta posición económica desarrollan valores igualitarios que van en contra de sus intereses materiales.

1.2.4. Dos grandes factores: interés e ideología

Hoy por hoy se ha llegado a la conclusión de que dos grandes factores determinan las actitudes hacia el Estado del Bienestar: el interés y la ideología. Aunque puede haber polémicas en

²⁹ Para ver una crítica a esta teoría ver Calzada, 2003.

³⁰ Todas estas conclusiones acerca del escaso efecto de esas variables tienen como base mi propio análisis de la base de datos *The Role of Government 1996*. Sobre el efecto de la variable sexo ver Calzada, 2003.

torno a cual de los dos es más relevante³¹, existe una definición generalmente aceptada de cada uno.

*El interés*³² se entiende en su acepción económica más individualista³³. Cuanto más interesada económicamente está una persona en el Estado del Bienestar, más propensa será a desarrollar actitudes positivas hacia el mismo. Usuarios de los servicios públicos, beneficiarios de los programas de transferencias, gente con alto riesgo de necesitar las redes de asistencia social y, en general, las personas con bajos ingresos (las más beneficiadas en el intercambio impuestos / prestaciones) son más favorables al Estado del Bienestar que el resto. Por el contrario, las personas con ingresos altos (no tan beneficiadas por el intercambio impuestos / prestaciones), los usuarios de servicios privados de bienestar³⁴ y la gente con escaso riesgo de sufrir situaciones de pobreza o desempleo, tienden a ser quienes en menor medida apoyan los programas públicos de bienestar.

La ideología. A diferencia del primer factor, que definía el «interés» de manera muy concreta como interés económico, para entender este segundo factor hemos de pensar en la ideología de forma amplia como el conjunto de valores y creencias sobre la justicia social que cada persona utiliza para entender y valorar la realidad económica con la que se enfrenta. Siguiendo este criterio, los estudios empíricos muestran que la gente que mantiene valores de corte más igualitario o solidario en lo económico es más propensa a apoyar el Estado del Bienestar que aquellos cuyos valores morales tienden al individualismo.

Contamos ya con una extensa literatura verificando la validez de ambos factores, también llamados determinantes *micro* de las actitudes hacia el Estado del Bienestar. La mayoría de los estudios han servido para contrastar los factores en un solo país (Taylor-Gooby, 1983; Mouritzen, 1987; Hasenfeld and Rafferty, 1989; Peillon, 1995; Forma, 1996; Shivo & Uusitalo, 1995) o en pequeños conjuntos de países (Svallfors, 1999; Andersen et alia, 1999; Nordlund, 1997); pero también los estudios comparativos amplios llegan a la conclusión de que, en todos

³¹ En general los resultados muestran que el factor del interés tiene más peso que el ideológico, aunque algunos autores sostienen lo contrario: Papadakis, 1992; Bonoli, 2000;

³² Una traducción más ajustada sería quizás «auto-interés», ya que el término inglés es «self-interest», pero dado que la palabra auto-interés es muy poco usual en castellano he preferido traducirlo por «interés» y hacer referencia a que nos referimos al interés individual.

³³ Algunos autores (Forma, 1999; Blekesaune & Quadagno, 2003) entienden que este factor del interés va más allá del mero interés que un individuo pueda tener en su propio bienestar sugiriendo que es más adecuado hablar de un interés «familiar». Así, un jubilado que depende del sistema público de pensiones estará muy interesado en que este sistema se mantenga, pero también puede apoyar la existencia de guarderías públicas para sus nietos. Desde este punto de vista es esperable que el apoyo a un programa de bienestar no se reduzca sólo a quienes se benefician directamente del mismo, ya que otros individuos pueden tener un interés indirecto en que el programa exista. Pese a que estos comentarios son sin duda relevantes lo cierto es que la mayoría de las investigaciones empíricas toman el factor del interés en su versión individual con el fin de simplificar la metodología.

³⁴ Existe una relación empírica entre ser usuario de servicios privados de bienestar y mostrar un bajo nivel de apoyo a las políticas públicas de bienestar (Brook et al., 1998), pero la dirección de la relación no está clara. Utilizar servicios privados de bienestar puede generar actitudes negativas hacia la provisión pública por diferentes razones: la gente que no usa el sistema público puede sentirse «estafada» por tener que pagar vía impuestos unos programas de los que se benefician sólo los otros; pueden percibir a quienes dependen de la provisión pública como simples vagos que no quieren hacer esfuerzos para «ayudarse a sí mismos»; al no tener contacto directo con los programas públicos no saben sus problemas y ventajas.... Pero también puede ocurrir que la gente que tiene una actitud negativa previa hacia los programas públicos sea quien salga del sistema para comprar los servicios en el mercado. La pregunta permanece abierta: ¿Es el uso de provisión privada lo que genera actitudes negativas hacia la provisión pública o son quienes perciben negativamente la provisión pública quienes compran provisión privada?

los países, el esquema de dos factores es el que en mayor medida ayuda a comprender las actitudes de los ciudadanos hacia el Estado del Bienestar (Evans, 1995; Svallfors, 1997 y 2000; Forma, 1999; Andreß & Heien, 2001; Lipsmeyer, & Nordstrom, 2003; Fraile & Ferrer, 2004).

1.3. A lo largo del tiempo

Una vez solventada la cuestión de quiénes son los colectivos más y menos favorables a las políticas de bienestar la atención se traslada a otros aspectos de estas actitudes, y pronto aparecen artículos que suponen un avance respecto de lo anterior al combinar variables individuales³⁵ con variables macro³⁶ en el análisis de la legitimidad de los sistemas de bienestar. La primera variable «macro» que se incluye, quizás porque estamos todos tan sujetos a ella que es imposible pasarla por alto, es el tiempo, con el objetivo de ver cómo han ido evolucionando las actitudes hacia el EB desde los 80, fecha de las primeras encuestas, hasta hoy.

La metodología de estos trabajos se reduce, por regla general, al análisis de las actitudes en un solo país durante un periodo de 15 o 20 años pero, pese a sus restricciones, resultan de gran utilidad al servir un triple objetivo:

Por un lado, analizar los datos de una misma encuesta repetida a lo largo del tiempo sirve para verificar que el instrumento de investigación –la encuesta- es adecuado, y que las actitudes hacia el EB son susceptibles de medirse de este modo. Por otro lado sirven para profundizar en el conocimiento de las actitudes hacia las políticas sociales al incluir una nueva variable –el tiempo-; y finalmente consiguen refrescar el interés por los entresijos de la legitimidad del EB atrayendo investigadores, proyectos y dinero hacia este tema³⁷.

Los estudios temporales sirven como mecanismo de control

La mayoría de los estudios que hemos comentado en las páginas anteriores basan sus resultados en datos de una sola encuesta y, pese a compartir unos criterios básicos de calidad metodológica y argumentativa, cada uno de ellos por separado es susceptible de la misma crítica: al basarse en una encuesta puntual no ofrecen información sobre la consistencia de las opiniones que pretenden medir, corriendo el riesgo de sacar conclusiones intrascendentes. Un ejemplo: si los resultados que obtuvimos el martes mostraban un 80% de apoyo a la sanidad pública, pero el porcentaje pasa a ser un 35% la semana siguiente, nuestras conclusiones acerca del «consenso» en torno a este programa de bienestar resultan improcedentes.

³⁵ Variables que tienen como nivel de medida al individuo: el sexo, la edad, el voto, o lo que opina de los sacerdotes.

³⁶ Variables que tienen como nivel de medida una entidad superior al individuo. Por ejemplo, en un estudio sobre el rendimiento escolar en 50 escuelas españolas, posibles variables explicativas individuales serán la edad del niño, si ha repetido curso alguna vez, si habla en casa un idioma distinto al propio de la escuela, o el nivel socioeconómico de su familia. Las variables macro son las que se refieren a las escuelas: el número de alumnos por aula, la ratio profesor/alumno, o la calidad de las instalaciones. Estas últimas son características de la escuela y no de los niños, pero pueden afectar igualmente sobre su rendimiento.

³⁷ Poniendo las cosas en su sitio hay que decir que en ningún momento la cantidad de investigadores ha sido grande, ni tampoco la de proyectos financiados, pero en cualquier caso estas nuevas ideas y preguntas han ido consiguiendo que el tema de la legitimidad del Estado del Bienestar siguiera atrayendo estudiosos y siguiera avanzando.

Obviamente, esta crítica no aplica exclusivamente a los estudios sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar. Todos los estudios de opinión pública basados en una encuesta puntual tienen que justificar la validez de inferir un estado de opinión permanente de las respuestas dadas por los entrevistados en un momento concreto porque, si bien es verdad que la estadística nos permite generalizar con gran fiabilidad los resultados de una encuesta a toda la población objetivo, en ningún caso sirve de base para generalizar estos resultados más allá del momento durante el que se hizo el trabajo de campo.

Para confirmar que los datos obtenidos mediante encuesta sobre actitudes hacia el EB son consistentes en el tiempo (al menos en el corto plazo), y por lo tanto lo suficientemente relevantes como para ser analizados, es posible seguir varias vías, pero la más fiable es aplicar el mismo cuestionario en distintos momentos³⁸. Todas las encuestas que se han llevado a cabo repetidamente en un mismo país han demostrado que las opiniones de los ciudadanos sobre este tema son consistentes: no aparecen grandes saltos en las opiniones y las variables que sirven para explicar las diferencias de opinión entre los ciudadanos son, en todo momento, las mismas. Ambas cuestiones indican que existe una opinión sobre el tema (las grandes fluctuaciones en el corto plazo suele ser expresión de que la gente no tiene una opinión formada) y que ésta es susceptible de ser medida a través de encuestas.

Por tanto, lo primero que nos brindan los estudios temporales es una prueba de que las actitudes hacia el Estado del Bienestar siguen una lógica y que nuestros datos no son el fruto extraordinario e irreplicable de circunstancias y factores puntuales.

Complementando esta función de control, que se refiere a la fiabilidad del instrumento de medida, los trabajos sobre actitudes hacia el EB también ofrecen avances sustantivos. Al analizar las opiniones de los ciudadanos en un contexto temporal amplio, nos permiten conocer algo quizás más interesante que el nivel de legitimidad del Estado del Bienestar en cada país: la tendencia creciente o decreciente del mismo. Además, sirven para determinar el efecto sobre los consensos en torno a las políticas sociales de cuestiones como el aumento del nivel de vida o las crisis económicas.

Las actitudes hacia el Estado del Bienestar son estables a lo largo del tiempo

El primer descubrimiento que nos brindan los estudios temporales es que, a nivel agregado, las actitudes hacia el EB se caracterizan por una notable estabilidad en el tiempo. No es que quienes de jóvenes apoyan las políticas sociales vayan a mantener la opinión toda su vida, sino que los porcentajes de ciudadanos que apoyan o rechazan estas políticas no han variado demasiado desde que tenemos datos.

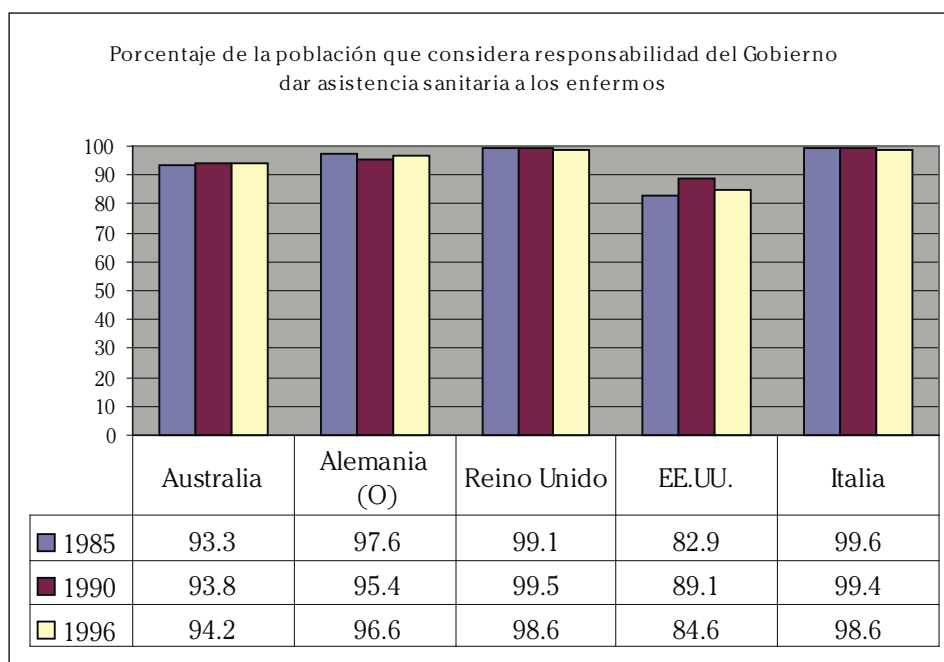
³⁸ También hay ciertos mecanismos que se pueden aplicar a la hora de hacer la encuesta para evitar en lo posible que acontecimientos puntuales afecten el resultado. La mayoría de las organizaciones que se dedican a los sondeos de opinión tienen muy en cuenta este punto débil y aplican diversos mecanismos para compensarlo. En primer lugar, lógicamente, está el criterio del organismo que hace la encuesta, que tratará de llevar a cabo el trabajo de campo durante unas fechas que minimicen estos efectos. En segundo lugar determinados formatos de encuesta, como la encuesta con preguntas cerradas (hay una serie de categorías de respuesta fijas), son menos permeables a los cambios puntuales de opinión (Schuman & Stanley, 1979).

Los trabajos realizados en Suecia (Svallfors, 1995a), España (Del Pino, 2001; Arriba, Calzada & Del Pino, 2006), Alemania (Cox & Wermuth, 2001), los países nórdicos en conjunto (Andersen et alia, 1999), o en una amplia muestra de naciones (Bean & Papadakis, 1998), concluyen de forma similar registrando el escaso cambio que se ha producido en estas actitudes desde los años 80, lo que indica que la estabilidad es una característica general de las actitudes hacia el Estado del Bienestar.

Sería magnífico tener datos de una encuesta realizada con el mismo cuestionario en varios países y distintos años para confirmar lo que la mirada de estudios nacionales nos indica pero, lamentablemente, no contamos con ese instrumento «ideal» de medida. Lo más próximo son las tres oleadas de la encuesta llevada a cabo por el International Social Survey Programme (ISSP) bajo el título: «*The Role of Government*», e incluso con ella, únicamente podemos comparar cinco países porque solo Australia, Inglaterra, Italia, la (ex) Alemania del Oeste y EE.UU. participaron en las tres ocasiones en que se llevó a cabo (1985, 1990 y 1996). En cualquier caso, con estos datos del ISSP hemos elaborado las siguientes tablas que, pese a lo reducido de la comparación, sirven para concretar a qué se refieren los autores que hablan de la «estabilidad» de las actitudes.

Gráfico 1.3.

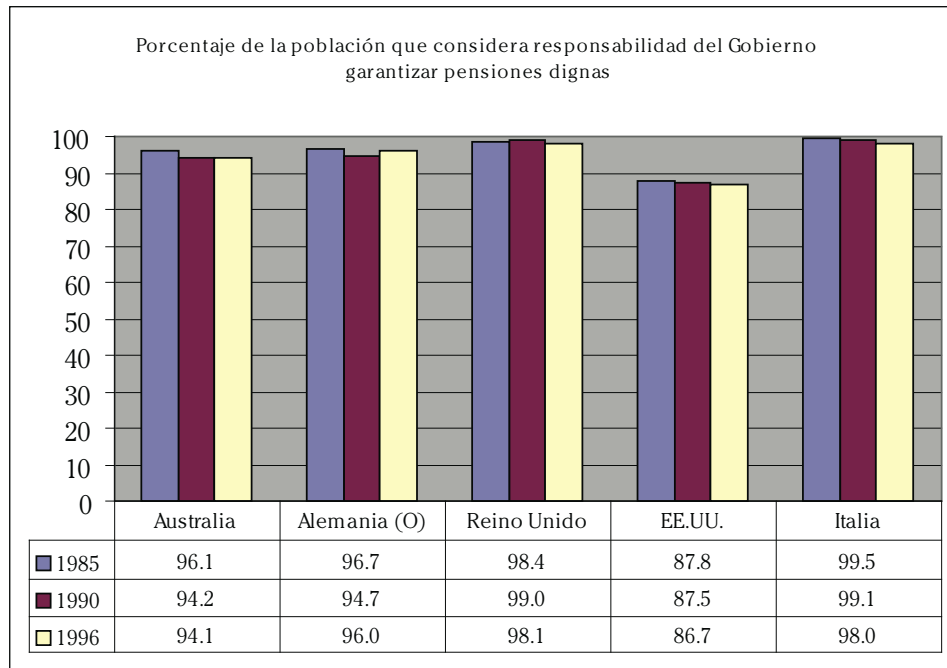
¿Cree usted que debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar asistencia sanitaria a los enfermos?



Fuente: ISSP «The Role of Government I, II, III» (1985, 1990, 1996). Elaboración propia. El porcentaje de acuerdo que figura en el eje Y de la tabla es la suma de quienes responden «Sí, sin ninguna duda» y quienes responden «Probablemente sí» a la pregunta del enunciado.

Gráfico 1.4.

«¿Cree usted que debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los ancianos?»



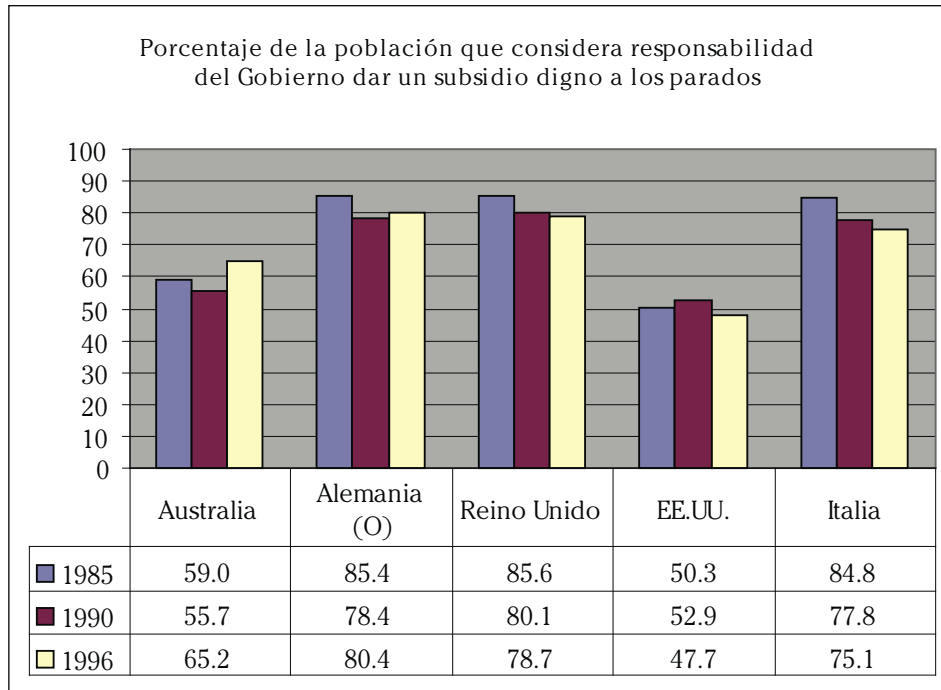
Fuente: ISSP «The Role of Government I, II, III» (1985, 1990, 1996). Elaboración propia. El porcentaje de acuerdo que figura en el eje Y de la tabla es la suma de quienes responden «Sí, sin ninguna duda» y quienes responden «Probablemente sí» a la pregunta del enunciado.

Como podemos apreciar en los gráficos 1.3, 1.4, y 1.5, la variación en apoyo a la existencia de sistemas públicos de sanidad y pensiones es del orden de un par de puntos porcentuales. Cualquier test de hipótesis nos va a decir que una variación de este tamaño ha de considerarse como no significativa, con lo que la conclusión «estadística» es que no ha habido cambio alguno en la legitimidad de estos dos programas durante los once años que cubre la encuesta. En comparación, la opinión acerca de los subsidios de desempleo ha cambiado más, pero estamos hablando de una variación de unos cinco puntos porcentuales que, dadas las circunstancias de la década estudiada (aumento del desempleo y por tanto del gasto público en esta partida, extensión del discurso neoliberal, recorte de prestaciones, victoria electoral de partidos de derecha³⁹) parecen de orden menor. Tanto los estudios nacionales como nuestro pequeño intento de comparar en el tiempo y en el espacio a la vez, nos llevan a la conclusión de que la estabilidad es una característica básica de las actitudes hacia el Estado del Bienestar.

³⁹ En EE.UU. gobernó el partido Republicano entre 1981 y 1993 (R. Reagan y G. Bush). En 1993 el partido Demócrata gana las elecciones con Bill Clinton; En Inglaterra el partido Conservador llevaba en el poder desde 1979 (primero con M. Thatcher y luego con J. Major), en Alemania estuvieron los Demócrata-cristianos de H. Kohl, e Italia tuvo nueve gobiernos distintos, la mayoría de centro-derecha o derecha. Sólo Australia estuvo gobernada durante el periodo que va desde 1985 hasta 1996 por el partido Laborista (R. Hawke y P.J. Keating).

Gráfico 1.5.

«¿Cree usted que debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los desempleados?»



Fuente: ISSP «The Role of Government I, II, III» (1985, 1990, 1996). Elaboración propia. El porcentaje de acuerdo que figura en el eje Y de la tabla es la suma de quienes responden «Sí, sin ninguna duda» y quienes responden «Probablemente sí» a la pregunta del enunciado.

El aumento de las clases medias y los efectos de las crisis económicas sobre la legitimidad

Otra cuestión interesante a la que nos podemos aproximar mediante los estudios temporales es el efecto que determinados cambios sociales o económicos pueden tener sobre el apoyo popular al Estado del Bienestar.

Para empezar, la propia estabilidad vista quita peso a una de las predicciones catastrofistas acerca de los sistemas de bienestar: que el progreso económico, con el correlativo aumento de la clase media y del nivel de vida general en las sociedades occidentales, acabaría socavando la legitimidad de las políticas del bienestar al ser estas necesarias cada vez para menos gente. Sin embargo, la disminución de la pobreza y el aumento de las clases medias y del consumo en general que se produjo en todos los países europeos desde los años 60 no se ha trasladado en un menor deseo de intervención pública en temas de bienestar. Aunque el Estado del Bienestar es un responsable parcial de las tendencias recién mencionadas, por ahora, no se ha cumplido la «muerte de éxito» que algunos pronosticaban.

En esta línea, también se ha estudiado el efecto de las crisis económicas sobre la legitimidad de los sistemas de bienestar, aunque siempre utilizando datos de la última crisis: la que afectó a casi todos los países europeos en los años 90.

En los países donde este tema ha sido analizado la conclusión es bastante similar: las crisis económicas hacen que el nivel de apoyo agregado a la existencia de políticas sociales disminuya, siendo la disminución mayor entre las clases medias y medias altas que entre las clases bajas.

Debido a que las actitudes de los colectivos con más ingresos resultan más sensibles a las crisis, estas generan una polarización de las opiniones: los pobres las necesitan más, pero al mismo tiempo los mejor situados se vuelven más reacios a financiarlas (Sihvo & Uusitalo, 1995; Forma, 1999).

Los resultados muestran que las crisis económicas minan la legitimidad de los sistemas de bienestar y rompen el consenso Interclases, pero los mismos estudios concluyen que, una vez que el país vuelve a tiempos de bonanza económica, las tendencias se invierten y el sistema de bienestar recupera los apoyos perdidos.

Debido a que los análisis incluyen un periodo temporal corto, no queda claro si se recupera todo el apoyo perdido o sólo gran parte del mismo (en este último caso las crisis irían poco a poco limando la legitimidad), pero sí parece seguro que el efecto de las crisis económicas es temporal y en gran medida reversible.

1.4. Comparaciones internacionales

*Siempre el mundo será ancho
pero ya no será ajeno*

MARIO BENEDETTI

La comparación internacional de actitudes hacia las políticas de bienestar surge de forma paralela a los estudios temporales que vimos en el apartado anterior y tiene como objetivo principal verificar la existencia de diferencias actitudinales entre los ciudadanos de distintos países. Como es lógico, no se estudia el país como una variable que pueda tener efecto por sí misma, sino como un indicador de las características macro-económicas o macro-sociales que podrían estar modelando lo que los ciudadanos opinan sobre el Estado del Bienestar.

Las preguntas de los investigadores que trabajan en esta línea versan, por ejemplo, sobre el efecto que puede tener sobre las actitudes el grado de industrialización de un país o, entrando en el campo de los valores, sobre la posible vinculación entre la confianza que los ciudadanos tienen en sus elites políticas y la propensión a extender o recortar las políticas sociales.

Dentro de la perspectiva comparada podemos distinguir tres tipos de estudios que aparecen más o menos de forma sucesiva en el tiempo reflejando el lógico movimiento hacia una mayor complejidad de las hipótesis y los métodos de análisis. En primer lugar aparecerán panoramas descriptivos de las actitudes hacia el EB que, al basarse en encuestas transnacionales, suponen un avance cualitativo frente a la heterogénea multitud de estudios de caso que existía hasta la fecha. En segundo lugar, aunque en gran medida solapándose en el tiempo con los panoramas descriptivos, otra serie de trabajos aplican el método comparativo para verificar diversas teorías acerca de los factores que afectan a la legitimidad de los Estados del Bienestar (entendida como apoyo agregado al mismo); Y un tercer tipo de estudios, el más reciente, va a centrarse

en explicar lo que los panoramas sólo describían: la existencia de variaciones entre países en las actitudes de los ciudadanos hacia el Estado del Bienestar.

Vamos a comentar brevemente lo que cada una de estas líneas de trabajo nos ha dejado hasta la fecha.

1.4.1. Panoramas de opinión

Igual que los mapas meteorológicos nos presentan las distintas zonas coloreadas según lo afortunado o desafortunado que vaya a ser el clima para el fin de semana, los primeros estudios comparativos van a dirigirse a esbozar un mapa de las temperaturas de opinión en los países europeos.

Uno de los primeros «mapas» en aparecer fue «*EC Citizens and Social Protection*» (Ferrera, 1993), donde se compararan las opiniones sobre las políticas sociales a lo largo de Europa utilizando una encuesta relativa al tema que se acababa de llevar a cabo, por encargo de la Comisión Europea, en todos los países que por entonces formaban la Comunidad Económica Europea (Eurobarómetro 37.1, 1992). El cuestionario del Eurobarómetro era extenso e incluía preguntas sobre la calidad percibida de cada uno de los programas de bienestar, el dinero que, en opinión de los ciudadanos, debía invertirse en ellos, las ventajas y desventajas del mantener los programas, la disposición del entrevistado a pagar más impuestos por más servicios sociales, la aceptación de recortes, y los riesgos que hipotéticamente amenazaban la sostenibilidad del Estado del Bienestar en cada país.

a) El análisis que de estos datos realiza Ferrera tiene dos conclusiones principales:

El apoyo a los programas de bienestar es muy elevado en todos los países estudiados. Son minoritarios los colectivos que demandan recortes en los mismos, y menores aun los de quienes preferirían que la provisión de bienestar fuese privatizada;

b) Al mismo tiempo, existen grandes diferencias entre países y entre zonas geográficas respecto a la mayoría de las cuestiones que la encuesta plantea. Una de las divisiones más importantes es la que separa a los países del norte y del sur de Europa: los primeros se caracterizan por la satisfacción con la calidad y el nivel de gasto destinado a los programas públicos, mientras en los segundos la mayor parte de los ciudadanos está insatisfecha y considera que el Gobierno debería gastar más dinero para mejorar la calidad de los servicios de bienestar.

Tanto por la novedad de la perspectiva comparada, como porque el debate sobre el futuro del EB seguía muy vigente, estas conclusiones tuvieron bastantes repercusiones.

La primera es que se empieza a cuestionar de forma generalizada la crisis de legitimidad del Estado del Bienestar. La segunda es que, una vez aceptado que los europeos valoran sus políticas sociales, aparecen cada vez más frecuentemente en los documentos de los organismos comunitarios referencias al «modelo social europeo» como seña de identidad y pilar de legitimación de la UE.

Siguiendo el camino de Eurobarómetro mencionado aparece en 1996 la macro-encuesta «The Role of Government», llevada a cabo por el International Social Survey Programme en 24 países

(no sólo europeos) con el objetivo de conocer las opiniones de los ciudadanos hacia la intervención del Estado en diversos terrenos.

Utilizando esta nueva encuesta surgen otros panoramas, más extensos, de las opiniones hacia el Estado del Bienestar, pero no merece la pena comentarlos en detalle porque, en general, las conclusiones son idénticas a las de Ferrera: sobre la base de un extenso apoyo a la intervención del Gobierno en temas de bienestar encontramos importantes diferencias entre lo que los ciudadanos de unos y otros países consideran aceptable en este ámbito. Se puede decir que la legitimidad del Estado del Bienestar, aunque generalizada, es mucho mayor en unos lugares que en otros⁴⁰. (Este punto ya resultaba evidente en los gráficos 1.1, 1.2 y 1.3, donde podíamos ver que el apoyo a los programas de bienestar variaba mucho más entre países que dentro del mismo país a lo largo del tiempo).

1.4.2. Borrando falsos caminos

Junto a los panoramas meramente descriptivos, y viniendo a complementarlos, un considerable número de artículos utiliza el método comparativo para poner a prueba algunas de las teorías existentes sobre los factores que determinan la legitimidad del Estado del Bienestar. Gracias a ellos hemos podido librarnos de toda una serie de lugares comunes e ideas preconcebidas y, dado que este capítulo pretende ser un resumen de lo que hoy conocemos acerca de las actitudes hacia el EB, cabe mencionar siquiera de pasada las conclusiones más llamativas a las que estos estudios llegaron.

Impuestos y legitimidad del Estado del Bienestar

Uno de los mayores miedos acerca de los impuestos es que si alcanzan una cuantía elevada generen el suficiente rechazo como para, en el ámbito político, cambiar gobiernos, y en el ámbito económico, provocar fraude fiscal. Sin embargo, todo el argumento se sostiene en una especie de ley general que espera que el grado de satisfacción con los niveles impositivos esté en relación inversa a su cuantía. Una cuestión que, si miramos las opiniones hacia los impuestos de los ciudadanos de varios países y las comparamos con la carga fiscal existente en cada uno, no se verifica (Hadenius, 1985; Noya, 2001).

Por lo que se deduce de estos estudios, no es la carga impositiva lo que genera rechazo, sino el uso que se haga desde el Estado de esos recursos. Cuando los ciudadanos perciben que el dinero de sus impuestos se dedica fines que consideran adecuados o deseables, el aumento del nivel impositivo o el mantenimiento en el tiempo de tipos elevados no se traduce en rechazo social ni, por ende, en las manifestaciones reales de ese descontento como protestas, frau-

⁴⁰ Bonoli, 2000; Gelissen, 2000; Svallfors, 1997 y 2000a; Andreß & Heien, 2001.

⁴¹ Uno de los pocos referéndum que se han llevado a cabo sobre los impuestos tuvo lugar en 1977 en California, con un resultado abrumadoramente favorable a su recorte. Esto se ha interpretado como la confirmación de la aversión fiscal de los ciudadanos pero, como explican Lipset y Raab (1978), los factores contextuales del periodo previo al referéndum sirven, en mucha mayor medida que la aversión fiscal, para entender estos resultados.

de o derrotas electorales de los gobernantes que implantan medidas fiscales expansivas⁴¹. En términos de su efecto sobre la legitimidad, los límites de la política fiscal son más flexibles de lo que desde algunos sectores de la ciencia económica se arguye.

Otro supuesto acerca de los impuestos, que no tiene que ver con su cuantía sino con su forma, es que los más visibles, como el IRPF o las contribuciones a los programas de seguridad social, son proclives a generar descontento, mientras los impuestos indirectos como el IVA atenúan el descontento porque pasan más desapercibidos a los ciudadanos (Wilensky, 1975). Lógicamente, de esto se deduciría que la manera más adecuada para recaudar es el incremento de los impuestos indirectos existentes y/o la creación de nuevos gravámenes de este tipo, aunque ello suponga una pérdida de progresividad del sistema fiscal.

El error de esta argumentación estriba en dar por hecho que los impuestos siempre generan rechazo y que, por esa razón, los poderes públicos han de tratar de invisibilizarlos lo más posible. Como ya hemos comentado, este no es el caso. Los trabajos de Ferrera (1993) y Noya (2001) muestran que los países en los que la carga impositiva recae en los ciudadanos casi en su totalidad en forma de impuestos directos (visibles) no son en absoluto los que presentan mayor índice de insatisfacción con el sistema impositivo, o mayor fraude fiscal. De nuevo, la tolerancia de los individuos a la fiscalidad no depende tanto del nivel o la forma de los impuestos como de que este dinero se dedique a fines que se consideran deseables, y entre estos todo lo relativo a los programas de bienestar está en cabeza. Es por ello que la legitimidad del Estado del Bienestar no se erosiona con los impuestos y, mientras haya una correlación entre la carga fiscal y la extensión de los programas de bienestar, no es esperable una quiebra del apoyo ciudadano a los mismos derivada de cuestiones impositivas.

Confianza en los políticos y legitimidad del Estado del Bienestar

Otra asunción acerca de la legitimidad de los programas de bienestar es que ésta no se deriva de los fines o resultados de los mismos sino que, en cierta medida, les viene dada por la legitimidad del sistema político en su conjunto.

En principio la idea parece razonable y es fácil imaginar que en un contexto de amplia desconfianza hacia la clase política todo lo que venga de ella, incluidas las políticas sociales, ha de ser acogido con escaso entusiasmo. Este era el argumento que Edlund (1999) ofrecía para explicar el bajo apoyo con que cuentan los programas de bienestar en EE.UU., argumento sin duda preocupante ya que, de demostrarse la relación entre confianza en los políticos y apoyo al Estado del Bienestar, la legitimidad de este último corría serio peligro dado el creciente desencanto con la clase política en casi todos los países (Pizzorno, 1995; Mair, 1995; Ignazi, 1996).

Sin embargo, los resultados del propio Edlund, así como los de Wiberg (1986) y Svallfors (1999, 2000b) no encuentran relación entre lo que los ciudadanos opinan de sus representantes y las actitudes que desarrollan hacia la intervención del Gobierno en temas de bienestar, lo que podría explicarse porque casi todos los programas son bastante más estables que los Gobiernos de turno y están gestionados por burocracias que no dependen del partido en el poder.

Los mundos culturales de Occidente

Pese a que las fronteras están cada vez más en desuso, lo cierto es que aún constituyen demarcaciones claras de ciertas pautas culturales, aunque es evidente que no todos los cruces de frontera suponen un salto cultural de similar longitud. La existencia de zonas culturales que engloban varios países en general (pero no siempre) próximos geográficamente es bien conocida, y resulta tan difuso ver hasta donde llega el efecto económico o político de las rutinas y valores compartidos que distinguen cada zona como fácil es recurrir a esos mismos valores para explicar fenómenos que no tienen una causa evidente.

En lo que se refiere a la política social ha sido y es habitual buscar los cimientos de los extensos Estados del Bienestar escandinavos en una pretendida «solidaridad» nórdica arraigada en la cultura de la zona. O hablar de valores individualistas propios del mundo anglosajón como elemento imprescindible para entender los sistemas de bienestar de EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra e Irlanda⁴².

Las teorías que explican la legitimidad de las políticas sociales sobre la base de los valores inmanentes de una zona tienen más resonancia en el ámbito político que en el académico, y quizás el problema fundamental es que de ellas se deriva una imagen estática de los modelos de bienestar según la cual no es posible la transferencia de un tipo de organización a otros lugares alejados del país en el que hoy están funcionando. De ser esto así, en España no podríamos aspirar a acercar nuestras políticas a las que se aplican en Suecia porque, simplemente, no somos suecos, y en EE.UU. nunca saldrán de su reducido sistema de bienestar porque este emana del «american way of life».

Aunque algunos autores defienden este efecto de los valores culturales para entender la variación en apoyo al Estado del Bienestar, y hablan de la existencia de un «homo socialdemocraticus» en los países nórdicos y un «homo liberalismus» en los anglosajones (Bonoli, 2000), la mayor parte de los estudios afirman que los valores de justicia distributiva son muy similares a lo largo de Occidente (Miller, 1995; Sigmund et al., 2002) y lo que varía es la forma en la que estos valores se ponen en práctica.

Además, cuando se han realizado encuestas preguntando a los ciudadanos por la justicia o injusticia de determinadas formas de distribuir servicios básicos se aprecian llamativas diferencias, pero no aparece esta nítida distinción entre «igualitaristas» del norte e «individualistas» anglosajones que algunos dan por supuesto⁴³.

A modo de ejemplo, la tabla siguiente muestra las opiniones sobre la justicia o injusticia de que quienes más dinero tienen reciban mejor tratamiento médico. En ella podemos ver que Suecia y Noruega, los dos países con mejores y más extensos sistemas públicos de sanidad, no destacan del resto de la Europa continental por los valores igualitarios que sobre el tema de la sanidad mantienen sus ciudadanos, y que un país anglosajón como Canadá tampoco difiere mucho de ellos.

⁴²Aunque de hecho los sistemas de bienestar de estos países «anglosajones» presentan enormes diferencias entre sí.

⁴³A este respecto, hay variedad de resultados. Gundelach (1994) destaca que en la clásica pregunta que pide a los entrevistados que se decanten por la libertad o por la igualdad como principio más importante, los nórdicos eligen mayoritariamente la libertad, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Svallfors (1997) utiliza una encuesta comparada para demostrar que los nórdicos son más favorables que los anglosajones a las medidas redistributivas..

TABLA 1.3. Principios para distribuir la sanidad

¿Es justo o injusto –está bien o está mal– que la gente con ingresos más altos pueda tener mejor asistencia sanitaria que la gente con ingresos más bajos?

| PAÍS | Es muy justo (%) | En cierto modo es justo (%) | No es justo ni injusto (%) | En cierto modo es injusto (%) | Es muy injusto (%) |
|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Australia | 6,8 | 23,6 | 21,3 | 35,8 | 12,5 |
| Alemania | 2,9 | 9,7 | 14,3 | 43,1 | 29,9 |
| Reino Unido | 21,5 | 20,7 | 20,3 | 17,4 | 20,1 |
| EE.UU. | 14,2 | 14,5 | 22,3 | 20 | 29 |
| Noruega | 4,3 | 14,7 | 16,3 | 30,3 | 34,4 |
| Suecia | 3,3 | 7,3 | 13,3 | 24,7 | 51,4 |
| Canadá | 6,7 | 15,4 | 17,8 | 22 | 38,1 |
| España | 1,8 | 6,8 | 7,7 | 37,5 | 46,2 |
| Francia | 1 | 1,2 | 11,3 | 26,7 | 59,7 |

Fuente: ISSP «Social Inequality III». Elaboración propia

1.4.3. Variar, varían pero ¿por qué?

Después de describir las variaciones existentes entre países en cuanto a la legitimidad de los modelos de bienestar y servirse de ellas para contrastar determinadas hipótesis, la lógica del proceso reflexivo lleva a preguntarse por la razón de ser de tales variaciones, y descubrir los factores que explican la heterogeneidad internacional de las actitudes hacia el EB es el más reciente empeño del área de conocimiento cuya historia hemos descrito hasta aquí.

A la luz de los gráficos y tablas incluidas en este capítulo ya resulta evidente que las variaciones internacionales en este tipo de actitudes existen⁴⁴, pero falta por descubrir si son estadísticamente significativas en todos los casos, si además de esto son lo suficientemente importantes como para ser significativas en términos sociológicos y, por supuesto, determinar los mecanismos que las producen.

Sobre esta última cuestión existen pocos trabajos pero muchas hipótesis. En una búsqueda casi a ciegas se ha tratado de explicar que unos países muestren más apoyo agregado al Estado del Bienestar que otros mediante cuestiones económicas, políticas, históricas e institucionales.

Entre los estudios que utilizan variables económicas encontramos análisis de la relación entre el tamaño del PIB nacional y el nivel de apoyo ciudadano hacia el Estado del Bienestar (Haller

⁴⁴Y no hablamos sólo de que existan diferencias en las actitudes hacia el Estado del Bienestar entre los ciudadanos de países con modelos opuestos como EE.UU. –paradigma del modelo liberal– y Suecia –líder del modelo socialdemócrata. También los ciudadanos de países considerados «hermanos» en términos de bienestar presentan diferencias de opinión en lo que a los programas de bienestar se refiere (Nordlund, 1997)

et al., 1987; Forma, 1999), e intentos de explicar las actitudes ciudadanas hacia el tema en función del grado de industrialización del país (Evans, 1995), y su nivel de desigualdad (Forma, 1999). Pero como ninguno de ellos ha dado resultados concluyentes, la explicación «económica» de la variación internacional en legitimidad de los sistemas de bienestar ha quedado en poco tiempo relegada al olvido. Es preciso mencionar, sin embargo, que el abandono de esta línea de investigación no se ha producido porque la correlación entre macro-variables económicas y actitudes sea inexistente (la escasez de estudios no permite afirmar esto), sino fundamentalmente porque no existen razones teóricas que determinen cómo y porqué deberían producirse las relaciones. No se ha detallado qué conexión existe, por ejemplo, entre el tamaño del PIB de una nación y los mecanismos que modelan las opiniones de los ciudadanos país.

Pasando a las hipótesis políticas, se ha tratado de ver hasta qué punto el apoyo al EB tenía que ver con la organización del sistema político (Haller et alia, 1987), o con la confianza de los ciudadanos en la elite política y las burocracias estatales (Edlund, 1999; Svallfors, 1999; 2000b). Pero hasta la fecha, tampoco se ha encontrado que ninguna de estas cuestiones sea demasiado relevante.

Además de las dos explicaciones anteriores (económicas y políticas) encontramos algunos autores que explican el hecho de que unos EBs logren aunar más partidarios que otros haciendo referencia a la historia:

Bonoli nos hablará de las tradiciones económicas nacionales como origen de las actitudes (2000), Lin (2005) se retrotrae hasta la organización social en la época medieval, y Giddens (2000) sugiere que la alta legitimidad del EB en el norte de Europa se debe a que los nórdicos son gente «históricamente igualitaria». Como dijimos al principio, muchas hipótesis y muy pocos datos que las confirmen.

Finalmente, el intento más reciente de explicar las variaciones internacionales en legitimidad del Estado del Bienestar rompe con las líneas de trabajo anteriores para apuntar que no es necesario buscar variables explicativas fuera de los sistemas de bienestar porque es en ellos mismos, en sus características, donde vamos a encontrar la razón de que unos sean más queridos que otros por los ciudadanos.

La idea central de estos estudios proviene de las teorías neo-institucionalistas que afirman que las instituciones no sólo responden a las preferencias ciudadanas, sino que a su vez alteran estas preferencias. Si las opiniones de los individuos determinan en cierta medida cómo se va modelando una institución y los cambios que en la misma se introducen, lo contrario también es cierto: las instituciones modelan las opiniones de la población y generan cambios en la forma en que son percibidas por los ciudadanos. El corolario de esta afirmación es de gran importancia para nuestro estudio porque, si las instituciones afectan a las opiniones sobre los ciudadanos, las distintas formas de organizar una institución deberían tener distintos efectos sobre las mismas (Svallfors, 1995).

Llevando esto al campo que nos interesa, es de sobra conocido que existen enormes diferencias entre unos y otros Estados del Bienestar en la cantidad, extensión e intensidad de sus programas, en los criterios que se aplican para financiar y distribuir los servicios y prestaciones, y también en el porcentaje de población que se beneficia de ellos. Algunos autores van a buscar en esta variación la explicación de que en unos países el sistema logre más apoyo que en

otros⁴⁵, pero los intentos de encontrar correlaciones entre las características de los Estados del Bienestar de cada nación y su nivel de legitimidad chocan con un problema metodológico fundamental:

Existen muchos países donde se han implantado programas de bienestar, estos programas difieren entre sí en un sinnúmero de variables, y no existen razones teóricas que nos indiquen qué países elegir, ni qué características de los sistemas de bienestar pueden tener efecto sobre las actitudes de los ciudadanos.

Para solventar este problema se han utilizado dos vías:

- a) Analizar la relación entre una característica concreta del Estado del Bienestar y la legitimidad del mismo en una muestra muy amplia de países (Peillón, 1996; Forma, 1999; Gelissen, 2000).
- b) Utilizar el «tipo de Estado del Bienestar» como resumen de las características de un sistema de bienestar, y estudiar si países encuadrados dentro del mismo tipo presentan también niveles de legitimidad similares (Gundelach, 1994; Clive & Papadakis, 1998; Svallfors, 2000; Bonoli, 2000; Andre, & Heien, 2001).

Hasta ahora, ninguna de las dos vías ha logrado generar resultados concluyentes. Forma (1999) encuentra que el tamaño del Estado del Bienestar es importante para determinar las actitudes de los ciudadanos y que los sistemas más extensos son los que más partidarios consiguen, pero Peillón (1996) y Gelissen (2000) no encuentran esta relación.

En cuanto a la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y la legitimidad encontramos autores que afirman su existencia (Gundelach, 1994; Gevers et.al., 2000; Andreß & Heien, 2001), autores que la niegan (Clive & Papadakis, 1998; Bonoli, 2000) y quien dice que la relación se cumple, pero con desviaciones importantes (Svallfors, 2000).

En resumen, ni hay acuerdo entre los académicos, ni tampoco se ha desarrollado un marco teórico consistente que, más allá de inspirarse en el neo-institucionalismo, detalle las relaciones que deberíamos encontrar entre cada una de las maneras que existen de organizar los sistemas de bienestar y su nivel de legitimidad. Pero por eso mismo nos parece interesante emprender un estudio en esta línea y, como hemos comentado en la introducción, el presente trabajo trata de explicar las variaciones internacionales en legitimidad del Estado del Bienestar en razón a las diferencias que existen entre países en la forma de organizar el sistema de bienestar.

Para tener una «variable-resumen» de las características de los distintos sistemas de bienestar vamos a utilizar la tipología elaborada por Esping-Andersen en 1990. Como indicadores de las actitudes ciudadanas hacia el Estado del Bienestar usaremos varias preguntas sobre el tema procedentes de la encuesta «The Role of Government III» (ISSP, 1996).

⁴⁵ En el capítulo 3, dedicado a las hipótesis de trabajo, comentaremos con más detalle cómo pueden combinarse las tesis neo-institucionalistas con lo que sabemos sobre las actitudes hacia el EB, y cómo podemos construir con ambas cuestiones una explicación teórica de la variación internacional en legitimidad de los EBs.

En el capítulo 3 elaboraremos un marco teórico sobre la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad, y en él incluiremos, lógicamente, el hipotético nexo de unión entre ambos fenómenos. En el capítulo 4 expondremos las características de esta encuesta, justificaremos la elección de países a comparar y detallaremos todo el resto de cuestiones metodológicas. Los capítulos 5 a 10 corresponden enteramente al análisis.

Pero antes de nada es necesario dedicar unas páginas a lo que va a ser nuestra principal variable explicativa de las variaciones internacionales en legitimidad: el tipo de Estado del Bienestar. En el capítulo siguiente veremos qué significan las tipologías de bienestar, qué tipologías se han desarrollado hasta la fecha, y por qué está justificado utilizarlas como forma de resumir las características de los Estados del Bienestar a lo largo de Occidente.

Capítulo 2. Tipologías de Estados del Bienestar

- 2.1. ¿Qué es una tipología de Estados del Bienestar?
- 2.2. Un resumen del «negocio de los modelos».
- 2.3. Utilidad de las tipologías.

2.1. ¿Qué es una tipología de Estados del Bienestar?

*Hay otros mundos
pero están en éste*

PAUL ÉLUARD

A primera vista, una tipología de Estados del Bienestar no es más que una clasificación de sistemas de bienestar, clasificación que no conlleva un estudio exhaustivo de todos los aspectos de los mismos sino sólo (o sobre todo) de algunas de sus características. Tendremos así quienes establecen su tipología de Estados del Bienestar basándose fundamentalmente en el nivel de gasto público; quienes se centran en el nivel de cobertura (más o menos universal); quienes analizan la forma en la que los servicios y prestaciones se financian (mediante impuestos generales, contribuciones, tasas), etc.

Sin embargo, a nivel teórico, estas tipologías no son un instrumento neutro de análisis. De la misma forma que utilizar una encuesta para medir actitudes políticas implica asumir el presupuesto de que estas actitudes existen, son individuales, y a ese nivel individual pueden ser medidas, utilizar (o crear) una tipología de bienestar supone incluirse en una de las tres posibles perspectivas con las que emprender un estudio comparado en esta materia. Vamos a explicarlas, muy brevemente, para hacernos una idea del lugar que ocupan las tipologías en el debate más amplio del estudio comparado de las políticas sociales.

La primera vía o perspectiva para estudiar de forma comparada la política social entiende el Estado del Bienestar como un conjunto de instituciones que pueden definirse en referencia a un modelo ideal. A la hora de comparar los sistemas de protección social de varios países podemos ver hasta qué punto cada uno de ellos se aproxima a nuestro modelo ideal, ordenándolos en un continuo según cumplan mejor o peor unos requisitos fijados a nivel teórico. Este modo de proceder ha llevado a concepciones tipo «*far-west*» por las que el mundo se divide en Estados del Bienestar «buenos» (los nórdicos) y «malos» (los anglosajones), simplificación que no necesariamente implica una carencia de realismo.

La segunda vía parte de unas premisas diametralmente opuestas. Resalta el hecho de que un Estado del Bienestar es un conjunto formado por muchas instituciones, cada una de las cuales puede organizarse de diversas maneras. Tradiciones culturales, luchas de intereses y requerimientos funcionales de las economías nacionales han llevado a que cada país presente una forma y organización peculiar de sus políticas sociales, por lo que cualquier estudio comparativo de los Estados del Bienestar debe asumir la existencia de multitud de casos únicos que han de estudiarse como entidades aisladas.

La tercera vía para estudiar de forma comparada los Estados del Bienestar difiere de las dos anteriores por cuanto no cree que sea posible ordenar linealmente los Estados del Bienestar nacionales, pero tampoco acepta la idea de un panorama lleno de casos únicos. En un punto intermedio, esta perspectiva afirma que los Estados del Bienestar nacionales pueden agruparse en conjuntos relativamente homogéneos, definiendo así grupos de países con sistemas de bienestar parecidos entre sí y diferentes del resto. De este supuesto parten todos aquellos que han elaborado tipologías de Estados del Bienestar, a las que podemos definir como trabajos empíricos que, fundamentándose en datos objetivos, definen cuáles son los tipos de Estados del Bienestar existentes y agrupan a los países en función de su pertenencia a uno u otro tipo.

La década de los 90 ha sido prolífica en tipologías de Estados del Bienestar y, aunque no han faltado los críticos¹ a este modo de proceder, ni se ha llegado a un acuerdo acerca de cuál es la tipología más correcta (o al menos a qué campo es más aplicable cada una de las existentes) son hoy un instrumento de análisis utilizado en multitud de estudios. Entre las tipologías de bienestar más conocidas de los 90² cabe mencionar las de Esping-Andersen (1990); Leibfried (1992); Ferrera (1993); Castles & Mitchell (1993); Bonoli (1997), y Korpi & Palme (1998).

A continuación elaboraremos una pequeña síntesis de todas ellas con el objeto de hacernos una idea del estado de la cuestión en este área de investigación pero, antes de entrar en materia, es necesario mencionar que, aunque el énfasis en la modelización es una de las características más destacables de los estudios aparecidos en la década de los 90, también podemos encontrar algunas clasificaciones anteriores a esa fecha.

Everyone even remotely familiar with social science discussions of welfare states during the 1990s will know that the publication of Gøsta Esping-Andersen's «The Three Worlds of Welfare Capitalism» in 1990 made the tripolar welfare regime typology very well known and somewhat contested; but the debate about whether welfare states cluster around distinctly different regime types had started long before 1990 in social policy literature. (Abrahamson, 1999, p. 395).

Los primeros autores en establecer una clasificación de EBs fueron Harold & Wilensky en 1958, aunque no hablaban tanto de «grupos» del EBs como de que estos se podían ordenar en un continuo que iría del modelo «residual» al «institucional».

Two conceptions of social welfare seem to be dominant in the United States today: the residual and the institutional. The first holds that social welfare institutions should come into play only when the normal structures of supply, the family and the market, break down. The second, in contrast, sees welfare services as normal, «first line» functions of modern industrial society (Harold & Wilensky, 1958³).

Posterior en el tiempo, pero mucho más cercana a la idea de que los sistemas de bienestar no siguen un continuo sino que se agrupan en «tipos» o «familias», tenemos la clasificación de Richard Titmuss, más importante para nosotros que la anterior porque todas las tipologías de los años 90 se han basado en ella y recogen, como veremos en el siguiente apartado, muchas de sus ideas.

En su libro póstumo «Social Policy» (1974), Titmuss distingue tres modelos de sistemas de bienestar: «Residual», «Achievement-performance», e «Institutional-Redistributive».

¹ Podemos ver algunos de los argumentos contrarios a las tipologías de bienestar existentes en Cousins (1997). Una de las críticas más recurrentes apunta que con semejantes macro-clasificaciones de países se pierde tanto detalle que resultan finalmente inútiles para un análisis riguroso de las políticas sociales. Frente a esta crítica, hay que tener en cuenta que el uso de tipologías como instrumento simplificador de una realidad compleja no es en absoluto novedoso sino que se encuentra en la raíz del método científico, y que si bien es cierto que la elaboración de tipologías implica perder detalle, también lo es que el mapa más inútil es aquel que se construye a escala 1:1.

² Arts & Gelissen (2002) realizan una revisión de las tipologías más recientes elaborando unas tablas-resumen muy útiles para tener una visión de conjunto de todas ellas.

³ Citado en Abrahamson, 1999.

El primero se define de manera similar al modelo «Residual» de Harol & Wilensky, es decir, las dos vías para proveerse de servicios de bienestar son el mercado y la familia, y la provisión pública se otorga a quienes no pueden valerse de las mismas y sólo de manera temporal. El segundo modelo, «Achievement-performance», tiene un enfoque radicalmente distinto del anterior porque, en él, las instituciones públicas tienen un papel central, y no marginal, en la provisión de bienestar. Aunque el acceso a las prestaciones es mucho menos restringido que en el «Residual», el criterio para otorgar los servicios y prestaciones públicas es meritocrático (relacionado con el estatus laboral del individuo) lo que las convierte más en una herramienta funcional que en un instrumento al servicio de la justicia social.

Finalmente, el modelo «Institutional-Redistributive» comparte con el segundo el papel central de las instituciones públicas de bienestar pero, a diferencia de él, otorga acceso a las prestaciones independientemente de la posición del individuo en el mercado de trabajo y tiene como fin último lograr sociedades más integradas, más solidarias y más justas.

Inmediatamente vamos a ver la semejanza de los tres tipos de Esping-Andersen⁴ con estos ya esbozados por Titmuss y, aunque en el siguiente apartado nos centraremos exclusivamente en las clasificaciones de EBs aparecidas en los años 90, es de justicia reconocer que todas ellas son herederas del pensamiento de este sociólogo autodidacta.

2.2. Un resumen del «negocio de los modelos⁵»

La primera tipología de Estados del Bienestar que aparece en los 90, y quizás por ello la más criticada, conocida y utilizada, es la del sueco Gøsta Esping-Andersen (1990). Este autor va a estudiar multitud de datos relativos a los Estados del Bienestar occidentales mediante los que analiza el grado de desmercantilización (*de-commodification*) que logra cada uno los Estados del Bienestar nacionales, es decir, el grado en que el Estado del Bienestar sirve para emancipar a los individuos de su dependencia del mercado.

De-commodification occurs when a service is rendered as a matter of right, and when a person can maintain a livelihood without reliance on the market. The mere presence of social assistance or insurance may not necessarily bring about significant de-commodification if they do not substantially emancipate individuals from market dependence. (Esping-Andersen, 1990, pp. 21-22).

Sobre la base de este poder emancipatorio, Esping-Andersen afirma que los Estados del Bienestar pueden agruparse en 3 categorías o «régimenes de bienestar»:

1. *Régimen Liberal*: el que logra menor desmercantilización, caracterizado por redes de asistencia dirigidas a colectivos de rentas bajas y escasos programas de carácter universal. La «clientela» del Estado del Bienestar está formada por personas de bajos ingresos, habitual-

⁴ La importancia de las ideas de Titmuss en la obra de Esping-Andersen es reconocida por el propio autor (Esping-Andersen, 1994, p. 715).

⁵ El término ligeramente humorístico de «Welfare Modelling Business» para referirse a los estudios que pretenden elaborar tipologías de bienestar lo acuñó Peter Abrahamson (1999).

mente clases trabajadoras que dependen del Estado para su provisión frente al riesgo (países anglosajones)⁶.

2. *Régimen Corporativo* (también llamado Conservador): donde la clase trabajadora y la clase media están integradas en los mismos programas públicos de bienestar -ambos son beneficiarios-, aunque las prestaciones de los programas variarán en función de la clase social y del status del beneficiario (países europeos continentales). Dado que los sistemas de protección social están diseñados para cubrir sólo a la población activa, y que el nivel de las ayudas se vincula a la posición en el mercado de trabajo, no se puede decir que este tipo de Estados del Bienestar logre emancipar al individuo de su dependencia del mercado.
3. *Régimen Socialdemócrata* (también llamado Universal): que integra a todos los estratos sociales dentro de los mismos programas públicos de bienestar y que combina la igualdad de derechos (un universalismo en base) con un segundo nivel de prestaciones ligadas al nivel de cotización. La gran extensión de servicios y prestaciones, y el carácter universal o cuasi-universal de las mismas, convierten a este tipo de Estado del Bienestar en el que logra una mayor desmercantilización, consiguiendo que todos los ciudadanos, independientemente de su relación con el mercado, puedan disfrutar de un nivel de ingresos acorde a sus necesidades (países nórdicos).

Como ya hemos comentado, esta primera tipología de Esping-Andersen despertó una enorme atención y recibió un considerable número de ataques.

Entre las críticas más recurrentes se le acusa (tanto a él como a su tipología) de un cierto «suedocentrismo» que le lleva a sobrevalorar los sistemas de bienestar nórdicos frente al resto, de no haber sido cuidadoso en el análisis de datos (Bambra, 2006 y 2007), y de no conocer en profundidad todos los países incluidos en su estudio.

No vamos a entrar en las dos primeras acusaciones, pero el último reproche sí resulta aquí relevante porque se transforma pronto en una curiosa tendencia «nacionalista» de la que surgen estudios en los que académicos irlandeses acusan a Esping-Andersen de no haber clasificado bien el Estado del Bienestar irlandés, autores italianos rechazan la clasificación de Italia como sistema de bienestar Corporativo, sociólogos australianos niegan la similitud de su sistema de bienestar con el norteamericano y, por ende, su pertenencia al régimen Liberal, etc. Nadie parece estar contento con el lugar que ocupa su país en la tipología de Esping-Andersen pero, siguiendo las leyes de la dialéctica, de este descontento van a surgir la mayoría de las tipologías alternativas de Estados del Bienestar, en un intento de perfeccionar y superar la tipología pionera y, por supuesto, de recolocar «adecuadamente» algunos países.

En cualquier caso, no todas las tipologías de Estados del Bienestar que surgen con posterioridad a esta primera de Esping-Andersen lo hacen con la pretensión de desbancarla. El «suedocentrismo», si es que existe, ha servido al menos para que la otra tipología de bienestar salida de Suecia (nacida de hecho en el mismo instituto de investigación en el que trabajó Esping-Andersen⁷) no pretenda competir con ella sino complementarla, ofreciendo un nuevo enfoque en lugar de una opción excluyente.

⁶ En un reciente estudio Esping-Andersen sugiere que puede ser necesario diferenciar entre países con EBs Liberales «duros» como EE.UU., y países con EBs Liberales «blandos» como Australia, aunque sin que ello implique construir dos categorías separadas para los mismos (Esping-Andersen, 2000).

⁷ Swedish Institute for Social Research (SOFI), Estocolmo.

Quizás por ello sea esta segunda tipología sueca, de Walter Korpi y Joakim Palme, la que ha conseguido mayor aceptación entre la academia. La comentamos brevemente para pasar luego a resumir las otras tipologías alternativas que sí tienen vocación competitiva.

Walter Korpi y Joakim Palme (1998) no van a estudiar todos los programas de bienestar sino tan sólo los programas de seguridad social, y no analizan todos sus aspectos sino fundamentalmente características organizativas tales como el nivel de cobertura; los requisitos de acceso o las tasas de reemplazo de las prestaciones.

A diferencia de la tipología de Esping-Andersen, que estaba basada en multitud de indicadores (datos brutos sobre gasto; datos históricos sobre la gestación de los Estados del Bienestar nacionales; datos sobre cobertura y reemplazo...) la de Korpi & Palme pretende ser una clasificación «organizativa» de los sistemas de bienestar occidentales y, aunque pueda parecer por ello de utilidad más limitada, las restricciones que sus autores se imponen la convierten en un instrumento analítico invaluable. Pensemos que si clasificamos los Estados del Bienestar en función de un gran número de datos o factores, esa clasificación nos va a ser de gran utilidad para describir la realidad, pero de muy poca como variable explicativa ya que, al incluir en la propia tipología numerosas variables independientes la búsqueda de correlaciones se convierte en una mera tautología .

Por el contrario, con una tipología como la de Korpi & Palme, fundamentada exclusivamente en cuestiones organizativas, sí podremos responder a preguntas tales como: ¿Existe una correlación entre el tipo de organización de los sistemas de pensiones y su nivel de gasto? ¿Cuál es el tipo de organización que está asociado con mayores niveles de pobreza en la vejez?

Pasando ya a describir la tipología, estos autores afirman que es posible agrupar los Estados del Bienestar occidentales en cinco tipos o modelos⁸:

1. *Modelo Dirigido*, caracterizado por la existencia de prestaciones de mínimos concedidas según criterios de necesidad (Australia).
2. *Modelo Estatal-corporativo*, donde la cobertura pública abarca a toda la población activa, pero en el que existen programas separados para cada categoría ocupacional con distintas condiciones, niveles contributivos y prestaciones (Francia, Alemania, Italia, Austria, Bélgica).
3. *Modelo de Seguridad básica*, caracterizado por la existencia de prestaciones del mismo nivel para todos los ciudadanos a las que se puede acceder bien tras cumplir un periodo de cotización determinado (Inglaterra, Irlanda, EE.UU.), bien por derecho de ciudadanía (Canadá, Dinamarca, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza).
4. *Modelo de Acompasamiento*, que combina prestaciones universales «flat-rate» (de cuantía fija) financiadas mediante presupuestos generales, con un segundo nivel de prestaciones para la población activa financiadas por contribuciones y relacionadas con el nivel de ingresos de los individuos (Finlandia, Suecia, Noruega).
5. *Modelo Voluntario con apoyo estatal*, en el que el Estado destina dinero público para ayudar a mutualidades y otras asociaciones voluntarias que ofrecen a sus miembros seguros frente al riesgo de pérdida de ingresos por enfermedad, vejez etc.

⁸ Hemos realizado una traducción directa al español del nombre inglés que los autores les asignaron. Estos son: 1. Targeted; 2. Corporatist; 3. Basic Security; 4. Encompassing; 5. Voluntary State Subsidized (Korpi & Palme, 1998).

Los autores señalan que, aunque este quinto modelo fue importante en el pasado, en la actualidad ya no predomina en ningún país, por lo que la clasificación de los sistemas de bienestar tiene cinco categorías si estamos realizando un estudio comparado histórico, y sólo cuatro si trabajamos con los Estados del Bienestar actuales.

En el inicio de este apartado distinguimos, entre las tipologías de bienestar elaboradas con posterioridad a la de Esping-Andersen, las que surgen sin una vocación claramente competitiva de aquellas que nacen con la pretensión de superarla. Pasando ya a comentar estas últimas, lo primero que llama la atención es que son generalmente tipologías de cuatro categorías en las que tres de las mismas resultan similares a las que Esping-Andersen definiera, mientras la cuarta se utiliza para reclasificar algunos países (Arts & Gelissen, 2002).

Por supuesto, no todos los países incluidos en la tipología de Esping-Andersen van a ser reclasificados en las tipologías alternativas. En realidad hay bastante consenso acerca de dónde colocar algunos países (Suecia, Noruega, Francia, Alemania, EE.UU.) y la polémica gira fundamentalmente sobre el lugar que corresponde a los Estados del Bienestar de dos zonas: los países mediterráneos: Italia, España, Portugal y Grecia; y sus antípodas: Australia y Nueva Zelanda.

Comenzando con los países mediterráneos no es sólo uno, sino tres los autores que apuestan por la necesidad de crear una nueva categoría que recoja las peculiaridades de los Estados del Bienestar presentes en Italia, España, Portugal y Grecia; y tres son por tanto las tipologías alternativas a la de Esping-Andersen en las que la gran diferencia estriba en el lugar que ocupan estos países del sur de Europa.

La primera de estas tipologías es la de Stephan Leibfried (1992), quien analizando el efecto de las políticas sociales en la disminución de la pobreza, y ante las diferencias existentes entre unos y otros países, concluye que en Europa existen cuatro tipos de Estados del Bienestar:

1. *Residual* (países anglosajones): Los ciudadanos tienen derecho a recibir ciertas transferencias de ingresos, pero el papel del Estado del Bienestar se reduce a garantizar provisión de último recurso.
2. *Institucional* (Europa continental): Existe el derecho a integrarse y recibir prestaciones de la red de seguridad social. El Estado del Bienestar funciona como proveedor inmediato (al que la mayoría acude en primer lugar) de compensaciones frente al riesgo, y como empleador en último recurso.
3. *Moderno* (países escandinavos): basado en el derecho efectivo al trabajo de todos los ciudadanos, está caracterizados por unos sistemas de provisión pública con grandes componentes universales. El Estado del Bienestar funciona en gran medida como empleador y también como compensador en último recurso.
4. *Rudimentario* (países mediterráneos): Existe el derecho al trabajo y a la provisión pública de bienestar, aunque el Estado del Bienestar es tan sólo una promesa semi-institucionalizada.

Como vemos, en esta primera tipología de Leibfried se agrupa conjuntamente a los países mediterráneos aunque no se habla tanto de que compartan un modelo bien establecido de bienestar como un común subdesarrollo de sus políticas sociales.

Esta idea de la unidad por el subdesarrollo va a ser cuestionada poco más tarde por Giuliano Bonoli, que establece una tipología de Estados del Bienestar indicando que los países del sur de Europa comparten, en materia de políticas de bienestar, algo más que la posición de cola en el tren del progreso social.

Bonoli (1997) elabora su tipología mediante el análisis de dos dimensiones del Estado del Bienestar:

- a) La cantidad de bienestar, medida por el gasto social en porcentaje del PIB.
- b) La posición que ocupa cada sistema de bienestar nacional en una dimensión que el autor denomina «Beveridge versus Bismarck», y que se basa en los principios organizativos de los programas públicos:

Bismarkian social policies are based on social insurance; provide earning-related benefits for employees; entitlement is conditional upon a satisfactory contribution record; and financing is mainly based on employer/employee contributions. In contrast, Beveridgean social policy is characterized by universal provision; entitlement is based on residence and need (or only in residence); benefits are typically flat rate and are financed through general taxation. (Bonoli, 1997, p. 357).

Siguiendo estos dos criterios, el autor agrupa los Estados del Bienestar europeos en cuatro tipos:

1. *Beveridgeano de alto gasto*: que garantiza un alto nivel de prestaciones a toda la población a través de programas universales financiados en su mayoría vía impuestos generales (Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia).
2. *Beveridgeano de bajo gasto*: al igual que en el tipo anterior las prestaciones sociales tienen una cobertura universal y se financian por impuestos generales, pero hay un menor nivel de protección (transferencias y subsidios de menor cuantía) y son más frecuentes los subsidios o prestaciones asignados no universalmente sino en función de la necesidad (Inglaterra, Irlanda).
3. *Bismarckiano de alto gasto*: basado en programas de seguridad social con un altas tasas de reemplazo pero que no cubren a toda la población (Francia, Alemania).
4. *Bismarckiano de bajo gasto*: basado también en programas de seguridad social, pero con menor cobertura y nivel de prestaciones (Grecia, España, Italia, Suiza, Portugal).

El tercero de los autores interesados en los países mediterráneos es Maurizio Ferrera (1993), que analiza cuatro dimensiones de los sistemas de seguridad social (reglas de acceso, requisitos para recibir las prestaciones, regulaciones para financiar los sistemas de protección social y acuerdos organizativos para administrarlos) y también concluye afirmando que los países del sur de Europa constituyen un tipo particular de Estado del Bienestar al que él llama «Sureño» (*Southern*) o «Mediterráneo» (*Mediterranean*).

Como en los dos casos anteriores, la tipología de Ferrera cuenta con cuatro categorías, tres muy similares a las presentes en el modelo de Esping-Andersen (modelo Anglosajón; modelo Bismarckiano y modelo Escandinavo), más una cuarta en la que se incluyen los países del sur de Europa y que estaría caracterizada por: 1) un sistema fragmentario de garantías en el que conviven prestaciones generosas (pensiones) con una desarticulada y frágil red de protección básica; 2) la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía; 3) particularismo en los pagos

de prestaciones en metálico, y 4) una financiación basada en una mezcla de contribuciones y presupuestos nacionales⁹.

Estas características sitúan a los países mediterráneos en un punto medio entre el tipo Corporativo y el Socialdemócrata en términos de Esping-Andersen, o entre los bismarkianos y los beveridgeanos si seguimos a Bonoli. En palabras de Luis Moreno:

La Europa del bienestar meridional puede ser calificada como una «vía media» u opción intermedia entre los regímenes «bismarkianos», de mantenimiento de rentas ocupacionales, y los «beveridgeanos», de cobertura universalística (...). El caso de Italia se ajusta a un modelo «ocupacional mixto» que incorpora las características básicas del régimen contributivo continental, pero con algunos rasgos del régimen universalístico, pero quizás sea el caso de España el que mejor representa dicha posición equidistante entre los procesos de universalización de sus sistemas de salud, educativos y de pensiones, y la permanencia de una seguridad social de carácter contributivo. España es, pues, cabal representante o de la 'vía media' mediterránea. (Moreno, 2001, página. 70).

En opinión de los tres autores anteriores, los sistemas de bienestar del Mediterráneo tienen mucho en común, aunque otro tema es valorar si las similitudes son suficientemente relevantes como para constituir un tipo de Estado del Bienestar independiente de los otros tres.

Para ver la otra propuesta de reclasificación que no tiene que ver con el Mediterráneo nos vamos al otro extremo del mundo, a la Australian National University, desde donde Francis Castles y Deborah Mitchell argumentan la necesidad de revisar la tipología de Esping-Andersen teniendo en cuenta que no todo el mundo anglosajón es similar en materia de políticas de bienestar.

Castles y Mitchell (1993) van a analizar diferentes indicadores (nivel de gasto, proporción de la fuerza de trabajo empleada en el sector público, etc.) y de su análisis concluyen que la tricotomía de Esping-Andersen resulta insuficiente para captar la variabilidad en sistemas de bienestar a lo largo de la OCDE. Estos académicos argumentan que, para reflejar con cierta fidelidad los datos empíricos, es necesario un modelo de cuatro categorías, modelo que una vez elaborado se parece mucho al de Esping-Andersen: cuenta con una categoría para los países nórdicos y otra para la Europa continental, y la diferencia estriba en que Castles y Mitchell separan en dos categorías a los países del «régimen Liberal» creando una nueva a la que bautizan «*Radical*» y en la que se incluyen Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra; y una estrictamente «*Liberal*» donde sólo estaría EE.UU.¹⁰.

Las características que definen a esta nueva categoría «radical» son las siguientes:

- a) Bajo nivel de gasto público en las partidas de bienestar.
- b) Alto porcentaje de prestaciones que se conceden según criterios de necesidad.
- c) Alto nivel de igualitarismo en la cuantía de las prestaciones.
- d) Un sistema fiscal muy progresivo.
- e) Importante papel del Estado como empleador.

⁹ Estudios más detallados del tipo Mediterráneo de EB en: Trifiletti, (1999); Moreno (2002);

¹⁰ En la tipología de Castles y Mitchell Irlanda y Canadá se denominan «casos mixtos», a medio camino entre el mundo Liberal y el mundo Radical.

Las dos primeras características hacen que los países con Estados del Bienestar radical sean ligeramente parecidos a los países con EB liberal; las 3 últimas los separan de aquellos y justifican su alineamiento en una categoría propia.

Aunque sin duda irán apareciendo nuevas tipologías (ya se está hablando de una para los países asiáticos: Aspalter, 2006; Hort, 2007) y tal vez nos hayamos dejado a algún autor en el tintero, creo que el panorama esbozado en este apartado da una idea bastante ajustada del estado de la cuestión y de las polémicas que aun quedan abiertas.

Pero, al margen de su valor descriptivo, quizás lo más llamativo del panorama recién presentado es que, pese a sus muchas diferencias, una serie de ideas se repiten a lo largo de todas estas tipologías otorgándolas un cierto «*air de famille*»; lo que no deja de ser sorprendente porque, como ya hemos visto, para definir grupos de Estados del Bienestar cada autor se basa en análisis empíricos de distintas características: unos clasifican a los países según el efecto de sus políticas sociales, otros según la organización de las mismas, otros según la extensión de todo el aparato estatal y no sólo de su parte social.

Pese a la variedad de metodologías, pese al afilar de cuchillos que se oye cada vez que dos modelizadores entran en liza, y pese a la batalla que se está librando para dejar claro si los Estados del Bienestar mediterráneos son así porque son peculiares o por mero subdesarrollo, todos los modelizadores encuentran similitudes entre los mismos países, y las agrupaciones de Estados del Bienestar que resultan de cada tipología destacan más por su similitud que por sus diferencias: en general siempre acabamos encontrando a los países nórdicos formando parte del mismo grupo, a los países anglosajones en una o dos categorías cercanas, y a Francia y Alemania compartiendo a veces solos, y a veces en compañía, una tercera categoría de Estados del Bienestar llamada Corporativa, Conservadora o Continental.

En el análisis comparado de los Estados del Bienestar hay por tanto dos clases de países: los que siempre aparecen más o menos en la misma posición independientemente de la tipología escogida (a los que podemos llamar «países fácilmente clasificables») y los que cambian de compañeros de viaje según el autor que realice el estudio¹¹. A la hora de seleccionar los casos a incluir en la parte empírica de este trabajo veremos que esta división nos resultará muy útil.

2.3. Utilidad de las tipologías de bienestar

La aplicación de tipologías de bienestar a la investigación empírica en Ciencias Sociales ha sido sin duda fructífera, siendo uno de sus logros más notorios el de alimentar el debate sobre el tema promoviendo vivas discusiones entre la academia y consiguiendo que el Estado del Bienestar vuelva a estar, por así decirlo, «de moda» en la investigación social. Pero, ¿son algo más que un artilugio teórico?

Las clasificaciones de sistemas de bienestar, por su generalidad, por el intento que suponen de resumir la realidad de los programas de bienestar mediante la creación de conceptos omni-

¹¹ Bannink & Hoogenboom (2007) hablan de sistemas de bienestar «híbridos» para referirse a aquellos en los que cada programa sigue una lógica y una forma de organización distinta del resto.

abarcantes, han estado durante unos años expuestas a la crítica de no ser más que artilugios teóricos que «suenan bien» pero sólo sirven para enredar todos los conocimientos existentes sin aportar nada nuevo (Kasza, 2002). Serían, según la definición de Sartori (1994), una forma de «gato-perro»:

Sempronio ha llegado por fin a su disertación, al Ph.D. americano. Se le repitió hasta el cansancio que su tesis debe ser original y que debería girar en torno a una o más hipótesis. Sempronio investiga los gatos; pero ¿cómo se hace para ser original estudiando los gatos? Piensa y piensa y elige el perro-gato; y su hipótesis es que todos los perros-gatos emiten el sonido miau-miau. Su director de tesis dice «interesante», y una fundación contribuye con 100.000 dólares para la investigación. Tres años después Sempronio reaparece, más bien deprimido. La hipótesis, admite, no ha sido confirmada: es verdad que muchos perros-gatos emiten el sonido miau-miau, pero otros muchos no lo hacen. En cualquier caso, dice Sempronio, en el curso de la investigación se me ha ocurrido una hipótesis alternativa: todos los perros-gatos emiten el sonido guau-guau. Pasan otros años, se gastan 100.000 dólares más, y nuevamente la hipótesis es refutada: es verdad que muchos perros-gatos hacen guau-guau; pero otros muchos no lo hacen. Sempronio está desesperado, y su director se siente incómodo, no sabe qué sugerir. Al final le aconseja interpelar al oráculo de Delfos. Sempronio llega a la caverna por la noche, y ese día el oráculo estaba muy cansado de articular respuestas sibilinas. Lo escucha, y movido por la piedad le dice: amigo mío, te diré la verdad sin velos; la simple verdad es que el perro-gato no existe, (Sartori, 1994, pp. 36-37)

Sin embargo, gracias a los estudios empíricos realizados desde los años 90, hemos podido comprobar que las tipologías de bienestar no son un «gato-perro» sino una variable independiente de gran fuerza explicativa para entender los distintos resultados que las políticas sociales consiguen en cada país, y hoy sabemos que cada tipo de Estado del Bienestar correlaciona con determinados niveles de desigualdad de ingresos, tasas de pobreza, porcentaje de población activa femenina, desigualdades de género e incluso con cuestiones tales como el bienestar subjetivo de los ancianos y los desempleados¹². Pongamos algunos ejemplos de estos estudios:

Desigualdades de ingresos y redistribución

Tanto Korpi & Palme (1998) como J. Vogel (1998) muestran que las desigualdades de ingresos son menores en los países con sistemas de bienestar de tipo Socialdemócrata¹³, más amplias en los que pertenecer al tipo Corporativo, y aún mayores en los lugares donde la protección social se organiza siguiendo criterios liberales.

En esta misma línea, Boeri (2002) analiza las raíces de la desigualdad midiendo la distribución de ingresos antes y después de impuestos y transferencias, encontrando que los distintos nive-

¹² Aunque, por supuesto, no podemos esperar que el régimen de bienestar correlacione con todos los fenómenos sociales. Conley & Springer (2001), en un análisis del efecto del gasto público en sanidad sobre la mortalidad infantil en países desarrollados, trataron de ver si existe una relación entre el tipo de Estado del Bienestar y la efectividad del gasto en salud para reducir la mortalidad infantil. Los primeros resultados fueron negativos, esto es, todo aumento del gasto público en sanidad disminuye la mortalidad infantil de forma parecida independientemente del tipo de EB en el que se inserte. Pese a lo cual los autores sugieren que no haber encontrado la relación que buscaban puede tener más que ver con el modelo de Estados del Bienestar utilizado (el de Esping-Andersen) que con la no existencia de la relación: «we adopted Esping-Andersen's three-category approach out of convention; however, recent research has shown that these categories may not be as applicable to the realm of health care provision as they are to income support» (Conley & Springer, 2001, p.800).

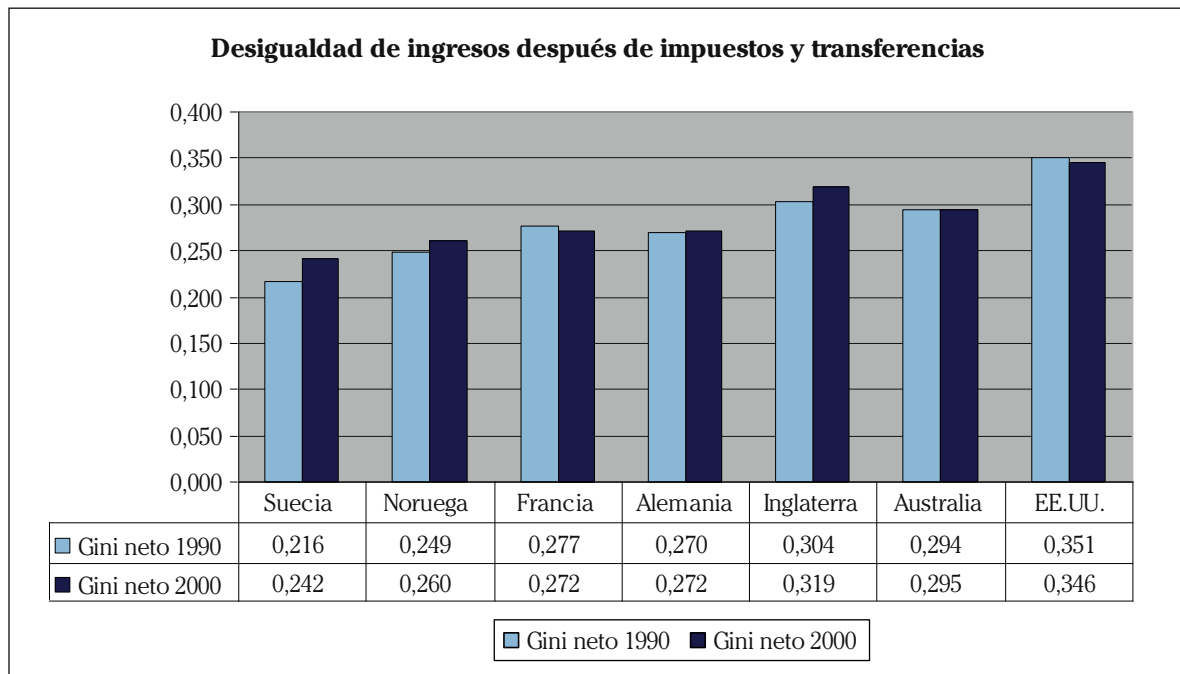
les de desigualdad que existen entre países se deben, en gran medida, al efecto de los programas públicos de servicios y prestaciones. En este sentido, los sistemas Socialdemócratas logran el mayor impacto redistributivo y los Liberales, el menor.

El trabajo de Deding & Schmidt (2002) confirmará esta conclusión, explicando además que el mayor poder redistribuidor de los sistemas Socialdemócratas se debe no tanto a su mayor progresividad como al volumen de las rentas que se recaudan y posteriormente distribuyen. Este resultado es interesante porque las prestaciones contributivas en los países Socialdemócratas se caracterizan por altas tasas de reemplazo aparentando, en palabras de Korpi & Palme, ser poco redistributivas por tener un «efecto Mateo» (el Estado da más al que más tiene). Sin embargo, los resultados confirman que esto es sólo aparental porque el enorme volumen de lo recaudado compensa la menor progresividad. Si bien es cierto que los sistemas Liberales tienen impuestos y prestaciones más progresivas que los Socialdemócratas, debido a la menor cuantía de los recursos que manejan no pueden competir en poder redistribuidor con los nórdicos.

Hemos elaborado el gráfico 2.1. utilizando datos de la OCDE para los años 1990 y 2000, con el fin de ofrecer una imagen de las diferencias a las que estos autores se refieren, y mostrar la persistencia en el tiempo de la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y la desigualdad.

Gráfico 2.1.

Nivel de desigualdad después de impuestos y transferencias en países con distinto tipo de Estado del Bienestar



Fuente: Base de datos online de la OCDE. www.oecd.org. Elaboración propia.

En cuanto al efecto de los programas de bienestar sobre otra estructura de desigualdades, las que se producen en razón del género, también los países Socialdemócratas se destacan del resto por el grado en que logran reducirlas (Korpi, 2000).

¹³ En el modelo de Korpi & Palme el tipo Socialdemócrata se llama «De acompañamiento», pero incluye a los mismos países.

Pobreza

Además del efecto que cada tipo de Estado del Bienestar tiene sobre la amplitud de las desigualdades de ingresos, se han estudiado profusamente sus efectos sobre la pobreza, y todos los autores que han llevado a cabo comparaciones de este tipo concluyen que existe una relación muy fuerte entre la forma de organizar el sistema de bienestar y la medida en la que éste logra disminuir el porcentaje de individuos en situación de pobreza (Korpi & Palme, 1998; Vogel, 1998; Goodin et alia, 1999; Korpi, 2000).

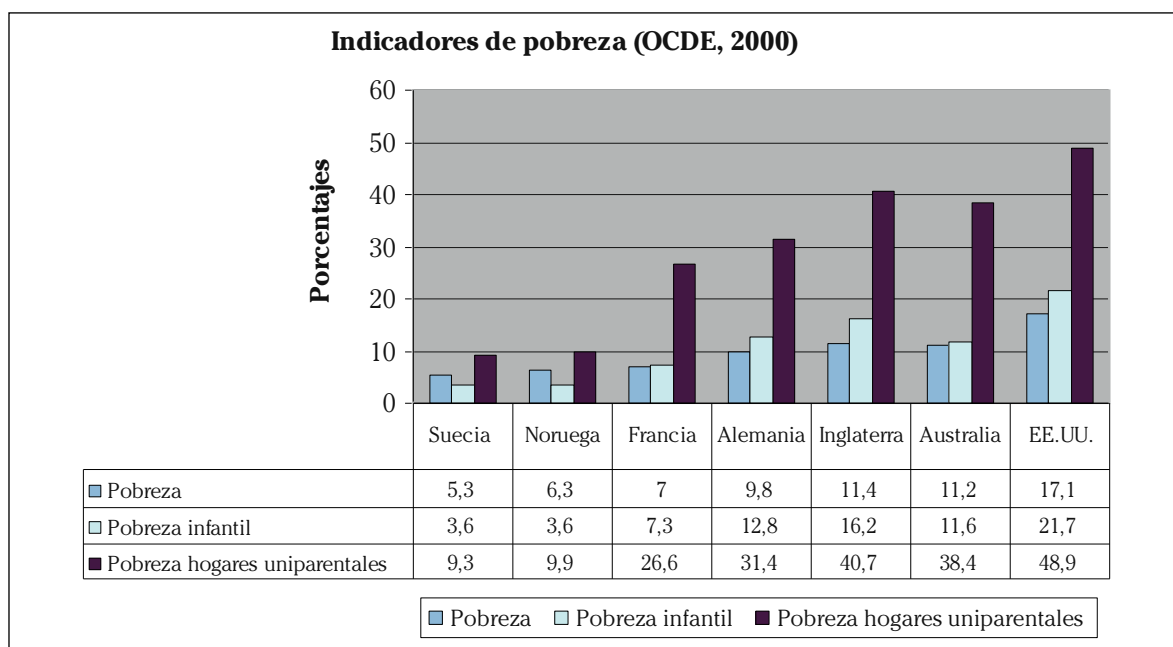
Además, el nivel de pobreza que se da en los Estados del Bienestar Socialdemócratas, en comparación con los Corporativos y Liberales, es menor no sólo a nivel general sino también entre los colectivos que tienen mayor riesgo de caer en esta situación: ancianos, jóvenes y familias monoparentales. El gráfico 2.2, elaborado con datos de la OCDE para el año 2000, ofrece ejemplos de estas diferencias.

La explicación de esta pauta nos la traen los estudios que analizan el porcentaje de personas que caen en la pobreza cuando pasan por alguna de las situaciones consideradas «de riesgo»: el desempleo, pasar de dos adultos a uno en la familia (por viudedad o separación), la discapacidad (McKernan & Ratcliffe, 2005), o el nacimiento de un hijo (Aassve, Mazzuco y Mencarini, 2005).

Comenzando por la primera de estas situaciones, Sarasa (2001) realiza un estudio comparado concluyendo que la relación entre desempleo y pobreza está mediada por dos instituciones: la familia y el Estado del Bienestar. La familia funciona como colchón frente a la pobreza sobre todo en los países mediterráneos, y sólo así se explica que pese a las elevadas tasas de desempleo entre los jóvenes durante los años 90, la pobreza en este colectivo no llegara a niveles alarmantes. En cuanto al Estado del Bienestar, el de los países nórdicos es el que en mayor medida rompe la relación entre paro y desempleo, tanto por las prestaciones económicas, como por el esfuerzo que se hace en políticas activas de empleo.

Gráfico 2.2.

Datos sobre niveles de pobreza en países con distinto tipo de Estado del Bienestar.



Fuente: base de datos online de la OCDE. www.oecd.org. Elaboración propia.

Entrando en los efectos de los cambios en la composición de la familia, Aassve, Mazzucco y Mencarini (2005) demuestran que la probabilidad de que las familias caigan en la pobreza por los costes derivados de tener un hijo disminuyen correlativamente al tipo de EB: son altas en los países con sistemas de bienestar Liberales, moderadas en los Corporativos, y muy bajas en los países con sistemas Socialdemócratas, reflejando la generosidad que en cada modelo tienen las prestaciones y servicios a las familias (duración de las bajas pagadas por maternidad/paternidad, transferencias extra en dinero, guarderías públicas, etc.).

Vivir en riesgo

La preocupación por los colectivos en situación de inseguridad o dependencia económica no se restringe exclusivamente a las dificultades que pueden tener para proveerse de recursos materiales sino, también, a los efectos subjetivos que estas situaciones producen.

A este respecto, si el efecto económico de quedar desempleado no es el mismo en distintos tipos de Estados del Bienestar, tampoco parece que el efecto subjetivo sea similar.

Lapinsky *et al.* (1998) utilizan una encuesta comparada realizada a individuos sin empleo, hallando que los desempleados de los países con Estados del Bienestar Socialdemócrata están más «satisfechos con su vida» que sus homónimos de los regímenes de bienestar Liberal y Corporativo. Este resultado está, muy posiblemente, directamente vinculado a la cuantía de las prestaciones por desempleo y a las medidas de inserción existentes en cada sistema de bienestar, pero no por ello deja de ser interesante mencionarlo.

En esta misma línea, Ogg (2005) va a comparar a los mayores de 65 años en cada uno de los tipos de Estados del Bienestar a través de una encuesta en la que se les pregunta por su salud, la frecuencia con la que se relacionan con familiares o amigos, las actividades sociales que realizan y la sensación de seguridad o inseguridad con la que viven.

El autor concluye que la sensación de seguridad correlaciona con el tipo de Estado del Bienestar de forma lineal (mayor en los Socialdemócratas, menor en los Liberales, con los países Corporativos en el medio) y, lo que resulta quizás más llamativo, que el aislamiento social de los mayores de 65 sigue la misma pauta, pero en este caso los países Mediterráneos destacan mucho del resto por ser aquellos donde los niveles de aislamiento son más altos.

Este resultado contradice la extendida idea de que el efecto de la familia sustituye al del Estado en los países del sur de Europa, reflejando, por un lado, que los ciudadanos del resto de Europa también tienen familia y por otro que, incluso aunque las redes familiares sirvan de colchón en algunos países del sur, su efecto no llega a ser tan positivo como la combinación de Estado y familia que se produce en los sistemas Socialdemócratas. No es que la familia no disminuya el aislamiento social, es que cuando el efecto del Estado se suma al de la familia, los resultados son mejores.

Todos los datos presentados, y muchos otros que no vamos a detallar, son lo suficientemente relevantes como para que, pese a llevar vigentes apenas 15 años (muchas de ellas menos), las tipologías de Estados del Bienestar hayan pasado a utilizarse como posible variable

explicativa en cientos de estudios empíricos tanto económicos como sociológicos. De esta extensa literatura podemos extraer las siguientes conclusiones generales:

Primera, que el Estado del Bienestar moldea muchas de las pautas económicas y sociales que definen una sociedad mediante su efecto en una variedad de fenómenos que van desde disminuir los niveles de pobreza hasta modificar las tasas de natalidad.

Segunda, que los efectos del Estado del Bienestar no son sólo visibles a nivel macro sino también a nivel micro, afectando la forma en que los ciudadanos viven su día a día y, muy especialmente, la manera más o menos penosa en la que se enfrentan a periodos de carencias e incertidumbre económica (Goodin *et al.*, 1999; Lapinsky *et al.*, 1998).

Tercera, que muchos de los efectos que el EB tiene sobre la sociedad difieren según el tipo del que estemos hablando. No producen el mismo efecto las políticas de bienestar organizadas de forma universal que aquellas dirigidas exclusivamente a los colectivos de rentas bajas y, en general, los resultados que logra cada uno de los tres tipos de Estado del Bienestar definidos por Esping-Andersen son distintos en multitud de aspectos.

Hasta ahora nos hemos referido principalmente a la existencia de una correlación entre el tipo de Estado del Bienestar y fenómenos socio-económicos objetivos como son los niveles de pobreza, o a efectos subjetivos directamente relacionados con el hecho de encontrarse en una situación de riesgo y, sin embargo, su utilidad puede ir más lejos.

Algunos de los estudios más interesantes que se están llevando a cabo actualmente sobre este tema han girado unos grados el objetivo para ver hasta qué punto el tipo de Estado del Bienestar correlaciona con fenómenos de corte subjetivo más general. Una de las líneas de investigación más atractivas es la emprendida por los renombrados sociólogos Bo Rothstein y Dietlind Stolle (2002), quienes afirman que el tipo de Estado del Bienestar está relacionado con el nivel de «confianza interpersonal» («generalized trust»¹⁴) de una sociedad. Con este concepto los autores se refieren al nivel de confianza en los extraños que tienen los ciudadanos de un país: hasta qué punto se fían de la buena fe del prójimo desconocido, de su capacidad de cooperar para lograr objetivos comunes, etc. Rothstein y Stolle elaboran una teoría causal que explica los niveles de confianza interpersonal en parte como un efecto de la forma en la que las instituciones funcionan y se organizan¹⁵.

Posteriormente, en un estudio con una sólida base empírica, E. Luque (2003) confirmó la teoría de Rothstein & Stolle concluyendo que existe una relación entre el tipo de Estado del Bienestar y los niveles de confianza: los países con Estados del Bienestar Socialdemócrata son los que presentan mayores niveles de confianza entre sus ciudadanos, los países con EBs Liberales muestran los menores niveles y los países Corporativos se encuentran en una posición intermedia. El autor explica este hecho por los resultados objetivos de cada modelo de bienestar: el modelo Socialdemócrata consigue bajos índices de pobreza y marginalidad, gran

¹⁴ «Generalized trust indicates the potential readiness of citizens to cooperate with each other and the abstract preparedness to engage in civic endeavors with each others. Attitudes of generalized trust extend beyond the boundaries of face-to-face interaction and incorporate people who are not personally known.» (Rothstein & Stolle, 2002, p. 2).

¹⁵ Rothstein & Stolle, 2002.

seguridad de rentas y bajo desempleo. Es decir, consigue sociedades más seguras en las que los individuos tienen, de hecho, menos que temer de su prójimo. El Estado del Bienestar Liberal, con sus bolsas de pobreza y mayor desigualdad genera un tipo de sociedad menos segura y más polarizada, lo que se traslada en que sus ciudadanos sientan mayor desconfianza hacia cualquiera que no forme parte de su entorno más cercano.

Manteniendo este mismo enfoque subjetivista, otros autores han tratado de relacionar las tipologías de Estados del Bienestar con las actitudes políticas de los ciudadanos: con las actitudes hacia la desigualdad (Svallfors, 1993), hacia la evasión fiscal (Edlund, 1999), hacia el trabajo (Hult & Svallfors, 2002; Esser, 2005) y, sobre todo, con las actitudes hacia el propio Estado del Bienestar.

Dentro de que la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y las cuestiones subjetivas constituye un campo de estudio minoritario, los trabajos que más proliferan son aquellos que se centran en la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y las actitudes que los ciudadanos manifiestan hacia el mismo, probablemente porque esta línea de investigación es la que presenta implicaciones políticas más claras: el Estado del Bienestar necesita de diversos factores para funcionar pero, como institución democrática que es, necesita ante todo de legitimidad social, y analizar qué tipo de Estado del Bienestar correlaciona con mayores niveles de apoyo ciudadano (legitimidad) es sin duda interesante para cualquier opción política preocupada por la supervivencia de las políticas sociales.

Pese a lo prometedor de este campo de estudio, lamentablemente no podemos decir que se haya llegado a conclusiones definitivas. Nos encontramos en un punto de escaso consenso entre los académicos del tema y, a cambio, abundancia de preguntas en busca de respuesta: ¿Está relacionado el tipo de organización de los programas de bienestar con su nivel de legitimidad? ¿Hay tipos de Estados de Bienestar que consiguen mayor legitimidad que otros? Y si es así, ¿cuáles son los mecanismos que sirven para explicar que un EB logre más apoyo ciudadano que otro?

Responder a estas preguntas es el objetivo del presente trabajo.

Capítulo 3. Hipótesis.

3.1. Hipótesis teóricas.

- 3.1.1. Tres conclusiones sobre las actitudes hacia las políticas sociales.
- 3.1.2. El efecto de las instituciones sobre las actitudes.
- 3.1.3. El efecto de cada tipo de Estado del Bienestar sobre las actitudes.

3.2. Hipótesis operativas.

3.3. Características de los programas y legitimidad.

3.1. Hipótesis teóricas

La pregunta que sirve de comienzo y eje a este estudio es: ¿por qué en unos países hay más apoyo a los programas de bienestar que en otros?

Para intentar responder a esta cuestión vamos a elaborar, primero, una serie de hipótesis teóricas. Después transformaremos las hipótesis teóricas en hipótesis operativas, es decir, aquellas que pueden ser verificadas o rechazadas de manera empírica. En los capítulos 5 a 10 nos dedicaremos a contrastar con los datos, una por una, las hipótesis que aquí vamos a detallar.

Si algo de este capítulo puede resultar llamativo es cómo, para responder a una pregunta tan general (y aparentemente sencilla), necesitamos construir no una, sino varias hipótesis teóricas enlazadas que articulan conocimientos provenientes de tres áreas de estudio y que, cuando las queremos convertir en hipótesis operativas, se multiplican exponencialmente.

Dos de las áreas de estudio en cuyas conclusiones nos basaremos son, como era de prever, el estudio de las actitudes hacia las políticas sociales y el estudio de comparado de los Estados del Bienestar. La tercera es la perspectiva Neo-Institucional, que nos aportará el nexo de unión entre los dos temas anteriores. Seguidamente veremos cómo se pueden vincular estas tres áreas en lo que, espero, resulte un marco teórico consistente.

3.1.1. Tres conclusiones sobre actitudes hacia las políticas sociales

La literatura sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar nos ha provisto de un enorme volumen de información y, como no podría ser de otra manera, las hipótesis que hemos desarrollado acerca de la relación entre el tipo de EB y su legitimidad se basan en estos conocimientos previos.

De entre todo lo que vimos en el capítulo 1 acerca de cómo se generan y cambian las opiniones hacia las políticas sociales, tres conclusiones son especialmente importantes para definir nuestras hipótesis:

1. *Dos factores micro: el interés y la ideología.*

Para entender por qué unos individuos son más favorables que otros a la intervención pública en temas de bienestar hemos de fijarnos tanto en el interés material (económico) que cada persona tiene en la existencia de políticas sociales como en los valores, más o menos igualitarios, que sustenta. En los estudios empíricos la primera cuestión suele operacionalizarse utilizando los ingresos del individuo como medida de su interés, entendiendo que cuantos más ingresos tenga una persona menor será su interés en que existan programas de bienestar. Para obtener un indicador de los valores igualitarios se utilizan las opiniones del individuo sobre aspectos centrales del discurso económico tales como la deseabilidad de la redistribución económica o las causas de la pobreza. La opinión acerca de estos temas es, en la gran mayoría de los casos, parte de un discurso político-económico coherente y, por ello, no necesitamos una enorme batería de preguntas sino tan sólo una o dos que funcionen como indicadores de este discurso para ordenar a los individuos según su grado de igualitarismo.

2. Existen determinantes generales de las actitudes hacia el Estado del Bienestar

En todos los países occidentales estudiados, el interés económico y los valores igualitarios son los factores que en mayor medida explican que distintas personas tengan distintas apreciaciones sobre las políticas sociales: si estas son necesarias o beneficiosas, si el Gobierno gasta mucho o poco en ellas, si se debería gastar más, etc. Estos dos factores pueden considerarse determinantes generales de las actitudes que aquí nos interesan.

3. Variación internacional en el nivel de apoyo al EB

La tercera gran conclusión de cualquier revisión de la literatura internacional es que, pese a la relativa homogeneidad de factores determinantes¹, los porcentajes de ciudadanos que son favorables a las políticas de bienestar varían entre países.

Estas tres conclusiones implican que, si bien para el estudio de las actitudes hacia el EB en un solo país puede resultar suficiente tener en cuenta la posición económica y los valores de cada persona, en un estudio internacional es preciso incluir como variable la nacionalidad de los individuos. Esto puede parecer muy obvio, pero los países occidentales que estudiamos comparten hoy toda una serie de patrones económicos, culturales y actitudinales que consiguen difuminar en muchos casos las diferencias entre ellos (Inglehart, 1991; Gijsbert & Ganzeboom, 2001).

Me voy a permitir, por una sola vez, explicarlo en términos más lúdicos. Imaginemos que metemos a todos los ciudadanos de los países occidentales en un inmenso bombo y, tras voltearlo adecuadamente, sacamos a uno, uno sólo, para predecir su opinión sobre la intervención del Estado en temas de pensiones de vejez. Lo único que sabemos es que la mayoría de los ciudadanos occidentales es favorable a la intervención pública en este terreno, así que nuestra predicción debería ser que ese Juan Nadie será favorable a la existencia de programas públicos de pensiones. Nuestra posibilidad de error es bastante grande, pero lograríamos disminuirla si las reglas del concurso de adivinanzas sociológicas nos permitieran hacer tres preguntas a nuestro conejillo de indias antes de emitir la predicción sobre sus actitudes hacia las pensiones. Teniendo en cuenta lo que sabemos gracias a la literatura sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar, las dos primeras preguntas que debemos hacer están muy claras. En primer lugar deberíamos preguntarle por sus ingresos, ocupación, o cualquier otro dato que nos indique su posición económica. Seguidamente tendríamos que preguntar algo que nos indique si sus opiniones respecto a temas económicos están más cerca del igualitarismo o del individualismo. La ideología, el partido al que suele votar, su opinión sobre las causas de la pobreza o de las desigualdades sociales podrían servir.

Con estas dos primeras preguntas estamos tratando de situar al individuo en los dos grandes factores que afectan de forma importante las percepciones sobre el Estado del Bienestar, y nos queda una más. Si seguimos basándonos en lo que la academia nos dice, la tercera pregunta debería inquirir sobre su nacionalidad, ya que sabemos que los ciudadanos de unos países

¹ A lo largo de todo el trabajo utilizamos el término «determinante» en su sentido estadístico, es decir, referido a una variable o conjunto de variables independientes que afectan a otra variable dependiente y que, por tanto, pueden servir como explicación parcial de la misma. No nos referimos en ningún caso al sentido literal del término «determinar», que indicaría la inevitabilidad de que al darse A se produzca también B.

son, de media, mucho más favorables a la intervención pública en temas de bienestar que los de otros. Con estos tres datos, nuestra posibilidad de error al predecir su opinión sobre la existencia de pensiones públicas disminuye sustancialmente y fácilmente ganaremos el premio al mejor sociólogo del año.

La explicación de que las personas con más ingresos sean menos favorables al Estado del Bienestar que aquellas con menos ingresos, y que los ciudadanos que sustentan valores igualitarios en lo económico sean más favorables que quienes se decantan por el individualismo es clara, se ha trabajado mucho sobre ella, y la hemos detallado en el capítulo 1. Sin embargo, explicar porqué los nacionales de un país son más partidarios de que existan programas de bienestar que sus vecinos del país de al lado resulta problemático y ya comentamos que entre los académicos hay poco o ningún acuerdo al respecto.

Se ha tratado de entender estas diferencias mediante cuestiones relacionadas con la calidad de vida de la clase media y media alta (cuanto mejor vivan, más rechazarán mantener el sistema de bienestar. Wilensky, 1975), con la riqueza económica del país (Haller, M., Moshammer, G., & Raubal, O. 1987) o su grado de industrialización (Evans, 1995). Entrando en los determinantes macro-políticos, se estudió si el apoyo al EB correlaciona con la forma del sistema político (Haller et al., 1987), o si depende de la confianza que los ciudadanos tengan en sus gobernantes y, por tanto, las variaciones internacionales en apoyo al EB se explican por las diferencias entre países en la extensión de esta confianza. (Edlund, 1999; Svallfors, 1999; 2000b).

Otras aproximaciones han argumentado que el apoyo al Estado del Bienestar varía entre países debido a que estos tienen distintas tradiciones político-económicas (Bonoli, 2000); distinto desarrollo histórico de la organización estatal (Lin, 2005), o valores históricamente igualitarios (Giddens, 2000).

Como dijimos en el capítulo 1, los intentos anteriores arrojan resultados poco convincentes, y quizás el enfoque más prometedor haya sido el intento de explicar las variaciones internacionales en actitudes hacia el EB mediante las características institucionales de cada sistema de bienestar (Gundelach, 1994; Clive & Papadakis, 1998; Gevers et.al, 2000; Bonoli, 2000; Svallfors, 2000; AndreB & Heien, 2001). En esta línea hay pocos estudios y los resultados no siempre coinciden, pero ante el fracaso de todas las anteriores teorías explicativas sobre las variaciones internacionales en legitimidad, merece la pena proseguir esta vía aunque sólo sea para descartar la idea.

Inmediatamente veremos las explicaciones que se han sugerido acerca de porqué la forma de organizar los sistemas de bienestar debería trasladarse a la legitimidad popular del sistema, sin embargo, la falta de estudios extensos sobre el tema implica que no tenemos un marco teórico explicativo de la relación pre-construido y listo para usar, sino sugerencias que hemos de combinar para construir, aquí mismo, una teoría más o menos consistente.

3.1.2. El efecto de las instituciones sobre las actitudes

Los intentos de explicar las variaciones internacionales en la legitimidad de los programas de bienestar a través de la configuración organizativa de los propios programas están inspirados en una forma de análisis que ha venido a denominarse «Neo-Institucionalismo». Aunque se considera al economista D. North (1990) como uno de los padres del enfoque, su aplicación

va más allá de la economía y, especialmente en los últimos años, podemos encontrar estudios que la aplican a todas las disciplinas de las Ciencias Sociales (ver Scott, 1994).

No vamos a detenernos aquí para explicar profusamente este enfoque. Como los trabajos mencionados antes, el nuestro sólo se «inspira» en el Neo-Institucionalismo para trasladar algunos conceptos al ámbito de las actitudes, primero, y al de los tipos de Estados del Bienestar, después. Pero intentaremos explicar porqué tiene sentido traer aquí esta perspectiva.

Dos ideas de los neo-institucionalistas son especialmente interesantes para nuestro trabajo. La primera es que las instituciones tienen otros efectos al margen de aquellos para los que fueron creadas, efectos no esperados o no previstos «unintended effects»- (Pierson, 2000a).

La segunda es que organizaciones e instituciones, una vez establecidas, son resistentes al cambio porque ellas mismas generan toda una serie de dinámicas que dificultan su reforma. Se habla así de que las instituciones presentan procesos de «path-dependency», es decir, son dependientes de su propia trayectoria y tienden a mantenerse fieles a la misma. North pone como ejemplo el desarrollo tecnológico para explicar el proceso.

The development of technology illuminates the path-dependent character of the way in which technologies change. Once technology develops along a particular path, given increasing returns, alternative paths and alternative technologies may be shunted aside and ignored, hence development may be entirely led down a particular path. The results are not always optimal downstream, as Arthur (1989) and David (1985) have demonstrated (North, 1990, p. 76).

Podemos valorar los efectos de esta «path-dependency» como positivos, si consideramos que una organización no debería cambiar, o como perjudiciales si creemos que sería mejor reformarla. Como ejemplo de lo primero tenemos a King (1987), que describe las dinámicas sociales generadas por la sanidad pública inglesa (NHS) explicando gracias a ellas su «supervivencia» durante los 18 años del Gobierno Conservador y, sobre todo, el hecho de que pese a todas las propuestas de reforma la NHS llegara a 1996 (primera victoria Laborista desde 1979) con las mismas características que tenía en 1979: cobertura universal, integración de las rentas medias y altas en el sistema², financiación total vía presupuestos nacionales, y sin haber visto reducido el porcentaje de gasto que se le destina³.

En este caso King, como defensor de la NHS, habla de que la institución «tiende a sobrevivir». Sin embargo, cuando a un autor le parece conveniente implementar reformas, la tendencia a mantenerse igual deja de verse con buenos ojos y pasa a llamarse «tendencia al inmovilismo» (Esping-Andersen, 1994).

² Durante los 18 años de Gobierno Conservador algunas de las especialidades sanitarias dejaron de formar parte del sistema público (fundamentalmente los dentistas y oculistas), y se implantaron ventajas fiscales para la contratación de seguros privados de salud. En estos años el porcentaje de seguros privados de salud aumentó pero, como indican Burchardt & Propper, no disminuyó ni el uso de la NHS ni su apoyo. Lo que se produce hoy día en Inglaterra es que algunos colectivos tienen seguros de salud privados, pero usan tanto los servicios que estos prestan como los que ofrece la NHS. Sorprendentemente no hay relación entre tener un seguro privado de salud y el número de veces que la persona utilizó algún servicio de la NHS. Además, el trasvase de gente que pasa de usar la sanidad privada a utilizar la sanidad pública es mayor que el que se produce en la dirección opuesta. Por lo que parece, se «huye» más de lo privado a la público, que de lo público a lo privado. Burchardt, Tania & Propper, Carol (1999).

³ El gasto en sanidad pasó del 4.89% del PIB en 1980, al 5.73% en 1995. OCDE (1998): *Social Expenditure Database 1980-1996*.

Bueno o malo su efecto, lo cierto es que la tendencia se produce. Todas las instituciones tienden a mantenerse aunque, y esto es bastante importante, no todas lo logran en la misma medida porque, pese a que siempre se generan dinámicas dirigidas a la supervivencia, no todas funcionan igual de bien.

De entre los procesos mediante los que una institución logra su permanencia podemos señalar los siguientes por ser los que en mayor medida se han destacado en los trabajos previos:

El paso del tiempo

Con el paso del tiempo los principios de la institución van permeando la cultura política del país y van siendo aceptados por la población como hechos incuestionables (King, 1987). La institución se percibe como la mejor forma de abordar un problema porque está tan imbricada en el contexto que la gente no se plantea si podría organizarse de otra manera, o si lo que la institución define como «problema» lo es realmente.

Olli Kangas y Pauli Forma (1999) estudian las actitudes hacia los programas de bienestar en Australia, Finlandia y Polonia, y nos aportan un dato que viene a sustentar esta idea: en cada uno de estos países la gente tiende a preferir la organización de los programas de bienestar que tienen en lugar de otras posibilidades, dándose así lo que ellos llaman «nacionalismo institucional». (Aunque señalan que esta tendencia no se verifica para todos los programas). En esta misma línea, algunos autores (Svallfors, 2000; Andreß & Heien, 2001) han sugerido que con el paso del tiempo los programas universales extenderían valores igualitaristas entre la población, mientras los programas dirigidos exclusivamente a los pobres extenderían valores individualistas, lo que en ambos casos afianza la forma de organización existente. Svallfors define mediante qué vías se produciría el efecto de las instituciones de bienestar sobre los valores morales de los ciudadanos:

(Institutions) a) affect the visibility of social phenomena, b) affect what is considered politically possible to achieve in a given setting and c) embody, and hence create, norms about what is fair and just. Institutions provide 'normalcy', that is, they suggest to people what is 'the normal state of affairs' and what is deviant or even impermissible (Svallfors, 2000a, p. 2)

Las burocracias estatales

Uno de los aspectos a los que más esfuerzo ha dedicado la teoría institucional sobre el surgimiento y desarrollo del Estado del Bienestar es el rol de las burocracias y los altos funcionarios del Estado. Se argumenta que uno de los mecanismos más importantes mediante los que una institución trata de afianzarse estriba en la creación de burocracias que le son leales, tanto por cuestiones de poder (para mantener su posición) como ideológicas (por compromiso con los fines). (King, 1987; Pierson, 1993; Gundelach, 1994).

En el primero de los casos, estas burocracias tomarían decisiones para mantener el «status-quo» de la organización aunque a veces no sean acordes con los fines explícitos de la misma. Así se explicarían desarrollos políticos que parecen irracionales porque, en palabras de Theda Skocpol (1985), las acciones del Estado pueden ser irracionales, pero nunca son desinteresadas.

En el segundo caso, cuando la lealtad de la burocracia es de contenido ideológico, el feedback positivo para la institución radica en aumentar su base de apoyo de forma correlativa al tamaño de su burocracia. Uno de los intentos de explicar la alta legitimidad de los países nórdicos apuntaba, de hecho, al gran tamaño de sus burocracias estatales, pero las comprobaciones empíricas no muestran que trabajar en el sector público en lugar del sector privado marque ninguna diferencia en las actitudes hacia el Estado del Bienestar (Pierson, 2000).

En cualquier caso, la importancia de contar con la lealtad de las burocracias estatales no es algo que sólo interese a la academia. Gustav Möller, a quien se considera «padre» del Estado del Bienestar sueco, inició su etapa en el poder desmantelando parte de las burocracias existentes (e incluso algún ministerio completo) y sustituyéndolas por personas que procedían de los cuadros sindicales. El objetivo expreso es que quienes tuvieran en su poder la gestión de los futuros programas de bienestar fueran partidarios del buen funcionamiento de los mismos (Rothstein, 1985).

Coste de adaptación a posibles reformas

Las instituciones tienen un coste de adaptación (North, 1990). Una vez que tanto trabajadores como empresarios se han acomodado a su existencia y han pagado el coste de adaptación, pueden preferir que no haya reformas en las mismas para no tener que volver a pagar el precio del cambio. Un ejemplo serían las políticas medioambientales. Pueden generar rechazo en muchos colectivos en un primer momento pero, una vez que todos se han visto obligados a adaptarse a ellas (instalación de depuradoras en las empresas, sistemas de control de residuos, aumento y re-organización del personal de recogida de basuras, etc.), no es fácil que la mayoría quiera volver atrás porque el coste de abolir estas medidas puede ser superior al de mantenerlas.

Lock-in effects

Cuando el coste de adaptación al cambio es tan alto que se considera inviable, se entiende que la institución ha generado «lock-in effects», el efecto de «encerrar» a los individuos en los mecanismos institucionales y bloquear con ello cualquier vía para cambios políticos. Las políticas que en mayor medida generan este tipo de efectos son las que conllevan altos niveles de interdependencia entre los actores y que tienen intervenciones a largo plazo. Un ejemplo serían los sistemas de pensiones organizados mediante el mecanismo «pay as you go». Una vez que los individuos entran a formar parte del sistema, no van a ser proclives a salir del mismo porque quien está pagando quiere que el sistema se mantenga los años necesarios para recibir la pensión, y quien ya está recibiendo su pensión no puede abandonarlo porque al haber invertido sus contribuciones en el sistema, depende completamente del mismo. (Pierson, 1993; 2000b).

Efecto sobre las estructuras de intereses

Las instituciones modifican la estructura de intereses en una sociedad porque modelan el tamaño y composición de los colectivos que salen perjudicados y beneficiados con su existencia. Pero la puesta en marcha de una institución no sólo modifica el equilibrio de poder entre los colectivos económicos o grupos de presión existentes sino que, muy frecuentemente, los

crea (Scott, 1994), ya que es el conjunto de normas y leyes que forman el núcleo de la institución lo que define qué es un colectivo, y es en torno a ellas como se configuran grupos o colectivos con intereses comunes. Como señala Skocpol, las instituciones modelan el propio contenido de los intereses que se ponen en juego sobre el tablero político (King, 1987; Pierson, 1993; Forma, 1996, Skocpol, 1985; Korpi & Palme, 1998).

The shape of societal institutions is affected by the actions of different interest groups, but we also expect that institutional structures affect the ways in which citizens come to define their interests and preferences (Korpi & Palme, 1998).

De entre todas estas dinámicas, utilizaremos para construir nuestras hipótesis aquellas más directamente relacionadas con la opinión pública, especialmente esta última.

Es quizás necesario añadir que, cuando hablamos de los efectos que tienen las instituciones sobre lo que opinan los ciudadanos, no estamos pensando en un mecanismo unidireccional. Nadie niega que los grupos de interés afectan a la forma que adquieren las instituciones, ni que las opiniones de los ciudadanos determinan en gran medida lo que estas hacen porque, al fin y al cabo, en democracia son los ciudadanos quienes se dotan de instituciones y no las instituciones las que se «rellenan» de ciudadanos. Pero dicho esto, también parece claro que una vez en funcionamiento la propia institución genera dinámicas que alteran el caldo de opinión del que fueron originarias. Aunque el intento siempre será generar opiniones positivas entre los ciudadanos, esto no siempre se va a conseguir en la misma medida. Las instituciones pueden generar dinámicas que las refuercen, si logran convencer cada vez a más ciudadanos de la bondad de su existencia, o que las debiliten, si por su forma de proceder son cada vez menos quienes consideran a la institución como beneficiosa para ellos personalmente o para la sociedad en su conjunto.

Vamos a ver ya cómo trasladamos las ideas del Neo-Institucionalismo a hipótesis de trabajo. En primer lugar, incluir estas ideas en un estudio comparado sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar implica asumir varias cosas:

- a) En general, que la propia institución afecta a las opiniones de los ciudadanos sobre ella y, de esta y otras maneras, determina su propio futuro. Las opiniones de los ciudadanos se explican no sólo por las características socio-demográficas del individuo, sino también por las características de la propia institución por la que se les pregunta: el Estado del Bienestar.
- b) Para quienes trabajan sobre el cambio en las opiniones a lo largo del tiempo, implica que las dinámicas que mueven los consensos en torno a las políticas sociales de hoy no pueden ser iguales a los que se daban en su época fundacional ya que, incluso en el caso de que los programas de bienestar se hubieran mantenido inmutables en sus características, en el lapso de 60 años su propia existencia ha generado dinámicas que poco a poco modifican las valoraciones acerca de los mismos.
- c) Para estudios longitudinales como este que emprendemos, de la teoría Neo-institucional se deriva que las opiniones hacia el EB variarán de país a país respondiendo a las variaciones organizativas de los sistemas de bienestar a lo largo de Occidente. Y es que si las instituciones afectan a las percepciones ciudadanas, el corolario es que las distintas formas de organizar una misma institución afectará a estas percepciones de distinta manera. Si en Suecia

el EB logra más partidarios que en Australia, en España que en Francia, ello debe ser parcialmente debido a que, como la forma de organizar los programas de bienestar no es idéntica, tampoco su efecto sobre las actitudes puede ser el mismo.

Esta es la hipótesis general que va a servir de eje a todo el análisis del presente trabajo, y que podemos enunciar de la siguiente manera:

1. *Las variaciones internacionales en actitudes hacia el Estado del Bienestar se deben, al menos parcialmente, a la existencia de variaciones internacionales en la forma de organizar los Estados del Bienestar.*

Las implicaciones que se derivan de la anterior hipótesis general nos van a servir para buscar vías de confirmarla o rechazarla. La implicación más evidente de la misma es que en los países con sistemas de bienestar parecidos, el efecto de las instituciones de bienestar sobre las actitudes será también parecido. Y puesto que los factores micro que afectan a las actitudes hacia las políticas sociales son similares en todos los países, esperamos que los países cuyos Estados del Bienestar se consideran «hermanos», estén también bastante hermanados en lo que sus ciudadanos opinan de esta institución⁴.

Las tipologías de Estados del Bienestar, cuyo objetivo, sentido y características vimos en el capítulo 2, nos van a servir para determinar los países en los que la organización del EB es similar, y por eso la segunda hipótesis de este trabajo es que:

2. *Los países que pertenecen al mismo tipo de EB deben presentar pautas actitudinales similares entre sí y distintas de las que se dan en los países clasificados en cualquiera de las otras categorías de EBs.*

3.1.3. Efecto de cada tipo de Estado del Bienestar sobre las actitudes

Nos queda ahora determinar el efecto esperado de cada tipo de Estado del Bienestar sobre las actitudes, quizás la parte más complicada porque requiere definir el nexo que une una macro-variable como el tipo de Estado del Bienestar con las micro-variables que ayudan a explicar el comportamiento de los individuos uno a uno.

Como dice el propio Esping-Andersen, establecer este nexo es una de las mayores dificultades de las teorías sobre los efectos del Estado del Bienestar.

A great difficulty with virtually all economic theory on the subject is that its hypotheses concern micro-level relationships, while it tends toward sweeping macroeconomic generalizations such as aggregate noninflationary growth or economies' capacity to modernize and adapt dynamically to changing conditions (Esping-Andersen, 1994).

Por suerte, para comenzar a definir la relación entre variables micro (características de los individuos) y variables macro (el tipo de Estado del Bienestar) contamos con las sugerencias de tres de los mejores expertos en políticas de bienestar comparadas: Walter Korpi, Joakim Palme,

⁴ Castles & Mitchell (1993) hablaban de «Familias de países» respecto a sus modelos de bienestar.

y Gosta Esping-Andersen. Todos ellos han apuntado que el tipo Socialdemócrata de Estado del Bienestar debería generar las mayores cotas de legitimidad, seguido por el tipo Corporativo/Conservador y con el Liberal en último lugar.

a) Interés y tipo de Estado del Bienestar

La justificación de esta asunción se basa en el hecho, ya ampliamente demostrado, de que uno de los factores más importantes que condicionan las actitudes hacia los programas de bienestar es el interés, esto es, el que los individuos perciban que los programas de bienestar les benefician de forma directa.

Si ordenamos a los EBs según el número de personas que pueden beneficiarse de sus programas resulta claro que los sistemas de bienestar Socialdemócratas están a la cabeza. Estos sistemas se caracterizan por la existencia de servicios (sanidad, educación, atención domiciliaria a dependientes) y prestaciones (pensión básica, subsidios de ingresos mínimos) universales, financiadas mediante impuestos directos, y que constituyen una red de seguridad que cubre a toda la población independientemente de su posición en el mercado de trabajo. El mínimo de bienestar se garantiza para toda la población, así que todo el mundo es beneficiario del sistema.

Además, la intervención pública en estos sistemas se extiende más allá de las áreas que siempre se han considerado centrales. Se han implantado grandes programas públicos de educación no obligatoria (desde la red de guarderías hasta la de universidades, pasando por la educación de adultos y la formación permanente en el puesto de trabajo) y asistencia a la población dependiente (residencias, centros de día, atención domiciliaria), lo que viene a sumar más grupos de interesados.

En Escandinavia, el respaldo público al estado del bienestar es elevado y estable, lo cual no resulta sorprendente. En Dinamarca, quienes están a favor de 'mantener las actuales reformas sociales' son hoy tan mayoritarios como lo eran en 1969. Pero no todos los elementos del estado del bienestar resultan igualmente populares. Los programas dirigidos a grupos de población específicos gozan de menor popularidad que los subsidios universales (Taylor-Gooby, 1996). Esto podría explicar por qué los estados del bienestar nórdicos (y europeos) están más consagrados que –pongamos por caso- el norteamericano. Tanto los izquierdistas como los derechistas como el votante medio sostienen el edificio debido a que todos se benefician de él directa y personalmente. De hecho, cuanto más integral y universal sea éste, mayor es la población que basa sus cálculos vitales en los derechos sociales. (Esping-Andersen, 1998, p. 192).

Por último, aunque quizás sea lo más importante, los EBs Social-Demócratas han tratado de mantener a todas las clases sociales dentro de los programas públicos por dos vías:

1. En el caso de los servicios (sanidad, educación) ofreciéndolos a una calidad suficiente para satisfacer los criterios de las clases medias y medias-altas.
2. En el caso de las prestaciones contributivas (pensiones, desempleo, seguro por enfermedad, seguro por maternidad/paternidad), elevando las tasas de reemplazo para que correspondan lo más posible a los ingresos previos del individuo.

Sobre la base de las prestaciones básicas y universales que mencionamos, se implanta un segundo nivel de tipo contributivo y con altas tasas de reemplazo. Ambas cuestiones mantienen a las rentas más altas dentro del sistema público de bienestar al disminuir las ventajas que les puede ofrecer la provisión privada (OCDE, 2005b).

En definitiva, tanto por el alto grado de integración real de sus programas como por la extensión de los mismos a todas las áreas del bienestar social, se espera que los EBs Socialdemócratas sean los que agrupen un mayor número de interesados y por tanto de defensores.

Los sistemas Corporativos se componen de programas universales y prestaciones integradoras aunque, en ambos casos, en menor medida que los países Socialdemócratas. En primer lugar, aunque los servicios básicos de los sistemas Corporativos tienen cobertura universal (sanidad, educación), la mayoría de las prestaciones (pensiones, prestación por enfermedad, por maternidad, etc.) se dirigen a la población que ya tiene una vinculación con el mercado de trabajo, con lo que quienes están fuera de él ganan acceso a estos programas por su dependencia de los miembros de la familia que forman parte de la fuerza de trabajo o, en caso de que esto no sea posible, acceden a prestaciones de mínimos (las pensiones no contributivas o las ayudas a ingresos mínimos) que funcionan como programas independientes –y peor dotados– que aquellos dirigidos a quienes sí tienen vinculación laboral.

En segundo lugar, en estos sistemas no se ha pretendido mantener a las rentas más altas dentro de los programas de bienestar sino, muchas veces al contrario, se las incentiva para que se trasladen al sector privado mediante ventajas fiscales a la contratación de seguros privados de sanidad o pensiones, imponiendo un «ceiling» (listón superior) muy bajo a las contribuciones, o por medio de bajas tasas de reemplazo para las prestaciones contributivas. Ambas cuestiones contribuyen a disminuir la base de ciudadanos «interesados» en la existencia de programas públicos de bienestar y por ello, pese a que los Corporativos son sistemas con una cobertura amplia, deberían lograr menores niveles de legitimidad, esto es, menores porcentajes agregados de apoyo, que los sistemas organizados de forma Socialdemócrata.

En cuanto a los sistemas de bienestar Liberales, se conforman en mucha mayor medida que los dos tipos anteriores de programas dirigidos a colectivos de rentas bajas. En la mayoría de los casos hay restricciones legales de acceso a quienes tienen rentas por encima de un mínimo nivel, aunque puede lograrse el mismo objetivo ofreciendo servicios de calidad sustancialmente menor que la ofrecida por el sector privado, o prestaciones de tan baja cuantía que no sean necesarias restricciones legales de acceso para convertir la red pública de bienestar en algo que sólo quienes no tienen alternativa utilicen. De hecho, el bajo gasto en programas de bienestar es una de las principales características de los países con Estados del Bienestar Liberal.

Bajo gasto y por ende baja calidad de las prestaciones, baja cobertura, y gran espacio para la provisión privada (que en estos países se potencia de forma directa e indirecta por parte del Estado). Delegación en el mercado de muchas cuestiones relacionadas con el bienestar y pocos sectores, sólo los centrales, con intervención pública. Todo contribuye a que los individuos con un interés directo en que los programas públicos existan formen un colectivo más pequeño que el existente en los países Corporativos o Socialdemócrata y, siguiendo con la hipótesis, sugiere que los Estados del Bienestar Liberales han de lograr los menores porcentajes de apoyo popular.

Institutional structures also affect coalition formation and the definition of interests among citizens in indirect ways through the various 'strategies of equality' they can be seen as embodying. These strategies can be defined by their degree of low-income targeting (i.e., the extent to which budgets used to redistribution go to those defined as poor). The degree of low-income targeting varies between institutional types. (...)

The targeted⁵ model thus tends to drive a wedge between the short-term material interests of the poor and those of the rest of the population, which must rely on private insurance. It gives the better-off categories no rational basis for including the poor, and leaves the poor to trust the altruism of the more fortunate. (...) the encompassing model includes all citizens in the same programs. By giving basic security to everybody and offering clearly earning-related benefits to all economically active individuals, in contrast to the targeted and basic security models, the encompassing model brings low-income groups and the better-off citizens into the same institutional structures. Because of its earning-related benefits, it is likely to reduce the demand for private insurance. Thus, the encompassing model can be expected to have the most favourable outcomes in terms of the formation of class coalitions that include manual workers as well as the middle classes. By providing sufficiently high benefits for high-income groups so as not to push them to exit, in encompassing institutions the voice of better-off citizens helps not only themselves but low-income groups as well (Korpi and Palme, 1998).

El número de personas que reciben algo de los programas de bienestar disminuye según pasamos del tipo Socialdemócrata al Corporativo/Conservador y al Liberal, y por esto la argumentación de Korpi, Palme, y Esping-Andersen, que relaciona el número de beneficiarios con el nivel de apoyo, es suficientemente convincente como para convertirse en nuestra siguiente hipótesis de trabajo:

3.a) *La relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad se dará de la siguiente forma: los Estados del Bienestar Socialdemócratas lograrán los mayores niveles de apoyo popular, seguidos por los Corporativos y con los Liberales en último lugar. Esto es debido a que los colectivos interesados en la existencia y mantenimiento de los programas de bienestar son mayores en el tipo Socialdemócrata y menores en el tipo Liberal, con el Conservador en una posición intermedia.*

Sin embargo, entre las menciones que se hacen a las características de cada tipo de EB falta una que podría ser relevante para moldear las opiniones de los ciudadanos: el coste de los programas de bienestar.

Si bien es cierto que los programas Socialdemócratas tienen todas las virtudes antes mencionadas, al menos a primera vista son también los más «caros» para el ciudadano.

En la tabla 3.1, se aprecia que, aunque los países varían mucho en la progresividad de su sistema fiscal y en los ajustes del mismo dependiendo del tipo de familia, los países con sistemas del bienestar Socialdemócrata se destacan por tener una carga impositiva bastante elevada sobre todo tipo de situaciones: sueldos altos y bajos, familias con o sin hijos.

⁵ En la tipología elaborada por estos autores el tipo «Liberal» de Esping-Andersen se subdivide en dos: «Targeted» y «Basic Security». El tipo «Encompassing» mantiene casi los mismos países que el tipo Socialdemócrata.

Tabla 3.1.

Impuestos directos y contribuciones sociales (% del salario bruto) para distintos tipos de familia. Datos para 1998.

| Soltero/a sin hijos con ingresos del 167% del salario medio industrial (APW**) | Soltero/a con dos hijos e ingresos del 67% del (APW**) | Casados, dos hijos, ingresos entre el 100-133% del (APW**) |
|--|--|--|
| Alemania (47,5) | Suecia (32,5) | Suecia (33,7) |
| Suecia (42,0) | Francia (20,8) | Alemania (29,7) |
| Noruega (37,4) | Noruega (19,9) | Noruega (26,6) |
| Irlanda (35,9) | Italia (19,6) | Italia (24,3) |
| Australia (34,0) | Inglaterra (18,9) | Francia (21,7) |
| Italia (33,8) | Alemania (18,6) | Canadá (21,6) |
| Canada (32,6) | Australia (13,8) | EE.UU. (21,4) |
| EE.UU. (31,7) | Irlanda (9,8) | Australia (20,9) |
| Francia (30,7) | España (7,1) | Inglaterra (20,4) |
| Inglaterra (27,0) | EE.UU. (4,8) | Irlanda (18,6) |
| España (24,3) | Canadá (3,2) | España (15,8) |

OCDE (1999) «Taxing wages. 1998-1999», p. 46.

* Existen datos más recientes, pero presentamos estos porque son los más cercanos a la fecha de la encuesta con la que vamos a trabajar.

**APW: «Average production worker». La OCDE suele usar el salario medio de un trabajador industrial como base para muchas comparaciones. El salario APW se calcula como el salario medio, en cada país, de los trabajadores, hombres y mujeres, manuales y no manuales, que tienen un contrato a tiempo completo en la industria manufacturera. Este salario no distingue entre trabajadores manuales y «de cuello blanco» (supervisores, por ejemplo), pero la OCDE calcula que en esta industria los sueldos de los trabajadores manuales son, de media, el 90% de los sueldos para tareas no manuales.

Académicos del prestigio de Vicenç Navarro⁶ han comparado lo que suecos y estadounidenses pagan al Estado y reciben de él concluyendo que el intercambio impuestos-prestaciones es más beneficioso en Suecia. Allí se paga más, pero se reciben unos servicios cuyo coste vía mercado sería superior al coste en impuestos. En EE.UU. se pagan menos impuestos, pero el remanente ha de invertirse en comprar unos servicios que, en general, ofrecen menos calidad (salvo para las rentas más altas que pueden pagar grandes primas) de la que disfrutaban los ciudadanos suecos. Además de esto, el hecho de tener un sistema universal hace que se cubran entre todos los gastos de quienes no pueden pagar por los servicios al precio real, con la consiguiente reducción de las desigualdades.

Esta conclusión se deriva de un análisis detallado y comparado del *trade-off* que ofrecen dos sistemas de bienestar, así como de haber tomado distancia para analizar los programas fríamente. ¿Pueden hacer esto la mayoría de los ciudadanos? Seguramente no con el nivel de información y distanciamiento de la Academia y, por ello, el coste directo del Estado del Bienestar sí podría influir en su legitimidad.

Tendríamos entonces dos efectos funcionando en dirección inversa: por un lado los sistemas más integradores generan mayores grupos de beneficiarios y deberían ser los que mayor legitimidad logren. Por otro lado estos sistemas son los que imponen mayor presión fiscal a sus nacionales, lo que podría disminuir el apoyo.

⁶Vicenç Navarro (2002). *Bienestar insuficiente, democracia incompleta*. Anagrama, p. 164.

En la primera parte del análisis veremos cuál de los dos efectos tiene más fuerza, aunque podemos adelantar ya que los Estados del Bienestar Socialdemócratas son, pese a la alta presión fiscal, los que más apoyo reciben por parte de sus poblaciones.

b) Ideología y tipo de Estado del Bienestar

La hipótesis anterior es interesante no sólo por ofrecer una ordenación de los tipos de Estados del Bienestar en función de su legitimidad esperada, sino también porque nos indica la dinámica mediante la cual se producen estas variaciones internacionales en el apoyo agregado a los programas de bienestar.

Dependiendo de cómo estén organizados, los Estados del Bienestar generan distintas estructuras de intereses en torno a ellos y logran la adhesión de unos u otros colectivos económicos. En definitiva, es una hipótesis que se basa en la asunción de que el interés es el principal determinante de las actitudes hacia el EB.

Nosotros sabemos que un segundo factor, la ideología, interviene en pie de igualdad con el interés para modelar las opiniones hacia el EB: individuos con similares ingresos y, por tanto, similar «interés» en que un programa de bienestar exista, mantienen distintas opiniones hacia el mismo dependiendo de que sustenten valores más o menos igualitarios.

Teniendo esto en cuenta, la distinta legitimidad de cada tipo de EB podría deberse a que, además de afectar distintamente la estructura de intereses, también modifica de manera desigual la estructura valorativa mediante la que se le juzga.

En este caso no tenemos las sugerencias de ningún académico para guiar nuestra hipótesis respecto de cómo deberían ser las fracturas ideológicas en cada tipo de EB pero, por las características de los mismos podemos inferirlo.

Sabemos que los Estados del Bienestar Socialdemócratas son, por la cantidad de gasto que generan, por el numeroso personal que emplean y por lo extenso de su campo de acción, instituciones centrales de la sociedad. Han dejado de ser políticas de apoyo a colectivos en riesgo para convertirse en parte central del tejido institucional, al mismo nivel que los Tribunales de Justicia o las Fuerzas de Seguridad del Estado. Han dejado de ser políticas para los pobres, con la consiguiente carga valorativa que ello implica, a ofrecer prestaciones correlativas a sus ingresos para todas las clases sociales.

La mayor legitimidad de los sistemas Socialdemócratas de bienestar podría derivarse por tanto de que, por su extensión y por las altas tasas de reemplazo de sus prestaciones, en ellos se ha difuminado el origen ideológico de la institución (disminuir la desigualdad, ayudar a los más pobres). Si esto es así, su defensa ya no corresponde sólo a quienes mantienen valores igualitarios, y parte de la legitimidad extra que consiguen podría derivarse de que la gente con valores individualistas es menos reacia a apoyarlo.

En los países de tipo Liberal, el EB ha mantenido su carácter ideológico originario, en gran parte porque no ha pasado de ser una institución que impone cargas fiscales a los colectivos de rentas medias y altas para ayudar a las personas con pocos ingresos, lo que choca con las

ideas sobre distribución de recursos económicos de los ciudadanos individualistas. En apariencia, estos sistemas siguen la lógica «Robin Hood» (Korpi & Palme, 1998), lo que si bien puede fomentar el apoyo de la gente más igualitaria, sin duda debería desanimar el de quienes no comparten este principio distributivo.

La hipótesis es que cuanto más extenso e integrador es un sistema de bienestar, cuanto más da cabida a los intereses de todos los colectivos de ingresos, en mayor medida pierde su «etiqueta» de instrumento político al servicio de la igualdad económica. La pérdida debería trasladarse en una disminución del peso que tienen las cuestiones valorativas/ideológicas para determinar las actitudes hacia los programas de bienestar, y un correlativo aumento de legitimidad entre los colectivos más individualistas. Y es que si los programas de bienestar no son vistos como instituciones al servicio de la igualdad, mantener valores individualistas ya no es un obstáculo para apoyar su existencia. Es posible, por supuesto, que el apoyo que se gana entre los individualistas se pierda entre los ciudadanos que mantienen valores igualitarios, pero vamos a suponer que no es así, y en la contrastación empírica veremos hasta qué punto nos equivocamos.

Esta segunda vía mediante la cual un Estado del Bienestar puede ganar apoyos nos deja con la misma ordenación de países que preveía la hipótesis anterior basada en el interés. El tipo de EB más integrador y con mayor extensión es el Socialdemócrata, por lo que este ha de ser el que más se haya «des-ideologizado» a ojos de los ciudadanos. Seguidamente tenemos el tipo Corporativo, con menor rango de actuación y más tendencia a delegar la provisión de bienestar de las rentas más altas al mercado. Por último, el Estado del Bienestar con mayor contenido ideológico aparente debería ser el Liberal, ya que al concentrar las políticas sociales en los colectivos de menos ingresos es el que en mayor medida ha mantenido un carácter asistencial y redistribuidor (aunque sólo en apariencia, porque pese a «dar más a quien más tiene», el tipo Socialdemócrata es el que logra mayores niveles de redistribución. Korpi, 2000).

3.b) La relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad se dará de la siguiente forma: Los Estados del Bienestar Socialdemócratas lograrán los mayores niveles de apoyo popular, seguidos por los Corporativos y con los Liberales en último lugar. Esto se debe a que cuanto más extenso e integrador es un EB, en mayor medida deja de ser percibido como una institución ideológica, y en mayor medida logra la adhesión de colectivos que, por mantener valores individualistas en lo económico, no forman parte de su «base natural» de apoyo.

c) Género y tipo de Estado del Bienestar

Aunque los dos factores fundamentales para determinar las actitudes hacia los programas de bienestar son el interés y la ideología, una tercera variable ha demostrado repetidamente su correlación con estas actitudes: el género.

Como vimos en el capítulo 1 las mujeres son, de media, ligeramente más partidarias de mantener programas públicos de bienestar que los hombres, un hecho cuyas causas estudiaremos con más detalle en el capítulo 8. Unido a ello, en los últimos diez años se han estudiado profusamente los distintos efectos que las políticas de bienestar tienen para las mujeres, llegando a la conclusión de que no todos los sistemas las benefician en la misma medida y acuñando el término de Estado del Bienestar «woman friendly» para aquellos que más logran disminuir las desigualdades de género.

En el capítulo 8 dedicaremos más espacio a comentar los trabajos sobre este tema, por lo que baste ahora decir que, si unos EB despuntan por sus efectos positivos para las mujeres, es de suponer que en ellos las mujeres destacarán por sus opiniones favorables.

La posición del tipo Conservador y Liberal en cuanto a su efecto sobre las desigualdades entre hombres y mujeres aun genera discusiones, pero lo que sí está consensuado entre los académicos es que los sistemas Socialdemócratas, con sus amplias políticas para potenciar la integración de la mujer al mercado de trabajo (guarderías, extensas y generosas bajas por maternidad, bajas por paternidad, atención domiciliaria a personas dependientes), son los más «woman friendly». Por esto esperamos que el tipo Socialdemócrata de EB logre mayor apoyo que el resto porque consigue convencer a grandes sectores de la población femenina de las ventajas del mismo.

3.c) Los Estados del Bienestar Socialdemócratas lograrán mayores niveles de legitimidad que el resto porque, gracias a sus extensas políticas para facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, obtendrán mayores porcentajes de apoyo entre las mujeres que cualquier otro tipo de EB.

Hasta aquí hemos visto tres dinámicas mediante las que el tipo de Estado del Bienestar puede afectar al nivel de legitimidad. Resumiéndolas, nuestra tercera hipótesis se formula como sigue:

3. La relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad se dará de la siguiente forma: Los Estados del Bienestar Socialdemócratas lograrán los mayores niveles de apoyo popular, seguidos por los Corporativos y con los Liberales en último lugar. Esto se debe a que la forma de organizar los sistemas de bienestar afecta a las actitudes por tres vías:
 - a) Afecta a la estructura de intereses económicos que se teje en torno a los programas de bienestar, con lo que unos sistemas lograrán más apoyo que otros entre los colectivos de rentas medias y medias-altas.
 - b) Afecta al carácter ideológico que se otorga a los programas de bienestar. Los sistemas que se perciban más des-ideologizados lograrán más apoyo entre las personas que sustentan valores individualistas en lo económico.
 - c) Afecta a los intereses de género. El sistema Socialdemócrata es el que más beneficia a las mujeres y logrará, por ello, más apoyo entre ellas que el resto de sistemas.

3.2 Hipótesis operativas.

En los capítulos 5 a 10 vamos a tratar de confirmar nuestras hipótesis con una base de datos que incluye las respuestas a preguntas sobre los programas de bienestar de casi 17.000 personas repartidas en once países. Para ello, el primer paso es convertir las argumentaciones teóricas recién expuestas en hipótesis de trabajo operativas.

En el capítulo 5 trabajaremos con las hipótesis 1 y 2, estudiando si los países clasificados dentro de cada tipo de EB tienen niveles de apoyo a los programas de bienestar similares entre sí,

y distintos del resto. Demostraremos primero que la variación internacional en legitimidad del EB se corresponde con los tipos de Estados del Bienestar. Seguidamente confirmaremos que esta variación es estadísticamente significativa, y después veremos si puede explicarse por otras cuestiones ajenas al hecho de que el sistema de bienestar sea distinto en unos y otros países.

Las preguntas que figuran en nuestra encuesta se refieren a programas de bienestar concretos y no al «Estado del Bienestar» como conjunto, con lo que aunque nuestras hipótesis teóricas hablan de «Estados del Bienestar», lo que haremos en el análisis es estudiar las actitudes hacia los tres programas que se consideran su eje: la sanidad, las pensiones, y las prestaciones por desempleo. De esta manera estamos operativizando las «actitudes hacia el Estado del Bienestar» en las actitudes hacia estos tres programas. El instrumento para medir el concepto «legitimidad del Estado del Bienestar» es el porcentaje de apoyo de los ciudadanos a sus tres programas fundamentales. Aunque evidentemente con esto estamos restringiendo bastante el objeto de estudio, por un lado esta es la forma habitual de proceder, y por otro lado es la única manera de hacer viable la contrastación empírica de las teorías anteriormente expuestas.

Una vez comprobada la existencia de una relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su nivel de apoyo, dedicaremos los capítulos 6 a 8 a estudiar las posibles causas de la diferente legitimidad de los tipos de Estados del Bienestar, para lo cual iremos trabajando, una a una, con las tres explicaciones que conforman nuestra tercera hipótesis.

En el capítulo 6 veremos si la hipótesis de Esping-Andersen, Walter Korpi y Joakim Palme se sostiene. Si, como estos autores argumentan, los sistemas de bienestar Socialdemócrata logran la mayor legitimidad debido a que interesan a la mayoría de ciudadanos por igual, deberíamos encontrar que sus consensos apenas están fracturados por razones económicas.

Para determinar la pertenencia del individuo a uno u otro colectivo económico utilizaremos su posición económica relativa a la mediana nacional de ingresos. Deberíamos encontrar que en los sistemas Socialdemócratas la posición económica del individuo no es un factor especialmente relevante para determinar sus opiniones sobre la existencia de los programas de bienestar o, al menos, que esta variable es mucho menos relevante que en otros países.

En realidad, es más realista esperar que la posición económica pierda fuerza pero no desaparezca ya que, aunque los programas Socialdemócratas ofrezcan prestaciones aceptables para todos, el grado de interés de la gente de ingresos altos y bajos no puede ser idéntico. En el primer caso uno siempre puede salir del sistema a comprar bienestar en el sector privado, en el segundo caso la falta de ingresos implica una dependencia casi total de la provisión estatal. Es de esperar que la existencia de provisión pública sea percibida como más importante para la gente de bajos ingresos que para los situados en la parte superior de la escala, incluso aunque todos la utilicen. Además, y como también hemos mencionado, los impuestos progresivos hacen que el coste del Estado del Bienestar sea superior para las clases más altas.

Si las diferencias entre tipos de Estados del Bienestar en apoyo popular se deben a que las prestaciones y servicios del tipo Liberal interesan sólo a los colectivos con rentas más bajas, las del tipo Corporativo suman a las clases medias pero dejan de lado a las medias-altas, y las de tipo Socialdemócrata interesan a todos independientemente de sus ingresos, deberíamos encontrar que:

1. La posición económica relativa del individuo determina sus opiniones sobre los programas de bienestar con una fuerza distinta dependiendo del país (existe variación internacional estadísticamente significativa en el tamaño del coeficiente para la variable «posición económica relativa»). Es decir, las fracturas económicas en los consensos en torno a los programas de bienestar son significativamente mayores en unos países que en otros.
2. Los colectivos con mayores ingresos varían más entre países en sus opiniones sobre el EB de lo que lo hacen los colectivos con bajos ingresos. La razón de esta condición es que, si argumentamos que la diferente legitimidad de los programas de bienestar depende de que las clases medias y medias-altas los apoyen o no, estamos asumiendo que las clases bajas lo harán en todos los casos. Por tanto, la homogeneidad del apoyo de las clases bajas a las políticas del bienestar es una asunción que está implícita en la hipótesis de Esping-Andersen, Korpi y Palme. Dado que la hipótesis prevé que sólo algunos sistemas consiguen ganar el apoyo de las clases medias y medias-altas, debemos encontrar que las actitudes de estos colectivos varían más de un tipo a otro de Estado del Bienestar de lo que lo hacen las actitudes de los colectivos con rentas bajas.
3. Los programas de bienestar que logran mayor legitimidad se caracterizan porque su apoyo está poco fracturado siguiendo líneas económicas. Los programas más legitimados son apoyados casi en la misma medida por gente con ingresos por debajo del 60% de la mediana, y por gente con ingresos por encima del 60% de la mediana.
4. El apoyo «extra» que las clases medias aportan cuando deciden apoyar un programa de bienestar es suficientemente importante como para que se note a nivel agregado. Las variaciones en la fuerza de los ingresos para determinar las actitudes son suficientemente importantes como para explicar, al menos en parte, las variaciones internacionales en legitimidad de los programas de bienestar.

En el capítulo 7 nos dedicaremos al estudio de las fracturas ideológicas en los consensos en torno a los programas de bienestar. El objetivo de este capítulo es verificar la hipótesis 3.b), que explicaba el distinto nivel de apoyo que logra cada tipo de EB en función de que sus programas hubieran perdido, a ojos de los ciudadanos, contenido ideológico. Esta hipótesis argue que la «des-ideologización» se consigue a través de aumentar el tamaño del edificio público de bienestar y, sobre todo, a través de tasas de reemplazo elevadas que dan más a los que más tienen. Teniendo esto en cuenta, esperamos que el tipo Socialdemócrata sea el más «des-ideologizado», y que parte del apoyo extra que recibe provenga de la gente con valores individualistas. El tipo Conservador estaría en segundo lugar, y el Liberal en último lugar.

Si esto es así tenemos que encontrar que:

1. Los países varían entre sí no sólo en el nivel de apoyo agregado al EB (legitimidad) sino también en el efecto que tiene la ideología para determinar las actitudes. Habrá países en los que la ideología del individuo tenga un efecto muy fuerte sobre las actitudes hacia los programas de bienestar (países con grandes fracturas ideológicas en el consenso sobre el EB), y países donde las diferencias de opinión entre igualitaristas e individualistas sean pocas (pequeña fracturas ideológicas) o ninguna (inexistencia de fracturas ideológicas).
2. Los individuos que sustentan valores igualitarios tendrán actitudes en general positivas hacia la intervención del Estado en temas de bienestar independientemente del país en el

que vivan, y serán un colectivo más homogéneo que los individualistas. Esperamos encontrar menos variación internacional en las actitudes hacia el EB de los igualitaristas que en las de los individualistas.

3. Existe una relación entre el tamaño de las fracturas ideológicas y el nivel de apoyo a los programas de bienestar. Los países con programas más legitimados serán también aquellos con menos fracturas ideológicas. Esto es así porque el apoyo «extra» que ciertos sistemas de bienestar reciben proviene de haber logrado convencer a los individualistas acerca de las bondades del sistema, y de haber sumado su apoyo al de los igualitaristas (que se da por sentado, como se daba por sentado en el apartado anterior que los más pobres apoyarían «en bloque» las políticas sociales independientemente de cómo estuvieran estas organizadas).
4. El porcentaje de apoyo que los programas de bienestar más legitimados extraen de los individualistas es suficientemente importante como para considerar que ellos son una de las fuentes de esa legitimidad «extra» que distingue a unos Estados del Bienestar de otros.

Finalmente, en el capítulo 8 abordaremos la tercera sección de nuestra hipótesis 3, que se centra en el distinto efecto que cada tipo de EB tiene sobre las desigualdades de género, y espera hallar más apoyo femenino a los programas de bienestar en aquellos sistemas que en mayor medida sirven a los intereses de las mujeres.

Siguiendo los estudios acerca del efecto de las políticas sociales sobre las desigualdades de género, esperamos que las mujeres que viven bajo sistemas Socialdemócratas sean más favorables a la existencia y mantenimiento de los programas de bienestar que las que viven bajo sistemas Corporativos o Liberales y esperamos que parte del apoyo extra de los EBs Socialdemócratas se derive de este hecho. Para verificar esta hipótesis ha de darse que:

1. La diferencia de apoyo a los programas de bienestar entre hombres y mujeres sea de distinto tamaño dependiendo del país que estudiemos.
2. Las mayores diferencias se manifiesten en los países con sistemas Socialdemócratas.
3. Estas diferencias sean lo suficientemente fuertes como para explicar, al menos en parte, la mayor legitimidad que tienen los EBs Socialdemócratas. Es decir, el apoyo «extra» proveniente de las mujeres que obtienen los EBs Socialdemócrata es de suficiente magnitud como para suponer un aumento significativo en el porcentaje de apoyo agregado que logran los programas de bienestar en estos sistemas.

3.3 Características de los programas y legitimidad

Una vez vista la distinta composición de los consensos nacionales, y sabiendo ya de dónde sale el mayor apoyo que obtienen unos Estados del Bienestar frente a otros, pasaremos al capítulo 10. Allí daremos un salto en el enfoque del análisis para analizar, no ya qué colectivos varían en sus opiniones dependiendo del tipo de programas que se les ofrezcan, sino porqué varían. O lo que es lo mismo, qué características concretas de los programas de bienestar explican la adhesión o rechazo de determinados colectivos de ciudadanos.

Para responder a esta pregunta dejamos de lado el análisis micro, en el que la unidad de análisis son los ciudadanos, para estudiar la relación «macro» entre las características de los programas y los porcentajes de apoyo que consiguen. Analizaremos la relación entre muchas características de los programas de bienestar (*gasto per capita*, cobertura, tasa de reemplazo, etc.) y el apoyo que estos reciben, abriendo así la «caja negra del tipo de Estado del Bienestar» (Fraile y Ferrer, 2004) para ver qué componentes de la misma son los que tienen efecto sobre las actitudes.

Aunque vamos a estudiar diferentes variables, nos centraremos especialmente en comprobar si aquellas que tienen que ver con el grado de integración real de un programa de bienestar correlacionan con su nivel de apoyo ciudadano.

En este capítulo 10 el objeto de estudio serán los programas de bienestar independientemente del tipo de sistema de bienestar en el que se inserten porque, si nuestra hipótesis predecía que la integración de un sistema de bienestar explica su legitimidad (por las vías expuestas en la hipótesis 3), debería ser también cierto cuando bajamos al nivel de cada uno de los programas en concreto.

En el capítulo siguiente, dedicado a la metodología, veremos que entre los países con los que vamos a trabajar hay algunos que se clasifican bien dentro de uno u otro tipo de EB, y otros que no logran encontrar su lugar porque no todos los programas que componen sus Estados del Bienestar siguen la misma lógica.

Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Canadá, Australia y EE.UU. son Estados del Bienestar en los que la mayor parte de los programas siguen los mismos criterios organizativos. Inglaterra, Irlanda, España e Italia tienen Estados del Bienestar «mixtos», porque combinan programas que se rigen con lógicas distintas. Estos casos mixtos van a ser de enorme utilidad en el análisis del capítulo 10 porque nos permitirán ver si el hecho de que un programa tenga un alto grado de integración correlaciona con que tenga mucho apoyo ciudadano independientemente del sistema de bienestar en el que esté inserto.

Si esto es así, podremos afirmar que lo que está detrás de la variación internacional en apoyo al EB es que la legitimidad varía en función del grado de integración de los programas de bienestar uno a uno, y que si los EBs Socialdemócratas logran tan altos niveles de apoyo es, simplemente, porque tienen la mayoría de sus programas organizados de manera que integran a todas las clases sociales, y no por razones ajenas al EB como la riqueza económica del país (Haller et alia., 1987; Forma, 1999), la cultura moral (Giddens, 2001), el sistema político (Edlund, 1999; Svallfors, 1999 2000b), el contexto histórico de la formación del Estado (Lin, 2005), ni por razones propias al EB pero de otro cariz como pueden ser la cantidad de recursos destinados globalmente a políticas de bienestar (Evans, 1995) o la forma que adopten los instrumentos fiscales para recaudarlos (Wilensky 1975).

Capítulo 4. Metodología.

4.1. Causas, efectos y azar.

4.2. Selección de casos.

4.3. Datos sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar.

4.3.1. International Social Survey Programme: The Role of Government.

4.3.2. El cuestionario y las variables que utilizaremos.

4.4. Datos sobre los programas de bienestar.

4.5. Técnicas de análisis.

4.5.1. La regresión.

4.5.2. La regresión multinivel.

4.1. Causas, efectos y azar

Antes de pasar a los aspectos más técnicos de la metodología creemos necesario dedicar unas páginas a justificar las asunciones causales que nuestras hipótesis llevan consigo. El lector habrá podido observar que, a lo largo del apartado anterior, hemos tomado a la institución, en este caso el sistema de bienestar, como causa de las opiniones de los ciudadanos pero, aun si conseguimos demostrar todas las hipótesis anteriores, ¿vamos a estar totalmente seguros de que no confundimos causa con efecto? ¿Podremos afirmar sin lugar a dudas que el Estado del Bienestar genera parte de su propia legitimidad y, sobre todo, que el tipo de Estado del Bienestar causa las variaciones internacionales en legitimidad de los programas de bienestar? En realidad, no.

Desde los años 40 del pasado siglo el concepto de causa pasó de entenderse de forma determinista: «si siempre que se da A ocurre también B, entonces A es causa de B», a verse como un tema probabilístico: si el hecho de que ocurra A aumenta la probabilidad de que ocurra B, entonces A es causa de B (Shadish & Campbell, 2002). Teniendo esto en cuenta, en el mejor de los casos lograremos demostrar que tener los programas de bienestar organizados de manera Socialdemócrata aumenta la posibilidad de que las clases medias y también los individualistas apoyen el sistema, y mediante esta vía aumenta la probabilidad de tener unos mayores niveles de legitimidad agregada.

Lo cierto es que nosotros no podemos optar ni siquiera a esta versión reducida porque sobre el concepto de causa, incluso en su versión probabilística, se ha trabajado lo suficiente como para no poder tomarlo a la ligera. Una de las conclusiones básicas de cualquier estudio sobre causalidad es que, si bien todo mecanismo causal requiere que exista una correlación entre dos fenómenos, no todas las correlaciones pueden considerarse causales.

Si encontrásemos que todas las correlaciones definidas en las hipótesis operativas del apartado 3.2 existen, aun habríamos de cumplir ciertos criterios para afirmar la causalidad de las mismas y, lo que viene a complicar más nuestra tarea, no hay consenso en torno a qué criterios debe cumplir una correlación para poder definirse como causal.

Las tres definiciones más importantes de los criterios que debe cumplir una relación para ser causal son:

1. *Causa como dependencia robusta entre dos variables.*

Una variable es causa de otra si existe una correlación entre las dos variables, una variable antecede en tiempo a la anterior, y hemos controlado todas las otras posibilidades que podrían explicar la asociación.

A fundamental requirement in all empirical studies directed towards causal conclusions is that potential confounding variables must be controlled (Arjas, 2001).

En nuestro caso, vamos a establecer todos los controles posibles en los análisis estadísticos que llevemos a cabo, pero aun así esta definición nos presenta un problema irresoluble porque las

encuestas sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar comienzan a finales de los años 80 y la única encuesta comparada es la del ISSP con la que trabajamos que sólo cubre un periodo de 10 años. No es posible, como ya mencionó Pauli Forman en 1999, hacer estudios históricos de las actitudes hacia el EB.

De cualquier modo, la definición de causalidad como dependencia robusta no es sólo problemática para nosotros sino para las Ciencias Sociales en general porque, al no poder hacer experimentos de laboratorio similares a los de las Ciencias Naturales, nunca es posible asegurar que todas las posibles variables han sido controladas (Goldthorpe, 2001).

2. Causa como manipulación con consecuencias

Una de las vías para solventar el problema que presenta la definición anterior de causa es la que aportan los estudios experimentales, que sí es posible aplicar (a veces) en Ciencias Sociales, y que parten de aplicar un tratamiento a un grupo de individuos seleccionados al azar, manteniendo otro grupo también seleccionado al azar como control (Shadish & Campbell, 2002).

Para nuestro estudio, la definición presenta de nuevo problemas irresolubles. Desde este enfoque se argumenta que no podemos hablar de causas si no hemos podido manipular antes las variables para crear una situación experimental («no causation without manipulation»), y por tanto una causa ha de ser, siempre, un elemento susceptible de ser manipulado por el investigador.

Los sistemas de bienestar están lejos de permitir al investigador la posibilidad de manipularlos a su antojo pero, dado que un enorme campo de la Sociología trata objetos que, al igual que el nuestro, no se prestan a la manipulación, se ha desarrollado una teoría de causalidad que, al fin, es aplicable a todo el ámbito de las Ciencias Sociales. Y no sólo aplicable sino, también, más adecuada, porque la experimentación en el ámbito de la Sociología se encontrará siempre con el problema de que los casos con los que se trabaja son, a diferencia de las bacterias o los átomos, seres pensantes, conscientes de estar participando en un experimento, y que reaccionan ante esto, y no sólo ante el «tratamiento» que se les aplica. Debido a ello, pese que algunos autores encuentran la vía de mejorar las Ciencias Sociales en imitar lo que hacen las Ciencias Naturales (Bhrolcháin, 2001), esta posición encuentra pocos defensores entusiastas.

3. Causa como proceso generativo

Goldthorpe (2001) ha elaborado una definición de causa que es aplicable a las Ciencias Sociales y se ajusta más a las peculiaridades de su objeto de estudio que las dos anteriores. La causa se define ahora como un proceso generativo que da lugar a unos resultados (efectos). Según este autor (y muchos otros¹), para considerar que entre dos fenómenos se da una relación causal hemos de:

- Estudiar los fenómenos para confirmar que existe en ellos una regularidad. La estadística, que nos permite ver regularidades más allá de lo evidente a simple vista, debería ser utilizada, cuando sea posible, para este fin.

¹ Cox & Wermuth (2001) definen una noción de causalidad muy parecida bajo el nombre de «causality as explanation of a process».

- Desarrollar una teoría que explique esta regularidad. En todos los casos esta teoría tiene que partir de la acción humana y del individualismo metodológico. Debe explicar porqué los individuos actúan de una determinada manera que, finalmente, da lugar a la existencia de las regularidades que observamos. No son suficientes, en ningún caso, explicaciones que se basan exclusivamente en macrovariables que se afectan unas a otras sin hacer referencia a los individuos que las componen.

When, therefore, analysis becomes causal, social regularities represent the effects for which causes have to be discovered. And this task, contrary to what proponents of the idea of causation as robust dependence would seem to have supposed, cannot be a purely statistical one but requires a crucial subject-matter input. (...) This input has then to take the form of some account of the action and interaction of individuals. In effect, a narrative of action must be provided that purports to capture the central tendencies that arise within the diverse courses of action that are followed by particular actors in situations of a certain type. (...). And, in turn, a case must be made to show how these central tendencies in action would, if operative, actually give rise, through their intended and unintended consequences, to the regularities that constitute the explananda. (Goldthorpe, 2001, página 12)

- Elaborar hipótesis empíricas que sirvan para verificar la teoría. No se trata de verificar todos y cada uno de los puntos de la misma sino de pensar: si mi teoría es correcta, ¿qué debería poder observar en los datos de los que dispongo?

Siguiendo estos tres pasos podemos llegar a corroborar una teoría explicativa de los fenómenos observados que determine la causalidad de una relación pero, en todo caso, esta causalidad se imprime de manera teórica, y de la misma manera debe rechazarse cuando queramos falsificarla.

Para rechazar el que un fenómeno es causa de otro es necesario, por tanto, construir una teoría alternativa a la existente que explique, sobre la base de la acción humana, las mismas regularidades a las que la primera trataba de dar sentido. Y también, por supuesto, demostrar que las asunciones de esta nueva teoría se pueden verificar empíricamente.

En nuestro caso, la regularidad de la relación entre los dos fenómenos que pretendemos relacionar: la legitimidad del EB y su forma de organizarse, se demuestra en el capítulo 5. La teoría que explica la relación entre legitimidad del Estado del Bienestar y su forma de organización sobre la base de las acciones de los individuos bajo distintas formas organizativas, y que entiende el segundo fenómeno como causa del primero, está desarrollada en el capítulo 3, y la comprobación empírica de la misma figura en los capítulos 6 a 10.

¿Podría ser todo al revés? ¿Podríamos estar confundiendo causas con efectos?

Sin duda, pero por ahora no se me ocurre ninguna teoría que pudiera explicar que la causalidad funciona en sentido inverso, especialmente, si tenemos en cuenta que esta teoría debería explicar la acción humana que da lugar a la relación entre los fenómenos. Si en el análisis siguiente demostramos que los programas de bienestar más integradores son los que más legitimidad adquieren por haber logrado unir a las clases medias y a los ciudadanos con valores individualistas a su base de apoyo, una teoría que tomase la legitimidad del EB como causa de la forma que este adquiere debería explicar, como mínimo:

- Por qué en unos países las clases medias y medias altas eran más favorables a implantar sistemas de bienestar de lo que lo eran en otros países, antes incluso de que ningún sistema de bienestar se hubiera puesto en marcha.
- Por qué la gente con valores individualistas era, en los momentos fundacionales del EB, más favorable a implantar sistemas de bienestar en unos países que en otros.
- Mediante qué vías estos deseos se tradujeron en realidades políticas, y por qué las dos pautas anteriores no han sufrido cambios a lo largo del tiempo pese a que muchos de quienes componían las clases medias-altas y los colectivos de individualistas en los años en los que se fundaron los sistemas de bienestar han muerto ya hace tiempo.

Por supuesto, es posible que aparezca una teoría que explique todo lo anterior y que además explique las pautas que se dan en nuestros datos de manera más convincente. Hasta entonces, la teoría que manejamos es la que me parece más razonable, por esto argumentaremos, en las conclusiones de este trabajo, la existencia de relaciones de causa-efecto.

Terminaré esta argumentación con unas palabras de Elja Arjas, uno de los académicos que han dedicado su tiempo al tema de la causalidad y a la ayuda que la estadística nos presta para establecerla:

As most scientist do not recognize that merely reporting such statistically significant associations found in the data would be a relevant goal for their study, but prefer to use the language of causality, they have to bridge the gap between where the statistical analysis left them and the achievement of a causal conclusion. Sound arguments for doing this are essentially contextual, based on the analyst's knowledge about the subject-matter. This is by itself a valid approach, and its only fair to say that no formal statistical machinery can compensate for sensible argumentation (Arjas, 2001, p. 60).

4.2. Selección de casos

Elegir los países sobre los que trabajar es uno de los pasos más complejos del método comparativo, especialmente cuando estamos buscando pautas generales y deseáramos poder generalizar las conclusiones de nuestro estudio más allá del puñado de países sobre los que trabajamos. Para que esta generalización sea posible, la selección de casos no puede ser aleatoria.

En primer lugar hay que decidir qué número de países vamos a estudiar, muchos o pocos dependiendo de si vamos a primar la extensión o la intensidad del análisis. Una cosa no es mejor que la otra, ya que el método comparativo no fija un «número adecuado» de países sino un número que se adecua a las hipótesis que queremos verificar que, por tanto, variará de un estudio a otro (Dogan, 1994). En algunos casos dos países serán suficientes (Lipset estudia dos casos extremos –Japón y EE.UU.– para verificar hipótesis sobre los valores tradicionales en las sociedades técnicamente desarrolladas, 1994), en otros es necesario trabajar con 10, 20, o incluso con todos (Jönsson & Eckerlund, 2003²).

² Jönsson & Eckerlund toman una muestra de 30 países para analizar qué variables macroeconómicas correlacionan con el gasto sanitario total. En general, los estudios económicos utilizan muchos países pero se fijan tan sólo en asociaciones simples entre tres o cuatro variables. Los estudios comparados en Ciencias Sociales difícilmente trabajan con más de 8 o 10 países para poder realizar análisis con mayor profundidad.

En segundo lugar necesitamos unos criterios para llevar a cabo la selección de los casos concretos. La población de países es grande y permite el análisis estadístico, pese a lo cual, para prácticamente cualquier estudio comparativo resulta absurdo escoger una muestra de países «al azar» y es mucho más aconsejable sustituir el muestreo aleatorio propio de las muestras estadísticas por la selección basada en criterios sustantivos (Ragin, 1987). El método comparativo, uno de los más antiguos en sociología, ha definido los siguientes criterios:

1. Aumentar la variedad: si queremos estudiar la relación entre dos fenómenos debemos escoger casos que varíen sustancialmente entre sí respecto de al menos uno de los dos fenómenos que nos interesa relacionar.
2. Incluir casos extremos, pero evitar sacar demasiadas conclusiones del estudio exclusivo de los extremos.
3. Incluir casos similares en los dos fenómenos porque, determinando las características que no comparten, podremos eliminar del análisis toda una serie de posibles variables explicativas.

Para aplicar los tres criterios anteriores a la selección de nuestra propia muestra vamos a volver a la revisión de tipologías de bienestar que hicimos en el capítulo 2 porque, como allí comentamos, parte de la utilidad de cualquiera de ellas radica en ofrecer un panorama descriptivo de los sistemas de bienestar occidentales y una clasificación de países conforme a la similitud o lejanía de sus políticas de bienestar.

Según el primero de los tres criterios expuestos nuestra selección de países ha de incluir variedad de Estados del Bienestar, por lo que deberíamos seleccionar algunos países pertenecientes a cada uno de los tipos de EB. El problema para hacer esto es que no hay una sola tipología de Estados del Bienestar para guiar nuestra selección sino varias, lo que podemos solventar porque, como también hemos mencionado en el capítulo 2, existe un grupo de países cuya clasificación en uno u otro tipo de Estado del Bienestar genera bastante acuerdo entre todos los modelizadores. Los denominamos «países fácilmente clasificables», y por esto mismo los incluiremos en primer lugar: Noruega y Suecia como representantes del tipo Socialdemócrata; Francia y Alemania como representantes del tipo Corporativo; Australia, Canadá y Estados Unidos como representantes del tipo Liberal de Estado del Bienestar.

Incluimos así casos similares en lo que al sistema de bienestar se refiere: los países que están dentro del mismo tipo de EB, variación en el fenómeno estudiado al coger representantes de todos los tipos de EB, y casos extremos: Suecia o Noruega frente EE.UU., países que sabemos opuestos porque siempre se encuentran en los dos extremos de cualquier clasificación de sistemas de bienestar, ya se haya fundamentado en variables de gasto público, organización de sus programas de bienestar, o cuestiones históricas sobre su surgimiento.

Con estos países recién mencionados nuestra muestra cumple el objetivo de integrar variación en uno de los dos fenómenos que pretendemos relacionar: los sistemas de bienestar, porque obviamente, si hay tres grandes «tipos de Estado del Bienestar» y hemos tomado dos o tres representantes de cada uno, la variedad en este nivel está recogida.

Sin embargo, al haber elegido a los mejores representantes de cada tipo, hemos seleccionado exclusivamente sistemas coherentes, sistemas de bienestar en los que todos (o la mayoría) de los programas se organizan siguiendo una lógica común.

Como sabemos que no todos los países tienen sistemas de bienestar coherentes, vamos a incluir también variación en cuanto a la homogeneidad o heterogeneidad de los sistemas.

Incluiremos para ello sistemas mixtos, que combinan programas organizados de forma Socialdemócrata con otros organizados de forma Corporativa o Liberal, e incluso que combinan dentro de un mismo programa características propias de uno y otro tipo.

Un ejemplo de sistema heterogéneo sería Inglaterra, con un sistema sanitario de características similares a los de Suecia o Noruega (organizado siguiendo las líneas socialdemócratas) y un sistema de pensiones que se parece cada vez más al de los países liberales. O también España e Italia, donde los programas de sanidad y pensiones se organizan de forma Socialdemócrata pero en los que todo el resto de programas que caracterizarían los sistemas de Suecia y Noruega, simplemente no existen.

Si recordamos lo dicho en el capítulo 2, estos países mixtos son precisamente aquellos que suscitan menor acuerdo entre los estudiosos de los Estados del Bienestar comparados: España e Italia entran, según la tipología, junto a Francia y Alemania en el modelo Corporativo, o formando un grupo propio llamado «Bimarkiano de alto gasto» (Bonoli, 1997) o «Mediterráneo»³. Inglaterra figura en el modelo Liberal de Esping-Andersen aunque con algunas dudas, en el modelo Radical de Castles and Mitchell, y en el «Beveridgeano de bajo gasto» de Bonoli; y quizás el mejor ejemplo de sistema difícil de clasificar es Irlanda, país que dependiendo del autor será considerado Corporativo, Liberal, Radical, ambivalente, o incluso imposible de clasificar⁴.

La inclusión de algunos representantes de cada tipo de EB y, además, de otros que no se ajustan bien a ninguno de ellos supone haber cumplido con bastante rigor los criterios de selección marcados por el método comparativo pero, además, los EBs mixtos también responden a necesidades del análisis de datos, que se divide en tres partes:

1. Una parte descriptiva, en la que veremos el ranking de los países en cuanto a la legitimidad de sus sistemas de bienestar y la existencia de una aparente relación entre el nivel de legitimidad y el tipo de EB.
2. Una segunda parte explicativa a nivel micro, donde analizaremos la composición de los consensos en torno a las políticas sociales en cada país para ver de dónde salen los apoyos «extra» de algunos sistemas de bienestar.
3. Una tercera parte explicativa a nivel macro, en la que abandonamos al individuo como unidad de análisis (dejamos de interesarnos por las diferencias entre individuos en sus opiniones sobre el EB) para centrarnos en los programas de bienestar. Trataremos aquí de ver qué características concretas de los programas de bienestar correlacionan con el apoyo popular a los mismos, y tener países menos homogéneos en cuanto a sus sistemas de bienestar nos servirá como mecanismo de control. Un ejemplo sirve para aclarar esto:

Si queremos demostrar que el nivel de gasto público sanitario explica parte del apoyo a los programas públicos de sanidad no vale con encontrar que el tipo Socialdemócrata de EB (carac-

³ Para ver algunos trabajos sobre el modelo mediterráneo de Estado del Bienestar: Trifiletti, 1999; Ferrera, 1996.

⁴ Para una revisión de los estudios que tratan de dilucidar a qué tipo pertenece el Estado del Bienestar irlandés ver O'Donnell, 1999. Entre quienes niegan la posibilidad de clasificar al EB irlandés en una tipología: Cousins, 1997.

terizado por alto gasto pero también por muchas otras cosas) tiene más apoyo a la existencia de sanidad pública que el tipo de EB Liberal (con menos gasto, también entre otras cosas). Lo que deberíamos encontrar es que, independientemente del tipo de EB en el que estén insertos, los programas públicos de sanidad que más dinero emplean son también los que mayores porcentajes de ciudadanos favorables tienen. Para poder realizar comprobaciones de este tipo necesitamos contar con programas de bienestar que se organizan de una determinada forma, pero no están insertos en un sistema de bienestar coherente con ellos, y aquí es donde nuestros países mixtos muestran su utilidad.

4.3. Datos sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar

4.3.1. El International Social Survey Programme

Los datos sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar proceden del International Social Survey Programme (ISSP)⁵, módulo *The Role of Government 1996*.

Para quien no esté familiarizado con las encuestas comparativas, es preciso mencionar que el ISSP es, sin lugar a dudas, uno de los intentos más serios hasta la fecha para recabar información sobre las actitudes socio-políticas de los ciudadanos haciéndolas comparables a lo largo de un gran número de países⁶.

Nacido en 1983, el ISSP ha sido un éxito sin precedentes no sólo en cuanto a proveer a los investigadores de información comparativa «libre» (sus bases son gratuitas y no hay periodos de retención de los datos⁷), sino en cuanto a solventar los dos problemas básicos de las encuestas transnacionales: el coste y la comparabilidad, mediante una adecuada organización.

En cuanto al problema económico, si una encuesta a nivel nacional se escapa del presupuesto de casi cualquier proyecto de investigación y una encuesta que cubra tres o cuatro países dispara los costes, la sola idea de realizarla en 24 o 30 países es financieramente descabellada para casi cualquier organismo. ¿Cómo puede entonces el ISSP realizar una encuesta comparada -en más de 20 países- al año?

El diseño organizativo ya tiene en cuenta estos problemas financieros y, por eso, el International Social Survey Programme no es una institución independiente sino un acuerdo entre centros estadísticos nacionales. El ISSP no tiene sede ni presupuesto propio, pero no lo necesita puesto que el acuerdo es que cada uno de los centros estadísticos participantes corra con los gastos de la realización de la encuesta en su país y los derivados de enviar un representante a las reuniones de coordinación.

⁵ Para más información sobre el ISSP ver Svallfors, 1996. También en <http://www.issp.org>.

⁶ Otras encuestas comparadas sobre actitudes son el Eurobarómetro, el Latinobarómetro o el World Values Survey.

⁷ Algunos centros estadísticos fijan un periodo durante el cual una base de datos es exclusivamente de uso interno. Eurostat, por ejemplo, hace públicos muchos de sus Eurobarómetros cuando ya son datos «viejos»; y el secreto no sólo afecta a los datos sino también al contenido de los cuestionarios. Es decir, que durante, por ejemplo, los dos o tres años posteriores a la realización del trabajo de campo, un investigador externo sólo conocerá el título de la encuesta realizada.

En realidad, tampoco para estos centros estadísticos nacionales el proyecto del ISSP es demasiado costoso; la mayoría de ellos son organismos oficiales que han de realizar un gran número de encuestas a lo largo del año y, normalmente, añaden el cuestionario del ISSP (no suele ser largo, unos 15 minutos) como anexo a alguna de sus encuestas habituales.

En cuanto a los problemas derivados de construir un cuestionario común para todos los países (lo que implica diversidad de culturas e idiomas⁸), sucesivas reuniones de coordinación con miembros de cada organismo nacional garantizan la homogeneidad del instrumento: que todos los *ítems* se pregunten en el mismo orden y con el mismo significado en cada país. El mejor reconocimiento a la eficacia de este procedimiento de trabajo es el incremento constante en el número de países que desean formar parte del proyecto. Si en 1983 el ISSP comenzó su andadura con 5 países miembros (Australia, Alemania, EE.UU., Italia y Reino Unido), hoy cuenta con la participación de centros estadísticos de 34 naciones.

En las reuniones de coordinación mencionadas también se deciden los temas que se van a estudiar cada año y, aunque prima la variedad, unos cuantos cuestionarios se repiten cada cierto tiempo para permitir análisis temporales. La encuesta *The Role of Government*, por ejemplo, se realizó en 1985, 1990 y 1996 –la próxima oleada se espera para 2008–; la encuesta *Social Inequality* cuenta también con datos correspondientes a tres años (1987, 1992, 1999); mientras otras como *Social Networks* (1986) o *National Identities* (1995) han sido encuestas puntuales⁹.

Nosotros usaremos la encuesta *The Role of Government*, para la que existen tres olas y en la que han llegado a participar hasta 24 países, pero trabajaremos sólo con los datos de la última ola (1996) y 11 de los 24 países participantes. Es interesante mencionar que los análisis que vamos a realizar a lo largo de este trabajo pueden ser ampliados tanto en cuanto al número de países, como incluyendo una perspectiva temporal, aunque esto último de forma muy restringida ya que en la primera oleada, la de 1985, sólo participaron 5 países.

4.3.2. El cuestionario y las variables que utilizaremos

Una cuestión terminológica

El cuestionario de la encuesta que vamos a utilizar: *The Role of Government III*, trata de aproximarse, como su título indica, a las opiniones de los ciudadanos sobre la intervención del Estado en distintos ámbitos. En España, el CIS tradujo el título por «Los ciudadanos y el Estado», pese a lo cual en todos los enunciados se pregunta a los encuestados por lo que debería hacer «el Gobierno», y no «el Estado». Aunque esta forma de proceder no puede considerarse errónea, tal vez habría sido más adecuado traducir en este caso «Government» por «Estado», ya que en el contexto español el término «Gobierno» suele utilizarse en las encuestas para referirse a la acción del gobierno de turno.

⁸ La propia palabra «welfare» no tiene la misma resonancia en países que comparten el mismo idioma como Inglaterra y Estados Unidos (Smith, 1987). Este tipo de cuestiones se solventan en las reuniones de coordinación, donde se elaboran unas especificaciones muy detalladas para los traductores sobre el sentido de cada palabra que se incluye en los enunciados.

⁹ El listado completo de temas y los cuestionarios originales pueden encontrarse en www.issp.org.

Como se especifica en las notas para los traductores que el ISSP incluye en el cuestionario original (en inglés), la encuesta no trata de ver lo que la gente cree que un gobierno concreto debería hacer, sino determinar cuáles son, a ojos de los ciudadanos, las responsabilidades del Estado independientemente del gobierno de turno. En otros países donde también existen diferencias de matiz entre los términos referidos a «Gobierno» y «Estado» se optó por el relativo al Estado, en referencia al conjunto de instituciones permanentes de las que el gobierno de turno es tan sólo un gestor temporal.

Si explico esto con tanto detalle es porque, a lo largo del análisis de datos, veremos la palabra «Gobierno» tanto en los enunciados de las preguntas como en la cabecera de algunas tablas, pero en el texto encontraremos también la palabra Estado. Los dos términos se usan de forma intercambiable en este trabajo pero siempre referidos al Estado¹⁰.

Descripción del cuestionario

El cuestionario, que figura completo en el Anexo 10, se organiza a través de tres bloques de preguntas:

1. Actitudes más o menos autoritarias o libertarias hacia el Estado. Para ello se pregunta sobre temas en los que los derechos colectivos y las libertades individuales pueden entrar en conflicto: derecho a la libertad de expresión para colectivos antisistema, derecho del Estado a guardar datos sobre los ciudadanos, derecho del individuo a infringir la ley si esta va contra su conciencia.
2. Las responsabilidades del Estado: en la economía, en el bienestar, en el mercado de trabajo, en las comunicaciones, etc.
3. El gasto público que se debería destinar a determinadas partidas, y hasta qué punto el entrevistado está dispuesto a pagar más impuestos si a cambio se extienden los servicios sociales o, viceversa, si desearía pagar menos impuestos aunque ello supusiera recortar los servicios sociales. También se incluyen tres preguntas sobre el porcentaje de impuestos sobre la renta que deberían pagar los colectivos de ingresos bajos, medios y altos, con el fin de evaluar el grado de progresividad fiscal que se considera deseable.
4. Preguntas socio-demográficas.

Variables dependientes

Cualquiera de los temas anteriores tiene interés, especialmente para alguien que estudia actitudes políticas, pero las preguntas que mejor se adecuan al objetivo de esta investigación son las del bloque 2, referidas a las responsabilidades del Estado.

En el cuestionario se puede ver con más detalle, pero lo fundamental es que, entre otras posibles responsabilidades, se preguntaba a los ciudadanos si el Estado debería garantizar sanidad, pensiones y ayuda al desempleo. El enunciado es como sigue:

¹⁰ También en el cuestionario del CIS se usan de forma intercambiable ya que aunque el título es «Los ciudadanos y el Estado», en muchas preguntas el enunciado hace referencia al Gobierno.

«En general, ¿cree Ud. que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno...?»

- Dar asistencia sanitaria a los enfermos.
- Asegurar un nivel de vida digno a los ancianos.
- Asegurar un nivel de vida digno a los desempleados.»

Y como opciones de respuesta, en los tres casos se ofrecían las mismas:

- Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno
- Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno
- Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno
- No, de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno.

Con lo cual, las clásicas tablas de frecuencia, quizás la manera más fácil de hacerse una idea de los datos con que contamos, son así:

Tabla 4.1.

¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?

| País España | % |
|--|-------|
| Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno | 80,9% |
| Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno | 18,3% |
| Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno | 0,7% |
| No, de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno | 0,1% |
| Total | 100% |

Fuente: ISSP, 1996.

Justificación de la elección de preguntas

¿Debe ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos? ¿Garantizar un nivel de vida digno a los ancianos y a los desempleados? De vez en cuando incluiremos otros *ítems* como complemento, pero es necesario adelantar ya que las tres preguntas anteriores constituyen las principales variables dependientes del análisis y, por tanto, su eje. Dada la importancia que van a tener es necesario justificar su elección porque, aunque probablemente pequen de ser generales y simples, creo que su utilidad es mucho mayor de lo que parece y sus ventajas mayores que sus inconvenientes.

En primer lugar, recordemos que en todos los países sobre los que trabajamos existen programas de desempleo, pensiones y sanidad públicos (MISSOC, 2003; OCDE, 1998), por lo que el marco de referencia más cercano para los entrevistados a la hora de responder a las preguntas serán sus respectivos programas públicos nacionales.

Además, no olvidemos que la encuesta es comparativa sólo a nuestros ojos porque el trabajo de campo se llevó a cabo independientemente en cada país sin advertir a los entrevistados que la encuesta formaba parte de un estudio comparado. Así que cuando se pregunta «¿Cree Ud. Que el Gobierno debería ser responsable de dar asistencia sanitaria a los enfermos?», lo que se está preguntando es, por ejemplo en el caso inglés, «Cree Ud. que el Gobierno británico debería ser responsable de dar sanidad a los enfermos (británicos)?» A la hora de responder a esta pregunta es evidente que, entre otras muchas cuestiones, el programa sanitario existente en Inglaterra es considerado. Una entrevistada de Glasgow no va a pensar en la sanidad sueca, ni en el Medicare estadounidense. Lo primero que la vendrá a la mente será el programa de sanidad británico, el que conoce y le afecta. Nuestra pregunta se desliza así por distintos contextos nacionales sin perder su sentido, lo que la convierte en un buen instrumento comparativo.

Por otro lado, si bien hubiéramos podido elegir preguntas más concretas sobre el nivel de gasto que se percibe adecuado, los resultados no nos serían de gran utilidad. Para verificar las hipótesis del capítulo 3 necesitamos un indicador de «apoyo a los programas de bienestar» y, aunque tendemos a pensar que apoyar el Estado del Bienestar implica pedir aumentos de gasto en sus programas, lo cierto es que dependiendo de países una actitud favorable no ya al aumento del gasto sino al mero mantenimiento del mismo puede estar indicando un apoyo fuerte. Esto dependerá, por supuesto, de cuánto dinero se esté gastando efectivamente, de si ha habido aumentos (o recortes) recientes en los presupuestos para bienestar, de la situación en que se encuentra la economía nacional (Svallfors, 1999) y de qué otras necesidades sean percibidas como acuciantes en ese momento.

Para algunos de los países de nuestra muestra, aunque no para todos, podríamos haber utilizado una pregunta sobre la satisfacción con los programas públicos de bienestar. El primer problema es evidente: no tenemos datos homogéneos para todos los países. El segundo es menos evidente pero más crucial: sabemos que a menudo se combina el deseo de que el Gobierno intervenga en bienestar con descontento o críticas a ciertos aspectos de esta intervención, y es frecuente que quienes con más convencimiento apoyan la existencia de programas públicos sean sus críticos más feroces.

En España, por ejemplo, se combina un alto apoyo a los programas públicos con considerables índices de insatisfacción respecto a su funcionamiento y una percepción de infra-financiación de lo público¹¹ (Arriba, Calzada & del Pino, 2006; Calzada & Del Pino, 2007). Un sencillo análisis nos permite ver que estas tres variables tienen una fuerte correlación, y que quienes más insatisfechos están con el EB son también los más partidarios de que estas políticas existan, y los mayores defensores de aumentar el presupuesto que el Gobierno destina a sus partidas.

La insatisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos no es, por tanto, un indicador de que la gente no desee que existan estos programas sino al contrario, en el caso español correlaciona con un deseo de reforzar lo público. Esta misma pauta se produce también para Inglaterra (Gooby, 1989).

Por todo lo dicho, considero que las preguntas sobre las responsabilidades del Gobierno constituyen mejores indicadores de las actitudes hacia el EB que el resto de preguntas a nuestro

¹¹ Estudios CIS 2366 y 2206.

alcance. Su interpretación es más clara, lo que facilita la comparación internacional y, además, su carácter general las «inmuniza» en cierta medida de los vaivenes de opinión generados por acontecimientos políticos o económicos puntuales y nos permite pensar que apuntan a una actitud ante el EB más permanente que las otras posibilidades.

Por otro lado, el hecho de que sean preguntas sencillas genera un porcentaje de «no sabe/ no contesta» muy bajo, lo que nos indica que la gente tiene, en general, una opinión formada sobre si los programas de bienestar deberían o no deberían existir, y aporta además dos ventajas para el análisis estadístico:

- Para construir los modelos de regresión tenemos que eliminar a quienes no respondieron a alguna de las preguntas con las que trabajamos, pero la pérdida de casos no es problemática porque este colectivo es muy pequeño.
- Cuando los porcentajes de «no sabe/ no contesta» son altos suele haber una correlación entre determinadas variables socio-demográficas y la no respuesta, lo que provoca sesgos en la muestra y sesgos en las conclusiones que de ella extraemos. La baja tasa de no respuesta nos garantiza que las conclusiones no estarán sesgadas, ya que los individuos que responden a las preguntas representan a toda la población objetivo.

El único problema que puede presentar el alto nivel de generalidad de las preguntas que hemos elegido tiene que ver con lo que sabemos acerca de las variaciones internacionales en actitudes hacia el EB. Como hemos dicho anteriormente, las actitudes hacia el EB varían entre países, y esta variación se incrementa a medida que avanzamos en el nivel de concreción de las preguntas. Ciertamente, de entre las preguntas que suelen usarse en las encuestas comparadas de actitudes hacia el Estado del Bienestar, ésta que usamos nosotros es una de las que menor variación presenta entre países, pero esto, creemos, tampoco es malo. Tratar de verificar nuestras hipótesis en uno de los casos en los que es más difícil que se cumplan supone un *test* más duro y por ende más fiable.

Variables independientes

Las indicaciones del ISSP en cuanto a las variables dependientes del cuestionario (las preguntas sobre actitudes hacia el Estado) son muy estrictas: diversos mecanismos garantizan que todos los ítems se pregunten en todos los países con el mismo orden y el mismo significado. Pero, lamentablemente, los mecanismos para que las variables independientes (las preguntas sobre características sociodemográficas del individuo) sean homogéneas en todos los cuestionarios nacionales son bastante más relajados.

En primer lugar, aunque todas las variables independientes son obligatorias (ningún país participante en el estudio puede decidir por su cuenta eliminar una de su cuestionario), se deja cierta libertad en la manera de elaborar las preguntas. El resultado es que la variable ingresos es continua en unos países y categórica¹² en otros, referida a ingresos mensuales o anuales, netos o brutos, en función de tradiciones estadísticas nacionales y, por supuesto, medida en la moneda nacional de cada país, ya que en 1996 no existía aún el Euro.

¹² Entre los países que introducen la variable ingresos en forma categórica tampoco hay acuerdo, y el número de categorías varía de país a país.

En segundo lugar, aunque como ya hemos dicho las variables independientes son de inclusión obligatoria para todos los países, algunos centros de estadística parecen entender con cierta holgura el concepto de obligatoriedad y se permiten eliminar algunas de sus cuestionarios. Las razones de esta no inclusión podrían ser variadas, y la propia auto-evaluación que el ISSP realizó del módulo *The Role of Government* encontró que:

*A fair number of members omit background variables in each of the modules under review. In some instances, numerous background variables have been omitted (...). At the 1999 meeting it became clear that a variety of factors have led members to omit background variables. There has, for example, been some uncertainty about how binding or compulsory «compulsory» variables are (Harkness et al., 2000, p. 8).*¹³

Estas omisiones azarosas de variables independientes suponen un enorme condicionante a la hora de diseñar nuestro análisis.

A lo largo del mismo, pero sobre todo en la segunda parte, donde estudiamos la composición de los colectivos que apoyan la existencia de programas de bienestar en cada país, vamos a necesitar una variable que sirva como indicador de la posición económica del individuo y otra que sirva como indicador de su ideología. La ausencia, en los cuestionarios de algunos países, de algunas variables sociodemográficas relacionadas con estas cuestiones prácticamente nos «obliga» a trabajar con las pocas que sí fueron incluidas en los once países sobre los que hemos decidido trabajar.

En el caso de la posición económica vamos a construir un indicador a partir de la variable ingreso familiar, presente en todos los cuestionarios nacionales, y que suelen considerarse preferibles a los ingresos individuales¹⁴ para indicar la situación económica del individuo.

El hecho de que cada país decidiera elaborar la pregunta sobre ingresos familiares de distinta manera (ingresos anuales o mensuales, brutos o netos etc.) implica que para hacer comparable la variable «ingresos familiares» a lo largo de todos los países de nuestro estudio tenemos que transformarla en una medida relativa de posición económica. Dado que la pobreza se suele medir como la población que vive con rentas inferiores a un determinado porcentaje de la mediana nacional¹⁵, transformaremos los ingresos familiares en posiciones respecto de la mediana de ingresos para cada país¹⁶. Perdemos con ello la información sobre cuáles son los ingresos de cada entrevistado «en dinero», pero ganamos una medida de su posición en la

¹³ Un número considerable de países miembros omite variables socio-demográficas en cada uno de los módulos que fueron revisados. En algunos casos, numerosas variables socio-demográficas fueron omitidas (...). En la reunión de 1999 quedó claro que una variedad de factores había llevado a los miembros a omitir variables socio-demográficas. Por ejemplo, había habido un cierto grado de incertidumbre acerca de cuánto de imperativas u obligatorias eran las variables calificadas como «obligatorias». (Harkness et al., 2000, p.8). Traducción propia.

¹⁴ Korpi & Palme, (1998) y Houtman, (2000) se refieren a las ventajas de utilizar los ingresos familiares frente a los ingresos individuales como medida de posición económica de un individuo. De todas formas, los ingresos individuales es una variable que faltaba para muchos de los países que estamos estudiando.

¹⁵ Si ordenamos a todos los individuos de un país en función de sus ingresos, con el individuo que tiene menos ingresos a un extremo y el que tiene más en el extremo opuesto, la mediana serán los ingresos de la persona que se encuentre justo en el punto medio de la escala. No es la media de ingresos, que se calcula sumando los ingresos de todo el mundo y dividiendo por el número de individuos, sino que son los ingresos que tendría una persona que tuviera al 50% de la población por encima y al otro 50% por debajo. En una muestra de 100 individuos ordenados de menor a mayor nivel de ingresos, la mediana son los ingresos del individuo número 50.

¹⁶ La mediana se ha calculado a partir de los datos del cuestionario.

escala de ingresos nacional. Sabremos entonces si un individuo tiene una posición económica media, baja, o elevada, respecto del resto de sus compatriotas, lo que no sólo es bastante más sustancial que el monto de sus ingresos de cara al efecto que esta variable pueda tener sobre las actitudes, sino que además nos permite comparar individuos independientemente del lugar en el que viven porque, al fin, ser pobre o ser rico se define siempre en relación a lo que tienen o dejan de tener quienes comparten con nosotros el país.

Nuestra variable de posición relativa tiene, y hemos de mencionarlo, una limitación: debido a que la variable ingresos familiares tiene distintas categorías de respuesta en cada país, la escala de ingresos de nuestra variable está restringida en los extremos: va de -0.6 veces la mediana hasta +0.6 veces la mediana. La gente que tiene ingresos menores al 60% de la mediana, o quienes los tienen mayores al 160% más de la mediana, están agrupados en las categorías inferior y superior. Esto es así porque, para poder incluirla en los análisis de regresión, hemos tenido que ajustar nuestra escala a la del país con la categoría de respuesta más corta: la de Suecia¹⁷.

En cuanto a encontrar indicadores para la ideología, los problemas vinieron por el mismo camino: la autoubicación ideológica en la escala 1-10 faltaba en algunos casos, aunque por otro lado esta no es una buena variable para comparar países porque no tiene el mismo sentido en todos ellos. Y dado que no todos los países celebran sus elecciones en el mismo momento, la variable «voto en las últimas elecciones» se refería, en algunos casos, a un periodo del tiempo bastante largo, lo que aumentaba mucho la tasa de no respuesta (o no recuerdo).

Por eso hemos tomado como indicador las respuestas a una pregunta en la que se pedía a los entrevistados su opinión sobre la redistribución.

Pregunta: *¿Cuál es su opinión sobre la siguiente afirmación «es responsabilidad del Gobierno reducir las diferencias de ingresos entre gente con altos ingresos y gente con bajos ingresos».*

- *Muy de acuerdo.*
- *De acuerdo.*
- *Ni de acuerdo ni en desacuerdo.*
- *En desacuerdo.*
- *Muy en desacuerdo.*

Por un lado esta pregunta es un buen indicador de la ideología en el eje socialismo-liberalismo económico, ya que implica una posición sobre las desigualdades de ingresos y lo que habría que hacer al respecto. Por otro lado, sirve de indicador de los valores del individuo en el eje igualitarismo-individualismo económico, una de las cuestiones que según la literatura existente están más relacionadas con las actitudes hacia el Estado del Bienestar y, además, ya se ha utilizado en muchos estudios sobre actitudes hacia el EB con lo que sabemos de su importante poder explicativo. (Andreß & Heien, 2001; Blekesaune & Quadagno, 2003).

¹⁷ El hecho de que nuestra variable tenga como mínimo «-0.6» (ingresos inferiores a la mediana en un 60%) y como máximo «0.6» (ingresos superiores a la mediana en un 60%) nos hace perder poca información en la parte baja de la escala. Incluso los países en los que esta variable se incluyó en el cuestionario como continua, como Australia o Noruega, los ingresos más pequeños están en torno a -0.8, es decir, ingresos inferiores a la mediana en un 80%. En la parte alta de la escala encontramos valores más extremos, aunque con muy pocos individuos en cada uno de ellos. Es fundamentalmente entre las clases medias-altas y las clases altas entre quienes nuestra variable no distingue.

4.4. Datos sobre los programas de bienestar

En el capítulo 10, donde se toma como unidad de análisis el programa de bienestar para estudiar la relación entre las características concretas de los programas y su nivel de apoyo ciudadano, utilizaremos información proveniente, en su mayor parte, de distintas bases de datos de la OCDE.

En ese último capítulo ya justificaremos detalladamente los datos que hemos seleccionado, por lo que baste aquí señalar que, al menos en lo que a datos comparativos se refiere, los de la OCDE son los más utilizados y los que están sujetos a mayores controles de calidad. No es que sean perfectos, como explicaremos más adelante, pero tienen bastantes ventajas. La mayor de ellas es que nos proveen de indicadores armonizados para todos los países, lo que permite establecer comparaciones que serían inviables si tratásemos de recopilar estos datos por nuestra cuenta ya que la heterogeneidad de la forma de medir y de los datos que ofrece cada uno de los sistemas estadísticos nacionales los convierte en una fuente poco adecuada para los estudios comparados (Dogan, 1994). En palabras de Desrosières (1996), refiriéndose a los indicadores que saca cada país sobre sí mismo:

Users expect them to be reliable, except in so far as they are constrained by technical and financial factors. Closer scrutiny suggests, however, that statistical products are dependent on the history, culture and administrative structures specific to each country (Desrosières, 1996, p. 17)

4.5. Técnicas utilizadas en el análisis de los datos

Las hipótesis que sirven de guía a este estudio siguen una secuencia de menor a mayor complejidad, y esto va a traducirse en un incremento progresivo de la complejidad de las técnicas estadísticas que aplicaremos para su contrastación empírica.

En la primera parte del análisis utilizaremos las clásicas tablas de frecuencia para dar el primer vistazo a los datos, y las convertiremos luego en índices de apoyo al EB para cada país con el objetivo de simplificar la información de las mismas y ordenar a los países en función del nivel de legitimidad de sus sistemas de bienestar.

A partir de aquí, y aunque de vez en cuando seguiremos construyendo índices de apoyo, la mayor parte del análisis se lleva a cabo usando modelos de regresión. En todos los casos iremos explicando lo que los coeficientes de estos modelos significan para que también el lector poco habituado a trabajar con ellos pueda ver la lógica del análisis pero, ya que la utilizaremos profusamente, en este apartado metodológico debemos dar una explicación, siquiera general, de lo que la técnica de regresión implica.

4.5.1. La regresión

La regresión tiene, en base, la misma lógica que una tabla de contingencia. Cuando queremos ver si dos variables están relacionadas, o si una puede estar determinada por la otra, nos basta con una tabla como la siguiente:

Tabla.4.2.

¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?

| Datos para Noruega | Hombres | Mujeres |
|-----------------------|---------|---------|
| Sí, sin ninguna duda | 83,9% | 91,1% |
| Probablemente sí | 15,3% | 8,1% |
| Probablemente no | 0,44% | 0,47% |
| No, de ninguna manera | 0,29% | 0,31% |
| Total | 100% | 100% |

Pearson $\chi^2(3) = 16.6020$ Pr = 0.001 ; Gamma = -0.3197 ASE = 0.077

Si queremos ver la relación entre el género y las actitudes hacia la existencia de programas públicos de salud la tabla anterior es suficiente y presenta una pauta interesante: las mujeres muestran, en mayor medida que los hombres, un apoyo sin ambages a la intervención pública en sanidad, mientras que entre los hombres, también mayoritariamente favorables a tal intervención, encontramos un mayor porcentaje de apoyo «tibio».

Sin embargo, la cuestión se complica cuando lo que queremos analizar es el efecto conjunto de tres variables. Podemos seguir utilizando tablas de contingencia pero, en la mayoría de los casos, el resultado es difícil de leer por el elevado número de casillas en la tabla.

Además, los dos procedimientos anteriores (tabla de 2×2 o de 3×3) resultan inaplicables si alguna de las variables que queremos incluir en nuestro análisis no es de naturaleza categórica sino continua, como por ejemplo la edad o los ingresos. Es evidente que una tabla de actitudes por edad resultaría, por una parte difícil de visualizar, y por otra poco significativa debido al pequeño número de casos en cada celda.

En resumen, el análisis de regresión puede sustituir a las tablas de contingencia cuando queremos ver el efecto de varias variables al mismo tiempo, y debe hacerlo cuando una o varias de estas variables son de naturaleza continua y no queremos perder información recodificando la variable para convertirla en categórica. Lo que esta técnica nos ofrece es un coeficiente para el efecto de cada una de las variables explicativas: un número que resume la relación que la variable independiente mantiene con la variable dependiente, así que un modelo de regresión con tres variables explicativas nos aportará tres coeficientes, uno para el efecto de cada variable.

En la tabla 4.3 tenemos un ejemplo: un modelo de regresión en el que la variable dependiente son las actitudes hacia la responsabilidad del Estado en sanidad, y las variables explicativas (aquellas que creemos pueden afectar a estas actitudes) son la posición económica relativa, la ideología, y el sexo.

Tabla 4.3.

Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad en función de la posición económica, la ideología y el sexo. Noruega. Regresión lineal.

| | Coef. | Std. Err. | t | P > t | [95 % Conf.] | Interval] |
|--------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|-----------|
| Posición económica | .0118003 | .0287735 | 0.41 | 0.682 | -.0446561 | .0682567 |
| Ideología | .0584921 | .0096651 | 6.05 | 0.000 | .0395283 | .0774559 |
| Sexo | -.0721468 | .0222937 | -3.24 | 0.001 | -.1158893 | -.0284044 |
| Cons. | 1.019998 | .0293694 | 34.73 | 0.000 | .962372 | 1.077623 |

Coefficientes para variables continuas

El coeficiente para cada una de las variables explicativas nos dice en cuánto aumenta la variable dependiente (las actitudes hacia la sanidad pública) cuando la variable explicativa aumenta en una unidad y mantenemos constante el valor del resto de variables incluidas en el modelo.

Nuestra variable dependiente va de 1 a 4, siendo 1 el mayor apoyo, y 4 el mayor rechazo. El coeficiente de la posición económica es positivo (0.011), lo que nos indica que, independientemente de la ideología y del sexo del individuo (las otras dos variables explicativas incluidas en el modelo), a medida que aumenta la posición económica la variable dependiente también aumenta (sus valores están más cerca del 4, esto es, del rechazo). En la columna P>t tenemos una medida de la significatividad de esta correlación. En este caso es mayor que 0.05, con lo que la relación es tan pequeña que no podemos asegurar que exista realmente en la población.

La variable Ideología también tiene un coeficiente positivo. Esta variable va de 1 a 5. El valor 1 recoge a los ciudadanos más igualitarios, el valor 5, a los más individualistas. El coeficiente positivo nos indica que a medida que aumentan los valores de la variable Ideología (a medida que se acercan a 5), los valores de la dependiente también aumentan. Es decir, independientemente del sexo y de los ingresos, la gente más individualista tiende a rechazar la existencia de un programa de sanidad pública en mayor medida que los igualitaristas. En la columna P>t el coeficiente es menor que 0.05, así que podemos estar seguros de que esta relación entre ideología y actitudes hacia la sanidad se produce en la población general y no sólo entre quienes participaron en la encuesta.

Coefficientes para variables dummi

En todos los análisis de los capítulos 6 a 8 incluiremos en las regresiones no sólo variables continuas, sino también variables categóricas y dummies. Estas últimas son especialmente importantes porque nos van a servir para recoger el efecto de cada país sobre las actitudes. Por ejemplo, la variable «Francia» es una dummi, y como tal sólo tiene dos categorías: 1. el ciudadano es francés; 0. el ciudadano tiene cualquier otra de las nacionalidades incluidas en la muestra. Utilizando de nuevo como ejemplo la variable sexo, vamos a explicar muy brevemente cómo

se interpretan los coeficientes de estas variables de dos categorías (llamadas variables «dum-mis», o sea, variables «tontas»).

La variable sexo, al menos en las encuestas, sólo tiene dos valores: «0» para los hombres y «1» para las mujeres. Volviendo a nuestro pequeño modelo de regresión, vemos que el coeficiente de la variable sexo es -0.07. El signo negativo indica que, si comparamos a hombres y mujeres con la misma ideología y la misma posición económica, la mujeres serán ligeramente más favorables a la intervención del Estado en sanidad que los hombres. Cuando la variable sexo aumenta en una unidad (pasa de 0 a 1, o sea, de ser hombre a ser mujer) los valores de la variable dependiente disminuyen (se acercan más al 1, que indica apoyo fuerte a la intervención del Estado en sanidad).

| Sexo | | ¿Debe el Gobierno proveer sanidad? | |
|------|------------|------------------------------------|---------------------------|
| ↓ | 0 = Hombre | ↑ | 1 = Sí, sin ninguna duda |
| | | | 2 = Probablemente sí |
| | | | 3 = Probablemente no |
| | 1 = Mujer | | 4 = No, de ninguna manera |

Este sería un modelo de regresión sencillo. Dependiendo del tipo de variable dependientes que tengamos los modelos pueden ser más complejos, pero la lógica será la misma: siempre nos informarán del efecto de cada variable explicativa sobre la variable dependiente, manteniendo constantes el resto de variables incluidas en el modelo.

Como nuestras tres variables dependientes son de naturaleza ordinal (las categorías de respuesta siguen un orden de menor a mayor pero no es una escala continua) vamos a utilizar a menudo regresiones logísticas ordinales. La interpretación de los coeficientes es bastante más complicada que en la regresión lineal¹⁸ pero la lógica es la misma que hemos explicado y, como presentaremos siempre los resultados de forma gráfica, no es preciso ahondar aquí en mayores particularidades.

4.5.2. La regresión multinivel.

El segundo tipo de modelos que vamos a utilizar son los modelos multinivel¹⁹ (multilevel regression models). Esta técnica se utiliza cuando la muestra no se compone de individuos totalmente independientes unos de otros sino de individuos agrupados en conjuntos.

¹⁸ En las regresiones logísticas los coeficientes de las variables explicativas indican en cuanto aumenta (o disminuye) el logaritmo de las odds [$\log \pi/1 - \pi$] de la variable dependiente cuando la variable independiente aumenta en una unidad. Odd $\pi/1 - \pi$: probabilidad de ocurrencia / probabilidad de no ocurrencia (Agresti & Finlay, 1997, p 577).

¹⁹ Uno de los libros más completos sobre esta técnica es *Multilevel analysis: An introduction to basic and advanced multilevel modelling*. (Snijders & Bosker, 1999). Una introducción en: Jones & Duncan (1998).

Se les llama también «modelos jerárquicos» porque se aplican a datos que incluyen varios niveles de observación: los individuos²⁰, los grupos de individuos, los grupos de grupos de individuos... La regresión multinivel permite analizar las variaciones en todos los niveles conjuntamente y ver las interacciones entre ellos. Con un ejemplo vamos a ver claramente qué es lo que la técnica aporta:

Imaginemos que tenemos una muestra de enfermos de corazón que han sido operados de la misma patología en distintos hospitales españoles durante el año pasado. Contamos con datos de cada paciente, por ejemplo su edad o peso, y también con datos de cada hospital, como la experiencia media de sus cirujanos y si aplican procedimientos innovadores.

Tenemos entonces información sobre dos niveles: los pacientes (nivel 1) y los hospitales (nivel 2). Dado lo cual tenemos varias opciones:

1. Podemos analizar sólo a los enfermos (unidades de nivel 1) para ver cuánto tiempo tardan, como media, en salir del hospital después de la operación. Nos interesará ver qué características del individuo (variables individuales) influyen en la recuperación, por ejemplo, si los pacientes de más edad tardan más en recuperarse. En este caso calcularemos la media para todos los pacientes de los que tenemos información, ignorando el hecho de que han sido tratados en distintos hospitales, y que el hospital (y no sólo la edad) tiene efecto sobre el tiempo de recuperación.
2. Calculando una media para cada hospital podemos ver cómo difieren los hospitales entre sí en cuanto al número de días que tardan los pacientes en volver a casa. Probablemente encontremos que en algunos centros el tiempo de recuperación es menor que en otros, pero no podremos asegurar que esto se deba a virtudes del hospital porque sabemos que las características de los pacientes, y no sólo el hospital, influyen en la velocidad de recuperación. La mejor tasa de recuperación lograda por algunos hospitales podría deberse exclusivamente a que están situados en barrios de reciente construcción con mucha población joven, que se recupera en general mejor de este tipo de operaciones.
3. Pero quizás lo más interesante sería ver cómo interactúan los dos niveles entre sí, es decir, saber cuánto importa el hospital y cuánto las características del paciente para explicar el tiempo de curación. Saber no sólo si los jóvenes se recuperan mejor de una operación de corazón, o si en algunos hospitales los operados de corazón se recuperan más rápido, sino si en algunos hospitales logran disminuir el efecto de la edad en la velocidad de recuperación.
4. Y luego, si hemos visto que en algunos hospitales los pacientes tardan menos tiempo en recuperarse y además en ellos no hay diferencias entre el ritmo de recuperación de jóvenes y mayores, queremos conocer porqué se dan estas pautas y qué características concretas de los hospitales las explican.

No es que la técnica multinivel sea una panacea. Es un avance, pero no una novedad. De hecho todas estas cuestiones, salvo la cuarta, se podrían responder utilizando modelos de regresión simple. Es verdad que empleando mucho más tiempo, porque para responder al punto 3 habría que hacer un modelo para cada hospital (y luego compararlos todos), y que además al tratar a cada hospital por separado necesitaríamos una muestra inmensa (muchos pacientes en cada hospital), pero la cuestión es que lo podríamos haber hecho.

Lo que el multinivel aporta en términos sustantivos es que:

- a) Podemos analizar al mismo tiempo las variaciones entre individuos, las variaciones entre grupos, y si determinadas variables individuales tienen un efecto distinto en cada grupo. Al hacer el análisis conjunto necesitamos menos casos y además podemos valorar la influencia de cada nivel: en el ejemplo anterior de los pacientes podríamos valorar si en la recuperación de un paciente importa más el hospital o las características del paciente.
- b) Podemos explicar porqué unos hospitales consiguen reducir la relación entre la edad y los días de recuperación. El hospital es tratado como una nueva variable que adoptará distintos valores dependiendo de sus características (la experiencia de sus cirujanos, por ejemplo), a las que se denominan variables de nivel II. Incluyendo conjuntamente en el análisis las variables de nivel I (referidas a los individuos) y de nivel II (referidas a los hospitales) podremos estudiar si la variación en ambos niveles está relacionada: si la experiencia de los cirujanos tiene que ver con que las personas mayores logren tasas de recuperación similares a las de los jóvenes.

Algo muy parecido a lo anteriormente descrito es lo que vamos a hacer en las siguientes páginas. Los individuos cuya reacción estudiamos no son pacientes sino ciudadanos de países occidentales opinando sobre los programas de bienestar. El «grupo» no es ahora el hospital, sino el país en el que cada individuo vive. Y lo que vamos a hacer con los modelos multinivel es:

1. Ver si las opiniones de los individuos sobre los programas de bienestar varían entre países, incluso aunque tengamos en cuenta que la distribución de los individuos en función de ciertas características difiere (por ejemplo, teniendo en cuenta el hecho de que hay más personas que mantienen valores igualitarios en unos países que en otros)
2. Calcular qué cuenta más a la hora de determinar las opiniones hacia los programas de bienestar, si las características individuales, o el hecho de vivir en un país u otro, y ofrecer una medida de la importancia de ambos factores.
3. Comprobar si el efecto sobre las actitudes de las variables individuales (posición económica, ideología y sexo) es distinto en unos países y en otros, y si este distinto efecto correlaciona con el nivel de apoyo agregado al programa de bienestar.
4. Ver qué características del país (de sus programas de bienestar) pueden explicar que en ellos los ciudadanos opinen de manera distinta a como lo hacen los de otros países (que viven bajo programas de bienestar con otras características).

Capítulo 5. La relación entre el tipo de Estado del Bienestar y la legitimidad

5.1. Panorama general.

5.2. ¿Son significativas las variaciones entre países?

5.3. Grupos de países en función de la legitimidad de sus Estados del Bienestar.

5.4. Una explicación alternativa de la relación entre tipo de EB y legitimidad.

5.5. Conclusiones.

5.1. Panorama general

Para comenzar nuestra inmersión en las opiniones hacia el EB vamos a ver las respuestas que los ciudadanos de nuestros once países dieron a una serie de preguntas sobre los aspectos del bienestar colectivo que deberían (o no) ser responsabilidad del Gobierno. Como ya comentamos en el capítulo anterior, conocer el porcentaje de ciudadanos que son partidarios de la existencia de programas públicos de sanidad, pensiones y desempleo es interesante para nuestros objetivos porque, pese a lo general de las preguntas que utilizamos, vamos a interpretarlas como un indicador básico de apoyo al Estado del Bienestar.

Una justificación más elaborada de las variables dependientes seleccionadas puede encontrarse en el capítulo de metodología (cap. 3) por lo que baste aquí con recordar el enunciado de las preguntas:

Pregunta: «En general, ¿cree Ud. que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno...?»

- *Dar asistencia sanitaria a los enfermos.*
- *Asegurar un nivel de vida digno a los ancianos.*
- *Asegurar un nivel de vida digno a los desempleados.»*

Opciones de respuesta:

- *Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno.*
- *Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno.*
- *Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno.*
- *No, de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno.*

A lo largo de esta parte dedicada al análisis de las actitudes iremos aplicando a nuestros datos métodos cada vez más complejos, elegidos evidentemente no porque lo complejo sea mejor *per se* sino por su adecuación a las hipótesis, cada vez más elaboradas, que trataremos de verificar.

Sin embargo, en esta primera sección puramente descriptiva creo que lo más adecuado es comenzar por ver los porcentajes de respuesta a las tres preguntas anteriores mediante tablas de frecuencia que, aunque constituyen un instrumento bastante rudo para estudiar 11 países a la vez, también son una buena manera de lograr un primer panorama de los datos.

Enseguida los porcentajes desaparecerán y se convertirán, primero en índices de apoyo agregado, luego en coeficientes de regresión y más adelante en probabilidades de apoyo condicionadas al valor de terceras variables. Precisamente por el creciente grado de abstracción es, creo, justo comenzar mostrando los datos brutos en los que se basa todo el análisis posterior. Comenzar por ver si a simple vista existen variaciones internacionales en las actitudes hacia el EB y si tienen relación, al menos aparente, con las tipologías de sistemas del bienestar.

Tabla 5.1. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad.*¿Debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?*

| País | Sí, sin ninguna duda | Probablemente sí | Probablemente no | No, de ninguna manera | Total |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| AUS | 42.4% | 51.7% | 5.4% | .4% | 100.0% |
| D-W | 50.6% | 46.0% | 2,9% | .5% | 100.0% |
| GB | 82.0% | 16.4% | 1.2% | .3% | 100.0% |
| USA | 38.5% | 46.1% | 11.7% | .37% | 100.0% |
| I | 81.0% | 17.6% | 1.0% | .4% | 100.0% |
| IRL | 74.3% | 24.7% | .8% | .1% | 100.0% |
| N | 87.4% | 11.8% | .5% | .3% | 100.0% |
| S | 71.1% | 25.3% | 2.5% | 1.2% | 100.0% |
| CDN | 63.4% | 31.9% | 3.4% | 1.3% | 100.0% |
| E | 80.9 | 18.3% | .7% | .1% | 100.0% |
| F | 54.5% | 34.7% | 7.3% | 3.5% | 100.0% |
| Total | 64.5% | 31.2% | 3.4% | 1.0% | 100.0% |

Fuente: ISSP, 1996. AUS: Australia, D-W: Alemania del Oeste, GB: Gran Bretaña, USA: Estados Unidos, I: Italia, IRL: Irlanda, N: Noruega, S: Suecia, CDN: Canadá, E: España, F: Francia.

Tabla 5.2. Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones*¿Debería ser responsabilidad del Gobierno asegurar un nivel de vida digno a los ancianos?*

| País | Sí, sin ninguna duda | Probablemente sí | Probablemente no | No, de ninguna manera | Total |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| AUS | 37.4% | 56.7% | 5.5% | .4% | 100.0% |
| D-W | 47.96% | 48.1% | 3.6% | .4% | 100.0% |
| GB | 71.0% | 26.3% | 2.3% | .4% | 100.0% |
| USA | 38.4% | 48.3% | 9.9% | 3.3% | 100.0% |
| I | 76.1% | 21.9% | 1.7% | .3% | 100.0% |
| IRL | 76.6% | 23.6% | .5% | .3% | 100.0% |
| N | 85.9% | 13.2% | .5% | .4% | 100.0% |
| S | 69.2% | 28.5% | 1.5% | 8% | 100.0% |
| CDN | 49.4% | 41.8% | 7% | 1.7% | 100.0% |
| E | 79.6% | 19.4% | .9% | .2% | 100.0% |
| F | 54.4% | 39.3% | 4.8% | 1.6% | 100.0% |
| Total | 61.0% | 34.7% | 3.5% | 8% | 100.0% |

Fuente: ISSP, 1996. AUS: Australia, D-W: Alemania del Oeste, GB: Gran Bretaña, USA: Estados Unidos, I: Italia, IRL: Irlanda, N: Noruega, S: Suecia, CDN: Canadá, E: España, F: Francia.

Tabla 5.3. Actitudes hacia la intervención del Estado en desempleo.

¿Debería ser responsabilidad del Gobierno asegurar un nivel de vida digno a los desempleados

| País | Sí, sin ninguna duda | Probablemente sí | Probablemente no | No, de ninguna manera | Total |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| AUS | 8.9% | 56.2% | 30.3% | 4.5% | 100.0% |
| D-W | 16.9% | 63.5% | 15.6% | 4% | 100.0% |
| GB | 28.4% | 49.4% | 15.3% | 7% | 100.0% |
| USA | 12.8% | 34.9% | 33.1% | 19.2% | 100.0% |
| I | 30.8% | 44.9% | 15.2% | 9.1% | 100.0% |
| IRL | 39.7% | 51.9% | 6.8% | 1.5% | 100.0% |
| N | 40.8% | 51.9% | 6.3% | 1.1% | 100.0% |
| S | 38.3% | 52.2% | 7.3% | 2.2% | 100.0% |
| CDN | 16.6% | 51.2% | 23.6% | 8.6% | 100.0% |
| E | 59.2% | 34.6% | 4.8% | 1.3% | 100.0% |
| F | 36.2% | 46.3% | 12.2% | 5.2% | 100.0% |
| Total | 30.2% | 49.1% | 15.5% | 5.2% | 100.0% |

Fuente: ISSP, 1996. AUS: Australia, D-W: Alemania del Oeste, GB: Gran Bretaña, USA: Estados Unidos, I: Italia, IRL: Irlanda, N: Noruega, S: Suecia, CDN: Canadá, E: España, F: Francia.

Las tablas 5.1, 5.2, y 5.3 presentan las respuestas de muestras representativas de la población de los once países con los que trabajamos. Esto es, nos dicen qué porcentaje de ciudadanos de cada país opina que programas públicos de sanidad, pensiones y protección al desempleo «sin ninguna duda deben existir», «probablemente deben existir», «probablemente no deben existir» o «de ninguna manera deben existir».

Aunque los porcentajes están calculados excluyendo del total a quienes se acogieron a las opciones «No sabe» o «No contesta», ambas categorías son extremadamente pequeñas en todos los países, por lo que su exclusión no impide que las tablas anteriores puedan ser interpretadas como la opinión general hacia estos temas. Además, el bajo porcentaje de «No sabe/ No contesta»¹ indica que la mayoría de la gente comprende bien lo que se le pregunta y tiene una opinión formada al respecto.

El primer vistazo a las tablas abruma un poco: demasiadas casillas, demasiados porcentajes, pero algo podemos sacar en claro. Lo que primero se aprecia es que, en todos los países que estudiamos, la mayoría de los ciudadanos considera, con mayor o menor énfasis, que es responsabilidad del gobierno proveer asistencia sanitaria a los enfermos y un nivel de vida digno para mayores y desempleados. Es decir, consideran que es responsabilidad de sus respectivos gobiernos nacionales mantener algún tipo de programa para cubrir estas necesidades.

¹ Sumando los casos perdidos (missing), los «no sabe» y los «no contesta» tenemos, en la pregunta para sanidad, entre un 0.5 y un 6.8% dependiendo del país. En pensiones el rango en que se mueve este porcentaje va de 0.3 a 5.5. En desempleo entre 2 y 10 puntos porcentuales.

Si miramos la última columna de las tablas, que recoge a quienes opinan que «de ninguna manera» deberían existir estos programas, vemos que los porcentajes son muy pequeños en todos los países cuando se pregunta por la intervención pública en sanidad y pensiones, y pequeños, aunque con más variación entre países, cuando se pregunta por la necesidad de que existan programas para garantizar una vida digna a los desempleados². La primera conclusión es por tanto que los 3 programas centrales de ese modelo institucional llamado «Estado del Bienestar» reciben un apoyo mayoritario en nuestros 11 países. Pero, y aquí viene la segunda conclusión, la extensión del apoyo varía dependiendo del país hacia el que dirijamos la mirada.

En el caso de la sanidad, por ejemplo, tenemos países como el Reino Unido o Noruega donde más de un 80% de los ciudadanos considera que «sin ninguna duda» debe existir un programa público de atención sanitaria, países como Francia o Alemania, donde ese porcentaje ronda el 50%, y países como Australia o Estados Unidos en los que son minoría (aunque una amplia minoría) quienes no tienen dudas respecto a la necesidad de que el Gobierno se responsabilice de la atención sanitaria a los enfermos.

En el caso de las pensiones vemos un panorama similar de variación: aquí son España y Noruega los países que concentran un mayor porcentaje de apoyo firme a los programas de pensiones (80% o más en la categoría «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del gobierno»); Alemania, Francia o Canadá están cerca del 50%; Estados Unidos y Australia por debajo del 40%.

Podemos hacer lo mismo con la tercera de nuestras tablas, la referida a desempleo, pero espero que para el lector resulte tan evidente como para mí que de alguna manera debemos resumir la información de las tablas si queremos dejar de hacer malabares con un excesivo número de porcentajes. La solución más directa, y por ello también la más utilizada en la literatura, sería «condensar» las cuatro opciones de respuesta en dos: una que recoja a quienes apoyan la existencia de estos programas de bienestar y otra a quienes se oponen a la misma. Sumar por un lado a quienes opinan que «sin ninguna duda debe ser responsabilidad del Gobierno» con quienes opinan que «probablemente debe ser responsabilidad del Gobierno». Y sumar por otro lado a los que dicen que «probablemente no debe ser responsabilidad del Gobierno» con los que creen que «de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno».

El problema evidente de este modo de proceder es que perdemos tanta información que, a la hora de comparar unos países con otros, podemos ver como similares casos que realmente no lo son. Veamos un ejemplo:

² El mayor apoyo a los programas que cubren riesgos universalmente repartidos (la enfermedad, la vejez) que a programas dirigidos a riesgos que no todos los colectivos sufren por igual ha sido ya mencionado por varios autores (Forma, 1996 a y 1996 b; Taylor-Gooby, 2003; Arriba, Calzada & Del Pino, 2006).

Tabla 5.4.

¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?

| País: Australia | % |
|--|--------|
| Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno | 42,4% |
| Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno | 51,7% |
| Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno | 5,4% |
| No, de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno | 4% |
| Total | 100,0% |



Tabla 5.5.

¿Cree usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?

| País: Australia | % |
|-----------------|--------|
| Sí | 94,1% |
| No | 5,8% |
| Total | 100,0% |

Tabla 5.6.

| País: España | % |
|--|--------|
| Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno | 80,9 |
| Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno | 18,3 |
| Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno | .7% |
| No, de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno | .1% |
| Total | 100,0% |



Tabla 5.7.

| País: España | % |
|--------------|--------|
| Sí | 99,2% |
| No | 0,8% |
| Total | 100,0% |

Mirando las tablas con los porcentajes originales (tablas 5.4 y 5.6) es evidente que España presenta un gran apoyo a la responsabilidad del Gobierno en sanidad, ya que una inmensa mayoría de la población no tiene ninguna duda acerca de que esta intervención debe producirse, mientras Australia presenta un apoyo más tibio: la mayoría de la población se encuadra en un apoyo con dudas a la intervención estatal en sanidad bajo la respuesta «probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno».

Australia y España son bastante distintas a este respecto y, sin embargo, nos parecerán casos similares si utilizamos el procedimiento de reducir todas las opciones de respuesta a dos categorías: en ambos países más de un 90% de la población estará en la opción de respuesta «Sí» (ver tablas 5.5 y 5.7). Por ello, en nuestro estudio vamos a apartarnos de este procedimiento habitual y, en lugar de agregar categorías, vamos a resumir los datos que tenemos mediante un índice de apoyo.

Índices para resumir la información

Nuestro índice no tiene gran complicación. Es sólo una media ponderada de las respuestas en cada país pero, en comparación con el procedimiento de reducir categorías, nos permite resumir mucho más los datos que tenemos perdiendo bastante menos información.

Las siguientes tablas muestran la sencilla elaboración de este índice que usaremos de ahora en adelante:

Tabla 5.8. Australia

¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?

| País: Australia | Total | Índice |
|---|-------|----------------------------|
| Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno | 42.4% | $42.4 \times 4 = 169.6$ |
| Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno | 51.7% | $51.7 \times 3 = 155.1$ |
| Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno | 5.5% | $5.5 \times 2 = 11$ |
| De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno | 0.4% | $0.4 \times 1 = 0.4$ |
| Total | 100% | $169.6 + 155.1 + 11 + 0.4$ |
| Índice | | = 336 |

Tabla 5.9. España

¿Cree Usted que debería o no debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos?

| País: España | Total | Índice |
|---|-------|----------------------------|
| Sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno | 80.9% | $(\times 4) = 329.2$ |
| Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno | 18.3% | $(\times 3) = 54.9$ |
| Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno | 0.7% | $(\times 2) = 1.4$ |
| De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno | 0.1% | $(\times 1) = .1$ |
| Total | 100% | $329.2 + 54.9 + 1.4 + 0.1$ |
| Índice | | = 386 |

El índice nos sirve básicamente para comparar unos países con otros y ordenarlos según su nivel de apoyo a los programas de bienestar pero, aunque este es el uso que le vamos a dar, también es posible interpretarlo aisladamente.

Para la pregunta que nos ha servido como ejemplo el índice tiene un rango de 100 a 400. Toma el valor 100 cuando el 100% de la población responde que el Gobierno «de ninguna manera debería ser responsable de dar sanidad a los enfermos», y toma el valor 400 cuando el 100% de la población considera que el Gobierno «sin ninguna duda debería ser responsable de dar asistencia sanitaria a los enfermos». Teniendo presente este rango no resulta difícil hacernos una idea, sólo mirando este dato, de cuánto apoyo tiene cada programa de bienestar.

En cualquier caso, ya he comentado que el uso que daremos a los índices es servir de base para ordenar los países según el grado en que sus poblaciones favorezcan la existencia de

cada uno de los programas por los que preguntamos. Crearemos de esta forma una especie de «ranking de legitimidad» que nos va a permitir cumplir el segundo objetivo que nos marcamos para este apartado: ver si, «grosso modo», se puede apreciar una relación entre el tipo de Estado del Bienestar que tiene un país y el nivel de apoyo que recibe de la población.

La tabla 5.10 muestra los índices de apoyo a la existencia de los programas de sanidad, pensiones y desempleo para aquellos países que definimos en el capítulo 1 como «fácilmente clasificables», esto es, aquellos sobre los que existían pocas dudas respecto de su pertenencia a uno u otro tipo de Estado del Bienestar.

Tabla 5.10.

Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que *De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno*) a 400 (100% de la población considera que *Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno*)

Tabla 5.10.a

| | Sanidad |
|-----------|---------|
| Noruega | 386 |
| Suecia | 366 |
| Canadá | 354 |
| Alemania | 347 |
| Francia | 337 |
| Australia | 336 |
| EE.UU. | 319 |
| Media | 349 |

Tabla 5.10.b

| | Pensiones |
|-----------|-----------|
| Noruega | 385 |
| Suecia | 366 |
| Alemania* | 344 |
| Francia | 342 |
| Canadá | 336 |
| Australia | 331 |
| EE.UU. | 322 |
| Media | 346 |

Tabla 5.10.c

| | Desempleo |
|-----------|-----------|
| Noruega | 332 |
| Suecia | 326 |
| Francia | 310 |
| Alemania | 293 |
| Canadá | 273 |
| Australia | 270 |
| EE.UU. | 241 |
| Media | 292 |

ISSP 1996. Elaboración propia. *Los datos de Alemania, para todas las tablas, corresponden sólo a Alemania del Oeste.

Como podemos ver, la hipótesis de Korpi & Palme (1998) y de Esping-Andersen (1998) sobre la relación entre actitudes hacia el Estado del Bienestar y tipo de Estado del Bienestar se cumple con sorprendente precisión. Los ciudadanos de Suecia y Noruega, países con Estados del Bienestar de tipo Socialdemócrata, son quienes en mayor medida consideran que deben existir programas públicos de sanidad, pensiones y desempleo, seguidos por los ciudadanos de países con Estados del Bienestar Corporativos (Francia y Alemania) y finalmente por quienes viven en países con sistemas de bienestar de corte Liberal (Australia, Canadá, EE.UU.).

Como estos tres programas (junto con educación, para el que no tenemos una pregunta apropiada) constituyen el núcleo del Estado del Bienestar, podemos concluir que el apoyo al mismo sigue la pauta que nuestra hipótesis esperaba: el tipo Socialdemócrata de EB presenta el mayor nivel de apoyo, seguido por el tipo Corporativo y con el Liberal en último lugar.

El único país que se desvía de lo esperado es Canadá en el caso de las actitudes hacia la sanidad pública. Como país clasificado dentro del tipo «Liberal» hubiera sido esperable que su apoyo a la sanidad pública estuviera cerca del de Australia y EE.UU. en lugar de encontrarse

entre los países corporativos y los socialdemócratas. Pero hay que tener presente que Canadá, a diferencia de Australia y EE.UU., tiene un programa público de salud de corte universal y por ello su desviación de la pauta no es incompatible con la idea de que las características de los sistemas de bienestar afectan a las actitudes que los ciudadanos desarrollan sobre los mismos.

En conclusión, parece existir una relación entre el tipo de EB y las actitudes de los ciudadanos hacia el mismo, y la dirección de esta relación cumple con las expectativas de quienes elaboraron las tipologías de Bienestar. Dado que la relación se da de forma fundamentalmente similar para los tres programas de bienestar por los que se pregunta, podemos resumirla calculando una media del apoyo³ a los 3 programas en cada país:

Tabla 5.11.

Media de los índices para sanidad, pensiones y desempleo

| PAÍS | Índice |
|-------------------------|--------|
| Noruega | 368 |
| Suecia | 353 |
| Francia | 329 |
| Alemania | 328 |
| Canadá | 321 |
| Australia | 312 |
| EE.UU. | 294 |
| Media de columna | 335 |

ISSP, 1996. Elaboración propia.

Las tipologías de Estados del Bienestar y los países «no tan fácilmente clasificables»

Los países que generan acuerdo entre los modelizadores respecto a su clasificación dentro de uno u otro tipo de Estado del Bienestar nos han mostrado que, no sólo existe una relación entre el tipo de EB y las actitudes ciudadanas, sino que al menos a simple vista la pauta confirma las expectativas de algunos de los más influyentes teóricos de los modelos de bienestar.

Las tablas anteriores son, pese a su simplicidad, muy importantes para nuestro análisis porque constituyen el primer y más básico indicador de que nuestra hipótesis central tiene visos de

³ Para lograr un indicador general de apoyo al EB más cuidado podríamos, aprovechando que la categoría de respuesta es la misma para todas las preguntas, elaborar un índice que recoja también la consistencia de las actitudes al hablar de sanidad, pensiones o desempleo. En este índice de apoyo general podríamos dar el valor de «1» (el máximo apoyo al EB), a quienes responden que el Estado «sin ninguna duda» debería ser responsable de proveer tanto sanidad como pensiones y desempleo, un valor de «2» si la persona cree que el Estado debe garantizar, sin ninguna duda, sanidad y pensiones, pero su apoyo a la intervención en desempleo es más tibio: «probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno», etc. La construcción de un índice de este tipo (aunque el tema no era el EB sino la mayor o menor dificultad de las familias para llegar a fin de mes) se describe en Burgess, S. et al., 2004. Si no lo he hecho es sólo porque, en el siguiente apartado, vamos a ver cómo hablar de «actitudes generales hacia el EB» sólo tiene sentido en algunos países.

cumplirse. Que el nivel de apoyo a que existan programas de bienestar correlacione aparentemente con el tipo de EB implica que las distintas formas de organizar un sistema de bienestar podrían generar distintos niveles⁴ de legitimidad y, por ende, que parte de la variación internacional en actitudes hacia el EB podría ser explicada por el hecho de que los sistemas de bienestar nacionales se encuadran en uno u otro tipo de EB. Además, en nuestras tablas la relación no sólo existe sino que presenta la forma prevista por las hipótesis definidas en el tercer capítulo, lo que nos sirve de «espaldarazo estadístico» para proseguir.

Sin embargo, aunque los primeros análisis arrojan resultados favorables, falta ver cómo se comportan esos otros países, los «no tan fácilmente clasificables», cuando elaboramos para ellos indicadores de apoyo a los programas de bienestar similares a los que hemos construido para los otros. La tabla 5.12 es casi una repetición de la 5.10 pero con la inclusión de España, Italia, Reino Unido e Irlanda y, aunque gran parte de la información es redundante, he decidido mostrarla porque me parece la mejor forma de ver cómo la pauta que aparecía tan clara en la tabla 5.10 se torna borrosa al pretender encajar en ella nuevos países. O en otras palabras, para ver el «indisciplinado» comportamiento de estos cuatro países.

Tabla 5.12.

Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que *De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno*) a 400 (100% de la población considera que *Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno*)

Tabla 5.12.a

| | Sanidad |
|-----------|---------|
| Noruega | 386 |
| España | 380 |
| R. Unido | 380 |
| Italia | 379 |
| Irlanda | 374 |
| Suecia | 366 |
| Canadá | 354 |
| Alemania | 347 |
| Francia | 337 |
| Australia | 336 |
| EE.UU. | 319 |
| Media | 360 |

Tabla 5.12.b

| | Pensiones |
|-----------|-----------|
| Noruega | 385 |
| España | 378 |
| Irlanda | 376 |
| Italia | 373 |
| R. Unido | 371 |
| Suecia | 366 |
| Alemania | 344 |
| Francia | 342 |
| Canadá | 336 |
| Australia | 331 |
| EE.UU. | 322 |
| Media | 357 |

Tabla 5.12.c

| | Desempleo |
|-----------|-----------|
| España | 352 |
| Noruega | 332 |
| Irlanda | 330 |
| Suecia | 326 |
| Francia | 310 |
| R. Unido | 301 |
| Italia | 296 |
| Alemania | 293 |
| Canadá | 273 |
| Australia | 270 |
| EE.UU. | 241 |
| Media | 302 |

Elaboración propia con datos del ISSP, 1996.

⁴ Como veremos más adelante, a lo largo de este trabajo nos vamos a interesar tanto por el distinto nivel de apoyo al EB en cada país (qué porcentaje de ciudadanos apoya la existencia de los programas fundamentales) como por la distinta composición del mismo (quiénes son los que apoyan el EB).

Lo primero que resulta evidente es que los países «no tan fáciles de clasificar» en las tipologías de Estados del Bienestar presentan actitudes hacia el EB no demasiado fáciles de clasificar.

España e Irlanda destacan por su alto índice de apoyo a los tres programas de bienestar, mientras el Reino Unido e Italia ocupan posiciones medias o medio-altas dependiendo del programa por el que preguntemos.

Si antes de ver esta tabla nos hubieran pedido que predijésemos el nivel de apoyo al EB en estos cuatro nuevos países, no cabe duda de que nos hubiéramos equivocado de plano. Tanto el Reino Unido como Irlanda suelen situarse dentro del tipo Liberal de Estado del Bienestar (o muy cerca de él), por lo que sus actitudes deberían estar en punto intermedio entre las de los países liberales «duros» (Australia y EE.UU.) y las de los países corporativos.

España e Italia, por su parte, suelen encuadrarse bien en el modelo Corporativo (un corporativismo rudimentario o semi-desarrollado), bien en una tipología propia: el tipo Mediterráneo del EB. Sobre esta base esperaríamos que sus índices de apoyo al Estado del Bienestar estuvieran cerca de las de los países corporativos; probablemente entre los países liberales «blandos» (Reino Unido e Irlanda) y los corporativos desarrollados (Francia y Alemania).

Éstas habrían sido las predicciones sobre la base únicamente de las tipologías de bienestar. El hecho de que no se cumpla ni una sola de ellas es bastante interesante, especialmente si tenemos en cuenta que las predicciones para los países de fácil clasificación sí se cumplían bastante bien. Creo que es precisamente esta diferente facilidad de clasificación lo que nos da la clave para entender lo que está pasando.

Si unos países generan más consenso en torno a la definición de sus Estados del Bienestar es, fundamentalmente, porque con el paso del tiempo⁵ han construido sistemas de bienestar en los que la organización de los programas públicos es relativamente similar. Son Estados del Bienestar «coherentes» internamente, por llamarlo de alguna manera.

Sin embargo, bien sea por las modificaciones introducidas con el paso del tiempo, bien por su reciente implantación (EBs mediterráneos), los sistemas de bienestar del Reino Unido, Irlanda, España e Italia muestran una menor coherencia interna. En estos países encontramos una mezcla de programas organizados siguiendo lógicas distintas. Son un puzzle con piezas socialdemócratas, piezas corporatistas y piezas liberales. La división entre quienes pretenden clasificarlos dentro de las tipologías de bienestar responde por tanto a que la conclusión es distinta según en qué programas de bienestar nos fijemos y, también, en qué características de los mismos utilicemos para establecer su posición en uno u otro tipo.

Siendo esto así, no es sorprendente sino totalmente lógico que la relación entre tipo de EB y actitudes hacia el EB, tan clara en las tabla 5.10, se vuelva difusa cuando pasamos a la 5.12.

⁵ Desmond S. King destaca que la coherencia de los sistemas de bienestar es un fenómeno relativamente moderno. *By 1930 twelve major European countries had all implemented core elements of the social security system: accident insurance, sickness insurance, old-age insurance and unemployment insurance; (...) Thus, by the 1930s fundamental steps toward the modern welfare state's scope and application were established. But these policies reflected neither the influence especially of socialist or social-democratic parties nor did they constitute a coherent formulation of the nature of the welfare state. Such coherence is a more modern phenomenon.* (King, 1987, p. 847)

La primera conclusión que sacamos tras observar estos datos es de corte metodológico: la relación entre cualquier fenómeno social (pobreza, desigualdad, etc.) y el tipo de Estado del Bienestar puede existir (y hemos visto en la revisión de la literatura que para muchas cuestiones existe), pero dado que no todos los países cumplen con igual exactitud las características de un tipo de EB, esta relación será más o menos clara según trabajemos con unos países o con otros. La verdad es que por pura lógica no podíamos esperar otra cosa y, por ejemplo, que el Reino Unido sea clasificado como un país Liberal aunque con dudas, ha de hacer dudas también de que el efecto de sus programas sea idéntico al que corresponde a un país con Estado del Bienestar Liberal.

La importancia de la selección de países podría explicar que anteriores estudios sobre la relación entre actitudes y tipo de sistemas del bienestar hayan obtenido resultados contradictorios: las conclusiones serán distintas si escogemos trabajar con los mejores representantes de cada modelo o si lo hacemos con países cuyos sistemas de bienestar sólo «se acercan» a un modelo.

La segunda conclusión que se deriva de las tablas anteriores, ésta de carácter sustantivo, es que la relación entre tipo de EB y legitimidad existe, pero sólo para los siete países que se ajustan mejor a las categorías definidas por Esping-Andersen. Nos encontramos entonces ante dos opciones: una, obviar a nuestros cuatro «*outliers*» y defender la pauta que vimos en la tabla 5.10 (al fin y al cabo toda regla tiene sus excepciones); dos, estudiar más a fondo los «*outliers*» para ver si podemos entender sus desviaciones de la pauta prevista y si estas desviaciones implican rechazar nuestra hipótesis de partida: que el nivel de legitimidad del EB puede explicarse por las características que lo definen, por el «tipo» al que pertenece. Esta segunda opción es la que tomamos.

Los casos que no encajan

Race –Ya estoy acostumbrado a esto. A menudo me parece que ese es todo el trabajo de un detective: borrar los falsos comienzos y volver a empezar.

Poirot –Sí, esto es muy cierto. Esto es lo que algunas personas no quieren hacer. Conciben una hipótesis y quieren que todo encaje en ella. Si algún dato o pormenor no encaja en la hipótesis, lo rechazan. Pero siempre los hechos que no encajan son los significativos. Christie, A. (1937).

Juzgados por no mostrar la relación esperada entre tipo de EB y actitudes ciudadanas, acabamos de eximir de culpa a los cuatro *outliers* (Reino Unido, Irlanda, España e Italia) apelando al atenuante de la incoherencia de sus sistemas de bienestar. Pero una vez hecho esto la pregunta que nos queda es: ¿las actitudes hacia el EB de estos países con Estados del Bienestar mixtos son realmente azarosas e incomprensibles? Y la respuesta, si miramos las tablas con detalle, es: no del todo.

Lo primero que se observa en la tabla 5.12 es que la posición de los cuatro nuevos países difiere en cada una de ellas. Es decir, los ciudadanos de estos países responden de manera distinta dependiendo del programa de bienestar por el que se pregunte. No hay por tanto una «actitud hacia el Estado del Bienestar» sino distintas actitudes según el programa de bienestar, con lo que la elaboración de una «media de apoyo al EB» como la que hicimos en la tabla 5.11

resulta desaconsejable porque oculta importantes variaciones internas. Por ejemplo, de entre los 11 países estudiados, los ciudadanos ingleses se encuentran entre quienes muestran mayor apoyo a la responsabilidad del Estado en sanidad y, sin embargo, en una posición medio-baja en su apoyo a la responsabilidad del Estado en la provisión de subsidios de desempleo.

En la tabla 5.10 el orden de los países en las tablas era constante independientemente del programa de bienestar: los noruegos y suecos presentaban el mayor índice de apoyo a los tres programas de bienestar por los que se preguntaba, franceses y alemanes se encontraban siempre en una posición intermedia y los países liberales ocupaban los últimos puestos de las tablas. Esto nos hizo pensar que podíamos hablar de actitudes generales hacia el EB y que el tipo de EB afectaba las opiniones sobre los distintos programas de manera más o menos uniforme. La tabla 5.12 nos hace pensar, sin embargo, que la relación puede ser más concreta y más variable, es decir, que lo que hay es una relación entre la organización concreta de un programa de bienestar y las actitudes hacia el mismo.

Este pequeño cambio de enfoque no tiene grandes consecuencias a la hora de (re)analizar las actitudes de los países que figuran en la tabla 5.10, ya que son países relativamente homogéneos en la organización de sus programas de bienestar. En Noruega y Suecia, que presentan el índice de apoyo más alto a la responsabilidad del Gobierno en sanidad, pensiones y desempleo, estos tres programas siguen los criterios socialdemócratas; En Francia y Alemania se organizan sobre principios corporativos; En Canadá, Australia y USA se ajustan bien a lo que se define como organización Liberal (salvo el caso de la sanidad canadiense ya explicado).

Sin embargo el cambio de enfoque, de «tipo de EB» a «tipo de programa de bienestar» sí tiene efecto en nuestra interpretación de la tabla 5.12. Si repasamos los datos evitando pensar a qué tipo de EB corresponde cada país y teniendo en mente cómo es la organización de cada programa de bienestar vemos menos azar y más lógica. Para nuestra satisfacción, la lógica corresponde con la de nuestro modelo: los programas organizados con criterios propios del EB Socialdemócrata correlacionan con un mayor índice de apoyo independientemente del tipo de EB en el que estén insertos.

En el capítulo 3 comentamos que uno de los aspectos más importantes que diferencian los Estados del Bienestar de un tipo y otro es su nivel de integración, es decir, el grado en que son utilizados por todos los colectivos económicos para su provisión frente al riesgo. Como nuestras hipótesis se centran en esta característica para explicar los diferenciales de legitimidad entre tipos de Estados del Bienestar, para ver hasta qué puntos los países mixtos vulneran nuestras expectativas sobre la relación entre tipo de organización y apoyo ciudadano hemos de leer los datos que para ellos aparecen en la tabla 5.12 teniendo en mente el grado de integración de sus programas.

Si hacemos esto, observamos que tanto en España como en Italia, países con índices altos de apoyo a la responsabilidad del Estado en sanidad y pensiones, los programas públicos de sanidad son universales y las pensiones públicas integran a la gran mayoría (moreno, 2001).

Es decir, la gran mayoría de la población no sólo tiene el derecho a usar estos sistemas públicos sino que, de hecho cuenta con ellos, y sólo con ellos, para su provisión de sanidad y estabilidad económica en la vejez. Ambos países difieren en las actitudes de sus ciudadanos hacia

el programa de desempleo ya que en España el apoyo a la existencia de estas prestaciones está mucho más extendido que en Italia, pero esto es coherente con el hecho de que las prestaciones por desempleo son más integradoras en España que en Italia (indicadores en la tabla 10.10 del capítulo 10).

Pasando al campo anglosajón, Inglaterra, que destaca por su apoyo a la responsabilidad del Estado en sanidad, tiene un sistema nacional de salud universal e integrador, mientras su posición intermedia en lo que a pensiones se refiere corresponde a un sistema de prestaciones públicas muy bajas y donde cada vez más gente depende de pensiones privadas u ocupacionales para garantizarse rentas económicas en la vejez (Glennester, 1995). En cuanto a las actitudes hacia el programa de desempleo, Inglaterra está en una posición medio-baja en el «ranking» de legitimidad, pero es que también sus prestaciones por desempleo son menos integradoras que la media.

El lector nos acusará, con razón, de estar pasando demasiado apresuradamente por el análisis de estos países mixtos, de estar haciendo meros comentarios sin aportar aquí datos empíricos, pero si hacemos esto es porque todo el capítulo 10 está dedicado a estudiar, con datos empíricos, con técnicas estadísticas, las relaciones entre las características concretas de cada uno de los programas y su nivel de legitimidad, en un análisis en profundidad de estas pautas que aquí sólo apuntamos.

Si hemos decidido relegar este tipo de análisis al final es porque creemos que, para que sea verdaderamente relevante, tenemos que verificar antes bastantes aspectos de la relación de la que hablamos. Para empezar, ni siquiera sabemos si las diferencias entre países en la legitimidad del EB son estadísticamente significativas (hasta ahora sólo tenemos una ordenación «a simple vista» de los países respecto al nivel de apoyo de sus sistemas de bienestar), ni tampoco de dónde sale la mayor legitimidad que logran algunos Estados del Bienestar, pero por ahora mirar las pautas de los cuatro países «inconformistas» nos ha servido para dos cosas:

- Por un lado, para darnos cuenta de que, aunque su inclusión en las tablas venga a emborronar la relación entre tipo de EB y actitudes hacia el EB, ello no implica que las premisas de quienes pronostican la existencia de esta relación sean erróneas. Casi al contrario, la lógica de las desviaciones parece apoyar la idea de que las características de un programa de bienestar determinan (parcialmente, por supuesto) los apoyos que va a recibir de la ciudadanía.
- Por otro lado, nos sirve para afinar el enfoque con el que vamos a tratar los datos de los que disponemos a partir de ahora. Si queremos seguir hablando sólo de «tipos» de Estados del Bienestar, tenemos que quedarnos con los países cuyos sistemas encajan bien en cada uno de los tipos y descartar del análisis a los países con sistemas heterogéneos. Si queremos mantener dentro del análisis no sólo a los siete países con sistemas coherentes sino también a aquellos que no lo son tanto, tendremos que abandonar a menudo la comodidad de las tipologías para fijarnos en las características de los programas en concreto.

La opción que vamos a tomar es la segunda y así, a partir de ahora seguiremos hablando de tipos de Estados del Bienestar, pero bajaremos cada vez con más frecuencia al nivel de los programas concretos hasta centrarnos sólo en ellos en la última parte del análisis. Esto no supone que hayamos abandonado los tipos de EB como variable explicativa de las actitudes sino simplemente asumir que, si queremos estudiar tanto los casos puros como los más turbios, tendremos a veces que desmontar la variable «tipo de EB» en sus elementos constitutivos: los programas de bienestar.

5.2. ¿Son significativas las variaciones entre países?

Las tablas que hemos visto en el apartado anterior muestran una serie de diferencias en las actitudes hacia el Estado del Bienestar dependiendo del país en el que preguntemos. Sin embargo, también muestran que las diferencias no son excesivamente grandes y que se dan sobre la base de un consenso generalizado favorable a la existencia de políticas públicas de sanidad, pensiones y desempleo. En cualquier análisis de sociología cuantitativa, y más si cabe en un caso como el nuestro, donde las diferencias no son abismales, es necesario tener en mente que nuestros datos proceden de encuestas y que determinadas pautas apreciables en la muestra (las personas que respondieron al cuestionario) pueden no ser generalizables a toda la población objetivo (todos los ciudadanos de cada uno de los países).

Un método habitual para verificar que las pautas que vemos existen es el análisis de varianza, un simple cálculo que nos dice si las diferencias que hemos encontrado al analizar las opiniones de los ciudadanos que respondieron al cuestionario son extrapolables a la población general: si la media de apoyo al EB realmente difiere entre los países que estudiamos. Otra opción es utilizar para este menester un procedimiento llamado regresión multinivel, un método más complejo estadísticamente, que requiere más cuidado al analizar los resultados, pero cuya utilidad va mucho más allá de decirnos si la realidad de ahí fuera se corresponde con la que nuestra base de datos nos enseña.

Hasta ahora sólo nos hemos centrado en analizar diferencias entre los ciudadanos de unos y otros países: dijimos que los suecos son más favorables a la existencia de un programa público de pensiones que los austrianos; que los españoles son más partidarios de la sanidad pública que los alemanes... Pero es del todo evidente que los nacionales de un país no se comportan como un bloque homogéneo en este tema. Como ya mencionamos en el capítulo 1, numerosas variables influyen en que dentro del mismo país algunas personas sean más propensas a apoyar la existencia de políticas públicas de bienestar que otras: las que manifiestan una ideología política de izquierda, las que tienen rentas más bajas, etc.

Si tomamos a todos los ciudadanos de los países que estudiamos en conjunto, veremos que sus opiniones sobre las políticas públicas varían, por un lado en función del país al que pertenecen, y por otro lado en función de toda una serie de características individuales. La información extra que la regresión multinivel, en comparación con el análisis de varianza, nos ofrece es precisamente una medida de la importancia de ambas cuestiones: las características individuales por un lado, y el país de pertenencia por el otro. Y ya que vamos a estudiar a fondo las variaciones internacionales en las actitudes hacia las principales políticas de bienestar, no es baladí saber cuánto de importante es esta variación entre países si la comparamos con la variación total.

Además, los modelos multinivel serán necesarios cuando, dentro de unas páginas, necesitemos probar hipótesis más complejas, con lo que empezar a incluirlos ahora nos sirve para ir familiarizándonos con ellos. Vamos a comenzar con modelos muy simples. Para entenderlos basta con recordar que esta técnica separa la variación total, o sea, todo lo que los ciudadanos encuestados varían entre sí en sus actitudes hacia el Estado del Bienestar, en dos componentes: la *variación entre países* (lo que difieren en actitudes agregadas unos países de otros) y la *variación dentro de cada país* (lo que difieren en sus actitudes los ciudadanos de un mismo país).

La *variación total* es la suma de la variación entre países y la variación dentro de cada país. Si dividimos la variación entre países entre la variación total tendremos el *coeficiente de correla-*

ción intraclase (ICC), una medida de la importancia del país de pertenencia para explicar que unos ciudadanos sean más partidarios que otros de las políticas sociales.

Dicho esto, podemos ya presentar tres regresiones multinivel, una para cada una de las tres preguntas que nos interesan: ¿debe ser el Estado responsable de proveer sanidad? ¿de proveer un nivel de vida digno a los ancianos? ¿un nivel de vida digno a los desempleados?

Tabla 5.13. *Variación entre los individuos dentro de cada país y entre países: Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad. Regresión Multinivel*

Parte fija:

| Sanidad | Coef | Std. Err. | P > z | [95% Conf | Interval] |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| _cons | 1.401488 | .0644651 | 0.000 | 1.275138 | 1.527837 |

Parte variable:

| Random-effects Parameters | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|---------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| var(_cons) | .045466 | 0194912 | .0196236 | .1053403 |
| var(Residual) | .3274484 | .0036501 | .320372 | 334681 |

Regresión lineal multinivel sin variables: Modelo vacío.

Número de casos: 16.107; Número de grupos: 11; Observaciones por grupo: mínimo 973; medio 1.464.3, máximo 2.459. Lrtest comparando el modelo con uno no jerárquico: prob>chi2: 0.0000.

Tabla 5.14. *Variación entre los individuos dentro de cada país y entre países: Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones. Regresión Multinivel*

Parte fija:

| Pensiones | Coef | Std. Err. | P > z | [95% Conf | Interval] |
|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| _cons | 1.433314 | .0635728 | 0.000 | 1.308713 | 1.557914 |

Parte variable:

| Random-effects Parameters | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|---------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| var(_cons) | .0442128 | .0189536 | .019083 | 1024352 |
| var(Residual) | 3231924 | .0035994 | .3162142 | .3303246 |

Regresión lineal multinivel sin variables: Modelo vacío.

Número de casos: 16.136; Número de grupos: 11; Observaciones por grupo: mínimo 969, media 1.466.9, máximo: 2.462. Lrtest comparando el modelo con uno no jerárquico: prob>chi2: 0.0000.

Tabla 5.15. *Variación entre los individuos dentro de cada país y entre países: Actitudes hacia la intervención del Estado en desempleo. Regresión Multinivel*

Parte fija:

| Desempleo | Coef | Std. Err. | P>z | [95% Conf | Interval] |
|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| _cons | 1.978038 | .0933702 | 0.000 | 1.795036 | 2.16104 |

Parte variable:

| Random-effects Parameters | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|---------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| var(_cons) | .0954592 | .0408749 | .041242 | 220951 |
| var(Residual) | .5626309 | .0063714 | .5502809 | .5752582 |

Regresión lineal multinivel sin variables: Modelo vacío.

Número de casos: 15.607; Número de grupos: 11; Observaciones por grupo: mínimo

924; media: 1.418.8; máximo: 2.393. Lrtest comparando el modelo con uno no jerárquico: prob>chi2: 0.0000.

Explicación de los modelos

Los coeficientes de los modelos se interpretan de la siguiente manera:

En la parte fija tenemos la constante media: el nivel de apoyo medio si tomáramos a todos los ciudadanos de los 11 países como un solo conjunto. En la parte variable tenemos dos coeficientes:

Var(cons): lo que varían unos países de otros en este apoyo medio. Si el coeficiente es estadísticamente significativo indica que la variación entre países existe y no es sólo un efecto de la muestra. Al pie de las tablas tenemos un test de significatividad (Lrtest). La variación entre países es estadísticamente significativa cuando la prob>chi2 es menor que 0.05. En los tres modelos que presentamos la prob>chi2 es 0.0000, es decir, podemos estar totalmente seguros de que los países realmente varían entre sí en cuanto a las actitudes de sus ciudadanos hacia los tres programas de bienestar por los que preguntamos.

Var(Resid): La parte de variación total que se debe a las características individuales y no al país de pertenencia. Es la variación que se da dentro de cada país, entre los nacionales de un mismo estado, y que es por tanto debida a variables individuales como la ideología, la posición económica, la edad, etc.

Resultados de los modelos

La primera conclusión que extraemos de los tres modelos es que hay variaciones significativas entre países en cuanto a las opiniones de los ciudadanos sobre la responsabilidad del Estado en temas de sanidad, pensiones y desempleo. En otras palabras, la media de apoyo a la existencia de estos programas es significativamente mayor en unos países que en otros. Las diferencias existen y por tanto son analizables pero, aparte de existir ¿son lo suficientemente relevantes para merecer un análisis pormenorizado como el que pretendemos?

En este tipo de modelos el coeficiente de correlación intraclase (*intraclass correlation coefficient –ICC-*) sirve como medida de la relevancia de la variación entre los grupos, en este caso, de la relevancia de la variación entre países. Se calcula dividiendo la variación en actitudes debida al país de pertenencia por la variación total en estas actitudes, y se expresa como un porcentaje de la variación total.

La correlación intraclase de nuestros modelos es de 0.12 para la responsabilidad del Estado en Sanidad, 0.12 para la responsabilidad en pensiones y 0.146 para desempleo, lo que significa que, de todo lo que varían entre sí los 16.500 ciudadanos encuestados en sus opiniones hacia las políticas de bienestar, entre un 12 y un 15% es debido al país al que pertenecen. O, lo que es lo mismo: un 12% de la variación en actitudes hacia la responsabilidad del gobierno en sanidad y pensiones y un 15% de la variación en las actitudes hacia la responsabilidad del gobierno para con los desempleados es explicable por el hecho de que los ciudadanos encuestados vivan en países distintos.

Y esto ¿es mucho o poco? Que una macro variable como el país de pertenencia explique alrededor del 12-15% de la variación, ¿convierte a esta variable en relevante?

Si comparamos estos porcentajes con los que logran otros estudios sobre variaciones internacionales en actitudes o comportamiento de los individuos, sí es bastante relevante.

El ejemplo más famoso de todos ellos, por su novedad, por su éxito mediático, y por las implicaciones políticas que está teniendo, es el programa de evaluación internacional del rendimiento escolar conocido bajo el acrónimo PISA (Programme for International Student Assessment – Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), puesto en marcha por la OCDE en 2000⁶.

Las evaluaciones del rendimiento escolar realizadas bajo el programa PISA arrojan una correlación intraclase de un 10%: un 10% de las variaciones en resultados escolares depende del país en el que el alumno haya seguido sus estudios. El resto depende de variables relativas al niño, a su familia (nivel educativo, profesión, renta...) o el centro escolar.

Pese a que a la hora de explicar porqué unos niños obtienen mejores resultados que otros el peso de los factores individuales y familiares es con mucho superior al peso del país de pertenencia (y por tanto, al peso del sistema educativo, que es lo que se pretende medir incluyendo la variable país), el programa PISA ha tenido un éxito indiscutible. Cada año más países solicitan entrar a formar parte del mismo (57 en la evaluación de 2006), los resultados aparecen en todos los periódicos generando encendidos debates y algunas naciones se plantean transformar sus sistemas educativos siguiendo las directrices de aquellos que mejores resulta-

⁶ El programa PISA (Programme for International Student Assessment) consiste en una evaluación internacional de los conocimientos y habilidades que tienen los alumnos de 15 años en tres grandes áreas: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Cada tres años se selecciona una muestra representativa de alumnos de esta edad en cada uno de los países participantes y se les examina mediante pruebas escritas. Además del examen, cada alumno completa un cuestionario que incluye preguntas sobre su motivación para el aprendizaje y preguntas sociodemográficas sobre su familia. Además, los directores de cada una de las escuelas incluidas en la muestra responden a un cuestionario sobre las características de la escuela tanto materiales como pedagógicas. Los datos resultantes tienen tres niveles de análisis. Pueden analizarse a nivel del alumno, estudiando las características individuales de los alumnos o sus familias que inciden en el rendimiento. A nivel de centro educativo, mirando las características de las escuelas que correlacionan con mejores resultados y, una vez comprobado que los resultados de los alumnos varían de un país a otro incluso después de controlar por las variables relativas al estudiante y a la escuela, pueden analizarse a nivel de país para ver qué características de los sistemas educativos nacionales explican el mejor rendimiento de sus alumnos. Y aquí «mejor» no sólo significa que los alumnos de determinado país tengan, de media, las notas más altas, sino también lograr que haya pocos alumnos con bajos niveles de rendimiento, o que se suavice la relación entre la clase socioeconómica de la familia y el rendimiento escolar del alumno. *Informe PISA 2003* (Santillana, 2005); *PISA 2006. Habilidades y conocimientos en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Marco de la Evaluación* (Santillana 2006). *Technical Report of PISA 2003* (disponible en la web de la OCDE).

dos presentan en PISA, con el correlato de que los altos cargos del Ministerio de Educación de Finlandia, uno de los países que obtuvo mejores resultados, no han dejado de ir y venir por el mundo dando conferencias desde que se conoció el éxito de sus alumnos en estas evaluaciones.

Si el hecho de que el país (y por tanto en parte el tipo de sistema educativo) explique un 10% de la variación en resultados escolares ha dado lugar a tanta reflexión, el hecho de que el país (y por tanto en parte el tipo de sistema de bienestar) explique entre un 12 y un 15% de la variación en las actitudes hacia el EB es razón más que suficiente para analizar las variaciones internacionales en estas actitudes con detalle.

Además de informarnos sobre la importancia de la variable país, los modelos ofrecen una media general de las respuestas a cada pregunta, y la variación que existe entre las medias nacionales alrededor de la media general. En el caso de sanidad la media general es 1.40, lo que si tenemos en cuenta que los valores de nuestra variable van de 1 a 4 («Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno» «Sin ninguna duda no debería ser responsabilidad del Gobierno») nos indica lo que ya hemos visto en las tablas 5.1 y 5.12: que hay un extenso apoyo a la idea de que el Gobierno debe ser responsable de la provisión de sanidad.

La desviación típica de este nivel medio es de 0.21⁷. Sabemos que el 95% de los casos⁸ se encuentran entre -2 y +2 desviaciones típicas, con lo que las medias nacionales irán del 1 al 1.85, o lo que es lo mismo, de un apoyo fuerte («sin ninguna duda») casi general, a un apoyo también mayoritario pero con amplios sectores que apoyarla existencia de sanidad pública más tibiamente.

Para la pregunta de pensiones la desviación típica es también 0.21 y la media 1.43, lo que nos deja un panorama muy similar al que acabamos de describir para la sanidad. Las medias nacionales varían entre 1 y 1.85.

El desempleo se separa un poco de este panorama de extenso apoyo y escasa variación internacional, un hecho que ya habíamos apreciado en las tablas. En este caso la media de actitudes es menos entusiasta: 1.97, y hay mayor variación entre países (desviación típica de 0.3).

Si la media general está en un «probablemente debería ser responsabilidad del gobierno proporcionar un nivel de vida digno a los parados», vamos a encontrar desde países con medias de 1.37 (cerca de «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del gobierno») hasta países con medias más cercanas al «probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno» (2.56).

⁷ Los modelos nos ofrecen la desviación de cada país respecto de la media de apoyo general medida en forma de varianza. Para transformar este coeficiente en desviaciones típicas sólo hay que calcular su raíz cuadrada.

⁸ En la regresión multinivel los países incluidos en el análisis se consideran una muestra de la población total de países. El 95% de los casos se refiere aquí a que si sacásemos otras muestras de países, en el 95% de ellas la media de apoyo a la existencia de un programa público de pensiones estaría entre el 1 y el 1.85 en esta escala de 1 a 4 que utilizamos. En nuestro caso la «población» de países estaría compuesta por todos los países que cuentan con sistemas públicos de bienestar, pero lo cierto es que no nos interesa especialmente entrar en la posibilidad o imposibilidad de generalización. Lo que vamos a hacer es analizar si determinadas hipótesis se cumplen para nuestros 11 países, justificando luego de forma teórica (que no de forma estadística) la posibilidad de que las pautas encontradas sean aplicables más allá de los casos sobre los que hemos trabajado.

5. 3. Grupos de países en función de la legitimidad de sus Estados del Bienestar

Las regresiones multinivel nos confirman la existencia de variaciones significativas entre países en las actitudes de los ciudadanos hacia las políticas públicas, pero no nos dicen qué países son los que difieren entre sí.

El hecho de que existan diferencias significativas puede traducirse en que un país sea muy diferente del resto, en que haya bloques de países similares entre ellos y distintos de los demás, o en que todos los países sean significativamente distintos en cuanto a las opiniones que sus poblaciones mantienen respecto a la necesidad de políticas públicas de sanidad, pensiones y desempleo.

Para dilucidar esta cuestión el procedimiento más sencillo es la regresión ordinal. Puesto que por ahora sólo pretendemos ver el efecto de la variable «país», nos basta con incluir en el modelo las actitudes hacia cada programa como variable dependiente y, como variables independientes, todos los países en una serie de dummies⁹.

Tabla 5.16.

*El efecto del país sobre las actitudes hacia la intervención del Estado en bienestar.
Regresiones logísticas ordinales.*

| País | Sanidad Coef. | P > z | Pensiones Coef. | P > z | Desempleo Coef. | P > z |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|---------|--------------------|--------|
| Suecia | 1.076767 | 0.000 | .9817093 | 0.000 | 1279565 | 0.094 |
| Alemania | 1.863138 | 0.000 | 1.847453 | 0.000 | 1.021899 | 0.000 |
| Francia | 1.948478 | 0.000 | 1.804682 | 0.000 | 5057861 | 0.000 |
| Italia | 4890394 | 0.000 | .6678305 | 0.000 | .8146191 | 0.000 |
| España | .4852075 | 0.000 | 4387731 | 0.000 | .660958 | 0.000 |
| Gran Bretaña | .4431098 | 0.000 | .8125297 | 0.000 | .7410374 | 0.000 |
| Irlanda | .8451562 | 0.000 | .5686932 | 0.000 | .0459818 | 0.567 |
| Canadá | 1.498497 | 0.000 | 1.977642 | 0.000 | 1.496874 | 0.000 |
| Australia | 2.185501 | 0.000 | 2.24547 | 0.000 | 1.618309 | 0.000 |
| EE.UU. | 2.540393 | 0.000 | 2.391728 | 0.000 | 2.237251 | 0.000 |
| cut1 | 1.940687 | 1.778597 | 1.803658 | 1.64909 | -.301779 | .40521 |
| cut2 | 4.614064 | 4.435585 | 4.642135 | 4.47008 | 2.2029 | 2.0921 |
| cut3 | 6.145425 | 5.921784 | 6.371584 | 6.14105 | 3.88795 | 3.7604 |

Regresión logística ordinal. Categoría de referencia: Noruega
Para los tres modelos, prob> chi2 = 0.0000

⁹ Las variables «dummy» sólo tienen dos valores: «0» o «1», y nos permiten simplificar variables nominales en las que existen más de dos categorías de respuesta. La variable «país» está incluida en la base de datos del ISSP como una variable nominal con muchas categorías: 1-Australia, 2-Alemania; 4-Inglaterra; 6-EE.UU....

Para poder ver qué efecto tiene cada país sobre las actitudes de sus ciudadanos convertimos la variable original en 11 variables nuevas, una para cada país. La variable «Australia» tiene dos categorías de respuesta: «1» cuando el entrevistado es australiano, y «0» cuando el entrevistado es de cualquier otro país. La variable «Alemania» tendrá también dos posibles valores: «1» para los alemanes, «0» para el resto de entrevistados, etc. En el modelo de regresión incluimos estas variables-dummy para todos los países menos uno, que servirá como referencia para medir a los demás. El coeficiente de cada variable-dummy nos indica si los ciudadanos del país al que se refiere la variable son diferentes o iguales en sus actitudes hacia el EB (en sus valores en la variable dependiente) que los ciudadanos del país tomado como referencia. Si queremos comparar a los ciudadanos de dos países incluidos en el modelo, y no sólo compararlos todos con uno de referencia, no hay más que hacer un test de hipótesis comparando los coeficientes de estos dos países.

En la tabla 5.16 tenemos los coeficientes de regresión ordinal para cada una de las variables-país y para las tres preguntas relacionadas con la responsabilidad del Gobierno en políticas de bienestar. Estos coeficientes pueden interpretarse como el efecto sobre las actitudes de ser ciudadano de cada uno de los países, y las diferencias entre coeficientes nos indican que el hecho de vivir en Suecia, Inglaterra, Canadá, etc. tiene un efecto diferencial a la hora de opinar sobre las responsabilidades de Gobierno.

La columna $P > z$ nos indica si los coeficientes son estadísticamente significativos, esto es, si tenemos base para afirmar que las diferencias entre países existen en la población y no sólo en nuestra muestra. Como podemos ver, prácticamente todos los coeficientes son estadísticamente significativos, lo que indica que las actitudes hacia el Estado del Bienestar en los países incluidos en los modelos son distintas de las que se dan en un país tomado como referencia. Este país de referencia, que no aparece en el modelo, es Noruega, elegido por ser el país con mayor consenso ciudadano en torno a la existencia de políticas públicas de bienestar.

La información más relevante de la tabla 5.16 es, por tanto, que cualquiera de nuestros diez países difiere de Noruega en las actitudes hacia la sanidad, las pensiones y el desempleo. Si además comparamos (mediante t-tests) el coeficiente de cada país con cada uno de los restantes vemos que casi todos los países son, en temas de actitudes hacia las políticas de bienestar, diferentes entre sí, aunque con alguna pauta significativa: por un lado los dos países con sistemas de bienestar «puramente» corporativos: Alemania y Francia, son similares en las opiniones de sus ciudadanos. Por otro lado los dos países mediterráneos e Inglaterra presentan también actitudes comunes en cuanto a sanidad.

Por supuesto, vamos a estudiar con mucho más detalle estas pautas que aquí apenas empiezan a vislumbrarse, al fin y al cabo es eso, encontrar pautas, el objetivo de todas estas páginas. Pero por ahora baste quedarnos con esta conclusión: las diferencias en las opiniones sobre la necesidad de políticas públicas de sanidad, pensiones y desempleo vistas en la tabla 5.10 son estadísticamente significativas, y el «ranking de legitimidad» que hicimos no es un constructo sino que responde a una realidad.

Hay que recordar que cuando ordenamos a nuestros países en función del nivel de apoyo al Estado del Bienestar la pauta que aparecía se ajustaba en gran medida a las categorías de Estados del Bienestar, indicando una posible correlación entre ambas cuestiones y por tanto la posible utilidad de las tipologías de bienestar para explicar las diferencias actitudinales. Este apartado, fundamentalmente estadístico y quizás por ello menos atractivo, nos deja a cambio la atractiva conclusión de que merece la pena seguir analizando nuestros datos bajo la hipótesis de una relación entre el tipo de EB y el consenso respecto al mismo.

5.4. Una explicación alternativa de la relación entre el tipo de EB y la legitimidad

Unos países tienen un consenso sobre las políticas públicas de bienestar mayor que otros. Mientras en Suecia un 71% de los ciudadanos considera que sin ninguna duda el Estado debe responsabilizarse de la provisión de sanidad, este porcentaje es del 54% en Francia y del 42% en Australia. Mientras un 86% de los noruegos cree que sin ninguna duda el Estado es responsable de garantizar un nivel de vida digno a los ancianos, sólo el 48% de los alemanes y el 38% de los estadounidenses piensa igual.

Nuestra hipótesis es que esta variación es parcialmente debida a la distinta organización de las políticas de bienestar aunque, al mismo tiempo, sabemos gracias a los modelos multinivel del apartado 5.1 que la mayor parte de la variación en actitudes se debe, no a que los individuos vivan bajo distintos modelos de bienestar, sino a diferencias en características individuales como la ideología política, el nivel educativo, la edad, el sexo, la posición económica o el grado de igualitarismo.

De los estudios previos sobre actitudes hacia las políticas sociales sabemos que, de todas estas características individuales que afectan a las actitudes sobre el Estado del Bienestar, las que muestran un efecto mayor y más consistente en todos los países son las tres últimas. Dado que estas tres variables son fundamentales para entender porqué dentro de un mismo país unas personas son más partidarias de las políticas públicas de bienestar que otras, podría darse el caso de que para explicar las diferencias entre países no necesitemos utilizarlas más que a ellas.

Si, como sabemos, la gente que sustenta valores más igualitarios es más proclive a defender las políticas públicas de bienestar que quienes tienen valores individualistas, podría ocurrir que las diferencias en los consensos acerca de estas políticas no sean debidas a que el sistema de bienestar se organiza de distinta manera sino, simplemente, a que en algunos países hay más «igualitaristas»¹⁰ que en otros. De la misma manera, ya que sabemos que la posición económica del individuo es una variable clave en todos los países, es posible que los países donde un mayor porcentaje de población vive con ingresos inferiores a la media presenten un mayor nivel de apoyo al Estado del bienestar. O lo que es lo mismo, si a nivel individual el igualitarismo y una situación económica desfavorecida potencian las actitudes positivas hacia las políticas públicas, a nivel internacional podría ocurrir que los países que tienen mayor porcentaje de gente en ambas, o al menos en una de estas situaciones sean aquellos con mayores consensos. Si esto fuese así, la aparente relación entre tipo de Estado del Bienestar y actitudes hacia el mismo sería sólo una relación espuria que encubre la diferente distribución de ciertas características individuales en cada una de las sociedades que estudiamos.

Para ver hasta que punto esto es o no es así hemos repetido los análisis del apartado anterior incluyendo en los modelos de regresión no sólo las variables-país sino también tres variables más: la posición económica del individuo relativa a la mediana nacional, su ideología más o menos igualitaria (medida como apoyo o rechazo a la redistribución), y el sexo, esta última no porque en unos países haya más hombres que mujeres sino porque nos será útil más adelante.

Lo que esto supone es que ya no estamos comparando las opiniones de los ciudadanos, por ejemplo, franceses con la de sus homólogos ingleses. Ahora comparamos a ciudadanos que, aunque tienen distinta nacionalidad, son iguales en lo que a estas tres nuevas variables se refiere. Lo que los coeficientes para las variables-país nos indican ahora es si dos ciudadanos del mismo sexo, con la misma ideología y la misma posición económica, pero que viven en países distintos, son también distintos en sus actitudes hacia el EB. Y si pese a restringir tanto la comparación comprobamos que el país sigue importando, entonces podremos pasar a explicar porqué importa.

¹⁰ Hay bastante polémica sobre el tema. Algunos autores argumentan que parte de las actitudes políticas de los ciudadanos de EE.UU. están basadas en un extendido individualismo y anti-intervencionismo (Lipset, 1994), aunque otros no encuentran que los estadounidenses sean menos favorables que quienes viven en otras naciones a elementos redistributivos como los impuestos progresivos. Giddens (2000) afirma que los nórdicos son históricamente más igualitarios que el resto de los europeos, y aunque los resultados de Svallfors (1997) le dan la razón, Gundelach (1994) encuentra que, enfrentados a la clásica pregunta en la que hay que elegir entre el principio de igualdad y el de libertad, los suecos se inclinan hacia la libertad en mayor medida que otros países. De la misma manera, Noya (1999) analiza las actitudes hacia la igualdad en perspectiva comparada para encontrar que los mayores niveles de igualitarismo están en el sur de Europa.

Tabla 5.17. El efecto del país sobre las actitudes hacia la intervención del Estado en bienestar controlando por características de los individuos. Regresiones logísticas ordinales

| Sanidad | Coef. | P > z | Pensiones | Coef. | P > z | Desempleo | Coef. | P > z |
|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| P. econ | 2501489 | 0.000 | P. econ | 392446 | 0.000 | P. econ | 4153133 | 0.000 |
| Igualit=2 | .7503309 | 0.000 | Igualit=2 | 7373873 | 0.000 | Igualit=2 | 6911951 | 0.000 |
| Igualit=3 | 1.121237 | 0.000 | Igualit=3 | 1.090268 | 0.000 | Igualit=3 | 1.081316 | 0.000 |
| Igualit=4 | 1.27209 | 0.000 | Igualit=4 | 1.181216 | 0.000 | Igualit=4 | 1.420074 | 0.000 |
| Igualit=5 | 1.50358 | 0.000 | Igualit=5 | 1.458278 | 0.000 | Igualit=5 | 1.914372 | 0.000 |
| Mujer | -.214791 | 0.000 | Mujer | -.231639 | 0.000 | Mujer | -.200887 | 0.000 |
| Australia | 2.20323 | 0.000 | Australia | 2.322045 | 0.000 | Australia | 1.592936 | 0.000 |
| Alemania | 1.896453 | 0.000 | Alemania | 1.861193 | 0.000 | Alemania | 1.019411 | 0.000 |
| G. Bretaña | .5079469 | 0.000 | G. Bretaña | .9470267 | 0.000 | G. Bretaña | .8559547 | 0.000 |
| EE.UU. | 2.512527 | 0.000 | EE.UU. | 2.388714 | 0.000 | EE.UU. | 2.168992 | 0.000 |
| Italia | .6190232 | 0.000 | Italia | .8263054 | 0.000 | Italia | 1.010516 | 0.000 |
| Suecia | 1.203304 | 0.000 | Suecia | 1.143437 | 0.000 | Suecia | .2647809 | 0.002 |
| Canadá | 1.412395 | 0.000 | Canadá | 2.000644 | 0.000 | Canadá | 1.370605 | 0.000 |
| España | .6495383 | 0.000 | España | .6041055 | 0.000 | España | -.527035 | 0.000 |
| Francia | 2.23412 | 0.000 | Francia | 2.127907 | 0.000 | Francia | .731475 | 0.000 |
| Irlanda | .9462825 | 0.000 | Irlanda | .6889905 | 0.000 | Irlanda | .1317319 | 0.137 |
| /cut1 | 2.748734 | 2.545111 | /cut1 | 2.605859 | 2.410069 | /cut1 | .3932065 | .2563841 |
| /cut2 | 5.527882 | 5.304911 | /cut2 | 5.542696 | 5.326672 | /cut2 | 3.113572 | 2.96388 |
| /cut3 | 7.074701 | 6.807533 | /cut3 | 7.346436 | 7.070363 | /cut3 | 4.900131 | 4.733403 |

Modelos de regresión logística ordinal. Prob > chi2 para los tres modelos = 0.0000. Categoría de referencia: Noruega. Variables independientes además del país: «P.econ» ingresos familiares en relación a la mediana nacional; «Igualit», grado de acuerdo con que el Gobierno disminuya las diferencias entre gente con altos y bajos ingresos, siendo 1 el mayor grado de acuerdo (categoría de referencia), y 5 el mayor grado de desacuerdo. Mujer: coeficiente para las mujeres en comparación con los hombres.

Los modelos que aparecen en la tabla 5.17 incluyen dos tipos de variables:

1. En primer lugar tenemos las variables micro, referidas a características de los individuos que varían entre los ciudadanos de un mismo país:

- El sexo.
- La posición económica medida en relación a la mediana nacional¹¹.

¹¹ Obviamente, todos los países tienen al 50% de sus ciudadanos por encima y al 50% por debajo de la mediana, pero en los modelos no estamos comparando países entre sí sino ciudadanos entre sí. Al incluir la posición económica del individuo en relación a la mediana de ingresos de su país lo que estamos haciendo es forzar al modelo para que compare entre sí las actitudes de individuos cuya posición en la escala de ingresos es similar. No comparamos gente con los mismos ingresos brutos, lo que sería absurdo dadas las diferencias en paridad de poder adquisitivo entre países, sino gente similar en su grado de pobreza o riqueza.

- El grado de «igualitarismo», medido a través de las respuestas a la siguiente pregunta del cuestionario:

Digame su opinión sobre la siguiente frase «Es responsabilidad del Gobierno reducir las diferencias de ingresos entre la gente con altos ingresos y la gente con bajos ingresos»:

- *Muy de acuerdo.*
- *De acuerdo.*
- *Ni de acuerdo ni en desacuerdo.*
- *En desacuerdo.*
- *Muy en desacuerdo*

La justificación de que utilicemos esta pregunta como indicador de los valores igualitarios o individualistas de los ciudadanos se encuentra en el apartado metodológico. Baste decir aquí que esta pregunta funciona para indicar los valores igualitarios o individualistas en lo económico, pero no en lo cultural¹², y que, si bien no sirve como resumen perfecto de «los valores económicos» del individuo, sí consideramos que las personas más favorables a disminuir los diferenciales de ingresos son más igualitaristas que aquellas que opinan lo contrario.

Los coeficientes de estas variables vienen a confirmar lo que ya sabíamos por multitud de estudios previos:

- La gente con más ingresos es, independientemente de su ideología y sexo, menos favorable a la existencia de programas públicos de bienestar que quienes tienen menos ingresos.
- Las personas que sustentan valores igualitarios son, independientemente de sus ingresos y sexo, más partidarias de la existencia de programas de bienestar que quienes sustentan valores individualistas.
- Las mujeres, independientemente de sus ingresos y de su ideología, tienden a ser más favorables a la existencia de programas públicos de bienestar que los hombres.

Estos son efectos generales, es decir, todo esto es cierto si tomamos a la población de los once países como un solo conjunto aunque, como veremos en los capítulos 6 a 8, la relación entre ingresos y actitudes, ideología y actitudes, o sexo y actitudes, puede ser más o menos fuerte dependiendo del país hacia el que dirijamos la mirada.

En segundo lugar tenemos en los modelos a las ya conocidas «variables país», que nos indican el efecto de esta macro variable sobre las actitudes hacia los programas públicos por los que se pregunta. Lo que nos interesa de este modelo son estas variables-país, y los coeficientes de la columna $P > z$, todos superiores a 0.05, indican que el efecto del país sobre las actitudes sigue siendo importante aún cuando comparamos las opiniones de ciudadanos con valores

¹² Houtman (2000) demuestra que los valores igualitarios respecto a lo económico (igualdad de derechos económicos) y los valores igualitarios respecto a cuestiones culturales (tolerancia con otras culturas, igualdad de derechos culturales) no van unidos.

similares en las tres variables micro. La categoría de referencia en estos modelos es, como en los anteriores, Noruega. Es decir, estamos comparando todos los países con Noruega, o a los ciudadanos de cada país, con los noruegos¹³.

Si hacemos test de significatividad comparando cada país con todos los demás, observamos que además de ser distintos de los noruegos las restantes nacionalidades también difieren las unas de las otras. Hay ocasiones, por supuesto, en que dos naciones tienen el mismo efecto. Por ejemplo en opiniones sobre la sanidad da lo mismo ser italiano que español, el efecto de estos dos países sobre las actitudes es el mismo. Pero la pauta general es, como decimos, que los países difieran entre sí.

Como el objetivo de estos modelos era sólo éste, el verificar que las variaciones internacionales en actitudes hacia el Estado del Bienestar no pueden explicarse completamente por el hecho de que en unos países haya más pobres o más igualitarios, no resulta necesario dar más vueltas a los coeficientes. Podemos, eso sí, volver a ordenar a los países en función de los apoyos que los programas de bienestar reciben en cada uno de ellos eliminando el hecho de la distinta distribución de ingresos e ideología. Como vemos en la tabla 5.18, incluso cuando tenemos en cuenta que los países varían en el porcentaje de gente que sostiene valores igualitarios y en el porcentaje de gente con ingresos bajos, la relación entre tipo de EB y legitimidad del mismo se mantiene.

Tabla 5.18.

Efecto del país en las actitudes hacia los programas de bienestar comparando personas con la misma ideología, posición económica y sexo (t-test). Países ordenados de mayor a menor apoyo a los programas de bienestar.

| Sanidad | | Pensiones | | Desempleo | |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Noruega | 0 | Noruega | 0 | Noruega | 0 |
| Suecia | 1.20 | Suecia | 1.14 | Suecia | 0.26 |
| Canadá | 1.41 | Alemania | 1.86 | Francia | 0.73 |
| Alemania | 1.89 | Francia | 2.12 | Alemania | 1.02 |
| Francia | 2.23 | Canadá | 2.00 | Canadá | 1.37 |
| Australia | 2.20 | Australia | 2.32 | Australia | 1.59 |
| EE.UU. | 2.51 | EE.UU. | 2.38 | EE.UU. | 2.17 |

5. 5. Conclusiones

La mayoría de los trabajos previos sobre actitudes hacia las políticas públicas y el Estado del Bienestar mostraban la existencia de diferencias entre unos y otros países en cuanto a la magnitud del consenso en torno a estas intervenciones gubernamentales (Blekesane & Quadagno, 2003; Svallfors, 2000; Gelissen, 2000; Bonoli, 2000; Kangas & Forma, 1999).

¹³ Los coeficientes de regresiones logísticas ordinales nos indican la magnitud de la relación entre dos variables pero no tienen una interpretación tan directa como los coeficientes de regresiones lineares. En estos modelos es necesaria una transformación de los coeficientes para apreciar el tamaño de la relación, cosa que no haremos en este apartado porque lo que nos interesa es sólo si las relaciones que estudiamos son o no son estadísticamente significativas.

Lo que hemos hecho en el análisis previo ofrece algunas aportaciones adicionales:

1. En primer lugar, incluimos mayor número de países que la mayoría de los estudios anteriores, lo que sirve para confirmar que *la existencia de variaciones internacionales en la legitimidad de los sistemas de bienestar va más allá de que los casos extremos difieran entre sí*. Sabemos ahora que no sólo EE.UU. y Suecia, clásicos casos extremos de estudio, son diferentes en lo que sus ciudadanos opinan, sino que la mayoría de países son distintos entre sí.
2. En segundo lugar, hemos llevado a cabo *un tratamiento estadístico de los datos bastante cuidadoso que nos garantiza la existencia de las variaciones observadas en nuestra muestra*: las conclusiones que sacamos de encuestar a 16.000 individuos son generalizables a los casi 700 millones de personas que componen la población total de los once países¹⁴.
3. En tercer lugar mostramos que la variación en la legitimidad de los Estados del Bienestar no puede explicarse totalmente por el hecho de que las características que determinan las actitudes hacia las políticas sociales se distribuyan de distinta manera en unos y otros países. *Incluso comparando individuos con la misma ideología, posición económica y sexo, el país sigue siendo importante para determinar las opiniones acerca de la conveniencia o no de mantener programas de bienestar*.
4. *Además, la relación entre tipo de EB y nivel de legitimidad (vista en la tabla 5.10) se mantiene cuando tenemos en cuenta que los porcentajes de igualitarios y la distribución de ingresos es diferente en cada país*: los ciudadanos de los países con EBs Socialdemócratas son más favorables a la existencia de políticas públicas de bienestar que sus homólogos Conservadores, y estos más favorables que quienes viven bajo sistemas de bienestar Liberales, aun cuando comparamos personas muy similares en ideología, sexo e ingresos.
5. Hemos dicho que el que en unos países haya más o menos pobres, más o menos igualitarios, no explica que unos países tengan más apoyo al EB. Las variaciones entre países después de controlar por estas variables siguen existiendo, pero sería lógico que hubieran disminuido algo. Lo que, en último lugar, puede aportar nuestro análisis es una medida de esa disminución.

Si volvemos a repetir los modelos de regresión multinivel que presentamos en el apartado 5.2 incluyendo en ellos las variables sexo, posición económica e igualitarismo, podemos incluso «medir» qué parte de la variación entre países en apoyo agregado al EB se explica por cuestiones relativas a la distinta distribución de estas características individuales: un 12 por ciento de la variación entre países en la legitimidad de sus programas de sanidad, un 16% de la variación en legitimidad de los sistemas de pensiones y un 25% de la de los programas de desempleo. Es decir, *si todos los países estudiados tuvieran la misma distribución de ingresos y el mismo porcentaje de personas con valores igualitarios o individualistas, las diferencias internacionales en la legitimidad de los programas de sanidad serían un 12% menores, las diferencias en legitimidad de los programas de pensiones un 16% menores, y las referidas a los programas de desempleo un 25% menores*.

No incluimos aquí las tablas con los coeficientes de estos modelos multinivel a los que nos acabamos de referir porque, como les usaremos también más adelante, aparecen el capítulo siguiente.

¹⁴ Por supuesto, este dato se ofrece *grosso modo*.

6. *La composición de las poblaciones nacionales en lo referido a estas variables no es, a la vista de estos porcentajes de variación explicada, irrelevante para entender porqué los sistemas de bienestar de unos países logran más legitimidad que los de otros. Pero lo cierto es que la mayor parte de la variación sigue quedando inexplicada.* El hecho de que los noruegos sean más favorables al Estado del Bienestar que los australianos (por ejemplo) se debe en una pequeña medida a que las dos sociedades son distintas en cuanto a la distribución de los ingresos y en cuanto a la extensión de valores igualitarios, pero en su mayor parte no sabemos (aún) por qué se producen ya que entre el 75 y el 88% de la variación internacional ha quedado inexplicada.

Sabemos, eso sí, que hay una relación entre el tipo de Estado del Bienestar y el nivel de legitimidad, y en las páginas siguientes nos vamos a ocupar de ver hasta qué punto esta relación nos ayuda a entender el porcentaje de variación inexplicada en actitudes hacia el EB.

***Capítulo 6. La composición de los consensos nacionales.
Fracturas económicas y legitimidad***

6.1. Justificación teórica.

6.2. Comprobación de la hipótesis: acuerdo Inter.-clases y legitimidad.

6.3. El efecto de los ingresos país a país.

6.4. Conclusión. Fracturas económicas y tipo de Estado del Bienestar.

6. Fracturas económicas y legitimidad

El capítulo anterior nos ha servido para ver que los programas de bienestar, además de estar organizados de manera distinta en cada país, también difieren en su nivel de legitimidad y que, si ordenamos a los países en función de su apoyo agregado al EB, la pauta corresponde con la que sería esperable sobre la base de las tipologías de bienestar. Además, la relación vista no se explica por la distinta distribución de ciertas características en las poblaciones nacionales ya que, si comparamos individuos con similar ideología, sexo e ingresos, aquellos que viven en países con sistemas de bienestar socialdemócratas son más favorables al EB que quienes viven en países con sistemas corporativos, y a su vez estos últimos son más favorables que los que viven bajo Estados del Bienestar liberales.

Esta segunda parte del análisis, que comprende los capítulos 6, 7 y 8, está dedicada a tratar de explicar porqué se produce esta relación que acabamos de describir, es decir, porqué unos Estados del Bienestar logran sumar más apoyos que otros.

En el capítulo 3 elaboramos una serie de hipótesis sobre las causas de la relación y, para verificarlas, debemos ahondar en la composición de los consensos nacionales en torno al Estado del Bienestar. Sólo conociendo qué colectivos apoyan o rechazan la existencia de programas de bienestar en cada país podremos determinar de dónde sale el apoyo «extra» que algunos sistemas de bienestar reciben, deduciendo de ello los mecanismos mediante los que el tipo de EB (con todas sus características organizativas) se traslada en consensos más o menos amplios sobre el mismo. En este capítulo nos centraremos en las fracturas del consenso que se generan por la distinta posición económica de los individuos, en el capítulo 7 hablaremos de fracturas en el apoyo al Estado del Bienestar por razones ideológicas, y en el 8 veremos las diferencias entre hombres y mujeres a lo largo de los 11 países.

6.1. Justificación teórica

Multitud de estudios demuestran que, en prácticamente todos los países y para casi cualquier tema relacionado con la provisión de servicios de bienestar, las personas con mejor situación económica son menos propensas a apoyar la intervención del Estado que aquellas con peor situación económica¹. Este hecho se explica siempre haciendo referencia a que los colectivos con buena posición económica no necesitan (o no necesitan tanto) la intervención del Estado en bienestar porque cuentan con recursos suficientes como para que sea el mercado quién les provea, y siempre podrán optar libremente entre provisión pública o provisión privada. La opción de las personas con rentas bajas es bastante más restrictiva ya que, en general, sólo accederán a determinados servicios si existen políticas públicas de bienestar que se los proporcionen gratuitamente o a un coste muy bajo. Para muchos de ellos la opción es provisión pública o nada.

Dicho esto, hay que decir también que no sabemos si la fuerza de esta relación entre posición económica y actitudes es igual a lo largo de todos los países, ni siquiera a lo largo de los once países que forman parte de nuestro estudio. ¿Cuánto más favorables al EB son los «pobres» que los «ricos»²? Y, sobre todo, esta distancia entre pobres y ricos, ¿es la misma en todos los países?

¹ Taylor-Gooby, 1983; Mouritzen, 1987; Hasenfeld and Rafferty, 1989; Peillon, 1995; Forma, 1996; Shivo & Uusitalo, 1995; Svallfors, 1999; Andersen et alia, 1999; Nordlund, 1997; Svallfors, 1997; Andreß & Heien, 2001.

En las siguientes páginas vamos a analizar qué tipo de fracturas económicas se aprecian en cada uno de los países objeto de estudio, comparando el tamaño de las fracturas con la legitimidad de los programas para ver si podemos entender cómo han hecho algunos de ellos para ganar tantos adeptos. Prestaremos particular atención a la forma de las fracturas económicas en los países Socialdemócratas, que se caracterizan por tener programas de bienestar con enorme respaldo popular y, de esta forma, iremos aportando datos que no permitan dar respuesta, en el capítulo 9 que sirve de recapitulación, a la pregunta que nos planteábamos: ¿De dónde salen los apoyos «extra» de los que disfrutaban los sistemas de bienestar Socialdemócratas? ¿A qué colectivos logran atraer los programas de bienestar en Noruega y Suecia, que no atraen los programas de otros países?

Pese a lo abierto de nuestras preguntas, el análisis que realizaremos no es a ciegas sino que se estructura en torno a una serie de hipótesis inspiradas en las sugerencias de Gøsta Esping-Andersen (1990), Walter Korpi y Joakim Palme (1998). Estos autores, por separado, argumentan que el amplio apoyo popular del que disfrutaban los Estados del Bienestar nórdicos podría deberse a que, en ellos, la relación entre posición económica y actitudes hacia el Estado del Bienestar se difumina.

En Escandinavia, el respaldo público al estado del bienestar es elevado y estable, lo cual no resulta sorprendente. En Dinamarca, quienes están a favor de 'mantener las actuales reformas sociales' son hoy tan mayoritarios como lo eran en 1969. Pero no todos los elementos del estado del bienestar resultan igualmente populares. Los programas dirigidos a grupos de población específicos gozan de menor popularidad que los subsidios universales (Taylor-Gooby, 1996). Esto podría explicar por qué los estados del bienestar nórdicos (y europeos) están más consagrados que –pongamos por caso- el norteamericano. Tanto los izquierdistas como los derechistas como el votante medio sostienen el edificio debido a que todos se benefician de él directa y personalmente. De hecho, cuanto más integral y universal sea éste, mayor es la población que basa sus cálculos vitales en los derechos sociales. (Esping-Andersen, 1998, p. 192).

En el capítulo 1 vimos que una de las razones para apoyar o rechazar la existencia de un programa de bienestar era si nos interesaba directa y materialmente que existiera. La gente con ingresos bajos suele mantener opiniones positivas sobre los programas de bienestar porque, en general, su grado de interés en que los programas existan es elevado. Sin embargo, para las personas con ingresos altos los programas de bienestar serán más o menos beneficiosos dependiendo de cómo estén organizados, esto es, dependiendo de qué se les ofrezca. Pueden ser vistos como una simple carga fiscal, cuando las clases medias son sólo contribuyentes pero no beneficiarios, o como un instrumento estable (el garante es el Estado) y eficaz de provisión cuando el acceso es universal y las prestaciones lo suficientemente generosas como para satisfacerles.

² De vez en cuando hablaremos de «ricos y pobres» en lugar de «personas con posición económica alta o baja», pero debo mencionar que es un mero recurso estilístico para evitar repetir tanto los mismos términos. En realidad nuestra variable de posición económica, como explicamos en la metodología, no es lo suficientemente sensible como para discriminar bien los extremos. Debido a que las categorías de la variable ingreso familiar no eran iguales en todos los cuestionarios, nuestra variable de posición económica relativa tiene en el extremo inferior a quienes tienen rentas por debajo del 60% de la mediana, y como extremo inferior a las personas con rentas superiores en un 60% de la mediana.

Como menciona Esping-Andersen en la cita anterior, los programas de bienestar de los países con EBs Socialdemócratas se caracterizan por tener cobertura universal y alta calidad de las prestaciones, lo que implica que todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos, se benefician de ellos, y que el mantenimiento de los programas de bienestar interesa, *grosso modo*, a todos por igual. El apoyo «extra» que recibe el Estado del Bienestar en estos países en comparación con otros se debería entonces a que logra la adhesión de las clases medias y medias-altas, además del apoyo de la clase baja y la media-baja, que se supone «garantizado» en cualquier sistema de bienestar.

Walter Korpi y Joakim Palme van a ahondar más en esta cuestión, indicando cuál debería ser la relación con el Estado del Bienestar de las clases medias y medias-altas en los tres principales tipos. En el capítulo 2 vimos que estos autores manejan una clasificación de Estados del Bienestar alternativa a la de Esping-Andersen, basada fundamentalmente en los principios organizativos que rigen las políticas sociales, pero que arroja resultados similares en la clasificación de muchos países. El tipo «Encompassing» incluye a los países nórdicos y correspondería con el tipo Socialdemócrata, el tipo Corporativo corresponde al del mismo nombre, y dos categorías: «Basic security» y «Targeted» integran a los países del modelo Liberal.

Institutional structures also affect coalition formation and the definition of interests among citizens in indirect ways through the various 'strategies of equality' they can be seen as embodying. These strategies can be defined by their degree of low-income targeting (i.e., the extent to which budgets used to redistribution go to those defined as poor). The degree of low-income targeting varies between institutional types. (...)

The targeted model thus tends to drive a wedge between the short-term material interests of the poor and those of the rest of the population, which must rely on private insurance. It gives the better-off categories no rational basis for including the poor, and leaves the poor to trust the altruism of the more fortunate (...). The encompassing model includes all citizens in the same programs. By giving basic security to everybody and offering clearly earning-related benefits to all economically active individuals, in contrast to the targeted and basic security models, the encompassing model brings low-income groups and the better-off citizens into the same institutional structures. Because of its earning-related benefits, it is likely to reduce the demand for private insurance. Thus, the encompassing model can be expected to have the most favourable outcomes in terms of the formation of class coalitions that include manual workers as well as the middle classes. By providing sufficiently high benefits for high-income groups so as not to push them to exit, in encompassing institutions the voice of better-off citizens helps not only themselves but low-income groups as well (Korpi and Palme, 1998).

Esta es la hipótesis de Esping-Andersen y Korpi & Palme³ que vamos a tratar de verificar empíricamente. Como explicamos en el capítulo 3, si las diferencias en legitimidad de los EBs se

³ En realidad, la idea de que, dependiendo de cómo se organicen los sistemas de bienestar, se generarán determinados consensos en torno a los mismos no es nueva. Titmuss, en 1955, sugiere casi lo mismo: «A recent official sample inquiry tentatively suggested that about half the claimants for national insurance sickness benefits were also covered by employer's sick pay schemes, the proportion ranging from one-third among manual workers to 90 per cent for administrators (...). Their provision is part of the model of the 'good employer'. But as they grow and multiply they come into conflicts with the aims and unity of social policy; for in effect (whatever their aims may be) their whole tendency at present is to divide loyalties, to nourish privilege, and to narrow social conscience as they have already done in the United States, in France and in Western Germany» (Titmuss, 1955, p. 164).

derivan de que algunos sistemas consiguen limar las diferencias de opinión entre gente con distinta posición económica tenemos que encontrar que:

1. La posición económica relativa del individuo determina sus opiniones sobre los programas de bienestar con una fuerza distinta dependiendo del país (existe variación internacional estadísticamente significativa en el tamaño del coeficiente de la variable «posición económica relativa»). Es decir, las fracturas económicas en los consensos en torno a los programas de bienestar son significativamente mayores en unos países que en otros.
2. Los colectivos con mayores ingresos variarán *más* entre países en sus opiniones sobre el EB de lo que lo hacen los colectivos con bajos ingresos. Una de las asunciones de la hipótesis es que el apoyo de las clases bajas es bastante homogéneo y, por ello, para extender la legitimidad de un sistema de bienestar es necesario lograr también la adhesión de las clases medias. Dado que la hipótesis prevé que sólo algunos sistemas (los socialdemócratas) consiguen ganar el apoyo de estas clases, debemos encontrar que las actitudes de los colectivos con rentas medias y medias altas varían más de un tipo a otro de Estado del Bienestar de lo que lo hacen las actitudes de los colectivos con rentas bajas.
3. Los programas de bienestar que logran mayor legitimidad se caracterizan porque su apoyo está poco fracturado siguiendo líneas económicas. Los programas más legitimados son apoyados casi en la misma medida por gente con ingresos por debajo del 60% de la mediana y por gente con ingresos superiores en un 60% a la mediana.
4. El apoyo «extra» que las clases medias aportan cuando deciden apoyar un programa de bienestar es suficientemente importante como para que se note a nivel agregado. Las variaciones en la fuerza de los ingresos para determinar las actitudes son suficientemente importantes como para explicar una parte relevante de las variaciones internacionales en legitimidad de los programas de bienestar.

6.2. Comprobación de la hipótesis: consenso Inter.-clases y legitimidad

La forma más rápida de ver si la hipótesis de estos dos autores resulta correcta es utilizar la técnica de regresión multinivel porque, aunque la hemos aplicado en el capítulo anterior para ver la importancia de las variaciones actitudinales entre países (el porcentaje de varianza total explicado por el país de pertenencia), también nos ofrece otras posibilidades.

Los modelos de regresión multinivel se han desarrollado no sólo para medir la variabilidad entre grupos e intra-grupos (lo que hicimos en el capítulo anterior), sino, sobre todo, para explicar porqué los grupos varían entre sí. En nuestro caso, la técnica nos servirá para ver si la relación entre ingresos y actitudes es diferente en cada uno de los países, y para comprobar si esta variación explica el que unos países tengan más apoyo agregado que otros a las políticas públicas de sanidad, pensiones y desempleo.

En las dos tablas siguientes se muestran los coeficientes de seis modelos de regresión multinivel, dos para las actitudes hacia cada programa de bienestar. Los tres primeros incluyen las variables «posición económica relativa», «igualitarismo» y «sexo» (tabla 6.1). Los tres modelos siguientes (tabla 6.2) incluyen las mismas variables pero, además, permiten que la relación entre «posición económica relativa» y actitudes varíe en función del país. Estos tres últimos

modelos son similares a modelos de regresión lineal que incluyeran interacciones entre el país y la posición económica relativa.

La utilidad «extra» de los modelos multinivel respecto a la clásica regresión lineal con variables de interacción es que nos permiten ver si el hecho de que la relación ingresos-actitudes varíe entre países sirve para explicar las diferencias internacionales en el apoyo agregado a los programas de bienestar. Nos permiten ver si unos Estados del Bienestar logran más apoyo que otros porque en ellos hay menos (o ninguna) relación entre la posición económica del individuo y sus opiniones sobre las políticas sociales.

Tabla 6.1. Modelos multinivel sin variación del efecto de los ingresos entre países

Parte fija:

| Sanidad | Coef. | P > z | Desempleo | Coef. | P>z | Pensiones | Coef. | P > z |
|-------------------|-----------|-------|-------------------|----------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Pos. Econ. | .0627635 | 0.000 | Pos. Econ. | .1519888 | 0.000 | Pos. Econ. | .0946834 | 0.000 |
| Mujer | -.0506111 | 0.000 | Mujer | -.069598 | 0.000 | Mujer | -.0570278 | 0.000 |
| Ideología | .098441 | 0.000 | Ideología | .1664683 | 0.000 | Ideología | .0941563 | 0.000 |
| _cons | 1.172835 | 0.000 | _cons | 1.58976 | 0.000 | _cons | 1.218036 | 0.000 |

Parte variable:

| Sanidad | Estimate | [95% Conf. Interval] |
|--------------|----------|----------------------|
| Sd(_cons) | .2058782 | .1324419 .3200335 |
| Sd(Residual) | .5577651 | .5510912 .5645199 |

| Desempleo | Estimate | [95% Conf. | Interval] |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Sd(_cons) | .2806012 | .1805706 | .4360459 |
| Sd(Residual) | .7156491 | .7069757 | .7244289 |

| Pensiones | Estimate | [95% Conf. | Interval] |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Sd(_cons) | .2012855 | .129479 | .3129145 |
| Sd(Residual) | .552577 | .5459715 | .5592623 |

Para los 3 modelos: Prob >chi² = 0.0000.
 Lrttest comparando con regresión OLS: Pr > chi² = 0.0000.

Tabla 6.2. Modelos multinivel incluyendo variación del efecto de los ingresos entre países⁴

Parte fija:

| Sanidad | Coef.P>z | P > z | Desempleo | Coef. | P > z | Pensiones | Coef. | P > z |
|-------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|-------|
| Pos. Econ. | .0585746 | 0.044 | Pos. Econ. | .1551287 | 0.000 | Pos. Econ. | .0913612 | 0.001 |
| Mujer | -.0490185 | 0.000 | Mujer | -.0691173 | 0.000 | Mujer | -.0557016 | 0.000 |
| Ideología | .0981942 | 0.000 | Ideología | .1666801 | 0.000 | Ideología | .0937479 | 0.000 |
| _cons | 1.171907 | 0.000 | _cons | 1.588891 | 0.000 | _cons | 1.217702 | 0.000 |

Parte variable:

| Sanidad | Estimate | [95% Conf | Interval] |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Sd(prmedian) | .0884743 | .0525185 | .1490465 |
| Sd(_cons) | .2027524 | .1304178 | .3152065 |
| Corr(prmedian,_cons) | .7660552 | .2349056 | .9449145 |
| Sd(Residual) | .5566257 | .5499629 | .5633694 |

| Desempleo | Estimate | [95% Conf | Interval] |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Sd(prmedian) | .055888 | .0255026 | .1224767 |
| Sd(_cons) | .2794458 | .1798195 | .4342685 |
| Corr(prmedian,_cons) | .4125849 | -.3796732 | .8557164 |
| Sd(Residual) | .7152956 | .7066233 | .7240743 |

| Pensiones | Estimate | [95% Conf | Interval] |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Sd(prmedian) | .0828598 | .0485381 | .1414506 |
| Sd(_cons) | .198492 | .1276681 | .3086055 |
| Corr(prmedian,_cons) | .5777371 | -.5450034 | .5582758 |
| Sd(Residual) | .5515997 | .5450034 | .5582758 |

Para los 3 modelos: prob>chi² = 0.0000.

Lrtest comparando con regres OLS: Prob>chi² = 0.0000.

Hipótesis 1: variación del efecto de los ingresos sobre las actitudes entre países

Lo primero que muestran nuestros modelos es que, efectivamente, la posición económica del individuo no afecta a las actitudes hacia el Estado del Bienestar de la misma manera en todos

⁴ Para construir un modelo en el que la relación entre la variable dependiente y una variable independiente pueda variar de un país a otro lo que se incluye es un nuevo modelo de regresión dentro del modelo general.

Este nuevo modelo de regresión tiene como variable dependiente aquella cuyo efecto creemos que es distinto en unos y otros países (en este caso los ingresos). En términos técnicos a esto se le llama incluir un «random slope» en el modelo, una pendiente variable para la recta de regresión que relaciona las actitudes del individuo con sus ingresos. miliar no eran iguales en todos los cuestionarios, nuestra variable de posición económica relativa tiene en el extremo inferior a quienes tienen rentas por debajo del 60% de la mediana, y como extremo inferior a las personas con rentas superiores al 60% de la mediana.

los países. En los capítulos 7 y 8 vamos a elaborar este mismo tipo de modelos para verificar, en cada caso, hipótesis acerca de la variación internacional de las fracturas ideológicas o de género en las actitudes hacia el EB. Es por ello que en este capítulo voy a ir explicando de dónde salen las conclusiones de las que hablo, dirigiendo al lector a los coeficientes en concreto que hemos de mirar y a su interpretación. La lectura es más densa de esta manera, pero abandonaremos los términos estadísticos al final de este capítulo, y en los siguientes veremos ya exclusivamente las cuestiones de contenido.

La primera conclusión que hemos obtenido deriva de que en los tres modelos de la tabla 6.2 el coeficiente $sd(prmedian)$ es estadísticamente significativo, lo que indica que las pendientes de las rectas de regresión para la variable ingresos difieren entre países (se llama a esto heterogeneidad de las regresiones a lo largo de los grupos). En otras palabras, hay países en los que las diferencias entre personas con altos y bajos ingresos en sus opiniones sobre el EB son mayores que en otros.

Tabla 6.3.

Variación entre países en el efecto de los ingresos sobre las actitudes.

| | Sanidad | Pensiones | Desempleo |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Coefficiente medio | 0.059 | 0.091 | 0.16 |
| Rango de variación del 95% casos | (+/-0.18) = 0.24 - (-0.12) | (+/-0.098) = 0.19 - (-0.007) | (+/-0.11) = (0.27 - 0.05) |

Si miramos la tabla 6.3 podemos ver en qué rango oscilan estas diferencias. En el caso de sanidad el coeficiente varía entre 0.24 y -0.12^5 , con lo que es positivo en algunos países y negativo en otros. Es decir, hay países en los que la clásica relación «a más ingresos menos apoyo al EB» se invierte, y donde los ciudadanos con más ingresos resultan (ligeramente) más favorables a la existencia de programas de sanidad pública que aquellos con menos ingresos.

En el caso de las pensiones ocurre algo similar aunque no tan llamativo. El efecto de la posición económica sobre las actitudes varía entre el 0.19 y el -0.007 , lo que indica que en algunos países los individuos con mayores ingresos son menos favorables a los programas públicos de pensiones, mientras en otros países sus opiniones no se diferencian de las de aquellos con pocos ingresos.

⁵ Stata, el paquete estadístico utilizado para llevar a cabo el análisis de regresión multinivel, no nos indica directamente el rango de variación en el efecto de los ingresos sobre las actitudes, pero se puede calcular de forma muy sencilla a partir de los otros coeficientes que sí aparecen en los modelos. Tomemos como ejemplo el modelo que tiene como variable dependiente las actitudes hacia la responsabilidad del Gobierno en sanidad. En la parte fija tenemos un coeficiente para $prmedian$ (coef: 0.05857). Este es el efecto general de la posición económica relativa sobre las actitudes hacia el programa público de sanidad, el efecto «de base». Sobre este efecto de base se producen las variaciones de los países, cuyo rango viene indicado por el coeficiente $Sd(prmedian)$ de la parte variable del modelo: 0.0885. Este coeficiente viene expresado en desviaciones típicas, y sabemos que el rango de variación del efecto de los ingresos sobre las actitudes de la mayoría de los países está entre ± 2 desviaciones típicas del efecto medio (indicado por el coeficiente $prmedian$ en la parte fija: 0.05857): entre $0.05857 \pm 2 * (0.0885)$. Entre 0.24 y (-0.12) .

La relación entre posición económica relativa y actitudes hacia los programas de desempleo es más homogénea entre países ya que, en todos los casos, los más ricos son menos propensos a defender su existencia y lo que varía es la dimensión del efecto: de 0.27 a 0.05.

Aunque enseguida veremos de forma gráfica en qué se traducen estos coeficientes, merece la pena detenernos un momento para aclarar esta «jerga». Y como es lo último de lo que hemos hablado, nos referiremos a los coeficientes del modelo sobre actitudes hacia la intervención del Estado en protección por desempleo.

En este modelo veíamos que el rango de variación de la relación ingresos-actitudes era de 0.27 a 0.05. En los países caracterizados por tener mucha fuerza de los ingresos sobre las actitudes el coeficiente de esta relación rondará el 0.27, mientras que en aquellos en los que la relación es más débil el coeficiente será de 0.05, o sea, una relación casi inexistente.

Para concretar en qué se traducen estos coeficientes tomemos el país con mayor efecto de los ingresos: aquel en el que el coeficiente de esta relación es igual a 0.27. En este país vamos a seleccionar al azar a dos individuos, pero imponiendo tres condicionantes: que sean del mismo sexo, que tengan la misma ideología y que los ingresos de uno sean iguales a la mediana nacional de ingresos mientras los del otro son el doble de la mediana nacional⁶.

Lo que el coeficiente significa es que, si hacemos esto, el individuo con más ingresos será, de media, y en una escala de 1 a 4, 0.27 puntos menos favorable que el de menos ingresos a la existencia de programas de desempleo. En el país con menor relación entre ingresos y actitudes la diferencia entre estos dos individuos en su apoyo al programa de desempleo sería sólo de 0.05 puntos en una escala de 1 a 4.

La conclusión que sacamos es que hay diferencias entre países en la distancia que separa las actitudes de distintos colectivos de ingresos. Esta misma conclusión nos ofrecen los modelos referidos a sanidad y pensiones. Sin embargo, podemos adelantar que esperábamos encontrar una variación bastante superior a la que muestran los coeficientes.

Esperábamos que la distancia entre las opiniones de los ciudadanos peor y mejor situados económicamente fuese muy distinta dependiendo del país porque, al fin y al cabo, lo que cada uno recibe o deja de recibir del Estado del Bienestar varía enormemente de un lugar a otro. Hablando de sanidad, por ejemplo, tener rentas superiores a la mediana no impide en ninguna medida el acceso a la sanidad pública en España o Noruega, pero restringe los servicios a los que uno puede acceder en Irlanda (el sistema público de sanidad es totalmente gratuito sólo para el 30% de la población con menos ingresos), e impide el acceso en EE.UU. Sin embargo, la variación en la distancia actitudinal entre ricos y pobres no es grande en ninguno de los modelos, lo que es bastante sorprendente incluso teniendo en cuenta que estamos hablando de una relación condicionada al efecto de la ideología y el sexo y, por tanto, ya restringida.

⁶ En una regresión el coeficiente de la variable independiente nos dice cuánto varía el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente aumenta en una unidad. Por tanto 0.27 es lo que cambian las actitudes de un individuo cuando aumentamos sus ingresos en una cantidad igual a la mediana nacional. Evidentemente, a partir del coeficiente también se pueden calcular las actitudes hacia el EB para cualquiera de las posiciones en la escala de ingresos.

¿Realmente las fracturas económicas en los consensos hacia el EB son parecidas, o es que nuestras preguntas son demasiado «morales» como para que haya diferencias importantes?

Para solventar esta duda hemos aplicado el mismo análisis usado para las tres preguntas sobre las responsabilidades del Gobierno a una pregunta de corte menos moral y más material: ¿cuánto debería gastar el Gobierno en la sanidad pública? Si hacemos esto vemos que, como era de esperar, cuanto más «materiales» son las preguntas, cuanto más tocan el bolsillo, más distancia hay entre lo que opinan las distintas clases sociales. Y, sin embargo, la variación internacional en las fracturas económicas es menor aun de la que veíamos para la pregunta sobre la existencia del programa de bienestar.

Por lo tanto, no es que las fracturas de ingresos sean parecidas en los once países porque utilizamos preguntas generales y con un cierto aire «moral». También cuando trabajamos con preguntas concretas sobre gasto encontramos que la distancia entre «ricos» y pobres es parecida en todos los sitios⁷.

Hipótesis 2: homogeneidad de los más pobres, heterogeneidad de los mejor situados.

Si nos olvidamos del país y comparamos a los ciudadanos con distintos niveles de ingresos, resulta cierto que los más pobres son más parecidos en sus actitudes hacia las políticas de bienestar que los más ricos. Los más pobres tienden a apoyar el EB independientemente de su nacionalidad, mientras que los más ricos pueden mostrar desde un apoyo fuerte hasta rechazo dependiendo del país en el que vivan. Nuestra hipótesis 2 se cumple y, sin embargo, no cabe deducir de esto el que las clases bajas sean un bloque homogéneo que apoya las políticas de bienestar en la misma medida independientemente del sistema bajo el que viva.

La variación entre países en el nivel de apoyo de los pobres hacia los programas de bienestar es grande y, lo que ocurre, es que la variación internacional en el apoyo de los ricos es mucho más grande. Todo esto lo sabemos porque hemos vuelto a calcular los modelos anteriores (Tabla 6.2) tomando como referencia primero a los pobres y luego a los mejor situados.

La tabla 6.2.b muestra los coeficientes. Los elementos que más nos interesan, porque en ellos se basa el párrafo anterior, son:

- El coeficiente $\text{var}(\text{cons})$: indica lo que varían unos países de otros en apoyo agregado al EB. Vemos que es mayor para los ciudadanos con ingresos superiores al 60% de la mediana que para quienes tienen ingresos en la mediana, y más pequeño aún para quienes están por debajo del 60% de la mediana.
- El coeficiente $\text{corr}(\text{prmedian}, \text{cons})$: Indica la relación entre la fuerza de la relación ingresos-actitudes y el apoyo agregado. Vemos que es mayor para los más ricos que para los más pobres. Los países donde los ricos son más favorables al EB, son también aquellos con menores fracturas interclases en estas actitudes.

⁷ Los modelos para la pregunta sobre cuánto debería gastar el Gobierno en sanidad pública no se presentan porque se elaboraron prácticamente por curiosidad y, al margen de comentarlos puntualmente en este apartado, no tienen relevancia para el tema que nos ocupa.

Tabla 6.2.b

Las actitudes de los ricos y de los pobres a lo largo de los países. Modelos multinivel.

| Sanidad | Rentas menores al 60 % de la mediana nacional (pobreza) | Rentas en la mediana nacional | Rentas 0,6 veces o más la mediana nacional |
|---|---|-------------------------------|--|
| «Coef prmedian». Efecto medio de los ingresos (tomando todos los países en conjunto) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| «Cte». Nivel de apoyo medio (de todos los países en conjunto) | 1.43 | 1.47 | 1.50 |
| «Var (const)». Variación del apoyo medio entre países | 0.25 | 0.037 | 0.056 |
| «Var (prmedian)». Variación del efecto de los ingresos entre países | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| «Corr (prmedian,cte)». Relación entre la fuerza de los ingresos para determinar las actitudes y el nivel de apoyo agregado. | 0.008 (no signif.) | 0.012 (no signif.) | 0.017 (signif.) |

| Pensiones | Rentas menores al 60 % de la mediana nacional (pobreza) | Rentas en la mediana nacional | Rentas 0,6 veces o más la mediana nacional |
|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Coef prmedian | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Cte | 1.50 | 1.44 | 1.55 |
| Var (const) | 0.036 | 0.028 | 0.048 |
| Var (prmedian) | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Corr (prmedian,cte) | 0.009 (no signif.) | 0.005 (no signif.) | 0.012 (no signif.) |

| Desempleo | Rentas menores al 60 % de la mediana nacional (pobreza) | Rentas en la mediana nacional | Rentas 0,6 veces o más la mediana nacional |
|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Coef prmedian | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Cte | 2.00 | 2.09 | 2.18 |
| Var (const) | 0.065 | 0.071 | 0.08 |
| Var (prmedian) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Corr (prmedian,cte) | 0.004 (no signif.) | 0.006 (no signif.) | 0.007 (no signif.) |

Hipótesis 3: ¿menos fracturas económicas implica más apoyo agregado?

El coeficiente $\text{cov}(\text{prmedian}, \text{cte})$, que mide la relación entre el nivel de apoyo medio y la fuerza de la relación entre ingresos y actitudes es positivo⁸, lo que indica que los programas que tienen más legitimidad, se caracterizan porque hay poca relación entre los ingresos de una persona y su opinión sobre si el programa debería existir o no.

Tenemos que hacer, sin embargo, una puntualización importante: los coeficientes de correlación son positivos, pero no son estadísticamente significativos. Lo que quiere decir que la relación existe en la muestra (cuando estudiamos sólo los 11 países sobre los que estamos trabajando) pero no podemos asegurar que exista en la población: no podemos pretender generalizarla al resto de países, aquellos no incluidos en nuestra muestra.

Aunque ya hemos comentado que no pretendemos usar la generalización estadística para derivar nuestras conclusiones a todos los países existentes, la falta de significatividad es importante porque nos está indicando que, incluso teniendo en cuenta sólo a estos once países de la muestra, la relación es o muy pequeña, o poco clara, algo que de todas maneras ya habíamos visto cuando explicábamos la interpretación de los coeficientes.

Hipótesis 4: las fracturas de ingresos explican las diferencias en legitimidad

Por lo que vemos, el razonamiento en que se basaba la hipótesis de partida no es erróneo: los países en los que los programas de bienestar tienen más apoyo obtienen parte del apoyo «extra» de atraer a los colectivos con más ingresos, pero la tercera condición necesaria para verificar la hipótesis inicial no se cumple: parece que acercar las actitudes de los distintos colectivos de ingresos no es suficiente para generar altos niveles de apoyo popular. La relación entre que un programa tenga mucha legitimidad y que las actitudes hacia el mismo no estén fracturadas ideológicamente es, o muy suave, o poco clara por algún caso que rompe la pauta. Podemos empezar a hacer suposiciones a raíz de esto pero, en lugar de seguir enredando con los coeficientes, vamos a ver todo lo expuesto de forma gráfica.

Gráficos

Los gráficos 6.1, 6.2 y 6.3 muestran las opiniones hacia los tres programas de bienestar en función de la posición económica relativa de los individuos. Para interpretarlos sólo necesitamos saber un par de cosas:

En el eje horizontal de cada una de las sub-gráficas tenemos la posición económica del individuo medida respecto de la mediana nacional. Los ejes están marcados con 3 valores de referencia: (-0.5), (0) y (0.5). Sobre el punto (-0.5) tenemos la media de respuestas de aquellos

⁸ Aunque parezca contra-intuitivo, la existencia de una relación entre acuerdo inter-clases (poca fuerza de los ingresos para determinar las actitudes) y apoyo agregado al programa de bienestar vendría indicada por un coeficiente positivo del coeficiente de correlación. Esto es así porque las tres variables dependientes que utilizamos como medida de la legitimidad de los programas de bienestar tienen una escala que va de 1 a 4, siendo 1 el mayor apoyo, y 4 el mayor desacuerdo (1- «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»; 4-«De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno»). Un coeficiente positivo de la correlación entre fuerza de los ingresos y apoyo agregado indica que los países en los que los ingresos tienen más peso para determinar las actitudes son también aquellos en los que las actitudes agregadas hacia el programa de bienestar están más cerca de los valores altos de la escala. (más cerca del valor 4, y por tanto más cerca de la opinión «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno»)

ciudadanos con ingresos familiares un 50% inferiores a la mediana nacional. Sobre el punto (0) tenemos a los individuos con rentas iguales a la mediana nacional de ingresos, y sobre el punto (0.5) se sitúan quienes tienen ingresos familiares superiores, en un 50%, a la mediana nacional. Los ejes horizontales van desde (-0.6): ingresos un 60% inferiores a la mediana nacional, y por tanto en situación de pobreza económica, hasta (0.6): ingresos un 60% superiores a la mediana nacional, y donde estarían las clases medias, o medias-altas, según cómo entendamos el término. Los puntos (-0.6) y (0.6) no están marcados sobre los ejes horizontales, pero corresponden al extremo izquierdo y al extremo derecho respectivamente.

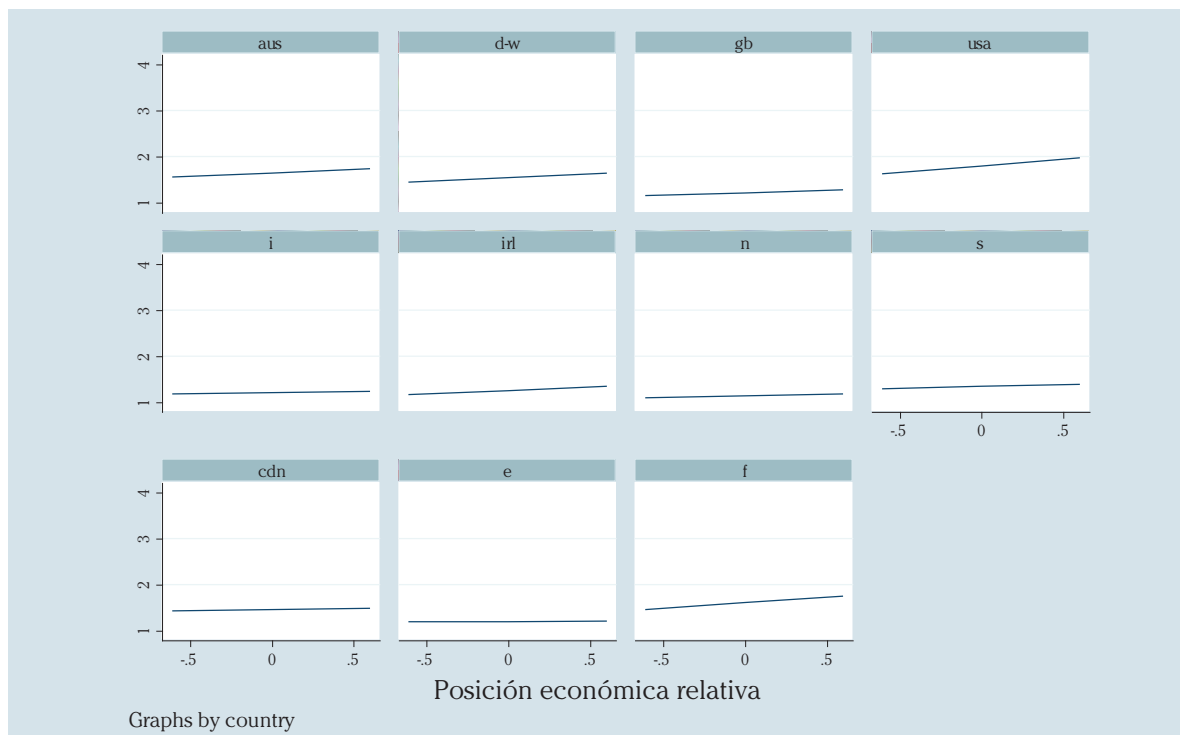
En los ejes verticales figuran las respuestas a las preguntas sobre si debería ser responsabilidad del Gobierno proveer asistencia sanitaria a los enfermos y un nivel de vida digno a ancianos y desempleados. Los ejes verticales están marcado con valores que van de 1 a 4, indicando las respuestas a estas preguntas: 1. Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno; 2. Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno; 3. Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno; 4. De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno.

En el área de los gráficos aparece una línea azul. El extremo izquierdo de la línea muestra la respuesta que, de media, dieron las personas cuyos ingresos les sitúan en la pobreza. En el extremo derecho tenemos la respuesta de las clases medias-altas. La pendiente (inclinación) de las rectas nos indica la distancia que separa a unos colectivos económicos de otros o, lo que es lo mismo, la fuerza de la variable ingresos para determinar las actitudes hacia los programas de bienestar.

En los gráficos 6.1, 6.2 y 6.3 podemos ver todas estas cuestiones que acabamos de comentar. En primer lugar, se aprecia que el efecto los ingresos no es el mismo en todos los países. En

Gráfico 6.1.

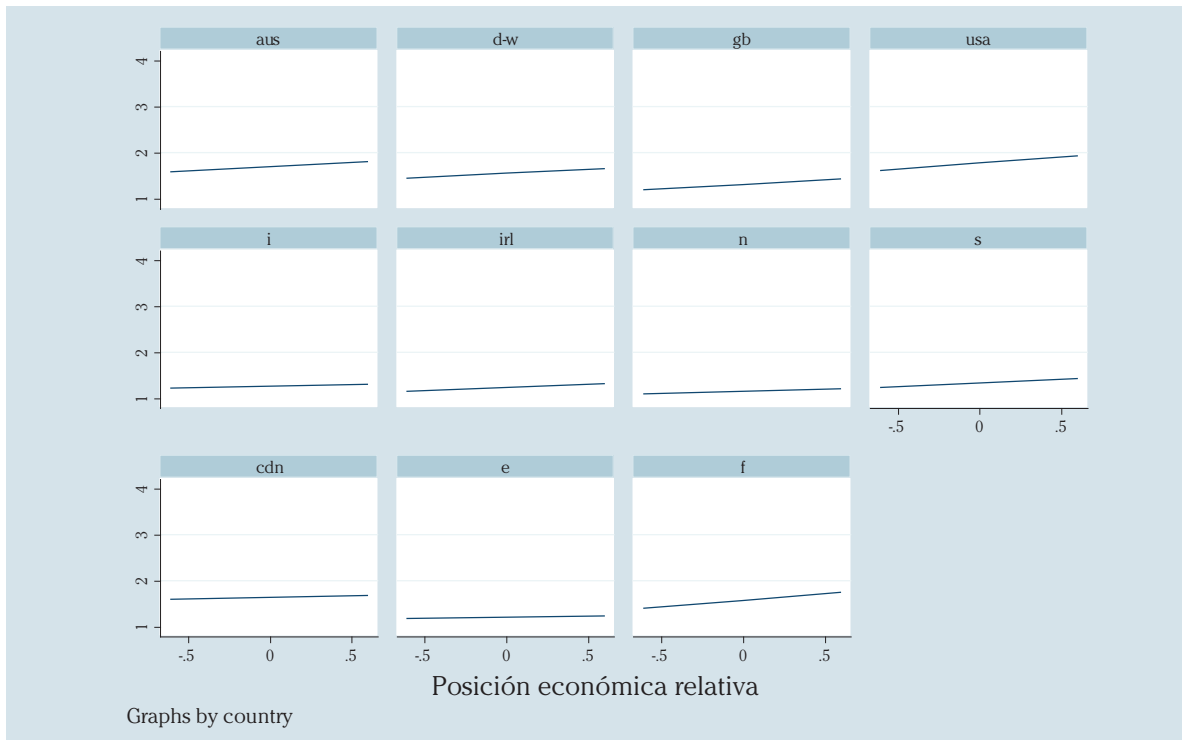
Actitudes hacia la sanidad pública y posición económica relativa



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE. UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Gráfico 6.2.

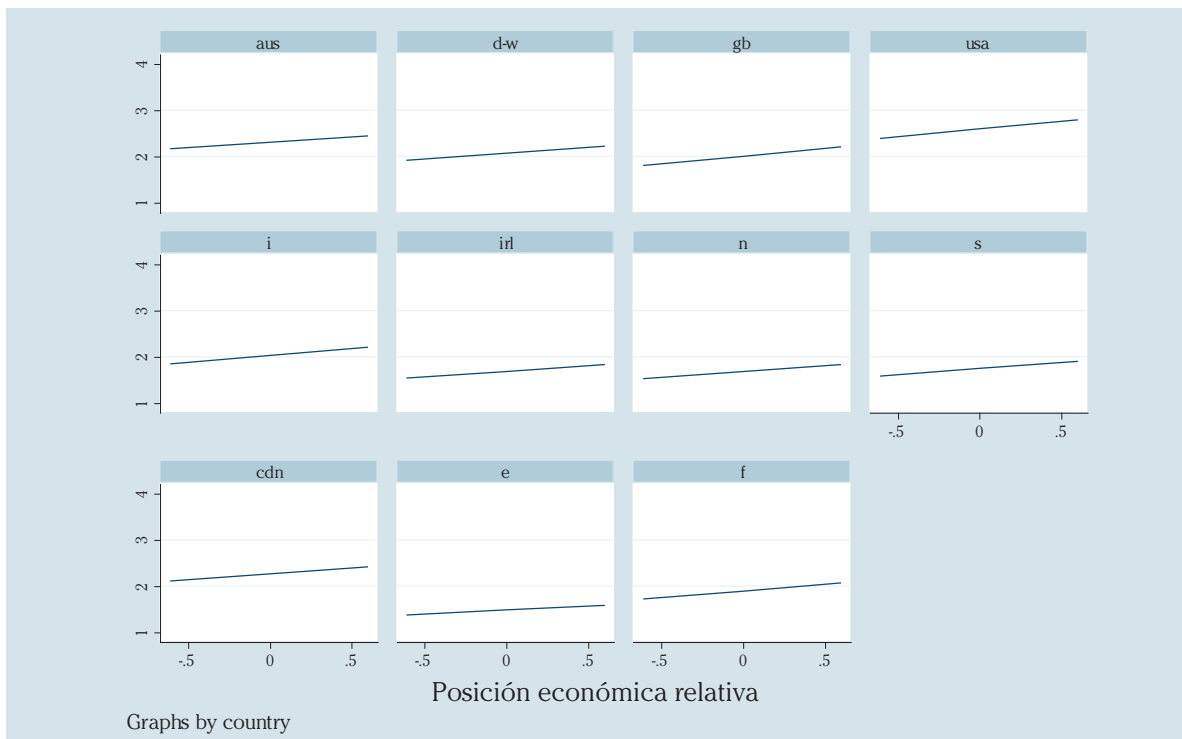
Actitudes hacia el sistema público de pensiones y posición económica relativa



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE. UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Gráfico 6.3.

Actitudes hacia los subsidios de desempleo y posición económica relativa



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE. UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

sanidad, por ejemplo, tenemos países como España, Noruega o Italia, en los que la pendiente de la recta es casi nula (los que tienen más y menos ingresos se parecen mucho en actitudes), y países como Francia o EE.UU. en los que hay un salto entre el apoyo que se da a uno y otro extremo de la escala de ingresos. En pensiones ocurre otro tanto.

Además, los coeficientes del modelo indicaban la existencia de una relación entre tener un consenso poco fracturado por cuestiones económicas y tener un alto nivel de apoyo agregado. En los gráficos podemos ver que España, Italia, Noruega, Irlanda e Inglaterra, los países con mayor apoyo a la existencia de programas públicos de sanidad y pensiones, presentan un efecto casi nulo de los ingresos sobre las actitudes hacia la sanidad y, en todos salvo en Inglaterra, apenas hay diferencias por ingresos en las opiniones sobre si las pensiones públicas deberían existir.

En lo que se refiere a los programas de desempleo el orden de los países varía. En este tema son España, Noruega, Irlanda, Suecia y Francia los países donde estos programas suman más apoyos, pero la variación entre países en la fuerza de los ingresos para determinar las actitudes es mucho menor. Si en los otros gráficos se apreciaba a simple vista (mirando la inclinación de las rectas) cuáles eran los países con mayor o menor acuerdo interclases, en este no es tan claro. En el siguiente apartado vamos a calcular la fuerza de la relación para cada país y, comparando los coeficientes, veremos cuáles son los que sobresalen por la fuerza del efecto de los ingresos para determinar las actitudes de los programas de desempleo. Pero de este gráfico 6.3 podemos sacar ya una conclusión: la distancia entre las opiniones de ricos y pobres hacia los programas de desempleo no varía tanto entre países como lo hacía en temas de sanidad y pensiones. Al hablar de estas prestaciones, no existe ningún país en el que la posición económica relativa no condicione de forma importante las opiniones.

Hasta dónde podemos ver, respecto a sanidad y pensiones hay una cierta relación entre tener acuerdo Inter-clases y tener alto apoyo a los programas de bienestar. La pregunta que podemos hacernos ahora es por qué no se cumple la hipótesis de Korpi, Palme y Esping-Andersen que relacionaba este hecho con el diferente apoyo popular de cada modelo de bienestar. La explicación de esta aparente contradicción va por dos vías:

- Por un lado, las diferencias de opinión entre quienes tienen más y menos ingresos no son tan grandes en lo que respecta a si los programas de bienestar deben o no deben existir y, por tanto, aunque el grado de apoyo que unos y otros manifiestan hacia el EB sea distinto dependiendo del país, la distancia no es nunca tan importante como para explicar unas diferencias en la legitimidad del EB que, aunque no son abrumadoras, sí son bastante relevantes. No se trata tanto de que la hipótesis de Korpi, Palme y Esping-Andersen sea incorrecta, como de que no es suficiente.
- Por otro lado, la hipótesis de que un mayor acuerdo Inter-clases en las opiniones hacia el Estado del Bienestar debe traducirse en mayor legitimidad del EB parte de la idea de que las clases bajas, debido a su dependencia del Estado para proveerse de servicios de bienestar, constituyen un bloque favorable a las políticas públicas a lo largo de toda la OCDE, y que el «consenso» implica siempre aupar a las clases medias y medias-altas hasta unos niveles de apoyo propios de las clases bajas. Sería un acuerdo conseguido «a la alza».

Sin embargo, esta uniformidad de las opiniones de clases bajas respecto a las políticas de bienestar dista mucho de ser cierta. Aunque es verdad que las clases bajas de unos y otros países son más parecidas en sus actitudes hacia el EB de lo que lo son las clases altas, también las cla-

ses bajas varían. En los gráficos podemos ver cómo las clases bajas de algunos países (en el extremo derecho de los gráficos) son menos favorables a la existencia de políticas de bienestar que las clases altas de otros (extremo izquierdo de los gráficos). Los suecos con más ingresos defienden la existencia del programa público de sanidad en mayor medida que los estadounidenses con menos ingresos. Los españoles o italianos mejor situados económicamente son más favorables a las pensiones públicas que ciudadanos alemanes o australianos cuyas rentas les sitúan en la pobreza (ingresos menores del 60% de la mediana). Y hemos visto que pueden darse acuerdos Inter-clases «a la baja» (Canadá), países en los que el débil efecto de los ingresos sobre las actitudes refleja, no ya un alto apoyo al sistema sino, por el contrario, una generalizada tibieza en las opiniones hacia el mismo.

Esta variación entre países en el nivel de apoyo de las clases bajas nos da la clave para interpretar los datos desde otro enfoque. Si miramos los gráficos sin pensar en cuánto se inclinan las rectas (cuánto de fuerte es el efecto de los ingresos sobre las actitudes) y nos fijamos en su posición, más arriba o más abajo del área, lo que vemos es que la verdadera variación está ahí.

Acabamos de decir que en los países donde había mucho apoyo eran todos, ricos y pobres, quienes tenían actitudes favorables al sistema de bienestar. Pero lo cierto es que esto mismo ocurre, aunque a la inversa, en los EBs menos legitimados. En pensiones, por ejemplo, EE.UU., Australia y Canadá son los países que menos apoyo a las pensiones públicas presentan, y en ellos no son sólo los que tienen mejor situación económica (extremo derecho de la línea) quienes muestran menos apego al sistema, sino que también entre los pobres (extremo izquierdo de la línea) se aprecian relativamente bajos niveles de apoyo a los programas de bienestar.

El menor nivel de legitimidad de algunos programas de bienestar no se deriva tanto, o no se deriva sólo, de que no hayan logrado adherir a las clases medias y medias altas a su base de apoyo, tal y como lo han hecho los Socialdemócratas sino, fundamentalmente, de que tampoco han logrado convencer a las clases bajas en la misma medida que los países Socialdemócratas. La segunda de las hipótesis operativas con las que pretendíamos verificar la explicación de Esping-Andersen, Korpi y Palme acerca de la mayor legitimidad de la que disfrutaban los sistemas Socialdemócratas no se cumple porque asumía que las clases bajas eran un colectivo bastante homogéneo y favorable al EB en todos los países, y esto, como vemos, dista de ser así.

La conclusión final es que si analizamos los consensos en torno al EB estudiando la posición económica de los ciudadanos encontramos dos pautas:

1. Los países con mayor apoyo al EB tienden a tener menos diferencias en las opiniones de ciudadanos con distintos niveles de ingresos. Las fracturas de ingresos son más suaves que las que se dan en los EBs menos legitimados. Sin embargo, hay países que rompen esta pauta. Hay programas de bienestar con alta legitimidad y actitudes bastante fracturadas en base económica.
2. Los países en los que hay más apoyo al EB tienen niveles generales de apoyo altos a lo largo de toda la escala de ingresos, y viceversa, los países con bajo apoyo al EB muestran relativamente bajos porcentajes de apoyo en todos los colectivos económicos. Por tanto, lo que ocurre en los EBs más legitimados no es sólo que las actitudes de los ricos sean más parecidas a las de los pobres cuando les preguntamos sobre los programas de bienestar, sino fundamentalmente que todos ellos son más favorables al EB que los ciudadanos de otros países. Como si del nivel de la marea se tratase, los países con más apoyo han logrado hacer

subir el nivel general, y esto parece ser más relevante que el que hayan logrado acercar más o menos las opiniones de las distintas clases sociales.

6.3. El efecto de los ingresos sobre las actitudes país a país

Los modelos multinivel que centraban el análisis del apartado anterior son útiles porque nos permiten verificar hipótesis que, por su grado de complejidad, resultan difíciles de manejar, pero tienen la desventaja de que, por un lado hemos de simplificar las variables con las que trabajamos⁹ y, por otro, con ellos es más aparatoso el estudio detallado de países concretos.

Dado que nuestra muestra es pequeña¹⁰, podemos permitirnos el lujo de aprovechar los modelos multinivel para comprobar la validez de la hipótesis general, y mantener al tiempo un interés por lo que ocurre en cada uno de los 11 países sobre los que trabajamos.

Para este análisis más detallado vamos a utilizar modelos de regresión logística ordinal, que nos ofrecen algunas ventajas en comparación con el multinivel anterior:

1.^a *Mayor ajuste*

Para trabajar con los modelos multinivel hemos tenido que utilizar nuestra variable como si fuese continua aunque, de hecho, es de naturaleza ordinal. Los valores van desde «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno» hasta «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno» y, al margen de conocer que aquellos con más ingresos se sitúan en valores más cercanos al «De ninguna manera» que sus conciudadanos de menos ingresos, es interesante ver con más detalle qué opción de respuesta en concreto tienden a preferir unos y otros.

2.^a *Coefficientes para cada país y comparación entre países*

Los modelos de regresión ordinal nos dan un coeficiente para cada país que nos permite concretar cuáles son los países en los que la relación ingresos-actitudes es más fuerte o más débil, así como definir grupos de países con efectos estadísticamente similares. Gracias a estos coeficientes podremos establecer un ranking de países en cuanto al tamaño de sus fracturas económicas en las opiniones hacia los programas de bienestar y ver cómo se relaciona este ranking con aquel otro, de legitimidad, que elaboramos en el capítulo 5.

3.^a *Relación sin condiciones*

En los modelos multinivel veíamos la relación entre ser nacional de un país y tener unas determinadas actitudes hacia el EB condicionada al efecto de terceras variables. Es decir, estábamos comparando personas de distinta nacionalidad e ingresos, pero de similar ideología y sexo¹¹. Para ampliar más lo que los nuevos modelos nos aportan, en ellos no hemos incluido controles por sexo e ideología.

La relación entre ingresos y actitudes se hace más visible de esta forma porque ahora no eliminamos el hecho de que la gente con más ingresos suele tener también valores más individua-

⁹ Hasta ahora, que yo sepa, la técnica multinivel permite trabajar con variables dependientes continuas y, con ciertas restricciones, binarias.

¹⁰ En los estudios con modelos multinivel se suele decir que contamos con una muestra de grupos grande cuando trabajamos con más de 30 grupos, sean cuales sean los grupos: países, escuelas, etc. (Snijders & Bosker, 1999, p. 56).

listas, y es interesante ver si, pese a este «refuerzo», las diferencias entre países siguen sin ser demasiado importantes para explicar los distintos niveles de legitimidad de sus EBs.

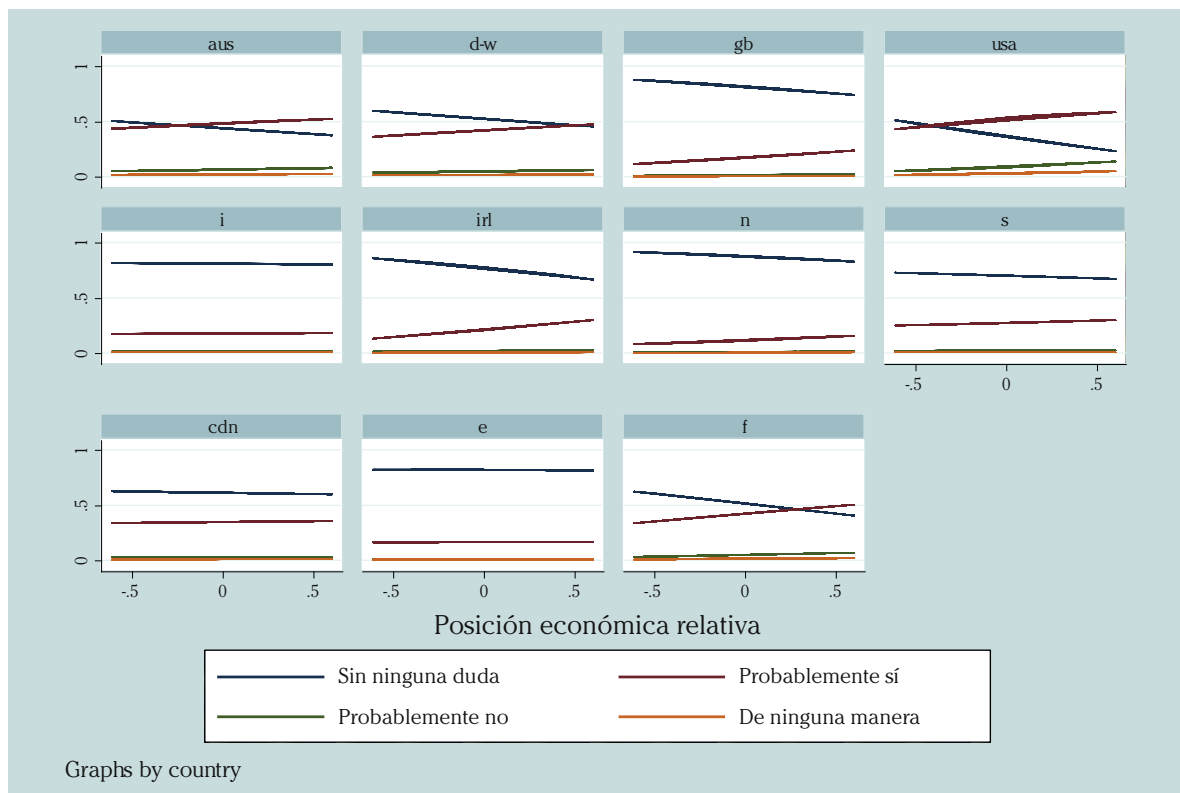
Los siguientes gráficos están elaborados a partir de regresiones ordinales que incluyen variables de interacción entre ingresos y actitudes para cada país (pero no la ideología ni el sexo), y de los mismos se deducen conclusiones similares a las que obtuvimos con el multinivel: hay países que presentan un efecto de los ingresos sobre las actitudes más acusado que otros, pero las diferencias no son tan grandes como esperábamos, y sólo correlacionan ligeramente con el nivel de apoyo agregado de los programas de bienestar. El hecho de que pese a utilizar un modelo ordinal (que se ajusta mejor a la naturaleza de nuestras variables dependientes) y pese a no controlar por la variable ideología la conclusión no varíe, refuerza la validez de la misma.

Aunque nosotros vamos a ver los resultados sólo de forma gráfica, las tablas con los coeficientes de los modelos se encuentran en el Anexo 1.

Comenzaremos por las opiniones hacia la intervención del Estado para garantizar la asistencia sanitaria, que nos servirán, además, como ejemplo para explicar cómo se interpretan los gráficos.

Gráfico 6.4.

Actitudes hacia la sanidad pública en los 11 países y posición económica relativa



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE. UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

¹¹ Con ellos podríamos haber estudiado también la relación no condicionada, esto es, podríamos haber hecho nuevos modelos en los que comparásemos individuos de distintos ingresos sin tener en cuenta cuál era su ideología. Pero ya que íbamos a repetir el análisis con regresiones ordinales me ha parecido mejor eliminar los controles en estas últimas en lugar de recalcular de nuevo los modelos multinivel.

Interpretación de los gráficos

Los gráficos muestran la probabilidad de elegir cada una de las cuatro opciones de respuesta en función de la posición económica del individuo. Los ejes se leen de la siguiente forma:

Eje vertical

En el eje vertical tenemos las respuestas de los entrevistados, y las cuatro líneas de distinto color representan cada una de las opciones de respuesta. Ya sea sanidad, pensiones o desempleo por lo que estemos preguntando, la línea azul muestra la probabilidad de responder que «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno», la línea granate la probabilidad de decir que «probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno», la línea verde «probablemente NO debería ser responsabilidad del Gobierno», y la amarilla representa el rechazo de plano, es decir, el área de bienestar por el que se pregunta «de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno».

Eje horizontal

En el eje horizontal tenemos la posición económica respecto de la mediana nacional. La mediana se indica con el (0), el valor (-0'5) indica unos ingresos del 50% de la mediana y el valor (0'5) unos ingresos de una cuantía un 50% superior a la mediana. Los individuos con ingresos inferiores al 60% de la mediana se encuentran en el extremo izquierdo de cada gráfico, y los individuos con ingresos superiores en un 60% a la mediana están en el extremo derecho. En el caso español, por ejemplo, la mediana de ingresos en 1996 era de 125.000 pesetas netas al mes¹². Como recordaremos, la mediana de la escala de ingresos se define como los ingresos de aquel individuo que tiene al 50% de sus conciudadanos por encima de él en términos económicos y al 50% por debajo. El que en 1996 la mediana de ingresos en España fuera de 125.000 pesetas netas al mes significa que el 50% de la población española ganaba menos de 125.000 pesetas, y el 50% ganaba más de esa cifra.

Fijémonos ahora en el espacio reservado a España dentro del gráfico anterior. El punto de las rectas de regresión que cae justo encima del valor (0) en el eje horizontal indica la probabilidad de que las personas que en 1996 ganaban 125.000 pesetas eligieran una u otra de las opciones de respuesta. El punto de las rectas situado sobre el valor (-0'5) indica las respuestas de quienes cobraban un 50% menos de la mediana, es decir, unas 63.000 pesetas, y el punto sobre el valor (0'5) describe las actitudes de aquellos con rentas superiores a la mediana en un 50%: 190.000 pesetas. Como podemos ver, en el caso español las cuatro rectas de regresión son totalmente horizontales, es decir, no hay diferencia entre las actitudes de quienes ganan menos de 50.000 pesetas (valor (-0'6), que no aparece marcado pero es el extremo izquierdo del eje horizontal) y las de quienes ganan más de 200.000 pesetas (valor (0'6): extremo derecho del eje horizontal).

Lo cierto es que, en este caso, España es un caso especial porque en la mayoría de los países sí existe relación entre la posición económica de los individuos y sus opiniones hacia el programa público de sanidad. Miremos por ejemplo el espacio reservado a EE.UU. Para este país

¹² En el capítulo dedicado a la metodología de este estudio ya comentamos que hemos calculado todas las medianas nacionales en base a los datos del cuestionario.

la mediana de ingresos en 1996 era de 32.500 dólares brutos anuales. Las respuestas de quienes tuvieron este ingreso están sobre el valor (0) del eje horizontal, las de quienes tuvieron un 50 % más (48.750\$) están sobre el valor (0'5), y las de quienes tuvieron un 50 % menos (16.250\$ brutos al año), sobre el valor (-0'5). En este caso podemos ver cómo los ingresos determinan las opiniones hacia la sanidad pública: si miramos la línea azul, que nos indica el porcentaje de gente que respondió que «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar atención sanitaria a los enfermos», vemos como va descendiendo a medida que avanzamos de izquierda a derecha del eje horizontal. Algo más de un 50% de las personas con ingresos un 60 % inferiores a la mediana opina que el Gobierno sin ninguna duda debería garantizar la atención sanitaria, pero sólo en torno a un 25 % de quienes tienen ingresos superiores a la mediana en un 60 % opina lo mismo.

Interpretación del gráfico sobre actitudes hacia la sanidad

Una vez explicada la forma en la que se leen este tipo de gráficos podemos pasar a su interpretación.

Lo primero que podemos apreciar es que las fluctuaciones en las opiniones sobre la intervención del Estado para garantizar la asistencia sanitaria se mueven entre el apoyo fuerte (sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno) y el apoyo tibio (probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno). El porcentaje de quienes no creen que el Gobierno deba intervenir en estos temas es muy pequeño en todos los países y, en general, el efecto de los ingresos sobre las actitudes se traduce en que a medida que los ciudadanos tienen más ingresos, su apoyo a la existencia de una sanidad pública se vuelve más tibio.

La segunda aportación que las regresiones ordinales nos ofrecen es un coeficiente de la relación ingresos-actitudes para cada país, esto es, un número que resume la fuerza de la relación, por lo que no necesitamos fijarnos tanto en si la pendiente parece inclinarse más o menos porque podemos calcular qué países tienen efectos similares entre sí, mayores, o menores.

Haciendo tests de significatividad para las diferencias entre cada par de coeficientes (se muestran al final del apartado) podemos clasificar a los países en tres grupos dependiendo de la importancia de los ingresos para determinar las actitudes:

1. Países en los que apenas existen diferencias en las actitudes en función de los ingresos: Italia, España, Canadá, Suecia.
2. Países con una relación moderada entre ingresos y actitudes: Australia, Alemania, Noruega y, cercano ya a tener una relación «fuerte», Francia.
3. Países con una relación fuerte entre ingresos y actitudes: EE.UU., Irlanda e Inglaterra, este último con una relación entre fuerte y moderada parecida a la de Francia.

Los coeficientes del modelo multinivel ya indicaban que, aunque había una ligera relación entre tener un alto nivel de apoyo al programa de sanidad pública y tener consenso interclases, las diferencias entre países en el interclasicismo de sus actitudes no servían bien para explicar la variación en niveles agregados de apoyo.

Si comparamos el índice de apoyo a la sanidad pública con la información de los gráficos podemos ver por qué: aunque los países con mayor apoyo a la intervención del Estado en sani-

dad se caracterizan por tener un efecto muy pequeño de los ingresos sobre las actitudes, y en los países donde hay menos apoyo al programa público de sanidad apreciamos mayor relación ingresos-actitudes, la relación dista de ser clara.

Es cierto que todos los países con programas de sanidad de baja legitimidad tienen, a su vez, fracturas económicas moderadas o fuertes en estas actitudes. Pero también es cierto que hay países como Inglaterra o Noruega, con programas de sanidad pública muy legitimados, y fracturas económicas fuertes (Inglaterra) o moderadas (Noruega). Aunque la intervención en sanidad consigue aglutinar muchos partidarios, la distancia entre las opiniones de la gente con más y menos ingresos es bastante grande.

Tabla 6.4.

Fracturas económicas y legitimidad del programa público de sanidad.

| | Índice de apoyo a la sanidad pública | Fracturas económicas |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Noruega | 386 | Moderada |
| España | 380 | Baja |
| Reino Unido | 380 | Fuerte |
| Italia | 379 | Baja |
| Irlanda | 374 | Fuerte |
| Suecia | 366 | Baja |
| Canadá | 354 | Baja |
| Alemania | 347 | Moderada |
| Francia | 337 | Moderada |
| Australia | 336 | Moderada |
| EE.UU. | 319 | Fuerte |

Elaboración propia con datos del ISSP, 1996.

Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en sanidad. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno») a 400 (100% de la población considera que «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»)

En el apartado anterior señalábamos que la pauta más llamativa no tenía que ver con que los EBs más legitimados consigan acercar las opiniones de unas y otras clases sociales como con que estos EBs consiguen alzar el nivel de apoyo de todos los grupos económicos, una pauta que se aprecia mejor, si cabe, en el gráfico anterior (6.4).

En los gráficos de esta sección el eje vertical indica el porcentaje de individuos en cada opción de respuesta, por lo que el que una línea esté en la parte superior indica que altos porcentajes de la población han elegido la opción de respuesta correspondiente (cada una de las líneas refleja una opción de respuesta). Si nos fijamos en la línea azul, la que refleja los porcentajes de individuos que consideran que la provisión de sanidad debe ser, «sin ninguna duda», responsabilidad del Estado, veremos cómo aunque su inclinación difiere en algunos países, especialmente EE.UU., Irlanda y Francia, las mayores diferencias se dan respecto a su posición dentro del área, más alta o más baja.

Vemos así de nuevo cómo lo que está detrás de la alta legitimidad de algunos EB no es tanto (o no es sólo) que logren hacer desaparecer las fracturas entre clases, como que logran que el porcentaje de apoyo fuerte al EB sea alto a lo largo de toda la escala de ingresos.

Actitudes hacia las pensiones públicas

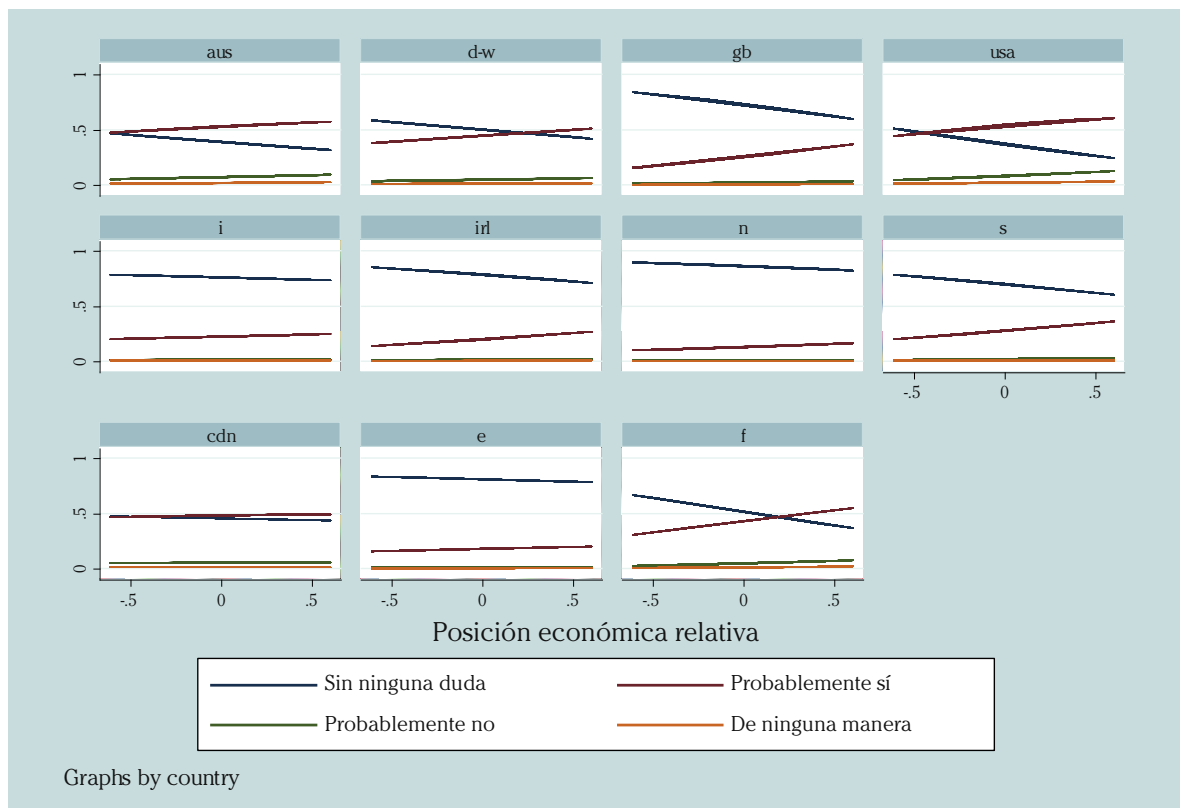
Hemos utilizado el caso de la sanidad para ofrecer todos los detalles sobre la lectura de estos gráficos, así que vamos a ir algo más deprisa para los dos siguientes. En el fondo, lo que queremos ver con esta última sección del apartado dedicado a las fracturas económicas es: a) si las conclusiones del apartado anterior se mantienen, b) en qué categorías de respuesta en concreto se mueven los ciudadanos con distinta posición económica y c) si el ranking de fracturas económicas correlaciona con el ranking de legitimidad.

Vamos a centrarnos en esto y, aunque los modelos de regresión logística ordinal y su presentación gráfica pueden servir para otro tipo de reflexiones las dejaremos para otro tiempo.

En el caso de las actitudes hacia la intervención del Estado para garantizar rentas en la vejez, la primera conclusión es similar a la que teníamos para la sanidad: las fluctuaciones se dan fundamentalmente entre un apoyo fuerte y un apoyo tío. Para cualquiera de las posiciones en la escala de ingresos, quienes creen que el Estado no debe intervenir en este tema son una pequeña minoría.

Gráfico 6.5.

Actitudes hacia el sistema público de pensiones y posición económica relativa



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE. UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

La línea azul, que indica la probabilidad de responder «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los ancianos», disminuye en todos los países a medida que avanzamos en la posición económica, al mismo tiempo que la línea roja, que indica la probabilidad de apoyar la existencia de pensiones públicas de forma más tibia, aumenta.

Es decir, al opinar sobre las pensiones, la gente situada en posiciones económicas bajas se decanta en mayor medida que aquellos con mejor posición económica por un apoyo fuerte, o «decidido», a la existencia de programas de pensiones públicas. Las personas con mejor situación económica, por su parte, son menos proclives a mostrar un apoyo tan decidido al sistema público de pensiones, pero eso no significa que sean sus oponentes. Estos colectivos muestran, simplemente, un apoyo más tibio.

Esta es la pauta general, pero al comparar la fuerza de la relación ingresos-actitudes de unos y otros países llegamos a la conclusión de que, de nuevo, hay tres grupos de países:

1. Países con un efecto nulo o muy bajo de los ingresos sobre las actitudes: Canadá, Italia y España.
2. Países con un efecto moderado: Noruega, Australia, Alemania, Irlanda y, cerca ya de tener un efecto fuerte, Suecia.
3. Países con un efecto fuerte: EE.UU., Inglaterra y Francia.

Tabla 6.5.

Fracturas económicas y legitimidad de las pensiones públicas

| | Índice* de apoyo a las pensiones públicas | Fracturas económicas |
|--------------------|---|----------------------|
| Noruega | 385 | Moderada |
| España | 378 | Baja |
| Irlanda | 376 | Moderada |
| Italia | 373 | Baja |
| Reino Unido | 371 | Fuerte |
| Suecia | 366 | Moderada |
| Alemania | 344 | Moderada |
| Francia | 342 | Fuerte |
| Canadá | 336 | Baja |
| Australia | 331 | Moderada |
| EE.UU. | 322 | Fuerte |

Elaboración propia con datos del ISSP, 1996.

* Índice de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en garantizar un nivel de vida digno a los ancianos. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno») a 400 (100% de la población considera que «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»).

Tres de los cuatro países con mayor grado de interclasismo están a la cabeza en el índice de apoyo agregado a los programas públicos de pensiones. Y dos de los tres países con mayores diferencias entre clases en las actitudes están a la cola. Sin embargo, el hecho de que algunos

países combinen interclasismo con bajo apoyo, o importancia de los ingresos para determinar las actitudes con alto apoyo, explica que en el modelo multinivel la correlación entre legitimidad e interclasismo (la correlación entre fuerza del efecto de los ingresos y el apoyo agregado) fuese tan pequeña. Ejemplo de estas desviaciones serían Canadá, con muy pocas diferencias de opinión en función de los ingresos y, pese a ello, bajo apoyo a la intervención del Estado en pensiones. Y también Inglaterra, con importantes diferencias por ingresos y, sin embargo, en una posición media en el ranking de apoyo a la existencia de un programa público de pensiones.

Por tanto, la conclusión más interesante que se extrae del gráfico 6.5 es similar a la del 6.4 referido a sanidad: las diferencias más significativas entre países no se producen en la distancia que separa las opiniones de la clase alta y de la clase baja sino en el nivel de apoyo que tiene el programa público de pensiones a lo largo de toda la escala de ingresos.

Si volvemos a fijarnos en la línea azul vemos como los países en los que hay más apoyo agregado a la existencia de pensiones públicas se caracterizan por tener altos niveles de apoyo fuerte en todas las clases sociales. Cuando en un país el programa de pensiones obtiene una alta legitimidad, esto ocurre porque sus nacionales con más ingresos son más favorables al mismo de lo que lo son las personas de ingresos altos en los otros países, y también porque las personas con pocos ingresos son más favorables al mismo de lo que lo son estos mismos colectivos en otros países.

Actitudes hacia las prestaciones por desempleo

Finalizando con las actitudes hacia la existencia de subsidios de desempleo, el panorama que muestra el gráfico 6.6 es algo más complejo. Las líneas que indican la probabilidad de rechazar la existencia de estos programas han dejado de servir de «alfombra» de nuestra gráfica para pasar a tener un papel algo más activo. En temas de desempleo, las personas de posición económica más alta presentan menos probabilidad de apoyar firmemente el programa y más de rechazarlo.

En todos los países, el rechazo a la existencia de subsidios de desempleo aumenta con la posición económica, al tiempo que disminuye la probabilidad de apoyar firmemente (sin ninguna duda debería ser responsabilidad del gobierno) la intervención del Estado en esta materia.

Si comparamos los coeficientes para unos y otros países vemos algunas diferencias: en EE.UU. el rechazo firme a la existencia de subsidios de desempleo aumenta con la posición económica mucho más que en el resto, y en Inglaterra y Francia la caída en el apoyo firme que se produce a medida que los individuos tienen más ingresos es más acusada. Sin embargo, el resto de países apenas difieren en el efecto de los ingresos sobre las actitudes.

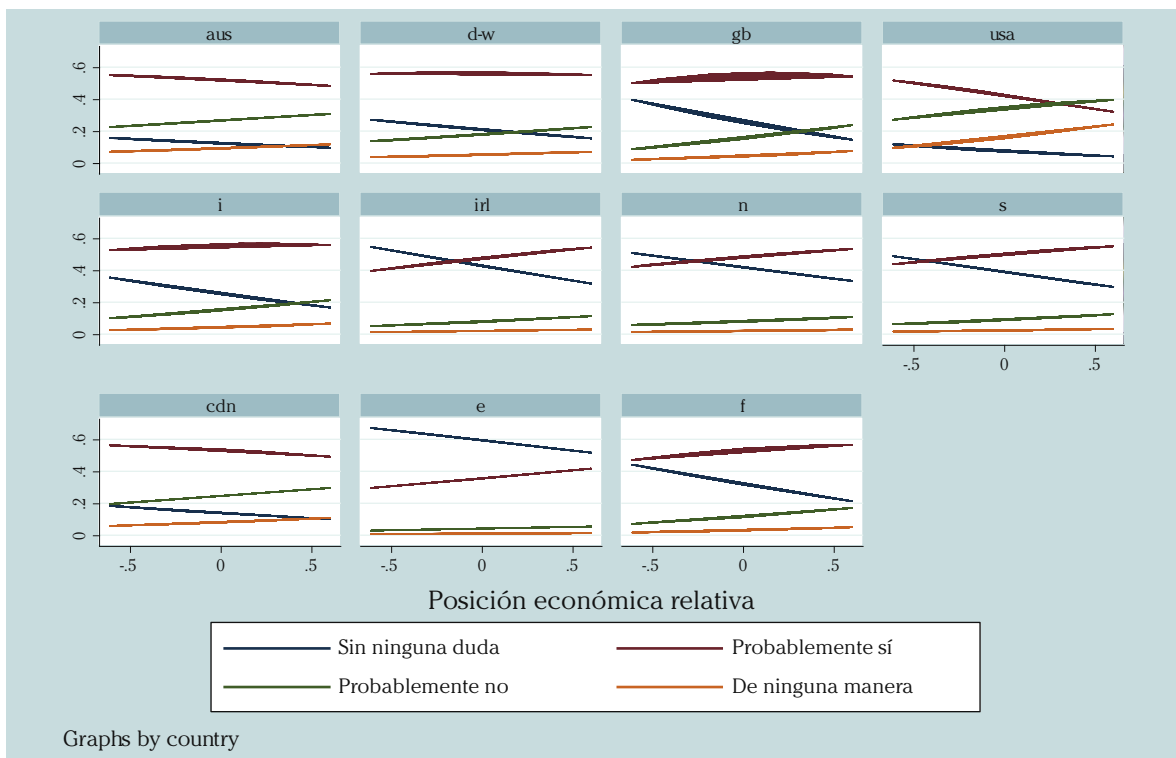
Esta «verdad estadística» puede apreciarse a simple vista porque, aunque es verdad que si miramos por encima los 11 gráficos tenemos la impresión de que hay bastantes diferencias, lo cierto es que si nos fijamos sólo en la pendiente de las líneas las diferencias no son tantas.

Si aislamos la línea azul vemos que el apoyo cae, pero salvo en Francia e Inglaterra, el ritmo de la caída es bastante similar entre países. Si aislamos la línea amarilla o la verde, vemos que aumentan también en un grado parecido en todos los casos salvo EE.UU.

Lo dicho para sanidad y pensiones es válido también aquí: existe mayor variación en los niveles básicos de apoyo que en las fracturas interclases de este apoyo.

Gráfico 6.6.

Actitudes hacia el sistema de protección por desempleo y posición económica relativa



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE. UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Tabla 6.6.

Fracturas económicas y legitimidad de las prestaciones por desempleo

| | Índice* de apoyo a las prestaciones por desempleo | Fracturas económicas |
|--------------------|---|----------------------|
| España | 352 | Moderada |
| Noruega | 332 | Moderada |
| Irlanda | 330 | Mod-Fuerte |
| Suecia | 326 | Moderada |
| Francia | 310 | Mod-Fuerte |
| Reino Unido | 301 | Fuerte |
| Italia | 296 | Mod-Fuerte |
| Alemania | 293 | Moderada |
| Canadá | 273 | Moderada |
| Australia | 270 | Moderada |
| EE.UU. | 241 | Fuerte |

Elaboración propia con datos del ISSP, 1996.

* Índice de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en garantizar un nivel de vida digno a los desempleados. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno») a 400 (100% de la población considera que «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»).

6.4. Conclusiones. Fracturas económicas y tipo de Estado del Bienestar

De los análisis realizados en este capítulo se extraen las siguientes conclusiones:

1. Hay países en los que los consensos en torno al EB están más fracturados por razones económicas que en otros.

Algunos países destacan por presentar un efecto de los ingresos sobre las actitudes hacia los programas de bienestar más acusado que el resto. Ellos son EE.UU., Irlanda, Reino Unido y Francia. En el otro extremo están España y Canadá, siempre con un efecto de los ingresos sobre las actitudes hacia los programas de bienestar muy pequeño, y en cuyo caso podemos hablar de la existencia de un consenso interclases en las opiniones sobre el Estado del Bienestar. Al analizar la forma de las fracturas económicas en cada país, pudimos apreciar que no existe una relación clara entre el tipo de Estado del Bienestar y el tamaño de estas fracturas, y que no hay un tipo de EB concreto que destaque por haber reducido sustancialmente las diferencias de opinión entre ricos y pobres al hablar de los programas de bienestar.

2. Los programas de bienestar con mayor legitimidad suelen tener consensos poco fracturados sobre líneas económicas, pero la relación no es del todo clara.

Lo que estábamos esperando era que los países con mayor apoyo a los programas de bienestar, entre ellos los nórdicos, se caracterizasen también por tener un gran consenso interclases en cuanto a sus opiniones hacia los mismos, mientras que los países con bajo apoyo (con sistemas liberales) presentarían más fracturas o, lo que es lo mismo, un mayor efecto de los ingresos sobre las actitudes. Pero la relación no es en absoluto clara porque, aunque algunas de las diferencias entre países son coherentes con la teoría de que el mayor consenso se logra gracias al acuerdo inter-clases, también hay importantes desviaciones a esta pauta.

3. La hipótesis de partida no se cumple (del todo)

En definitiva, parece que la legitimidad de un programa de bienestar no se explica bien por cuestiones relativas a las fracturas económicas que se dan en su apoyo. La teoría de Korpi y Esping-Andersen, que entendía el alto apoyo a los EBs Socialdemócratas como un fruto del consenso entre gentes de distintas posiciones socio-económicas no es equivocada en su lógica, ya que de hecho hemos visto que hay una ligera relación entre tener mucho apoyo y el que existan pocas diferencias entre clases en las opiniones sobre el EB, pero sí en su poder explicativo. Si miramos los tres programas en conjunto, algunos de los EBs más legitimados presentan pocas fracturas económicas en las actitudes de sus ciudadanos hacia las intervenciones del Estado en bienestar, pero se puede conseguir tener una alta legitimidad manteniendo fracturas económicas notables.

4. Una alta legitimidad implica convencer a las clases medias, pero también a las clases bajas.

La verdadera diferencia entre países no estriba en cuánto de lejos están las opiniones de los colectivos más ricos respecto a las de los más pobres, sino en qué nivel de apoyo medio se consigue a lo largo de toda la escala. Los países cuyos EBs tienen alta legitimidad se caracterizan por tener altos niveles de apoyo dentro de todos los colectivos de ingresos. Y a la inversa, en los EBs poco legitimados la mayoría de los ciudadanos independientemente de

su renta muestran un apoyo tibio al sistema de bienestar. Para lograr una alta legitimidad no se trata sólo de convencer a las clases medias y medias altas de las bondades del sistema, también hay que convencer a las clases bajas que, pese a necesitar en mayor medida que el resto las políticas públicas, pueden mostrarles un respaldo bastante tibio (EE.UU., Canadá).

En realidad, el principal problema de la hipótesis sugerida por Esping-Andersen y Korpi & Palme es que asumía que las clases bajas eran bastante homogéneas en su nivel de apoyo a los programas de bienestar y esto, como hemos visto, no es cierto. Las clases bajas, aunque no varían tanto de un país a otro en sus actitudes hacia los programas de bienestar como lo hacen las clases medias o medias-altas, también mantienen distintas opiniones sobre estos programas dependiendo del país en el que vivan.

Es bastante posible que este apego o desapego de las clases bajas a los programas de bienestar dependa, en gran medida, de lo mismo que se argumentaba para las clases medias y medias altas: qué es lo que el Estado del Bienestar les ofrece.

Si se argumentaba que el universalismo y las prestaciones de alta calidad podían atraer el apoyo de los colectivos de rentas altas, ¿por qué no iba a funcionar de la misma manera con el apoyo de las clases bajas? El universalismo de las prestaciones no sólo sirve para incluir entre los beneficiarios a las clases medias y medias altas sino que, haciendo esto, elimina el estigma asociado a las prestaciones dirigidas exclusivamente a las rentas bajas. La alta calidad de los servicios y prestaciones potencia que las clases medias permanezcan en el sistema y, con ello, las «dignifica» a ojos de los más pobres.

Fracturas económicas y tipos de Estados del Bienestar

Durante los análisis anteriores nos hemos referido fundamentalmente a la legitimidad que presentan los programas de bienestar por separado y, aunque hemos ido comentando la posición de cada uno de los países, no nos hemos detenido a ver la relación más general entre el tipo de Estado del Bienestar y las fracturas económicas que se dan en los consensos sobre los programas de bienestar. Esto ha sido así porque considerábamos que, para conocer las dinámicas que mueven el apoyo a cada uno de los tipos de EB, necesitábamos conocer previamente las dinámicas que mueven las actitudes hacia los programas de bienestar en concreto.

Una vez que conocemos porqué unos programas de bienestar logran más legitimidad que otros, podemos utilizar estas conclusiones para hablar de la legitimidad de los tipos de Estados del Bienestar que, al fin y al cabo, son fundamentalmente conjuntos de programas organizados de forma similar.

Cuando explicamos los criterios para seleccionar nuestra muestra de países ya mencionamos que íbamos a trabajar con países que se clasificaban bien dentro de los tipos de EBs (Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Canadá, Australia y EE.UU.), y países cuya clasificación generaba mayores desacuerdos entre los académicos. Los primeros son países «puros» en lo que a su sistema de bienestar se refiere, es decir, en ellos la mayoría de los programas están organizados forma similar. Son sistemas internamente coherentes.

Los segundos son países «mixtos» o «híbridos», que no entran bien en las clasificaciones porque sus programas de bienestar se organizan siguiendo lógicas distintas. En ellos conviven pro-

gramas similares a los que se dan en los países Socialdemócratas (la sanidad inglesa o española sigue criterios parecidos a la sueca y noruega), y programas que se asemejan más a lo que encontramos en otros tipos de EB (las pensiones inglesas se asemejan más a las estadounidenses mientras las españolas son relativamente una mezcla de criterios conservadores y socialdemócratas).

En el capítulo 7 nos vamos a centrar en las características organizativas concretas que inciden en el apoyo a los programas, y allí estos casos mixtos van a ser extremadamente útiles porque funcionarán como control. Pero por ahora, si queremos ver la relación entre tipo de EB, fracturas económicas en los consensos, y legitimidad, es preferible mirar sólo a aquellos países que sí pertenecen claramente a un tipo de EB.

En la siguiente tabla tenemos a estos siete países «puros» clasificados por el tipo de EB al que pertenecen, el nivel de legitimidad de sus programas, la magnitud de las fracturas económicas en los consensos y el nivel de apoyo «fuerte» a estos programas de las personas con más y menos ingresos. El apoyo «fuerte» lo constituyen quienes respondieron que el área de bienestar «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno». La diferencia en puntos porcentuales entre los dos colectivos económicos que se presentan suele corresponder con el tamaño de las fracturas económicas de la columna 3, y cuando no es exactamente así, es debido a que para valorar la magnitud de estas fracturas miramos la relación entre ingresos y actitudes en su forma condicionada, es decir, comparando personas con distintos ingresos pero similar ideología y sexo. Las mismas tablas, pero incluyendo a los once países, pueden encontrarse en el Anexo 4.

Tabla 6.7.

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de sanidad

| País | Índice de apoyo a la sanidad pública | Fracturas económicas | % apoyo fuerte entre ingresos inferiores al 50% mediana | % apoyo fuerte entre ingresos un 50% superiores mediana |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| Noruega | 386 | Moderada | 89,2 | 82,4 |
| Suecia | 366 | Baja | 69,8 | 64,7 |
| Canadá | 354 | Baja | 67,8 | 65,2 |
| Alemania | 347 | Moderada | 58,9 | 38,4 |
| Francia | 337 | Moderada | 62,7 | 39,9 |
| Australia | 336 | Moderada | 50,3 | 34,6 |
| EE.UU. | 319 | Fuerte | 54,7 | 26,1 |

Tabla 6.8.

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de pensiones

| País | Índice de apoyo a las pensiones públicas | Fracturas económicas | % apoyo fuerte entre ingresos inferiores al 50% mediana | % apoyo fuerte. Ingresos un 50% superiores mediana |
|-----------|--|----------------------|---|--|
| Noruega | 385 | Baja | 85,0 | 79,7 |
| Suecia | 366 | Moderada | 79,9 | 58,7 |
| Canadá | 344 | Moderada | 56,7 | 37,9 |
| Alemania | 342 | Fuerte | 60,1 | 34,7 |
| Francia | 336 | Baja | 53,5 | 46,8 |
| Australia | 331 | Moderada | 47,7 | 29,2 |
| EE.UU. | 322 | Fuerte | 52,7 | 26,9 |

En las dos tablas superiores, y también en la siguiente referida a desempleo, podemos ver que los países con EBs Socialdemócratas logran la alta legitimidad de esta institución no tanto porque presenten pocas fracturas económicas en los consensos (en Suecia 20 puntos separan las actitudes de las clases bajas y las clases medias en torno a las pensiones) sino porque la base sobre la que se producen las fracturas es más alta.

Noruega y Suecia tienen, al hablar de prestaciones de desempleo, alrededor de 20 puntos porcentuales de diferencia entre el apoyo de las clases bajas y de las clases medias. Bastantes más de los que se dan en países Liberales como Canadá, Australia o EE.UU. Sin embargo estas prestaciones logran más apoyo en los países nórdicos porque, aunque fracturado, el consenso en torno a las mismas es superior en todos los colectivos económicos. O a la inversa, Noruega y Canadá se caracterizan porque las actitudes hacia las pensiones públicas no dependen apenas de la posición económica de los individuos, lo que no es óbice para que Noruega logre un porcentaje de apoyo agregado a este programa mucho más alto que Canadá.

En las dos columnas de la derecha, que recogen los porcentajes de apoyo fuerte a cada uno de los programas de bienestar de los ciudadanos con rentas inferiores al 50% de la mediana, y superiores en un 50% a la mediana, podemos apreciar como los porcentajes de apoyo disminuyen en ambas columnas según pasamos del tipo Socialdemócrata al Conservador, y de este, al Liberal. Esta es una forma un poco «ruda» de mostrar los resultados: hemos elegido sólo una opción de respuesta («sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»), no hemos incluido controles (el efecto de los ingresos se solapa al de la ideología y el género), y no nos fijamos en la significatividad estadística de las diferencias entre países. Pero al fin y al cabo, todo eso ya lo hicimos en las páginas anteriores, por lo que estas tablas sirven como resumen de lo visto en ellas.

Tabla 6.9.

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos a las prestaciones por desempleo

| País | Índice de apoyo a las prestaciones por desempleo | Fracturas económicas | % apoyo fuerte ingresos superiores al 50% mediana | % apoyo fuerte. Ingresos un 50% superiores mediana |
|-----------|--|----------------------|---|--|
| Noruega | 332 | Moderada | 47,6 | 29,5 |
| Suecia | 326 | Moderada | 48,2 | 24,3 |
| Francia | 310 | Mod-Fuerte | 45,0 | 20,0 |
| Alemania | 293 | Moderada | 25,6 | 8,3 |
| Canadá | 273 | Moderada | 24,3 | 15,6 |
| Australia | 270 | Moderada | 14,0 | 6,9 |
| EE.UU. | 241 | Fuerte | 21,1 | 5,8 |

Para las tres tablas anteriores:
Elaboración propia con datos del ISSP, 1996.

Capítulo 7. Fracturas ideológicas y legitimidad

7.1. Justificación teórica.

7.2. Comprobación de la hipótesis: «des-ideologizar» el EB.

7.3. El efecto de la ideología país a país.

7.4. Conclusión. Fracturas ideológicas y tipo de Estado del Bienestar.

7.1. Justificación teórica

La mayor parte de las reflexiones que se han hecho acerca de los apoyos que un Estado del Bienestar podría aglutinar han otorgado una importancia central a las clases medias, explicando la extensa legitimidad de los sistemas socialdemócratas por su capacidad de generar un acuerdo Inter-clases en torno a la necesidad de mantener los programas de bienestar.

Gracias al análisis del capítulo anterior sabemos que, de hecho, existen diferentes niveles de acuerdo Inter-clases en cada país y, sin embargo, el que en unos lugares el consenso en torno al EB esté más o menos fracturado por razones económicas explica menos de lo que se podría pensar.

Dado que el tema de las fracturas económicas no ha sido tan fructífero como esperábamos, es preciso buscar otro posible factor explicativo de la variable legitimidad del Estado del Bienestar y, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre los determinantes de las actitudes hacia las políticas sociales (cap. 1), la decisión es sencilla:

Los dos principales determinantes de las actitudes hacia el EB son el interés económico y la ideología, lo que implica que los consensos en torno al EB deberían estar fracturados, fundamentalmente, siguiendo líneas económicas o ideológicas. Una vez visto que la variación en las fracturas económicas no explica suficientemente la variación en legitimidad global del EB, es necesario comparar los consensos de los once países fijándonos en el efecto de la ideología sobre las actitudes. Es decir, fijándonos en las fracturas ideológicas.

El punto de partida del capítulo anterior era que las distintas formas de organizar los programas de bienestar podrían provocar una distancia en las actitudes de «ricos» y «pobres» de distinta dimensión. En este capítulo 7 el punto de partida es similar, pero cambiamos el foco del interés a la ideología: vamos a ver si, dependiendo de cómo esté organizado el programa de bienestar, las opiniones hacia el mismo de igualitaristas e individualistas son más o menos parecidas.

Nuestra hipótesis general es que un sistema de bienestar logrará los mayores niveles de legitimidad cuando es capaz de eliminar las fracturas ideológicas en torno a sí mismo, cuando es capaz de que no se le perciba como un instrumento ideológico al servicio de los intereses de una clase determinada y consigue que izquierda y derecha, igualitaristas e individualistas, lo apoyen por igual. Esperamos que el grado de des-ideologización de un Estado del Bienestar se encuentre en relación directa con su grado de integración y, por ello, presumimos que los EBs socialdemócratas serán los que presenten menos fracturas ideológicas en el consenso porque, al integrar a todas las clases sociales bajo el mismo paraguas y al ofrecer prestaciones relacionadas con los ingresos previos, deberían ser percibidos como una institución más funcional que ideológica, más «equitativa» que «igualitaria». En el extremo opuesto, los sistemas de bienestar liberales han mantenido un fuerte componente asistencialista que anima el apoyo de los igualitaristas y desanima el de los individualistas, por lo que esperamos encontrar las mayores fracturas ideológicas en los países cuyo EB se organiza de forma Liberal.

Para verificar esta idea, vamos a convertirla, igual que hicimos en el capítulo anterior, en hipótesis aptas para su contrastación empírica. Si los Estado del Bienestar con más apoyo popular han conseguido esta legitimidad extra por atraer a los individualistas, nuestros datos tienen que mostrar que:

1. Los países varían entre sí no sólo en el nivel de apoyo agregado al EB (legitimidad) sino también en el efecto que tiene la ideología para determinar las opiniones sobre este tema. Habrá países en los que la ideología del individuo tenga un efecto muy fuerte (países con grandes fracturas ideológicas en el consenso sobre el EB), y países en los que las diferencias de opinión entre igualitaristas e individualistas al hablar del EB sean pocas (pequeña fracturas ideológicas) o ninguna (inexistencia de fracturas ideológicas).
2. Los individuos que sustentan valores igualitarios tendrán actitudes en general positivas hacia la intervención del Estado en temas de bienestar independientemente del país en el que vivan, y serán un colectivo más homogéneo que los individualistas. Es decir, esperamos encontrar menos variación internacional en las actitudes hacia el EB de los igualitaristas que en las de los individualistas.
3. Existe una relación entre el tamaño de las fracturas ideológicas y el nivel de apoyo a los programas de bienestar. Los países con programas más legitimados serán también aquellos con menos fracturas ideológicas. Esto es así porque el apoyo «extra» que ciertos sistemas de bienestar reciben proviene de haber logrado convencer a los individualistas acerca de las bondades del sistema, y de haber sumado su apoyo al de los igualitaristas (que se da por sentado, como se daba por sentado en el capítulo anterior que los más pobres apoyarían «en bloque» las políticas sociales independientemente de cómo estuvieran estas organizadas).
4. El porcentaje de apoyo que los sistemas de bienestar más legitimados extraen de los individualistas es suficientemente importante como para considerar que ellos son una de las fuentes de esa legitimidad «extra» que distingue a unos Estados del Bienestar de otros.

Para estudiar la validez de esta hipótesis vamos a seguir la misma secuencia que utilizamos para trabajar con la anterior. En primer lugar veremos si efectivamente la relación entre ideología y actitudes difiere entre países, ya que de no ser así todo análisis posterior más detallado pierde sentido. Para ello volvemos a la técnica de los modelos multinivel, cuyo funcionamiento explicamos anteriormente y que nos servirán para contrastar hipótesis 2 y 3. En segundo lugar realizaremos un análisis del efecto de la ideología sobre las actitudes no condicionado por terceras variables, y estudiaremos la forma de las fracturas ideológicas en cada país para ver si podemos relacionarlas con el tipo de Estado del Bienestar.

7.2. Verificar la hipótesis: des-ideologizar el EB

Las tablas 7.1 y 7.2 muestran los coeficientes de tres modelos multinivel, uno para cada una de las variables dependientes. En ellos se incluyen las tres variables que venimos utilizando como control en los análisis anteriores: posición económica relativa, ideología, y sexo aunque, en esta ocasión, la posición económica relativa y el sexo sirven como control y el efecto de la ideología es lo que nos interesa. Controlar por estas dos variables implica que estamos estudiando la relación «pura» entre ideología y actitudes hacia los programas de bienestar, una vez eliminado tanto el hecho de que las personas con más ingresos son más individualistas, como el que las mujeres superan a los hombres en igualitarismo. En otras palabras, nuestros modelos van a analizar la relación entre ideología y actitudes en cada país, pero comparando siempre gente que, pese a tener distinta nacionalidad, es del mismo sexo y está situada en la misma posición económica.

Nuestra primera hipótesis asumía que el hecho de sustentar valores igualitarios o individualistas es más importante en unos países que en otros a la hora de determinar las actitudes de los ciudadanos hacia los programas de bienestar. Para ver si esto es cierto hay que construir dos modelos multinivel distintos. Uno en el que se incluye la variación del efecto de la ideología entre países, y otro en el que se asume que la variable tiene un efecto similar en los once países con los que trabajamos. Viendo cual de los dos modelos se ajusta mejor a nuestros datos sabremos si la hipótesis es correcta. Dado que tenemos preguntas sobre tres programas de bienestar hemos de calcular 6 modelos multinivel, dos para cada pregunta.

En la tabla 7.2 tenemos los modelos que incluyen la posibilidad de que el efecto de la ideología sobre las actitudes varíe entre países, y en la 7.1 modelos similares pero en los que el efecto de la ideología se recoge como un solo coeficiente para todos los países, es decir, en los que asumimos que el efecto es el mismo en los once casos estudiados.

Tabla 7.1.

*Modelos de regresión lineal multinivel sin efecto variable de la ideología**

Parte fija:

| Sanidad | Coef. | P > z | Pensiones | Coef. | P > z | Desempleo | Coef. | P > z |
|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|
| Prmedian | .0628999 | 0.000 | prmedian | .094802 | 0.000 | Prmedian | .1520122 | 0.000 |
| Female | -.051742 | 0.000 | female | -.0583228 | 0.000 | female | -.0700917 | 0.000 |
| V16centrada | .0000996 | 0.998 | v16centrada | -.0185827 | 0.561 | v16centrada | .1225925 | 0.003 |
| V16raiz | .3129934 | 0.002 | v16raiz | .3588497 | 0.000 | v16raiz | .1397481 | 0.000 |
| _cons | .9411233 | 0.000 | _cons | .8962657 | 0.000 | _cons | 1.853872 | 0.000 |

Parte variable:

| Random-effects Sanidad | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Var(_cons) | .0388336 | .0166778 | .0167357 | .0901097 |
| Var(Residual) | .3108086 | .0038174 | .303416 | 3183814 |

| Random-effects Pensiones | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Var(_cons) | .0372176 | .0159861 | .0160373 | .0863705 |
| Var(Residual) | .3049796 | .0037422 | .2977326 | .312403 |

| Random-effects Desempleo | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Var(_cons) | .0717195 | .0307773 | .0309284 | .1663094 |
| Var(Residual) | .5119895 | .0063698 | .4996559 | .5246276 |

*Para los 3 modelos: Prob >chi² = 0.0000; Lrtest comparando con regresión lineal (OLS): Pr > chi² = 0.0000

Tabla 7.2.*Modelos de regresión lineal multinivel con efecto variable de la ideología****Parte fija:**

| Sanidad | Coef. | P > z | Pensiones | Coef. | P > z | Desempleo | Coef. | P > z |
|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|
| Prmedian | .0587421 | 0.000 | prmedian | .0912601 | 0.000 | Prmedian | .1483021 | 0.000 |
| Female | -.0496454 | 0.000 | female | -.057121 | 0.000 | female | -.0686748 | 0.000 |
| V16centrada | -.0393462 | 0.309 | v16centrada | -.0556209 | 0.125 | v16centrada | .0911756 | 0.048 |
| V16raiz | .4243437 | 0.000 | v16raiz | .4644193 | 0.000 | v16raiz | .2427765 | 0.073 |
| _cons | .7448628 | 0.000 | _cons | .7104322 | 0.000 | _cons | 1.673572 | 0.000 |

Parte variable:

| Random-effects Sanidad | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Var(v16cen~a) | .0044981 | .0019913 | .0018889 | .0107115 |
| Var(_cons) | .0486531 | .0208856 | .0209754 | .1128524 |
| Cov(v16cen~a,_cons) | .0127005 | .0059709 | .0009978 | .0244033 |
| Var(Residual) | .3040965 | .0037365 | .2968605 | .3115089 |

| Random-effects Pensiones | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Var(v16cen~a) | .0026401 | .0012018 | .0010818 | .0064432 |
| Var(_cons) | .0446966 | .0191945 | .0192635 | .1037083 |
| Cov(v16cen~a,_cons) | .0085026 | .0042711 | .0001315 | .0168738 |
| Var(Residual) | .3011639 | .0036969 | .2940045 | .3084976 |

| Random-effects Desempleo | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Var(v16cen~a) | .0030716 | .0014416 | .0012242 | .0077068 |
| Var(_cons) | .0770112 | .0330658 | .0331955 | .1786604 |
| Cov(v16cen~a,_cons) | .0095623 | .0056922 | -.0015942 | .0207187 |
| Var(Residual) | .5075852 | .0063177 | .4953526 | .5201198 |

*Para los 3 modelos: Prob >chi² = 0.0000; Lrttest comparando con regresión OLS: Pr > chi² = 0.0000

Hipótesis 1

Lo primero que nos interesa de estos modelos es la variación internacional de la relación entre ideología y actitudes. El coeficiente de la misma es significativo para las opiniones sobre los tres programas de bienestar, lo que quiere decir que a la hora de opinar sobre la intervención del Estado en sanidad, pensiones o desempleo, la ideología cuenta más en unos lugares que en otros. Hay países donde los individualistas se oponen a la existencia de programas de bienestar con más firmeza y en mayor número que en otros.

Hipótesis 2

La hipótesis 2 argumentaba que los igualitarios debían ser, independientemente del país en el que vivan, más parecidos entre sí en sus opiniones hacia el EB que los individualistas. Esperábamos que el nivel de apoyo medio al EB de la gente más igualitaria fuese siempre alto, mientras que el nivel de apoyo de quienes sustentan valores individualistas dependiera en mayor medida del contexto. Para ver si esto es así necesitamos construir un modelo que nos diga cuanto varía entre países el efecto de la ideología sobre las actitudes si nos fijamos sólo en los más igualitarios, y otro que indique cuánto varía el efecto de esta variable si hacemos lo mismo para los más individualistas. La tabla 7.3 presenta los resultados¹.

Tabla 7.3.

Homogeneidad internacional de los colectivos muy igualitaristas, ni igualitaristas ni individualistas, y muy individualista, en sus actitudes hacia los programas de bienestar.

| Var(cons) y cov(v16,cons) | Sanidad | Pensiones | Desempleo |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Igualitaristas | Coef. 0.013 Covarianza: no signif. | Coef. 0.017 Covarianza: no signif. | Coef. 0.047 Covarianza: no signif. |
| Ni igualitaristas ni individualistas | Coef. 0.0487 Covarianza: signif. | Coef. 0.0447 Covarianza: signif. | Coef. 0.077 Covarianza: no signif. |
| Individualistas | Coef. 0.117 Covarianza: signif. | Coef. 0.089 Covarianza: signif. | Coef. 0.127 Covarianza: no signif. |

Coef. Variación entre países del efecto de la ideología sobre las actitudes hacia cada programa de bienestar.

Covarianza: relación entre la fuerza de la ideología para determinar las actitudes y el nivel de apoyo agregado a cada programa.

En la tabla superior tenemos los tres programas de bienestar en columnas, y a los colectivos muy igualitarios, ni igualitarios ni individualistas, y muy individualistas en filas. Los coeficientes de cada casilla son una medida de lo que cada uno de estos grupos varía entre países en su apoyo medio al EB, con lo que es una medida de la homogeneidad de las actitudes de cada grupo.

¹ Sólo ha habido que calcular dos modelos porque el tercero, que recoge a quienes están en el punto medio del eje de valores igualitaristas/individualistas (respondieron que «ni de acuerdo ni en desacuerdo» con que el Estado redistribuya rentas), es el que figura en la tabla 7.2.

Los coeficientes de la tabla marcan una pauta muy clara: a medida que avanzamos de arriba abajo en cada una de las columnas, los coeficientes se hacen más grandes. Es decir, a medida que nos movemos de más igualitarismo a más individualismo, la variación entre países en el apoyo al EB es mayor. Esto confirma la hipótesis 2: la gente igualitaria es más parecida en lo que opina del EB, independientemente de dónde viva, mientras que el apoyo de los individualistas se encuentra más condicionado por el contexto. En este contexto, creemos, está fundamentalmente el tipo de EB.

Hipótesis 3

En cuanto a la relación entre la fuerza de las fracturas ideológicas en el consenso y el nivel de apoyo agregado que consigue un sistema de bienestar, la tabla 7.3 también recoge los coeficientes de asociación entre el apoyo medio a cada programa de bienestar y la amplitud de las fracturas ideológicas. Los coeficientes indican que la relación es negativa en todos los casos, es decir, los países con mayor apoyo agregado a los programas de bienestar son también aquellos en los que la ideología no importa mucho a la hora de determinar las actitudes hacia los mismos².

Sin embargo, sólo es significativa para los programas de sanidad y pensiones. Hemos comentado en varios lugares que no nos interesa la significatividad estadística de los efectos macro porque, realmente, no tiene sentido considerar a nuestros once países como una muestra aleatoria de todos los países del mundo, pero aún así la falta de significatividad de la relación para desempleo nos dice que la relación es, o bien muy suave, o bien se encuentra emborronada por algún caso que se sale de la pauta.

Los gráficos 7.1, 7.2 y 7.3 muestran cómo se produce esta relación entre el efecto de la ideología y el nivel de apoyo agregado. En ellos vemos con claridad las cuestiones que nuestras dos primeras hipótesis predecían. En cuanto a la tercera hipótesis, se aprecia si observamos con cuidado cada una de las sub-gráficas y la comparamos con el resto, pero esto no es excesivamente necesario porque, en el siguiente análisis, vamos a ordenar a nuestros países por la fuerza del efecto de la ideología y por su nivel de apoyo a cada programa, apreciando con más claridad la pauta (a menos fracturas ideológicas, más apoyo) que los coeficientes de los modelos indicaban.

Interpretación de los gráficos

Los gráficos de este capítulo se interpretan de forma bastante similar a los del anterior. En el eje horizontal tenemos el grado de igualitarismo de los individuos medido, como ya hemos explicado en la metodología, en función de sus respuestas a una pregunta referida a la deseabilidad de que el Estado aplique medidas para disminuir las desigualdades de ingresos:

² En realidad, los coeficientes de los modelos son positivos, aunque ello indica una relación negativa debido a que el orden que siguen las categorías de respuesta de las preguntas dependientes resulta aquí contra-intuitivo. El coeficiente de la relación entre fuerza del efecto de la ideología, y nivel de apoyo agregado, es positivo, y eso indica que a mayor fuerza de la relación, la media de las respuestas a las preguntas sobre los programas de bienestar se encuentra más cerca de la categoría de respuesta 4. Como el 4, máximo valor de las variables dependientes, indica «de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno», un coeficiente positivo para esta asociación implica que: a mayor fuerza de la ideología, menor apoyo agregado (las actitudes medias de la población se acercan más a 4).

PREGUNTA. *¿Cuál es su opinión sobre las siguiente afirmación? «es responsabilidad del Gobierno reducir las diferencias de ingresos entre gente con altos ingresos y gente con bajos ingresos.»*

1. *Muy de acuerdo.*
2. *De acuerdo.*
3. *Ni de acuerdo ni en desacuerdo.*
4. *En desacuerdo.*
5. *Muy en desacuerdo.*

Como se puede observar, el eje horizontal de los gráficos está marcado con valores de 1 a 5, cada uno de ellos indicando la opción de respuesta a la pregunta anterior.

Los ejes verticales son idénticos a los de los gráficos del capítulo 6 donde veíamos la relación entre la posición económica relativa y las actitudes hacia los programas de bienestar. En ellos figuran las respuestas a las preguntas sobre si debería ser responsabilidad del Gobierno proveer asistencia sanitaria a los enfermos y un nivel de vida digno a ancianos y desempleados. Los ejes verticales están marcados con valores que van de 1 a 4, indicando las respuestas a estas preguntas: 1. Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno; 2. Probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno; 3. Probablemente no debería ser responsabilidad del Gobierno; 4. De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno.

En el área de los gráficos aparece una línea azul. El extremo izquierdo de la línea muestra en qué categoría de respuesta se sitúan, de media, las personas con valores muy igualitarios. Si seguimos las líneas hacia la derecha vamos viendo las respuestas de personas con valores menos igualitarios, hasta llegar al extremo derecho donde tenemos las actitudes de los individualistas.

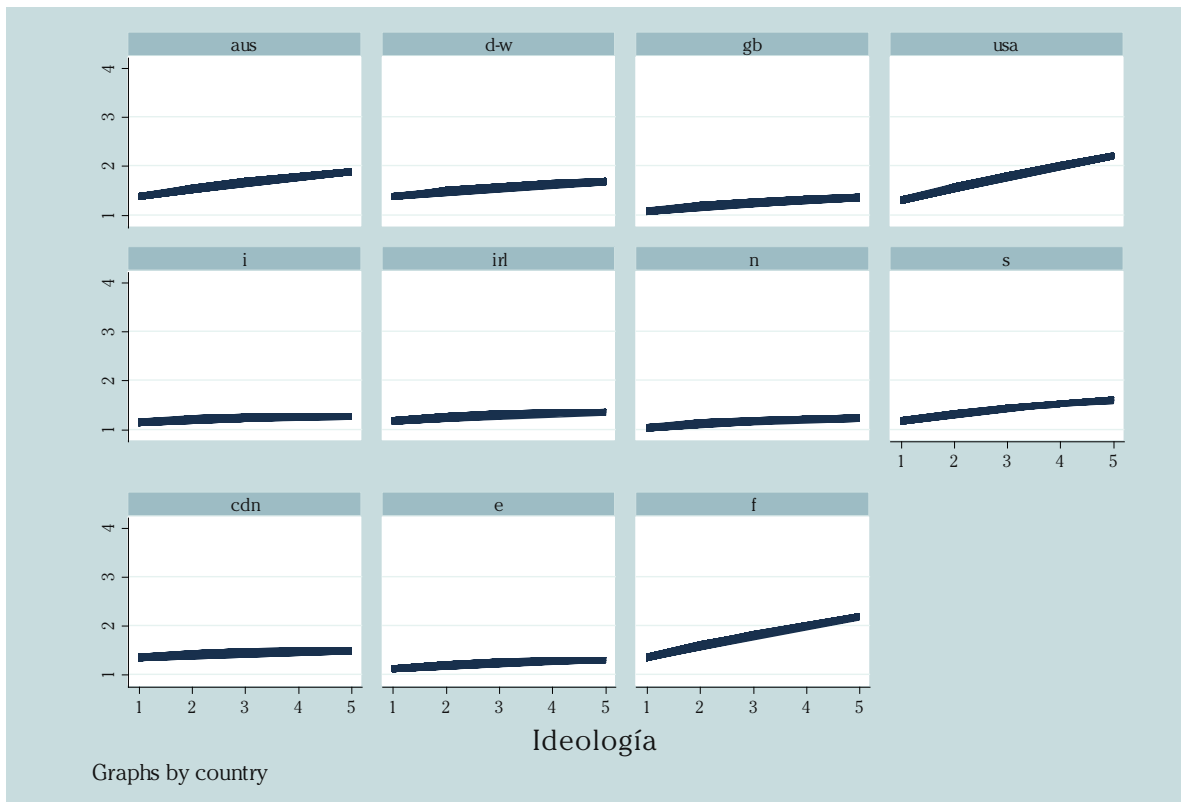
Gráficos para Sanidad y Pensiones

Si comparamos el apoyo de los muy igualitaristas (extremo izquierdo de la línea) y de los muy individualistas (extremo derecho) a la existencia de sanidad y pensiones públicas, vemos que las personas que sustentan valores igualitarios son más parecidas en sus actitudes que quienes ostentan valores individualistas. Las actitudes de los primeros están, en todos los países, cerca del punto 1 del eje vertical, lo que indica que son, independientemente del país en el que vivan y por tanto del modelo de bienestar al que se refieran, en general muy favorables al EB.

Los individualistas varían más de país a país: en algunos países son casi tan favorables al Estado del Bienestar como quienes ostentan valores igualitarios, con lo que su apoyo se suma al de estos, mientras en otros países sus actitudes son bastante más frías hacia el sistema restándole así apoyos.

Gráfico 7.1

Actitudes hacia la Sanidad pública e ideología.
(Relación condicionada por sexo y posición económica)



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

El gráfico superior muestra las actitudes hacia la sanidad pública. En Inglaterra, Italia, Irlanda, Noruega, Suecia y España, la media de respuesta de los «muy igualitarios» está prácticamente en el punto 1 del eje vertical o, lo que es lo mismo, en estos países los ciudadanos igualitarios opinan mayoritariamente, que «sin ninguna duda el Estado debería intervenir» en sanidad.

En Australia, Alemania, EE.UU., Canadá y Francia nuestros igualitarios muestran un apoyo ligeramente menor a la intervención en este tema aunque, desde luego, muy cercano al que se da entre estos mismos colectivos en los países anteriormente mencionados.

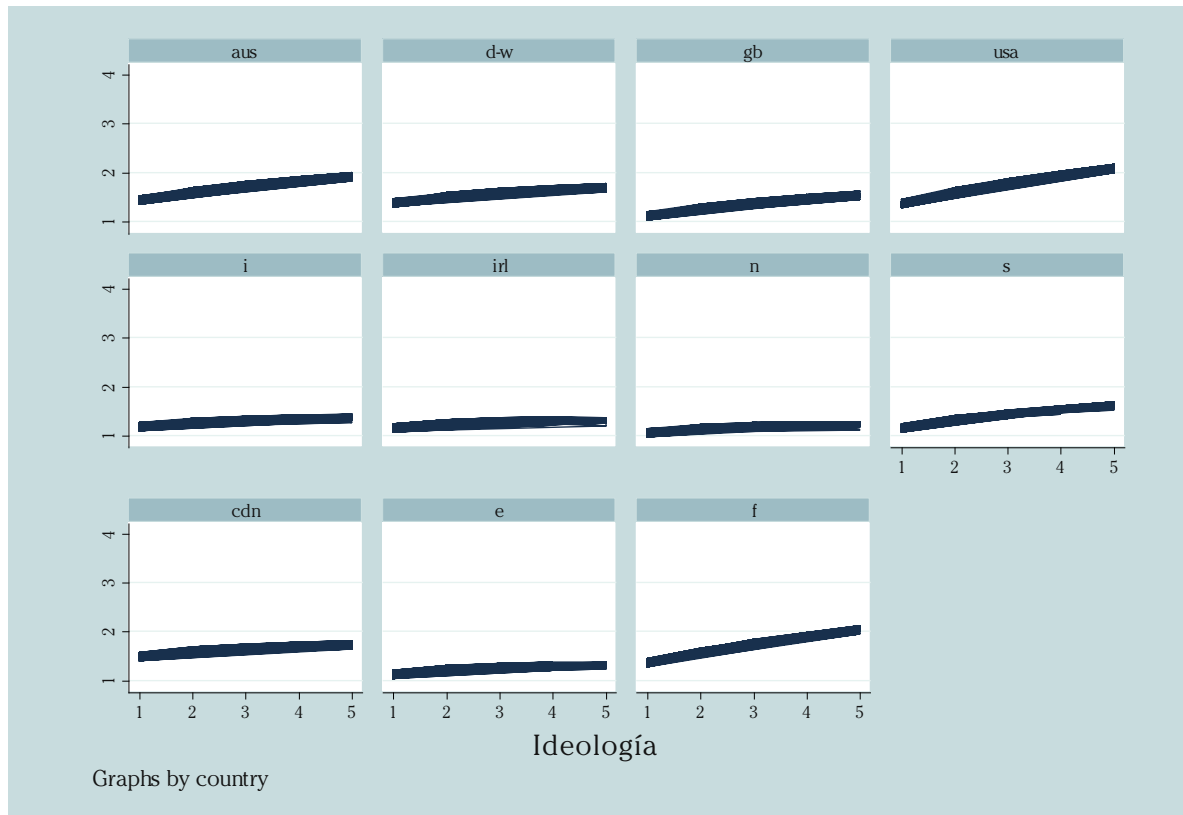
Los más individualistas son más volátiles. En Italia, Irlanda, Noruega, Canadá, España e Inglaterra su apoyo al programa público de sanidad se sitúa en niveles muy similares al de los muy igualitaristas. En Alemania y Suecia se distancian un poco. En Francia, EE.UU. y Australia se distancian mucho.

La mayor heterogeneidad de los individualistas al hablar de sanidad es, a la vista de los gráficos, innegable. Mientras en todos los países la gran mayoría de igualitaristas muestra un apoyo muy fuerte, las actitudes de los individualistas dependen mucho más del país en el que vivan o, lo que es lo mismo, del programa público de sanidad concreto al que se estén refiriendo.

Esta misma pauta la encontraremos también cuando preguntamos sobre la deseabilidad de que exista un programa público de pensiones.

Gráfico 7.2.

*Actitudes hacia las pensiones públicas e ideología.
(Relación condicionada por sexo y posición económica)*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

El gráfico para pensiones nos muestra también que los muy igualitaristas se caracterizan, siempre, por su apoyo a la existencia de pensiones públicas, mientras los individualistas varían de país a país. Son muy favorables en España, Italia, Irlanda y Noruega. De hecho, casi tanto como los igualitaristas. Se distancian de ellos en Alemania, Inglaterra y Suecia, aunque mantienen de media un apoyo considerable a este programa de bienestar, y son muy distintos en Francia, EE.UU. y Australia, lugares donde mantener valores individualistas correlaciona con tener un apoyo mucho más tibio a las pensiones públicas.

Vemos así la confirmación de las hipótesis 1 y 2 respecto a sanidad y pensiones: la fractura ideológica al hablar de estos temas es mayor en unos países que en otros y, además, tener una fractura amplia correlaciona con tener menos apoyo agregado a estos programas porque, como los igualitaristas son muy favorables a su existencia en todos los países, cuando la brecha entre ellos y los individualistas es grande implica que los programas pierden.

En el capítulo anterior vimos que había países donde los ingresos eran muy importantes para determinar el apoyo a los programas de bienestar mientras en otros esta cuestión apenas era relevante para predecir las actitudes, pero también vimos que tener un consenso más o menos fracturado por la posición económica no tiene mucho que ver con los niveles de legitimidad global de cada EB porque las clases bajas no son un bloque homogéneo de apoyo y existen acuerdos interclases «a la baja».

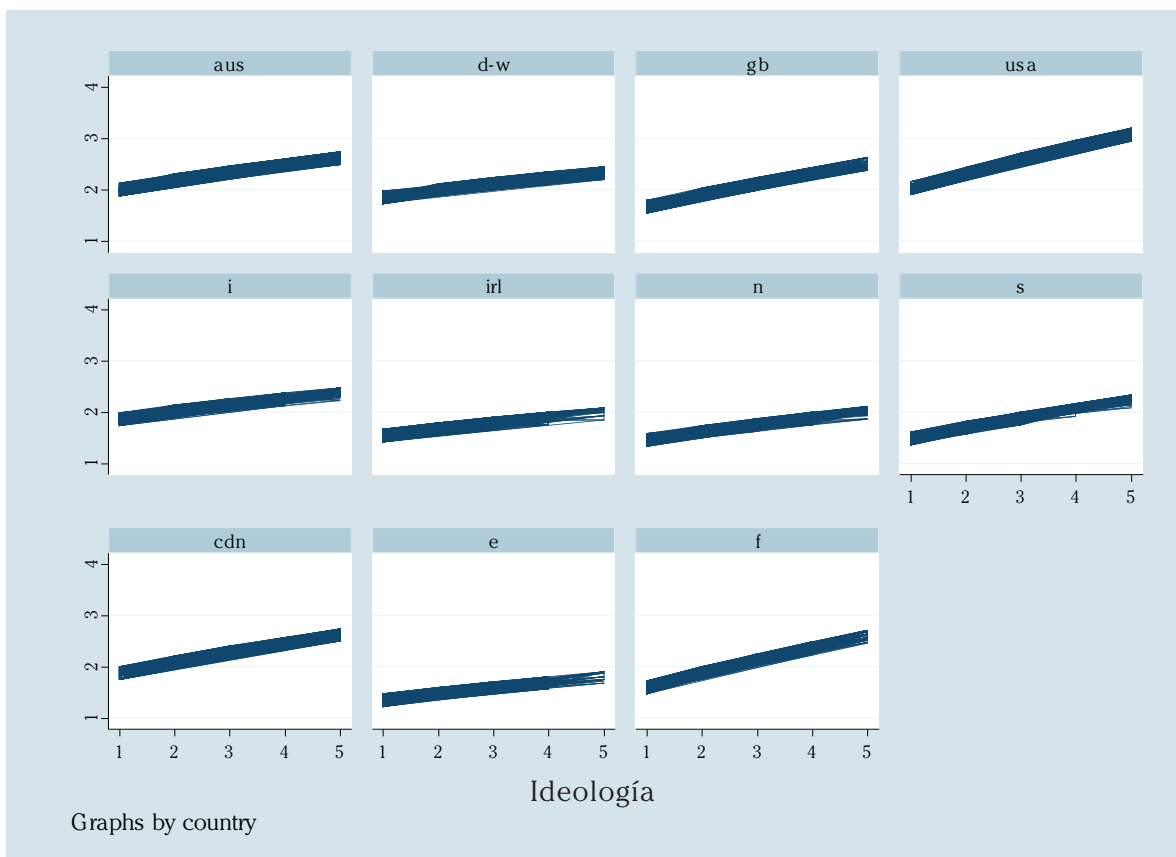
Si me refiero de nuevo a esta conclusión es porque, al igual que ocurría con el efecto de los ingresos sobre las actitudes, aquí vemos también que hay países en los que las razones ideológicas pesan menos que en otros para determinar las actitudes hacia el EB, países caracterizados porque el apoyo a los sistemas de bienestar no está apenas fracturado siguiendo líneas ideológicas. Pero además, y aquí está la diferencia con el efecto de los ingresos, el hecho de tener o no tener fracturas ideológicas sí está relacionado con el apoyo general que logra cada Estado del Bienestar porque los igualitaristas son muy partidarios de los programas de bienestar en todos los países y reducir las fracturas ideológicas se traduce en sumar a los individualistas.

Gráfico para desempleo

En desempleo, sin embargo, la historia es diferente. Como ya indicaban los coeficientes de los modelos, la fuerza de la ideología para determinar las actitudes hacia los subsidios de desempleo varía menos entre países. Igualitaristas e Individualistas difieren siempre en lo que opinan de los programas de bienestar, y la distancia que les separa es relativamente parecida en unos y otros países.

Gráfico 7.3.

*Actitudes hacia los subsidios por desempleo e ideología.
(Relación condicionada por sexo y posición económica)*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Existen países que destacan de la media por tener mayores fracturas ideológicas, como por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos y Francia aunque, en general, observamos pocas diferencias en la pendiente de la mayoría de las rectas, mucho menores, desde luego, que las que existían en el caso de la sanidad o las pensiones. Además, y esto es si cabe más importante, los igualitarios han dejado de ser un bloque más o menos homogéneo que apoya el programa de bienestar independientemente de donde viva, para pasar a variar entre países, no tanto como los individualistas, pero sí de manera significativa. Si en España o Noruega los igualitarios mantienen un nivel de apoyo fuerte a que el Estado proteja a los desempleados, en Italia o Alemania muestran un apoyo tibio («probablemente el Estado debería intervenir»), y en Estados Unidos o Australia se acercan ligeramente a un «probablemente no debería intervenir».

El que los igualitarios hayan pasado a variar en su postura de país a país implica que tenemos que fijarnos en dónde está el listón sobre el que se producen las fracturas ideológicas, es decir, en qué es lo que opinan unos y otros. Recordemos para ello que el eje vertical se mueve de 1 a 4, siendo 1 la respuesta «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno», y 4 la opción «de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno».

En España, Noruega, Irlanda y Suecia los igualitaristas muestran un apoyo fuerte a que existan subsidios de desempleo (muy cerca del punto 1) y los individualistas muestran un apoyo suave (cerca del punto 2). En Alemania e Italia los igualitaristas muestran un apoyo suave (punto 2), y los individualistas se mueven entre el apoyo suave y el rechazo suave (puntos 2 y 3). En Australia, Inglaterra, EE.UU., Canadá y Francia los igualitaristas tienen un apoyo suave, y los individualistas lo rechazan.

Funciona aquí la misma lógica que vimos en el capítulo 6 cuando hablábamos de las fracturas económicas. Los ingresos tenían distinta fuerza para determinar las actitudes dependiendo del país, pero lo importante era que el listón sobre el que se producían tales variaciones estaba más alto en unos lugares que en otros. En unos países se había logrado que todos los ciudadanos apoyaran los programas de bienestar, aunque los más pobres lo hacían con mucho más énfasis, mientras en otros países ni unos ni otros eran fervientes partidarios del modelo.

En las fracturas ideológicas que se producen al hablar de los subsidios de desempleo ocurre algo relativamente similar. La distancia entre igualitaristas e individualistas se da siempre, pero en algunos casos todos ellos apoyan la existencia de subsidios de desempleo, mientras que en otros el listón de apoyo a este programa es, en general, más bajo. Hay menos apoyo al programa tanto entre los igualitaristas como entre los individualistas.

Es por esto que la correlación entre el tamaño de las fracturas ideológicas y el apoyo agregado que consigue el programa aparecía como débil en nuestros modelos. Y es que si bien reducir la distancia entre igualitaristas e individualistas aporta algo de apoyo, no es sólo por esa vía que los programas de desempleo logran la mayor legitimidad.

Vamos a terminar con el tema de las fracturas ideológicas realizando un análisis que nos permite ver con más detalle lo que ocurre en cada país y, por tanto, ver directamente la asociación entre nivel de apoyo agregado y tamaño de las fracturas.

7.3. Las fracturas ideológicas país a país

Para ver con más detalle lo que ocurre en cada país utilizaremos, como en capítulo anterior dedicado a ver las fracturas económicas, regresiones logísticas ordinales.

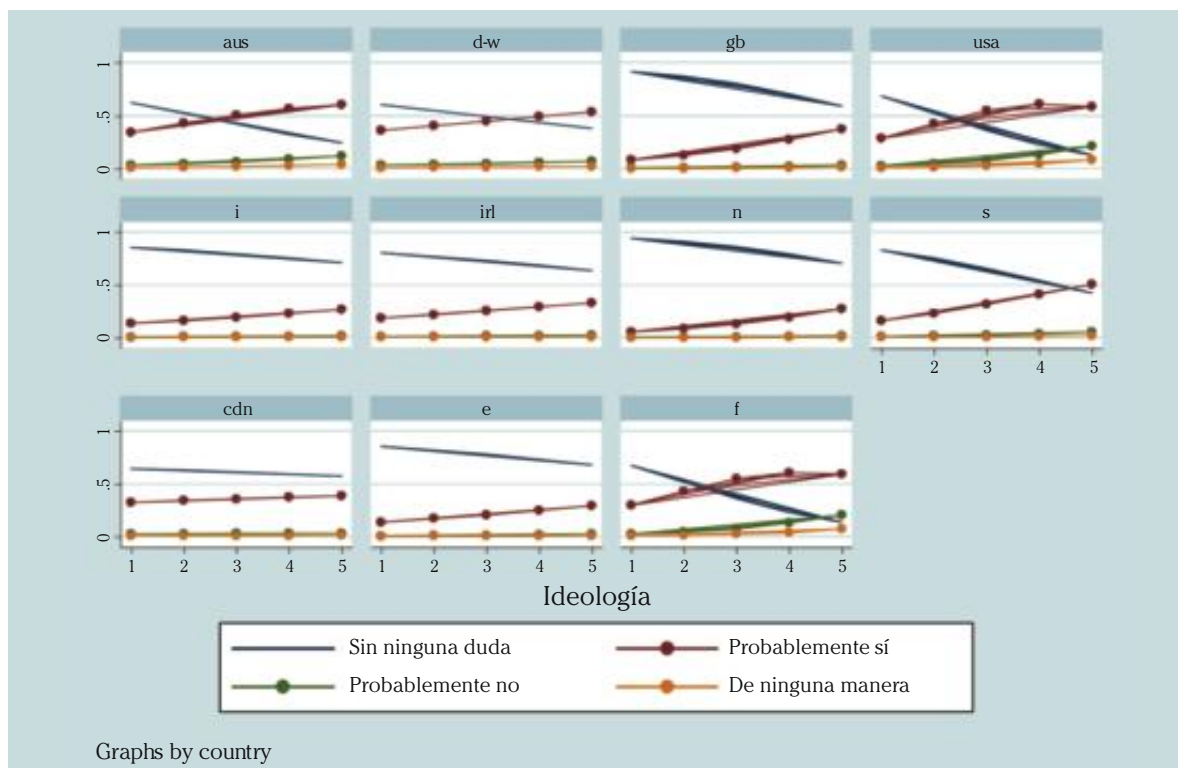
Los gráficos siguientes son demasiado complicados como para apreciar a simple vista las diferencias en la fuerza de la relación ideología-actitudes, lo que se compensa porque nos ofrecen un coeficiente que mide la fuerza del efecto y que utilizaremos para establecer un ranking de países en cuanto a la magnitud de las fracturas ideológicas en sus consensos hacia los programas de bienestar. Lo que sí aportan estos gráficos es más información sobre el nivel en el que se mueven las actitudes, ya que nos enseñan en qué categoría de respuesta concreta se sitúan la mayoría de los igualitaristas y de los individualistas.

Sanidad

En el gráfico 7.4 tenemos las opiniones sobre la intervención del Estado en sanidad en función de la ideología de los individuos. Sabemos, por el gráfico 7.1, que los países donde la ideología tiene menos poder sobre las actitudes son Noruega, Italia, España e Irlanda. Ahora podemos ver que en estos países, a medida que los ciudadanos son más individualistas, se produce un descenso en el apoyo fuerte a la existencia de programas públicos de sanidad y un correlativo aumento del apoyo tibio. Los igualitaristas presentan un mayoritario apoyo fuerte al sistema y los individualistas se reparten entre un apoyo fuerte y un apoyo tibio, pese a lo cual incluso en este colectivo son mayoría quienes lo apoyan sin ambages.

Gráfico 7.4.

Actitudes hacia la sanidad pública e ideología. Relación no condicionada.



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

En Australia, Inglaterra, Alemania y Suecia el efecto de la ideología es algo mayor, y los individualistas se reparten más o menos al 50% entre apoyo tibio y apoyo fuerte. En Australia y Alemania, además, aparece entre los individualistas un pequeño porcentaje que rechaza la idea de que el Estado intervenga en sanidad. El aumento de este porcentaje es lo que caracteriza a Francia e EE.UU., además de tener la relación más fuerte entre ideología y actitudes hacia la sanidad pública. En ambos países el porcentaje de individualistas convencidos de que el Estado debe intervenir en la provisión de sanidad es muy pequeño.

Y por último Canadá, fiel a la pauta que mostraba en el caso de las fracturas de clase, presenta un pequeño efecto de la ideología que no se traduce en el alto apoyo al sistema sanitario público común al resto de países con escasas fracturas ideológicas.

Los modelos de regresión ordinal nos aportan un coeficiente para la fuerza de la relación entre la ideología y las actitudes hacia la sanidad pública (ver Anexos 5 y 6). Haciendo tests de significatividad para las diferencias entre todos los coeficientes entre sí podemos calificar esta relación como baja, media y fuerte. Esta es una medida de la magnitud de las fracturas ideológicas en cada país que nos permite ver, en una sencilla tabla, cómo se relaciona esto con el nivel de legitimidad general de cada uno de los programas.

En la tabla 7.4 tenemos los datos para el programa de sanidad, y allí podemos apreciar que los países con menores fracturas ideológicas se encuentran a la cabeza del ranking de apoyo a la sanidad pública, mientras los países con menor apoyo a este programa muestran relaciones medias o fuertes entre la ideología y las actitudes. La relación, por supuesto, no es perfecta.

Tabla 7.4.

Relación entre fracturas ideológicas y legitimidad

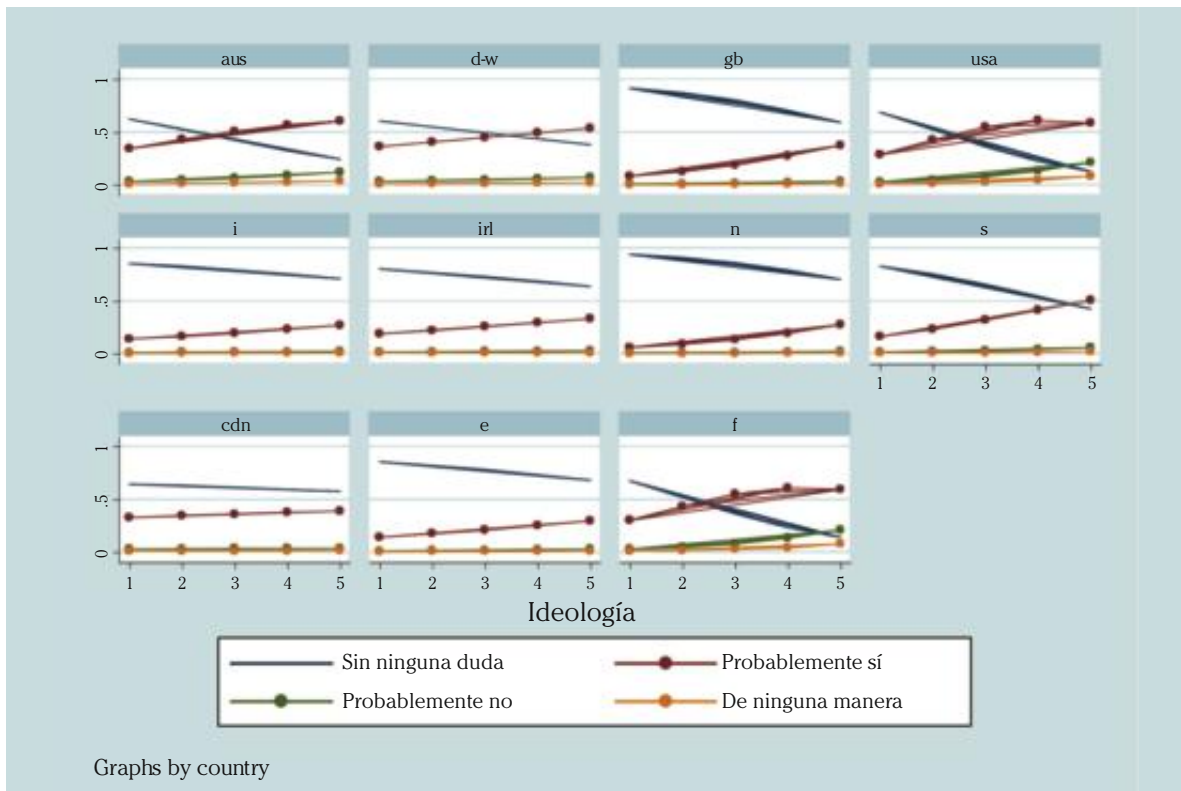
| País | Sanidad | Ideología |
|--------------------|---------|-----------|
| Noruega | 386 | B |
| España | 380 | B |
| Reino Unido | 380 | M |
| Italia | 379 | B |
| Irlanda | 374 | B |
| Suecia | 366 | M |
| Canadá | 354 | B |
| Alemania | 347 | M |
| Francia | 337 | F |
| Australia | 336 | M |
| EE.UU. | 319 | F |

Pensiones

Las opiniones sobre la intervención del Estado para garantizar un nivel de vida digno a los mayores aparecen en el Gráfico 7.5.

Gráfico 7.5.

Actitudes hacia las pensiones públicas e ideología. Relación no condicionada



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Las conclusiones son parecidas a las que sacamos del gráfico anterior. España, Irlanda, Italia, Noruega, Alemania y Canadá tienen menos diferencias en actitudes en función de la ideología que EE.UU., Inglaterra, Australia, Suecia y Francia. En este último grupo de países con efectos importantes de la ideología hay que hacer una distinción: En Francia, Australia y EE.UU. parte de los individualistas optan no ya por el apoyo tibio al sistema, típica pauta para los países con pocas fracturas ideológicas y también para Suecia, sino por el rechazo al mismo. Además, el porcentaje de individualistas que muestran un apoyo fuerte a la existencia de pensiones públicas es muy pequeño.

Utilizando los coeficientes de las regresiones ordinales podemos clasificar a los países según la fuerza de la relación entre la ideología y el apoyo a las pensiones públicas. Tenemos países donde la relación es baja o inexistente, países con relación moderada, y países con relación fuerte. La tabla siguiente muestra la pauta que vimos en los modelos multinivel: los países con más apoyo a las pensiones públicas tienden a tener pocas fracturas ideológicas.

Tabla 7.5.

Relación entre fracturas ideológicas y legitimidad.

| País | Pensiones | Ideología |
|--------------------|-----------|-----------|
| Noruega | 385 | B |
| España | 378 | B |
| Irlanda | 376 | B |
| Italia | 373 | B |
| Reino Unido | 371 | M |
| Suecia | 366 | M |
| Alemania | 344 | B |
| Francia | 342 | F |
| Canadá | 336 | B |
| Australia | 331 | M |
| EE.UU. | 322 | F |

Del análisis de los gráficos y tablas anteriores se deduce que existe una cierta relación entre que el programa tenga mucha legitimidad y la falta de fracturas ideológicas en estos temas. Es cierto que a esta conclusión ya nos habían dirigido los modelos multinivel, pero los gráficos presentados tienen interés por algo más que por su poder confirmatorio.

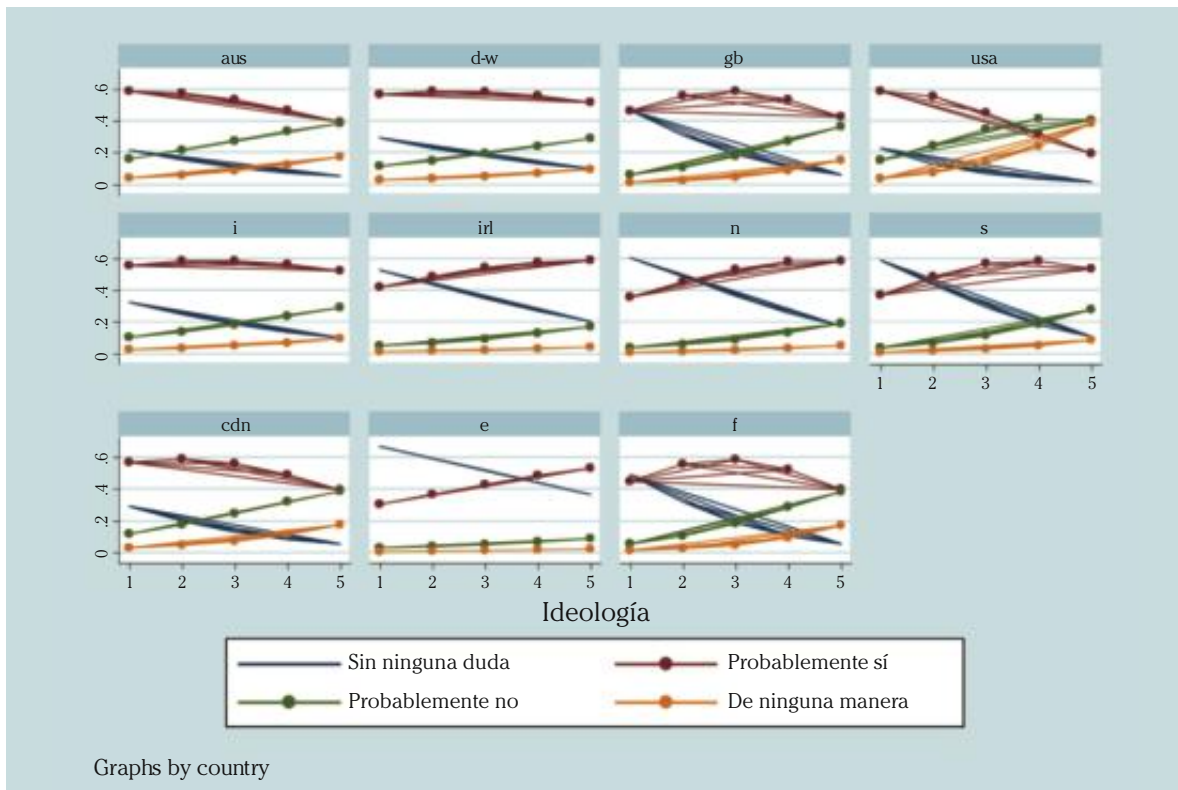
Los modelos multinivel, y los gráficos asociados a ellos, analizaban la relación entre actitudes e ideología en su forma «pura», comparando las actitudes hacia los programas de bienestar de gente con distinta ideología pero con la misma posición económica y sexo. A diferencia de estos, los gráficos que acabamos de ver están basados en regresiones ordinales que, además de ajustarse mejor al tipo de variables dependientes que tenemos, nos muestran la relación sin estos controles. Lo que es interesante es que ya controlemos por otras variables o no, las conclusiones son las mismas.

Desempleo

Hemos mencionado en varias ocasiones que existe menos apoyo a que el Estado intervenga para proteger a los desempleados del que existe para la intervención en sanidad o pensiones. Además, en el gráfico 7.6 observamos que hay menor variación entre países en cuanto al componente ideológico de estas actitudes. Todos los países tienen una relación importante entre la ideología de los ciudadanos y sus opiniones sobre la necesidad de que existan programas de protección al desempleo. La relación es más fuerte en algunos sitios, pero la variación internacional es menor que la que encontramos para sanidad o pensiones.

Gráfico 7.6.

Actitudes hacia los subsidios por desempleo e ideología. Relación no condicionada.



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

El cruce de líneas hace los gráficos demasiado complejos como para interpretarlos de un vistazo. El efecto de la ideología convierte mayorías en minorías, y hace aparecer las opiniones contrarias a que exista intervención pública para apoyar a los desempleados.

Los coeficientes de los modelos de regresión ordinal sirven de ayuda para lo que el ojo no ve y, en cuanto a la posición de los distintos países, algunas pautas comunes aparecen con sanidad y pensiones.

Por un lado, tres de los países que presentaban pocas fracturas ideológicas en los gráficos anteriores siguen siendo los que menos diferencias tienen entre ciudadanos de distinta ideología: Irlanda, España e Italia. Por otro lado, los países con mayores fracturas ideológicas siguen siendo los mismos: EE.UU. y Francia, seguidos aquí por Inglaterra, Suecia y Canadá. En cualquier caso, en la tabla 7.6, que compara la fuerza de la relación ideología-actitudes con el apoyo agregado al programa, podemos ver que no existe una relación clara entre un hecho y otro. En este caso parece ocurrir lo mismo que con las fracturas de ingresos: los países que más legitimidad consiguen no derivan ese apoyo extra de disminuir las diferencias entre el apoyo de igualitaristas e individualistas sino, fundamentalmente, de alzar el nivel de apoyo de todos ellos.

España, Noruega, Irlanda y Suecia son los países en los que las prestaciones públicas por desempleo logran mayor apoyo ciudadano. Vemos que en estos cuatro países la mayoría de los

igualitaristas apoyan las prestaciones públicas con firmeza (la línea azul «sin ninguna duda deberían ser responsabilidad del Gobierno» se sitúa sobre el punto 0.5 del eje vertical). Si miramos los gráficos fijándonos sólo en los individualistas (extremo derecho de las líneas), vemos que en estos países no se oponen al sistema de prestaciones por desempleo sino que, simplemente, lo apoyan de forma más tibia que los igualitaristas.

En Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, los igualitaristas apoyan mayoritariamente la existencia de prestaciones por desempleo pero, a diferencia de los cuatro países anteriores, se reparten casi a partes iguales entre el apoyo fuerte (línea azul) y el apoyo tibio (línea granate). En estos cuatro países los individualistas están también divididos, aunque ahora entre quienes se oponen tibiamente a que existan prestaciones públicas y quienes las apoyan tibiamente.

Finalmente, en Canadá, Australia y EE.UU. no hay ningún colectivo ideológico que presente un apoyo mayoritariamente fuerte a la intervención del Gobierno en desempleo. Los ciudadanos que sustentan valores más igualitarios muestran sólo un apoyo «tibio» a estas prestaciones, acogiéndose a la opción de respuesta representada por la línea granate: «probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno». Aquellos con valores más individualistas, por su parte, son mayoritariamente contrarios a que estas prestaciones existan. El caso más extremo es EE.UU., donde la mayoría de los ciudadanos con valores individualistas considera que esto «de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno».

El hecho de que los programas de desempleo consigan alta legitimidad no sólo disminuyendo las fracturas ideológicas en las actitudes sino, sobre todo, alzando el nivel sobre el que estas fracturas se producen explica que la tabla 7.6 no muestre una pauta demasiado clara.

Tabla 7.6.
Fracturas ideológicas y legitimidad.

| País | Desempleo | Ideología |
|--------------------|-----------|-----------|
| España | 352 | B |
| Noruega | 332 | M |
| Irlanda | 330 | B |
| Suecia | 326 | F |
| Francia | 310 | F |
| Reino Unido | 301 | F |
| Italia | 296 | B |
| Alemania | 293 | B |
| Canadá | 273 | M |
| Australia | 270 | M |
| EE.UU. | 241 | F |

7.4. Conclusión: Fracturas ideológicas, legitimidad, y tipo de Estado del Bienestar

En este capítulo hemos visto que los programas de bienestar con mayor legitimidad presentan pocas diferencias por ideología en las actitudes que los ciudadanos desarrollan hacia los mismos. Parte de la alta legitimidad que consiguen en algunos países los programas públicos de sanidad y pensiones se debe a que logran el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos con valores igualitaristas y, también, el de muchas personas que, por sustentar valores de corte individualista, no están «naturalmente» inclinados a prestar tal apoyo.

En el capítulo 5 vimos que los Estados de Bienestar de corte Socialdemócrata lograban las mayores cotas de legitimidad, seguidos por los países con Estados del Bienestar Conservadores y con los países Liberales en último lugar.

En los análisis previos hemos estado hablando de programas en concreto, y no de tipos de EB, y además hemos trabajado tanto con los países que se pueden clasificar bien dentro de cada uno de los tipos de EBs como con otros, sobre los que existe un cierto debate acerca de su pertenencia a uno u otro modelo de bienestar.

Pero en cualquier caso, lo que aplica a los programas, aplica también a los tipos de EBs. Si los programas logran mayor legitimidad cuando las actitudes hacia los mismos no están fracturadas siguiendo líneas ideológicas, y si estos programas más legitimados se encuentran sobre todo en Estados del Bienestar clasificados como Socialdemócratas, entonces cabe concluir que una de las razones por las que este tipo de EB presenta una legitimidad tan alta es porque ha logrado que lo apoyen los igualitaristas y los individualistas.

Como podemos ver en las tablas siguientes, el tipo Socialdemócrata de EBs se caracteriza por tener sus consensos en torno a los programas de sanidad y pensiones poco (Noruega) o moderadamente (Suecia) fracturados según líneas ideológicas. El tipo Conservador de Estados del Bienestar presenta relaciones entre moderadas y fuertes, y el tipo Liberal suele tener el consenso en torno al EB fracturado de forma fuerte por la ideología.

Volviendo a nuestra hipótesis de partida, los EBs Socialdemócratas se han convertido en instituciones menos cargadas de simbolismo ideológico y, pese a ser fruto de la lucha de la clase obrera por la igualdad, como afirman hoy la mayoría de los teóricos de política social comparada, lo cierto es que ese origen obrero se ha difuminado con el tiempo en la mente de los ciudadanos. Sólo así puede explicarse que estos Estados del Bienestar encuentren un apoyo mayoritario entre quienes sustentan valores muy individualistas.

Aquí radica, en parte, la explicación de que el tipo Socialdemócrata de EB presente los niveles más altos de legitimidad, y de que el tipo Liberal no logre sumar tantos apoyos como Socialdemócratas o Conservadores. Y digo «en parte» porque la otra parte de la explicación la vimos en el capítulo 6, donde analizamos las actitudes hacia los programas de bienestar en función de los ingresos de los individuos y observamos que a) los programas con más apoyo recibían este apoyo de entre todos los colectivos de ingresos; b) por tanto, los EBs más legitimados, los Socialdemócratas, consiguen gran apoyo, en parte, porque todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos, muestran actitudes favorables a los mismos.

Tabla 7.7.

Tipo de Estado del Bienestar, índice de apoyo a los programas de sanidad y pensiones, y efecto de la ideología sobre las actitudes hacia estos programas*

| Tipo EB | País | Sanidad | Ideología | Tipo EB | País | Pensiones | Ideología |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Soc-Dem | Noruega | 386 | Baja | Soc-Dem | Noruega | 385 | Baja |
| | Suecia | 366 | Media | | Suecia | 366 | Media |
| Lib | Canadá | 354 | Media | Conserv | Alemania | 344 | Media |
| Conserv | Alemania | 347 | Media | | Francia | 342 | Fuerte |
| | Francia | 337 | Fuerte | Lib | Canadá | 336 | Baja |
| Lib | Australia | 336 | Fuerte | | Australia | 331 | Fuerte |
| | EE.UU. | 319 | Fuerte | | EE.UU. | 322 | Fuerte |

Elaboración propia con datos del ISSP, 1996.

*Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno») a 400 (100% de la población considera que «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»).

**Capítulo 8. *Fracturas de género. Estados del Bienestar
«woman-friendly» y legitimidad***

8.1. Justificación teórica.

8.2. Comprobación de la hipótesis: las mujeres como fuente de legitimidad.

8.3. El efecto del género sobre las actitudes país a país.

8.1. Justificación teórica de las fracturas de género

Las mujeres en las tipologías de Estados del Bienestar.

A lo largo de este estudio hemos venido utilizando la tipología de Estados del Bienestar acuñada por Gøsta Esping-Andersen. Una tipología que, como explicamos en el capítulo 2, clasifica los sistemas de bienestar en función de su nivel de *decomodificación*, es decir, en función del grado en que permiten a los individuos mantener un nivel de vida digno independientemente de su posición en el mercado de trabajo y de los vaivenes del mismo.

Entre los conceptos que este autor utilizó para definir su tipología de bienestar, así como entre las variables que le sirvieron para verificarla de forma empírica, no hay ninguna referencia explícita acerca de las ventajas o desventajas que cada sistema tiene para las mujeres. Es decir, no tomó en cuenta que la posición de los hombres y las mujeres frente a los programas de bienestar es distinta y que, por tanto, los efectos de estos programas pueden no ser los mismos para unos y otras¹.

Many feminist analysts have critiqued Esping-Andersen for the gender-blindness of his scheme: His citizens are implicitly male workers; his dimensions tap into states' impact on class relations and the relationship between states and markets without considering gender differences within classes or the relations between states and families; he leaves invisible women's work on behalf of societal welfare (i.e. unpaid caring/domestic labor); and his framework fails to consider state's effects on gender relations, inequalities, and power (Orloff, 1996, p. 70).

Esta carencia, reconocida pronto por el propio Esping-Andersen, promovió buena parte de las críticas que en los primeros años recibió la tipología² y dio lugar a numerosos estudios sobre sistemas de bienestar comparados que pretendían complementar los trabajos previos incluyendo el enfoque de género. En palabras de Julia O'Connor, no se trataba de cuestionar la idea de los regímenes de bienestar sino de reformular su definición «genderig welfare state regimes» (O'Connor, 1996, p. 103).

Pero, pese a la validez y justificación de las críticas con las que «Los Tres Mundos del Estado de Bienestar» fue acogido entre la sociología del género, la mayoría de los intentos de reformular la tipología mediante la inclusión de variables referidas a la posición de las mujeres dieron como resultado productos bastante similares al original: tipologías en las que los países no variaban de categoría y en las que seguíamos teniendo a los nórdicos en un grupo, a los países anglosajones en otro, y a la Europa continental en un tercero. La conclusión más o menos

¹ Autores como Enzo Mingione (1985) o R. E. Pahl (1985) han argumentado que el hogar funciona como «pool» de recursos, y por ello la participación de la mujer en el mercado de trabajo dependerá de la medida en que el Estado haya socializado (haya descargado a los hogares) ciertas tareas.

² *Entre las numerosas críticas (a la clasificación de EBs hecha en 1990) hay dos que destacan debido a que, si no se resuelven, impedirán un ulterior proceso analítico. La primera es, sobre todo, una crítica a la clasificación: ¿no habrá más modelos, y no sólo tres? Abordaré esta cuestión, aunque no de manera exhaustiva. La segunda tiene que ver con el hecho de que no reconociera las diferencias de sexo y, de manera más general, con mi análisis de la familia, gravemente deficiente. Esta crítica recibirá más atención, debido, ante todo, a que resulta urgentemente necesario recordar que el núcleo familiar es un componente fundamental de cualquier régimen de bienestar.* (Esping-Andersen, 1998. Introducción a Fundamentos Sociales de las Economías Postindustriales, p. 23)

general fue que, además de su distinto poder decomodificador, cada uno de los tipos de EB definidos por Esping-Andersen también difiere en su efecto sobre las desigualdades de género: el tipo Socialdemócrata es el que en mayor medida logra aproximar la posición socio-económica de hombres y mujeres, seguido por el tipo Corporativo y con el Liberal en último lugar.

Para citar algunos de los estudios que sirvieron de base a esta conclusión hay que comenzar por Peter Taylor-Gooby, pionero en los estudios sobre actitudes generales hacia el EB y pionero también en ver la relación entre el tipo de EB y las políticas de género.

Taylor-Gooby (1991) analizará cómo se organiza el trabajo de cuidado informal (no pagado) en cada uno de los tipos de EBs y la manera en que cada sistema enfoca el tema de las desigualdades de género, concluyendo que los países que pertenecen a cada tipo de EB presentan importantes similitudes en estas cuestiones.

Poco más tarde Gustafsson (1994) estudia las políticas de guarderías en EE.UU, Holanda y Suecia, y encuentra que las diferencias entre estos países reflejan lo que sería esperable conforme a su pertenencia a uno u otro tipo de EB. Lewis (1992³), por su parte, se centra en la forma en que los sistemas de bienestar de algunos países (Francia, Inglaterra, Irlanda y Suecia) refuerzan el modelo «male bread-winner», concluyendo que Inglaterra e Irlanda son los dos países que en mayor medida potencian este modelo, Francia algo menos, y Suecia bastante menos. Es decir, países pertenecientes a distintos tipos de EB tienen un efecto diferencial sobre el modelo de género que impera en una sociedad. Un resultado similar va a presentar Orloff (1996) que, mediante un análisis de la participación en el mercado de trabajo de las mujeres, las diferencias salariales por género, y la incidencia de la pobreza entre las madres solteras, afirma que los sistemas calificados como Socialdemócratas son más beneficiosos para las mujeres que los otros dos tipos porque, al potenciar la participación femenina en el mercado de trabajo, consiguen mejorar tanto sus derechos económicos como sociales⁴.

También un «clásico» como Walter Korpi va a interesarse en este tema y, en un estudio ya famoso titulado «Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of WS» (2000), analiza los distintos Estados del Bienestar teniendo en cuenta los programas que en mayor medida contribuyen a la integración de la mujer en el mercado de trabajo (guarderías públicas, atención domiciliaria a personas dependientes, duración, cobertura y cuantía de la baja de maternidad, existencia de baja por paternidad) y mantiene que el modelo Socialdemócrata, gracias a la gran extensión de estos programas, es el que en mayor medida consigue disminuir las desigualdades de género. Y por fin, el propio Esping-Andersen (1997; 1998) actualizará su estudio original incluyendo diferentes cuestiones referidas al género y conclu-

³ Los análisis de Lewis, y el anterior que menciono de Gustafsson se encuentran resumidos en un estudio posterior Ann Orloff (1996).

⁴ Aunque es verdad que el tipo Socialdemócrata se caracteriza por tener las tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo más elevadas, también en EEUU o Australia encontramos a la mayoría de las mujeres integradas en el mercado de trabajo. En 1996, y según datos de «Employment Outlook» (1999) de la OCDE, el ratio de participación en la fuerza de trabajo para las mujeres entre 15 y 64 años era del 77% en Suecia y del 74% en Noruega. En este mismo año, el dato para EEUU era del 70%, y el de Australia del 63%. Si bien mirando este dato la distancia entre el tipo Socialdemócrata y el Liberal parece pequeña, cuando tomamos indicadores del tipo de trabajo (a tiempo completo o parcial, tipo de contrato, estatus) es cuando la diferencia entre los dos modelos se hace más fuerte. Los servicios públicos de bienestar Socialdemócratas permiten a las mujeres no sólo entrar en el MT, sino entrar en las mismas condiciones que los hombres y no verse relegadas a trabajos temporales o a tiempo parcial para combinar trabajo y familia.

yendo que, aunque al construir su tipología de 1990 no tuvo en cuenta este tema, los tres tipos de EBs originales tienen, además de distinto grado de decomodificación, una distinta orientación de sus políticas en lo relativo al género y, por tanto, un efecto diferencial sobre cuestiones tan fundamentales para el debate sobre género y EB como el porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo o la tasa de fertilidad. Por utilizar el término de Helga Hernes⁵, los tres tipos de EBs con los que estamos trabajando difieren en el grado en que sus políticas pueden considerarse «woman-friendly».

Existen, por supuesto, estudios discordantes. Wenemmo (1994) analiza las ayudas a las familias con hijos y llega a la conclusión de que en este tema sólo existen dos grupos de países: Socialdemócratas y Liberales se parecen en el enfoque de estas ayudas, mientras los Conservadores se distinguen del resto. Hay también estudios que matizan los anteriores resultados apuntando a la relativa heterogeneidad interna de los tipos de EB, y trabajos posteriores que incluyen el tipo de EB Mediterráneo (Italia, España, Portugal y Grecia) y afirman que, aunque el ranking de EB's «woman-friendly» está encabezado por los sistemas Socialdemócratas, seguido por los Corporatistas y luego por los Liberales, los sistemas de bienestar que en peor posición dejan a las mujeres no son los Liberales sino los Mediterráneos, donde la organización de las políticas sociales potencia la dependencia económica de la mujer respecto del cabeza de familia (hombre) al delegar sobre ella gran parte de las tareas de cuidado e impedir así su participación en el mercado de trabajo.

En cualquier caso, parece claro que cada tipo de EB tiene una aproximación y un efecto distinto sobre las desigualdades de género: los EBs Socialdemócratas asumen como uno de sus objetivos promover la independencia económica de las mujeres, lo que se traslada en amplias políticas públicas de cuidado a dependientes y en ayudas económicas que se dirigen al individuo (hombre o mujer) y no a la familia. Los EBs Corporatistas se mueven ligeramente en esta misma línea, pero en ellos la extensión de políticas de cuidado a terceros es mucho menor, y las ayudas menos generosas. Los EBs Liberales estarían, junto a los Mediterráneos, a la cola de la preocupación por disminuir las desigualdades de género, bien porque las políticas dedicadas a este fin son tan escasas y poco generosas que no logran grandes efectos (Liberales), bien porque el apoyo a la independencia de la mujer no se considera un objetivo prioritario de la política social (Mediterráneos).

En lo que a nosotros nos interesa, este diferente enfoque podría generar que las mujeres tengan una distinta opinión acerca de las bondades de las políticas sociales dependiendo del tipo de EB bajo el que vivan. Si hay una traslación directa entre lo que uno recibe de una institución y el apoyo a la misma, deberíamos encontrar que las mujeres de los países con EBs Socialdemócratas son las más favorables a la existencia del Estado del Bienestar porque son las que más se benefician del mismo.

Actitudes hacia el Estado de Bienestar de hombres y mujeres

En las siguientes páginas veremos hasta qué punto la distancia entre las actitudes de los hombres y de las mujeres es mayor en algunos tipos de EB pero, independientemente de esto, los estudios sobre actitudes hacia el EB ya nos habían indicado que las mujeres son, independien-

⁵ Op cit. Orloff, 1996, p. 64.

temente del sistema de bienestar bajo el que vivan, ligeramente más partidarias de la existencia de programas de bienestar que los hombres (Svallfors, 1997; Andreß & Heien 2001; Blekesaune & Quadagno, 2003; Calzada, 2003).

Siguiendo la lógica de los determinantes de estas actitudes, se ha tratado de explicar el mayor «welfarismo» de las mujeres con arreglo a dos elementos:

a) *El interés*

Los datos sobre participación en el mercado de trabajo, estatus ocupacional, nivel de ingresos o tasas de desempleo (OCDE, 2005. Muñoz del Bustillo, 1998) demuestran que, en todos los países, las mujeres están en peor situación económica que los hombres, lo que en gran medida es un efecto de que el rol de cuidadora que la sociedad les otorga dificulta su participación en el mercado de trabajo en términos de igualdad con los hombres. Teniendo esto en cuenta, resulta lógico pensar que la existencia de políticas sociales sirve en mayor medida a las mujeres que a los hombres ya que, al hacerse cargo de parte de las tareas de cuidado que tradicionalmente les han sido asignadas (cuidado de menores vía guarderías y sistema educativo, cuidado de enfermos vía el sistema de salud y la atención domiciliaria, cuidado de ancianos), les permite acceder al mercado de trabajo en unas condiciones que, si no llegan a ser similares a las de sus compañeros, sí se acercan un poco más.

Con el acceso al mercado de trabajo la mujer no sólo gana en independencia económica sino, asociado a ella, en poder de negociación en el ámbito familiar. En términos de Hirschman (1977), contar con ingresos propios abre a las mujeres la posibilidad de «romper la baraja» disolviendo la unidad familiar en caso de conflicto («*exit*»), una opción que es requisito previo para poder protestar y negociar («*voice*») porque, como argumenta Hirschman y recoge Hobson, el poder negociador de un individuo en cualquier organización se ve extremadamente limitado cuando su dependencia de ella es total (Hobson, 1990, p. 237).

En conclusión, los argumentos que explican el mayor apoyo de las mujeres al EB por razones de interés se basan en que, en el *trade-off* que suponen las políticas de bienestar, las mujeres salen más beneficiadas que los hombres porque:

- El EB se hace cargo de tareas de cuidado que tradicionalmente se asignan a la mujer, permitiéndolas tener tiempo para entrar en el mercado de trabajo y, con ello, potenciando su independencia económica y familiar (Hobson, 1990).
- Los programas de bienestar benefician más a los colectivos de bajos ingresos, y las mujeres están sobre-representadas en este colectivo.

Stefen Svallfors, uno de los pioneros en el estudio de las actitudes hacia el Estado del Bienestar, resume estas conclusiones:

Women are more dependent on the Welfare State, both as employees, as family members relieved of heavy and unrewarded care work and as recipients of benefits from the state. Women often have a more precarious labour position than men, leaving them either dependent on a male breadwinner or as more dependent on the state than men are. In many ways, the latter dependency can be regarded as more desirable (Svallfors, 1997, p. 290).

b) *Los valores o principios de justicia distributiva*

Independientemente de su posición económica, las mujeres suelen presentar valores ligeramente más igualitarios que los hombres y utilizan, en mayor medida que estos, principios distributivos basados en la igualdad y en la necesidad (frente al principio de eficacia), aunque también toman más en cuenta que los hombres si la persona se «merece» o no lo que se le está dando (Scott *et al.* 2001).

Certainly our most surprising and potentially most interesting results regard differences in how women and men use allocation principles in distributive justice judgements. Based on earlier research, we expected to see differences between women and men concerning their relative preferences for equality and efficiency and their sensitivity to need. We did see such results, but we also discovered gender differences that went well beyond these relative preferences. In particular, we found unexpected gender-specific interactions of merit with the other allocation principles. We saw that women's equality-preferences were mediated by merit assumptions, but that men's were not (Scott *et alia*, 2001, p.763).

Las distintas explicaciones del superior igualitarismo femenino, y de que concedan más importancia a criterios de necesidad a la hora de distribuir bienes, suelen basarse en que, en la mayoría de las sociedades, los procesos de socialización de hombres y mujeres difieren en muchas cuestiones y, entre ellas, en los valores y actitudes que se espera que cada género demuestre hacia sus congéneres.

Varios autores han apuntado que uno de los ejes sobre los que se estructura la socialización de la mujer es el tema del cuidado, pero no a sí mismas, sino a los demás. La abnegación y el poner su bienestar físico y (psíquico) por detrás del de quienes la rodean forman parte de los valores en los que tradicionalmente se ha socializado a las mujeres (Murillo, 1996), y algunos autores van a explicar su mayor igualitarismo y apoyo al EB como una traslación a la esfera pública de un rol de cuidadora que, aunque se ejerce en la esfera doméstica, ayuda a valorar más, a compartir más, los fines de unos programas de bienestar que, en parte, persiguen «cuidar» a los miembros más débiles de la sociedad: los más pobres, los enfermos, los ancianos, etc. (Svallfors, 1997; Moreno, 2002).

En resumen, los estudios que tenemos hasta la fecha sugieren dos explicaciones para el hecho de que las mujeres sean más favorables que los hombres a las políticas de bienestar:

- Estas políticas les benefician más en términos económicos.
- Su socialización en valores de cuidado al otro les hacen más afines a los objetivos del EB.

Sobre estas conclusiones, y sobre aquellas referidas al efecto diferencial de cada tipo de EB sobre las desigualdades de género (vistas en la primera parte de este capítulo), vamos a construir nuestras hipótesis de trabajo.

Hipótesis

En los análisis realizados en capítulos anteriores incluíamos en los modelos de regresión la variable sexo, y allí ya confirmamos lo que la literatura previamente mencionada nos dice: las mujeres son más favorables que los hombres a que existan programas públicos de sanidad, pensiones y desempleo. Pero lo que nos interesa aquí no es tanto confirmar esta tendencia general como saber si la fuerza con la que opera es similar a lo largo de nuestra muestra, es decir, si la brecha

de apoyo al EB que existe entre hombres y mujeres tiene el mismo tamaño en todos los países y, de no ser así, si las diferencias tienen algo que ver con los tipos de Estados de Bienestar.

En realidad, en la mayoría de los países que se han estudiado la «brecha» entre hombres y mujeres es pequeña, apenas unos pocos puntos porcentuales separan las actitudes de unos y otras, lo que ya de entrada no sugiere que la explicación de la mayor legitimidad de unos EBs vaya por este camino. Pero ya que la literatura sobre género y EB no deja de crecer, y que una de las asunciones de muchos trabajos sobre el tema es que las mujeres tienen más interés en la existencia de los programas de bienestar que los hombres, vamos a dedicar unas páginas a tratar esta cuestión.

Nuestra hipótesis parte de la primera explicación que se ofrece para el mayor *welfarismo* de las mujeres, aquella basada en el interés y que argumenta que ellas son más favorables al EB porque se benefician en mayor medida que los hombres de las ayudas a colectivos con pocos recursos, y porque las políticas de bienestar las descargan de parte de sus labores de cuidadoras permitiéndoles entrar en el mercado de trabajo.

Si vinculamos esto con el hecho de que los Estados del Bienestar Socialdemócratas sirven en mayor medida que el resto a los intereses de las mujeres, la hipótesis lógica es que en países con sistemas Socialdemócratas de bienestar las diferencias entre el apoyo de los hombres y de las mujeres a la existencia de estas políticas debería ser más grande que en el resto. Y, si el apoyo de los hombres es más o menos similar a lo largo de todos los países, pero en algunos las mujeres constituyen un bloque especialmente favorable, puede que parte del apoyo extra que los sistemas de bienestar Socialdemócratas consiguen se derive de que han logrado convencer a más mujeres que los otros sistemas.

Nuestras hipótesis para el análisis de este tercer capítulo sobre el estudio de las fracturas en los consensos nacionales en torno al EB se formulan como sigue:

1. La diferencia de apoyo a los programas de bienestar entre hombres y mujeres será de distinto tamaño dependiendo del país que estudiemos.
2. Las mayores diferencias se darán en los países con sistemas Socialdemócratas, las menores, en los países Liberales y Mediterráneos.
3. Estas diferencias son lo suficientemente fuertes como para explicar, al menos en parte, la mayor legitimidad que tienen los EBs Socialdemócratas. Es decir, el apoyo «extra» proveniente de las mujeres que obtienen los EBs Socialdemócratas es de suficiente magnitud como para suponer un aumento significativo en el porcentaje de apoyo agregado que logran los programas de bienestar en estos sistemas.

Para ver hasta qué punto podemos confirmar estas hipótesis seguiremos la misma línea de actuación que en los dos capítulos anteriores. Comenzaremos con modelos de regresión multinivel para ver si la hipótesis 1 se cumple, y seguiremos con un análisis más detallado de lo que ocurre en cada uno de los 11 países para verificar las siguientes.

8.2. Verificar la hipótesis: las mujeres como fuente de legitimidad

Los modelos multinivel nos indican que existen variaciones significativas entre países en el efecto del género sobre las actitudes, pero sólo en lo que se refiere a las actitudes hacia dos programas: sanidad y desempleo. En pensiones el modelo no llega a converger después de 70 iteraciones, lo que revela que, en este tema, la diferencia entre mujeres y hombres es más o menos similar en todos los países.

Es decir, sobre una tendencia general que hace a las mujeres más partidarias de los programas de bienestar que los hombres, tenemos países donde el apoyo de las mujeres es especialmente pronunciado. Sin embargo, esto ocurre solamente con las opiniones hacia dos de los tres programas de bienestar sobre los que preguntamos: sanidad, y subsidios por desempleo. En lo referente a pensiones las mujeres siguen mostrando ligeramente más apoyo que los hombres pero, por lo que parece, la distancia entre las actitudes de unas y otros es similar a lo largo de los países que estudiamos.

Tabla 8.1.

Modelos de regresión lineal multinivel con variación entre países para el efecto del género*

Parte fija:

| Sanidad | Coef. | P > z | Desempleo | Coef. | P > z |
|--------------------|----------|-------|----------------|----------|-------|
| Pos. económica | .0623207 | 0.000 | Pos. económica | .151895 | 0.000 |
| Mujer ⁶ | .0505265 | 0.000 | Mujer | .0719367 | 0.000 |
| Ideología | .098329 | 0.000 | Ideología | .1664674 | 0.000 |
| _cons | 1.417548 | 0.000 | _cons | 2.018352 | 0.000 |

Parte variable:

| Random-effects Sanidad | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Sd(mujer) | .0277333 | .0136149 | .0105956 | .0725895 |
| Sd(_cons) | .1870381 | .0405136 | .122336 | .2859602 |
| Corr(mujer,_cons) | .6529668 | .4232319 | -.5820936 | .9769822 |
| Sd(Residual) | .5575253 | .0034252 | .5508521 | .5642792 |
| Random-effects Desempleo | Estimate | Std. Err. | [95% Conf. | Interval] |
| Sd(mujer) | .0304425 | .0203588 | .0082078 | .11291 |
| Sd(_cons) | .2648408 | .0571629 | .1734852 | .4043032 |
| Corr(mujer,_cons) | .1449298 | .5064039 | -.7002908 | .8209701 |
| Sd(Residual) | .7154131 | .0044525 | .7067394 | .7241932 |

*Para los dos modelos: Prob > chi² = 0.0000; Lrtest comparando con regresión OLS: Pr > chi² = 0.0000.

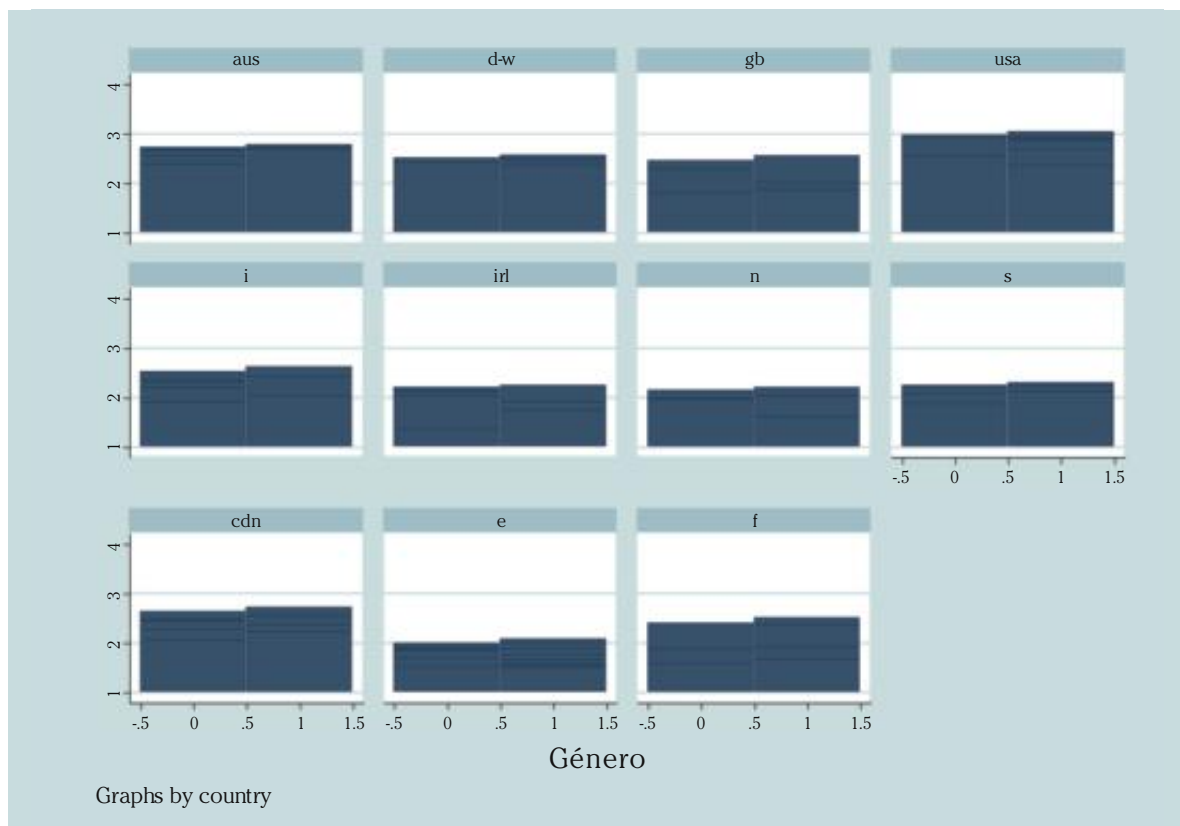
⁶ En estos modelos la variable mujer se ha recodificado para que el valor 0 corresponda a las mujeres en lugar de a los hombres. La diferencia entre poner a las mujeres el valor 0 o ponerlas el valor 1 (con lo que los hombres serían = 0) es irrelevante en cuanto a la interpretación de la parte fija del modelo. El coeficiente de la variable «mujer» sólo cambia de signo. Si antes nos decía que ser mujer estaba positivamente relacionado con apoyar el EB, ahora nos dice que ser hombre está negativamente relacionado con este apoyo. En la parte variable del modelo es donde nos resulta útil haberle dado la vuelta a las categorías de la variable. La correlación entre la constante y la pendiente de la recta de regresión (entre el apoyo medio y la fuerza de una variable para determinar las actitudes) se calcula para el valor 0 de la variable cuyo efecto dejamos que fluctúe de país a país. Cuando trabajábamos con fluctuaciones de la variable «posición económica relativa» o «ideología» calculamos esta correlación para distintos valores de esta variable. Queríamos ver si los países en los que las clases altas apoyan más el EB, eran también aquellos en los que la relación entre actitudes e ingresos era más fuerte, etc. En este caso lo tenemos más fácil ya que la variable que estudiamos ahora sólo tiene dos categorías: 1-hombre; 0-mujer. Si usamos la variable sexo con el valor 0 para los hombres, la correlación nos dirá si los países en los que los hombres apoyan más son también aquellos en los que la relación género-actitudes es más fuerte. Nuestra hipótesis dice lo contrario: que allí donde esta relación sea más fuerte las mujeres tendrán mayores niveles de apoyo al EB, y al incluir la variable género recodificada para que el valor 0 represente a las mujeres, el coeficiente de correlación se ajusta a la hipótesis: indica hasta qué punto el apoyo agregado de las mujeres al EB es mayor en un país cuando la relación género-actitudes es más fuerte.

En los gráficos siguientes podemos ver las diferencias actitudinales de hombres y mujeres que comparten la misma posición económica e ideológica, condicionantes necesarios si queremos ver el efecto real del género sin que terceras variables oscurezcan la relación. Los controles son aquí especialmente importantes porque sabemos que las mujeres tienen, de media, menos ingresos que los hombres, y son también más igualitarias que ellos. Si no controlamos por estas variables podríamos confundir el efecto del género con el efecto de los ingresos o el de los valores igualitarios/individualistas, algo que ya hemos tratado en el capítulo anterior.

Como en ocasiones anteriores, en el eje vertical de cada gráfica tenemos las respuestas a nuestras preguntas sobre si los programas de bienestar deberían o no deberían existir. La escala de este eje va de 1 a 4, siendo 1 la respuesta que implica más apoyo a la existencia del programa: «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno», y 4 la que implica más rechazo: «de ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno». Aunque los entrevistados debían escoger una de las 4 opciones de respuesta, en el gráfico tenemos una escala continua de 1 a 4 porque la regresión está hecha tomando a la variable dependiente como continua en lugar de ordinal. La altura de los bloques indica la media de las respuestas en cada país para hombres y mujeres por separado. Tomando como ejemplo el gráfico sobre actitudes hacia el desempleo vemos que, en España, la altura de los dos bloques está cercana al punto 2 del eje vertical, lo que indica que la opinión general de las mujeres y hombres españoles hacia la exis-

Gráfico 8.1.

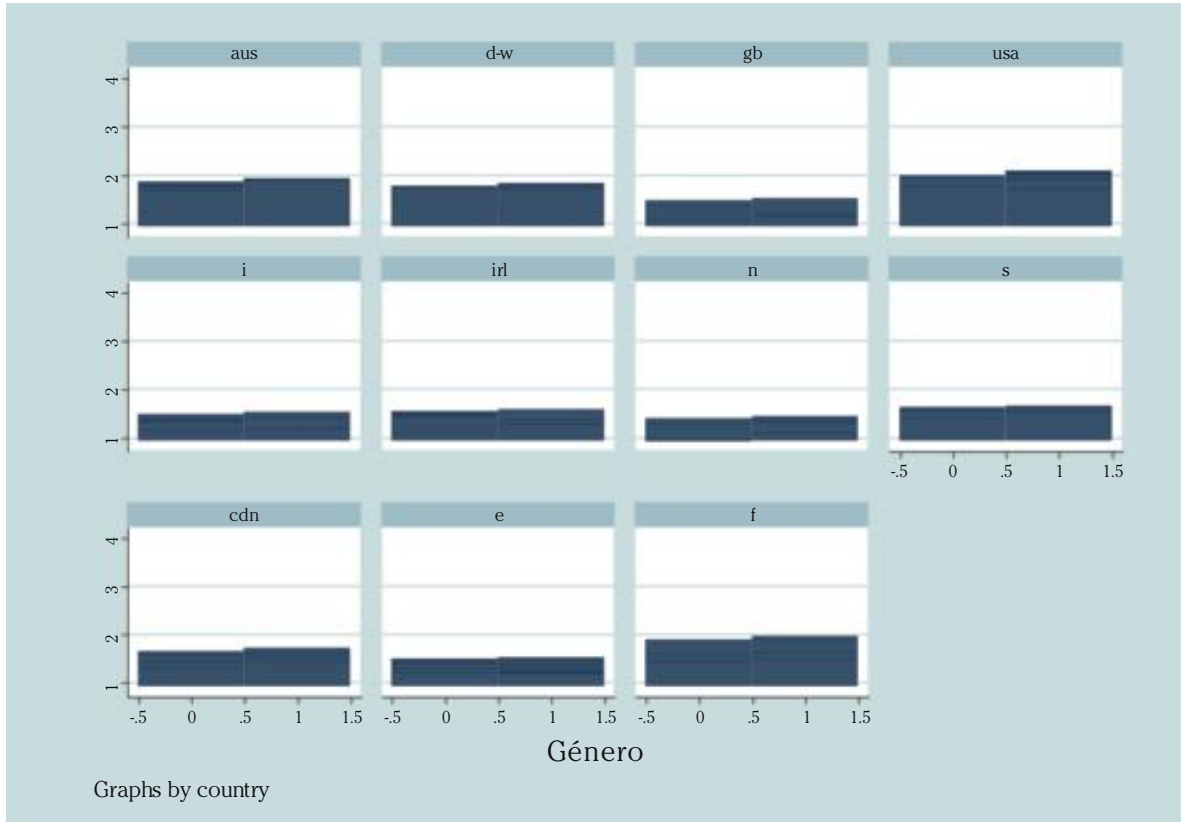
*Actitudes hacia la intervención del Estado en apoyo a los desempleados.
Hombres y mujeres con la misma ideología y la misma posición económica relativa*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Gráfico 8.2.

*Actitudes hacia la intervención del Estado en la provisión de sanidad.
Hombres y mujeres con la misma ideología y la misma posición económica relativa*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU, i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

tencia de programas desempleo es que estos «probablemente deberían ser responsabilidad del Gobierno». En el caso de EE.UU, la altura de ambos bloques sobrepasa ligeramente el punto 3 de la escala, reflejando que en este país la opinión general es que estos programas «probablemente no deberían ser responsabilidad del Gobierno».

En el eje horizontal tenemos dos bloques, el primero (a la izquierda) nos indica la opinión de los hombres, el segundo (extremo derecho del eje horizontal), la de las mujeres.

Dicho esto, un simple vistazo a los gráficos basta para ver que la «brecha de género» es más un saltito que un abismo y que existen pocas diferencias entre países en la amplitud de la misma. (El gráfico de pensiones no se presenta, ya que el modelo nos indicó que, si controlamos por ideología e ingresos, no había diferencias entre países en el efecto del género sobre las opiniones).

Aunque hay importantes diferencias entre países en lo que los ciudadanos, como conjunto, piensan acerca de las políticas públicas de sanidad y desempleo, dentro de cada país las opiniones de mujeres y hombres con similar ideología e ingresos son muy similares.

8.3. El efecto del género país a país

Para terminar, y por mantener una cierta coherencia con los procedimientos aplicados en los capítulos anteriores, podemos ver la relación entre género y actitudes sin condicionantes, esto es, comparando las actitudes generales de hombres y mujeres en lugar de las actitudes de hombres y mujeres con similares niveles de renta e igualitarismo. Dado que la variable género sólo tiene dos categorías, podemos prescindir de los gráficos.

Daremos un vistazo a las tablas de frecuencias para comprobar directamente qué son estas diferencias de las que estamos hablando y, como en seguida veremos que con las tablas de frecuencias nos perdemos entre números, construiremos índices de apoyo similares a los del capítulo 5 para facilitarnos la observación de pautas.

Vamos a empezar con una tabla de frecuencias múltiple que recoge las actitudes hacia la existencia de programas públicos de sanidad en los once países que estudiamos, para hombres y mujeres por separado.

Tabla 8.2.

Actitudes hacia los programas públicos de sanidad en once países, por sexo

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno la sanidad? | Noruega | | Suecia | | Alemania | | Francia | | Italia | | España | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 84.0 | 91.1 | 69.7 | 71.6 | 46.4 | 54.9 | 51.6 | 53.5 | 77.4 | 84.4 | 80.9 | 80.9 |
| Probablemente sí | 15.3 | 8.1 | 26.5 | 24.6 | 49.6 | 42.4 | 37.0 | 35.2 | 21.0 | 14.6 | 18.3 | 18.3 |
| Probablemente no | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 6.5 | 8.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| No, de ninguna manera | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| N | 685 | 642 | 607 | 582 | 1.147 | 1.146 | 752 | 525 | 530 | 569 | 1.186 | 1.272 |

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno la sanidad? | Irlanda | | Inglaterra | | Canadá | | Australia | | EE.UU. | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 72.1 | 77.0 | 80.3 | 82.7 | 56.2 | 67.5 | 39.0 | 45 | 34.6 | 41.7 |
| Probablemente sí | 26.9 | 22.2 | 17.9 | 16.1 | 37.0 | 27.5 | 54.4 | 49.7 | 46.9 | 45.5 |
| Probablemente no | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 4.9 | 3.5 | 5.7 | 5.2 | 13.8 | 10.0 |
| No, de ninguna manera | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 4.7 | 3.0 |
| N | 484 | 504 | 396 | 577 | 614 | 539 | 992 | 1.048 | 557 | 684 |

En estas tablas vemos fundamentalmente dos cuestiones:

1. En primer lugar, que la mayor parte de las diferencias se producen entre las dos casillas superiores, es decir, entre el «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno» y el «probablemente debería ser responsabilidad del Gobierno». Las mujeres son, en todos los países salvo en España, más propensas que los hombres a situarse en la opción de apoyo más fuerte, mientras que estos últimos destacan por su mayor presencia entre quienes son favorables a que el Gobierno se responsabilice de la sanidad, pero de forma más tibia. Las diferencias entre hombres y mujeres se dan por tanto en el grado en que unos y otras apoyan el programa público de salud, y no en que los hombres lo rechacen en mucha mayor medida que las mujeres.
2. En segundo lugar, vemos que estas diferencias oscilan entre los 2 puntos de Suecia y los 11 de Canadá, dejando de lado, por supuesto, la ausencia de diferencias por género en el caso español.

En estas tablas las diferencias son algo mayores que las que vimos en el gráfico anterior sobre el mismo tema (las actitudes de hombres y mujeres se representaban por bloques), pero hay que tener en cuenta que el gráfico es una medida más fiable de las mismas porque en él controlábamos por ideología e ingresos. Es decir, en él veíamos las diferencias de actitud entre hombres y mujeres con similar posición económica y que compartían los mismos valores.

Pero pese a la ausencia de controles, tampoco ahora parece haber relación entre el tipo de Estado del Bienestar al que cada país pertenece y las fracturas de género que existen en las opiniones sobre el mismo. Si restamos el porcentaje de mujeres que opina que «sin ninguna duda» la sanidad debería ser responsabilidad del Gobierno, del porcentaje de hombres que opina lo mismo, obtenemos los siguientes resultados:

Tabla 8.3.

Diferencia entre hombres y mujeres en el porcentaje que responde «sí, sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno dar asistencia sanitaria a los enfermos»

| Tipo EB | Socialdemócrata | | Conservador | | Conservador-mixto* | | Liberal-mixto | | Liberal | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----|-------------|----|--------------------|-----|---------------|-------|---------|-----|--------|
| | Nor | Sue | Alem | Fr | It | Esp | Irl | U. K. | Cdn | Aus | EE.UU. |
| Diferencia en puntos porcentuales | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 |

* Considerado por algunos un tipo de EB con entidad propia: el tipo Mediterráneo (ver Cap. 2).

Ya va siendo evidente que poco tiene que ver el tipo de EB con las actitudes de las mujeres hacia el mismo, y que por tanto mal pueden ser ellas las que expliquen la mayor legitimidad de los sistemas Socialdemócratas pero, puesto que la tabla anterior era metodológicamente poco recomendable (estábamos aislando una sola de las 4 opciones de respuesta que la pregunta tiene), vamos a terminar construyendo índices de apoyo a los programas públicos de sanidad, pensiones y desempleo, para hombres y mujeres por separado.

Estos índices no son más que una media ponderada de las respuestas a cada una de las preguntas, y ya les utilizamos en el capítulo 5 para hacer el «ranking» de países en función de la

legitimidad de sus Estados del Bienestar. La única diferencia entre estos y aquellos es que para los índices del capítulo 5 tomábamos las respuestas de toda la población de un país como un solo conjunto, y en los que aquí presentamos hemos calculado el índice de apoyo para los hombres por un lado, y para las mujeres por otro.

Además, para simplificar en lo posible la verificación de la hipótesis, hemos restado el índice de apoyo de las mujeres del de los hombres, con lo que lo que aparece en las tablas es la diferencia entre hombres y mujeres en el apoyo que muestran hacia cada uno de los tres programas de bienestar. En cualquier caso, si el lector tiene interés en ver al máximo detalle las diferencias entre hombres y mujeres en el apoyo a los programas de pensiones y desempleo, las tablas de frecuencias se encuentran en los Anexos 7 y 8.

Tabla 8.4. La brecha de género en las opiniones sobre los programas de bienestar*

Diferencia entre las respuestas de hombres y mujeres a las siguientes preguntas:

En general, cree Ud. Que debería ser responsabilidad del Gobierno: –proporcionar asistencia sanitaria a los enfermos; –garantizar un nivel de vida digno a los ancianos; –garantizar un nivel de vida digno a los desempleados.

| País | Sanidad | País | Pensiones | País | Desempleo |
|------|---------|------|-----------|------|-----------|
| USA | 14 | USA | 18 | F | 24 |
| CDN | 14 | F | 10 | GB | 18 |
| DW | 10 | DW | 9 | I | 16 |
| AUS | 8 | S | 9 | USA | 14 |
| I | 8 | CDN | 9 | S | 13 |
| N | 7 | GB | 9 | CDN | 12 |
| IRL | 5 | AUS | 8 | N | 9 |
| F | 4 | N | 6 | E | 7 |
| GB | 3 | I | 4 | DW | 6 |
| S | 1 | IRL | 3 | AUS | 6 |
| E | 0 | E | 1 | IRL | -2 |

Casillas sombreadas: chi2 para las diferencias entre hombres y mujeres >0.05⁷.

*Diferencia: (Índice de apoyo de las mujeres) - (Índice de apoyo de los hombres)

De las tablas anteriores deducimos básicamente dos cosas: Por un lado, que pese a la importancia que le ha dado la literatura sobre género y Estado del Bienestar a la existencia de intereses específicamente femeninos en los programas de bienestar, las diferencias entre las acti-

⁷ El que las diferencias entre hombres y mujeres sean o no estadísticamente significativas, es decir, sean o no trasladables a la población general no sólo depende de la magnitud de las diferencias observadas en la muestra sino, también, del tamaño de la misma. Esto explica que haya países con una diferencia similar en las actitudes de hombres y mujeres pero, que en un caso es significativa y en el otro no (Inglaterra y Canadá en el caso de las actitudes hacia las pensiones). O incluso que un país donde las diferencias entre las actitudes de hombres y mujeres son, al menos en las tablas de frecuencias, notables, estas no sean estadísticamente significativas (Canadá o EEUU en el caso del desempleo). Las muestras varían de tamaño de un país a otro pero, además, el porcentaje de No sabe/ no contesta, variable entre países y entre ítems del cuestionario, las reduce aun más.

tudes de hombres y mujeres son pequeñas en todos los países. EE.UU., en el tema de pensiones (18 puntos de diferencia entre el índice de apoyo de los hombres y el de las mujeres), y Francia en los referido a actitudes hacia el desempleo (24 puntos de diferencia en las escalas de apoyo) son los países que presentan una mayor brecha de género en las actitudes hacia los programas de bienestar, pero hay que tener en cuenta que a) estas diferencias están calculadas sin controlar por terceras variables, y b) estamos hablando de casos excepcionales. La mayoría de los países muestran diferencias mucho más moderadas.

Tabla 8.5.

Las mayores diferencias entre hombres y mujeres al opinar sobre los programas de bienestar

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los desempleados? | Francia | | ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno garantizar un nivel de vida digno a los ancianos? | EE. UU. | |
|---|------------|-------------|---|------------|-------------|
| | Hombre (%) | Mujeres (%) | | Hombre (%) | Mujeres (%) |
| Sin ninguna duda | 28,97 | 41,15 | Sin ninguna duda | 33,2 | 42,8 |
| Probablemente debería | 48,14 | 45,00 | Probablemente debería | 50,4 | 46,5 |
| Probablemente no debería | 16,41 | 100,00 | Probablemente no debería | 11,6 | 8,6 |
| De ninguna manera | 6,48 | 3,85 | De ninguna manera | 6,48 | 2,2 |

Además, entre los países que encabezan las tablas 8.4., que miden la amplitud de la brecha de género, no podemos apreciar ninguna pauta que relacione este hecho con el tipo de EB. Nuestra hipótesis, que esperaba encontrar la mayor distancia entre las actitudes de hombres y mujeres en los sistemas Socialdemócratas, se ve totalmente falsificada.

Por tanto, podemos concluir que la variación en el tamaño de las fracturas de género en apoyo al EB no sirve para explicar la variación internacional en legitimidad del mismo pero, saliéndonos ligeramente de este tema, no deja de ser interesante el que las mujeres sean más favorables a la existencia de políticas de bienestar que los hombres, y que esto ocurra tanto a nivel agregado (si comparamos la media de apoyo de las mujeres con la de los hombres), como al comparar hombres y mujeres que tienen los mismos ingresos y la misma ideología. Ya vimos que las dos explicaciones que se han barajado para la existencia de esta brecha actitudinal por género son:

1. Las mujeres son más favorables a la existencia de programas de bienestar porque les descargan de tareas de cuidado permitiéndoles entrar en el mercado de trabajo y porque, de media, tienen menos ingresos que los hombres. Dado que los programas de bienestar benefician más a aquellos con menos ingresos es lógico que encontremos más mujeres que hombres entre sus defensores.
2. Las mujeres apoyan más el EB porque son más igualitarias que los hombres. Dado que el igualitarismo está asociado al apoyo a la intervención estatal en bienestar, es también lógico que haya más mujeres que hombres que lo apoyen.

Por lógicas que sean ambas hipótesis, lo cierto es que nosotros, que hemos analizado tanto la relación agregada como la condicionada sabemos que no son suficientes para explicar las diferencias entre hombres y mujeres porque hemos visto que, incluso si comparamos mujeres y hombres con los mismos ingresos y la misma ideología (gráficos 8.1 y 8.2), las mujeres tienden a ser ligeramente más favorables que los hombres a la existencia de programas de bienestar.

Para explicar el que, incluso compartiendo los mismos valores igualitarios y los mismos ingresos, las mujeres sean algo más favorables al EB que los hombres, sólo nos queda la hipótesis del rol tradicional de la mujer, el rol de «cuidadora» que, aunque se ha asociado al igualitarismo, podría tener un efecto añadido. Es decir, podría ser que el igualitarismo de las mujeres, y su socialización en valores de cuidado al otro, sean cuestiones independientes y tengan, por tanto, efectos independientes sobre sus actitudes políticas. Para saber si esto es así no podemos proceder de la misma manera que en los análisis anteriores porque no tenemos en nuestra encuesta ninguna variable que nos indique la intensidad con la que hombres y mujeres comparten los valores de cuidador/a.

Lo que sí sabemos, gracias a encuestas centradas en actitudes hacia el rol de la mujer («Family and Changing Gender Roles II», ISSP, 1994) es que hay países donde se socializa a las mujeres en valores tradicionales en mayor medida que en otros, países en los que tanto hombres como mujeres consideran que las mujeres deben dedicarse al cuidado de sus familiares en lugar de entrar en el mercado de trabajo.

Una manera de ver si es el rol de cuidadora lo que subyace a las ligeras diferencias en apoyo al EB que encontramos entre hombres y mujeres es comparar la brecha de género en países en los que el rol de la mujer como cuidadora está muy extendido, con la que se produce en países donde la mayoría de la población (mujeres incluidas) ha dejado de ver este rol como deseable o adecuado. Vamos a tomar prestada la ordenación de países en función de la extensión de los valores tradicionales en la socialización femenina de un estudio previo de Walter Korpi (2000). La tabla siguiente se basa en el análisis de numerosas preguntas acerca del papel de la mujer, su rol en la familia, y los comportamientos que son adecuados o censurables por parte de las mismas⁸.

Tabla 8.6.

La extensión de valores tradicionales acerca del rol de la mujer (Korpi, 2000)

| PAÍS | Extensión de los valores tradicionales | PAÍS | Extensión de los valores tradicionales |
|------------|--|---------------------|--|
| Suecia | Bajo | Australia | Alto |
| Canadá | Bajo | Alemania (Oeste) | Alto |
| Noruega | Medio bajo | Italia | Alto |
| Inglaterra | Medio | Irlanda | Alto |
| EE. UU. | Medio | España ⁹ | Alto |

⁸ Las preguntas utilizadas por Korpi para establecer su clasificación de valores tradicionales respecto a la mujer son (algunas son frases sobre las que el entrevistado debe mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo): 1. *A working mother can establish just as warm and secure a relationship with her children as a mother who does not work*; 2. *A preschool child is likely to suffer if his or her mother works*; 3. *All in all, family life suffers when the woman has a full-time job*; 4. *A job is alright, but what most women really want is a home and children*; 5. *Being a housewife is just as fulfilling as working for pay*; 6. *Both the man and the woman should contribute to the household income*; 7. *A man's job is to earn money; a woman's job is to look after home and family*; 8. *Do you think that a woman should work outside the home when there is a child under school age?*; 9. *Do you think that a woman should work outside the home after the youngest child start school?*

⁹ España no estaba incluida en el estudio de W. Korpi pero, revisando las respuestas de los españoles a encuestas internacionales sobre roles familiares y la posición de la mujer en la sociedad, la podemos situar entre los países en los que la extensión de valores tradicionales respecto a las mujeres es alta.

Tabla 8.7. La brecha de género en las opiniones sobre los programas de bienestar

Diferencia entre las respuestas de hombres y mujeres a las siguientes preguntas:

En general, cree Ud. Que debería ser responsabilidad del Gobierno: –proporcionar asistencia sanitaria a los enfermos; –garantizar un nivel de vida digno a los ancianos; –garantizar un nivel de vida digno a los desempleados. Las respuestas a estas preguntas se han transformado en un índice de apoyo que va de 100 a 400 puntos.

| País | Val. Trad. | Sanidad | País | Val. Trad. | Pensiones | País | Val. Trad. | Desempleo |
|------|------------|---------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| USA | Medio | 14 | USA | Medio | 18 | GB | Medio | 18 |
| CDN | Bajo | 14 | DW | Alto | 9 | I | Alto | 16 |
| DW | Alto | 10 | S | Bajo | 9 | USA | Medio | 14 |
| AUS | Alto | 8 | CDN | Bajo | 9 | S | Bajo | 13 |
| I | Alto | 8 | GB | Medio | 9 | CDN | Bajo | 12 |
| N | Medio-bajo | 7 | AUS | Alto | 8 | N | Medio-bajo | 9 |
| IRL | Alto | 5 | N | Medio-bajo | 6 | DW | Alto | 6 |
| GB | Medio | 3 | I | Alto | 4 | Aus | Alto | 6 |
| S | Bajo | 1 | IRL | Alto | 3 | IRL | Alto | -2 |

Casillas sombreadas: chi2 para las diferencias entre hombres y mujeres > 0.05¹⁰.

*Diferencia: (Índice de apoyo de las mujeres) – (Índice de apoyo de los hombres).

La tabla 8.7 es idéntica a la que vimos antes, salvo por la adicción de una nueva columna que nos indica la extensión de los valores tradicionales sobre el papel de la mujer en cada país. Siguiendo la hipótesis de que el rol de «cuidadora» hace a las mujeres más partidarias de las políticas sociales, deberíamos encontrar que allí donde estos valores están más extendidos la brecha de género en las actitudes hacia el EB es también mayor.

Pero, sorprendentemente o no, nuestras tablas no confirman tal asunción. Es cierto que no hemos podido incluir en las tablas comparativas todos los países del estudio y que las conclusiones serían más firmes si aumentáramos la muestra de países pero, aunque sea a modo de aproximación, podemos decir que los datos no parecen confirmar la hipótesis anterior relativa a la transferencia de los valores de cuidadora en apoyo a los programas de bienestar. Y es que tal vez esta relación teórica entre cuidar de los familiares en la esfera doméstica y compartir los objetivos de cuidado institucionalizado que proveen los sistemas de bienestar no sea tan lógica como parecería a primera vista.

¹⁰ El que las diferencias entre hombres y mujeres sean o no estadísticamente significativas, es decir, sean o no trasladables a la población general no sólo depende de la magnitud de las diferencias observadas en la muestra sino, también, del tamaño de la misma. Esto explica que haya países con una diferencia similar en las actitudes de hombres y mujeres pero, que en un caso es significativa y en el otro no (Inglaterra y Canadá en el caso de las actitudes hacia las pensiones). O incluso que un país donde las diferencias entre las actitudes de hombres y mujeres son, al menos en las tablas de frecuencias, notables, estas no sean estadísticamente significativas (Canadá o EEUU en el caso del desempleo). Las muestras varían de tamaño de un país a otro pero, además, el porcentaje de No sabe/ no contesta, variable entre países y entre items del cuestionario, las reduce aun más.

El rol que los valores tradicionales asignan a la mujer es fundamentalmente un rol doméstico. Se aprecia la capacidad de la mujer para atender a sus familiares, para proporcionar un entorno agradable y dar cariño en el hogar, a la par que se asume que, para el trabajo fuera de casa, es más eficaz el varón y que, por tanto, el modelo de familia «natural» es el clásico «male breadwinner».

Si bien la Sociología ha criticado desde hace decenios la injusticia económica y social que el modelo supone para las mujeres, este hecho no tiene porqué ser percibido así por toda la población femenina. De hecho, hay que recordar que en las sociedades con valores tradicionales extendidos son hombres y mujeres, y no sólo hombres, quienes comparten estos valores, y que por tanto en ellos muchas mujeres pueden no percibir las ventajas de entrar en el mercado de trabajo, pueden no valorar el apoyo que los sistemas de bienestar suponen a tal fin, y quizás, en cierta medida, incluso desconfiar de que las tareas que les son «propias» se transfieran a instituciones públicas.

Estamos, por supuesto, en el campo de las suposiciones. Con los datos disponibles no podemos ofrecer una explicación sólida para la pequeña, pero generalizada, diferencia entre hombres y mujeres a la hora de opinar sobre el EB. Podemos decir, eso sí, que no tiene que ver con el tipo de EB bajo el que se vive, ni con diferencias en posición económica, ni con el grado de igualitarismo o rol de cuidadora que manifiestan las mujeres en mayor medida que los hombres. Quede esto por tanto, para el futuro.

Capítulo 9. Recapitulación (y un cabo suelto)

9.1. Resumen de resultados.

9.2. ¿Consenso sobre las políticas de bienestar o consenso político general?

9.1. Resumen de resultados

En los tres capítulos anteriores hemos analizado cómo se fracturan los consensos en torno a los programas de bienestar según la posición económica, la ideología y el género. Confirmamos que las fracturas económicas e ideológicas son distintas entre los países de nuestro estudio (significativamente distintas en términos estadísticos) y vimos la forma que tienen en cada uno de los once países, es decir, vimos cómo se comportan los distintos colectivos económicos e ideológicos frente a los programas de bienestar. Además, comprobamos que las mujeres son, en todos los países, más favorables a las políticas de bienestar que los hombres, aunque la distancia que les separa es pequeña.

El objetivo del análisis de las fracturas en los consensos no era meramente descriptivo. Nos interesaba ver si las actitudes hacia el EB se fracturan de forma distinta en cada país para, una vez demostrado esto, estudiar si la forma de las fracturas tiene relación con:

- a) El nivel de apoyo agregado que consiguen los programas de bienestar.
- b) El tipo de Estado de Bienestar.

Cada tipo de EB, ya lo sabemos, tiene un distinto nivel de legitimidad. Los EBs Socialdemócratas logran los porcentajes de apoyo más altos y los Liberales, los más bajos. Lo que estábamos estudiando en los anteriores capítulos sobre fracturas en los consensos es de dónde sale este superior apoyo que reciben los programas de bienestar en países Socialdemócratas, quiénes son los colectivos que, si viven bajo un sistema Socialdemócrata apoyan la existencia de programas de bienestar, pero no hacen lo mismo cuando viven bajo un sistema Liberal.

Saber esto no es el objetivo final de este trabajo pero sí es un paso imprescindible para responder a la pregunta que sirve como eje: por qué, y mediante qué vías, el tipo de EB está relacionado con el nivel de legitimidad del mismo.

Esquemáticamente, las respuestas que hemos encontrado a la lista de preguntas anteriores se pueden formular así:

1. Los once países estudiados tienen consensos hacia el EB fracturados de manera distinta. La posición económica, la ideología y el género (sobre todo las dos primeras) determinan, en todos los países, las actitudes de los ciudadanos hacia el EB. Las dos primeras variables tienen un funcionamiento distinto dependiendo del país, sin embargo, el género, funciona de la misma manera a lo largo de toda nuestra muestra. En prácticamente todos los países las mujeres son ligeramente más partidarias del EB, y la fuerza de esta variable no varía mucho de un país a otro: la distancia entre el apoyo de los hombres y el de las mujeres a los programas de bienestar es más o menos similar en todos los países.
2. A diferencia del género, la posición económica y los valores igualitarios o individualistas tienen un efecto significativamente distinto dependiendo del país hacia el que miremos. La forma de las fracturas económicas e ideológicas en los consensos varía entre países, y esta variación es lo suficientemente importante como para ser estadísticamente significativa (recordemos que estamos trabajando con la opinión de una muestra de cada país y que las conclusiones que extraigamos de la muestra han de pasar siempre por un test de significatividad para ver si son trasladables a la población general).

3. *Fracturas de ingresos y legitimidad (I)*: Existe una relación estadística entre tener el consenso poco fracturado por razones económicas y tener alto apoyo al EB. Es decir, en los países donde los programas de bienestar tienen más apoyo, el efecto de la posición económica sobre las actitudes es relativamente suave en comparación con el resto de países. Sin embargo, esta relación es débil. Si bien en los países Socialdemócratas, y en aquellos casos mixtos que presentan una gran legitimidad, las actitudes de los «ricos» y de los pobres están más cerca que en los países Liberales, las variaciones en la distancia que separa las actitudes de ricos y pobres son pequeñas, y no sirven para explicar la gran distancia en legitimidad que existe entre los EBs Socialdemócratas y los Liberales.
4. *Fracturas de ingresos y legitimidad (II)*: La hipótesis que manejábamos, tomada de Korpi, Palme, y Esping-Andersen, argumentaba que los países Socialdemócratas, caracterizados por el universalismo, la extensión, y la calidad de sus prestaciones, habían logrado alzar el apoyo de las clases medias y medias altas hasta los mismo niveles de las clases bajas, y que el apoyo «extra» que tienen, si los comparamos con los sistemas Liberales, proviene fundamentalmente de estas clases medias. Como acabamos de ver, la hipótesis no se mantiene. Aunque es cierto que las clases medias de los países Socialdemócratas son más favorables al EB que las de otros países, la distancia que separa sus actitudes de las de las clases bajas sigue siendo parecida a la que se da en otros lugares. Los EBs Socialdemócratas no han conseguido acercar del todo las opiniones de las clases sociales, pero lo que sí han hecho, y de ahí se deriva parte de la legitimidad extra que sus programas logran, es alzar el nivel de apoyo de todos los ciudadanos independientemente de su posición económica. Si comparamos Noruega con EE. UU., la diferencia más importante que vamos a ver no está en que en el primer país haya más consenso entre ricos y pobres, sino en que todos ellos tienen un nivel de apoyo mayor del que tienen los estadounidenses. No es sólo que los más ricos de Noruega apoyen la existencia de programas de bienestar más que los más ricos de EE.UU., es que también los más pobres de noruega apoyan el EB en mucha mayor medida que sus compañeros de desdicha estadounidenses. Estados Unidos ha logrado, más o menos como el resto de países, «alzar el nivel de apoyo de las clases altas hasta los niveles de las clases bajas», pero esta subida no es llamativa porque tampoco sus clases bajas se caracterizan por un apoyo entusiasta a los programas de bienestar. Hablando sólo de las fracturas económicas, el apoyo «extra» que obtienen los países nórdicos a sus programas de bienestar proviene, en parte, de las clases medias, pero en mucha mayor medida, de las clases medias-bajas y bajas. (Ver gráficos 6.4, 6.5 y 6.6.)
5. *Respecto al tema de las fracturas ideológicas*, también encontramos una correlación entre el nivel de apoyo que tiene el EB en un país y el efecto de la ideología sobre las actitudes hacia el mismo. En los países donde los programas de bienestar logran más apoyo las actitudes hacia los programas de igualitaristas e individualistas son más parecidas. Las actitudes hacia los programas de bienestar de los individuos que sustentan valores igualitarios respecto a cuestiones económicas son bastante similares a lo largo de los once países que estudiamos. En casi todos ellos este colectivo se caracteriza por tener unos porcentajes de apoyo a la existencia de programas de bienestar muy altos. En el caso de la ideología, los países que tienen alto apoyo al EB, fundamentalmente los de tipo Socialdemócrata, han logrado alzar el nivel de apoyo de los individualistas hasta niveles comparables a los de quienes sustentan valores igualitarios. ¿Por qué? Probablemente porque el EB es tan extenso, dedica tal intensidad de recursos y afecta tanto a la vida de todos, que ha perdido su carácter ideológico para ser percibido como una institución democrática más. Funcional,

cuestionable sin duda, pero de la que se habla usando los mismo criterios que para los Tribunales de Justicia, el Parlamento, etc. El que en estos sistemas masivamente legitimados no haya demasiadas diferencias ideológicas entre los ciudadanos al opinar sobre el EB indica que los programas de bienestar ya no son vistos como instituciones marginales para atender a los fallos del sistema, o como políticas caritativas para los más pobres, sino como instituciones centrales de una nación que atañen a todos.

6. Uniendo los resultados anteriores tenemos que: los EBs más legitimados se caracterizan por tener un alto nivel de apoyo a lo largo de la escala de ingresos y por tener pocas fracturas ideológicas. *La alta legitimidad de los sistemas de bienestar Socialdemócratas se construye por dos vías: 1. porque el sistema convence más tanto a los que tienen poca renta como a los mejor situados, y 2. porque consigue que los ciudadanos que ostentan valores individualistas no sólo no lo rechacen sino que lo apoyen.*

Pero podría ser todo al revés...

Pero podría ser todo al revés. Al fin y al cabo sólo hemos visto las opiniones de los ciudadanos sobre las políticas sociales y podríamos pensar que, en realidad, no es el tipo de EB lo que logra convencer a los mejor situados económicamente y al mismo tiempo lima las fracturas ideológicas, sino que esto es un efecto de la cultura nacional.

Hemos estado buscando en las fracturas ideológicas o de clase una explicación del nivel de apoyo al EB pero, si cambiamos causa por efecto, podría ser que estas pautas se dieran en general en ciertos países y nada tuvieran que ver con la forma de organizar los programas de bienestar, que estarían disfrutando de una legitimidad derivada de una cultura política marcada por el consenso. Vamos a dedicar unas pocas páginas a esta «inquietante» cuestión.

9.2. ¿Actitudes hacia el Estado del Bienestar o actitudes políticas en general?

La mejor manera de ver si las pautas actitudinales descritas en los capítulos 6, 7 y 8 son aplicables sólo a las políticas sociales o, por el contrario, son la manifestación de una cultura política más general, es aplicar el mismo análisis que hicimos para las actitudes hacia el Estado del Bienestar a otros ámbitos de la política.

Si las mismas pautas aparecen cuando trabajamos con otras actitudes, entonces estas no tienen que ver con el tipo de EB sino que se enraízan en sustratos más profundos. Si cuando estudiamos otras actitudes políticas las fracturas se comportan de forma distinta a como lo hacen con las opiniones hacia el EB, entonces podemos pensar que son una reacción a la manera en la que este se organiza, reparte las cargas y distribuye los beneficios.

Podríamos haber utilizado para esta comprobación prácticamente cualquier tema de los que se debaten en la esfera política pero, para tener un test especialmente duro, vamos a estudiar lo que opinan los ciudadanos de los once países sobre algo bastante relacionado con el Estado del Bienestar: la intervención del Estado en determinados sectores económicos considerados fundamentales.

Si la forma en que se estructuran las opiniones hacia el EB en cada país es similar a la estructura de las opiniones sobre otras intervenciones del Estado, entonces todo intento de relacionar el tipo de EB con las pautas que acabamos de ver pierde sentido, ya que se derivarían de una visión general del Estado y no de la organización de programas de bienestar concretos.

Si, por el contrario, la forma de los consensos hacia el EB no es igual que la que presenta el consenso en torno a otras intervenciones del Gobierno, tendremos una base sólida para afirmar que es en el propio sistema de bienestar donde debemos buscar la explicación de que unos países tengan consensos fracturados de distinta manera que otros y, por ello, mayor o menor apoyo agregado.

De entre las posibles intervenciones del Gobierno en la economía vamos a escoger dos para llevar a cabo los análisis: la intervención del Estado en el sector financiero por medio de la banca pública y la intervención en el sector energético vía la propiedad estatal de las compañías eléctricas.

Respecto a estas dos cuestiones, no nos interesa ver el porcentaje de apoyo que obtiene cada una de las propuestas, sino cómo se distribuyen los apoyos a las mismas entre los distintos colectivos de ingresos y entre gente con valores más igualitarios o más individualistas. Especialmente, si esta distribución refleja la que encontramos en el caso de la intervención del Estado en sanidad, pensiones y desempleo.

Comencemos viendo el comportamiento de los individuos más y menos igualitaristas ante la posibilidad de que el Estado intervenga en banca y electricidad.

Fracturas ideológicas en las opiniones sobre la intervención del Estado en banca y electricidad

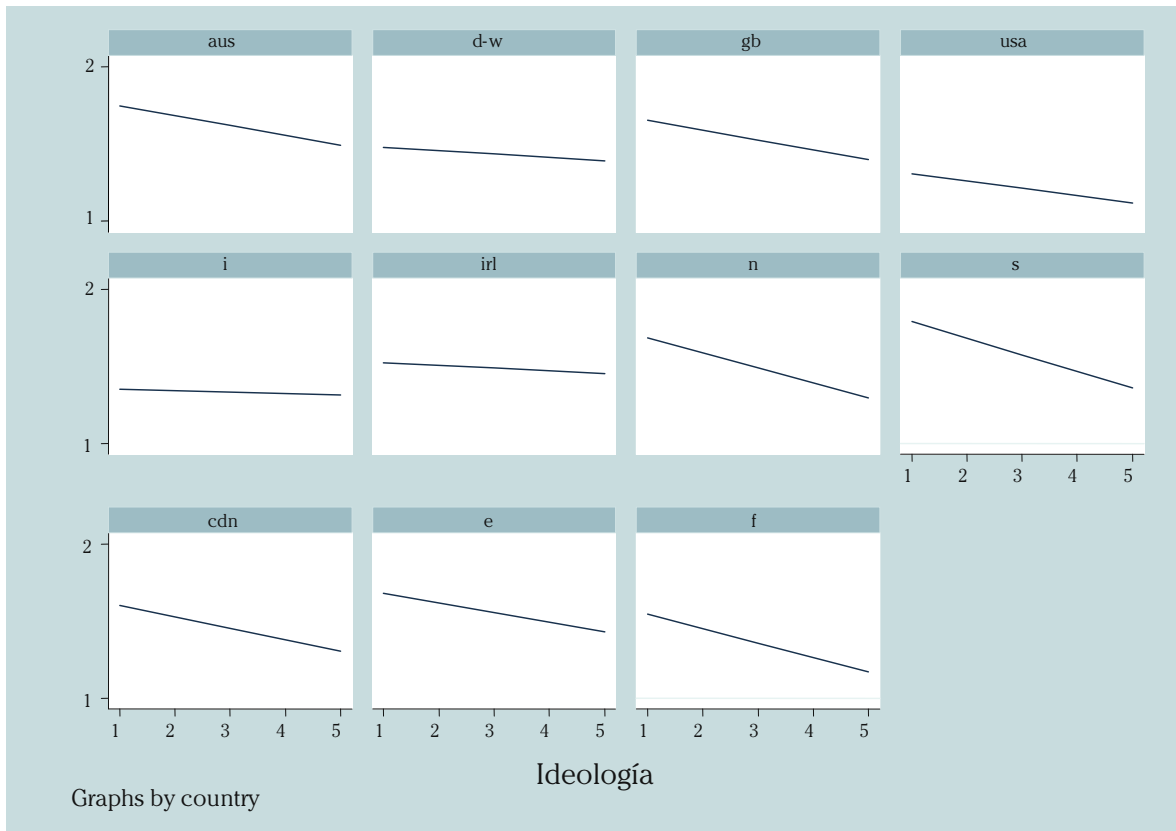
Miremos los gráficos 9.1 y 9.2. En ellos tenemos las opiniones de los ciudadanos hacia la intervención del Estado en temas energéticos (electricidad) y financieros (banca) en función de su grado de igualitarismo/individualismo.

—¿Cree usted que los siguientes servicios deberían ser gestionados principalmente por organizaciones privadas y empresas, o por el Gobierno?: Electricidad; Banca.

- 1. Gestionados principalmente por organizaciones privadas.*
- 2. Gestionados principalmente por el Gobierno.*

Gráfico 9.1.

Actitudes hacia la intervención del Estado en electricidad por ideología. Relación no condicionada



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Tanto en este gráfico como en el siguiente tenemos en el eje horizontal los valores de los individuos en el continuo igualitarismo-individualismo. En el punto 1 del eje horizontal están situados los más igualitarios, en el punto 5 los más individualistas. En el eje vertical figuran las respuestas a las preguntas recién enunciadas acerca de la intervención del Estado en banca y electricidad. El gráfico superior refleja las opiniones hacia la intervención del Estado en el sector eléctrico en función de los valores de los ciudadanos. Como podemos ver, el eje horizontal tiene una escala de 1 a 2. El 1 representa la primera opción de respuesta que se ofrecía a los entrevistados: el mercado debe ser responsable de estos sectores. El punto 2 representa la segunda de las opciones: el Estado debe intervenir en estos sectores y hacerse cargo de los mismos.

La línea que atraviesa el área de cada gráfico estará más cerca del 1, cuando la mayoría de los ciudadanos prefiere que el Estado no intervenga en el sector, y cerca del 2 cuando la mayoría opina que el Estado debe intervenir. En el caso de España, por ejemplo, la línea está más cerca del 2 cuando pasa sobre el punto 1 del eje horizontal, lo que indica que entre quienes comparten valores muy igualitarios, es mayoritaria la posición de que el Estado debe intervenir en electricidad. En este mismo país la línea se sitúa más cerca del punto 2 del eje vertical cuando pasa sobre el punto 5 del eje horizontal, lo que nos dice entre los individualistas, la mayoría prefiere dejar el sector eléctrico en manos del mercado.

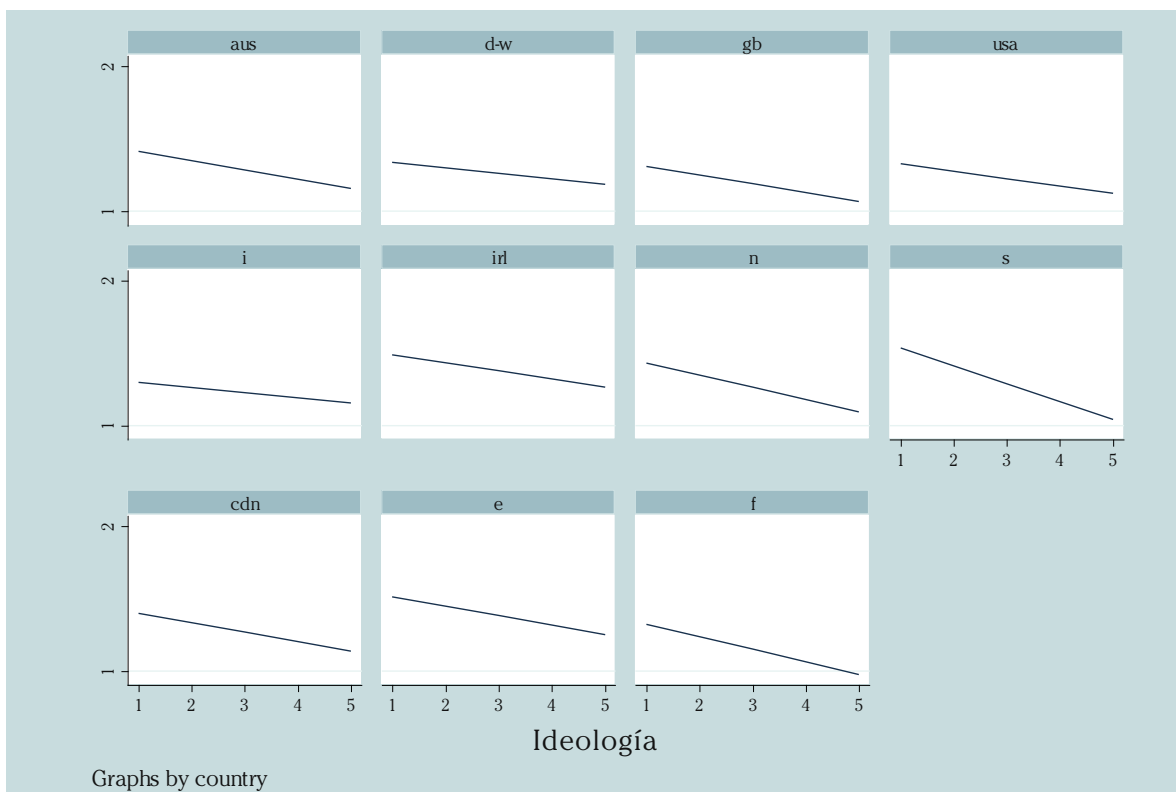
La pendiente o inclinación de las rectas cuando nos movemos de izquierda a derecha del área muestra el efecto que tiene la ideología sobre las actitudes hacia la intervención del Estado. Una mayor inclinación implica mayor distancia entre las actitudes de cada colectivo ideológico o, lo que hemos venido llamando una mayor fractura ideológica. Una línea casi plana refleja que la ideología no tiene un papel importante para determinar las actitudes hacia estas intervenciones, y que los colectivos de igualitarios e individualistas son parecidos en sus opiniones al respecto.

Con esta información es sencillo interpretar lo que los gráficos nos están diciendo. En el caso de la intervención del Estado en electricidad, los países que tienen mayores diferencias de opinión entre igualitaristas e individualistas son Noruega, Suecia y Francia. En el caso de sanidad y pensiones Noruega tenía una relación baja, Suecia media, y Francia fuerte.

Italia, Irlanda y Alemania se sitúan en el extremo contrario, ya que en ellos los valores igualitarios cuentan poco a la hora de determinar las actitudes de los ciudadanos hacia la intervención estatal en tema. En Italia e Irlanda los consensos en torno a la sanidad y las pensiones tampoco estaban fracturados por razones ideológicas pero no así en Alemania, país en el que las actitudes hacia estas dos políticas de bienestar sí dependían en una medida importante del grado de igualitarismo de los individuos. Estados Unidos, el país de los once estudiados donde el consenso en torno a las políticas sociales está más fracturado por cuestiones ideológicas, cambia totalmente de posición si las preguntas se refieren a otras intervenciones estatales: la relación entre ideología y actitudes hacia la intervención del Estado en electricidad es muy suave.

Gráfico 9.2.

*Actitudes hacia la intervención del Estado en banca por ideología.
Relación no condicionada*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EEUU, i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia

Podemos decir por tanto que la ordenación de países en función de la magnitud de sus fracturas ideológicas en actitudes hacia el EB no se mantiene cuando cambiamos el foco de estas actitudes a otras. Y ello pese a que no hemos ido muy lejos a buscar esas «otras» actitudes, quedándonos en el ámbito de las actuaciones del Estado. La misma conclusión se deriva del análisis del gráfico 9.2 sobre intervención en banca.

El gráfico 9.2 se interpreta de forma similar al anterior salvo por el tema. Ahora los entrevistados han de decidir si el Estado debería o no intervenir en el sector financiero. Países como España, Irlanda o Canadá, con escasas fracturas ideológicas en torno a la intervención del Estado en bienestar, tienen en este tema, bastante menos acuerdo entre individualistas e igualitaristas. El consenso entre unos y otros que se logra con la intervención del Estado en sanidad o pensiones desaparece cuando el objeto de la intervención es la banca.

Suecia y Noruega, países que pusimos como ejemplo de haber alzado el apoyo al EB de los individualistas hasta los niveles de los igualitarios, resultan especialmente llamativos, ya que en ellos los individualistas son un bloque cerrado y hostil a que el Estado vaya más allá de la intervención en bienestar entrando en el sector eléctrico o, como vemos ahora, interviniendo en el bancario. Si miramos la altura de la línea azul cuando pasa por el punto 5 del eje horizontal vemos que ésta casi corta a este eje, indicando que en estos países la práctica totalidad de los ciudadanos con valores individualistas cree que el Estado no debería intervenir en banca.

Por el contrario EE.UU., donde las opiniones hacia el EB se determinan en gran medida por la ideología, no destaca para nada por las fracturas ideológicas de las opiniones hacia otras intervenciones del Estado. Es, de hecho, uno de los países en los que las actitudes de igualitaristas e individualistas son más parecidas en lo que respecta a estos otros temas.

Fracturas económicas en las opiniones sobre la intervención del Estado en banca y electricidad.

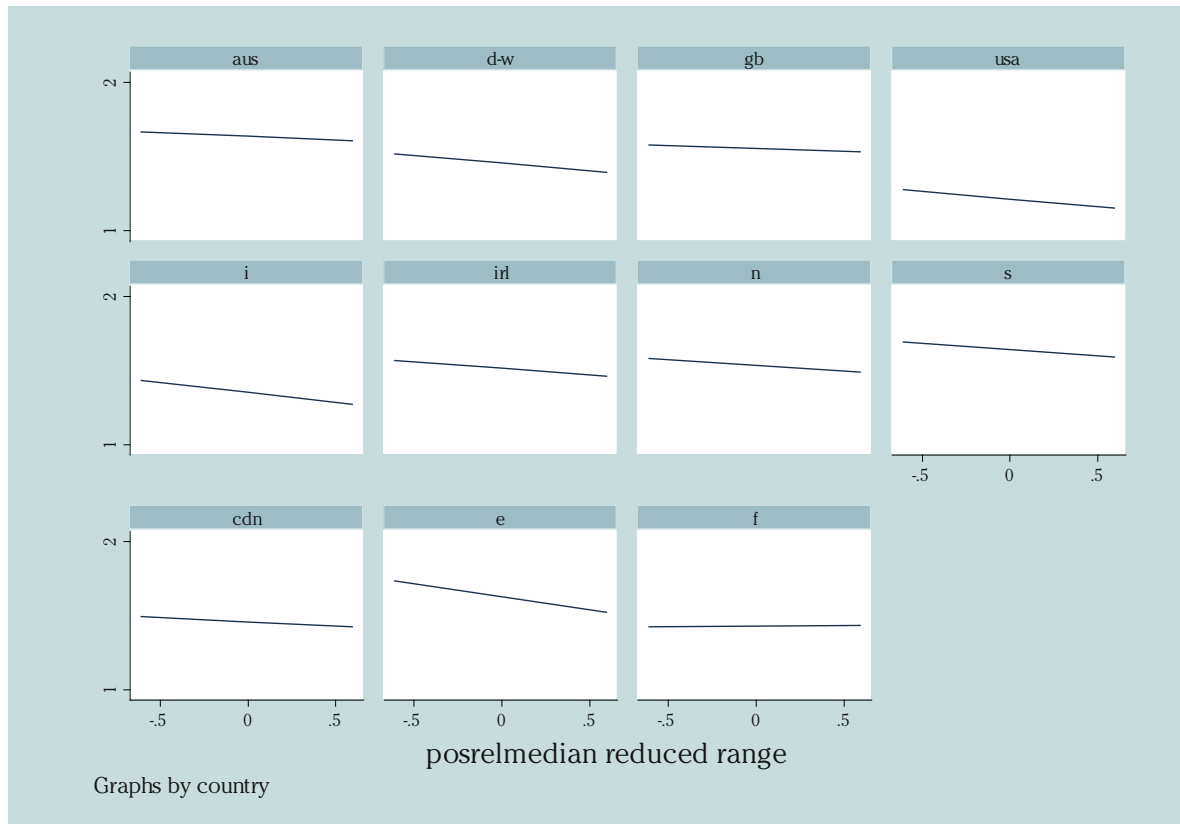
En cuanto a los ingresos, el panorama es similar. Los gráficos 9.3 y 9.4 muestran que el hecho de que en algunos países los ciudadanos con mejor situación económica apoyen la existencia del EB no implica que mantengan este apoyo hacia cualquier otra intervención estatal.

Estos gráficos se interpretan de forma similar a los anteriores aunque, ahora, en el eje horizontal no tenemos los valores de los individuos sino su posición económica relativa. A la derecha, sobre el punto (-0.5), están aquellos con ingresos iguales o inferiores al 50% de la mediana nacional. A la izquierda, sobre el punto (0.5), están quienes tienen rentas iguales o superiores al 150% de la mediana.

En los gráficos podemos ver como España, uno de los países con mayor consenso Inter-clases en lo referido a bienestar, es también el país con mayores diferencias por clase si preguntamos por la intervención en Electricidad o Banca. Y Francia, uno de los países con menor consenso Inter-clases en torno a la intervención en bienestar, muestra sin embargo pocas diferencias de opinión en función de los ingresos en lo referido a estas otras modalidades de intervención estatal.

Gráfico 9.3.

*Actitudes hacia la intervención del Estado en electricidad por situación económica relativa.
Relación no condicionada*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

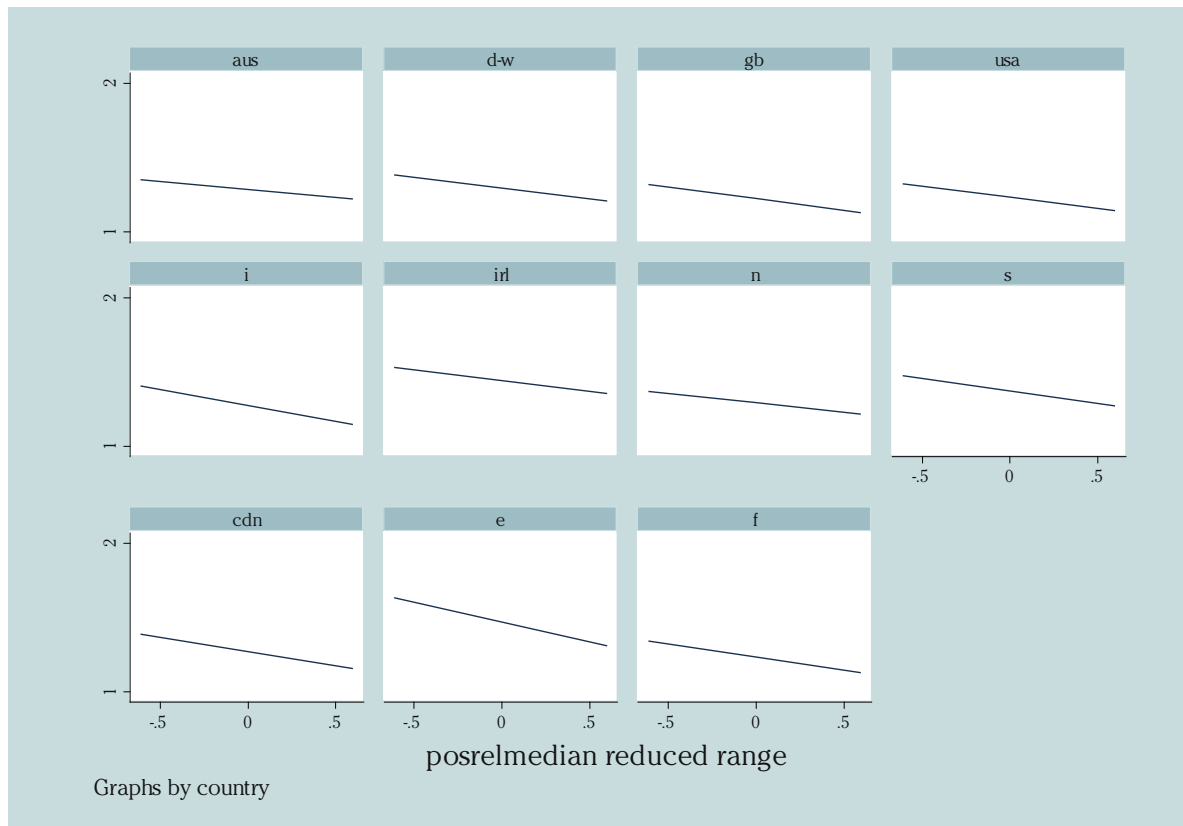
Los países con más y menos efecto de los ingresos sobre las actitudes hacia la intervención del Gobierno en electricidad no se corresponden con aquellos que mostraban más y menos efecto de esta variable sobre las actitudes hacia los programas de bienestar.

En Inglaterra, Francia y Canadá la posición económica del individuo apenas marca diferencias en las opiniones sobre este tema. En temas de sanidad Canadá tampoco mostraba diferencias entre las opiniones de gente con distintos ingresos, pero Inglaterra tenía una relación suave y Francia moderada. Al hablar de pensiones, Canadá mostraba una relación baja entre la posición económica y las actitudes, y Francia e Inglaterra tenían una relación fuerte.

En el otro extremo, España e Italia, caracterizados por su abrumador consenso Inter-clases en torno a sanidad y pensiones públicas, son los lugares en los que los ingresos determinan más las actitudes hacia la intervención del Gobierno en el sector eléctrico. El resto de países muestra un comportamiento intermedio y bastante similar entre ellos.

Gráfico 9.4.

Actitudes hacia la intervención del Estado en banca por situación económica relativa. Relación no condicionada



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU, i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Un panorama similar nos encontramos al preguntar por la intervención en banca: los países en los que las fracturas económicas en el consenso son más pronunciadas no se corresponden con aquellos que destacaban por lo mismo al hablar de los programas de bienestar.

Cabe concluir, por lo tanto, que las pautas actitudinales vistas en los capítulos 6 (fracturas económicas) y 7 (fracturas ideológicas) son aplicables sólo a las políticas de bienestar, y no dependen ni de la cultura política nacional ni de la existencia de una actitud favorable o contraria a la intervención del Estado en general. Son pautas que existen para las opiniones hacia el Estado del Bienestar y que, por tanto, es en función de esta institución como deberían poder explicarse.

Sabemos que el tipo de EB correlaciona con el apoyo agregado al mismo y con la forma en la que se fracturan los consensos en torno a la existencia de programas de bienestar. Vimos que los países en los que hay más apoyo son también aquellos donde existen menos fracturas ideológicas en las opiniones sobre los programas de bienestar. Y que, aunque en estos EBs más legitimados no se ha conseguido eliminar las diferencias de opiniones entre individuos con distintos niveles de renta, sí se ha logrado aumentar el nivel de apoyo de todos ellos. Las diferencias entre clases persisten, pero la base sobre la que se producen es más alta.

Lo que nos falta ahora es saber porqué unos sistemas generan estas dinámicas y otros no. Mediante qué mecanismos las características de los programas de bienestar crean distintas fracturas en el apoyo hacia los mismos y, con ello, distinto nivel de apoyo agregado.

Podemos, claro está, referirnos sin más al tipo de Estado del Bienestar, ya que sabemos que tipo de EB, nivel de legitimidad y forma de las fracturas en los consensos van ligados. Pero esta siempre sería una explicación parcial porque la definición de cada tipo de EB contiene muchas variables: cuestiones históricas sobre la fundación del sistema, indicadores de gasto, niveles de cobertura, modos de financiación, tasa de reemplazo de las prestaciones, criterios de acceso a las mismas... El tipo de Estado del Bienestar es un concepto enormemente útil (y sólo así se puede explicar su éxito), pero también es, en palabras de Fraile y Ferrer (2004) una «caja negra». Una caja negra que incluye multitud de variables porque, como vimos en el capítulo 1, el que dos países se clasifiquen dentro del mismo tipo de EB implica que comparten no una, sino muchas de las características de sus programas de bienestar. ¿Cuáles de ellas están relacionadas con la legitimidad? ¿Qué características en concreto de los programas de bienestar activan las dinámicas que permiten tener más apoyo popular? ¿Qué hay detrás de la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad? El siguiente capítulo pretende responder a estas preguntas y, con ello, poner fin al análisis de datos.

Capítulo 10. Características de los programas y apoyo popular

10.1. Objetivo del análisis.

10.2. Aspectos a comparar y fuentes de información.

10.2.1. Aspectos a comparar.

10.2.2. Fuentes de información.

10.3. Comparación de los programas públicos de sanidad.

10.3.1. Indicadores

10.3.2. Características asociadas a la legitimidad.

10.4. Comparación de los programas públicos de pensiones.

10.4.1. Indicadores.

10.4.2. Características asociadas a la legitimidad.

10.5. Comparación de los programas públicos de desempleo.

10.5.1. Indicadores.

10.5.2. Características asociadas a la legitimidad.

10.6. Conclusiones.

10.1. Objetivo del análisis

–No soy más que... una..., una niña –dijo Alicia con cierta vacilación, pues se acordaba de las numerosas transformaciones por las que había pasado aquel día.

–¿Qué me voy a creer yo ese cuento! –respondió la Paloma con el más profundo desprecio–. He visto montones de niñas con estos ojos que te están mirando, ¡y ninguna tenía un cuello como ése! ¡No, no! ¡Eres una culebra, y de nada te servirá negarlo! ¡Si aún intentarás decir que nunca has comido huevos!

–Bueno, huevos sí he comido –dijo Alicia, que siempre decía la verdad–; pero es que las niñas comen huevos, igual que las serpientes, ¿no lo sabía?

–¿No lo creo! –negó la Paloma–. Pero si así fuera... ¡Ea! ¡No son más que una especie de culebras!

LEWIS CARROLL, *Alicia en el país de las Maravillas*

Es habitual oír que en investigación no existen los resultados «negativos» porque tan importante es verificar una hipótesis como saber que esta es errónea, pese a lo cual para la moral de quien la lleva a cabo suele ser más beneficioso encontrar que sus hipótesis se cumplen, al menos en cierta medida.

Creo que esto es lo que ha ocurrido desde que diseñamos las hipótesis hasta ahora que estamos a punto de cerrar el análisis: no todas las hipótesis se han cumplido pero, con los datos presentados, el pequeño modelo teórico que elaboramos en el capítulo 3 ha quedado más reforzado que dañado.

En primer lugar, hemos demostrado que existe variación internacional en actitudes hacia el EB, que esta variación correlaciona con la clasificación de Estados del Bienestar, y que se mantiene estable incluso cuando controlamos por la ideología, la posición económica y el sexo del individuo (capítulo 5). Los ciudadanos que viven bajo regímenes de bienestar socialdemócratas son, independientemente de estas características, más favorables a la existencia de programas de bienestar que quienes viven bajo regímenes conservadores, y estos más favorables que aquellos pertenecientes a países liberales. Por tanto, la relación entre tipo de EB y legitimidad no parece ser espuria aunque, estrictamente hablando, uno nunca puede estar seguro de haber controlado todas las variables que podrían intervenir (Goldthorpe, 2001; Arjas, 20001).

En los capítulos 6, 7 y 8 estudiamos la composición de los consensos en torno a los programas de bienestar prestando especial atención al tipo de EB para ver mediante qué vías los programas socialdemócratas conseguían un apoyo agregado tan alto. Según nuestros análisis, los programas socialdemócratas logran más apoyos que los conservadores y liberales porque consiguen, en mayor medida que los conservadores y en mucha mayor que los liberales: 1) acercar la posición de clases bajas y medias; 2) aumentar el nivel de apoyo de las clases medias, pero también de las bajas; 3) no ser rechazados por los ciudadanos con ideología individualista en lo económico. Estas pautas cumplen nuestras expectativas acerca del efecto que las instituciones tienen sobre las opiniones de los ciudadanos y verifican la mayoría de las hipótesis que detallamos en el capítulo 3.

Sin embargo, no hemos terminado de confirmar el argumento fundamental del marco teórico: que las diferencias en las fracturas de los consensos nacionales sobre el Estado del Bienestar están causadas porque el sistema es más integrador en unos países que en otros.

Hasta ahora hemos utilizado el tipo de EB como «proxy» de la integración porque sabemos que el tipo Socialdemócrata es el que organiza sus programas de forma más integradora, el Conservador algo menos, y el Liberal bastante menos. Haciendo esto, la pauta que encontramos es exactamente la prevista, pero al identificar el «tipo de EB» con el grado de integración estamos dando un salto demasiado largo. Aunque es verdad que la integración es diferente en cada tipo de EB, muchas otras características de los programas de bienestar también difieren, por ejemplo, la extensión de la maquinaria estatal (gasto público en % PIB), el esfuerzo que la economía dedica a bienestar (en porcentaje del gasto social sobre el PIB), el efecto del Estado del Bienestar sobre las desigualdades¹, la cantidad de personas vinculadas laboralmente a los programas de bienestar, la cobertura legal de los programas (no confundir con integración real), o la extensión de la intervención estatal en bienestar (cantidad de necesidades cubiertas por los programas públicos).

La relación que cualquiera de estas variables mantiene con el tipo de EB es la misma que encontramos para la integración: los valores más altos se dan en el tipo Socialdemócrata, el tipo Corporativo presenta valores intermedios, y los países encuadrados en el tipo Liberal muestran valores bajos. Por tanto, cualquiera de ellas podría generar las dinámicas que llevan a la legitimidad.

Dada la existencia de variables competitivas, confirmar nuestras hipótesis requiere estudiar el efecto de la integración del sistema de bienestar controlando por otras características, para lo cual el método comparativo sigue siendo nuestra mejor baza. Como afirma Sartori y hemos aplicado a lo largo de todo el trabajo:

What is the specific reason for being on a comparative route to knowledge? What are comparisons for? Against the loss of purpose that appears by now to dominate the field, let a purpose be forcefully reinstated, namely, and to repeat, that comparing is controlling. To be sure, one may engage in comparative work for any number of reasons; but one is under no obligation to compare (seriously) unless the reason is control» (Sartori, 1994, p. 16).

Para saber, por ejemplo, que no es el nivel de gasto lo que se esconde detrás de las dinámicas que llevan a la legitimidad, es preciso comparar sistemas de bienestar muy integradores pero de bajo gasto (como España), con sistemas integradores de alto gasto (Noruega), con sistemas que no son integradores pero gastan mucho, aunque sólo en unos colectivos (sanidad EE.UU.).

Evidentemente, no tenemos suficiente variedad de sistemas de bienestar para llevar a cabo este análisis, pero sí contamos con mucha variedad de programas porque, al estar trabajando con la sanidad, pensiones y desempleo de 11 países, podemos hablar sobre 33 programas de bienestar.

¹ Kangas, 1991; Korpi, 2000.

La mezcla de características de los 33 programas hace que, trabajando al nivel de los programas y no de los sistemas, podamos intentar un análisis del efecto de la integración del programa sobre su legitimidad a la vez que imponemos controles por otras variables.

Esto es precisamente lo que haremos a lo largo del capítulo 10. En él la unidad de análisis ha dejado de ser el individuo y sus opiniones (a las que ya hemos dado suficientes vueltas), para ser el programa de bienestar y sus características. Y si conseguimos encontrar que, pese a controlar por otras variables, la integración del programa correlaciona con la legitimidad del mismo, podremos cerrar este trabajo afirmando haber encontrado datos que apoyan nuestro marco teórico acerca de la legitimidad de las instituciones de bienestar.

10.2. Aspectos a comparar y fuentes de información

10.2.1. Aspectos a comparar

Un programa de bienestar tiene multitud de aspectos, por lo que es posible emprender su comparación desde muchos enfoques. Los tres criterios básicos que hemos tomado para restringir la selección de aspectos con los que vamos a trabajar son: 1) que exista información homogeneizada sobre el tema; 2) que haya variación entre países; 3) que pueda establecerse una relación teórica entre esa característica de los programas de bienestar y las actitudes que los ciudadanos desarrollan ante el mismo. La justificación de estos criterios es la siguiente:

Comparabilidad

Aunque existen innumerables datos sobre los programas de bienestar a nivel nacional, no nos sirven de mucho porque son muy heterogéneos tanto en lo que miden como en la forma en que se calculan (Dogan, 1994; Desrosières, 1996). Para un estudio comparado como el nuestro necesitamos bases de datos con información homogeneizada para los 11 países y estas son, por un lado más escasas, y por otro más reducidas en cuanto a la variedad de indicadores que presentan.

Por lo tanto, el primer criterio para elegir conforme a qué aspectos compararemos los programas ha sido totalmente pragmático: que existan indicadores para todos los países que estudiamos, y que se encuentren homogeneizados.

Variación

De las características que pueden tener que ver con las actitudes, seleccionamos aquellas que varían entre países, ya que es imposible que una cosa que todos los Estados de Bienestar comparten venga a explicar las diferencias en apoyo popular.

The question always is: comparable with respect to which properties or characteristics, and incomparable (that is, too dissimilar) with respect to which other properties or characteristics? (...) to compare is both to assimilate and to differentiate to a point. If two entities are similar in everything, in all their characteristics, then they are the same entity – and that is that. If, on the other hand, two entities are different in every respect, then their comparison is nonsensical – and that is again that. The comparison

in which we sensibly and actually engage are thus those between entities whose attributes are in part shared (similar) and in part non-shared (and this, we say, incomparable). (Sartori, 1994, p. 17).

Hipótesis sobre la relación

Entre la información comparada que existe sobre los programas de bienestar (que, francamente, en bastante limitada), elegiremos aspectos de los mismos que puedan relacionarse de manera teórica con las opiniones de los ciudadanos. No se trata de «alimentar al ordenador» con todos los indicadores disponibles para ver si alguno muestra relación con las actitudes, sino de verificar determinadas hipótesis fundamentadas en el conocimiento existente sobre los dos fenómenos que nos interesan: los sistemas de bienestar por un lado y las actitudes de los ciudadanos por otro.

Con las limitaciones impuestas por estos criterios, cinco aspectos nos parecen especialmente interesantes para establecer la comparación: 1) la extensión del programa; 2) su integración real; 3) el coste percibido; 4) la intensidad de los recursos (o el esfuerzo económico que supone el mantenimiento del programa para el país); 5) la extensión del edificio de bienestar en el que se integra. Los comentaremos uno a uno:

1. Extensión del programa

Nos referimos a la extensión de las necesidades cubiertas por el programa dentro del campo de su actuación. Por ejemplo, un programa de sanidad puede cubrir sólo la asistencia hospitalaria pero no la atención primaria (caso de Irlanda); un programa de desempleo puede dar sólo prestaciones económicas, o establecer además una red de formación e inserción para desempleados.

La extensión de las necesidades cubiertas por el sector público está en relación directa con las teorías que explican la legitimidad de los Estados del Bienestar por la creación de grandes colectivos con un interés directo en los mismos, y por las alianzas sociales que se construyen así en defensa del mantenimiento de las intervenciones estatales (capítulo 3). Se espera que cuanto más extensa sea la intervención pública en un área, más personas se verán ligadas al programas de bienestar como usuarios, aumentando correlativamente las actitudes favorables a su mantenimiento.

2. Integración del programa

La integración no es la cobertura legal de un programa sino la cobertura real. En el caso de la sanidad sería el porcentaje de ciudadanos que utilizan la red pública como principal provisión de servicios sanitarios. En el caso de las pensiones o el desempleo, nos referimos a cuánta gente basa en el sistema público sus expectativas de mantener un nivel de vida adecuado en caso de jubilación o pérdida del trabajo.

La relación con las actitudes se basa, igual que en el caso de la extensión del programa, en la asunción de que el interés económico en un programa de bienestar es uno de los principales determinantes de las opiniones sobre el mismo, y se espera que el apoyo a la existencia de un

programa de bienestar aumente cuanto mayores sean los colectivos vinculados a los programas, y cuanto mayor sea su vinculación.

En temas de integración es especialmente importante analizar el comportamiento de las clases medias y medias-altas, dado que cuentan con la posibilidad económica de salir del sistema público cuando lo que este les ofrece no les parece adecuado. La vía para mantener a estos colectivos dentro del sistema, y lograr altos niveles de integración, es ofrecer servicios de alta calidad, y prestaciones relacionadas con los ingresos previos del individuo

3. Intensidad de los recursos (o esfuerzo de la economía en el programa)

El porcentaje de gasto público que se destina a una partida de bienestar es un buen indicador del esfuerzo que el país hace para mantener un programa de bienestar, y un indicador algo menos bueno, aunque profusamente utilizado, de la cantidad de recursos que se están dedicando o «intensidad» del programa.

El problema de utilizar el gasto en porcentaje del PIB para medir la cantidad de recursos destinados a una partida radica en que esta medida no depende sólo de cuanto se gasta, sino también del tamaño del propio PIB: los países con PIB elevado y poca población (Luxemburgo) pueden mantener sistemas de sanidad o pensiones perfectamente dotados de recursos sin dedicar un alto porcentaje del PIB a su financiación. En nuestro caso, esta cuestión no reviste gravedad porque los once países con los que trabajamos son bastante similares (están entre los países «ricos» de la OCDE), pero desde luego conviene tener en cuenta que el indicador no es perfecto.

Pero además de problemas, utilizar el gasto como porcentaje del PIB tiene ventajas. La mayor de ellas es que manejamos una medida de la intensidad del gasto relativa a la capacidad de la economía nacional, es decir, una medida del esfuerzo que un país hace para mantener un determinado programa de bienestar.

Cuando hablamos del efecto que puede tener la cantidad de recursos que se destinan a un programa de bienestar es fácil olvidar que los criterios para valorar lo que son servicios de alta calidad, o de baja calidad, dependen en parte de cuánto perciben los ciudadanos que el Gobierno está en disposición de ofrecer, lo que dependerá tanto de la riqueza del país como de las circunstancias que la economía esté atravesando. Por ejemplo, en un país que sufre un periodo de elevado desempleo los ciudadanos pueden considerar aceptables prestaciones de bajo nivel, al considerar que el Estado no puede hacer más esfuerzo en la protección a los desempleados del que ya hace. Igualmente, el envejecimiento de la población podría moderar las expectativas de los ciudadanos respecto a qué es una pensión adecuada, y podríamos encontrar que en países con tasas de reemplazo muy distintas, pero con porcentajes de población mayor de 65 años también distintas, existen los mismos niveles de apoyo al programa público de pensiones.

Por esto pensamos que utilizar el gasto en cada partida como porcentaje del PIB tiene más ventajas que inconvenientes, ya que nos ofrece una medida de la cantidad de los recursos que cada país destina a un programa ponderada por su capacidad. Nos servirá tanto para ver cuánto se gasta, como para conocer el esfuerzo que a cada país le supone mantener los programas.

4. Coste percibido

Ya comentamos que un programa puede suponer un buen *trade-off* para el ciudadano, pero ser rechazado por tener unos costes muy visibles que oscurezcan la bondad del intercambio impuestos-prestaciones. Hasta aquí hemos hablado del interés como principal determinante de las actitudes hacia el Estado del Bienestar, pero casi siempre en referencia a lo que los ciudadanos reciben y sin mencionar que también se paga vía impuestos y contribuciones.

Dedicar un alto porcentaje de los ingresos a financiar el Estado del Bienestar podría enfriar las opiniones favorables hacia el mismo, por lo que vamos a incluir, para todos los programas, el porcentaje del salario que destina a impuestos y contribuciones sociales una familia de renta baja, media, y alta. Lo ideal sería incluir el coste que para los ciudadanos tiene cada uno de los programas por separado, pero ni tenemos este dato, ni creemos que los ciudadanos tengan tan claro qué parte de sus impuestos se destina a cada partida².

5. Pertenencia a un edificio de bienestar

Aunque los estudiamos separadamente por requerimientos del análisis, y aunque la gente tenga distintas opiniones sobre cada uno de ellos, los programas de bienestar no son mónadas aisladas sino elementos integrados en un sistema de bienestar más amplio.

En el capítulo 3 vimos algunas teorías sobre cómo el tamaño de las burocracias estatales pueden influir en la legitimidad de los sistemas de bienestar (King, 1987; Gundelach, 1994; Pierson, 1993), y cómo con el paso del tiempo una institución podría modelar los valores de los ciudadanos para que coincidan con los que la sustentan (Svallfors, 2000; Andreß & Heien, 2001). Sobre esta base, resulta interesante ver si parte del apoyo que un programa de bienestar recibe no se lo debe a sí mismo, sino a la extensión del edificio en el que está inserto. La expectativa de los teóricos anteriores es que cuanto mayor sea el Estado del Bienestar, mayor será el contingente de burócratas leales y más peso tendrá para influir en los valores compartidos por la sociedad. Siguiendo a Kangas (1991) incluiremos en los modelos para los tres programas de bienestar, el porcentaje del PIB que se dedica a gasto social como indicador del «tamaño» del edificio de bienestar.

Dependiendo del programa, los indicadores que usaremos para los tres primeros aspectos varían y los detallaremos en los apartados correspondientes, pero para medir el coste percibido del programa y la extensión del edificio de bienestar utilizaremos, en los tres casos, los mismos datos. En la tabla siguiente podemos ver cómo varían entre países:

² Un estudio realizado hace unos años en Inglaterra trataba de valorar el conocimiento que los ciudadanos tienen de asuntos políticos. La base del mismo fue una encuesta en la que, entre otras cosas, se pedía a los entrevistados que señalaran las partidas en las que el Estado gastaba más y menos dinero (seguridad social, sanidad, educación, defensa, policía, ayuda a la industria, vivienda y ayuda exterior), y cuáles eran los programas de la seguridad social que absorbían un mayor/menor porcentaje de los recursos de la misma (pensiones, ayudas por hijos, ayudas a discapacitados, desempleo y ayudas a familias monoparentales).

Comparando las opiniones de los ciudadanos con los datos reales de gasto público y social los autores concluyen que, en general, la idea que los ciudadanos tienen acerca de la distribución del gasto público es bastante ajustada, pese a que una de las partidas de gasto –defensa– tiende a sobrevalorarse. En la distribución de los componentes de la seguridad social se aprecia un mayor desconocimiento. Numerosos ciudadanos creen que las partidas que se llevan un mayor porcentaje del gasto en seguridad social son las ayudas a familias monoparentales y los subsidios por desempleo, pese a ser en realidad dos de las partidas más pequeñas. En este tema, el debate público y el discurso político pueden sesgar la valoración de los ciudadanos. Taylor-Gooby, P., Hastie, C. & Bromley, C. (2003).

Tabla 10.1.

Algunas características de los sistemas de bienestar.

| País | Impuestos y contribuciones para rentas bajas | Impuestos y contribuciones para rentas medias | Impuestos y contribuciones para rentas altas | Gasto social (% PIB) |
|-------------------|--|---|--|----------------------|
| Australia | 13.8 | 20.9 | 34.0 | 15.73 |
| Alemania | 18.6 | 29.7 | 47.5 | 28.1 |
| Inglaterra | 18.9 | 20.4 | 27.4 | 22.52 |
| EE.UU. | 4.8 | 21.4 | 31.7 | 15.76 |
| Italia | 19.6 | 24.3 | 33.8 | 23.71 |
| Irlanda | 9.8 | 18.6 | 35.9 | 19.4 |
| Noruega | 19.9 | 26.6 | 37.4 | 27.59 |
| Suecia | 32.5 | 33.7 | 42.0 | 33.1 |
| Canadá | 3.2 | 21.6 | 32.6 | 18.24 |
| España | 7.1 | 15.8 | 24.3 | 21.49 |
| Francia | 20.8 | 21.7 | 30.7 | 30.07 |

Fuentes: Gasto social en % PIB en 1995: OECD SOCX (2003).

Impuestos y contribuciones en 1998 como porcentaje de los ingresos: OECD Taxing Wages (2000).

Rentas bajas: soltero/a con dos hijos e ingresos del 67% del salario medio industrial (APW). Rentas medias: casado/a, dos hijos, ingresos entre el 100-133% del APW. Rentas altas: soltero/a sin hijos con ingresos del 167% del APW.

APW: «Average production worker». El salario APW se calcula como el salario medio, en cada país, de los trabajadores, hombres y mujeres, manuales y no manuales, que tienen un contrato a tiempo completo en la industria manufacturera.

10.2.2. Fuentes de información

Los 11 países que estudiamos pertenecen a la OCDE, y por ello la información que vamos a utilizar proviene de los variados informes y bases de datos que este organismo hace públicos. Los datos de la OCDE tienen, como es lógico, ventajas e inconvenientes.

Entre las ventajas está el que la finalidad de la OCDE es ofrecer información comparada a escala internacional y, por lo tanto, se hace un gran esfuerzo para homogeneizar los indicadores. Si, por ejemplo, queremos conocer el gasto en subsidios de desempleo, los datos que encontraremos se referirán al mismo concepto, medido en las mismas cantidades y para un mismo momento del tiempo en cada país.

Además, la base de datos de la OCDE incluye a los 11 países que estudiamos sin ser por ello una macro-base de datos (como las de las distintas subdirecciones de la ONU) que privilegia la extensión de la muestra por encima de la comparabilidad de los indicadores.

A la hora de elegir una u otra base de datos hay que tener en cuenta que los únicos órganos de recogida de información están a nivel nacional, es decir, son los estados quienes se encargan de recoger los datos que componen sus estadísticas nacionales, enviándolos luego a las organizaciones internacionales que los depuran hasta hacerlos comparables. Las bases de datos de la UE, por ejemplo, agregan datos recogidos por separado (por distintos organismos y con distintos criterios) en los 25 países que forman la Unión.

Las bases de datos de la OCDE siguen el mismo proceso, y podemos imaginar el esfuerzo que supone generar una base de datos mundial como las del PNUD o la OIT.

Cuanto más países agregamos más posibilidades tenemos de incluir errores o de no poder llevar a cabo homogeneizaciones precisas, y es un lugar común el que las bases de datos son de más calidad cuanto más apegadas al terreno: mejor datos de las regiones que nacionales, mejor bases de datos nacionales que de conjuntos de países, etc.

La elección de la OCDE como fuente de datos responde a consideraciones de este tipo, ya que de las bases de datos que incluyen a los once países, es la más pequeña.

Después de razonar las virtudes de la OCDE no cabe sino apuntar su mayor fallo: la mayoría de los datos se refieren al gasto en las partidas de bienestar, y no hay apenas información sobre cuestiones de carácter cualitativo. Para suplir esta carencia hemos recurrido en algunos casos a informes descriptivos sobre los programas de bienestar país a país, pero suele ser difícil, o a veces imposible, encontrar información comparable para todos los casos.

Por ello, la mayor parte de los datos que usaremos se refieren a temas de gasto y, aunque algunos nos indiquen no sólo cuánto se gasta sino fundamentalmente cómo se gasta (las tasas de reemplazo de las prestaciones), el análisis está evidentemente escorado hacia los indicadores cuantitativos y puramente económicos de los programas de bienestar.

El problema de esto es que nuestras conclusiones serán parciales, lo que sin ser positivo no me parece especialmente dramático por varias razones. Primero, por la dificultad de lograr conclusiones «totales» de algo tan complejo como los sistemas de bienestar; segundo, porque es ingenuo pretender haber encontrado una explicación «pura» en un campo como la Sociología, repleto de fenómenos multicausales, y tercero porque ya en la metodología explicamos que nuestro propósito es ver si nuestras hipótesis de trabajo se verifican con los datos con que contamos. No pretendíamos agotar las variables que podrían estar interviniendo, ni conocer hasta el menor detalle de los once países que estudiamos.

Por otro lado, si bien nuestros datos reflejan sólo el aspecto cuantitativo de los programas de bienestar, hay mucha menos subjetividad en las medidas de gasto que en otros indicadores, aparentemente comparados, pero basados apenas en las respuestas de un alto funcionario a un cuestionario sobre las características de su sistema de bienestar.

Dogan (1994) advierte que el mayor error que se está cometiendo hoy con la metodología comparativa tiene que ver con la calidad de los datos y con la tendencia a cuantificar cuestiones que no pueden serlo. Al menos esos errores, creo, no los hemos cometido.

Too often statistical exercises serve as a substitute for critical judgement and for the lack of clear understanding of the politics involved (...).

Over-quantification consists in the treatment of soft data by very sophisticated statistical techniques. Some sophisticated methodologists bravely quantify the unquantifiable or, failing that, quantify the irrelevant as a proxy for the unquantifiable; they try to transmute poor data into gold (Dogan, 1994, p. 37).

En un futuro cercano sería ideal repetir los procesos que llevaremos a cabo en este capítulo utilizando información sobre cuestiones organizativas de los programas de bienestar, como la que han logrado, tras diez años del trabajo de un equipo completo de investigadores, en el Swedish Social Research Institute (SOFI). Pero estos datos no son aún públicos, y por eso nuestras fuentes de información han sido las siguientes:

Tabla 10.2.

Fuentes de información sobre los programas de bienestar

| Programa | Base de datos | Informes & otros |
|------------------|--|--|
| SANIDAD | SOCX: Social Expenditure Indicators (OECD, 2003) OECD Health Data 2003. | <ul style="list-style-type: none"> - Disease-based comparison of Health Systems. What is best and at what cost? (OECD 2003a). - Health at a Glance. OECD Indicators 2003 (OECD 2003b). - Private Health Insurance in OECD countries (OECD 2004a). - Otros: Starr, 1982; O'Donovan, 1996; Guillén & Cabiedes, 1997; Buchmueller & Couffinhal, 2004; OECD (2004b). |
| PENSIONES | SOCX: Social Expenditure Indicators (OECD, 2003). | <ul style="list-style-type: none"> - Pensions at a Glance. Public policies across OECD countries (OECD 2005) - Pension Panorama. Retirement systems in 53 countries (Witthehouse, 2006) - Otros: Kalisch & Tetsuya, 1998. |
| DESEMPLEO | SOCX: Social Expenditure Indicators (OECD, 2003) | <ul style="list-style-type: none"> - Employment Outlook 1999 (OECD, 1999). - Benefit systems and work incentives (OECD 1998); - Benefits and wages (OECD, 2002); |

Tiempo

La encuesta del ISSP que hemos utilizado a lo largo de todo el trabajo es de 1996 y, por tanto, la información sobre programas de bienestar corresponde también a ese año o, cuando no está disponible, a la fecha más cercana.

Todos los datos con los que trabajamos tienen entonces una media de 10 años de antigüedad y, aunque esto no es óbice para saber si nuestras hipótesis se cumplen o no porque nos hablan de relaciones entre fenómenos que deberían darse en cualquier momento del tiempo, es bas-

tante irritante que la nueva ola de la encuesta *The Role of Government* vaya a salir en 2008 y no lo hiciera tres años antes como estaba planeado.

En 2008 tendremos la posibilidad de verificar si las relaciones que se daban en 1996 entre la forma de los programas de bienestar y su legitimidad siguen dándose, y si los apoyos a los programas de bienestar han variado cuando se han introducido modificaciones en el nivel de integración de los programas. Diez años es un lapso de tiempo pequeño para extraer conclusiones firmes sobre la relación entre características de los programas y apoyo popular porque, como dice Dogan (1994), «Everything in politics takes time, and so do all changes in society. No social change is instantaneous».

De cualquier modo, será interesante ver qué ha pasado en estos 10 años. Hasta entonces, no nos queda sino decir que 1996 es un año tan interesante como puede haberlo sido 2007, y que no supondría ningún avance sustantivo el haber utilizado una encuesta de 2007 y datos de los programas de bienestar a 2007. El tema de este estudio es si las relaciones entre fenómenos se producen, y cómo se explican. No cuándo se producen.

10. 3. Comparación de los programas públicos de sanidad

10.3.1. Indicadores

En el apartado anterior describimos los cinco aspectos respecto de los que vamos a comparar los programas de bienestar, por lo que sólo es preciso concretar aquí cómo se aplican estas definiciones a los programas sanitarios, y qué datos nos van a servir como indicadores de los mismos.

1. *Extensión de los programas públicos de sanidad*

Un programa de sanidad puede cubrir sólo la asistencia hospitalaria pero no la atención primaria, puede financiar todos, parte, o ningún medicamento, puede incluir unas terapias pero no otras, etc. Es decir, puede tener un rango de actuación más o menos extenso.

Una forma de «medir» la extensión es utilizar el «gasto público en sanidad como porcentaje del gasto total en sanidad (público y privado)», bajo la asunción de que la mayoría de las necesidades médicas son ineludibles y, cuando no las cubre el Estado, es el ciudadano quien tiene que pagarlas de su propio bolsillo.

Podríamos haber utilizado el «gasto privado en sanidad *per capita* en paridad de poder adquisitivo (PPP)», pero esta medida está bastante influenciada por los precios de los mercados sanitarios nacionales, mucho más caros en unos países que en otros³.

³ Jönsson & Eckerlund (2003) señalan que EE.UU. es uno de los países que más gasto tiene en sanidad (tanto público como privado), lo que no se debe a que consuman más bienes sanitarios que otros países sino a que estos bienes son muy caros. Un ejemplo: los médicos cobran en EE.UU. 5.5 veces el salario medio nacional, mientras en Inglaterra o Suecia la diferencia respecto del salario medio es sólo 0.5 (cobran 1.5 veces el salario medio). La ponderación del gasto en referencia a los precios de cada país (PPP) recoge muy poco esta variación de precios de los mercados sanitarios, porque se calcula en referencia a los precios globales de todos los sectores económicos y no sólo del sector sanitario.

2. Integración del programa

Para ver cuánta gente utiliza el programa público como proveedor principal de servicios sanitarios utilizaremos la cobertura legal del programa y el gasto en seguros privados de sanidad como porcentaje del gasto total en sanidad.

La cobertura legal no presenta grandes variaciones entre países. La mayoría ofrece atención hospitalaria a todos los ciudadanos, salvo EE.UU., donde sólo una minoría tiene este derecho, y Alemania, que deja fuera al 10 % de la población. La cobertura de la atención médica fuera de los hospitales sigue la misma pauta con la única desviación de Irlanda, donde sólo tiene atención gratuita el tercio de la población con ingresos más bajos. Puesto que esta segunda variable sobre cobertura es la que más varía, la incluiremos en los análisis aunque no esperamos que tenga demasiado poder explicativo porque 8 de los 11 países tienen cobertura legal del 100 %.

El segundo de los datos es algo más interesante porque nos indica el tamaño del mercado privado de seguros sanitarios y, como son fundamentalmente las clases medias y medias altas quienes pueden permitirse comprarlos, nos indica en qué medida estos colectivos utilizan el sistema público. No hay que confundir este dato con el que nos sirve para la extensión del sistema aunque, desde luego, están relacionados. Dentro del gasto privado en bienestar podemos distinguir, como hace la OCDE, entre «out-of-pocket payments»⁴ y gasto en seguros privados. El primero refleja lo que los ciudadanos gastan en las partidas que no cubre el sistema público, el segundo implica que las personas han salido del sistema público para integrarse en otro, el privado. Ya no se trata de comprar en el mercado de forma puntual, sino de comprar toda la provisión sanitaria de esta manera.

Lo ideal hubiera sido utilizar como indicador el porcentaje de la población cubierta por seguros privados de salud y, si no lo hemos hecho, es porque los datos con que contamos no distinguen bien entre seguros sanitarios totales y complementarios. Esta es una desventaja importante si tenemos en cuenta que la mayoría de los sistemas públicos europeos cubren muchos servicios, pero no todos.

Por ejemplo, la sanidad pública de España e Inglaterra⁵ no cubre muchas cuestiones relacionadas con la atención odontológica y oftalmológica. En ambos países un pequeño colectivo ha contratado un seguro privado que cubre sólo estos dos servicios, mientras otro colectivo más pequeño tiene un seguro privado total, un seguro que cubre los mismos servicios que la sanidad pública (o más). Evidentemente, la relación de unos y otros con el sistema público es muy distinta. Los primeros no tienen porqué diferir en sus opiniones de la gente que no tiene ningún seguro privado para el dentista porque, al fin y al cabo, todos lo están comprando vía mercado. Los segundos sí pueden desarrollar actitudes más negativas que el resto hacia el programa público porque lo están pagando mediante impuestos pero ya no lo utilizan. Realmente su interés en que el programa público sanitario se mantenga es muy pequeño.

⁴ Traducción directa: «Pagos con dinero de bolsillo». La traducción con algo más de sentido podría ser «pago directo».

⁵ Sobre la extensión de los seguros privados sanitarios en Inglaterra, y su relación con las actitudes hacia la sanidad pública ver: Burchardt, Tania & Propper, Carol (1999). Estas autoras encuentran que quienes han contratado un seguro complementario de salud utilizan los servicios públicos sanitarios con la misma frecuencia que quienes no tienen seguro complementario, y sus actitudes hacia el programa público son similares.

Los datos sobre contratación de seguros privados de que disponemos deberían distinguir (según la propia clasificación de la OCDE) entre:

Seguros Primarios: funcionan como la única provisión de sanidad del individuo. Aplicable a los países sin cobertura universal

Seguros Duplicados: ofrecen los mismos servicios que el sistema público a gente que tiene cobertura pública pero no está satisfecha con ella. Normalmente, la ventaja de los mismos es la mayor calidad de las prestaciones y las menores listas de espera.

Seguros Complementarios: seguros para un servicio concreto que está cubierto por el sistema público. Que en un país surjan muchos seguros complementarios para una especialidad concreta es un indicador de que la asistencia pública no está funcionando en este terreno con la calidad que los colectivos de rentas medias consideran adecuada.

Seguros Suplementarios: seguros para un servicio concreto que no está cubierto por el sistema público. Los seguros para la atención odontológica en Inglaterra o España entran en esta categoría.

Teniendo esto en cuenta, lo que podríamos utilizar como medida de la (falta de) integración del sistema público es el porcentaje de individuos que han contratado seguros privados primarios o duplicados. Cuando incluimos a quienes tienen seguros complementarios y, sobre todo, suplementarios, el dato deja de ser indicador de integración, y esto es precisamente lo que nos ocurre con los datos de la OCDE: en algunos países todos los seguros están colapsados en una sola categoría (EE.UU., Inglaterra), y en otros no figura ningún porcentaje para los seguros Primarios o Duplicados aunque, evidentemente, un cierto mercado en este sentido debe existir (datos en la tabla 10.3).

3. Intensidad del gasto relativa a la capacidad de la economía

Utilizaremos el porcentaje del PIB destinado a la sanidad pública, aunque somos conscientes de sus limitaciones: no sirve para ver cómo se gasta el dinero, con qué eficacia o qué resultados. En palabras de dos economistas especializados en economía del bienestar:

The share of GDP spent on health care says nothing about the quality of care, health outcomes, effectiveness, or about the distribution of health care consumption. Neither do international comparisons give such information. (Jönsson & Eckerlund, 2003, p. 113)

Compartiendo plenamente las críticas, utilizamos el gasto en sanidad en porcentaje del PIB como medida de la intensidad relativa del gasto, o esfuerzo que un país le dedica al programa público de sanidad. No lo usamos como medida de calidad, eficacia o extensión del sistema.

4. Coste percibido

Porcentaje del salario que destina a impuestos y contribuciones sociales una familia de renta baja, media, y alta.

5. Pertenencia a un edificio de bienestar

Porcentaje del PIB destinado a gasto social.

La tabla siguiente muestra los valores de cada uno de los programas sanitarios en los indicadores mencionados.

Tabla 10.3.

Características de los programas públicos de salud

| País | Cobertura hospitalares | Cobertura atención médica | Gasto público en sanidad (% GT sanidad) | Gasto en seguros privados de salud (% GT sanidad) | Gasto privado en sanidad pc en PPP |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| Australia | 100. | 100. | 66.6 | 10.7 | 516 |
| Alemania | 90.8 | 90.8 | 76.7 | 12. | 527 |
| Inglaterra | 100. | 100. | 83.8 | 3.2 | 215 |
| EE. UU. | 26.4 | 26.4 | 45.4 | 33.8 | 1994 |
| Italia | 100. | 100. | 72.2 | 1. | 413 |
| Irlanda | 100. | 35.7 | 72.5 | 8.6 | 363 |
| Noruega | 100. | 100. | 84.2 | 0. | 294 |
| Suecia | 100. | 100. | 86.7 | 1. | 224 |
| Canadá | 100. | 100. | 71.3 | 10.3 | 606 |
| España | 99.5 | 99.3 | 70.9 | 2.9 | 344 |
| Francia | 99.4 | 99.4 | 76.1 | 11.8 | 478 |

Fuentes: OCDE Health Data y OCDE Social Expenditure Database. Datos para 1995 ó 1996 dependiendo del país.

Tabla 10.3 (cont.).

Características de los programas públicos de salud

| País | Gasto público en sanidad en % PIB* 1995 | Población cubierta por seguros** de sanidad privados (% , 2000) |
|-------------------|---|---|
| Australia | 5.74 | 44.9 Duplicada; 40.3 Suplementaria |
| Alemania | 8.13 | 9.1 Principal; 9.1 Suplementaria |
| Inglaterra | 5.73 | 10.0 Suplementaria o Duplicada |
| EE. UU. | 6.33 | 71.9 Principal o Suplementaria. |
| Italia | 5.38 | 15.6 Complementaria |
| Irlanda | 4.75 | 43.8 Complementaria |
| Noruega | 6.59 | Menos del 1% en conjunto |
| Suecia | 5.9 | Menos del 1% en conjunto. |
| Canadá | 6.58 | 65.0 Suplementaria |
| España | 5.73 | 2.7 Principal; 10.3 Complementaria |
| Francia | 7.98 | 86.0 Complementaria |

* OECD SOCX. 1995.

** OECD. Private Health Insurance in OECD countries. Datos para 2000.

10.3.2. Características asociadas a la legitimidad

Para ver qué características de los programas públicos de sanidad correlacionan con el apoyo ciudadano, y para ver en qué medida el hecho de que estas características difieran entre países explica la variación internacional en legitimidad de los programas, vamos a utilizar modelos de regresión multinivel. La lógica de esta técnica está explicada en el capítulo 4 dedicado a la metodología y, como además los hemos utilizado profusamente en capítulos anteriores, no creo que sea necesario volver sobre ello. Sólo es preciso recordar que la regresión multinivel separa la variación total en dos componentes: variación explicada por las características de los individuos y variación explicada por el país en el que viven. Nosotros nos vamos a centrar en esta segunda fuente de variación, y vamos a ver si el efecto del «país» está recogiendo, en realidad, el efecto de las características de los programas sanitarios.

Las tablas 10.4 y 10.5 muestran los coeficientes de todos los modelos multinivel que hemos calculado.

El primer modelo no tiene variables, sólo nos sirve para medir la variación total entre países, es decir, para saber cuánto de lo que varían los ciudadanos al hablar de los programas de bienestar depende del país en el que viven. Ya vimos este mismo modelo en el capítulo 5, donde señalamos que, de todo lo que varían en sus opiniones sobre los programas de sanidad los 17.000 entrevistados que componen nuestra muestra, un 12% se explica por el hecho de que viven en países distintos. Un 12% es bastante si tenemos en cuenta que la evaluación PISA 2003 encontró que, de todo lo que varían en rendimiento los estudiantes de los casi 60 países evaluados, sólo un 10% se debía al hecho de vivir en países distintos y bajo sistemas educativos diferentes.

El segundo modelo no incluye ninguna variable referida al programa de sanidad presente en cada país, y por ello nos va a servir como referencia para comparar a todos los demás. Nos sirve para ver si al incluir determinadas características de los programas, el poder explicativo del modelo aumenta. Sin embargo, este modelo de referencia, como todos aquellos que incluyen variables referidas a los programas, incluye también las características de los individuos que se consideraban fundamentales para entender sus actitudes hacia las políticas sociales: la posición económica relativa, el sexo, y la ideología. Esto es así porque en el capítulo 5 vimos que una parte de la variación internacional en la legitimidad de los programas de bienestar se explica porque unos países tienen más «igualitarios» que otros y más gente con ingresos bajos que otros⁶, por lo que para conocer el efecto real que las características de los programas tienen sobre la legitimidad hemos de controlar por estas variables.

El resto de los modelos incluyen tanto las características de los individuos como una característica del programa de bienestar. Hubiera sido deseable poder incluir varias características del programa al mismo tiempo, pero no tenemos suficientes casos para hacer esto. Para ver si existe relación entre cada una de las características de los programas y el hecho de que su legitimidad varíe entre países nos serviremos de los test de significatividad de los modelos y de observar gráficamente la relación.

⁶ El 12% de la variación entre países en la legitimidad de los programas de sanidad se debe a que en unos países hay más pobres que en otros, y que en unos hay más gente igualitaria que en otros. Este porcentaje es del 16% para la legitimidad de los programas de pensiones y del 25% para los programas de desempleo.

El que una variable muestre un coeficiente estadísticamente significativo nos indica que: a) la relación que mantiene con la legitimidad del programa es bastante clara, y b) que si entendemos los once países como una muestra aleatoria de todos los países del mundo (o de todos los sistemas de bienestar del mundo), podemos extrapolar las conclusiones que saquemos de nuestra muestra a todos ellos. Esto último nos parece carente de sentido (además nuestra muestra de países no es aleatoria), por lo que usaremos la significatividad como medida de la claridad de una relación. Hemos construido gráficos para todas las relaciones, significativas o no, pero sólo incluiremos en estas páginas aquellos que sean relevantes.

Tabla 10.4.

Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad y características de los programas públicos de salud.

| | M0 | M. REF. | EXTENSIÓN | INTEGRACIÓN | |
|---|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| | Modelo vacío | Posición ec. Ideología Sexo | Gasto público como % del gasto total en sanidad | Cobertura fuera de hospitales | Seguros de salud privados |
| Var. entre países | 0.044 | 0.0385 | 0.0224 | 0.034 | 0.012 |
| Var. dentro de cada país | 0.327 | 0.311 | 0.314 | 0.311 | 0.311 |
| Significatividad | | | Signif. dto. M1 | No signif. dto. M1 | Signif. dto. M1 |
| Variación entre países explicada | | 12% del modelo 0 | 43% del modelo de referencia | | 68% del modelo de referencia |

Ref.: Modelo que incluye la posición económica relativa, la ideología y sexo, pero ninguna variable referida al programa sanitario; Gasto público como porcentaje del gasto total en sanidad en 1995.

Fuente: OECD SOCX; Gasto en seguros de salud privados como porcentaje del gasto total en sanidad.

Tabla 10.5.

Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en sanidad y características del sistema de bienestar

| | ESFUERZO ECONOMÍA | COSTE | | | EDIFICIO BIENESTAR |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | Gasto público en sanidad (% PIB) | Impuestos rentas bajas | Impuestos rentas medias | Impuestos rentas altas | Gasto social (%PIB) |
| Var. entre países | 0.0302 | 0.037 | 0.0392 | 0.0388 | .0368278 |
| Var. dentro de cada país | 0.314 | 0.0314 | 0.314 | 0.314 | .3143014 |
| Significatividad | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. |
| Variación entre países explicada | | | | | |

Después de ir probando modelos con las distintas variables una a una⁷ vemos que sólo algunas tienen relación con el nivel de apoyo al programa: la que utilizamos como indicador de la extensión del sistema (gasto público en sanidad como porcentaje del gasto total en sanidad), y la que usamos para medir su integración (gasto en seguros privados de salud como porcentaje del gasto sanitario total). La extensión del programa tiene una relación estadísticamente significativa con su legitimidad y explica en torno a un 40% de la variación internacional en actitudes hacia los programas sanitarios. La integración del programa tiene una relación aún mayor y, sólo teniendo en cuenta el grado de integración del programa público sanitario, podemos predecir hasta un 73% de la variación internacional. El pequeño número de países con el que trabajamos no nos permite ver si ambos efectos son exactamente el mismo (los programas más integradores son los más extensos y los dos efectos se solapan), o si se suman en cierta medida.

Por otro lado, la cobertura, el gasto público en sanidad como porcentaje del PIB, el nivel de impuestos, o el tamaño del Estado del Bienestar en su conjunto no correlacionan con el apoyo a los programas sanitarios.

El hecho de que la cobertura no tenga relación era bastante esperable dado que 8 de los 11 países ofrecen acceso al programa sanitario a todos los ciudadanos. Resulta quizás más interesante el que la presión fiscal no correlacione con el apoyo y que, por tanto, sea posible tener ciudadanos «satisfechos» pese a obligarles a pagar una parte importante de sus ingresos en impuestos y contribuciones. En cualquier caso, algunos estudios anteriores ya habían apuntado que esto ocurría (Mouritzen, 1987; Edlund, 1999).

Más llamativa resulta la falta de importancia del tamaño del Estado del Bienestar para explicar la legitimidad de su programa sanitario, porque muestra que no es necesario tener un Estado del Bienestar de tipo nórdico para poder implantar un programa sanitario que logre grandes niveles de apoyo. A la luz del (limitado) análisis realizado, parece que cuando estos programas se organizan de manera integradora logran grandes apoyos independientemente de cómo sea el resto del sistema de bienestar.

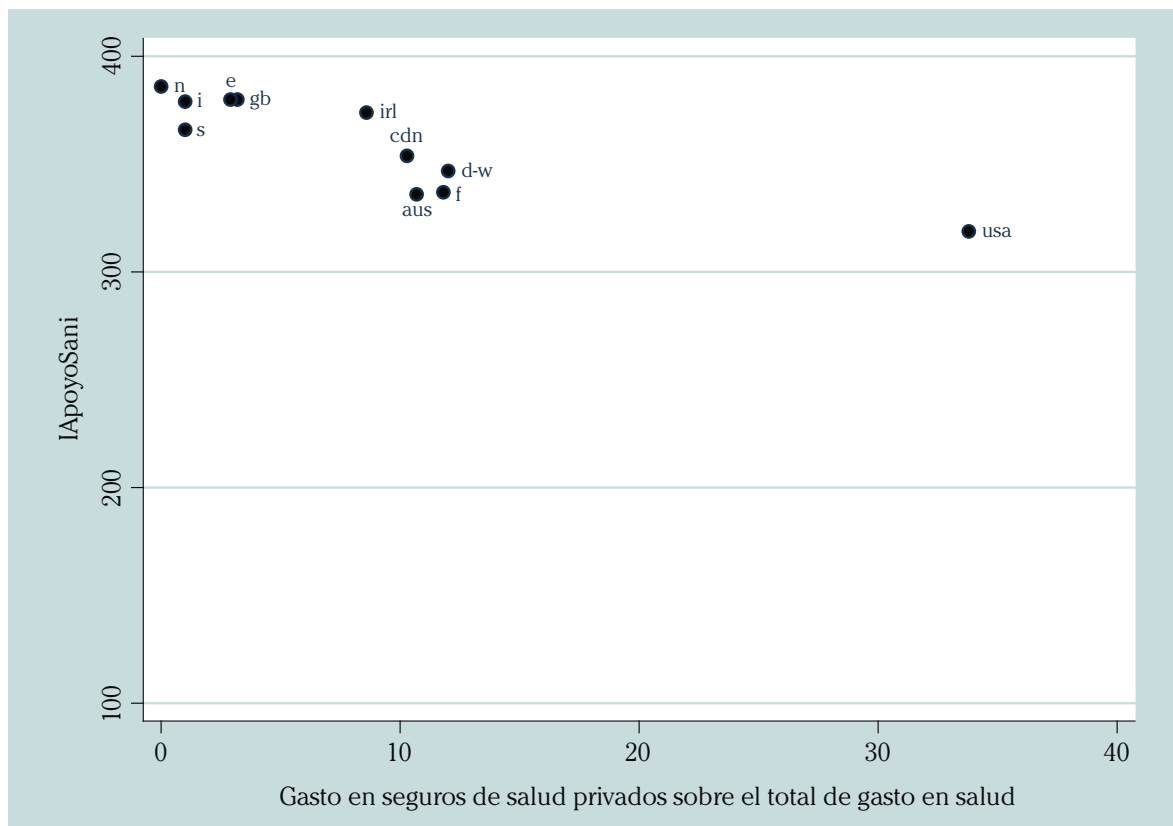
El gráfico 10.1 presenta la relación entre el grado de integración de los programas públicos sanitarios y su legitimidad. El grado de integración aparece en el eje horizontal (medido como porcentaje de gasto en seguros privados de salud), y la legitimidad en el eje vertical (medida por el indicador de apoyo agregado que construimos en el capítulo 5).

La presentación gráfica es interesante porque su interpretación resulta más sencilla que la de los coeficientes anteriores y, además, porque nos permite detectar casos que se desvían de la pauta general. Trabajando sólo con 11 países es especialmente importante verificar que no existen casos extremos (*outliers*) cuyo comportamiento determina en exceso la relación estadística. O, a la inversa, que existe una pauta clara, pero el incumplimiento de la misma por un par de países la oscurece.

⁷Al trabajar con 11 países no nos podemos permitir mucho más si queremos mantener la significatividad estadística y, sobre todo, que los modelos tengan sentido

Gráfico 10.1.

Integración del programa público de sanidad y legitimidad.

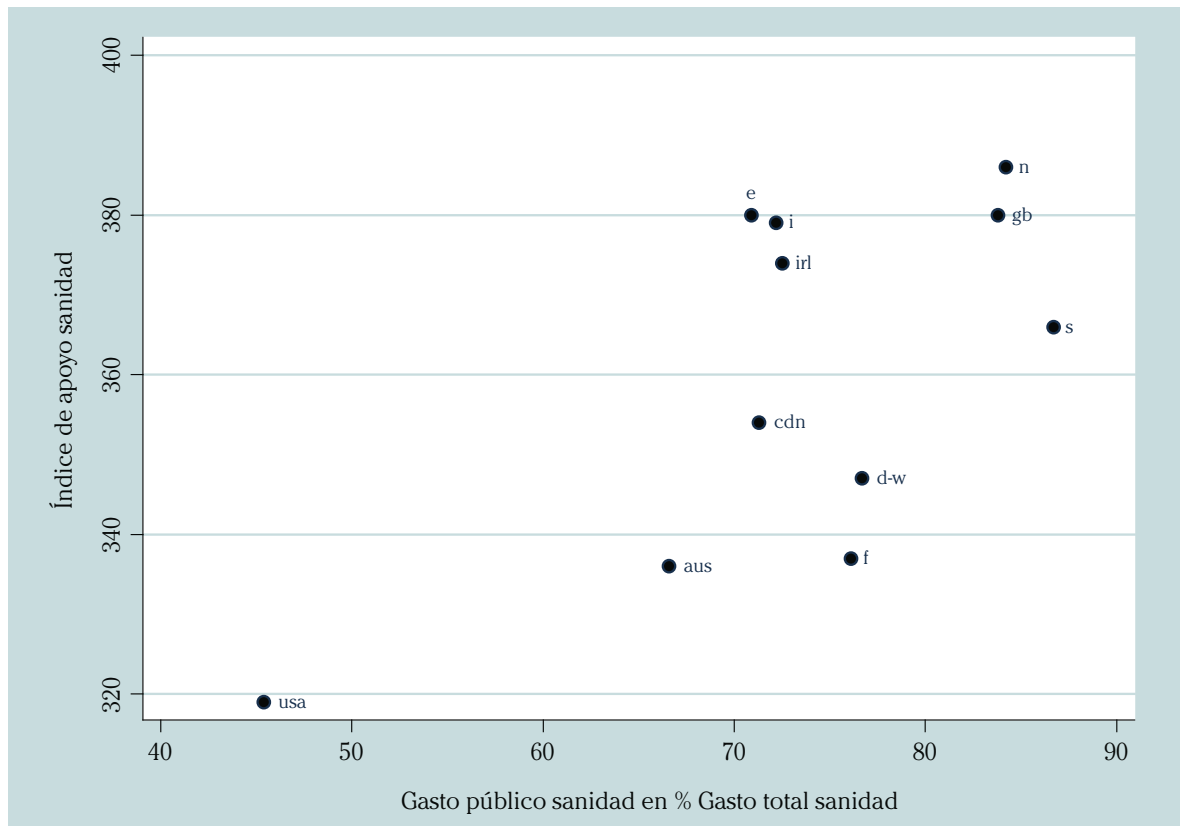


Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

A la luz del gráfico cobran sentido algunas de las cuestiones que hemos visto en capítulos anteriores. Si miramos la parte superior izquierda del gráfico veremos que comparten espacio Noruega, Suecia, España, Italia e Inglaterra: son los países con más apoyo a la existencia de un programa público de salud.

Cuando vimos esta pauta en el capítulo 5 nos resultaba llamativa porque estos países no pertenecen al mismo tipo de Estado del Bienestar. Ahora vemos que, pese a ello, todos han establecido programas sanitarios similares respecto a una característica: la mayoría de la población los utiliza como fuente principal de servicios de salud, por lo que el espacio que queda para la provisión privada es muy pequeño. En cuanto al resto de países, la legitimidad del programa va descendiendo a medida que aumenta el peso de los seguros privados. Cuanta más gente sale del sistema público, más legitimidad se pierde.

El gráfico siguiente muestra la relación entre la extensión del programa sanitario y el apoyo que los ciudadanos le otorgan. En el eje vertical tenemos las actitudes de los ciudadanos, y en el eje horizontal la extensión medida como el porcentaje de gasto público sobre el total de gasto sanitario.

Gráfico 10.2.*Extensión del programa público de sanidad y legitimidad.*

Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

El modelo que calculamos para ver la relación entre la extensión del programa y las actitudes hacia el mismo ya indicaba que esta relación es menor que la que se da entre la integración del programa y las actitudes. En el gráfico podemos ver que, pese a que hay una cierta correspondencia entre ambas variables, está moderadamente influenciada por un caso extremo: EE.UU., con poco apoyo al programa y muy poca extensión. Si eliminamos a EE.UU. la pauta sigue existiendo y sigue siendo significativa, pero se vuelve más suave.

La conclusión del análisis es, por tanto, que el grado de integración de los programas sanitarios es la característica que en mayor medida sirve para explicar que en unos países logren más apoyo que en otros. Pero aunque la pauta que observamos en el gráfico 10.1 es bastante limpia, y aunque la relación es estadísticamente significativa, tampoco podemos derivar de ella una gran confirmación de las teorías que hemos manejado a lo largo de este trabajo (capítulo 3). No podemos olvidar que estamos utilizando sólo un dato como indicador de integración, que ese dato es totalmente cuantitativo, y que aunque nuestra muestra se compone de 17.000 individuos, proceden sólo de 11 países.

Lo que el análisis nos permite afirmar con seguridad es que existen datos que confirman la hipótesis de que el grado de integración del programa sanitario es uno de los factores que explican su legitimidad, quedando a la espera de que nuevos análisis usando otros datos (otras encuestas y otros indicadores para los programas) desconfirмен la relación vista, o que otras teorías la expliquen de manera más convincente.

10.4. Comparación de los programas públicos de pensiones

10.4.1. Indicadores

Compararemos los programas de pensiones de los once países guiándonos por los mismos aspectos que definimos el apartado 10.1 pese a que, como iremos comentando, encontrar indicadores para algunas de las cuestiones que nos interesan va a ser aquí ligeramente más complicado que en los temas de sanidad o desempleo.

1. *Extensión del programa*

Los sistemas públicos para proteger a los mayores se componen fundamentalmente de transferencias en dinero aunque existen, por supuesto, otras vías suplementarias mediante las que el Estado puede «garantizar un nivel de vida digno a los ancianos». Dentro del apartado de gasto público en prestaciones dirigidas a las personas mayores, la base de datos que utilizamos (OECD - *Social Expenditure Indicators*) distingue entre el «Gasto en pensiones y otros subsidios en dinero», y el «Gasto en otros servicios y prestaciones a la tercera edad». Los «otros subsidios en dinero» a los que refiere la primera partida son fundamentalmente suplementos económicos a las pensiones bajas, por lo que podemos considerarlo como parte del gasto en pensiones. La segunda partida de gasto integra las residencias públicas, los centros de día, la asistencia domiciliaria (muy desarrollada en los países nórdicos) y otros servicios de este tipo. Todos los países tienen programas de pensiones, así que podemos considerar que esta es la base de la intervención estatal para proteger a los ancianos y que el desarrollo de esos «otros servicios» delimita la extensión de temas en los que se interviene. Usaremos por tanto el gasto en «otros servicios a la tercera edad» como indicador de la extensión.

2. *Integración real del programa*

Tasa de reemplazo de las pensiones públicas para tres niveles de renta. Se consideran públicos no sólo aquellos programas directamente gestionados por el Estado sino también los que, pese a pertenecer al sector privado, son de contribución obligatoria para los empleadores y/o para los empleados.

3. *Coste percibido*

Impuestos y contribuciones para rentas altas, medias y bajas.

No hemos elegido el gasto exclusivamente en contribuciones porque muchos sistemas de pensiones se financian en parte con impuestos (la pensión básica) y en parte con contribuciones (la pensión relacionada con los ingresos). En los países donde el valor de la pensión básica es elevado gran parte de la financiación del sistema se realiza mediante impuestos directos.

4. *Esfuerzo de la economía*

Gasto en pensiones en porcentaje del PIB.

Gasto en pensiones en porcentaje del PIB ponderado por el porcentaje de población mayor de 65 años.

5. *Pertenencia a un gran edificio de bienestar*

Gasto social en porcentaje del PIB.

El problema de medir la integración de los sistemas de pensiones

La complicación de encontrar indicadores para medir los cinco aspectos que nos interesan radica en que los sistemas de protección a la tercera edad son más complejos internamente, y más heterogéneos internacionalmente que los sistemas públicos de salud o de protección a los desempleados. Hay diferencias en la cantidad de programas, en el objetivo de cada uno, en la forma de acceso y financiación, en el nivel de prestaciones, etc.

Comenzando por el número de programas que conforman el sistema, la forma más extendida es mantener dos programas paralelos: uno de base, para garantizar un mínimo de subsistencia a los jubilados, y otro que se suma al primero y cuyo objetivo es que estos no sólo sobrevivan sino que mantengan un nivel de vida similar al que disfrutaban como trabajadores. No obstante, hay países como Irlanda donde sólo existe un programa básico para garantizar el mínimo, países como EE. UU., donde sólo existe un programa contributivo, y países como Suecia, con cuatro programas que se suplementan unos a otros.

Para acceder a las prestaciones básicas (de mínimos) puede exigirse haber contribuido un cierto número de años (Irlanda), demostrar que se carece de recursos (Australia), haber vivido en el país el tiempo suficiente (Suecia), o las dos cosas anteriores (Canadá).

Para acceder a las prestaciones relacionadas con los ingresos se exige siempre haber contribuido, pero el número de años, la cuantía de las contribuciones y la relación entre lo contribuido y lo recibido difiere entre países y, a veces, dentro del mismo país: en Francia existen distintos programas de pensiones en función del sector económico y cada uno tienen sus propios criterios. En cuanto a la financiación, la de los programas básicos puede ser vía contribuciones (Irlanda) o presupuestos (Australia). La contribución a los programas relacionados con los ingresos puede correr a cargo del empleador (Australia), del empleado, o de ambos. La mayoría de las contribuciones están organizadas de forma progresiva, pero en muy distinto grado dependiendo del país. Irlanda, Inglaterra, Australia y Canadá son los países con sistemas más progresivos. Italia y España son, con muchísima diferencia, los menos. En general, los sistemas muy progresivos tienen tasas de reemplazo bajas para las rentas más altas, y allí donde las pensiones tienen tasas de reemplazo bajas para los colectivos de rentas medias y altas, los seguros privados están muy extendidos.

Finalmente, aunque la titularidad de los programas públicos suele ser claramente del Estado, en el caso Australiano la intervención pública se reduce a dar una pensión mínima a los mayores sin ingresos y a obligar por ley a que los empleadores contribuyan por sus empleados a un fondo privado.

⁸ Más allá de cuestiones generales como el porcentaje de gasto público, apenas existen datos comparados sobre los sistemas de pensiones. Para cubrir esta carencia, la OCDE acaba de poner en marcha un proyecto de recogida de información (*Global Pension Statistics Project*) que se centra especialmente en cuantificar el peso del sector privado de pensiones en cada uno de los países miembros, pero por ahora hay pocos datos, y todos ellos demasiado recientes (necesitamos información de 1996).

El que los sistemas de pensiones varíen tanto entre países se traduce en que hay menos información comparada sobre los mismos⁸, pese a lo cual tenemos que escoger, por requerimiento de nuestras hipótesis, un indicador del grado de integración de los programas públicos de pensiones, es decir, un dato que refleje si la mayoría de los ciudadanos dependen de ellos para garantizar sus rentas en la jubilación o si, por el contrario, aquellos que pueden permitírse lo prefieren depender del mercado.

Una de las cuestiones que se consideran más importantes para lograr la integración de todos los colectivos es que las prestaciones tengan una relación clara con las contribuciones, y que permitan a los individuos mantener en la jubilación el nivel de ingresos que tenían como trabajadores. Ambas cosas, por supuesto, no tienen porqué ir juntas: puede haber una relación clara entre lo contribuido y lo recibido sin que ello implique altas tasas de reemplazo pero, para que las dos condiciones de la integración se cumplan, es necesario que el reemplazo sea elevado para todos.

Siguiendo esta lógica, usaremos como medida de la integración las tasas de reemplazo netas de las pensiones públicas para varios niveles de ingresos. Los datos provienen de la OCDE, y sólo es necesario saber que: a) Se incluye dentro de la categoría «programas públicos» los seguros ocupacionales privados de contribución obligatoria; b) al ser una tasa neta, se han sumado ya las ventajas fiscales que suelen tener las pensiones (menores impuestos); c) el reemplazo se calcula sobre los ingresos que tenía el individuo en el momento antes de jubilarse; d) los datos corresponden a comienzos de 2000. Nuestra encuesta es de 1996 pero, como los cambios en los sistemas de pensiones rarisísimamente son retroactivos, las reformas que haya habido en este periodo no han podido notarse en exceso; e) para cada nivel de ingresos se calcula una tasa de reemplazo media teniendo en cuenta lo que la persona podría cobrar de pensión en conjunto. En países con muchos programas paralelos (Suecia) o distintos programas por sector ocupacional (Francia), la tasa media puede no constituir un adecuado reflejo de la realidad.

Tabla 10.6.

Características de los sistemas de pensiones y atención a la tercera edad

| PAÍS | Gasto en otros servicios a la tercera edad (% PIB) | Tasa de reemplazo neta para rentas bajas | Tasa de reemplazo neta para rentas medias | Tasa de reemplazo neta para rentas altas |
|-------------------|--|--|---|--|
| Australia | 0.35 | 77 | 52.4 | 36.4 |
| Canadá | 0.0 | 89.4 | 62.8 | 30.6 |
| Francia | 0.78 | 98 | 65 | 55.3 |
| Alemania | 0.58 | 61.7 | 71.8 | 67.0 |
| Irlanda | 0.48 | 63 | 36.6 | 21.9 |
| Italia | 0.2 | 89.3 | 88.8 | 89.1 |
| Noruega | 3.58 | 85.5 | 65.1 | 50.1 |
| España | 0.26 | 88.7 | 88.3 | 83.4 |
| Suecia | 3.37 | 90.2 | 68.2 | 74.3 |
| Inglaterra | 0.68 | 78.4 | 47.6 | 29.8 |
| EE. UU. | 0.05 | 61.4 | 51.0 | 39.0 |

Fuente para el Gasto en otros servicios a la tercera edad: OECD SOCX. Dato para 1995.

Fuente para las Tasas de reemplazo: Pension Panorama 2006 (OECD). Se incluyen sólo los programas obligatorios. En % de los ingresos que la persona ganaba antes de jubilarse. Para rentas de la mitad de la media nacional, la media nacional, y dos veces la media nacional. Datos para 2002 o anteriores.

Tabla 10.6. (cont.)*Características de los sistemas de pensiones y atención a la tercera edad*

| País | Gasto en pensiones de jubilación (% PIB) | Población mayor de 65 años en 1998 |
|-------------------|--|------------------------------------|
| Australia | 3.8 | 12.2 |
| Canadá | 4.34 | 12.3 |
| Francia | 10.36 | 15.8 |
| Alemania | 10.29 | 16.6 |
| Irlanda | 3.42 | 11.4 |
| Italia | 10.99 | 17.6 |
| Noruega | 5.82 | 15.6 |
| España | 8.32 | 16.3 |
| Suecia | 8.17 | 17.4 |
| Inglaterra | 6.46 | 15.7 |
| EE. UU. | 5.36 | 12.4 |

Fuente: Gasto en pensiones en porcentaje del PIB: OECD SOCX. Dato para 1995.
Población mayor de 65 años: Jönsson & Ingemar, 2003.

10.4.2. Características asociadas a la legitimidad

Las tablas siguientes muestran los modelos multinivel para las variables que acabamos de describir. Igual que en el apartado anterior, calcularemos primero un modelo de referencia que sólo incluye tres variables sociodemográficas de los individuos. Seguidamente iremos calculando modelos que incluyen estas mismas variables sociodemográficas y, además, una variable relativa al sistema de protección a la tercera edad. Lo que tratamos de ver es si el poder de predicción del modelo aumenta cuando incluimos una característica del programa, lo que reflejaría que esta característica correlaciona con las actitudes que los ciudadanos desarrollan hacia el sistema de pensiones, y que podría servir como explicación de las mismas.

Tabla 10.7.

Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones y características de los programas de pensiones

| | M0 | REFERENCIA | EXTENSIÓN | INTEGRACIÓN | | |
|---|-------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Variables socio-demográficas | Gasto en otros servicios tercera edad | Reempl. rentas bajas* | Reempl. rentas medias | Reempl. rentas altas |
| Entre países | 0.044 | 0.038 | 0.029 | 0.0361 | 0.0352 | 0.0346 |
| Dentro de cada país | 0.323 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 |
| Var total | | | Significativa | No signif. | No signif. | No signif. |
| Variación entre países explicada | | | 23% del modelo de referencia | | | |

*Rentas bajas: ingresos de la mitad de la media nacional de ingresos. Rentas medias: ingresos iguales a la media nacional. Rentas altas: ingresos del doble de la media nacional.

Tabla 10.8.

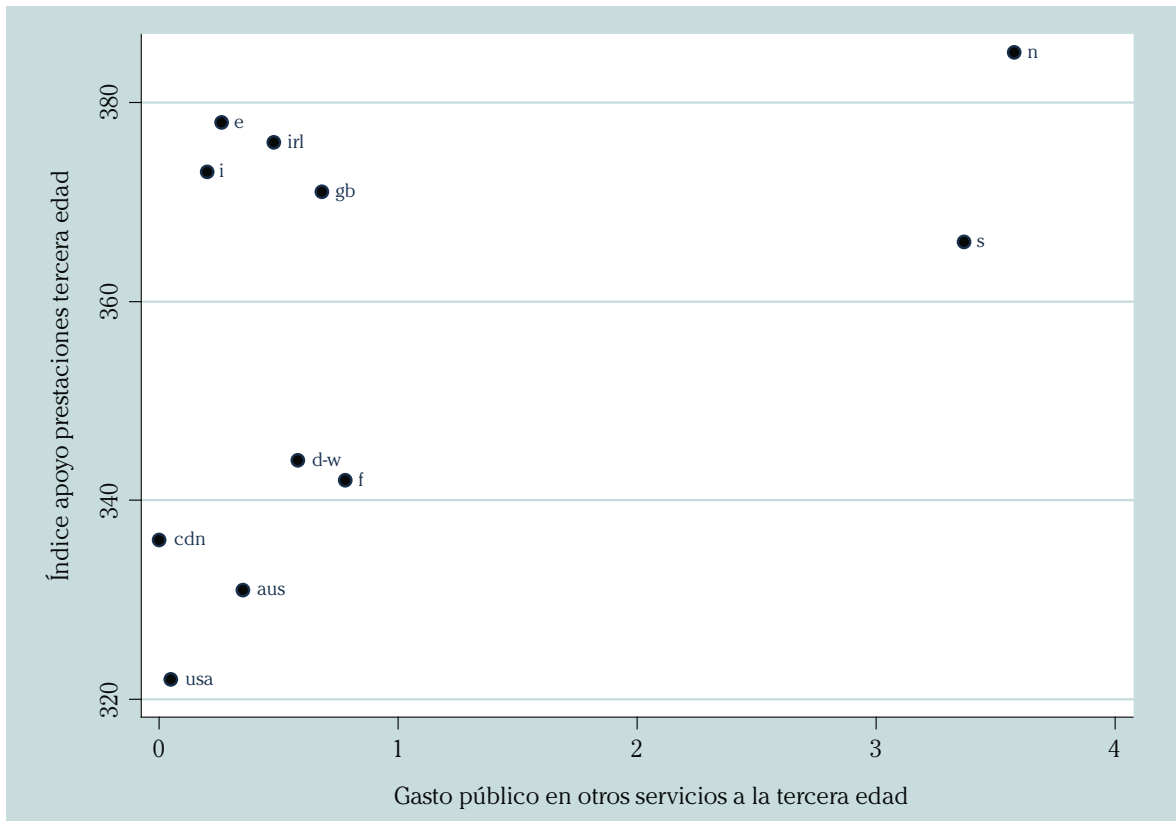
Modelos multinivel. Actitudes hacia la intervención del Estado en pensiones y características del sistema de bienestar

| | COSTE PERCIBIDO | | | EDIFICIO DE BIENESTAR | ESFUERZO ECONOMÍA | |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | Impuestos rentas bajas | Impuestos rentas medias | Impuestos rentas altas | Gasto público pensiones (% PIB) | Gasto social (% PIB) | Gasto público pensiones/ % mayores 65 años |
| Entre países | 0.034 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.038 |
| Dentro de cada país | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 |
| Variación total | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. |
| Variación entre países explicada | | | | | | |

Las conclusiones de comparar las características de los sistemas de pensiones con el apoyo que reciben por parte de los ciudadanos son las siguientes:

La variación internacional en el nivel de apoyo a estos programas no depende de la presión fiscal existente en el país (impuestos y contribuciones), ni de que formen parte de un sistema de bienestar más o menos extenso, ni del esfuerzo económico que se esté haciendo para mantenerlos, ya midamos esto último directamente como porcentaje del PIB destinado a pensiones públicas, o ponderándolo por el envejecimiento de la población.

La extensión de la intervención a otras necesidades de la tercera edad al margen de las puramente económicas presenta una relación significativa con el apoyo al programa pero, como podemos ver en el gráfico siguiente, los países se dividen fundamentalmente en dos bloques: aquellos con sistemas de pensiones muy extensos: Suecia y Noruega, y todos los demás. La significatividad del coeficiente del modelo se debe al peso de los casos extremos: los países con más gasto en «otros servicios a la tercera edad» tienen mucho apoyo y los países con menos gasto tienen poco apoyo.

Gráfico 10.3.*Extensión de la intervención en tercera edad y legitimidad*

Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

En cuanto a las tasas de reemplazo, la relación no es significativa independientemente de que introduzcamos en el modelo la tasa para las rentas bajas, medias o altas, pero la comparación de los tres coeficientes es interesante porque vemos cómo el poder de predicción de la variable aumenta a medida que pasamos del de rentas bajas al de rentas medias, y de este al de rentas altas.

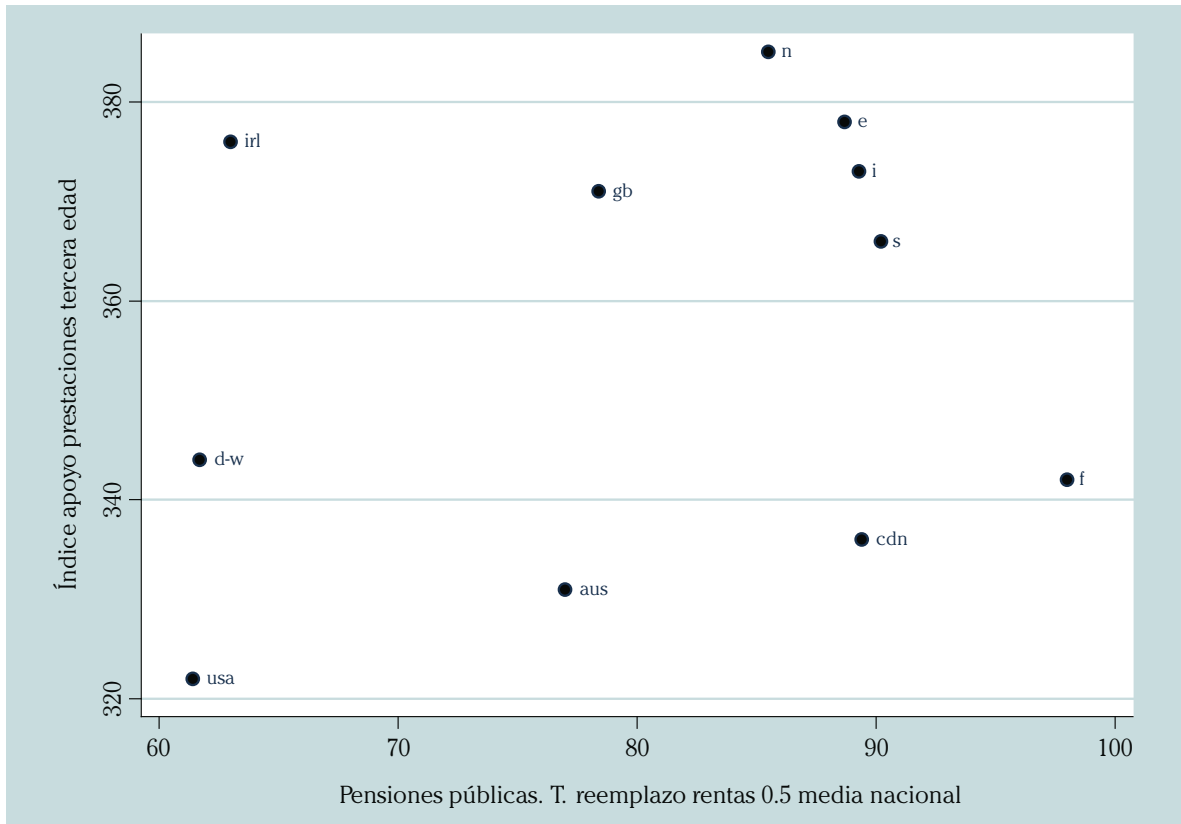
Es por ello que, pese a que todas las relaciones han sido revisadas de forma gráfica sin incluirlas en el texto por no ofrecer mayor información, vamos a mostrar gráficamente la relación entre las tres tasas de reemplazo y la legitimidad del programa.

En el gráfico 10.4 tenemos la relación entre la tasa de reemplazo de las pensiones públicas (y obligatorias) para las rentas más bajas: familias que viven con ingresos de menos de la media nacional⁹. Con un primer vistazo ya resulta evidente que no existe una relación entre la tasa de reemplazo para las rentas bajas y el apoyo agregado, algo que no nos sorprende porque, siguiendo nuestras hipótesis, el factor fundamental para conseguir legitimidad no es la generosidad del sistema con los que están abajo, sino el ser generoso con ellos y con todos los demás.

⁹ En todos los países las mayores tasas de reemplazo se aplican a este colectivo, ya que de otra manera no sólo quedarían en la pobreza al jubilarse (como ocurre aunque la tasa de reemplazo sea del 100%) sino también por debajo del mínimo de subsistencia.

Gráfico 10.4.

*Tasa de reemplazo de las pensiones públicas y legitimidad.
Tasas para rentas de 0.5 la media nacional*

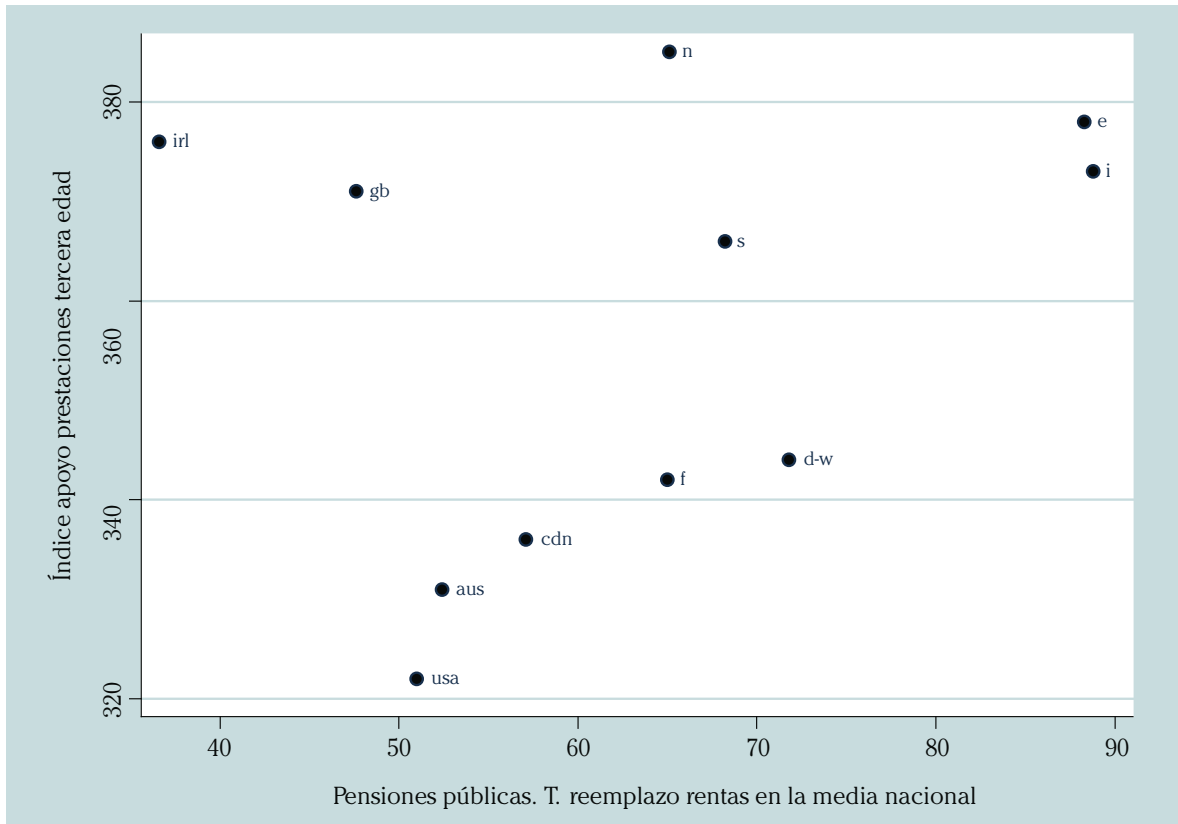


Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Cuando en lugar de utilizar la tasa de reemplazo de las pensiones públicas para rentas bajas utilizamos la que corresponde a las rentas medias (gráfico 10.5), el panorama sigue siendo bastante confuso, aunque ahora siete de los once países se colocan en una pauta por la que quienes tienen tasas de reemplazo más altas para las rentas medias logran también mayores porcentajes de apoyo agregado. Lógicamente, trabajando con pocos casos tener cuatro «outliers» es demasiado para que logremos hallar relaciones significativas. Incluso una técnica como el multinivel, que al combinar la varianza entre e intra grupos nos permite afinar mucho las conclusiones incluso con pocos casos, nos indica que la relación no es clara.

Gráfico 10.5.

*Tasa de reemplazo de las pensiones públicas y legitimidad.
Tasas para rentas en la media nacional*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

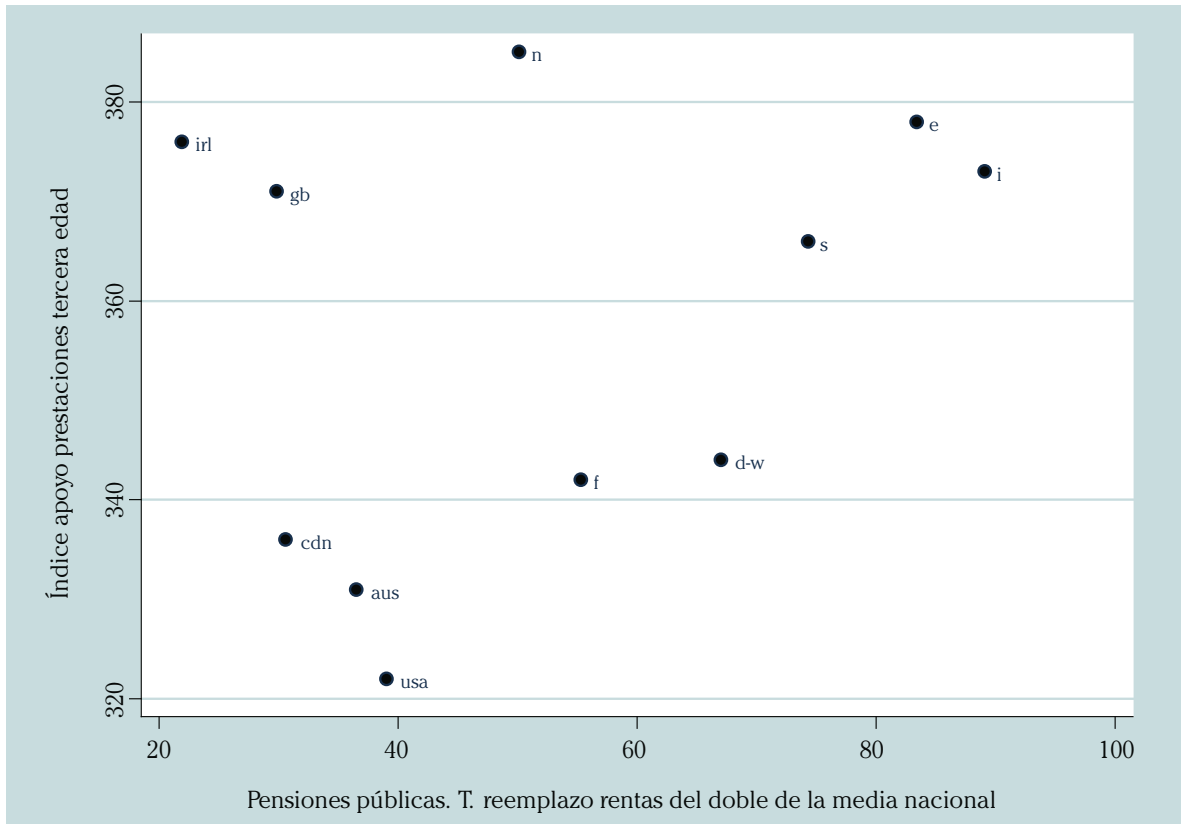
En el gráfico 10.6 tenemos la relación entre la tasa de reemplazo para rentas altas (el doble de la media nacional) y la legitimidad de las pensiones públicas. Ahora hay tres países que se desvían de la pauta prevista: Irlanda, Inglaterra y Noruega. Para el resto, las altas tasas de reemplazo están asociadas con mayor legitimidad del programa, y viceversa.

La presencia de los tres *outliers* hace que la relación no sea significativa, pero lo interesante de los tres gráficos anteriores es que, a medida que las tasas de reemplazo son elevadas no sólo para los colectivos de ingresos bajos sino también para aquellos con altos ingresos, nuestras expectativas sobre el apoyo que los programas de pensiones deberían recibir se cumplen en mayor medida.

Una de las mayores carencias del análisis es que no contamos con un indicador de lo que las personas tienen que pagar en contribuciones para financiar las pensiones. En las hipótesis vimos que las dos vías mediante las que se conseguía un sistema integrador eran: prestaciones claramente relacionadas con las contribuciones y altas tasas de reemplazo para todas las rentas. Evidentemente, cualquier sistema caracterizado por un alto reemplazo a lo largo de toda la escala de ingresos conlleva elevadas contribuciones, pero la relación entre lo que se paga y lo que se recibe puede ir por otra vía.

Gráfico 10.6.

*Tasa de reemplazo de las pensiones públicas y legitimidad.
Tasas para rentas del doble de la media nacional*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Si las contribuciones son pequeñas y lo que se recibe también lo es, las pensiones públicas podrían «interesar» a todas las clases sociales aunque todos complementen el colchón que les ofrece el Estado mediante planes privados. Sería necesario llevar a cabo un análisis con más datos y más países para poder ver las interacciones entre estas dos cuestiones pero, por ahora, quizás lo más razonable es concluir que aunque organizar un sistema de pensiones mediante contribuciones elevadas y altas tasas de reemplazo para todos los colectivos de ingresos es una vía segura para que la población lo apoye masivamente y, por tanto, para que sobreviva a lo largo del tiempo, pueden existir vías alternativas. Para decidirse por una u otra habrá que tener en cuenta otras ventajas e inconvenientes de cada tipo de organización.

10.5. Comparación de los programas públicos de desempleo

10.5.1. Indicadores

Finalmente, vamos a aplicar un procedimiento similar a los anteriores en el caso de las intervenciones que el Gobierno lleva a cabo para proteger a los desempleados. Los indicadores de los cinco aspectos mediante los que compararemos los programas de desempleo de los once países son los siguientes:

1. *Extensión del programa*

Las transferencias económicas conforman, en todos los países, el grueso de las intervenciones dirigidas a la protección de los desempleados y, con mayor o menor generosidad, constituyen la red de seguridad de los trabajadores frente a este riesgo. Sin embargo, existe una vía complementaria de actuación que tiene bastante importancia en algunos países: las políticas activas de empleo. Los programas que se desarrollan bajo este calificativo están basados en la formación de desempleados tanto para actualizar sus competencias como para dirigirlos de sectores en declive a otros con mayor demanda de mano de obra. La base de datos SOCX de la OCDE distingue, dentro del gasto público dedicado a la protección por desempleo, entre las prestaciones directas y las políticas activas, lo que nos permite utilizar el gasto en políticas activas de empleo como indicador de la extensión de la intervención estatal en temas de desempleo.

2. *Integración del programa*

La definición de un programa «integrador» es que ofrezca un servicio o una prestación con la calidad o cuantía suficiente como para interesar a la mayoría de los ciudadanos. No sabemos qué cuantía es la que los ciudadanos desean, pero suponemos que estará relacionada con el nivel de vida al que están acostumbrados, y que lo que interesará a los colectivos de rentas medias y altas es que la prestación esté directamente relacionada con sus ingresos anteriores. El mejor indicador que hemos encontrado es la tasa de reemplazo media de los subsidios de desempleo en cada país.

Hay que hacer una puntualización. El riesgo de desempleo ni es universal (sólo afecta a la población activa) ni está igualmente distribuido entre los colectivos económicos. La gente con baja cualificación y estatus laboral tiene mucha más probabilidad de pasar por períodos de desempleo que aquellos con altos estudios, por lo que cualquier intervención del Estado en desempleo va a ser más progresiva que las que pueda realizar en sanidad y pensiones y, ya de entrada, va a interesar menos a las clases medias y altas que a las bajas. Precisamente por ello la organización de las prestaciones de desempleo debería ser fundamental para entender el apoyo agregado que consiguen.

3. *Esfuerzo de la economía*

Gasto público en subsidios de desempleo como porcentaje del PIB.

Gasto público en subsidio de desempleo dividido entre el porcentaje de desempleados.

El esfuerzo que un país realiza para proteger a sus desempleados depende no sólo de cuanto está gastando sino de cuánta gente está actualmente en situación de desempleo. Este porcentaje varía mucho de un país a otro, especialmente porque la época que estamos analizando, mediados de los 90, se caracterizó por enormes tasas de desempleo en algunos países. Por ello vamos a complementar el gasto público en subsidios de desempleo con otro dato: el porcentaje de gasto público en prestaciones de desempleo dividido por el porcentaje de población activa desempleada.

4. *Costes percibidos*

Impuestos y contribuciones para rentas altas, medias y bajas.

5. *Pertenencia a un gran edificio de bienestar*

Gasto social en porcentaje del PIB.

Tabla 10.9.

Características de los programas de desempleo

| PAÍS | Gasto en políticas activas de empleo (% PIB) | Tasa de reemplazo media de las prestaciones | Gasto en prestaciones por desempleo (% PIB) | Desempleo sobre población activa (1995) |
|------------|--|---|---|---|
| Australia | .84 | .27 | 1.29 | 8.5 |
| Alemania | 1.36 | .26 | 2.08 | 8.2 |
| Inglaterra | .45 | .18 | .89 | 8.7 |
| EE. UU. | .2 | .12 | .35 | 5.6 |
| Italia | 1.13 | .19 | .68 | 11.9 |
| Irlanda | 1.68 | .26 | 2.57 | 12.3 |
| Noruega | 1.34 | .39 | 1.08 | 5.0 |
| Suecia | 2.4 | .27 | 2.3 | 8.8 |
| Canadá | 1.29 | .19 | .57 | 9.5 |
| España | 2.46 | .39 | .81 | 22.9 |
| Francia | 1.31 | .37 | 1.43 | 11.7 |

Gasto en prestaciones de desempleo y gasto en políticas activas de empleo en porcentaje del PIB: OECD SOCX. Tasa de reemplazo media de las prestaciones por desempleo: OECD (1998) *Benefit systems and work incentives*.

Porcentajes de desempleo: OECD (1999) *Employment Outlook*.

10.5.2. Características asociadas a la legitimidad

Al igual que hicimos en los apartados anteriores, calcularemos modelos multinivel para cada una de las características que podrían estar explicando la variación internacional en la legitimidad de los programas públicos de desempleo.

El primer modelo no lleva ninguna variable y sólo nos sirve para saber qué parte de la variación en actitudes depende del país en el que los individuos viven. Esta es la parte que vamos a tratar de explicar. En este caso, un 14.4% de lo que varían los encuestados en sus opiniones sobre los programas de desempleo depende del país en el que viven.

En el segundo modelo no aparece ninguna característica de los programas de bienestar. Tan sólo tres variables individuales que están muy relacionadas con las opiniones sobre las intervenciones públicas en materia de bienestar: la posición económica, la ideología, y el sexo. El hecho de que estas variables no se distribuyan igual en todos los países explica un 25% de la variación internacional en actitudes. Nos queda por tanto que en torno a un 11% de lo que los ciudadanos varían entre sí depende del país en el que viven y, nosotros creemos, de la forma que adopte el programa de desempleo en cada país. Vamos a ver hasta qué punto los datos que tenemos confirman esta suposición.

Tabla 10.10.

Modelos multinivel. Características de los programas de desempleo

| | MO | REFERENCIA | EXTENSION | INTEGRACION |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Pos. económica, Ideología, sexo | Gasto políticas activas de empleo | Tasa reemplazo. Prestaciones |
| Variación entre países | 0.095 | 0.0747 | 0.026 | 0.030 |
| Variación en cada país | 0.563 | 0.520 | 0.520 | 0.520 |
| Significatividad | | | Signif. dto. Modelo ref. | Signif. dto. Modelo ref. |
| % Variación entre países explicada | | 25 % del modelo vacío | 65 % Modelo ref. 74 % Modelo vacío | 59 % Modelo ref. 69 % Modelo vacío |

Tabla 10.11.

Modelos multinivel. Características de los sistemas de bienestar

| | ESFUERZO | | COSTE | | | EDIFICIO BIENESTAR |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Gasto prestaciones (% PIB) | Gasto en prestaciones / (% desempleo) | Impuestos rentas altas | Impuestos rentas medias | Impuestos rentas bajas | Gasto social (% PIB) |
| Variación entre países | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.075 | 0.066 | 0.054 |
| Variación dentro de cada país | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 |
| Significatividad | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. | No signif. |
| % de la variación entre países explicada | | | | | | |

Como ocurría para el caso de la sanidad o las pensiones, la variación internacional en el apoyo a la intervención estatal en temas de desempleo no depende del esfuerzo económico que el país esté haciendo para desarrollar estos programas, puesto que el porcentaje de gasto público en esta partida no correlaciona con el nivel de apoyo que el programa consigue. Además, cuando ponderamos el porcentaje de gasto público por el porcentaje de población desempleada, tampoco vemos ningún efecto significativo sobre la legitimidad.

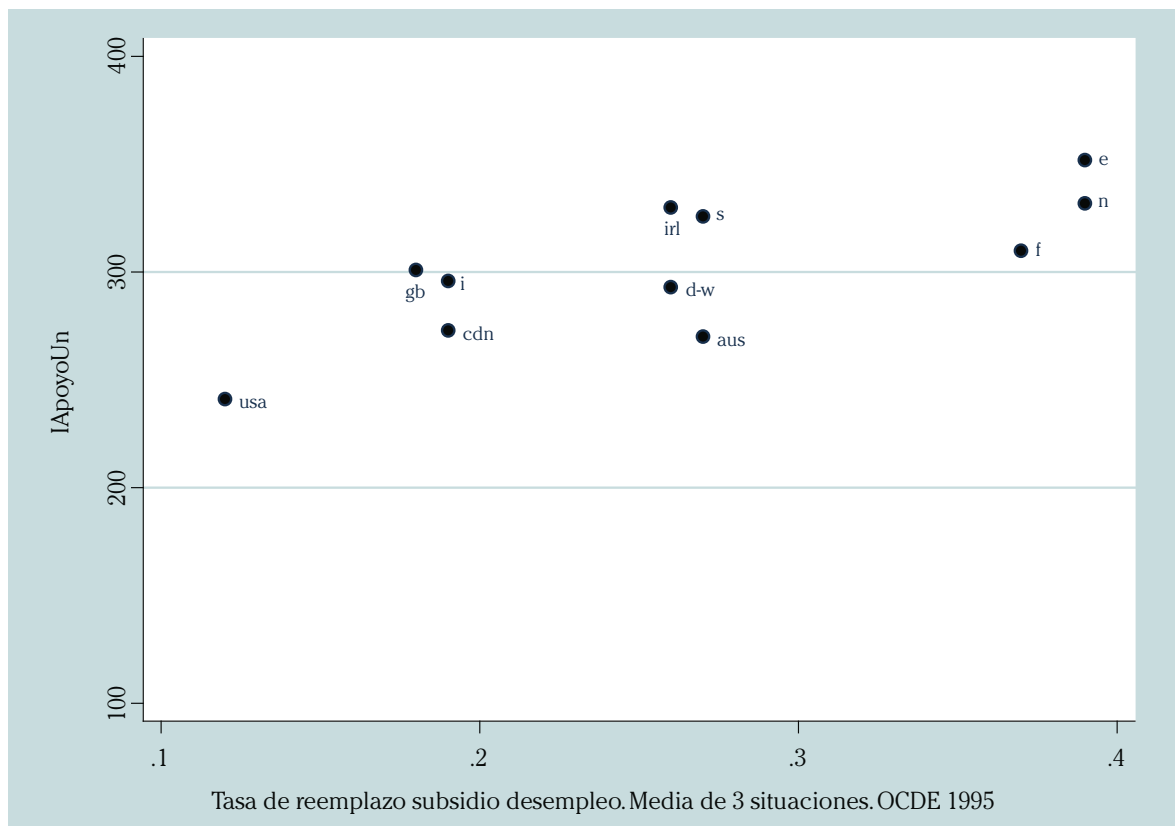
Los costes visibles del Estado del Bienestar no parecen incidir en lo que la gente opina sobre los programas de desempleo, como no lo hace el que el programa esté inserto en un gran sistema público de bienestar. Al igual que ocurría para sanidad y pensiones, la legitimidad del programa de desempleo no se deriva de cómo sea el sistema de bienestar en conjunto sino, aparentemente, de cómo es el programa en concreto.

Los dos indicadores que sí correlacionan claramente con el apoyo que los ciudadanos muestran son los relativos a la extensión y a la integración del programa.

El gasto en políticas activas de empleo, un extra que viene a sumarse al gasto en prestaciones extendiendo las áreas de actuación del Estado, muestra una fuerte correlación con la legitimidad de estas intervenciones para proteger a los desempleados. Asimismo, la tasa de reemplazo de las prestaciones tiene una relación fuerte con el apoyo que consiguen.

Gráfico 10.7.

Integración de los programas de desempleo y legitimidad



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

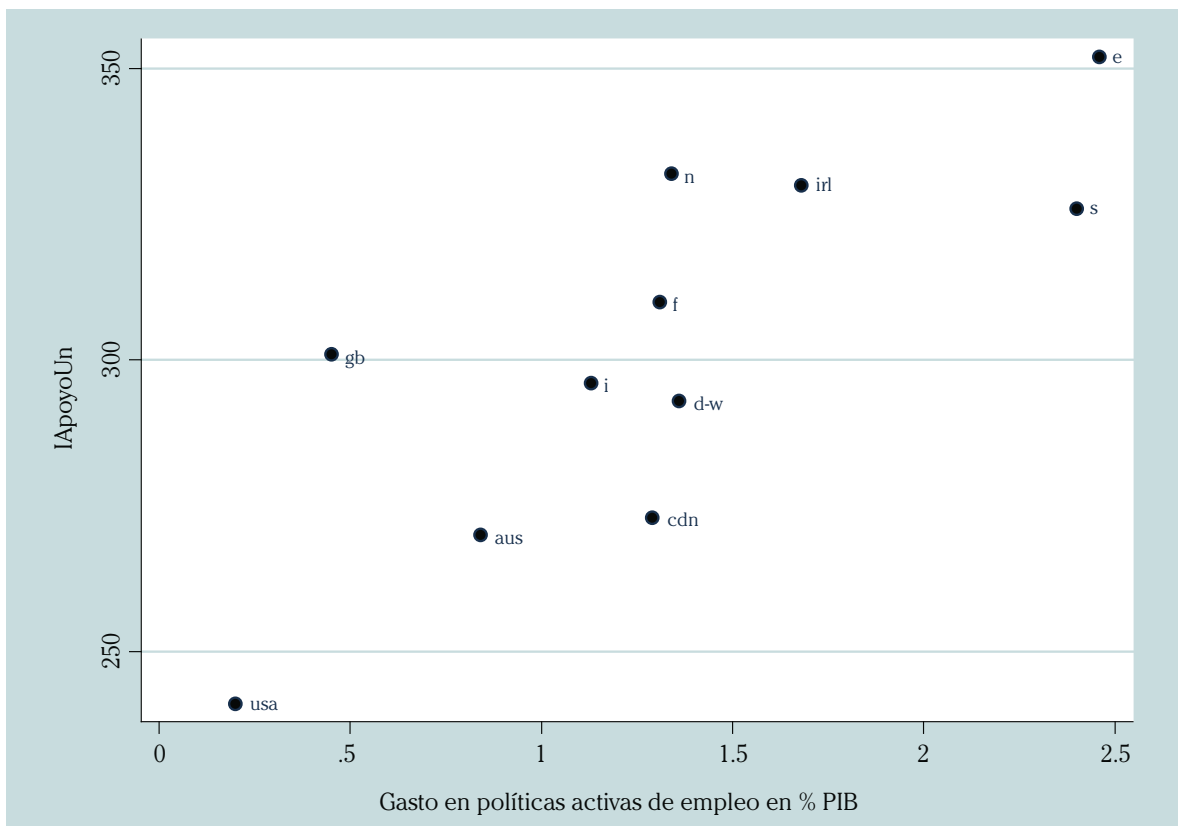
En términos de variación explicada, el gasto en políticas activas de empleo explicaría el 65% de la variación internacional en legitimidad de los programas de desempleo, y la tasa de reemplazo explicara casi lo mismo: un 59%. Ambos efectos tienen, seguramente, mucho de solapamiento, pero sería necesaria una muestra de países más amplia para comprobar qué parte de la variación internacional en legitimidad explica cada uno. Por ahora, baste decir que los programas de desempleo que cubren un mayor número de necesidades de los desempleados (en este caso, no sólo ingresos para subsistir sino también formación), y que tienen mayores tasas de reemplazo, son los que más apoyo ciudadano logran.

El gráfico 10.7 muestra la posición de cada país en relación a dos características de sus programas de desempleo: la tasa de reemplazo de las prestaciones, y el apoyo popular a que el programa exista.

La relación entre ambas cuestiones es bastante clara, y vendría a explicar que un país como España, con un Estado del Bienestar mucho menos extenso que los nórdicos, tenga más apoyo a las prestaciones públicas de desempleo que Suecia o Noruega. O que Italia, que destaca por el apoyo que sus ciudadanos otorgan a los programas públicos de sanidad y pensiones, se «descuelgue» aquí del grupo de cabeza.

Gráfico 10.8.

Extensión de las intervenciones por desempleo y legitimidad



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

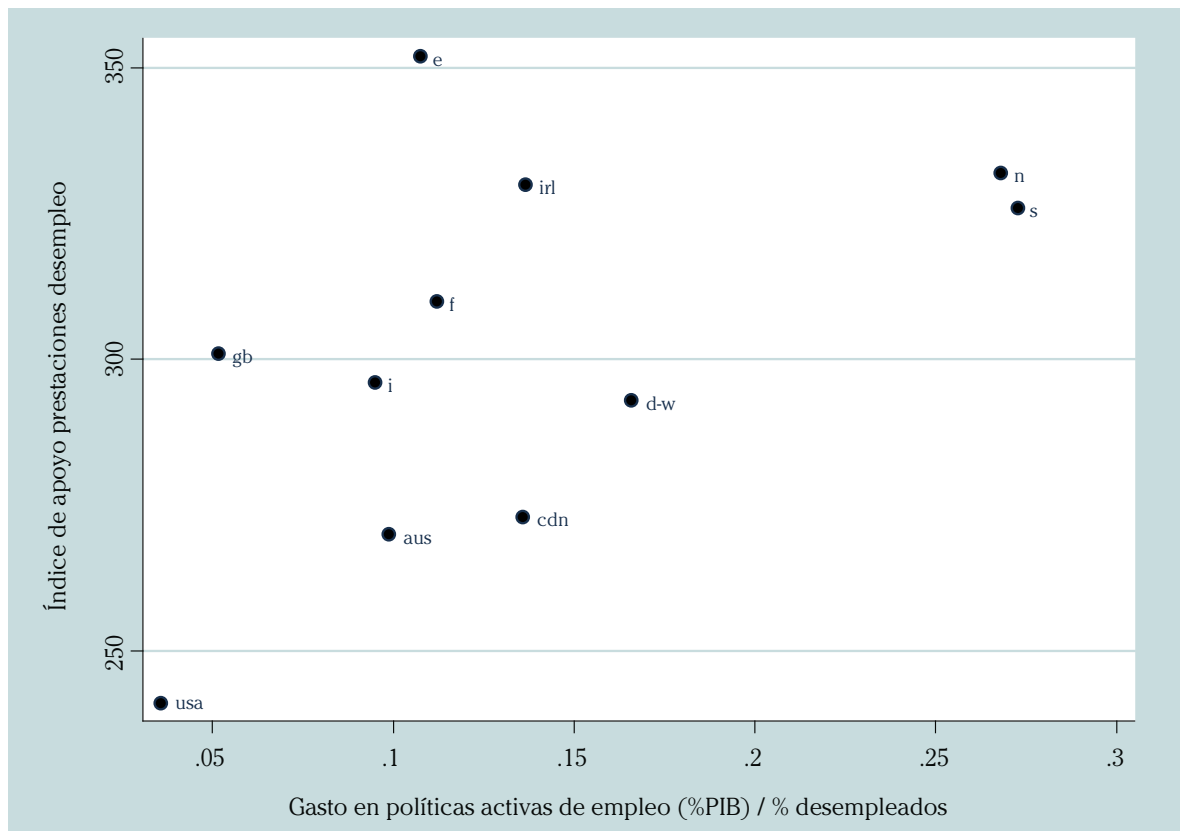
Por supuesto, otras cuestiones seguramente explican parcialmente esta pauta, aunque no parece que el porcentaje de desempleo sea una de ellas. Cada país tenía en 1995 tasas de desempleo muy distintas, pero en este mismo año podemos encontrar países con desempleo muy alto (España), o muy bajo (Noruega), y el mismo apoyo a que el Estado intervenga para proteger a los desempleados.

En el gráfico inferior aparece la relación entre el gasto en políticas activas de empleo y las opiniones de los ciudadanos sobre lo adecuado o inadecuado de que el Estado intervenga para proteger a quienes se quedan sin trabajo.

En los modelos multinivel vimos que, estadísticamente, era más importante la relación entre la extensión del programa y su legitimidad que la que existía entre el grado de integración y la legitimidad. En el gráfico 10.8 es evidente que la pauta existe, y sin embargo está mucho más influenciada que la anterior por el efecto de dos casos extremos: Estados Unidos, con un gasto en políticas activas de empleo bajísimo y además poco apoyo a la intervención estatal en desempleo, y España, con mucho gasto en esta partida complementaria a las prestaciones y mucho apoyo a la intervención estatal. Estos dos países son, respectivamente, el que menos (junto a Noruega) y más desempleo tienen, lo que nos hace dudar de la relación.

Gráfico 10.9.

*Extensión de la intervención en desempleo
(ponderada por el porcentaje de desempleados) y legitimidad*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

Pero si ponderamos el gasto en políticas activas de empleo por el porcentaje de población desempleada y volvemos a repetir el modelo de regresión, la relación sigue siendo estadísticamente significativa. Ahora explica menos variación que antes, un 32%, pero nos permite afirmar con más seguridad que la extensión del programa guarda relación con el apoyo que consigue.

Lo que podemos decir, como conclusión, es que si bien diversas razones puede venir a explicar que algunos programas de desempleo tengan tanto apoyo, a la luz de nuestros datos la que tiene mayor peso se refiere a la integración de estos programas. No hay programas con altas tasas de reemplazo y bajo apoyo, como no los hay con bajas tasas de reemplazo y mucho apoyo. La extensión de la intervención estatal también parece derivar en apoyo ciudadano, aunque la relación es más suave que la anterior.

10.6. Conclusiones

El objetivo de este capítulo era determinar qué características concretas de los programas de bienestar explican la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y el apoyo popular. Para ello hemos comparado los once programas de sanidad, pensiones y desempleo conforme a cinco aspectos que, al menos teóricamente, podrían servir para explicar que logren más respaldo en unos países que en otros.

De entre los aspectos que hemos comparado, la extensión del programa y, sobre todo, su grado de integración han demostrado estar asociados con la legitimidad. La intensidad del gasto, la carga fiscal y el tamaño del Estado del Bienestar como conjunto no han mostrado relación con la legitimidad de ninguno de los tres programas estudiados.

En el capítulo 1 vimos que la abundancia de teorías que explican la variación internacional en legitimidad del EB es correlativa a la falta de estudios empíricos al respecto, por lo que tan interesante resulta comentar las relaciones que hemos encontrado, como las que no aparecen por ninguna parte. Empezaremos por estas últimas.

El tamaño del Estado del Bienestar

El gasto social de cada país no tiene relación con la magnitud del apoyo que reciben los programas de bienestar por separado. Un país puede tener un programa de sanidad apoyado por la inmensa mayoría de la población sin tener un sistema de bienestar extenso (España, Italia) e incluso teniendo poco más que ese programa (Canadá). Y viceversa, podemos encontrar programas con poca legitimidad dentro de sistemas extensos (pensiones en Alemania). Este resultado tiene tres implicaciones fundamentales:

En primer lugar, la legitimidad de cada uno de los programas que componen el edificio de bienestar depende de las características del propio programa y no de las del sistema como conjunto. Para que un programa reciba grandes apoyos no necesita estar inserto en un sistema de bienestar de tipo Socialdemócrata sino, tan sólo, organizarse siguiendo criterios socialdemócratas. El «modelo nórdico» es por tanto transferible a otros países precisamente porque no es necesario trasladarlo entero, sino por piezas.

Debido a esto, podemos afirmar que el alto apoyo que reciben los programas de bienestar en Suecia y Noruega no depende de que en estos países el igualitarismo esté más extendido que en otros, ni de tradiciones colectivistas de raíz medieval, ya que si así fuera no habiéramos encontrado similares niveles de apoyo en países como Irlanda, de tradición anglosajona, o en el Mediterráneo, con una historia y una tradición cultural alejada de la nórdica.

En segundo lugar, la ausencia de relación entre el tamaño del EB y el nivel de apoyo que cada programa por separado recibe implica que se ha sobre-valorado el efecto de las burocracias estatales sobre la legitimidad de los sistemas de bienestar. En países con sistemas de bienestar reducidos y, por tanto, reducidas burocracias estatales, existen programas de bienestar con tanto apoyo, o más, que aquellos imbricados en grandes sistemas con enormes burocracias.

La carga fiscal

A diferencia de lo que algunos teóricos suponían (Wilensky, 1975; Glennester, 1998), la carga fiscal que se impone a los ciudadanos no desincentiva la existencia de actitudes favorables a la intervención estatal en bienestar. En ninguno de los tres análisis realizados (sanidad, pensiones, desempleo) hemos encontrado que esta variable correlacione con el nivel de apoyo de los programas. Resulta especialmente llamativo que, incluso utilizando variables separadas para medir el porcentaje de impuestos que deben pagar los colectivos de rentas bajas, medias, y altas, ninguna muestre la menor relación con el apoyo a los programas de bienestar.

Por supuesto, esto no implica que los ciudadanos sean indiferentes ante lo que se les retiene en impuestos y contribuciones sino que, dependiendo de lo que reciban a cambio, el intercambio puede percibirse como beneficioso. No existe por tanto «aversión fiscal» sino, probablemente, un cálculo menos emotivo y más racional de las condiciones del intercambio entre contribuciones y prestaciones.

Intensidad del gasto

En los tres casos estudiados, comprobamos la relación entre el porcentaje del PIB que se destina a cada partida y el nivel de apoyo agregado de cada programa, no encontrando relaciones significativas para ninguno de ellos.

Esto implica que un país no necesita realizar un gran esfuerzo económico para lograr construir un programa de bienestar que sea aceptado por la mayoría de la población, y viceversa, que puede dedicar muchos recursos sin lograr que el programa sea demasiado apreciado (sanidad en EE.UU.). También implica que es posible dedicar una parte muy importante del PIB a una partida de bienestar sin que ello genere descontento popular (pensiones en Italia y España). En conclusión, la ausencia de relación entre la intensidad del gasto y las opiniones de los ciudadanos sugiere que quizás no sea la cantidad que se gasta sino la forma de gastar lo que acaba derivando en el apoyo o rechazo de importantes sectores de la población.

Extensión e Integración de los programas de bienestar

Las dos características de los programas de bienestar que sí han demostrado tener relación con la variación internacional en legitimidad son la extensión del programa y, sobre todo, el grado en que éste integra a toda la población.

En sanidad y desempleo las variables que utilizamos para medir cuánta gente dependía de los programas como fuente principal de provisión fueron, con mucha diferencia, las que más relación mostraban con la magnitud de los consensos populares, explicando entre el 60 y el 70 % de la variación internacional en legitimidad de los programas de bienestar.

En pensiones ninguna variable aparecía como estadísticamente significativa, pero gráficamente vimos que la integración de las rentas altas era la característica que en mayor medida se asociaba con la legitimidad del programa. De hecho, en pensiones la relación entre la integración (tasa de reemplazo para rentas altas) y la legitimidad no resultaba significativa por la presencia de dos *outliers*: Irlanda e Inglaterra. Noruega se desviaba de la pauta moderadamente y el resto de países la cumplían de forma prácticamente lineal.

Nos resulta extremadamente interesante que estos dos países anglosajones logren tanto apoyo a la intervención del estado en pensiones aun cuando sus sistemas están lejos de integrar a las clases medias y medias altas. Una de las explicaciones podría ser que en Irlanda la pensión pública es muy baja, pero la contribución también lo es, y en Inglaterra se ha permitido a las clases medias dejar de cotizar al segundo nivel del programa público (contributivo) para destinar el dinero a fondos privados. En ambos países las clases medias y medias altas pagan muy poco para mantener el sistema público de pensiones y, aunque este sólo les garantiza ingresos mínimos en la tercera edad, quizás el intercambio les parezca adecuado. En cualquier caso sería necesario llevar a cabo un análisis más detallado e informado de ambos casos.

Volviendo al peso de la integración de los programas sobre las actitudes, acabamos de decir que esta característica explica entre un 60 y un 70 % de la variación internacional en la legitimidad de los programas de sanidad y desempleo, pero hay que recordar que cuando nos referimos a «variación internacional en legitimidad» no nos referimos a toda la variación actitudinal que existe entre los ciudadanos de los once países, sino sólo al porcentaje que no se explica por sus características individuales. Al que depende del país en el que viven y, por tanto, de alguna macro-variable propia al país como el programa de bienestar.

Cuando construimos modelos multinivel sin variables vemos que la variable «país» explica el 12 % de la variación actitudinal en sanidad y pensiones, y el 14 % de la variación en desempleo. Lo que el resto de modelos nos indican es que el efecto del «país» encubre el efecto de una característica del mismo: el grado de integración de sus programas de bienestar. O lo que es lo mismo, que si los programas de sanidad y desempleo de los once países tuvieran el mismo grado de integración, las diferencias entre países en la legitimidad de los programas prácticamente desaparecerían.

En pensiones no tenemos un coeficiente significativo pero, en este tipo de análisis en concreto, no me parece preocupante. La significatividad en nuestros modelos de regresión multinivel nos indica dos cosas: a) que la relación es clara; b) que si tomásemos a los 11 países como una muestra representativa de los países del mundo podríamos generalizar a todos ellos la re-

lación vista. Como esto último es un poco peregrino, nos interesan los test de significatividad como medida de la claridad de las relaciones, y gráficamente vimos que aunque no es todo lo clara que esperábamos, la relación entre el nivel de integración de las pensiones y la legitimidad de los programas sí parece bastante interesante.

En cuanto a la extensión del programa (o rango de actuación), comprobamos que tenía relación con la legitimidad en sanidad, desempleo y pensiones, pero de forma mucho más suave que la que encontramos para la integración.

El que un programa sanitario no sólo cubra la atención médica básica sino también la de especialistas, que financie no sólo las terapias sino también los medicamentos, parece derivar en mayor legitimidad. Que los programas de pensiones garanticen no sólo unas rentas sino además servicios residenciales o de asistencia domiciliaria, y que la intervención en desempleo se traslade en transferencias de dinero, pero también en formación e inserción para los desempleados, consigue aumentar los apoyos que los programas reciben.

Sin embargo, el hecho de que la integración del programa tenga mucho más poder explicativo que la extensión del mismo nos indica que no es posible basar la legitimidad exclusivamente en atender a quienes, por su peor situación o trayectoria, más necesitan del apoyo del Estado. Para lograr un alto nivel de apoyo, un programa debe ofrecer algo en calidad o cuantía suficiente como para beneficiar/interesar a todas las clases sociales y, sobre esa base, dedicar un esfuerzo extra a quienes lo requieran.

Vamos a comentar esto con más detalle en las conclusiones, pero lo que se extrae del efecto de la extensión y la integración sobre la legitimidad de los programas es que no podemos contar sólo con el altruismo de los colectivos de rentas medias y medias-altas para sustentar un sistema de bienestar. El altruismo sin duda existe, y es lo que en gran medida explica que las políticas dirigidas a grupos específicos no reciban sólo el apoyo de estos colectivos, pero los consensos masivos en torno a un sistema de bienestar no se consiguen por esa vía. Cuidar de que la prestación general sea de calidad, y construir sobre ella prestaciones especiales para colectivos con mayores necesidades parece, a la luz de los datos, la organización más eficiente para maximizar la legitimidad.

Capítulo 11. Resumen y Conclusiones

11.1. Importancia de las opiniones sobre el Estado del Bienestar.

11.2. Resumen de resultados.

11.2.1. Dos fenómenos: la legitimidad y el Estado del Bienestar.

11.2.2. Marco teórico e hipótesis: integración y legitimidad.

11.2.3. Resultados del análisis de datos.

11.2.4. Uniendo todos los cabos.

11.3. Limitaciones de los resultados.

11.4. Implicaciones académicas y políticas.

11.1. Importancia de las opiniones sobre el Estado del Bienestar

En la (ya lejana) introducción de este trabajo argumentamos brevemente que para cualquier gobierno resulta importante conocer las opiniones de los ciudadanos sobre los programas de bienestar. Quisiéramos comenzar este capítulo final volviendo a este tema y ofreciendo algunas razones para justificar el interés de nuestro objeto de estudio con el fin de que el lector pueda juzgar lo relevante (o irrelevante) de las conclusiones a las que hemos llegado.

Conocer las opiniones políticas de los ciudadanos

En cualquier sistema democrático existe la expectativa de que los gobernantes respondan adecuadamente a los deseos de la mayoría pero, para que esto sea posible, el primer requisito es que exista información sobre lo que esta mayoría opina. Demasiado frecuentemente el único contacto que tienen nuestros líderes políticos (en el gobierno o en la oposición) con sus representados se produce a través de otros líderes de grandes o pequeñas asociaciones (ya se trate de la patronal, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o los grupos ecologistas) y esto, que resulta evidentemente positivo, no es suficiente para captar la opinión general por dos razones fundamentales: por un lado porque los líderes no siempre son un fiel reflejo de los ciudadanos (sobre todo en países con bajo asociacionismo como España), y sus opiniones no se corresponden completamente con las de ellos¹. Por otro lado, porque ningún Gobierno puede atender a todas las asociaciones existentes y en los contactos se privilegia a las que son mayores en número o, simplemente, más poderosas en términos económicos o mediáticos.

Ello implica que el proceso mediante el que se traslada la información desde los líderes sociales hasta quienes toman las decisiones infravalora las opiniones de los colectivos que no son muy numerosos, o no tienen ningún tipo de recurso de poder que poner en juego para ser escuchados (Korpi, 1985). Frente a esta realidad, las encuestas son una de las vías más directas y más igualitarias de sondear la opinión popular porque, aunque no permiten ahondar en los temas que nos interesan, como contrapartida dan el mismo peso a la opinión de todos los ciudadanos y todos tienen la misma probabilidad de ser escuchados.

Conocer las opiniones sobre el Estado del Bienestar

Los estudios de opinión pública cumplen un papel necesario en cualquier democracia pero, quizás llevados de un brote egocéntrico, nosotros creemos que aquellos dirigidos a entender las opiniones de la gente sobre los programas públicos de bienestar son especialmente necesarios por dos características fundamentales del Estado del Bienestar: su importancia económica tanto a nivel macro (los presupuestos nacionales) como a nivel micro (las economías familiares), y lo controvertido de cualquier debate sobre el mismo.

¹ En un estudio realizado en Finlandia, Pauli Forma (1996) encontró que las opiniones sobre la forma de organizar los programas de bienestar eran diferentes entre la población general y entre los líderes políticos, demostrando estos últimos utilizar consideraciones más estratégicas que la población. Otro estudio, realizado esta vez en España mediante dos encuestas paralelas, mostró similares resultados. El estudio español (Proyecto REBAAC, UPC-CSIC) se llevó a cabo bajo la dirección del Dr. Luis Moreno, y consistía en pasar la misma encuesta a una muestra representativa de la población (n = 2.500), y a otra muestra, mucho más pequeña (n = 140) de actores políticos relacionados con las políticas de bienestar (líderes de los principales partidos, sindicatos, asociaciones, altos funcionarios).

En cuanto a lo primero, la partida de gasto más importante que cualquier gobierno tiene en sus manos al llegar al poder corresponde al Estado del Bienestar, con lo que las decisiones que se toman sobre cualquiera de sus programas, ya sea para mantenerlos, extenderlos, recortarlos o reorganizarlos, implican el movimiento de una ingente cantidad de recursos y afectan directamente a grandes sectores de la población. En el capítulo 2 vimos que el Estado del Bienestar altera la estructura de desigualdad, modifica los niveles de pobreza, y permite a los individuos pasar con menos sufrimiento económico y emocional las situaciones de ruptura familiar, desempleo, enfermedad o vejez. Por eso, si hay un tema en el que habría que exigir una conexión evidente entre lo que la gente desea y lo que la esfera política implementa, es el de cómo han de funcionar los programas de bienestar.

En segundo lugar está la cuestión de lo controvertido que el tema resulta, algo poco sorprendente si tenemos en cuenta que, además de mover muchos recursos, lo que se decide en este ámbito afecta tanto a la distribución de las rentas en una sociedad como al reparto de las cargas sociales entre trabajadores y empleadores.

Cuando se abre cualquier debate sobre el EB los intereses en juego son muy altos y, lo que es más importante, contrapuestos, lo que se traduce casi directamente en la falta de objetividad de parte de los discursos que se manejan. Como vimos en el capítulo 1, donde explicamos el surgimiento y extensión de aquella etérea «crisis de legitimidad del EB» de los años 90, más de una vez ha ocurrido que las interpretaciones sobre lo que estaba pasando con el sistema de bienestar fuesen absolutamente opuestas o incluso, como afirman algunos autores, que una mezcla de desconocimiento político, esclerosis del discurso económico (Korpi, 1996), y presión directa de grupos interesados en expandir el mercado del bienestar privado (Boyer, 1996; Mishra, 1996; Therborn, 1997; Leys, 2001; Navarro, 2002) constituyan la explicación de algunas de las «crisis» que el Estado del Bienestar ha atravesado durante los últimos 40 años.

In a pluralistic theoretical setting, tendencies to free riding on objectivity could be checked by an attention to empirical data. As underlined by Leontief (1971, 1982), however, in economics empirical studies have been relatively neglected (also Morgan, 1988; Blaug, 1992). From the point of view of objectivity in the social sciences, this is a serious problem. If the verdict between competing hypotheses would be based on empirical data, instead of being a problem the values of social scientists could be harnessed to contribute to scientific progress. When social scientists with different values meet in the analysis of empirical data, their values are likely to generate competition, the virtues of which are not limited to commerce. Such a competition would lead to intensified empirical efforts and social science would benefit. As the more than century-long Sclerosis debate indicates, however, in areas of central relevance for socio-economic conflicts of interest, the conditions for social science progress are –at best– precarious. Given the structure of rewards in Western Societies, where major societal conflicts of interest permeate research areas thin on theoretical pluralism and empirical data, scientific objectivity may easily become a luxury economic man cannot afford (Korpi, 1996, p. 1.744).

The European Welfare State is not in crisis, it is not unviable. It is maintaining itself, both as a pattern of national institutions and as a major commitment of national socio-economic resources. But it is facing a hostile world, from domestic political elites as well as from international forces. (Therborn, 1997, p. 30)

En un tema como éste, tan «sensible» en términos políticos y a la vez tan importante en términos económicos, las elites políticas deberían poder contar con datos empíricos sobre las opiniones de los ciudadanos y, por supuesto, deberían incluir esta información entre los elementos que fundamentan sus decisiones. ¿Es esto una ingenuidad? En absoluto, porque lo cierto es que las encuestas de opinión se han utilizado profusamente por los políticos occidentales en los últimos 20 años para calibrar el rango de acción del que disponían en multitud de temas y, entre ellos, en temas de bienestar.

Volviendo a la crisis del Estado del Bienestar, en los años 80 el discurso económico dominante apuntaba a que, o el EB se desmantelaba inmediatamente, o Europa entera se deslizaría hacia el colapso económico porque la caída de las exportaciones generaría aumento del desempleo, extensión de la pobreza y consiguiente quiebra financiera de los programas de bienestar. Pese a lo alarmante de las previsiones, los recortes que se aplicaron en los programas de bienestar fueron, salvo excepciones, de carácter menor y, entre las razones que se barajan para explicar la ausencia de grandes reformas estructurales en el EB, varios autores (Mishra, 1996; Gooby, 2003b) destacan el efecto de las encuestas de opinión que, al mostrar el enorme apoyo popular al sistema de bienestar, sugerían que el precio político de llevar a cabo las reformas podía ser demasiado alto.

Neoconservative reformers, whether in Britain, the USA or Canada, have not dared to go as far as they have wished in dismantling the Welfare State because of popular support for universal social programmes and interest group opposition to cutbacks. This has led some analyst like Therborn to conclude that Welfare State capitalism 'represents and irreversible development' (Mishra, 1996, p. 316).

En resumen, tanto por la importancia social y económica del Estado del Bienestar, como porque afecta a grandes intereses y es, por ello, proclive a generar conflictos entre actores económicos, sociales y políticos, resulta más que conveniente contar con grandes dosis de información empírica sobre lo que opinan los ciudadanos. El estudio que hemos realizado ofrece, por un lado, un resumen de los conocimientos existentes sobre las actitudes hacia los programas de bienestar y, por otro, un intento de aportar algo nuevo en esta área de estudio. Vamos a resumir brevemente los resultados más relevantes, para finalizar comentando las implicaciones que pueden tener tanto para el debate académico sobre el Estado del Bienestar, como para la acción política.

11.2. Resumen de resultados

11.2.1. Dos fenómenos: la legitimidad y el Estado del Bienestar

El trabajo realizado gira en torno a la relación entre dos fenómenos: las actitudes hacia los programas de bienestar, y la forma en la que estos programas se organizan. En el primer capítulo hicimos un resumen de los conocimientos existentes respecto del primero de los fenómenos, y en el segundo comentamos, con menor nivel de profundidad, los aspectos más relevantes de las tipologías de bienestar surgidas desde 1990.

Comenzando por las actitudes de los ciudadanos hacia la provisión pública de bienestar, explicamos que existe hoy acuerdo entre los académicos respecto a que los dos grandes factores

que determinan estas actitudes son el interés y la ideología. Para poder «predecir» las opiniones de los ciudadanos sobre los programas de bienestar hemos de fijarnos en el interés económico que cada persona tiene en ellos, y en si los valores que sustenta son cercanos al igualitarismo o están próximos al individualismo económico.

Comentamos también que las opiniones de los ciudadanos hacia las políticas de bienestar han demostrado ser llamativamente estables a lo largo del tiempo y que, aunque el apoyo al Estado del Bienestar se encuentra extendido a lo largo de los países occidentales (ver gráficos 1.1, 1.2 y tablas 5.1, 5.2, 5.3), sobre esta base de generalizada legitimidad encontramos importantes variaciones entre países. Los últimos estudios cuyos resultados resumimos en el capítulo 1 eran los que, dentro de la línea comparativa, trataban de desvelar las razones por las que el Estado del Bienestar tiene más apoyo en unos países que en otros, aunque el resumen, en realidad, fue muy breve: aun no se ha llegado a ninguna conclusión firme sobre por qué los países varían en la legitimidad de sus sistemas de bienestar y los pocos estudios que se han llevado a cabo ofrecen resultados contradictorios.

En cualquier caso, a la luz de los estudios previos no parece que la variación internacional en legitimidad del EB dependa de la riqueza de la economía nacional, de la confianza en el sistema político, de la cultura del país o de cuestiones históricas, pero algunos de los estudiosos más importantes sobre sistemas de bienestar comparados sugieren que, para entender la variación internacional en apoyo ciudadano, podría bastar con estudiar las características distintivas de cada sistema. Podría ocurrir que las políticas sociales estén generando, en cierta medida, su propia legitimidad, y que la variación en apoyo popular al Estado del Bienestar corresponda con las diferentes formas que este adquiere a lo largo de Occidente.

Esta es la hipótesis general que decidimos contrastar en nuestro estudio, y la razón fundamental es que la idea tiene un fundamento teórico interesante que, aunque no se ha llegado a desarrollar completamente ni en este trabajo ni en otros, nos permite reflexionar sobre los mecanismos que mueven las opiniones, elaborar un marco teórico para la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad, y diseñar conforme al mismo hipótesis de trabajo cuya contrastación empírica resulte algo más relevante que el mero «alimentar al ordenador» con decenas de variables en una ciega búsqueda de correlaciones.

11.2.2. Marco teórico e hipótesis: Integración y legitimidad

La tipología de Estados del Bienestar desarrollada por Esping-Andersen se fundamenta en varios aspectos de los sistemas públicos de bienestar, uno de los cuales es el grado de *integración real* de los principales programas públicos. Este concepto no sólo hace referencia a que los programas tengan una cobertura legalmente universal sino a que sean, de hecho, utilizados por la mayoría de los ciudadanos como principal seguro frente a los riesgos de enfermedad y pérdida de ingresos por jubilación o desempleo.

Tanto Esping-Andersen como otros expertos en política social comparada han sugerido que los programas más integradores, además de servir en mayor medida que otros para disminuir la desigualdad y la pobreza, deberían lograr los mayores niveles de apoyo ciudadano porque, al incluir a todos los colectivos bajo su manto, el mantenimiento de los mismos interesa a enormes sectores de la población. Con esta sugerencia como punto de partida y con los

conocimientos derivados de la literatura sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar desarrollamos un marco teórico que incluye dos mecanismos mediante los que el grado de integración de los sistemas de bienestar se traslada a lo que los ciudadanos opinan de los mismos:

1. *Interés*. El grado de integración de los sistemas de bienestar modifica en distinta forma la estructura de intereses que se teje en torno a los programas de bienestar. El mantenimiento de los programas de bienestar caracterizados por un bajo nivel de integración real interesa fundamentalmente a los colectivos con menores ingresos, que son quienes pueden beneficiarse de las prestaciones públicas. En el otro extremo, los sistemas de bienestar integradores amplían el tamaño de los colectivos interesados al incluir a las rentas medias y medias-altas entre los receptores de prestaciones.

Dado que la literatura sobre actitudes hacia el Estado del Bienestar ha llegado a la conclusión de que el interés es el principal factor que explica que unos individuos sean más favorables que otros a la existencia de programas de bienestar, la extensión de los colectivos de interesados debería traducirse en mayores niveles agregados de apoyo.

2. *Igualitarismo*. Las actitudes de los individuos hacia los programas de bienestar no sólo están determinadas por su grado de interés en lo que estos ofrecen sino también por los valores que sustentan, lo que se traduce en que las personas que mantienen valores igualitarios tienden a apoyar, en mayor medida que los individualistas, las instituciones que se perciben como instrumentos para incrementar la igualdad social.

El grado de integración de los programas de bienestar puede estar relacionado con estas percepciones ya que los sistemas más integradores, al incluir a toda la población entre los usuarios y al contar con una extensa red de prestaciones relacionadas con los ingresos previos del individuo, pueden ser percibidos como instituciones menos igualitarias que los sistemas que sólo incluyen a las rentas más bajas entre los beneficiarios.

Korpi & Palme (1998) ya apuntaron que, mientras la apariencia de los sistemas integradores es de «efecto Mateo» (dan más a quien más tiene), los sistemas dirigidos aparecen como un «Robin Hood» que quita a los ricos para dar a los pobres. Si los ciudadanos también comparten esta percepción, es posible que los programas más integradores logren un mayor nivel de apoyo popular porque, al ser percibidos como mecanismos más funcionales que redistribuidores, encuentren partidarios tanto entre los igualitaristas como entre los individualistas.

3. *Género*. Independientemente de su grado de integración, los sistemas de bienestar socialdemócratas han demostrado ser los que en mayor medida benefician a los intereses específicos de las mujeres, lo que podría traducirse en que logren más apoyo entre ellas que otros sistemas. Esta es una vía alternativa para explicar la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y el nivel de apoyo agregado, y resulta necesario confirmar si se produce al mismo tiempo que la pauta esperada para el grado de integración, si no se produce, o si ella sola sirve para explicar la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su legitimidad obligándonos a rechazar las primeras dos hipótesis.

11.2.3. Resultados del análisis de datos

La mayoría de los trabajos previos sobre actitudes hacia las políticas públicas y el Estado del Bienestar mostraban la existencia de diferencias entre países en la magnitud del consenso en torno a estas intervenciones gubernamentales² pero, en cuanto a la relación entre tipo de EB y legitimidad, encontramos tanto autores que afirman su existencia como otros que la niegan. El primer paso de nuestro análisis consistió, por tanto, en confirmar que las variaciones entre países son estadísticamente significativas y estudiar hasta qué punto podían estar relacionadas con el tipo de EB.

Primeros análisis

Incluyendo más países que la mayoría de los estudios previos, comprobamos que casi todas las variaciones internacionales en la legitimidad del EB son estadísticamente significativas, es decir que, en general, las actitudes hacia los programas de bienestar son distintas en cada uno de los once países sobre los que hemos trabajado. Sin embargo, aunque cada país parece ser diferente de todos los demás en cuanto a estas actitudes, la variación en legitimidad sigue una pauta consistente para los tres programas analizados (sanidad, pensiones y desempleo): los países con sistemas de bienestar socialdemócratas (Noruega y Suecia) son los que logran más apoyo popular a cualquiera de los tres programas, les siguen los países con Estados del Bienestar de organización corporativa (Alemania y Francia), y los tres países con sistemas libe-

Tabla 5.10.

Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar. Los índices pueden ir de 100 (100 % de la población responde que «De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno») a 400 (100 % de la población considera que «Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno»)

Tabla 5.10a

| | Sanidad |
|------------------|---------|
| Noruega | 386 |
| Suecia | 366 |
| Canadá | 354 |
| Alemania | 347 |
| Francia | 337 |
| Australia | 336 |
| EEUU | 319 |
| Media | 349 |

Tabla 5.10b

| | Pensiones |
|------------------|-----------|
| Noruega | 385 |
| Suecia | 366 |
| Alemania* | 344 |
| Francia | 342 |
| Canadá | 336 |
| Australia | 331 |
| EEUU | 322 |
| Media | 346 |

Tabla 5.10c

| | Desempleo |
|------------------|-----------|
| Noruega | 332 |
| Suecia | 326 |
| Francia | 310 |
| Alemania | 293 |
| Canadá | 273 |
| Australia | 270 |
| EEUU | 241 |
| Media | 292 |

ISSP, 1996. Elaboración propia.

*Los datos de Alemania, para todas las tablas, corresponden sólo a Alemania del Oeste.

² Blekesane & Quadagno, 2003; Svallfors, 2000; Gelissen, 2000; Bonoli, 2000; Kangas & Forma, 1999

rales (Australia, Canadá y EEU) están a la cola del ranking de legitimidad. La única desviación de la pauta se presenta porque Canadá muestra un apoyo ciudadano a la existencia de la sanidad pública mucho mayor del que sería esperable para un país escuadrado en el tipo Liberal de EB, pero esta desviación viene a confirmar nuestra hipótesis sobre la importancia de la integración porque Canadá es el único de los países «Liberales» que cuenta con un sistema de salud universal y bastante integrador.

A la luz de los datos, parece que el tipo de EB podría estar modelando las actitudes de los ciudadanos, aunque también podría ocurrir que el nivel de apoyo a los programas de bienestar no tenga ninguna relación con la forma en la que estos se organizan y dependa sólo de que la distribución de las variables individuales que determinan estas actitudes es distinta en cada país.

Gracias a la literatura previa sabemos que los valores igualitarios y la posición económica constituyen determinantes generales de las actitudes hacia el EB (funcionan en todos los países), con lo que podría ocurrir que la gran legitimidad de los programas de bienestar en algunas naciones no se deba a la forma de organizarlos sino a que en ellos existen más personas con valores igualitarios y/o más pobreza que en el resto. Para ver si esta explicación era útil para comprender la variación internacional en legitimidad de los Estados del Bienestar comparamos las opiniones de personas de once países distintos, pero que eran del mismo sexo y compartían los mismos valores y la misma posición económica.

Los análisis de regresión (multinivel y logística ordinal) indican que el hecho de que haya más pobres y/o más igualitarios en unos países explica una parte de la variación internacional en legitimidad (12 % en sanidad, 16 % en pensiones, 25% en desempleo), pero la mayor parte queda inexplicada y, lo que es más importante, la pauta que habíamos encontrado entre el tipo de EB y las actitudes hacia el mismo se mantiene: los ciudadanos que viven bajo Estados del Bienestar socialdemócratas son, de media, e independientemente de su sexo, valores, o posición económica, más favorables a la existencia de los programas de bienestar que quienes viven en países con sistemas corporativos, y estos a su vez son más favorables que los ciudadanos de naciones donde el EB es de tipo Liberal.

Una vez confirmada la existencia de una relación entre el tipo de Estado del Bienestar y su nivel de legitimidad, el objetivo de todos los análisis posteriores se dirigió a contrastar las hipótesis que habíamos desarrollado sobre los mecanismos que podrían explicarla.

Las fracturas en los consensos nacionales sobre el Estado del Bienestar

El primero de los hipotéticos mecanismos mediante los que la organización de los programas de bienestar podía trasladarse en apoyo ciudadano se sustenta en el interés que distintos colectivos de ingresos tienen en el mantenimiento de programa.

Si las diferencias entre la legitimidad de cada tipo de Estado del Bienestar se producen porque las prestaciones y servicios del tipo Liberal interesan sólo a los colectivos con rentas bajas, las del tipo Corporativo suman a las clases medias pero dejan de lado a las medias-altas, y las del tipo Socialdemócrata interesan a todos independientemente de sus ingresos, deberíamos encontrar que la clase social determina las actitudes con más fuerza en unos países que en otros, y que el nivel de apoyo de los colectivos de ingresos medios y medios-altos está en relación directa con el nivel de integración de los programas bienestar.

Nuestros análisis demostraron que lo anterior es cierto, es decir, que la gente con mejor posición económica es más partidaria de que existan programas de bienestar cuando estos son de tipo integrador, pero la conclusión más relevante del análisis fue descubrir que no sólo son los «ricos» quienes prefieren programas integradores, sino que también aquellos con rentas muy bajas se muestran más favorables al Estado del Bienestar si sus programas no sólo se dirigen a ellos y cubren también al resto de ciudadanos.

Aunque el grado de integración del programa afecta más a las opiniones de los individuos mejor situados, no es sorprendente que los ciudadanos con bajos ingresos tengan actitudes más positivas hacia los programas de bienestar integradores ya que, además de eliminar el estigma asociado a cualquier ayuda para «pobres», la calidad de los servicios y la cuantía de las prestaciones es mayor que la que ofrecen los sistemas poco integradores. Como ya señaló el académico finlandés Olli Kangas (1991), dirigir todos los esfuerzos de bienestar a los más pobres no es sinónimo de ofrecerles prestaciones de calidad sino todo lo contrario.

Nuestra hipótesis asumía que las clases bajas serían homogéneamente similares en sus opiniones sobre el EB a lo largo de los países estudiados y que, por ello, la mayor legitimidad de esta institución en algunos países debía provenir de haber logrado sumar el apoyo de otras clases sociales. A la luz de los datos esto es sólo parcialmente cierto porque hemos demostrado que, si bien las clases medias son más heterogéneas entre países que las clases bajas en sus opiniones sobre los programas de bienestar, ambas reaccionan en mayor o menor medida ante las características de la provisión social que se les ofrece. Esto explica que, aunque en los sistemas socialdemócratas existe más apoyo al EB entre la gente con más ingresos, sigan existiendo fracturas entre las opiniones de los mejor y peor situados económicamente porque el efecto que logran no es tanto acercar las opiniones de clases bajas y medias altas (sólo ligeramente) sino alzar el nivel de apoyo de todos ellos. Como ilustración de lo dicho volvemos a presentar la tabla 6.8 que, junto a las correspondientes a sanidad y desempleo incluimos en el capítulo 6.

El segundo de los mecanismos que ofrecimos para explicar la relación entre el tipo de EB y las actitudes de los ciudadanos tenía que ver también con el grado de integración del sistema pero, en este caso, con los efectos que podía tener sobre el contenido ideológico que se atribuye al mismo. Si los programas más integradores son percibidos por los ciudadanos como menos car-

Tabla. 6.8.

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de pensiones

| PAÍS | Índice de apoyo a las pensiones públicas | Fracturas económicas | % apoyo fuerte. Ingresos inferiores al 50 % mediana | % apoyo fuerte. Ingresos un 50 % superiores mediana |
|------------------|--|----------------------|---|---|
| Noruega | 385 | Baja | 85.0 | 79,7 |
| Suecia | 366 | Moderada | 79.9 | 58.7 |
| Alemania | 344 | Moderada | 56.7 | 37.9 |
| Francia | 342 | Fuerte | 60.1 | 34.7 |
| Canadá | 336 | Baja | 53.5 | 46.8 |
| Australia | 331 | Moderada | 47.7 | 29.2 |
| EE. UU. | 322 | Fuerte | 52.7 | 26.9 |

gados de ideología, y a través de esta vía logran aumentar su nivel de apoyo, deberíamos encontrar más variación internacional en las actitudes hacia el EB entre los individualistas que entre los igualitaristas, y que los primeros son más proclives a apoyar los programas de bienestar cuando se organizan de forma Socialdemócrata, menos cuando lo hacen de forma Corporativa, y menos aun si siguen el modelo Liberal.

Nuestro análisis confirmó que las dos pautas anteriores se producen. El tipo Socialdemócrata de EBs se caracteriza por tener sus consensos en torno a los programas de sanidad y pensiones poco (Noruega) o moderadamente (Suecia) fracturados según líneas ideológicas. El tipo Conservador de Estados del Bienestar presenta relaciones entre moderadas y fuertes, y el tipo Liberal suele tener el consenso en torno al EB fracturado de forma fuerte por la ideología.

El tercero de los mecanismos mediante los que el tipo de EB podía trasladarse a las actitudes ciudadanas se refería al distinto esfuerzo que en cada uno se realiza para disminuir las desigualdades de género. Diversos autores consideran que el tipo Socialdemócrata es el que en mayor medida beneficia a las mujeres y, por ello, era necesario confirmar hasta qué punto la superior legitimidad del mismo no se derivaba, total o parcialmente, de haber conseguido ganar más apoyo femenino que el resto.

En el capítulo 8 pudimos ver que este tercer mecanismo no funciona y que las diferencias entre las opiniones de hombres y mujeres hacia la existencia de programas de bienestar es más o menos similar a lo largo de todos los países estudiados. Sirva como ejemplo el siguiente gráfico, que muestra las diferencias de opinión al hablar de las prestaciones por desempleo entre hombres y mujeres con los mismos ingresos e ideología.

Como punto final del análisis de los consensos en torno a los programas de bienestar bajo cada uno de los tipos de EB, realizamos una comprobación de que las pautas vistas no se producían al hablar de otros temas ajenos a estos programas.

Tabla 7.7.

Tipo de Estado del Bienestar, índice de apoyo a los programas de pensiones, «Fractura ideológica» y efecto de la ideología sobre las actitudes hacia estos programas*

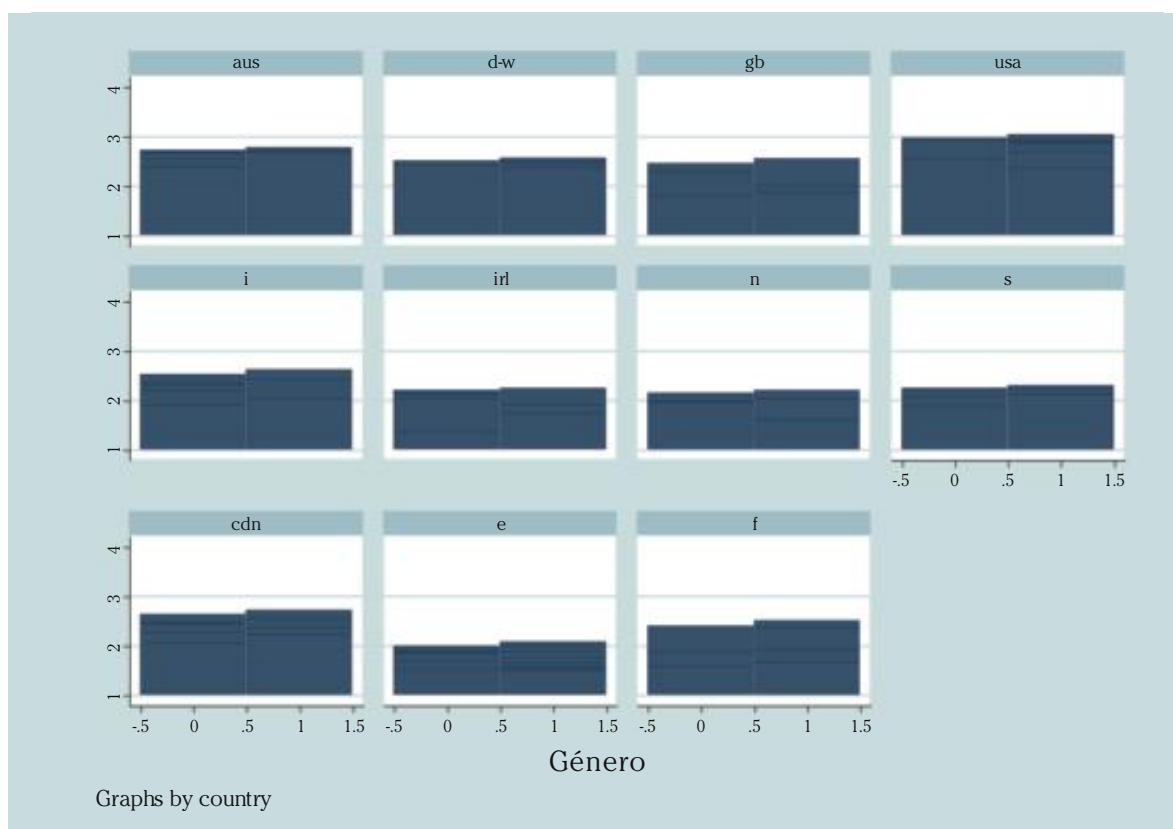
| Tipo EB | País | Sanidad | Ideología | Tipo EB | País | Pensiones | Ideología |
|------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Socialdemócrata | Noruega | 386 | Baja | Socialdemócrata | Noruega | 385 | Baja |
| | Suecia | 366 | Media | | Suecia | 366 | Media |
| Liberal | Canadá | 354 | Media | Conservador | Alemania | 344 | Media |
| Conservador | Alemania | 347 | Media | | Francia | 342 | Fuerte |
| | Francia | 337 | Fuerte | Liberal | Canadá | 336 | Baja |
| Liberal | Australia | 336 | Fuerte | | Australia | 331 | Fuerte |
| | EEUU | 319 | Fuerte | | EEUU | 322 | Fuerte |

Elaboración propia con datos del ISSP 1996.

*Índices de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en varias áreas de bienestar. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que *De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno*) a 400 (100% de la población considera que *Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno*)

Gráfico 8.1.

*Actitudes hacia la intervención del Estado en apoyo a los desempleados.
Hombres y mujeres con la misma ideología y la misma posición económica relativa*



Aus: Australia, d-w: Alemania del Oeste, gb: Reino Unido, usa: EE.UU., i: Italia, irl: Irlanda, n: Noruega, s: Suecia, cdn: Canadá, e: España, f: Francia.

En los once países analizamos el efecto de los ingresos y la ideología sobre las actitudes hacia otras intervenciones del Estado, específicamente, analizamos las fracturas actitudinales en función de los ingresos y de la ideología en las opiniones sobre la intervención del Estado en el sector eléctrico y en el sector financiero.

Los resultados de estos análisis mostraron que las pautas que servían para explicar la legitimidad de cada tipo de EB no funcionan cuando las intentamos aplicar a otros ámbitos, lo que supone una confirmación de que estas dependen del Estado del Bienestar existente en cada país, y no de cuestiones más profundas como los valores culturales o las actitudes políticas en general.

Integración de los programas y legitimidad

Cada uno de los tres tipos de Estado del Bienestar definidos por Esping-Andersen presenta distinto grado de integración real, pero lo cierto es que esta no es la única variable que les distingue. El nivel de gasto, la forma de financiación o el rango de necesidades cubiertas por los programas de bienestar también difieren entre los tipos de EB y, por tanto, cualquiera de ellas

podría estar generando las diferencias de legitimidad que hemos ido viendo. Con el fin de confirmar que los mecanismos detallados dependen del grado de integración de cada tipo de EB y no de otras características, en el capítulo 10 utilizamos regresiones multinivel con las actitudes hacia los programas de bienestar como variables dependientes y distintas características de los programas de bienestar, y de los sistemas de bienestar en conjunto, como posibles variables explicativas.

Respecto a las características del sistema, incluimos indicadores de dos aspectos que nos parecían clave: su extensión (medido por el porcentaje del PIB destinado a gasto social) y su coste (medido como el porcentaje del salario que destinan a impuestos y contribuciones las familias de rentas bajas, medias y altas).

En cuanto a las características de los programas, en los tres casos estudiados (sanidad, pensiones, desempleo) nos pareció relevante incluir la intensidad del gasto en el programa, su grado de integración, y su extensión, es decir, el rango de necesidades a las que el programa atiende dentro de su área de actuación.

Los análisis demostraron que el indicador de la integración del programa era el que en mayor medida correlacionaba con la legitimidad del mismo, llegando a explicar el 70% de la variación internacional en actitudes hacia la sanidad pública y el 60% de la variación en actitudes hacia los programas de desempleo. En ambos casos, las relaciones encontradas son estadísticamente significativas, lo que implica que las podemos generalizar al conjunto de países que son «similares» a los 11 con los que trabajamos: básicamente, países occidentales de renta alta.

En el caso de los programas de pensiones, el indicador que más correlaciona con su nivel de apoyo es el que trataba de medir el grado en que el sistema interesa no sólo a las clases bajas sino también a las medias y medio-altas (utilizamos la tasa de reemplazo de las pensiones para rentas medio-altas), pero en este caso la relación no es significativa por la existencia de dos *outliers*: Inglaterra e Irlanda, con sistemas de pensiones que presentan bajas tasas de reemplazo y, sin embargo, obtienen gran apoyo popular. Para el resto de países, la relación entre integración de las rentas altas y legitimidad es prácticamente lineal.

Además del grado de integración, la extensión del programa también correlaciona con el apoyo popular: en sanidad, pensiones y desempleo los programas que cubren un amplio rango de necesidades logran más apoyo que los restringidos. Sin embargo, la correlación entre la extensión del programa y su nivel de legitimidad es más suave que la que existe entre la legitimidad y el grado de integración real.

Igual de interesante que las correlaciones es la ausencia de ellas, y pudimos comprobar que el tamaño del Estado del Bienestar en su conjunto, la carga fiscal que se impone a los ciudadanos y el esfuerzo económico dedicado a cada programa no muestran ninguna relación con la legitimidad.

Causalidad

En el análisis del capítulo 10 cobran mucha importancia los países con sistemas de bienestar mixtos (sistemas en los que cada programa se organiza de una manera distinta), ya que por su propia heterogeneidad interna nos sirven como instrumento de control.

Gracias a ellos podemos ver que, cuando un programa se organiza de forma integradora, logra un alto apoyo independientemente de que esté localizado en la zona nórdica (sanidad en Suecia y Noruega), anglosajona (sanidad en Canadá) o Mediterránea (sanidad española), y que dentro del mismo país los programas son más o menos respaldados en función de su integración: Italia tiene mucho apoyo a los programas de sanidad y pensiones (muy integradores), pero el apoyo a las prestaciones por desempleo (menos integradoras porque las tasas de reemplazo no son altas) es bastante más tibio. En Inglaterra convive un enorme apoyo al programa de sanidad (muy integrador), con un sistema de prestaciones de desempleo que, con menores tasas de reemplazo que la media, está también por debajo de la media en legitimidad.

Esto es importante para establecer la causalidad de la relación entre el nivel de legitimidad de un programa y su grado de integración. Nuestra hipótesis asumía que el nivel de integración causaba un aumento progresivo de la legitimidad por los dos mecanismos que vimos en los capítulos 6 y 7 (extiende los colectivos con interés directo en el EB y difumina el contenido ideológico del mismo) aunque, evidentemente, podría ser a la inversa.

Podría ocurrir que en los países donde había más apoyo previo a la intervención estatal en bienestar se implantasen programas integradores, y allí donde la gente era más reacia a la provisión pública, se implantaran programas de último recurso dirigidos a los más pobres.

En el capítulo 9 ya tratamos de desmontar esta hipótesis de la causalidad inversa mediante el análisis de las fracturas en los consensos hacia otras intervenciones estatales pero, cuando en el capítulo 10 comprobamos que la relación entre nivel de integración y legitimidad no funciona para el sistema de bienestar en su conjunto sino para cada programa concreto, la idea de que la legitimidad genera la integración del programa se hace más difusa.

Para justificarla tendríamos que encontrar una explicación al hecho de que las clases medias, medias-altas, y los individualistas fuesen más favorables a una intervención concreta del gobierno (por ejemplo, sanidad) previamente a que el programa se implantase e independientemente de lo que opinaban sobre otras intervenciones del Gobierno, y que su apoyo a esta intervención concreta se haya trasladado de una generación a otra ya que una parte importante de quienes pertenecían a estos colectivos cuando se determinó la forma de los programas de bienestar están hoy muertos.

Aunque existe la posibilidad de que esta hipótesis de la causalidad inversa se llegue a desarrollar de forma teórica y verificar de manera empírica, por ahora nuestras hipótesis nos parecen más razonables.

11.2.4. Uniendo todos los cabos

La conclusión que podemos extraer de todos los análisis realizados a lo largo de este trabajo es que el tipo de Estado del Bienestar correlaciona con el nivel de apoyo popular.

El tipo Socialdemócrata muestra los mayores niveles de apoyo, seguido por el Corporativo y con el Liberal en última posición. Esta relación se produce porque el grado de integración de los programas de bienestar es muy alto en el tipo Socialdemócrata, moderado en el tipo Corporativo y bajo en el tipo Liberal. Cuando analizamos Estados del Bienestar mixtos apreciamos que la integración de los programas correlaciona con el nivel de apoyo independientemente de cómo funcione el resto del sistema.

Dos mecanismos trasladan el grado de integración de cada programa a las actitudes de la población, cada uno de los cuales está basado en uno de los determinantes generales de las actitudes hacia el Estado del Bienestar:

En primer lugar, cuanto mayor sea la integración de un programa de bienestar, mayores serán los colectivos que reciben servicios y prestaciones, que tienen un interés directo en que este siga existiendo, y desarrollan en consecuencia actitudes favorables al mismo.

En segundo lugar, cuanto más integrador es un programa, cuanto más beneficia tanto a las clases bajas como a las medias y medias-altas, en mayor medida pierde contenido ideológico a ojos de los ciudadanos y en mayor medida encuentra partidarios entre quienes sustentan valores individualistas en lo económico.

La integración, entendida como la inclusión de las clases medias y medias-altas en el sistema, genera legitimidad, pero también la extensión del programa tiene un efecto positivo sobre el apoyo popular. Los programas que cubren mayor rango de necesidades logran más apoyo que los restringidos debido, probablemente, a que aunque no integran a nuevos colectivos hacen que la dependencia del programa público sea mayor. Un ejemplo: si el sistema de atención a la tercera edad incluye no sólo las pensiones sino también residencias, centros de día, y asistencia domiciliaria, la dependencia que los mayores adquieren respecto del mismo es mayor que si sólo les diera una transferencia en metálico, y la mayor vinculación se traduce en actitudes más positivas hacia el programa.

Los programas muy integradores y extensos lograrán el mayor apoyo porque todo el mundo tiene algo que perder si desaparecen, y algunos tienen muchísimo que perder.

11.3. Limitaciones de los resultados

Una vez que hemos argumentado nuestra interpretación de los resultados, es necesario puntualizar que estos tienen bastantes limitaciones: ligeras limitaciones derivadas del número de países estudiados, moderadas limitaciones por las pocas preguntas utilizadas para medir el apoyo hacia el Estado del Bienestar, y grandes aspectos susceptibles de mejorar en lo que respecta a los indicadores de la posición económica y la ideología de los individuos, y en lo referente a las características de los programas de bienestar.

En cuanto a la muestra de países, creo que el número es adecuado. Incluye suficiente variedad en cuanto a la organización de los programas y distintas zonas culturales dentro de Occidente. Incluir un mayor número de casos hubiera hecho imposible tener un conocimiento, siquiera superficial, de las características de los tres programas con los que hemos trabajado en cada país. Sin embargo, hay que tener presente que la muestra abarca exclusivamente países occidentales «ricos», y que por tanto las conclusiones de este estudio son sólo generalizables al resto de países que se encuentran en este grupo.

Podemos atrevernos a afirmar que las pautas encontradas funcionarían igualmente para Holanda, Bélgica o Nueva Zelanda, pero no tenemos base suficiente para decir que la legitimidad de las políticas sociales en países Sudamericanos o Asiáticos funciona de la misma manera. En cualquier caso, las conclusiones extraídas de analizar a los países occidentales pueden servir como punto de partida para el estudio de otras zonas.

En cuanto a las preguntas de la encuesta ISSP, en el capítulo dedicado a la metodología justificamos que las cuestiones elegidas para indicar el nivel de legitimidad de cada programa tuviesen carácter general y, aunque consideramos que la decisión fue correcta, es sin duda necesario replicar el análisis utilizando preguntas distintas: tanto preguntas con alto nivel de generalidad como las nuestras pero formuladas de manera diferente, como otras más concretas que incidan en las opiniones de los ciudadanos sobre el gasto en los programas de bienestar y su disposición a seguir financiándolo vía impuestos o contribuciones.

En el capítulo metodológico justificamos asimismo la elección de las variables independientes utilizadas como indicadores de la posición económica (posición económica relativa en función de los ingresos familiares) y de los valores igualitarios de los individuos (actitudes hacia la redistribución). Entre las razones que basaron la selección de estas variables se encuentran tanto cuestiones sustantivas basadas en el conocimiento previo de las actitudes hacia el Estado del Bienestar como otras, más prosaicas, derivadas de las limitaciones de nuestra base de datos.

En futuros estudios sería interesante poder trabajar con un indicador más complejo de posición económica que incluyera no sólo los ingresos del individuo sino también su nivel educativo y su posición en el mercado de trabajo (asalariado, autónomo, ama de casa, pensionista, desempleado, estudiante). Además, el análisis mejoraría elaborando un indicador «compuesto» de los valores igualitarios o individualistas, es decir, un indicador que incluyera las respuestas a una batería de preguntas sobre la redistribución, la pobreza y las desigualdades sociales, en lugar de tomar sólo la primera de estas cuestiones como hemos hecho nosotros.

Finalmente, en el capítulo 10 comentamos que los datos utilizados para medir las características de los sistemas y programas de bienestar se refieren, en casi todos los casos, a aspectos cuantitativos. Hemos utilizado datos referidos al gasto para medir cuestiones que, en realidad, son de carácter organizativo, y esto ha sido así únicamente por no poder encontrar indicadores cualitativos homogéneos para todos los países con los que trabajábamos. Cuando la base de datos del proyecto SCIP (elaborada en el Swedish Institute of Social Research) se haga pública, sería más que conveniente repetir los análisis del capítulo 10 utilizando sus nuevos (y en principio mejores) indicadores.

Todo lo anterior son mejoras que se podrían realizar a la hora de llevar a cabo el análisis de datos pero no quisiera terminar este bloque de autocritica sin tocar un tema más importante que los anteriores porque no se refiere a los datos sino a la forma de interpretarlos.

Al comenzar este trabajo decidí centrarme en el estudio de tres programas de bienestar: la sanidad, las pensiones de vejez, y los subsidios de desempleo, por considerar que constituyen el núcleo «duro» del Estado del bienestar y porque están presentes en todos los países occidentales. Si bien sigo pensando que la elección fue correcta, creo que debería haber prestado mucha más atención a la diferencia entre los programas de sanidad y pensiones, y aquellos destinados a la protección por desempleo.

Aunque los tres programas son el núcleo del EB, existe una diferencia de fondo entre ellos porque, mientras los dos primeros atienden a riesgos universales e inevitables, el tercero sirve para dar protección frente a un riesgo cuya frecuencia está en relación directa con el estatus laboral y que puede considerarse en cierta medida «evitable». Esta distinción se refleja en que, como hemos mencionado a lo largo de nuestro análisis, los programas de desempleo logran siempre menos apoyo que los de sanidad o pensiones, pero sería necesario analizar con más detalle las diferencias entre la legitimidad de los programas que cubren riesgos universales e inevitables (sanidad, pensiones, discapacidad) y la de esos otros, como el desempleo o los seguros por accidente de trabajo, cuyos beneficiarios pueden ser considerados por alguna gente como «corresponsables» de la situación en la que se encuentran.

11. 4. Implicaciones académicas y políticas

Creemos que el presente trabajo tiene implicaciones interesantes no sólo para el ámbito académico sino, también, para la esfera política en la que se decide cómo deben organizarse los programas de bienestar.

En primer lugar, pese a que bastantes estudios habían demostrado la existencia de variaciones internacionales en la legitimidad del Estado del Bienestar, no se había cuantificado la importancia de las mismas. Nosotros hemos visto que, incluso utilizando preguntas muy generales sobre si los programas de bienestar deberían, o no deberían existir, las diferencias son sustanciales: un 12 por ciento de la variación total en las actitudes hacia los programas públicos de sanidad depende del país en el que el ciudadano viva, llegando al 14 por ciento al hablar de pensiones o desempleo. Para conocer la relevancia de estos porcentajes es preciso compararlos con los que han hallado otros estudios de política social comparada. La evaluación PISA (OCDE), por ejemplo, encontró que en 2003 el 10% de la variación internacional en rendimiento escolar dependía del país en el que los alumnos cursaran sus estudios, entendiendo que este 10% reflejaba el efecto del sistema educativo sobre el rendimiento. Pese a que la muestra incluía países tan distintos como Finlandia, Brasil y Corea, el porcentaje se considera muy relevante.

Además, hemos demostrado que la variación entre países en las opiniones sobre las políticas de bienestar no se produce de manera caótica sino que sigue la pauta de los tipos de Estado del Bienestar definidos por Esping-Andersen, lo que implica que no podemos explicar la distinta legitimidad del EB entre países haciendo referencia exclusivamente a tradiciones nacionales o valores inmanentes a una zona. Esta relación entre el tipo de Estado del Bienestar y la legitimidad tiene, además, bastante interés para la esfera política, ya que su existencia supone al mismo tiempo un riesgo y una ventaja.

El riesgo es que la forma en la que se diseñe un programa de bienestar puede acabar minando el apoyo ciudadano al mismo. Para decidir cómo organizar los sistemas de bienestar no sólo hay que tener en cuenta su coste y sus efectos materiales sino, también, sus posibles efectos sobre la legitimidad. Los sistemas de bienestar con servicios y prestaciones dirigidos exclusivamente a los colectivos de rentas bajas pueden ser más baratos en términos económicos pero más «caros» en legitimidad y, por ello, más inestables a lo largo del tiempo.

La ventaja «política» que nuestros resultados ofrecen es que, como el apoyo de los ciudadanos a los programas públicos de bienestar no depende de las tradiciones culturales del país, es perfectamente posible exportar un modelo organizativo de un país a otro aunque los contextos culturales de ambos se encuentren alejados, lo que abre la vía para el aprendizaje político y para «copiar» los modos de organización cuyos logros sociales o económicos se consideren positivos.

Finalmente, vimos que la relación entre el tipo de Estado del Bienestar y la legitimidad se produce, fundamentalmente, por la existencia de una relación entre el grado e integración de cada programa de bienestar por separado y el nivel de apoyo que consigue, y que esta relación se produce para cada programa, independientemente de cómo se organice el resto del sistema de bienestar. Este resultado tiene, de nuevo, implicaciones académicas y políticas.

Para los estudios sobre sistemas de bienestar comparados nuestro trabajo muestra que, si bien el tipo de EB es útil para realizar estudios exploratorios sobre los distintos efectos de los Estados del Bienestar, cuando queremos entender cómo o por qué cada tipo de EB logra distintos resultados debemos analizar los programas de bienestar por separado. En otras palabras: las tipologías de Estados del Bienestar son útiles para ver qué ocurre y el estudio detallado de los programas es necesario para saber por qué ocurre.

En cuanto a las implicaciones políticas, quisiera destacar dos que me parecen especialmente útiles:

En primer lugar, es necesario abandonar la idea de que el coste de un programa de bienestar es un obstáculo insuperable para ponerlo en marcha. Los programas integradores son a la vez los más caros y los que más apoyo popular reciben y, puesto que son los ciudadanos quienes los financian a través de sus impuestos y contribuciones, si ellos están dispuestos a pagarlos no existe un obstáculo real para su implantación.

En segundo lugar, el que los programas de bienestar no necesiten estar integrados en un gran Estado del Bienestar para ser viables en términos de legitimidad es esperanzador para los países con sistemas de bienestar poco desarrollados y cuyos gobernantes aspiran a mejorar la red de protección social. Como hemos ido viendo, los programas dependen de sí mismos para conseguir partidarios, por lo que es perfectamente posible implantar, por ejemplo, un sistema nacional de salud allí donde no existe ninguna otra política de bienestar. No es necesario poner en juego al mismo tiempo todos los elementos que configuran los sistemas de bienestar desarrollados para empezar a construirlos, y podría ser quizás más conveniente ir creando los programas uno a uno para darles tiempo a constituir su base de apoyo. Lo importante, eso sí, es que cualquiera que sea el programa se organice de forma que integre a todos los colectivos de ingresos bajo el mismo paraguas, ya que esta manera da a todos una razón material para considerar que la existencia de programa les favorece y disminuye paralelamente la carga ideológica del mismo logrando el apoyo de quienes no sustentan valores igualitarios.

Llegados a este punto, creo que la conclusión de las 275 páginas anteriores cabe en dos líneas:

Es viable, para cualquier país, implantar cualquier tipo de programa de bienestar, y también para todos es posible mantener un amplio Estados del Bienestar.

Por lo tanto, la implantación de programas de bienestar que disminuyan la pobreza y las desigualdades, que creen sociedades más justas, más seguras, y más humanas, resulta ser una decisión exclusivamente ética. Una decisión que depende fundamentalmente de nuestros principios acerca de lo que es justo o injusto, aceptable o inaceptable. En palabras del prestigioso economista Robert Boyer:

Our epoch needs more political intervention and fewer naïve beliefs that markets will overcome our ignorance and make the strategic choices that governments have been unable, until now, to make and implement (Boyer, 1996, p. 110)⁴.

² «Nuestra época necesita más intervención política y menos creencias ingenuas de que los mercados solventarán nuestra ignorancia y realizarán las elecciones estratégicas que los gobiernos han sido, hasta ahora, incapaces de tomar e implementar» (Boyer, 1996, p. 110)

Este trabajo de investigación se terminó de escribir,
con un ordenador que tenía tendencia a apagarse súbitamente,
y frente a una ventana que miraba al monte,
en Comillas (Cantabria), a 1 de septiembre de 2007.

Anexos

Anexo 1

Modelos de regresión logística ordinal del capítulo 6

Modelos de regresión logística ordinal con las preguntas sobre los programas de sanidad y pensiones como variables dependientes, los países en forma de dummies, e interacciones entre el efecto del país y el efecto de la posición económica relativa

| Sanidad | Coef. | P > z | Pensiones | Coef. | P > z |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| _laustrali_1 | .343616 | 0.000 | _laustrali_1 | .4610065 | 0.000 |
| Prmedian | .4811419 | 0.000 | Prmedian | .5478833 | 0.000 |
| _lausXprme~1 | -.0488497 | 0.746 | _lausXprme~1 | -.0145792 | 0.923 |
| _luk_1 | -1.408095 | 0.000 | _luk_1 | -1.011664 | 0.000 |
| _lukXprmed_1 | .2885691 | 0.185 | _lukXprmed_1 | .4767521 | 0.017 |
| _lusa_1 | .6782191 | 0.000 | _lusa_1 | .5638176 | 0.000 |
| _lusaXprme~1 | .5451365 | 0.002 | _lusaXprme~1 | .4327669 | 0.013 |
| _litaly_1 | -1.35317 | 0.000 | _litaly_1 | 1.151236 | 0.000 |
| _litaXprme~1 | -.4312368 | 0.059 | _litaXprme~1 | -.3149168 | 0.143 |
| _lnorway_1 | -1.888095 | 0.000 | _lnorway_1 | -1.849964 | 0.000 |
| _lnorXprme~1 | .1749138 | 0.491 | _lnorXprme~1 | -.0357459 | 0.884 |
| _lsweden_1 | -.7577926 | 0.000 | _lsweden_1 | -.854395 | 0.000 |
| _lswexprme~1 | -.2584168 | 0.186 | _lswexprme~1 | .190141 | 0.335 |
| _lcanada_1 | -.3670025 | 0.000 | _lcanada_1 | .1838863 | 0.019 |
| _lcanXprme~1 | -.3921219 | 0.035 | _lcanXprme~1 | -.4310504 | 0.018 |
| _lspain_1 | -1.420666 | 0.000 | _lspain_1 | -1.446488 | 0.000 |
| _lspaXprme~1 | -.4315083 | 0.024 | _lspaXprme~1 | -.2880657 | 0.127 |
| _lfrance_1 | .0357932 | 0.645 | _lfrance_1 | -.0669727 | 0.389 |
| _lfraXprme~1 | .2542299 | 0.175 | _lfraXprme~1 | .494549 | 0.008 |
| _lireland_1 | -1.151455 | 0.000 | _lireland_1 | -1.324065 | 0.000 |
| _lireXprme~1 | .432968 | 0.046 | _lireXprme~1 | .1591803 | 0.468 |
| /cut1 | .0922891 | -.0000524 | /cut1 | -.0004899 | -.0922582 |
| /cut2 | 2.785568 | 2.667841 | /cut2 | 2.856719 | 2.738359 |
| /cut3 | 4.315203 | 4.130082 | /cut3 | 4.614543 | 4.411672 |

Sanidad: Número de casos = 13776. Prob > chi2= 0.0000

Pensiones: Número de casos = 13801. Prob > chi2= 0.0000

Modelos de regresión logística ordinal con la pregunta sobre el programa de desempleo como variable dependiente, los países en forma de dummies, e interacciones entre el efecto del país y el efecto de la posición económica relativa

| Desempleo | Coficiente | P > z |
|--------------|------------|-----------|
| _laustrali_1 | .6292932 | 0.000 |
| _Prmedian | .5824262 | 0.000 |
| _lausXprme~1 | -.1042965 | 0.479 |
| _luk_1 | -.2390887 | 0.004 |
| _lukXprmed_1 | .5274676 | 0.003 |
| _lusa_1 | 1.23237 | 0.000 |
| _lusaXprme~1 | .345583 | 0.044 |
| _litaly_1 | -.2404467 | 0.002 |
| _litaXprme~1 | .2411058 | 0.221 |
| _lnorway_1 | -1.013278 | 0.000 |
| lnorXprme~1 | .0162852 | 0.929 |
| _lsweden_1 | -.8858338 | 0.000 |
| _lsweXprme~1 | .097716 | 0.588 |
| _lcanada_1 | .4919301 | 0.000 |
| _lcanXprme~1 | -.0061412 | 0.973 |
| _lspain_1 | -1.729198 | 0.000 |
| _lspaXprme~1 | -.0580163 | 0.728 |
| _lfrance_1 | -.5708097 | 0.000 |
| _lfraXprme~1 | .2982165 | 0.105 |
| _lireland_1 | -1.047256 | 0.000 |
| _lireXprme~1 | .1950885 | 0.290 |
| /cut1 | -1.345495 | -1.441126 |
| /cut2 | 1.219343 | 1.124573 |
| /cut3 | 2.932521 | 2.816496 |

Desempleo: Número de casos = 13392. Prob > chi2= 0.0000

Anexo 2

El efecto de la posición económica relativa sobre las actitudes, en los 11 países.

Coeficientes para la relación entre ingresos y actitudes hacia los programas de bienestar. Se calculan a partir del modelo anterior, sumando el coeficiente medio para toda la muestra con la variación específica de cada país. En el Anexo 3 se muestran los test de significatividad entre cada par de coeficientes, información que sirvió para establecer grupos de países en cuanto a la magnitud de las fracturas económicas en sus consensos en torno al Estado del Bienestar.

| Sanidad | Coeficiente variable para cada país | Coeficiente medio + desviación país |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| EE.UU. | .54 | 1.02 |
| Irlanda | .43 | .91 |
| Inglaterra | .28 | .76 |
| Francia | .25 | .73 |
| Noruega | .17 | .65 |
| Alemania | 0 (cat. Ref.) | .48 |
| Australia | -0.05 | .43 |
| Suecia | -.25 | .23 |
| Canadá | -.39 | .09 |
| España | -.43 | .005 |
| Italia | -.43 | .005 |

| Pensiones | Coeficiente variable para cada país | Coeficiente medio + desviación país |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Francia | .49 | 1.04 |
| Uk | .48 | 1.03 |
| EE.UU. | .43 | .98 |
| Suecia | .19 | .74 |
| Irlanda | .16 | .71 |
| Alemania | 0 | .55 (cat. Ref.) |
| Australia | -0.01 | .54 |
| Noruega | -0.04 | .50 |
| España | -0.29 | .26 |
| Italia | -0.31 | .24 |
| Canadá | -0.43 | .12 |

| Desempleo | Coeficiente variable para cada país | Coeficiente medio + desviación país |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Inglaterra | .52 | 1.1 |
| EE.UU. | .35 | .93 |
| Francia | .30 | .88 |
| Italia | .24 | .82 |
| Irlanda | .19 | .77 |
| Suecia | .10 | .68 |
| Noruega | .02 | .60 |
| Alemania | 0 (cat. Ref.) | .58 |
| Canadá | -.006 | .57 |
| España | -.06 | .52 |
| Australia | -.10 | .48 |

Anexo 3

T-tests de los coeficientes de interacción país*prmedian de la regresión logística ordinal

| Sanidad | Coe f | It | Esp | Cdn | Sw | Aus | Ger | Nor | Fr | Uk | Irl | EE.UU. |
|---------------|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|
| IT | | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| Esp | | = | = | = | = | - | - | = | - | - | - | - |
| Cdn | | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| Sw | | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| Aus | | | + | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| Ger | | + | + | + | = | = | = | = | = | = | - | - |
| Nor | | + | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fr | | + | + | + | + | = | = | = | = | = | = | = |
| Uk | | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = | = |
| Irl | | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = |
| EE.UU. | | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = |

| Pensiones | Coe f | Cdn | It | Esp | Nor | Aus | Ger | Ire | Sw | EE.UU. | Uk | Fr |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|-----|----|
| Cdn | | = | = | = | = | — | — | — | - | - | - | - |
| It | | = | = | = | = | = | = | = X | - | - | - | - |
| Esp | | = | = | = | = | = | = | = X | - | - | - | - |
| Nor | | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = X | - |
| Aus | | + | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| Ger | | - | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
| Ire | | + | = X | = X | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Sw | | + | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = |
| EE.UU. | | + | + | + | = | + | + | = | = | = | = | = |
| Uk | | + | + | + | = X | + | + | = | = | = | = | = |
| Fr | | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = |

| Desempleo | Aus | Sp | Cdn | Ger | Nor | Sw | Irl | It. | Fr. | EE.UU. | Uk |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|----|
| Aus | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
| Sp | = | = | = | = | = | = | = | = | = X | - | - |
| Cdn | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| Ger | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
| Nor | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| Sw | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| Ire | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| It | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fr | + | = X | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| EE.UU. | + | + | = | + | = | = | = | = | = | = | = |
| Uk | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = |

Anexo 4

Fracturas económicas y legitimidad en los países con sistemas de bienestar «mixtos»

La pauta que explica la mayor legitimidad de unos tipos de Estado del Bienestar sobre otros funciona, evidentemente, también para los países mixtos, aunque en este caso su posición puede variar según hablemos de un programa u otro de bienestar ya que no siguen una organización coherente. España e Irlanda están siempre a la cabeza de la legitimidad. Italia e Inglaterra varían, dependiendo de que hablemos de sanidad y pensiones, o de desempleo.

En cualquier caso sirve para ellos lo dicho para los demás: cuando en estos países un programa de bienestar tiene mucha legitimidad, ello no se debe tanto a que las diferencias de opinión entre las clases sociales hayan desaparecido, como a que el nivel medio de apoyo es superior para todas las clases.

Tabla 6.7.b

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de sanidad.

| País | Índice de apoyo a la sanidad pública | Fracturas económicas | % apoyo fuerte entre ingresos inferiores al 50% mediana | % apoyo fuerte entre ingresos un 50% superiores mediana |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| Noruega | 386 | Moderada | 89.2 | 82.4 |
| España | 380 | Baja | 87.4 | 79.7 |
| R. Unido | 380 | Fuerte | 88.1 | 72.4 |
| Italia | 379 | Baja | 77.6 | 80.5 |
| Irlanda | 374 | Fuerte | 83.1 | 60.9 |
| Suecia | 366 | Baja | 69.8 | 64.7 |
| Canadá | 354 | Baja | 67.8 | 65.2 |
| Alemania | 347 | Moderada | 58.9 | 38.4 |
| Francia | 337 | Moderada | 62.7 | 39.9 |
| Australia | 336 | Moderada | 50.3 | 34.6 |
| EE.UU. | 319 | Fuerte | 54.7 | 26.1 |

Tabla 6.8.b.

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos al programa público de pensiones.

| País | Índice de apoyo a las pensiones públicas | Fracturas económicas | % apoyo fuerte. Ingresos inferiores al 50% mediana | % apoyo fuerte. Ingresos un 50% superiores mediana |
|------------------|--|----------------------|--|--|
| Noruega | 385 | Baja | 85.0 | 79.7 |
| España | 378 | Baja | 87.5 | 77.7 |
| Irlanda | 376 | Moderada | 84.1 | 67.7 |
| Italia | 373 | Baja | 79.3 | 74.0 |
| R. Unido | 371 | Fuerte | 85.7 | 61.5 |
| Suecia | 366 | Moderada | 79.9 | 58.7 |
| Alemania | 344 | Moderada | 56.7 | 37.9 |
| Francia | 342 | Fuerte | 60.1 | 34.7 |
| Canadá | 336 | Baja | 53.5 | 46.8 |
| Australia | 331 | Moderada | 47.7 | 29.2 |
| EE.UU. | 322 | Fuerte | 52.7 | 26.9 |

Tabla 6.9.b.

Legitimidad agregada, fracturas económicas y apoyo en los extremos de la escala de ingresos a las prestaciones por desempleo.

| País | Índice de apoyo a las prestaciones por desempleo | Fracturas económicas | % apoyo fuerte. Ingresos inferiores al 50% mediana | % apoyo fuerte. Ingresos inferiores al 50% mediana |
|------------------|--|----------------------|--|--|
| España | 352 | Moderada | 71.8 | 50.5 |
| Noruega | 332 | Moderada | 47.6 | 29.5 |
| Irlanda | 330 | Mod- Fuerte | 51.5 | 28.6 |
| Suecia | 326 | Moderada | 48.2 | 24.3 |
| Francia | 310 | Mod-Fuerte | 45.0 | 20.0 |
| R. Unido | 301 | Fuerte | 43.2 | 16.7 |
| Italia | 296 | Mod-Fuerte | 36.6 | 25.4 |
| Alemania | 293 | Moderada | 25.6 | 8.3 |
| Canadá | 273 | Moderada | 24.3 | 15.6 |
| Australia | 270 | Moderada | 14.0 | 6.9 |
| EE.UU. | 241 | Fuerte | 21.1 | 5.8 |

Para las tres tablas anteriores:

Elaboración propia con datos del ISSP,1996.

Índice de apoyo a la responsabilidad del Gobierno en garantizar un nivel de vida digno a los ancianos. Los índices pueden ir de 100 (100% de la población responde que *De ninguna manera debería ser responsabilidad del Gobierno*) a 400 (100% de la población considera que *Sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno*) El apoyo «fuerte» se define como el porcentaje de individuos que respondió que el programa de bienestar por el que se pregunta «sin ninguna duda debería ser responsabilidad del Gobierno».

Anexo 5

Modelos de regresión logística ordinal de capítulo 7

Modelos de regresión logística ordinal con las preguntas sobre los programas de sanidad y pensiones como variables dependientes, los países en forma de dummies, e interacciones entre el efecto del país y el efecto de la ideología (v16)

| Sanidad | Coef. | P > z | Pensiones | Coef. | P > z |
|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|
| v16 | .2286569 | 0.000 | _laustrali_1 | -.0320509 | 0.831 |
| _laustrali_1 | -.2531931 | 0.095 | v16 | .2586994 | 0.000 |
| _lausXv16_1 | .1823146 | 0.000 | _lausXv16_1 | .1424251 | 0.004 |
| _lusa_1 | -.8034694 | 0.000 | _lusa_1 | -.3805539 | 0.043 |
| _lusaXv16_1 | .4512608 | 0.000 | _lusaXv16_1 | .2751879 | 0.000 |
| _lук_1 | -2.257718 | 0.000 | _lук_1 | -1.88982 | 0.000 |
| _lукXv16_1 | .2817383 | 0.000 | _lукXv16_1 | .3175999 | 0.000 |
| _lnorway_1 | -2.638541 | 0.000 | _lnorway_1 | -2.181754 | 0.000 |
| _lnorXv16_1 | .2592957 | 0.001 | _lnorXv16_1 | .1190438 | 0.110 |
| _lsweden_1 | -1.400764 | 0.000 | _lsweden_1 | -1.518231 | 0.000 |
| _lsweXv16_1 | .2442386 | 0.000 | _lsweXv16_1 | .2768501 | 0.000 |
| _lcanada_1 | -.0119176 | 0.947 | _lcanada_1 | .331138 | 0.062 |
| _lcanXv16_1 | -.1515816 | 0.007 | _lcanXv16_1 | -.091306 | 0.099 |
| _litaly_1 | -1.329657 | 0.000 | _litaly_1 | -1.101198 | 0.000 |
| _litaXv16_1 | -.0105906 | 0.877 | _litaXv16_1 | -.0067274 | 0.917 |
| _lspain_1 | -1.32787 | 0.000 | _lspain_1 | -1.228673 | 0.000 |
| _lspaXv16_1 | .0183895 | 0.765 | _lspaXv16_1 | -.0175638 | 0.772 |
| _lfrance_1 | -.698909 | 0.000 | _lfrance_1 | -.5287469 | 0.001 |
| _lfraXv16_1 | .4162266 | 0.000 | _lfraXv16_1 | .2922927 | 0.000 |
| _lireland_1 | -.9423431 | 0.000 | _lireland_1 | -1.068888 | 0.000 |
| _lireXv16_1 | -.0214101 | 0.769 | _lireXv16_1 | -.0618003 | 0.409 |
| /cut1 | .6567187 | .4503119 | /cut1 | .6465499 | .4399314 |
| /cut2 | 3.488314 | 3.26683 | /cut2 | 3.612072 | 3.390232 |
| /cut3 | 5.063354 | 4.801547 | /cut3 | 5.395097 | 5.121364 |

Prob > chi2 = 0.0000 para los dos modelos.

Modelo de regresión logística ordinal con la pregunta sobre el programa de desempleo como variable dependiente, los países en forma de dummies, e interacciones entre el efecto del país y el efecto de la ideología (v16)

| Desempleo | Coficiente | P>z |
|--------------|------------|-----------|
| v16 | .3327022 | 0.000 |
| _laustrali_1 | .3322934 | 0.025 |
| _lausXv16_1 | .0749793 | 0.117 |
| _lusa_1 | -.0260574 | 0.890 |
| _lusaXv16_1 | .3648093 | 0.000 |
| _luk_1 | -1.064543 | 0.000 |
| _lukXv16_1 | .3206938 | 0.000 |
| _lnorway_1 | -1.460177 | 0.000 |
| _lnorXv16_1 | .1589098 | 0.006 |
| _lsweden_1 | -1.528506 | 0.000 |
| _lsweXv16_1 | .28678 | 0.000 |
| _lcanada_1 | -.1539992 | 0.385 |
| _lcanXv16_1 | .1701659 | 0.002 |
| _litaly_1 | .1779256 | 0.289 |
| _litaXv16_1 | .0343904 | 0.575 |
| _lspain_1 | -1.542681 | 0.000 |
| _lspaXv16_1 | -.0216518 | 0.696 |
| _lfrance_1 | -1.215735 | 0.000 |
| _lfraXv16_1 | .3795198 | 0.000 |
| _lireland_1 | -1.022625 | 0.000 |
| _lireXv16_1 | .0349125 | 0.596 |
| /cut1 | -.5510794 | -.7557483 |
| /cut2 | 2.136764 | 1.927656 |
| /cut3 | 3.928316 | 3.707625 |

Prob > chi2 = 0.0000.

Anexo 6

El efecto de la ideología sobre las actitudes en los 11 países

| Sanidad | Coef. | Pensiones | Coef. | Desempleo | Coef. |
|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|----------|
| EE.UU | .68 sig | Reino Unido | .58 sig | Francia | .71 sig |
| Francia | .65 sig | Francia | .55 sig | EE.UU. | .69 sig. |
| Reino Unido | .51 sig | EE.UU. | .54 sig | Reino Unido | .65 sig |
| Noruega | .49 sig | Suecia | .54 sig | Suecia | .62 sig |
| Suecia | .48 sig | Australia | .40 sig | Canadá | .50 sig |
| Australia | .41 sig | Noruega | .38 ns | Noruega | .49 sig |
| España | .25 ns | Alemania | .26 ref | Australia | .40 ns |
| Alemania | .23 ref | Italia | .25 ns | Irlanda | 0.36 ns |
| Italia | .22 ns | España | .24 ns | Italia | 0.36 ns |
| Irlanda | .21 ns | Irlanda | .20 ns | Alemania | 0.33 ref |
| Canadá | .08 sig | Canadá | .17 ns | España | 0.31 ns |

Coeficientes nacionales calculados a partir de los modelos de regresión logística ordinal del Anexo 5.

Sig: significativamente distinto de la categoría de referencia (Alemania)

Ns: no significativamente distinto de la categoría de referencia.

Anexo 7

Actitudes hacia los programas públicos de desempleo en once países, por sexo

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno subsidios desempleo? | Noruega | | Suecia | | Alemania | | Francia | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 36.9 | 45.1 | 31.4 | 45.7 | 15.0 | 18.8 | 29.0 | 41.1 |
| Probablemente sí | 55.1 | 48.3 | 59.0 | 44.4 | 64.3 | 62.7 | 48.1 | 45.0 |
| Probablemente no | 7. | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 16.6 | 14.5 | 16.4 | 10.0 |
| No, de ninguna manera | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 4.0 | 6.5 | 3.8 |
| N | 675 | 619 | 598 | 577 | 1.120 | 1.069 | 725 | 520 |

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno subsidios desempleo? | Italia | | España | | Irlanda | | Inglaterra | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 25.9 | 34.4 | 56. | 61.6 | 40.4 | 39.9 | 24.1 | 32.2 |
| Probablemente sí | 46.5 | 43.3 | √√ 36.2 | 33.2 | 51.2 | 51.4 | 50.0 | 49.8 |
| Probablemente no | 17.4 | 13.9 | √√√ 5.6 | 4.1 | 7.5 | 6.2 | 18.1 | 12.3 |
| No, de ninguna manera | 10.2 | 8.4 | √√√ 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 7.8 | 5.8 |
| N | 510 | 538 | 1.160 | 1.232 | 480 | 496 | 386 | 538 |

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno subsidios desempleo? | Canadá | | Australia | | EE.UU. | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 14.7 | 17.7 | 8.0 | 9.6 | 11.6 | 13.4 |
| Probablemente sí | 47.9 | 51.5 | 55.2 | 57.2 | 32.2 | 37.2 |
| Probablemente no | 27.6 | 23.5 | 31.8 | 29.3 | 34.5 | 31.8 |
| No, de ninguna manera | 9.8 | 7.4 | 5.0 | 4.0 | 21.6 | 17.2 |
| N | 591 | 515 | 972 | 1.014 | 550 | 647 |

Anexo 8

Actitudes hacia los programas públicos de pensiones en once países, por sexo

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno las pensiones? | Noruega | | Suecia | | Alemania | | Francia | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | √83.4 | √84.5 | √√65.1 | 73.9 | √44.5 | 51.4 | √48.9 | 54.2 |
| Probablemente sí | √15.5 | √√10.8 | √√32.3 | 24.1 | √50.6 | √45.7 | 42.0 | √40.3 |
| Probablemente no | √√0.9 | √√0.2 | 2.1 | 1.2 | √√4.2 | √√2.9 | √√6.5 | 4.4 |
| No, de ninguna manera | √√0.3 | √√0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 1.1 |
| N | 685 | 637 | 610 | 590 | 1.153 | 1.143 | 750 | 528 |

| ¿Debería ser responsabilidad del Gobierno las pensiones? | Italia | | España | | Irlanda | | Inglaterra | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 73.7 | 77.6 | √√78.9 | 80.1 | 76.3 | 78.3 | 68.2 | 76.1 |
| Probablemente sí | 24.4 | √20.3 | √√20.0 | 18.8 | 22.5 | 21.1 | 29.3 | 22.5 |
| Probablemente no | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 0.9 |
| No, de ninguna manera | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| N | 529 | 567 | 1.182 | 1.280 | 485 | 506 | 396 | 573 |

| ¿Deberían ser responsabilidad del Gobierno las pensiones? | Canadá | | Australia | | EE.UU. | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
| Sí, sin ninguna duda | 44.6 | 50.9 | 34.4 | 40.4 | 33.2 | 42.8 |
| Probablemente sí | 44.4 | 40.1 | 58.8 | 54.9 | 50.4 | 46.5 |
| Probablemente no | 8.7 | 7.6 | 6.0 | 5.1 | 11.6 | 8.5 |
| No, de ninguna manera | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | 2.2 |
| N | 612 | 536 | 998 | 1.048 | 567 | 692 |

Anexo 9

The Role of Government 1996: muestras y forma de aplicación del cuestionario.

La encuesta en cada país:

| | Tamaño de la muestra | Idioma de cuestionario | Investigadores principales | Forma de aplicación |
|-------------------|----------------------|------------------------|--|---|
| Australia | 2151 | Inglés | Jonathan Kelley, Mariah Evans | |
| Canadá | 1182 | Inglés / Francés | Carleton University Survey Centre | Autoadministrado. Visita para dejar y recoger cuestionario |
| Francia | 1312 | Francés | Yannick Lemel | Por correo |
| Alemania | 2361 | Alemán | Janet Harkness; Peter Mohler | Autoadministrado después de entrevista personal. |
| Inglaterra | 989 | Inglés | Roger Jowell, Lindsay Brook, Alison Park, Katarina Thompson, Caroline Bryson. | Autoadministrado después de entrevista personal. Recogida por encuestador |
| Irlanda | 994 | Inglés | Social Science Research Centre. National University of Ireland. | Entrevista personal |
| Italia | 1104 | Italiano | Gabriele Calvi | Entrevista personal |
| Noruega | 1344 | Noruego | Per Legreid, Dpt. of Administration and organization Theory (University of Bergen). Per Arnt Pettersen, Dpt. Of Sociology and Political Science (University of Trondheim). Knut Kalgraff, Norwegian Social Sciences Data Service | Por correo |
| España | 2494 | Español | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | Entrevista personal |
| Suecia | 1238 | Sueco | Dr. Stefan Svallfors. University of Umeå. Statistics Sweden | Por correo. Entrevista telefónica a una submuestra. |
| EE.UU. | 1332 | Inglés | James A. David, Tom W. Smith. NORC | Autoadministrado después de entrevista personal |

Fuente: ISSP 1996 Codebook.

Anexo 10

The Role of Government 1996: cuestionarios.

Cuestionario en español

Cuestionario en inglés

Cuestionario en francés

Spain

ISSP 1996 - Role of Government III

CIS

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Comunidad Autónoma _____ | <input type="text"/> | (10)(11) | Nº ESTUDIO | <input type="text"/> | Nº CUESTIONARIO |
| Provincia _____ | <input type="text"/> | (12)(13) | <input type="text" value="2.206"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Municipio _____ | <input type="text"/> | (14)(15)(16) | (1)(2)(3)(4) | (5)(6)(7)(8)(9) | |
| (nombre municipio) | | | | | |
| Tamaño de hábitat _____ | <input type="text"/> | (17)(18) | | | |
| Distrito _____ | <input type="text"/> | (19)(20) | | | |
| Sección _____ | <input type="text"/> | (21)(22)(23) | | | |
| Entrevistador _____ | <input type="text"/> | (24)(25)(26)(27) | | | |

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general. Por este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

P.1 En general, ¿diría Vd. que la gente debería cumplir las leyes siempre, sin excepciones, o que hay ocasiones excepcionales en las que cada uno debería actuar según su conciencia, aunque eso signifique infringir la ley?

- Cumplir las leyes siempre 1
 - Actuar según su conciencia en ocasiones .. 2 (28)
 - N.S. 8

P.2 Hay muchas formas de protestar contra una medida del Gobierno que suscita fuerte oposición. De entre las siguientes, dígame, por favor, qué formas de protesta le parecen a Vd. que deberían estar permitidas y cuáles no deberían estarlo. (MOSTRAR TARJETA A).

1. Sí, sin ninguna duda
 2. Probablemente sí
 3. Probablemente no
 4. No, en ningún caso

| | 1 | 2 | 3 | 4 | NS |
|--|---|---|---|---|--------|
| - Organizar mítines o actos públicos para protestar contra el Gobierno | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (29) |
| - Organizar marchas o manifestaciones de protesta | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (30) |
| - Organizar una huelga nacional de todos los trabajadores contra el Gobierno | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (31) |

P.3 ¿Participaría Vd. en alguna de las siguientes acciones para protestar contra una medida del Gobierno a la que Vd. se opone fuertemente, o no lo haría?. (MOSTRAR TARJETA A).

1. Sí, sin ninguna duda
 2. Probablemente sí
 3. Probablemente no
 4. No, en ningún caso

| | 1 | 2 | 3 | 4 | NS |
|--|---|---|---|---|--------|
| - Asistir a un mitin o acto público organizado para protestar contra el Gobierno | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (32) |
| - Participar en una marcha o manifestación | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (33) |

P.4 Y, en los últimos cinco años, ¿cuántas veces ha participado Vd. en acciones de protesta como las que le voy a mencionar para protestar contra una medida del Gobierno a la que Vd. se oponía fuertemente?

| | NUNCA | Una vez | Más de una vez | NS |
|--|-------|---------|----------------|--------|
| - Asistir a un mitin o acto público organizado para protestar contra el Gobierno | 1 | 2 | 3 | 8 (34) |
| - Participar en una manifestación o marcha de protesta | 1 | 2 | 3 | 8 (35) |

P.5 Hay algunas personas que tienen ideas o puntos de vista que la mayoría de la gente considera extremistas. Piense, por ejemplo, en los que quieren derrocar al Gobierno o alterar el orden constitucional por métodos revolucionarios. ¿Considera Vd. que a esa gente se le debería permitir...?. (MOSTRAR TARJETA A).

1. Sí, sin ninguna duda
 2. Probablemente sí
 3. Probablemente no
 4. No, en ningún caso

| | 1 | 2 | 3 | 4 | NS |
|---|---|---|---|---|--------|
| - Celebrar actos públicos o dar mítines para expresar sus ideas | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (36) |
| - Publicar libros que divulguen sus ideas u opiniones | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 (37) |

P.6 En todos los sistemas judiciales se cometen errores. En su opinión, ¿qué es lo peor: condenar a una persona inocente o dejar libre a una que es culpable?. (SÓLO UNA RESPUESTA).

- Condenar a una persona inocente 1
 - Dejar libre a una persona culpable .. 2 (38)
 - N.S. 8

P.7 El Estado tiene un montón de datos sobre los ciudadanos que con un ordenador se pueden reunir fácilmente. ¿Cree Vd. que esto constituye...?. (SOLO UNA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA B).

- Una amenaza muy seria para la intimidad de las personas 1
- Una amenaza bastante seria 2
- No constituye una amenaza seria 3 (39)
- No constituye en absoluto una amenaza para la intimidad de las personas 4
- N.S. 8

P.8 Dígame, por favor, si Vd. está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase siguiente: "El Estado tiene la responsabilidad de reducir las diferencias entre las personas que tienen altos ingresos y las que tienen bajos ingresos".

- Muy de acuerdo 1
- De acuerdo 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 (40)
- En desacuerdo 4
- Muy en desacuerdo 5
- N.S. 8

P.9 A continuación le voy a leer algunas medidas que el Gobierno podría adoptar en relación con la economía. Dígame, por favor, si Vd. está muy a favor, a favor, ni a favor ni en contra, en contra o muy en contra de cada una de ellas. (MOSTRAR TARJETA C).

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra
5. Muy en contra

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS | |
|---|---|---|---|---|---|----|------|
| - Controlar los salarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (41) |
| - Controlar los precios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (42) |
| - Reducir el gasto público | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (43) |
| - Financiar proyectos que creen nuevos puestos de trabajo .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (44) |
| - Intervención menos en la economía .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (45) |
| - Subvencionar a la industria para que desarrolle nuevos productos y tecnologías | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (46) |
| - Apoyar a las industrias en declive para salvaguardar puestos de trabajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (47) |
| - Reducir la jornada laboral semanal para crear más puestos de trabajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (48) |

P.10 Ahora le voy a mencionar diversos capítulos de gasto público. Dígame, por favor, si a Vd. le gustaría que se gastara más o menos en cada uno de ellos. (Tenga en cuenta que para poder gastar "mucho más" podría ser necesario aumentar los impuestos). (MOSTRAR TARJETA D).

1. Gastar mucho más
2. Gastar más
3. Gastar lo mismo que ahora
4. Gastar menos
5. Gastar mucho menos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS | |
|--|---|---|---|---|---|----|------|
| - La protección del medio ambiente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (49) |
| - Sanidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (50) |
| - Seguridad ciudadana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (51) |
| - Educación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (52) |
| - Fuerzas Armadas y Defensa .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (53) |
| - Pensiones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (54) |
| - Seguro de desempleo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (55) |
| - Arte y cultura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | (56) |

P.11a ¿Cree Vd. que los sindicatos en España tienen demasiado poder, o demasiado poco?. (MOSTRAR TARJETA E).

P.11b ¿Y qué opina Vd. de los empresarios y de las empresas?. ¿Tienen demasiado poder o demasiado poco?.

P.11c ¿Y el Gobierno?. ¿Tiene demasiado poder o demasiado poco?.

| | P.11a Sindicatos (57) | P.11b Empresarios (58) | P.11c Gobierno (59) |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| - Tiene/n muchísimo más poder del que debería/n | 1 | 1 | 1 |
| - Tiene/n demasiado poder | 2 | 2 | 2 |
| - Tiene/n más o menos el poder que le/s corresponde | 3 | 3 | 3 |
| - Tiene/n demasiado poco poder | 4 | 4 | 4 |
| - Tiene/n muchísimo menos poder del que debería/n | 5 | 5 | 5 |
| - N.S. | 8 | 8 | 8 |

P.12 En términos generales, ¿considera Vd. que debería, o no debería ser responsabilidad del Gobierno...?. (MOSTRAR TARJETA F).

1. Sí, sin ninguna duda
2. Probablemente debería
3. Probablemente no debería
4. No debería de ninguna manera

| | 1 | 2 | 3 | 4 | NS | |
|--|---|---|---|---|----|------|
| - Crear un puesto de trabajo para todo aquél que lo demanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (60) |
| - Controlar los precios | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (61) |
| - Ofrecer asistencia sanitaria para todos | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (62) |
| - Asegurar pensiones dignas para los ancianos | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (63) |
| - Prestar a la industria el apoyo que necesite para su desarrollo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (64) |
| - Asegurar un subsidio digno a los parados | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (65) |
| - Reducir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (66) |
| - Ofrecer becas a los estudiantes universitarios procedentes de familias con pocos ingresos | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (67) |
| - Facilitar una vivienda digna a las familias con pocos ingresos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (68) |
| - Imponer regulaciones estrictas para que la industria cause menos daño al medio ambiente | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | (69) |

P.13 Pasando a otro tema, ¿podría decirme si, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, algo, poco o nada?.

- Mucho 1
- Bastante 2
- Algo 3 (70)
- Poco 4
- Nada 5
- N.S. 8

P.14 ¿Podría decirme, por favor, hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?. (MOSTRAR TARJETA G).

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| - La gente como yo no tiene ninguna influencia en lo que hace el Gobierno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (71) |
| - La verdad es que el ciudadano medio influye bastante en la vida política | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (72) |
| - Dado como funciona el sistema político, ni siquiera el mejor gobernante puede ser verdaderamente efectivo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (73) |
| - Me parece que entiendo bastante bien las cuestiones políticas más importantes que tiene planteadas nuestro país | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (74) |
| - Las elecciones son una buena forma de hacer que los gobiernos presten atención a lo que piensa la gente .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (75) |
| - Pienso que la mayoría de la gente está mejor informada que yo sobre temas políticos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (76) |
| - Los diputados y senadores se esfuerzan por cumplir las promesas que han hecho durante las elecciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (77) |
| - Por lo general, los altos funcionarios procuran hacer lo que más le conviene al país | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 (78) |

P.15 En su opinión, hablando en términos generales, ¿la democracia funciona bien o mal en España en la actualidad?. (MOSTRAR TARJETA H).

- Funciona bien y no necesita ningún cambio 1
- Funciona bien, pero necesita algunos cambios .. 2
- No funciona bien y necesita muchos cambios 3 (79)
- No funciona bien y necesita un cambio total ... 4
- N.S. 8

P.16 Si el Gobierno pudiera elegir entre bajar los impuestos o gastar más en servicios públicos y prestaciones sociales, ¿qué cree Vd. que debería hacer?. (Nos referimos a la totalidad de los impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta (IRPF), el IVA, retenciones salariales, etc.). (LEER).

- Bajar los impuestos aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos
- Gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque esto signifique pagar más impuestos
- N.S.

P.17 En términos generales, ¿cómo calificaría Vd. los impuestos en España actualmente?. (Nos referimos a todos los impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta (IRPF), el IVA, retenciones salariales, etc.).

- a) Por lo que respecta, en primer lugar, a las personas con ingresos altos, ¿considera Vd. que sus impuestos son...?. (MOSTRAR TARJETA I).
- b) Y para las personas con ingresos medios, ¿sus impuestos son...?.
- c) Por último, pensando en las personas con ingresos bajos, ¿sus impuestos son...?.

| | a) Ingresos altos (81) | b) Ingresos medios (82) | c) Ingresos bajos (83) |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| - Altísimos | 1 | 1 | 1 |
| - Demasiado altos | 2 | 2 | 2 |
| - Más o menos razonables .. | 3 | 3 | 3 |
| - Demasiado bajos | 4 | 4 | 4 |
| - Bajísimos | 5 | 5 | 5 |
| - N.S. | 8 | 8 | 8 |

P.18 En su opinión, de las cosas que le voy a leer a continuación -la electricidad, los hospitales, los bancos-, ¿cree Vd., respecto de cada una de ellas, que deberían ser principalmente gestionadas por empresas públicas o privadas?. (MOSTRAR TARJETA J).

| | Principalmente emp. públicas | Principalmente emp. privadas | NS |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| - La electricidad .. | 1 | 2 | 8 (84) |
| - Los hospitales ... | 1 | 2 | 8 (85) |
| - Los bancos | 1 | 2 | 8 (86) |

P.19 Si el Gobierno tuviera que elegir entre reducir la inflación o reducir el desempleo, ¿cuál de los dos objetivos debería ser prioritario, en su opinión?.

- Reducir la inflación 1
- Reducir el desempleo 2 (87)
- N.S. 8

P.20 Supongamos por un momento que la presión fiscal (es decir, lo que pagamos en impuestos), en España se mantiene estable, esto es, ni aumenta ni disminuye. ¿Qué piensa Vd. que debería hacer, en ese caso, el Estado...?. (MOSTRAR TARJETA K).

- Gastar lo mismo que ahora en servicios públicos y prestaciones sociales, aunque eso signifique mantener el déficit público en su volumen actual
- Gastar menos que en la actualidad en servicios públicos y prestaciones sociales, y de esa forma reducir el déficit público
- N.S.

P.21a ¿Cuánto cree Vd. que debería pagar anualmente en impuestos una persona cuyo salario anual bruto fuera de un millón y medio de pesetas?. ¿O no debería pagar nada?. (Nos estamos refiriéndonos a todos los impuestos que se deducen del salario, es decir, las retenciones salariales y el impuesto sobre la renta: IRPF).

ENTREVISTADOR: Si el entrevistado no es capaz de dar una cantidad en pts. que debería pagarse en impuestos. (en preg. 21a, 21b, 21c y 21d), tratar de que diga un porcentaje determinado: p. ej.: "debería pagar en impuestos un 10% del salario que gana". Según mencione cantidad en pesetas o porcentaje, anotar en la casilla correspondiente.

Cantidad (89)(90)(91) Porcentaje
pts. (92)(93)(94)

No debería pagar nada 999997
N.S. 999998

P.21b ¿Y una persona cuyo salario anual bruto fuera el doble del anterior, es decir de tres millones?. ¿Cuánto debería pagar en impuestos en ese caso?

| Cantidad | Porcentaje |
|-----------------------------------|------------|
| (95)(96)(97) | |
| pts. (98)(99)(100) | |
| No debería pagar nada 999997 | |
| N.S. 999998 | |

P.21c ¿Y si el salario anual bruto fuera el doble del anterior, es decir de seis millones?. ¿Cuánto debería pagar en impuestos en ese caso?

| Cantidad | Porcentaje |
|-----------------------------------|------------|
| (101)(102)(103) | |
| pts. (104)(105)(106) | |
| No debería pagar nada 999997 | |
| N.S. 999998 | |

P.21d ¿Y si el salario anual bruto fuera el doble, es decir, de doce millones?. ¿Cuánto debería pagar en impuestos en ese caso?

| Cantidad | Porcentaje |
|-----------------------------------|------------|
| (107)(108)(109) | |
| pts. (110)(111)(112) | |
| No debería pagar nada 999997 | |
| N.S. 999998 | |

P.22 Cambiando de tema. ¿Podría decirme a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1993?

- CDS 01
- IU 02
- PP 03
- PSOE 04
- EA-EUE 05
- HB 06
- PNV 07
- CIU 08
- ERC 09
- BNG 10
- PA 11
- PAR 12
- CC 13
- UV 14
- Otro, ¿cuál? 15 (113)(114)
- No tenía edad para para votar 95
- En blanco 96
- No votó 97
- No recuerda 98
- No contesta 99

SÓLO A LOS QUE NO VOTARON ("95" o "97" en P.22)

P.23 Dígame, por favor, cuál de las siguientes explica mejor la razón por la que Vd. no votó en las últimas elecciones. (MOSTRAR TARJETA.). (UNA RESPUESTA).

- No tenía la edad o no estaba inscrito ... 01
- Quería votar, pero no me fue posible 02
- No entendía lo suficiente de política ... 03
- No me interesaban mucho las elecciones .. 04
- Quería votar, pero se me olvidó 05 (115)(116)
- Nunca voto, por cuestiones de principio .. 06
- No supe decidir por quién votar 07
- No me atraía ninguno de los partidos 08
- Otra razón, ¿cuál? .. 09
- N.S. 98

A TODOS

P.24 Querria ahora saber si está Vd. afiliado, ha estado antes o nunca ha estado afiliado a una asociación ciudadana?. ¿Y a un partido político?. ¿Y a un sindicato?

| | Asociación ciudadana (117) | Partido político (118) | Sindicato (119) |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| - Está afiliado | 1 | 1 | 1 |
| - Ha estado afiliado antes. | 2 | 2 | 2 |
| - Nunca ha estado afiliado. | 3 | 3 | 3 |
| - N.S. | 8 | 8 | 8 |

SÓLO A LOS QUE CONTESTAN QUE SÍ ESTÁN AFILIADOS EN LA ACTUALIDAD ("1" en cualquiera de las respuestas de la P.24).

P.24a ¿Podría decirme cuál es ese partido, sindicato asociación?. (ENTREVISTADOR: en el caso de que se esté afiliado a más de una asociación ciudadana, anotar como máximo tres asociaciones)

- Partido: _____ (120)(121)
- Sindicato: _____ (122)(123)
- Asociación: _____ (124)(125)
- _____ (126)(127)
- _____ (128)(129)

A TODOS

P.25 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.? (MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y RECORRAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).

| Izda. | Ocha. | NS | NC |
|-------------------------------|-------|----|----|
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | | 98 | 99 |

P.26 Sexo:
- Hombre 1
- Mujer 2 (132)

P.27 ¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
N.C. 99 (133)(134)

P.28 ¿Ha ido Vd. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?. (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

- No, es analfabeto 1 → PASAR a P.29
- No, pero sabe leer y escribir .. 2 → PASAR a P.29
- Si, ha ido a la escuela 3 (135)
- N.C. 9 → PASAR a P.29

P.28a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Vd. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (e.): 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

(ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar n° de años que asistió a la escuela).

CURSO _____
NOMBRE (de los estudios) _____
NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) _____ (136)(137)

P.29 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
- El entrevistado 1
- Otra persona 2
- (NO LEER) El entrevistado y otra persona casi a partes iguales .. 3 (138)
- N.C. 9

P.30 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Vd. actualmente?. (MOSTRAR TARJETA N).

- Trabaja 1
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3
- Parado y ha trabajado antes 4 (139)
- Parado y busca su primer empleo 5
- Estudiante 6
- Sus labores 7
- Otra situación, ¿cuál? 8
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Las preguntas 31, 32, 32a y 33 referirías:

- al trabajo actual (si 1 en P.30)
- al último trabajo (si 2 ó 4 en P.30)
- al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P.30).

P.31 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio?. Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?. (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Vd. (o el cabeza de familia) obtiene/nia mayores ingresos.

(140)(141)(142)

N.C. 999

P.32 ¿Vd. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...?. (MOSTRAR TARJETA O).

- Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1
- Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2
- Empresario o profesional con asalariados 3
- Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 4 (143)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada, en la empresa o negocio de un familiar) 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otra situación, ¿cuál? 7
- N.C. 9

P.32a ¿Trabaja/ba Vd. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

- Administración Pública 1
- Empresa pública 2
- Empresa privada 3
- Organización sin fines de lucro 4 (144)
- Servicio doméstico 5
- Otros (especificar) 6
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Si se trata de un funcionario, anote también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo (1-30).

Grupo _____ Nivel _____

A TODOS

P.33 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Vd. (o el cabeza de familia) trabaja/ba?. (EJEMPLOS: Fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(Anotar) _____ (145)(146)

N.C. 99

P.34 Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido el entrevistado) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes?. No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar. (MOSTRAR TARJETA INGRESOS).

- Menos de 50.000 pts. 01
- De 50.001 a 100.000 pts. 02
- De 100.001 a 150.000 pts. 03
- De 150.001 a 200.000 pts. 04
- De 200.001 a 300.000 pts. 05
- De 300.001 a 400.000 pts. 06 (147)(148)
- De 400.001 a 500.000 pts. 07
- De 500.001 a 750.000 pts. 08
- De 750.001 a 1 Millón de pts. 09
- Más de 1 Millón de pts. 10
- N.C. 99

P.35 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?

ENTREVISTADOR: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA.

- Tiene teléfono y da número ... 1 teléfono _____
- No tiene teléfono 2
- Tiene teléfono y no da número. 3 (149)
- N.C. 9

A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR

INCIDENCIAS ENTREVISTA:

- 1.1. Número de orden de entrevista (por muestra) (150)(151)
- 1.2. Portales en los que el portero impide entrar (152)(153)
- 1.3. Viviendas en las que no hay nadie (154)(155)
- 1.4. Viviendas en las que niegan a recibir ninguna explicación (156)(157)
- 1.5. Negativas de varones a realizar la entrevista (158)(159)
- 1.6. Negativas de mujeres a realizar la entrevista (160)(161)
- 1.7. Contactos fallidos por no cumplir cuota (162)(163)
- 1.8. Contactos fallidos por no existir viviendas (edificios públicos, oficinas, etc.) (164)(165)

ENTREVISTA REALIZADA:

Entrevista conseguida: _____ (calle o plaza) _____ (nº) _____ (piso) _____ (pte.)

- E.1 Fecha de realización: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)
 (166)(167) (168)(169) (170)(171)
- E.2 Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes 1
 Martes 2
 Miércoles 3
 Jueves 4 (172)
 Viernes 5
 Sábado 6
 Domingo 7
- E.3 Duración de la entrevista: _____ (en minutos) (173)(174)(175)
- E.4 Hora de realización: La mañana (9-12) 1
 Mediodía (12-4) 2 (176)
 Tarde (4-8) 3
 Noche (8-10) 4

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

V.1 Desarrollo de la entrevista:

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3 (177)
- Mala 4
- Muy mala 5

V.2 Sinceridad del entrevistado:

- Mucha 1
- Bastante 2 (178)
- Poca 3
- Ninguna 4

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1 CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:

- Correcta 1 (179)
- Incorrecta 2

C.1a MOTIVO: _____ (180)(181)

C.3 RESULTADO FINAL:

- Entrevista válida 1 (186)
- Entrevista anulada 2

C.2 VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:

- Entrevista no inspeccionada 1
- Inspección telefónica 2 (182)
- Inspección personal 3
- Inspección telefónica y personal 4

C.2a Resultado inspección:

- Entrevista correcta 1 (183)
- Entrevista incorrecta 2

C.2b MOTIVO: _____ (184)(185)

USA

ISSP 1996 - Role of Government III

1

1. In general, would you say that people should obey the law without exception, or are there exceptional occasions on which people should follow their consciences even if it means breaking the law?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Obey the law without exception | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| OR | |
| Follow conscience on occasions | <input type="checkbox"/> 2 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 3 |

2. There are many ways people or organizations can protest against a government action they strongly oppose. Please show which you think should be allowed and which should not be allowed by checking a box on each line.

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Definitely allowed | Probably allowed | Probably not allowed | Definitely not allowed | Can't choose |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| a. Organizing public meetings to protest against the government | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| b. Organizing protest marches and demonstrations | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| c. Organizing a nationwide strike of all workers against the government | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

3. Would you or would you not do any of the following to protest against a government action you strongly opposed?

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Definitely would | Probably would | Probably would not | Definitely would not | Can't choose |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. Attend a public meeting organized to protest against the government | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| b. Go on a protest march or demonstration | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

4. And in the past five years how many times have you done each of the following to protest against a government action you strongly oppose?

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Never | Once | More than once |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. Attended a public meeting organized to protest against the government | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| b. Gone on a protest march or demonstration | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

5. There are some people whose views are considered extreme by the majority. Consider people who want to overthrow the government by revolution. Do you think such people should be allowed to...

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Definitely allowed | Probably allowed | Probably not allowed | Definitely not allowed | Can't choose |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. ...hold public meetings to express their views? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| b. ...publish books expressing their views? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

6. All systems of justice make mistakes, but which do you think is worse...

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ...to convict an innocent person, | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| OR | |
| to let a guilty person go free? | <input type="checkbox"/> 2 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 3 |

7. The federal government has a lot of different pieces of information about people which computers can bring together very quickly. Is this...

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|---|----------------------------|
| | (✓) |
| ...a very serious threat to individual privacy, | <input type="checkbox"/> 1 |
| a fairly serious threat, | <input type="checkbox"/> 2 |
| not a serious threat, | <input type="checkbox"/> 3 |
| or, not a threat at all to individual privacy? | <input type="checkbox"/> 4 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 5 |

8. What is your opinion of the following statement:

It is the responsibility of the government to reduce the differences in income between people with high incomes and those with low incomes.

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| | (✓) |
| Agree strongly | <input type="checkbox"/> 1 |
| Agree | <input type="checkbox"/> 2 |
| Neither agree or disagree | <input type="checkbox"/> 3 |
| Disagree | <input type="checkbox"/> 4 |
| Disagree strongly | <input type="checkbox"/> 5 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 6 |

9. Here are some things the government might do for the economy. Please show which actions you are in favor of and which you are against.

| PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE | | Strongly in favor of | In favor of | Neither in favor of nor against | Against | Strongly against |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a. | Control of wages by legislation | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| b. | Control of prices by legislation | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| c. | Cuts in government spending | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| d. | Government financing of projects to create new jobs | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| e. | Less government regulation of business | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| f. | Support for industry to develop new products and technology | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| g. | Supporting declining industries to protect jobs | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| h. | Reducing the working week to create more jobs | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

10. Listed below are various areas of government spending. Please show whether you would like to see more or less government spending in each area.

Remember that if you say "much more," it might require a tax increase to pay for it.

PLEASE CHECK ONE BOX
ON EACH LINE

| | Spend much more | Spend more | Spend the same as now | Spend less | Spend much less | Can't choose |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. The environment | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| b. Health | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| c. The police and law enforcement | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| d. Education | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| e. The military and defense | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| f. Retirement benefits | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| g. Unemployment benefits | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |
| h. Culture and the arts | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 8 |

- 11a. Do you think that labor unions in this country have too much power or too little power?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| Far too much power | <input type="checkbox"/> 1 |
| Too much power | <input type="checkbox"/> 2 |
| About the right amount of power | <input type="checkbox"/> 3 |
| Too little power | <input type="checkbox"/> 4 |
| Far too little power | <input type="checkbox"/> 5 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 8 |

11b. How about business and industry? Do they have too much power or too little power?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

- (✓)
- Far too much power 1
- Too much power 2
- About the right amount of power 3
- Too little power 4
- Far too little power 5
- Can't choose 6
-

11c. And what about the federal government, does it have too much power or too little power?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

- (✓)
- Far too much power 1
- Too much power 2
- About the right amount of power 3
- Too little power 4
- Far too little power 5
- Can't choose 6
-

12. On the whole, do you think it should or should not be the government's responsibility to...

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Definitely should be | Probably should be | Probably should not be | Definitely should not be | Can't choose |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. ...provide a job for everyone who wants one | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| b. ...keep prices under control | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| c. ...provide health care for the sick | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| d. ...provide a decent standard of living for the old | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| e. ...provide industry with the help it needs to grow | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| f. ...provide a decent standard of living for the unemployed | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| g. ...reduce income differences between the rich and the poor | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| h. ...give financial help to college students from low-income families | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| i. ...provide decent housing for those who can't afford it | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| j. ...impose strict laws to make industry do less damage to the environment | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

Here are some questions about politics.

13. How interested would you say you personally are in politics?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Very interested | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| Fairly interested | <input type="checkbox"/> 2 |
| Somewhat interested | <input type="checkbox"/> 3 |
| Not very interested | <input type="checkbox"/> 4 |
| Not at all interested | <input type="checkbox"/> 5 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 6 |

14. How much do you agree or disagree with each of the following statements.

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Strongly agree | Agree | Neither agree nor disagree | Disagree | Strongly disagree | Can't choose |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. People like me don't have any say about what the government does | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| b. The average citizen has considerable influence on politics | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| c. Even the best politician cannot have much impact because of the way government works | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| d. I feel that I have a pretty good understanding of the important political issues facing our country | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| e. Elections are a good way of making governments pay attention to what the people think | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| f. I think most people are better informed about politics and government than I am | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| g. People we elect to Congress try to keep the promises they have made during the election | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |
| h. Most government administrators can be trusted to do what is best for the country | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 |

15. All in all, how well or badly do you think the system of democracy in America works these days?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|--|---------------------------------------|
| It works well and needs no changes | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| It works well but needs some changes | <input type="checkbox"/> 2 |
| It does not work well and needs a lot of changes | <input type="checkbox"/> 3 |
| It does not work well and needs to be completely changed | <input type="checkbox"/> 4 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 6 |

And now some questions about taxes.

16. If the government had a choice between reducing taxes or spending more on social programs like health care, social security, and unemployment benefits, which do you think it should do? (We mean all taxes together, including social security, income tax, sales tax, and all the rest.)

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

(✓)

Reduce taxes, even if this means spending less on social programs like health care, social security, and unemployment benefits

 1

OR

Spend more on social programs like health care, social security and unemployment benefits, even if this means higher taxes?

 2

Can't choose

 3

17. Generally, how would you describe taxes in America today...

Again, we mean all taxes together, including social security, income tax, sales tax, and all the rest.

- a. First, for those with high incomes, are taxes...

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

(✓)

... much too high,

 1

too high,

 2

about right,

 3

too low,

 4

or, are they much too low?

 5

Can't choose

 6

17b. Next, for those with middle incomes, are taxes...

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

- (✓)
- ... much too high, 1
- too high, 2
- about right, 3
- too low, 4
- or, are they much too low? 5
- Can't choose 6
-

17c. Lastly, for those with low incomes, are taxes...

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

- (✓)
- ... much too high, 1
- too high, 2
- about right, 3
- too low, 4
- or, are they much too low? 5
- Can't choose 6
-

18. Do you think each of the following should mainly be run by private organizations or companies, or by the government?

PLEASE CHECK ONE BOX ON EACH LINE

| | Mainly run by private organizations or companies | Mainly run by the government | Can't choose |
|----------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| Electric Power | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| Hospitals | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| Banks | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

19. If the government had to choose between keeping down inflation or keeping down unemployment, to which do you think it should give highest priority?

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Keeping down inflation | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| Keeping down unemployment | <input type="checkbox"/> 2 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 3 |

20. Suppose the level of taxation in America stays the same as it is now. Should the government ...

PLEASE CHECK ONE BOX ONLY

| | |
|--|---------------------------------------|
| ... spend the <u>same</u> amount as now on social programs like health care, social security, and unemployment benefits, even if this means the national deficit or debt stays as it is, | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| OR | |
| ... spend <u>less</u> than now on social programs like health care, social security, and unemployment benefits, so that the national deficit or debt can be reduced? | <input type="checkbox"/> 2 |
| Can't choose | <input type="checkbox"/> 3 |

France

ISSP 1996 - Role of Government III

Questionnaire

Qui doit répondre à ce questionnaire ?

La personne habitant votre foyer, âgée de 18 ans et plus, dont l'anniversaire est le plus tôt dans l'année, à partir du 1er janvier.

1. Selon vous, faut-il absolument toujours obéir aux lois ou existe-t-il des circonstances exceptionnelles où il faut suivre sa conscience, même si cela conduit à enfreindre la loi?
(cercler seulement un chiffre)

- il faut toujours obéir aux lois, sans exception 1
- dans certains cas, il faut suivre sa conscience 2
- ne peut choisir 8

2. Il y a plusieurs façons de s'opposer à une décision gouvernementale que l'on désapprouve fortement. Pouvez-vous m'indiquer les actions qui, selon vous, sont acceptables ou inacceptables.
(cercler seulement un chiffre par ligne)

| | tout à fait acceptable | plutôt acceptable | plutôt inacceptable | tout à fait inacceptable | ne peut choisir |
|---|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| - organiser des réunions de protestation contre le gouvernement, est-ce | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - organiser des manifestations de rue, est-ce | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - organiser une grève nationale de tous les salariés contre le gouvernement, est-ce | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |

3. Pour protester contre une décision gouvernementale que vous désapprouvez fortement, seriez-vous prêt à :
(cercler seulement un chiffre par ligne)

| | tout à fait | probablement | probablement pas | pas du tout | ne peut choisir |
|---|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| - assister à une réunion de protestation contre le gouvernement ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - et seriez-vous prêt à participer à une manifestation ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |

4. Au cours des cinq dernières années, combien de fois avez-vous...

(cercler seulement un chiffre par ligne)

| | jamais | une fois | plus d'une fois |
|---|--------|----------|-----------------|
| - assisté à une réunion de protestation antigouvernementale ? | 1 | 2 | 3 |
| - participé à une manifestation ? | 1 | 2 | 3 |

5. Certaines personnes paraissent extrémistes aux yeux de la majorité. Imaginez des gens qui souhaitent renverser le gouvernement par la révolution. Selon vous, devrait-on permettre à de telles personnes...

(cercler seulement un chiffre par ligne)

| | oui sans problème | probablement oui | probablement non | absolument non | ne peut choisir |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| - d'organiser des réunions publiques pour exprimer leurs idées ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - de publier des livres exprimant leurs opinions ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |

6. Tous les systèmes judiciaires font des erreurs, mais selon vous, laquelle est la pire?

(cercler seulement un chiffre)

- condamner un innocent 1
- ou laisser une personne coupable en liberté 2
- ne peut choisir 8

7. Tout gouvernement dispose de nombreuses informations sur chaque individu et l'informatique permet de les rassembler rapidement. S'agit-il d'une menace pour la liberté individuelle :

(cercler seulement un chiffre)

- très grave 1
- assez grave 2
- peu grave 3
- pas grave du tout 4
- ne peut choisir 8

8. Que pensez-vous de la déclaration suivante : « Il incombe au gouvernement de réduire l'écart entre personnes à revenus élevés et personnes à faibles revenus » ?

- vous l'approuvez fortement 1
- vous l'approuvez plutôt 2 (cercler seulement un chiffre)
- vous êtes ni pour ni contre 3
- vous la désapprouvez plutôt 4
- vous la désapprouvez fortement 5
- vous ne pouvez choisir 8

9. Voici quelques actions économiques que le gouvernement pourrait faire. Pour chacune d'elles, pouvez-vous m'indiquer votre degré d'approbation ou de désapprobation?
(cercler un chiffre sur chaque ligne)

| | très favorable | assez favorable | ni pour ni contre | assez défavorable | très défavorable |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - contrôler les salaires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - contrôler les prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - réduire les dépenses de l'Etat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - soutenir financièrement la création d'emplois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - assouplir la réglementation du commerce et des affaires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - soutenir l'industrie pour développer des produits et des technologies nouvelles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - soutenir les industries en difficulté pour protéger les emplois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - réduire la durée du travail pour créer des emplois nouveaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

10. Pour chacun des secteurs suivants, pouvez-vous me dire si vous souhaiteriez que le gouvernement dépense plus ou moins? N'oubliez pas que dépenser « beaucoup plus » peut entraîner une augmentation des impôts.

(cercler seulement un chiffre sur chaque ligne)

| | dépenser beaucoup plus | dépenser plus | maintenir dépenses actuelles | dépenser moins | dépenser beaucoup moins | ne peut choisir |
|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| - l'environnement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - la santé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - la police et l'ordre public | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - l'éducation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - l'armée et la défense | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - les retraites | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - les allocations de chômage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - l'art et la culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

11a. Selon vous, les syndicats ont-ils trop ou pas assez de pouvoir?

- beaucoup trop 1
- trop 2 (cercler seulement un chiffre)
- à peu près comme il faut 3
- trop peu 4
- beaucoup trop peu 5
- ne peut choisir 8

11b. Et les dirigeants du commerce et de l'industrie, ont-ils trop ou pas assez de pouvoir?

- beaucoup trop 1
- trop 2 (cercler seulement un chiffre)
- à peu près comme il faut 3
- trop peu 4
- beaucoup trop peu 5
- ne peut choisir 8

11c. Et le gouvernement, a-t-il trop ou pas assez de pouvoir?

- beaucoup trop 1
- trop 2 *(cercler seulement un chiffre)*
- à peu près comme il faut 3
- trop peu 4
- beaucoup trop peu 5
- ne peut choisir 8

12. Globalement, les responsabilités suivantes incombent-elles ou non au gouvernement?
(cercler seulement un chiffre par ligne)

| | tout à fait | proba- blement | proba- blement pas | pas du tout | ne peut choisir |
|--|-------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| - garantir un emploi à chacun | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - contrôler les prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - assurer les soins de santé | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - donner un niveau de vie décent aux personnes âgées | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - aider le développement industriel | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - donner un niveau de vie décent aux chômeurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - réduire l'écart entre riches et pauvres | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - donner des bourses aux étudiants de familles défavorisées | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - assurer un logement décent aux démunis | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| - imposer des lois strictes pour que l'industrie détériore moins l'environnement | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |

13. Vous intéressez-vous personnellement à la politique?

- beaucoup 1
- assez 2 *(cercler seulement un chiffre)*
- un peu 3
- pas beaucoup 4
- nullement 5
- ne peut choisir 8

14. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous les déclarations suivantes?

(cerclez seulement un chiffre par ligne)

| | approuve fortement | approuve plutôt | ni pour ni contre | désapprouve plutôt | désapprouve fortement | ne peut choisir |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| - Les gens comme moi n'ont pas leur mot à dire sur l'action gouvernementale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - Le citoyen moyen a une influence considérable sur la politique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - Même les meilleurs hommes politiques n'ont pas beaucoup d'influence sur les gouvernements | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - Je comprends assez bien les grandes questions du débat politique national | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - Les élections permettent de rendre les gouvernements plus attentifs aux désirs des gens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - Beaucoup de gens sont mieux informés que moi sur les questions politiques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - Les députés essaient de tenir leurs promesses électorales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| - On peut faire confiance à la plupart des hauts-fonctionnaires. Ils défendent l'intérêt du pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

15. Diriez-vous qu'en France, la démocratie fonctionne plutôt bien ou plutôt mal...

- | | | |
|--|---|--------------------|
| - Elle fonctionne bien et n'exige aucune modification | 1 | |
| - Elle fonctionne bien mais nécessite quelques modifications | 2 | (cercler seulement |
| - Elle fonctionne mal et a besoin d'être beaucoup modifiée | 3 | un chiffre) |
| - Elle fonctionne mal et doit être complètement transformée | 4 | |
| - ne peut choisir | 8 | |

16. Si le gouvernement pouvait choisir, soit de réduire les impôts, les taxes et les prélèvements, soit d'augmenter les dépenses sociales, que devrait-il faire selon vous?
(cercler seulement un chiffre)

- | | | |
|--|---|--|
| - réduire les impôts et les taxes, même si cela entraîne une réduction des dépenses sociales | 1 | |
| - augmenter les dépenses sociales, même si cela conduit à augmenter les impôts et les taxes | 2 | |
| - ne peut choisir | 8 | |

17. Globalement, comment évaluez-vous le régime fiscal français actuel, en tenant compte à nouveau de tous les impôts, taxes ou prélèvements?

a. D'abord, diriez-vous que, pour les revenus élevés, ces impôts sont :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| - beaucoup trop élevés | 1 | |
| - trop élevés | 2 | (cercler seulement un |
| - comme il faut | 3 | chiffre) |
| - trop faibles | 4 | |
| - beaucoup trop faibles | 5 | |
| - ne peut choisir | 8 | |

b. Ensuite, diriez-vous que, pour les revenus moyens, ces impôts sont :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| - beaucoup trop élevés | 1 | |
| - trop élevés | 2 | (cercler seulement un |
| - comme il faut | 3 | chiffre) |
| - trop faibles | 4 | |
| - beaucoup trop faibles | 5 | |
| - ne peut choisir | 8 | |

c. Enfin, diriez-vous que, pour les *bas* revenus, ces impôts sont :

- beaucoup trop élevés 1
- trop élevés 2 (*cercler seulement un*
- comme il faut 3 *chiffre*)
- trop faibles 4
- beaucoup trop faibles 5
- ne peut choisir 8

18. Qui, d'après vous, devrait principalement gérer les services suivants, l'Etat ou le secteur privé ?
(*cercler seulement un chiffre par ligne*)

| | le secteur privé | l'Etat | ne peut choisir |
|-----------------|------------------|--------|-----------------|
| - L'électricité | 1 | 2 | 8 |
| - Les hôpitaux | 1 | 2 | 8 |
| - Les banques | 1 | 2 | 8 |

19. Si le gouvernement avait le choix entre réduire l'inflation et réduire le chômage, que devrait-il faire en priorité?

- réduire l'inflation 1
- réduire le chômage 2 (*cercler seulement un chiffre*)
- ne peut choisir 8

20. Supposons que le niveau des différents impôts et taxes en France reste inchangé. Dans cette hypothèse, le gouvernement devrait-il :

- maintenir les dépenses sociales actuelles, même si, 1
du coup, le déficit public reste ce qu'il est
- réduire les dépenses sociales pour réduire le 2
déficit public
- ne peut choisir 8

26. Actuellement, êtes-vous :

(cercler seulement un chiffre)

- employé à plein temps (au moins 35 heures par semaine) 1
- employé à temps partiel (entre 15 et 35 heures par semaine) 2
- employé moins de 15 heures par semaine 3
- aide un membre de ma famille dans son travail 4
- chômeur 5
- étudiant ou en formation professionnelle 6
- retraité 7
- femme au foyer 8
- handicapé 9
- autre non actif 10

27. Si vous travaillez, combien d'heures faites-vous habituellement chaque semaine?

[][] heures

28. Si vous travaillez, quelle est votre profession actuelle?

_____ / / / / /

Décrivez ci-dessus le plus précisément possible votre activité et votre fonction

29. Si vous travaillez, êtes-vous :

- salarié de l'Etat ou des collectivités territoriales 1
 - salarié d'une entreprise nationalisée ou dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital 2
 - salarié d'une entreprise privée 3
 - à votre compte 8
- (cercler seulement un chiffre)*

30. Si vous êtes à votre compte, combien de salariés employez-vous?

[][]

31. Si vous ne travaillez pas mais si vous avez déjà travaillé, quelle était votre dernière profession?

_____ / / / / /

Décrivez ci-dessus le plus précisément possible votre activité et votre fonction

32. Etes-vous :

- employeur ou travailleur indépendant 1
- salarié d'une entreprise privée 2
- salarié d'un service public ou d'une entreprise publique 3

33. Supervisez-vous ou êtes-vous responsable du travail d'autres personnes?

- oui 1 *(cercler seulement un chiffre)*
- non 2

34. Etes-vous syndiqué?

- oui 1 *(cercler seulement un chiffre)*
- non 2

35. Si vous êtes marié ou si vous vivez avec un partenaire, quel est son statut actuel?

- employé à plein temps 1
(au moins 35 heures par semaine)
- employé à temps partiel 2
(entre 15 et 35 heures par semaine)
- employé moins de 15 heures par semaine 3 *(cercler seulement un chiffre)*
- aide un membre de ma famille dans son travail 4
- chômeur 5
- étudiant ou en formation professionnelle 6
- retraité 7
- femme au foyer 8
- handicapé 9
- autre non actif 10

36. Et quelle est sa profession ou sa dernière profession?

||||

Décrivez ci-dessus le plus précisément possible son activité et sa fonction

37. Est-il (ou était-il) ?

- employeur ou travailleur indépendant 1
- salarié d'une entreprise privée 2
- salarié d'un service public ou d'une entreprise publique 3

38. A l'époque où vous avez cessé de fréquenter régulièrement l'école ou l'université, quelle était la situation professionnelle de votre père ? (si vous êtes encore étudiant, indiquez la situation actuelle de votre père)

- employeur ou travailleur indépendant 1
- salarié d'une entreprise privée 2
- salarié d'un service public ou d'une entreprise publique 3

39. A la même époque, quelle était la profession de votre père ?

||||

Décrivez ci-dessus le plus précisément possible son activité et sa fonction

40. A l'aide de la liste ci-dessous, pouvez-vous me dire quel est le montant de votre revenu mensuel *professionnel*, c'est à dire ce que vous touchez effectivement chaque mois du fait de votre activité professionnelle?

- pas de revenu personnel 00
- moins de 3000 Francs 01 (cercler seulement un chiffre)
- de 3000 à 5000 Francs 02
- de 5000 à 7000 Francs 03
- de 7000 à 10000 Francs 04
- de 10000 à 15000 Francs 05
- de 15000 à 20000 Francs 06
- de 20000 à 25000 Francs 07
- de 25000 à 30000 Francs 08
- de 30000 à 40000 Francs 09
- de 40000 à 50000 Francs 10
- plus de 50000 Francs 11

41. A l'aide de la même liste, pouvez-vous me dire quel est le montant du revenu mensuel de votre famille, en tenant compte de toutes les rentrées d'argent de votre foyer : salaires et revenus professionnels, allocations familiales, produits d'éventuels propriétés ou placements financiers, etc...

- | | |
|---------------------------|----|
| - moins de 3000 Francs | 01 |
| - de 3000 à 5000 Francs | 02 |
| - de 5000 à 7000 Francs | 03 |
| - de 7000 à 10000 Francs | 04 |
| - de 10000 à 15000 Francs | 05 |
| - de 15000 à 20000 Francs | 06 |
| - de 20000 à 25000 Francs | 07 |
| - de 25000 à 30000 Francs | 08 |
| - de 30000 à 40000 Francs | 09 |
| - de 40000 à 50000 Francs | 10 |
| - plus de 50000 Francs | 11 |

42. Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, vous compris? []

[inscrivez 9 pour plus de neuf personnes]

43. Indépendamment de vous, pour chaque personne de votre foyer, pouvez-vous me dire quel est leur âge et leur sexe, en commençant par les plus jeunes.

| | Age | Sexe | (inscrivez un 1 pour un homme ou un 2 pour une femme) |
|---------------|---------|------|--|
| 2ème personne | [] [] | [] | |
| 3ème personne | [] [] | [] | |
| 4ème personne | [] [] | [] | |
| 5ème personne | [] [] | [] | |
| 6ème personne | [] [] | [] | |
| 7ème personne | [] [] | [] | |
| 8ème personne | [] [] | [] | |
| 9ème personne | [] [] | [] | |

44. Pouvez-vous me dire de quel parti ou mouvement politique vous vous sentez le plus proche ou en tout cas le moins éloigné? *(cercler seulement un chiffre)*

- | | |
|-------------------------------|---|
| - le Parti communiste | 1 |
| - l'Extrême-gauche | 2 |
| - le Parti socialiste | 3 |
| - les écologistes | 4 |
| - l'UDF | 5 |
| - le RPR | 6 |
| - le Front national | 7 |
| - Autre parti, lequel : _____ | 8 |
| - aucun | 9 |
| - non réponse | 0 |

45. Beaucoup d'électeurs n'ont pas voté au premier tour des élections présidentielles de 1995. Vous même, avez-vous voté au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril 1995?

- | | |
|-------|--|
| - oui | 1 |
| - non | 2 <i>(si non, passer à la question 47)</i> |

46. Comment avez-vous voté au premier tour de l'élection présidentielle?

- | | |
|------------------------|---|
| - Arlette Laguiller | 1 |
| - Robert Hue | 2 <i>(cercler seulement un chiffre)</i> |
| - Lionel Jospin | 3 |
| - Dominique Voynet | 4 |
| - Jacques Chirac | 5 |
| - Edouard Balladur | 6 |
| - Philippe de Villiers | 7 |
| - Jean-Marie Le Pen | 8 |
| - Jacques Cheminade | 9 |
| - A voté blanc ou nul | 10 |

47. Beaucoup d'électeurs n'ont pas voté au second tour des élections présidentielles. Vous-même, avez-vous voté au second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai 1995? *(cercler seulement un chiffre)*

- | | |
|-------|--|
| - oui | 1 |
| - non | 2 <i>(si non, passer à la question 49)</i> |

48. Pour qui avez-vous voté au second tour de l'élection présidentielle?

- Lionel Jospin 1 *(cercler seulement un chiffre)*
- Jacques Chirac 2
- Blanc ou nul 3

49. Si vous vous êtes abstenu à l'un des deux tours, veuillez indiquer laquelle des raisons suivantes explique le mieux le fait que vous n'avez pas voté lors de cette élection?

(cercler seulement un chiffre)

- Je n'étais pas inscrit sur une liste électorale 01
- Je voulais voter mais je n'ai pas pu me rendre au bureau de vote 02
- Je ne comprenais pas assez la politique 03
- Je n'étais pas assez intéressé par cette élection 04
- Je voulais voter mais j'ai oublié 05
- Je ne vote jamais pour des raisons de principes 06
- Je n'arrivais pas à décider pour qui voter 07
- Aucun des candidats ne me convenait 08
- Autre raison, préciser _____ 97
- ne peut choisir 98

50. A propos de politique, les gens parlent de gauche et de droite. Vous-même, où vous situez-vous sur une échelle qui va de 1 à 10, dans laquelle 1 représente la position la plus à gauche et 10 la plus à droite?

(cercler seulement un chiffre)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|
| Gauche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Droite |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|

Ne sait pas, ne veut pas répondre 99

51. Considérez-vous que vous appartenez à une religion?

- oui 1 *(cercler seulement un chiffre)*
- non 2 *(si non, passez à la question 53)*

52. (si oui), laquelle?

- catholique 1 *(cercler seulement un chiffre)*
- juive 2
- musulmane 3
- protestante 4
- autre, laquelle _____ 5

53. En dehors des mariages, des enterrements et des baptêmes, tous les combien assistez-vous à un service religieux? (cercler seulement un chiffre)

- une fois par semaine 1
- deux ou trois fois par mois 2
- une fois par mois 3
- plusieurs fois par an 4
- moins fréquemment 5
- jamais 6

54. Certaines personnes se considèrent membres d'une classe sociale. Dans quelle classe vous placez-vous?

- la classe inférieure, les exclus 1 (cercler seulement un chiffre)
- la classe ouvrière 2
- le haut de la classe ouvrière 3
- la classe moyenne 4
- le haut de la classe moyenne 5
- la classe supérieure 6
- aucune appartenance de classe 7

55. Dans quel département se situe votre résidence principale? [][]

(inscrivez ci-dessus son numéro)

56. Combien y-a-t-il d'habitants dans votre commune ou agglomération de résidence?

- agglomération parisienne 1 (cercler seulement un chiffre)
- plus de 500 000 habitants 2
- entre 100 000 et 500 000 habitants 3
- de 50 000 à 100 000 habitants 4
- de 20 000 à 50 000 habitants 5
- de 10 000 à 20 000 habitants 6
- de 2000 à 10 000 habitants 7
- moins de 2000 habitants 8

57. Vous diriez que vous vivez dans une zone :

- rurale 1 (cercler seulement un chiffre)
- semi-rurale, semi urbaine 2
- urbaine 3

Merci de votre collaboration

BIBLIOGRAFÍA

- AASSVE, ARNSTEIN; MAZZUCO, STEFANO & MENCARINI, LETIZIA (2005): «Childbearing and well-being: a comparative analysis of European welfare regimes», *Journal of European Social Policy*, vol. 15(4), pp. 283-299.
- ABRAHAMSON, PETER (1991): «Welfare and Poverty in the Europe of the 1990s: Social Progress or Social Dumping?», en *International Journal of Health Services*, Volume 21, Number 2, pp. 237-264.
- (1999): «The Welfare Modelling Business», *Social Policy and Administration*, vol. 33, n.º 4, pp. 394-415.
- (2000): «Futures of the European Social Model», paper presented at the Danish Sociological Congress, University of Copenhagen, August 24-26, 2000.
- AGRESTI, ALAN & FINLAY, BARBARA (1997): *Statistical Methods for the Social Sciences*, Pearson Education, New Jersey.
- ANDERSEN, JORGEN GOUL; PETERSEN, PER ARNT; SVALLFORS, STEFAN & UUSITALO, HANNU (1999): «The Legitimacy of the Nordic welfare states: Trends, Variations and Cleavages». En Kautto, M, Heikkilä, M, Hvinden, B, Marklund, S and Plough, N (eds.): *Nordic Social Policy. Changing Welfare States*. London. Routledge
- ANDREAS, H. J. & HEIEN, T. (2001): «Four World of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway and the United States», *European Sociological Review*, vol. 17, n.º 4, pp. 337-356.
- ANISI, DAVID (1995): *Creadores de escasez. Del bienestar al miedo*. Alianza, Madrid.
- ARJAS, ELJA (2001): «Causal Análisis and Statistics: A Social Sciences Perspective», *European Sociological Review*, vol. 17, pp. 59-64.
- ARRIBA, ANA; CALZADA, INÉS & DEL PINO, ELOÍSA (2006): *Las actitudes de los españoles hacia el Estado del Bienestar. 1985-2005*. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.
- ARTS, W. & GELISSEN, J. (2002): «Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report», *Journal of European Social Policy*, vol. 12(2), pp. 137-158.
- ASPALTER, CHRISTIAN (2006): «New Developments in the Theory of Comparative Social Policy», *Journal of Comparative Social Welfare*, vol. 22, n.º 1, pp. 3-22.
- BALDWIN, PETER (1992): *La política de solidaridad social, bases sociales del Estado de Bienestar europeo 1875-1975*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
- (1998): «The Scandinavian Origins of the Social Interpretation of the Welfare State», en O'Connor, Julia & Olsen, Gregg M. (eds): (1998): *Power Resources Theory and the Welfare State*, University of Toronto Press, Toronto.
- BAMBRA, CLARE (2006): «Decommodification and the worlds of welfare revisited», *Journal of European Social Policy*, vol. 16 (1), pp. 73-80.
- (2007): «Sifting the Wheat from the Chaff: A Two-dimensional Discriminant Analysis of Welfare State Regime Theory», *Social Policy & Administration*, vol. 41, n.º 1, pp. 1-28.
- BANNINK, DUCO & HOOGENBOOM, MARCEL (2007): «Hidden change: disaggregation of welfare state regimes for greater insight into welfare state change», *Journal of European Social Policy*, vol. 17(1), pp. 19-32.
- BARRY, NORMAN (1997): «Conservative Thought and the Welfare State», *Political Studies*, XLV, pp. 331-345.

BIBLIOGRAFÍA

- BAY, ANN-HELEN (2000): «Political Persuasibility: Dynamics of Attitudes towards Taxation of Old Age Pensioners», *Scandinavian Political Studies*, vol. 23, n.º 2, pp. 139-155.
- BEAN, CLIVE & PAPADAKIS, ELIM (1998): «A Comparison of Mass Attitudes towards the Welfare State in Different Institutional Regimes, 1985-1990», *International Journal of Public Opinion*, vol. 10, n.º 3, pp. 211-236
- BENEDETTI, MARIO (1993): *Inventario*, Visor, Madrid.
- BHROLCHÁIN, MÁIRE NÍ (2001): «'Divorce Effects' and Causality in the Social Sciences», *European Sociological Review*, vol. 17, n.º 1, pp. 33-57.
- BLEKESAUNE, MORTEN & QUADAGNO, JILL (2003): «Public Attitudes toward Welfare State Policies: A comparative Analysis of 24 Nations», *European Sociological Review*, 19/5.
- BOERI, TITO (2002): «Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win», Conference at the John F Kennedy School of Government, Harvard University, April 11-12, 2002.
- BONOLI, GIULIANO (1997): «Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach», *Journal of Social Policy*, vol. 26 (3), pp. 351-371.
- (2000): «Public attitudes to social protection and political economy traditions in Western Europe», en *European Societies*, vol. 2, n.º 4, pp. 431-452.
- BOYER, ROBERT (1996): «State and Market. A new engagement for the twenty-first century?», en Boyer & Drache (eds.): *States against Markets, the limits of Globalization*, Routledge, London.
- BROOK, LINDSAY; PRESTON, IAN & HALL, JOHN (1998): «What Drives Support for Higher Public Spending?», en *Choice and Public Policy. The limits to Welfare Markets*, London, MacMillan Press, pp. 79-101.
- BRÜDERL, JOSEF (2003): «Basic and Advanced Topics in Modelling», Universität zu Köln, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Köln.
- BUCHMUELLER, THOMAS C. & COUFFINHAL, AGNES (2004): «Private health insurance in France», *OECD Health Working Papers* n.º 12.
- BURCHARDT, TANIA & PROPPER, CAROL (1999): «Does the UK Have a Private Welfare Class?», *Journal of Social Policy*, 28(4), pp. 643-665.
- BURGESS, SIMON; PROPPER, CAROL & RIGG, JOHN (May 2004): «The Impact of Low Income on Child Health: Evidence from a Birth Cohort Study», Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE), paper 85, London School of Economics.
- BURKE, HELEN (1999): «Foundation Stones of Irish Social Policy, 1831-1951» in Kiely et al (eds): *Irish Social Policy in Context*, University College Dublin Press, Dublin.
- RODRÍGUEZ CABRERO, GREGORIO (2002): «Economía política de la sociedad de consumo y el Estado de Bienestar», *Política y Sociedad*, vol. 39, Núm 1, pp. 7-25.
- CALZADA, INÉS (2001): «Tan lejos, tan cerca... Actitudes hacia el Estado del Bienestar en Suecia y España», en *Política y Sociedad*, vol. 38.
- (2002): «Universalism and legitimacy. Attitudes towards the Welfare State in Ireland and Spain», ponencia presentada en la Irish Social Policy Conference (Dublín, 12-13 de septiembre, 2002).
- (2003): «Counting women: Gender, Welfare regime and attitudes towards the Welfare State», paper presentado en la Sexta Conferencia de la Asociación Europea de Sociología (ESA), Murcia, 23-26 de septiembre de 2003.
- (2007): «Qué Estado del Bienestar queremos? Las opiniones de los ciudadanos sobre cómo son y cómo deberían ser nuestras políticas sociales», *Zerbitzuan: Revista de Servicios Sociales del Gobierno Vasco*, n.º 42.
- CALZADA, INÉS & DEL PINO, ELOÍSA (2007): «Public or private? The effect of Citizens' Dissatisfaction with Public Services on Citizens Preferences about Welfare State Reform». Paper presentado en el Congreso del European Group of Public Administration (EGPA). Madrid, 18-20 de septiembre, 2007.
- CARROLL, LEWIS (2001-[1865]): *Alicia en el país de las Maravillas*, Alianza Editorial, Madrid.

- CASTLES, F. & MITCHELL, D. (1993): «Worlds of Welfare and Families of Nations», in Castles, F. (ed.): *Families of Nations. Patterns of Public Policy in Western Democracies*, Aldershot, Dartmouth.
- CIS (1996): Estudio 2206 «Los ciudadanos y el Estado», ficha técnica y base de datos.
- (1999): Estudio 2366 «Opinión Pública y Política Fiscal», ficha técnica y base de datos.
- CNAAN, RAM A. (1989): «Public Opinion and the Dimensions of the Welfare State», *Social Indicators Research*, vol. 21, pp. 297-314.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001): «El futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores: Garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera», Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Bruselas.
- CONLEY, D. & SPRINGER, W. (2001): «Welfare State and Infant mortality», *American Journal of Sociology*, vol. 107, n.º 3 (November 2001), pp. 768-807.
- COUSINS, MEL (1997): «Ireland's place in the Worlds of Welfare Capitalism», en *Journal of European Social Policy*, vol. 7 (3), pp. 223-235.
- COX, D. R. & WERMUTH, NANNY (2001): «Some Statistical Aspects of Causality», *European Sociological Review*, vol. 17, n.º 1, pp. 65-74.
- DAVIES, STEPHEN (1987): «The remoralization of society», en Loney et al. (eds): *The State or the Market. Politics and welfare in contemporary Britain*. Sage, London.
- DEAN, H. (2000): «Social rights and social resistance: opportunism, anarchism and the Welfare State», *International Journal of Social Welfare*, 9, pp. 151-157.
- DEDING, METTE C. & SCHMIDT, TORBEN (2002): «Differences in Income Inequality across Europe – Market Driven or...?», European Panel Analysis Group. Working Papers, n. 37. 2002.
- DEL PINO, ELOÍSA (2001): «Opinión pública y acción pública: las expectativas sobre las políticas del bienestar en España», paper presentado en el Quinto Foro de Tendencias Sociales, UNED, Madrid.
- DESROSIÈRES, ALAIN (1996): «Statistical Traditions: an Obstacle to International Comparisons?», en Hantrais, Linda & Mangen, Steen (eds.): *Cross-national Research Methods in the Social Sciences*. Pinter, London.
- DÍEZ, MIGUEL (1998): «La relación con el Estado: la cultura fiscal y las actitudes hacia lo público», *Sistema*, n.º 144, pp. 5-40.
- DOGAN, MATTEI (1994): «Use and misuse of statistics in comparative research. Limits to quantification in comparative politics: the gap between substance and method», en Dogan & Kazancigil (eds.): *Comparing Nations*, Blackwell, Oxford.
- DUKELOW, FIONA (1996): «The creation of the Irish Welfare State», en *Social Policy Course Reader*, Cork, Centre for Adult and Continuing Education, UCC.
- EDLUND, JONAS (1999): «Trust in Government and Welfare Regimes: Attitudes to Redistribution and Financial Cheating in the USA and Norway», *European Journal of Political Research*, vol. 35 (3), pp. 341-370.
- ERIKSON, ROBERT & GOLDTHORPE, JOHN H. (1992): *The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Clarendon Press, Oxford.
- ERVASTI, HEIKKI & KANGAS, OLLI (1995): «Class bases of universal social policy», *European Journal of Political Research*, 27, pp. 347-367.
- ESPING-ANDERSEN, GØSTA (1990): *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, London.
- (1994): «Welfare States and the Economy», en Smelser & Swedberg (eds): *Handbook of Economic Sociology*, Princeton University Press, Princeton.
- (1997): «After the Golder Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy», en Esping-Andersen (ed.): *Welfare States in Transition*, SAGE, London.
- (2000): *Fundamentos Sociales de las Economías Postindustriales*, Ariel, Barcelona.
- ESSER, INGRID (2005): *Why Work? Comparative Studies on Welfare Regimes and Individuals' Work Orientations*. Swedish Institute for Social Research, n.º 64. Stockholm.

- EVANS, GEOFFREY (1995): «Why is America Different? Explaining Cross-National Variation in Support for Welfare Redistribution», Working paper n.º 36 of the Social & Community Planning Research (SCPR), Nuffield College, Oxford.
- FERRARINI, T. & NELSON, K. (2003): «Taxation of social insurance benefits and redistribution: a comparative analysis of ten welfare states», *Journal of European Social Policy*, vol. 13(1), pp. 21-33.
- FERRERA, MAURIZIO (1993): *Citizens and Social Protection. Main results from a Eurobarometer survey*, Commission of the European Communities, Brussels, Belgium.
- (1996): «The 'southern model' of welfare in social Europe», en *Journal of European Social Policy* 6(1): pp. 17-37
- FORMA, PAULI (1996a): «The Rational Legitimacy of the Welfare State. Popular support for ten Income Transfer Schemes in Finland», Working paper of the Department of Sociology, University of Turku, Series B: 8/1996.
- (1996b): «The Politics of interest mediation. The case of Universalistic Social Policy in Finland», Working paper of the Department of Social Policy, University of Turku, Series B:7/1996.
- FORMA, PAULI (1999): *Interests, Institutions and the Welfare State: Studies on Public Opinion Towards the Welfare State*, STAKES (National Research and Development Centre for Welfare and Health): Research Report 102, University of Turku, Turku.
- FRAILE, MARTA & FERRER, MARIONA (2004): «Explaining variation in public support for cuts in level of unemployment benefits spending across OECD countries». Working paper 2004/208. Fundación Juan March.
- FRIEDMAN, MILTON (1980): *Free to choose*, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- GELISSEN, J. (2000): «Popular support for institutionalised solidarity: a comparison between European welfare states», *International Journal of Social Welfare*, 9, pp. 285-300.
- GEVERS, J., GELISSEN, J., ARTS, W. & MUFFELS, R. (2000): «Public health care in the balance: exploring popular support for health care systems in the European Union», *International Journal of Social Welfare*, n.º 9, pp. 301-321.
- GIDDENS, ANTHONY (2000): «Positive Welfare», en Pierson, C. & Castles, F.G. (eds): *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge, 2000.
- (2001): *La Tercera vía y sus críticos*, Taurus, Madrid.
- GIJSBERT, M. & GANZEBOOM, H. (2001): «El apoyo a los principios de distribución. Una comparación entre sociedades socialistas y de mercado, 1987-1996», *Política y Sociedad*, sept-dic 2001.
- GIMENO ULLASTRES, J. A. (2000): «La incidencia redistributiva del Gasto público en España» en Muñoz de Bustillo, R. (ed): *El Estado de Bienestar en el cambio de siglo*, Madrid, Alianza Ensayo.
- GLENNERSTER, H. (1998): «Which welfare states are most likely to survive?», en *International Journal of Social Welfare*, 8, pp. 2-13.
- GUILLÉN, ANA M. y CABIEDES, LAURA (1997): «Towards a National Health Service in Spain: The search for equity and efficiency», *Journal of European Social Policy*, 7(4), pp. 319-336.
- GOLDTHORPE, J.H. (2001): «Causation, Statistics, and Sociology», *European Sociological Review*, vol. 17, n.º 1, 1-20.
- GOODIN, R.E., HEADEY, B., MUFFELS, R. & DIRVEN, H.J. (1999): *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge University Press, New York.
- GOUGH, IAN (1982): *Economía Política del Estado de Bienestar*. Ed. Blume, Madrid.
- GUNDELACH, PETER (1994): «National Value Differences. Modernization or Institucionalization?», *International Journal of Comparative Sociology*, 35 (1-2), pp. 37-57.
- HADENIUS, AXEL (1985): «Citizens Strike a Balance: Discontent With Taxes, Content With Spending», *Journal of Public Policy*, Vol. 5, No. 3, pp. 349-363.
- HALLER, M., MOSHAMMER, G., & RAUBAL, O. (1987): «Leviathan or Welfare State? Attitudes toward the Role of Government in five advanced Western Nations», Working Paper Nr. 3, Studiengruppe 'International Vergleichende Sozialforschung' (IVS), Institut für Soziologie der Karl-Franzens-Universität Graz.

- HARKNESS, JANET; LANGFELDT, BETTINA & SCHOLZ, EVI (2000): *ISSP Study Monitoring 1996-1998. Reports to the ISSP General Assembly on monitoring work undertaken for the ISSP by ZUMA, Germany, ZUMA, Germany*.
- HARRIS, R. & SELDON, A. (1987): *Welfare without the State. A quarter century of suppressed public choice*, Institute of Economic Affairs, London.
- HASENFELD, Y. & RAFFERTY, J.A. (1989): «The Determinants of Public Attitudes Toward the Welfare State», *Social Forces*, 4, pp. 1027-1048.
- HAYEK, F. V. (2000 [1959]): «The meaning of the Welfare State», en Pierson, C. & Castles, F.G. (eds): *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge.
- HIRSCHMAN, ALBERT O. (1977): *Salida, voz y lealtad*, Fondo de Cultura Económica, México.
- (1991): *Retóricas de la Intransigencia*, Fondo de Cultura Económica, México.
- HOBSON, BARABARA (1990): «No Exit, No Voice: Women's Economic Dependency and the Welfare State», *Acta Sociologica*, vol. 33(3), pp. 235-250.
- HORT, SVEN E. O. (2007): «The Geography of Comparative Welfare State Research- A Comment», *Globalism and Social Policy Programme*, vol. 5, n.º 1.
- HOUTMAN (2000): «The working class and the welfare state. Support for economic redistribution, tolerance for nonconformity, and the conditionality of solidarity with the unemployed», *The Netherlands Journal of Social Sciences*, vol. 36, n.º 1.
- HULT, CARL & SVALLFORS, STEFAN (2002): «Production Regimes and Work orientations: A Comparison of Six Western Countries», *European Sociological Review*, vol. 18, n.º 3, pp. 315-331.
- IGNAZI, PIERO (1996): «The crisis of parties and the rise of new political parties», *Party Politics*, vol. 2, n.º 4, pp. 549-566.
- ILLICH, IVAN (1975): *Némesis Médica: La expropiación de la salud*, Barral editores, Barcelona.
- INGLEHART, RONALD (1991): *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*, CIS, Madrid.
- INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME –ISSP– (1996): *The Role of Government III: Codebook*, cuestionario y base de datos. ZA. Germany.
- (1999): *Social Inequality III: Codebook*, cuestionario y base de datos. ZA. Germany.
- JAIME CASTILLO, ANTONIO M. (2000): «Las actitudes de los españoles hacia las políticas sociales», *Revista Internacional de Sociología*, Tercera Época, n.º 26, pp. 125-157.
- JÓNSSON, BENGT & ECKERLUND, INGEMAR (2003): «Why do Different Countries Spend Different Amounts on Health Care?», en OECD *A Disease-based Comparison of Health Systems. What is Best and at What Cost?*, OECD Publications, Paris.
- JONES, KELVYN & DUNCAN, CRAIG (1998): «Modelling Context and Heterogeneity: Applying Multilevel Models», en Scarbrough & Tanenbaum (eds): *Research Strategies in the Social Sciences*, Oxford, London.
- JUDGE, KEN; SMITH, JILLIAN & TAYLOR-GOOPY, PETER (1983): «Public Opinion and the Privatization of Welfare: Some Theoretical Implications», *Journal of Social Policy*, vol. 12, n.º 4, pp. 469-490.
- KALISCH, DAVID W. & AMAN, TETSUYA (1998): «Retirement income systems: the reform process across OECD countries», *Ageing Working Papers*, working paper AWP 3.4, Social Policy Division, OECD.
- KANGAS, OLLI (1991): «The Bigger the Better? On the Dimensions of Welfare State Development: Social Expenditure versus Social Rights», *Acta Sociologica*, vol. 34, n.º 1, pp. 33-44.
- (1992): «The politics of universalism: The case of Finish Sickness Insurance», *Journal of Social Policy*, Vol. 21, Part 1, pp. 25-52.
- KANGAS, O. & FORMA, P. (1999): «Need, citizenship or merit. Public opinion on pension policy in Australia, Finland and Poland», in Svallfors & Taylor-Gooby (ed.): *The End of the Welfare State?* Routledge, London.
- KASZA, GREGORY J. (2002): «The Illusion of Welfare 'Regimes'», *Journal of Social Policy*, 31,2, pp. 271-287.

BIBLIOGRAFÍA

- KING, DESMOND S. (1987): «The state and the social structures of welfare in advanced industrial democracies», *Theory and Society*, vol. 16, pp. 841-868.
- KORPI, WALTER & PALME, JOAKIM (1998): «The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries» en *American Sociological Review*, vol. 63, pp. 661-687
- KORPI, WALTER (1985): «Power Resource approach vs. action and conflict: On causal explanation in the study of power» en *Sociological theory: A semi-annual journal of the American Sociological Association*, vol. 3, n.º 2.
- (1996): «Eurosclerosis and the Sclerosis of Objectivity: On the role of Values Among Economic Policy Experts» en *The Economic Journal*, vol. 106, pp. 1727-1746.
- (2000a): «The Welfare State at the Crossroads: A historical and social scientific research program on the transformation of the welfare state in Sweden and in the OCDE countries» en *Annual Report 99*, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, pp. 45-60.
- (2000b): «Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States», *Social Politics*, vol. 7, n.º 2, pp. 127-191.
- (2003): «Welfare State Regress in Western Europe: Politics, Institutions, Globalization and Europeanization», Working paper del Swedish Institute for Social Research (SOFI): 5/2003.
- (2006): «Power Resources and Employer-centered Approaches in Explanations of Welfare States and Varieties of Capitalism», *World Politics*, 58, pp. 167-206.
- KRISTENSEN, OLE P. (1986): «Tax Structure and Public Spending –Or How the Electorate is Deceived into Paying for Bigger Public Spending than It Really Wants», *Scandinavian Political Studies*, vol. 9, n.º 4, pp. 317-336.
- KÜCHLER, MANFRED (1990): «The Utility of Surveys for Cross-National Research», en Alwin et al. *Attitudes to Inequality and the Role of Government*, Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk.
- LAPINSKY, J., RIEMANN, C.R., SHAPIRO, R. Y., STEVENS, M. F & JACOBS, L. R. (1998): «Welfare state regimes and subjective well-being: A cross-national study», *International Journal of Public Opinion Research*, vol. 10, n.º 1.
- LE GRAND, JULIAN (1987): «The Middle Classes and the Welfare State», *Journal of Public Policy*, 6:4, pp. 399-430.
- LEIBFRIED, STEPHAN (1992): «Towards a European Welfare State?», en Ferge & Kolberg (eds.): *Social Policy in a Changing Europe*, Westview Press, Colorado.
- LEWIS, ALAN (1980): «Attitudes to public expenditure and their relationship to voting preferences», *Political Studies*, vol. XXVIII, n.º 2, pp. 284-292.
- LEYS, COLIN (2001): 'What works. Public services publicly provided', *Red Pepper*, Oct. 2001, London.
- LIN, KA (2005): «Cultural traditions and the Scandinavian Social Policy model», *Social Policy & Administration*, vol. 39, n.º 7, December 2005, pp. 723-739.
- LIPSET, SEYMOUR MARTIN & RAAB, EARL (1978): «The Message of Proposition 13», *Commentary*, n.º 3, pp. 42-46.
- LIPSET, SEYMOUR MARTIN (1994): «Binary Comparisons: American Exceptionalism- Japanese Uniqueness», en Dogan & Kazancigil (eds.): *Comparing Nations*, Blackwell, Oxford.
- LIPSMAYER, CHRISTINE S. & NORDSTROM, TIMOTHY (2003): «East versus West: comparing political attitudes and welfare preferences across European societies», *Journal of European Public Policy*, vol. 10(3), pp. 339-364.
- LUQUE, EMILIO (2003): «Welfare states, public capabilities and generalized trust», paper presentado en la VI conferencia de la Asociación Europea de Sociología (ESA), Murcia, 23-26 septiembre 2003.
- MCKERNAN, SIGNE-MARY & RATCLIFFE, CAROLINE (2005): «Events that Trigger Poverty entries and exits», *Social Science Quarterly*, supplement to volume 86.
- MEIR, PETER (1995): «Party Organizations: From Civil Society to the State», en Katz & Mair (eds.): *How Parties Organize. Change and Adaptation in Party organizations in Western Democracies*, SAGE, London.

- MILLER, DAVID (1995): «Popular Beliefs about Social Justice. A comparative approach», en Svallfors, S. (ed): *In the eye of the beholder: Opinions on Welfare and Justice in comparative perspective*. Umea: Impello Säljstopp, pp. 71-103.
- MINGIONE, ENZO (1985): «Social reproduction of the surplus labour force: the case of Southern Italy», en Redclift & Mingione (eds.): *Beyond Employment. Household, Gender and Subsistence*, Basil Blackwell, London.
- MISHRA, RAMESH (1996): «The Welfare of Nations», en Boyer & Drache (eds.): *States against Markets, the limits of Globalization*, Routledge, London.
- MISSOC-MUTUAL INFORMATION SYSTEM ON SOCIAL PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION (2003): *Comparative Tables in Social Protection*, European Commission.
- MORENO, LUIS (2001): «La «vía media» española del modelo de bienestar mediterráneo», *Papers* 63/64, pp. 67-82.
- (2002): «Mediterranean Welfare and ‘Superwomen’ ». Working paper 02-02 de la Unidad de Políticas Comparadas, CSIC, Madrid.
- MOURITZEN, POUL E. (1987): «The demanding citizen: driven by policy, self-interest or ideology?», *European Journal of Political Research*, vol. 15, pp. 417-435.
- MUÑOZ DEL BUSTILLO, R. (1998) «Reflexiones acerca de los efectos de la UME sobre el empleo», en Anchuelo (dir.) *Consecuencias económicas del Euro*, Madrid, Ed. Civitas colección Economía.
- NAVARRO, VICENÇ (2002): *Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país*, Anagrama, Barcelona.
- NOLAN, BRIAN & RUSSELL, HELEN (2001): *Non-cash benefits and poverty in Ireland*, Policy Research Series, 39. The Economic and Social Research Institute, Dublin.
- NORDLUND, A. (1997): «Attitudes towards the welfare state in the Scandinavian countries», *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 6, pp. 233-246.
- NORTH, DOUGLASS C. (1990): *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, New York.
- NOYA, JAVIER (2001): «La legitimación del Estado de Bienestar en perspectiva comparada: niveles y variables explicativas», *Revista de Estudios Políticos*, nº 111.
- (2004): *Ciudadanos ambivalentes. Actitudes hacia la igualdad y el Estado de Bienestar en España*. CIS, Madrid.
- O’CONNOR, JAMES (1981): *La crisis fiscal del Estado*, Península, Barcelona.
- O’CONNOR, JULIA S. (1996): «From Women in the Welfare State to Gendering Welfare State Regimes», *Current Sociology*, vol. 44(2).
- O’CONNOR, JULIA & OLSEN, GREGG M. (eds): (1998): *Power Resources Theory and the Welfare State*, University of Toronto Press, Toronto.
- O’DONNELL, ANNE (1999): «Comparing Welfare States: Considering the Case of Ireland», in Kiely et alia (eds.): *Irish Social Policy in context*, University College Dublin Press, Dublin.
- O’DONOVAN, ORLA (1996): «Equity, Quality and Accountability: Guiding Principles for Health Policy in Ireland?», *Social Policy Course Reader*, Centre for Adult and Continuing Education, Cork.
- OCDE (1998a) *La reforma de los sistemas de asistencia sanitaria. Estudio de diecisiete países de la OCDE*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
- (1998b): *Social Expenditure Database 1980-1996 (SOEX)*, OECD.
- (1999): *Employment Outlook 1999*. OECD Publications. Paris.
- (2000): *Taxing Wages 1998-1999*. Committee of Fiscal Affairs. OECD Publications. Paris.
- (2003a): *Disease-based comparison of Health Systems. What is best and at what cost?*, Age-related Diseases project, OECD Publications, Paris.
- (2003b): *Health at a Glance. OECD Indicators 2003*. OECD Publications, Paris.

BIBLIOGRAFÍA

- (2003c): *PISA 2003. Methodological Report*. Disponible on-line en www.pisa.oecd.org.
- (2004a): *Private Health Insurance in OECD countries*. The Health Project. OECD Publications. Paris.
- (2004b): «Proposal for a Taxonomy of Health Insurance», OECD Study on Private Health Insurance, OECD Health Project.
- (2005a): *Women and men in OECD countries*, Social Policy Division, OECD Publications, Paris.
- (2005b): *Pensions at a glance. Public policies across OECD countries*. Social Policy Division, OECD, Paris.
- (2005c): *Informe PISA 2003*. Santillana, Madrid.
- (2007): *Private Pension Project*. Online database: www.oecd.org.
- OFFE, CLAUS (1987): «Theorizing the Welfare State: Democracy against the Welfare State. Structural Foundations of Neoconservative Political Opportunities», *Political Theory*, vol. 15, n.º 4, November, pp. 501-537.
- (1990): *Contradicciones en el Estado del Bienestar*. Alianza Editorial, Madrid.
- ORLOFF, ANN (1996): «Gender in the Welfare State», *Annual Review of Sociology*, 22, pp. 51-78.
- PAHL, R. E. & WALLACE, CLAIRE (1985) «Household work strategies in economic recession», en Redcliff & Mingione (eds.) *Beyond Employment. Household, Gender and Subsistence*, Basil Blackwell, Oxford.
- PAPADAKIS, ELIM (1992): «Public Opinion, Public Policy and the Welfare State», *Political Studies*, XL, pp. 21-37.
- PALME, OLOF (1977): *La cuestión sueca*, Ed. Cambio 16, Madrid.
- PEILLON, MICHEL (1995): «Support for Welfare in Ireland: Legitimacy and Interest», *Administration*, vol. 43, n.º 3, pp. 3-21.
- (1996): «A Qualitative Comparative Analysis of Welfare Legitimacy», *Journal of European Social Policy*, 6 (3): 175-190.
- PÉREZ YRUELA, MANUEL (2002): «Cultura Política en Andalucía: Política, Estado de Bienestar y Políticas Públicas», en Pérez Yruela y Moyano (eds.): *La Sociedad Andaluza*, Córdoba.
- PIERSON, PAUL (1993): «When Effect becomes cause. Policy Feedback and Political Change», *World Politics*, V. 45, pp. 595-628.
- (2000a): «The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change», *Governance: An International Journal of Policy and Administration*, vol. 13, n.º 4, pp. 475-499.
- (2000b): «Three worlds of welfare state research», *Comparative Political Studies*, vol. 33 n.º 6/7, August/September 2000, pp. 791-821.
- PILLINGER, JANE (2001) *La calidad de los servicios sociales públicos, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo*. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- PIZZORNO, ALESSANDRO (1995): «Los intereses y los partidos en el pluralismo», en *Instituciones políticas y Sociedad: lecturas introductorias*. IEP, Lima.
- RAGIN, C. (1987): *The comparative method*, University of California Press, Berkeley.
- RASINSKI, KENNETH A. (1989): «The effect of question wording on public support for government spending», *Public Opinion Quarterly*, vol. 53, pp. 388-394.
- RIVIÈRE, JAIME (2001) «Cultura económica: actitudes ante el Estado y el mercado en España», Serie Opiniones y Actitudes n.º 41, CIS, Madrid.
- ROTHSTEIN, BO (1985): «Managing the Welfare State: Lessons from Gustav Möller», *Scandinavian Political Studies*, vol. 8, n.º 3, pp. 151-170.
- ROTHSTEIN, B & STOLLE, D. (2002): «How Political Institutions Create and Destroy Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust», paper prepared for the 98th Meeting of the American Political Science Association in Boston, MA, August 29-September 2, 2002.

- SARASA, SEBASTIÁN (2001): «Los hogares sin empleo, una perspectiva comparada», *Revista Internacional de Sociología*, n.º 29, pp. 67- 88.
- SARTORI, GIOVANNI (1994) «Compare Why and How», en Dogan, M. & Kazancigil, A. (eds.) *Comparing Nations. Concepts, Strategies, Substance*, Blackwell, Oxford. Editado en castellano como «Comparación y Método Comparativo», en Sartori & Morlino (coords.) *La Comparación en las Ciencias Sociales*, Alianza, Madrid, 1994.
- SAUNDERS, P. y HARRIS, C. (1987): «Biting the nipple? Consumer preferences and state welfare», paper presented at the VI Urban Change and Conflict Conference, University of Kent, September 20-23 1987.
- SKOCPOL, THEDA (1985): «Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research», en Evans, P Rueschemeyer, D. & Skocpol, T. (eds.): *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 3-43.
- SCOTT, JOHN T, MATLAND, RICHARD E, MICHELBAACH, PHILIP A & BORNSTEIN, BRIAN H. (2001): «Just Deserts: An Experimental Study of Distributive Justice Norms», *American Journal of Political Science*, vol. 45, Issue 4 (Oct.), pp. 749-767.
- SCOTT, RICHARD W. (1994): «Institutional Analysis. Variance and Process. Theory approaches», en Scott & Meyer (eds.): *Institutional Environments and Organizations: Structural Complexity and Individualism*, SAGE, London.
- SHADISH, COOK & CAMPBELL (2002): *Experiments and Quasi-Experimental Designs for generalizable causal inference*, Houghton Mifflin, New York.
- SCHUMAN, HOWARD & PRESSER, STANLEY (1979): «The Open and Closed Question», *American Sociological Review*, vol. 44, n.º 5, pp. 692-712.
- SIGMUND, KARL; FEHR, ERNST & NOWAK, MARTIN A. (2002) «La Economía del Juego Limpio», en *Investigación y Ciencia*, marzo 2002.
- SIHVO, T. & UUSITALO, H. (1995): «Attitudes towards the welfare state have several dimensions. Evidence from Finland», *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 4, pp. 215-223.
- SMITH, TOM W. (1987): «That which we call Welfare by any other name would smell sweeter. An analysis of the impact of question wording on response patterns» *Public Opinion Quarterly*, 51 (1), pp. 75-83.
- SNIJDERS, TOM A. B. & Bosker, Roel J. (1999): *Multilevel Analysis. An introduction to basic and advanced multilevel modelling*. SAGE, London.
- STARR, PAUL (1982): *The Social Transformation of American Medicine*, Basic Books, New York.
- SVALLFORS, STEFAN (1993): «Dimensions of Inequality: A Comparison of Attitudes in Sweden and Britain», *European Sociological Review*, vol. 9, n.º 3, pp. 267-287.
- (1995a): «The End of Class Politics? Structural Cleavages and Attitudes to Swedish Welfare Policies», *Acta Sociologica*, 38, pp. 53-74.
- (1995b) «Institutions and the Comparative Study of Beliefs about Justice. Comments on David Miller», en Svallfors, S. (ed): *In the Eye of the beholder: Opinions on Welfare and Justice in comparative perspective*. Umea, Impello Säljstøtt. pp. 116-126.
- (1996): «National differences in national identities? An introduction to the International Social Survey Programme», *New community*, 22 (1), pp. 127-134.
- (1997): «Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight Western Nations», *European Sociological Review*, vol. 13, n.º 3, pp. 283-304
- (1999): «Political trust and attitudes towards redistribution. A comparison of Sweden and Norway», *European Societies*, 1 (2), pp. 241-268
- (2000a): «Welfare Regimes and Welfare Opinions: a Comparison of Eight Western Countries», prepared for Vogel, J (ed.): *The European Welfare Mix: Institutional Configuration and Distributional Outcomes*.
- (2000b): «Political trust and support for the Welfare State: Unpacking a supposed relationship», prepared for Bo Rothstein & Sven Steinmo (eds.): *Institutional Analysis and Challenges of the Welfare State*, final draft version, October 2000.

- TANG, K. L. (1997): «The case for the privatization of social welfare: three decades of public opinion evidence from Great Britain and the United States», *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 6, pp. 34-43.
- TAYLOR-GOOPY, PETER (1983): «The Welfare State and Individual Freedom. Attitudes to Welfare Spending and to the Power of The State», *Political Studies*, XXXI, pp. 640-649.
- (1985a): *Public opinion, ideology and state welfare*, Routledge & Kegan Paul, London.
- (1985b): «Attitudes to Welfare», *Journal of Social Policy*, vol. 14, n.º 1, pp. 73-81.
- (1989): «Disquiet and state welfare: clinging to nanny», *International Journal of Urban & Regional Research*, vol. 13, pp. 201-216.
- (1991): «Welfare state regimes and welfare citizenship», *Journal of European Social Policy*, vol. 1, pp. 93-105.
- (1998): «Risk and Welfare», working paper of the Centre for Comparative Welfare States Studies, Aalborg University, Denmark.
- (1999): «Bipolar Bugbears. Comment on Colin Hay: ‘Globalisation, Welfare Retrenchment and ‘the Logic of No Alternative’: Why Second-best Won’t Do», *Journal of Social Policy*, 28 (2), pp. 299-303.
- TAYLOR-GOOPY, PETER & HASTIE, CHARLOTTE (2003a): «Paying for ‘World Class’ Services: a British Dilemma», *Journal of Social Policy*, vol. 32, n.º 2, pp. 271-288.
- TAYLOR-GOOPY, P., HASTIE, C. & BROMLEY, C. (2003b): «Querulous Citizens: Welfare Knowledge and the Limits to Welfare Reform», *Social Policy & Administration*, vol. 37, n.º 1, pp. 1-20.
- THANE, PAT (1982): *The Foundations of the Welfare State*, Longman, New York.
- THERBORN, GÖRAN (1991): «Swedish Social Democracy and the Transition from Industrial to Postindustrial Politics», en Frances Fox Piven (ed): *Labor Parties in Postindustrial Societies*, Polity Press, Cambridge.
- (1997): «The European Welfare State and Its Hostile World», Working Paper de la Fundación Juan March 1997/109.
- TITMUS (1955): «The Social Division of Welfare: Some Reflections on the Search for Equity», en Goodin & Mitchell (eds.): *The Foundations of the Welfare State*, Edward Elgar Publish., UK, 2000.
- (1974): *Social Policy*, George Allen & Unwin, London.
- TRIFILETTI, R. (1999): «Southern European welfare regimes and the worsening position of women», *Journal of European Social Policy*, vol. 9 (1), pp. 49-64.
- VOGEL, JOACHIM (1999): «The European ‘Welfare Mix’: Institutional configuration and distributive outcome in Sweden and the European Union. A longitudinal and comparative perspective», *Social Indicators Research*, 48, pp. 245-297.
- WENNEMO, IRENE (1994): *Sharing the Costs of Children. Studies on the Development of Family Support in the OECD countries*, Swedish Institute for Social Research, Stockholm, 1994.
- WHITEHOUSE, EDWARD (2007): *Pensions Panorama. Retirement systems in 53 countries*, The World Bank, Washington.
- WIBERG, MATTI (1986): «‘Wrong Persons Are Making Right Decisions without Hearing Us’: Political Trust, Responsiveness of Politicians and Satisfaction with Governmental Policies in Finland», *Scandinavian Political Studies*, vol. 9, n.º 2, pp. 141-156.
- WILENSKY, HAROLD L. (1975): *The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*, University of California Press, London.
- WRIGHT, ERIK OLIN (1997): *Class counts: Comparative Studies in Class Analysis*. Cambridge University Press, New York.